

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS
Departamento de Ciencia Política



TESIS DOCTORAL

Venezuela : cambio social y modernización política

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Gonzalo Barrios Ferrer

Madrid, 2015

Gonzalo Barrios Ferrer

TP
1984
044



* 5 3 0 9 8 6 5 7 3 0 *
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

X-53-386140-2

VENEZUELA: CAMBIO SOCIAL Y MODERNIZACION POLITICA

Departamento de Ciencia Política
Sección de Ciencias Políticas
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Universidad Complutense de Madrid
1984



BIBLIOTECA

Colección Tesis Doctorales. Nº 44/84

© Gonzalo Barrios Ferrer
Edita e imprime la Editorial de la Universidad
Complutense de Madrid. Servicio de Reprografía
Noviciado, 3 Madrid-8
Madrid, 1984
Xerox 9200 XB 480
Depósito Legal: M-4041-1984

TESIS DOCTORAL:

- VENEZUELA: CAMBIO SOCIAL Y MODERNIZACION POLITICA.
ESTUDIO HISTORICO Y COMPARATIVO -

GONZALO BARRIOS FERRER

Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología -
Universidad Complutense de Madrid -

- P R E S E N T A C I O N

Y A G R A D E C I M I E N T O -

La tesis doctoral que hoy presentamos, sobre cambio social y modernización política en Venezuela, es el resultado de una investigación que comenzó en realidad en el otoño-invierno de 1975-76 y que concluyó en la primavera de 1978. Iniciamos su redacción en abril de éste último año, para terminarla sustancialmente en enero de 1979. En un principio, aprovechamos nuestra estadía en el Centro de Estudios Latinoamericanos de St. Anthony's College (Oxford) para dar los primeros pasos en la consulta de los fondos bibliográficos existentes en dicha institución. Una vez en Madrid, proseguimos nuestro trabajo en la Biblioteca Hispánica del Centro Iberoamericano de Cooperación (antiguo Instituto de Cultura Hispánica), en la Biblioteca de la Embajada de Venezuela en la capital española y en la Sección de Hispanoamérica de la Biblioteca Nacional de Madrid. Asimismo, tuvimos la oportunidad, durante el verano de 1977, de estar cuatro ó cinco semanas en Caracas, Venezuela, donde pudimos obtener información, la más reciente por aquélla fecha. Al mismo tiempo, durante la redacción, procuramos, mediante la prensa periódica venezolana, estar al tanto en lo posible de los acontecimientos políticos más significativos, en especial para lo que concernía a la redacción del último capítulo sobre el sistema político actual.

En el aspecto puramente formal, hemos optado por la división del trabajo en cinco capítulos, un apéndice, una introducción y un apartado destinado a la información bibliográfica y documental. Al final de cada capítulo situamos las citas correspondientes, al igual que las notas que amplían o complementan de alguna manera el texto principal. Un índice general recoge el contenido esencial de la estructura de la tesis.

Queremos ante todo expresar nuestro agradecimiento al profesor Miguel Martínez Cuadrado, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (Departamento de Derecho Político) de la Universidad Complutense de Madrid, por sus orientaciones como director de esta tesis y de quien

hemos intentado recoger, a través de sus explicaciones de clase y publicaciones de las cuales es autor, diversas perspectivas metodológicas de utilidad para nuestro trabajo.

En el mismo sentido, tenemos especial deuda con el profesor doctor Domingo Miliani, del Centro de Estudios Latinoamericanos "Rómulo Gallegos" de Caracas, por su inestimable apoyo institucional en la realización del Doctorado. Tampoco podemos olvidar a la profesora Magaly Aranguibel Egui, de la Oficina de Estímulo al Trabajador Cultural del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) de Venezuela, quien prestó toda su colaboración en la concesión de una beca para hacer viable el presente trabajo. De igual manera, al Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, al cual solicitamos y nos fue concedida, previa selección de aspirantes, una ayuda a la investigación a fin de concluir la tesis que hoy sometemos a la consideración del distinguido Tribunal examinador.

Gonzalo Barrios Ferrer

Gonzalo Barrios Ferrer

- INDICE GENERAL -

INTRODUCCION, 1

Cambio social y modernización política en Venezuela, 2

CAPITULO PRIMERO:

Sociedad y Política en la Venezuela colonial, 7

- 1) Dinámica general del proceso colonial, 8
- 2) Organización económica y social de Venezuela colonial, 16
- 3) El nivel institucional, 29
- 4) Dialéctica de la sociedad colonial venezolana, 39
- Notas al capítulo primero, 49

CAPITULO SEGUNDO:

Ruptura política del nexo colonial y
formación del Estado republicano, 64

- 1) Disolución del pacto colonial, 65
- 2) Los grupos sociales y la guerra, 69
- 3) La política de Bolívar, 78
- 4) La organización del nuevo Estado, 87
- 5) Hacia una República oligárquica, 94
- Notas al capítulo segundo, 105

CAPITULO TERCERO:

El régimen político del Caudillo, 121

- 1) Caracterización del Caudillismo, 122
 - (I), 122
 - (II), 125
 - (III), 130

...

- 2) Las bases sociales de la dominación caudillista, 133
 - (I), 133
 - (II), 138
 - (III), 144
- 3) La política de los caudillos en Venezuela, 155
 - (I), 155
 - (II), 160
 - (III), 163
 - (IV), 168
 - (V), 174
- Notas al capítulo tercero, 183

CAPITULO CUARTO:

Petróleo, Sociedad y Cambio político, 202

- 1) Venezuela agraria y Venezuela petrolera, 203
 - (I), 203
 - (II), 206
 - (III), 210
 - (IV), 214
 - (V), 217
- 2) Petróleo y estructura social, 223
 - (I), 223
 - (II), 228
 - (III), 237
 - (IV), 244
- 3) La dinámica del proceso político: transición, ruptura e involución (1928-1958), 253
 - (I), 253
 - (II), 257
 - (III), 262
 - (IV), 268
 - (V), 274
 - (VI), 279
 - (VII), 292
- Notas al capítulo cuarto, 300

CAPITULO QUINTO:

Sobre el sistema político actual, 319

- 1) Estabilidad del sistema político venezolano, 320
 - (I), 320
 - (II), 321
 - (III), 323
- 2) Los partidos políticos, 330
 - (I), 330
 - (II), 332
- 3) Los grupos de presión, 345
 - (I), 345
 - (II), 348
 - (III), 351
 - (IV), 353
- 4) Autonomía relativa del sistema político, 357
 - (I), 357
 - (II), 359
- 5) Estructura político-constitucional del Estado, 361
 - (I), 361
 - (II), 363
 - (III), 364
- 6) El sistema electoral, 368
 - (I), 368
 - (II), 371
- 7) El sistema de política exterior, 374
 - (I), 374
 - (II), 376
- 8) Tensiones en el sistema político: desigualdad social y marginalidad. Tecnología y sistema político. Perspectivas futuras del sistema político venezolano, 390
 - (I), 390
 - (II), 394
 - (III), 397

- Notas al capítulo quinto, 400

...

APENDICE:

La tesis del "gendarme necesario", o la justificación
ideológica del régimen caudillista, 413

I.-, 414

II.-, 417

III.-, 422

- Notas, 429

BIBLIOGRAFIA, 433

1) Libros, 434

2) Artículos. Ensayos. Publicaciones periódicas. Documentos, 451

[1]

- INTRODUCCION -

- I N T R O D U C C I O N -

- Cambio social y modernización política en Venezuela -

Desde hace algún tiempo, Venezuela viene siendo objeto de una creciente atención por parte de los observadores y analistas del desarrollo político en América Latina. En una región caracterizada por la imposición autoritaria y las agudas luchas políticas, Venezuela ha mantenido desde 1958 hasta nuestros días -con el anterior, breve, pero importante interregno de 1945-1948- un tipo de desarrollo político vinculado con las formas conocidas de la democracia representativa y el pluralismo político, caracterizado por la existencia del libre juego de partidos u organizaciones políticas con representación a través del voto en sucesivos procesos electorales y la consiguiente exclusión de alternativas no democráticas (léase insurrección armada o golpe militar) como medios para llegar al poder, todo ello en el flexible marco establecido por la Constitución vigente de 1961.

Es bien sabido que en el curso de la historia política latinoamericana, la relación entre sistema político y cambio socioeconómico ha presentado una serie de tensiones, discontinuidades y desajustes, que podrían ser esquematizados como una convulsionada lucha por encontrar una salida hacia el desarrollo, dificultada y a menudo impedida por una amplia gama de obstáculos internos y externos del sistema en su conjunto. En realidad, han sido muy pocos los casos en que el sistema político ha mostrado, por periodos largos, una aptitud apropiada para canalizar o dar solución a las necesidades y tensiones surgidas de los fenómenos de cambio social, sin afectar al cabo de poco tiempo la propia estabilidad del sistema político (1).

Si la modernización política es la adquisición progresiva, "conscientemente perseguida y cualitativamente nueva y reforzada, de una capacidad política"; si "La modernización de un sistema político se mide por el

grado en que haya sido capaz de desarrollar las capacidades (simbólicas, reguladoras, de respuesta, productivas y distributivas) para enfrentarse a ... problemas genéricos de los sistemas de desarrollo" (2), el caso de Venezuela es lo suficientemente interesante como para justificar ampliamente el presente trabajo.

Intentamos, en efecto, una aproximación al desarrollo político de Venezuela, y lo hacemos bajo dos ópticas fundamentales. En primer lugar, pretendemos un estudio de tipo comparativo, en el sentido de caracterizar y contraponer el régimen político del caudillismo -típico del siglo XIX y principios del XX- al sistema político actual, en el marco y desde la perspectiva de una modernización histórico-política. Esto es, la superación de unas "viejas" estructuras políticas por otras de nuevo cuño, en un proceso creciente de racionalización de la política, que implicará un período de transición en el contexto de una evolución global no exenta de puntos de discontinuidad y relaciones de conflicto, pero que terminará en la consolidación mediante el consenso y el compromiso. En segundo término, tratamos de poner en relación los cambios sociales derivados de la explotación del petróleo y la subsiguiente disolución de la tradicional sociedad agraria, con el impacto que ello produce en el seno de las instituciones políticas y que plantea la necesidad de una transformación de éstas como algo inevitable si se quiere hacer frente a las nuevas realidades. Y lo que es más característico, el nuevo liderazgo político cristaliza en los lineamientos de un reformismo nacionalista. Reformismo, en tanto en cuanto se pretende corregir o modificar parcialmente el sistema económico y social, sin transformar sus estructuras de base en sentido radical o cualitativo. Y nacionalista, en la medida en que ocurre un distanciamiento del tradicional patrioterismo, para ir hacia un enfoque identificado con el antiimperialismo y la concepción de la Nación como un proyecto a realizar y no como un simple objeto de adoración: la Nación, la patria, consideradas como nociones con contenido desarrollista y reformista (3).

Ahora bien, los cambios sociales ocurridos en los últimos cincuenta años no deben hacernos creer que estamos en presencia de una sociedad moderna en lo económico y social, si por sociedad moderna se entiende el modelo de las estructuras sociales desarrolladas de occidente. Como bien ha dicho F. Rubio Llorente, refiriéndose a la relación entre indicadores económicos y modernización social, "Habitualmente, como expresión simple y gráfica del grado de desarrollo de un pueblo se utiliza la cifra de

su ingreso per capita. Bien sabido es, no obstante (y en Venezuela estamos excepcionalmente situados para apreciarlo), que este índice sólo es válido grosso modo y que existen muy numerosos casos en los cuales las elevadas cifras no se corresponden en modo alguno con situaciones realmente avanzadas de estructuración social" (4). O como afirma el profesor Orlando Albornoz, al aludir a los cambios operados en la sociedad venezolana durante el período 1920-1970: "Entre una y otra época la polarización de los hábitos y costumbres de los venezolanos marca la existencia de dos sociedades abiertamente diferentes: la una, la sociedad tradicional, que aún pervive y muestra su existencia en numerosos aspectos de la vida diaria de los venezolanos; la otra, una suerte de sociedad modernizada, presente en aquellas instituciones correspondientes a una sociedad de este género. La una, la segunda, vacila en imponerse a la primera, y del conflicto entre una y otra surge el tipo de sociedad que más bien caracteriza a la venezolana, una sociedad en transición" (5). En otras palabras, un conjunto o complejo de problemas en el cual se advierte la persistencia de parte de la problemática tradicional, es decir, esa especie de saldo de cuestiones no resueltas que cada época lega a la siguiente, y que si bien queda fundamentalmente insumida en la problemática de la nueva época, no por ello deja de conservar cierta propia identidad, que permite a su vez diferenciar los "nuevos problemas" de los "viejos problemas", situados como están, y ello es muy importante, en un cuadro de interrelaciones, del todo del que forman parte (6).

Y es que no podemos olvidar la peculiaridad del cambio social en Venezuela: la carencia de unidad en el proceso de cambio ha sido debida fundamentalmente al origen exógeno del mismo, origen que ha condicionado decisivamente las características de heterogeneidad y disociación en el proceso. El hecho de que haya sido iniciado por técnica, capital y organización extranjeras, no hizo necesaria la creación de prerrequisitos de tipo social, político o cultural. Es claro que no fue estrictamente necesario romper las estructuras de poder económico y social, ni crear tampoco instituciones formales nuevas; éstas, al contrario, pervivieron hasta que, una vez generalizada la intensidad del proceso de cambio, entraron en contradicción con él y hubo el imperativo de sustituirlas por otras más abiertas. Más bien, en un comienzo y por largo tiempo como es notorio, la explotación y consolidación de la industria del petróleo venezolano se apoyó básicamente en el viejo modelo autoritario y en connivencia con él aprovechó sustanciales prebendas. Así, los efectos deformantes

derivados del desarrollo de una industria exógena como era la petrolera, se iban a manifestar notablemente en una serie de distorsiones y desajustes en la estructura de la producción y del empleo, en la balanza de pagos, en el proceso de industrialización, en las relaciones campo-ciudad, en la evolución cultural y en las mas disímiles actividades del país (7).

El impacto del cambio sobre la estructura del sistema político comenzó a ser efectivo a partir de 1936, aunque ya el movimiento estudiantil de 1928 constituyó el primer aviso de alarma para el secular régimen autoritario. Entre 1936 y 1945 contemplamos un período de transición hacia las nuevas formas políticas, que cristalizará en el llamado "Trienio adeco" (1945-1948), momento notable de auténtica ruptura con la vieja política. No obstante, las fuerzas políticas de la tradición intentaron bloquear con éxito el proceso de ruptura y, finalmente, lo derribaron mediante el golpe militar que dió origen a un claro lapso de involución política: nos referimos a la década dictatorial de 1948-1958. En dicha década, sin lugar a dudas el proceso de modernización de las estructuras políticas quedó virtualmente paralizado e, incluso, registró tentativas de regreso a aspectos que parecían ya enterrados en el pasado. Sólo a partir de 1958, una vez derrocada la dictadura perezjimenista, pudo continuar lo ya avizorado en el Trienio, aunque ahora en un contexto y en unas circunstancias radicalmente distintas. Se planteó entonces la necesidad de un consenso sobre el nuevo sistema político a edificar, y va a ser precisamente el Pacto de Punto Fijo (1959) el punto de partida del Estado democrático de nuestros días. Una vez superado el momento más crítico -los primeros años de la década de los 60-, cuando el sistema político experimentó la presión, por un lado, de la insurrección armada de la extrema izquierda, y por otro, los renovados intentos de involución de los sectores militares golpistas, quedó claro que el sistema podía tener una larga vida. A partir de entonces veremos cómo el reformismo, en sus diversas oscilaciones, logra consolidar una estructura política democrática, equidistante tanto de la tentación autoritaria como de la vía revolucionaria.

- (1) Vid., Jorge Graciarena, Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina (Buenos Aires: Editorial Paidós, 1972), pp. 74-75. También, Fernando Henrique Cardoso, Estado y Sociedad en América Latina (Buenos Aires: Ed. Nueva Visión, 1972), sobre las relaciones entre proceso político y condicionamiento estructural. Del mismo autor: Politique et developpement dans les sociétés dépendantes (Paris: Ed. Anthropos, 1971. Trad. del portugués de M. Berdoyes). Sin pretender ser exhaustivos, podemos citar, en torno a esta temática: Oswaldo Sunkel, "El trasfondo estructural de los problemas del desarrollo latinoamericano", en Trimestre Económico, México, No.3, enero-marzo de 1967, pp. 11-58; el volumen clásico de Claudio Véliz (compilación e introducción) Obstáculos para la transformación de América Latina (México: Fondo de Cultura Económica, 1969); y, finalmente, Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina (México: Editorial Siglo XXI, 1969).
- (2) Citamos a James S. Coleman, "Modernización, aspectos políticos", en Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, David. L. Sills (Ed.), (ed. española de Ed. Aguilar, Madrid, 1975. Volumen 7, pp. 176-182), p. 181. También, en el mismo volumen 7, Daniel Lerner: "Modernización, aspectos sociales", pp. 169-176; y Ronald P. Dore: "Modernización: la burguesía en las sociedades en proceso de modernización", pp. 182-188. De gran utilidad para el caso de España: Cambio social y modernización política. Anuario Político Español 1969, Miguel Martínez Cuadrado (Editor) (Madrid: Editorial Cuadernos Para el Diálogo, 1970), en especial, Alfonso Ortí Benlloch, "Política y Sociedad en los años setenta: Las bases sociales de la modernización política", pp. 3-90.
- (3) Vid., José A. Silva Michelena, "Nacionalismo en Venezuela", en F. Bonilla y J.A. Silva Michelena (Eds.), Cambio político en Venezuela: Exploraciones en análisis y en síntesis (Caracas: Centro de Estudios del Desarrollo-Universidad Central de Venezuela, 1967, pp. 95-137), p. 111.
- (4) Francisco Rubio Llorente, en la introducción al libro de María de Lourdes Acedo de Sucre y Carmen Margarita Nones M., La generación venezolana de 1928 (Estudio de una Elite Política) (Caracas-Barcelona: Editorial Ariel, 1967), p. XVII.
- (5) Orlando Albornoz, La Sociología en Venezuela (Caracas: Monte Avila Editores, 1970. 2a.ed. corr. y aum.), p. 11.
- (6) Vid., Germán Carrera Damas, Historia Contemporánea de Venezuela. Bases Metodológicas (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela, 1977), pp. 204-205 del capítulo V: "Nueva perspectiva para el estudio de la historia contemporánea de Venezuela", pp. 199-250.
- (7) Vid., Jorge Ahumada, "Hipótesis para el diagnóstico de una situación de cambio social. El caso de Venezuela", en F. Bonilla y J.A. Silva Michelena, Cambio político en Venezuela: Exploraciones en análisis y en síntesis, edición citada, pp. 33-58, en especial p. 43.

[+]

- C A P I T U L O P R I M E R O -

" S O C I E D A D Y P O L I T I C A E N L A V E N E Z U E L A C O L O N I A L "

1) Dinámica general del proceso colonial.-

Ya es un lugar común, que ha ido penetrando a la ciencia social latinoamericana, la consideración de que el estudio del proceso colonial es de una importancia decisiva en el análisis del siglo XIX del continente americano, y en el tratamiento de la sociedad tradicional y su correspondiente orden político. Para el caso de Venezuela, ha señalado R. Escovar Salom cómo "El fondo subyacente del período colonial tiene una fuerza plasmática fundamental en nuestra historia. Como la tuvieron también los antecedentes hispanos y árabigos y todo lo que puede llamarse el trasfondo occidental de nuestra cultura y de nuestra civilización. Por eso es artificial y caprichoso, además de ser antihistórico, todo intento por cortar brutalmente el proceso político de Venezuela en el momento en que iniciamos nuestra vida de país independiente"(1). Y es que, en realidad, en un estudio concreto sobre cambio social y modernización política que pretenda dar idea sobre el orden político tradicional, resulta poco menos que imposible ~~en~~ no hablar precisamente del origen de ese mismo orden, es decir, de la conformación primaria sobre la cual se desarrolló casi todo el sistema socio-político de Latinoamérica y de Venezuela durante el siglo pasado.

Habría que recordar -como hace M. Kaplan (2)- que en el momento de la conquista y colonización de América, España se hallaba en el tránsito de un feudalismo peculiar a un capitalismo mercantil incipiente, en una especie como de combinación -no totalmente libre de conflictos- de estas dos modalidades productivas. La Reconquista había conferido características bastante peculiares a la Edad media española y determinado modificaciones de consideración en el sistema feudal, que lo hicieron atípico en comparación con el existente en el resto de la Europa occidental. Cuando se produce la unificación política de los Reyes católicos estaba surgiendo un capitalismo mercantil y financiero que, sin embargo, encontraba serios obstáculos en las formas feudales preexistentes, conformándose una dualidad que por su fuerza impidió sin duda, y luego retardó, la consolidación plena de una auténtica burguesía pujante e innovadora. La consecuencia iba a ser que, en la política de la Monarquía española, los criterios tradicionales y los modernos se entrecruzarían contradictoriamente. Más aún, la expulsión de

los judíos (1492) y de los árabes (1611) iba a contribuir a retrasar la expansión en España de los grupos burgueses y de la propia dinámica que era necesaria al capitalismo incipiente para poder proyectarse sobre el conjunto de las relaciones sociales y económicas. En el mismo sentido, la derrota de las Comunidades en Villalar (1520) vino a significar un duro golpe a la naciente burguesía de las ciudades y, por el contrario, un refuerzo de la nobleza y de la Iglesia en el conjunto social (3).

Era lógico que sobre el sistema colonial se proyectara todo lo que, en principio, podría calificarse como una superposición e hibridación de formas socioeconómicas, políticas y culturales metropolitanas, bajo el signo común de una relación de dependencia. Estábamos en presencia de un conjunto desigual, en el que fuerzas y rasgos feudales se entrelazaban con otros de tipo capitalista incipiente en la empresa colonial española (4). De otra parte, la Monarquía hispánica era una entidad en vías de centralización, dotada de fuertes rasgos de paternalismo. La política económica buscaba la preeminencia de los intereses reales, pero sufrirá también, y desde muy temprano, la presión de grupos e intereses metropolitanos y europeos y, al final, de los sectores dominantes americanos. Punto común era el hecho de que las economías coloniales hispanoamericanas se organizaban bajo un rígido sistema de monopolio mercantil, junto a una estricta fiscalización de la actividad gubernamental ultramarina por parte de los organismos creados al efecto en el núcleo central metropolitano. Rasgo característico del sistema colonial iba a ser la fusión de la autoridad política con la militar y la justificación ideológica del poder establecido mediante la religión católica. El tipo de sociedad resultante estaba marcado por un entrelazamiento de formas sociales y económicas que va a permitir la apropiación metropolitana de un considerable excedente económico, con sus correlaciones en el campo de las deformaciones y desequilibrios regionales, sectoriales y grupales.

Stanley J. y Barbara H. Stein (5) han puesto de relieve, y es un aspecto fundamental para la comprensión del problema, cómo hacia 1492 y a partir del inicio de la empresa colonizadora, España y Portugal se verían inmersos en una situación de dependencia con respecto al resto de la Europa occidental. Esta anómala status de colonia e imperio en forma simultánea se resumía en un papel subordinado de las monarquías ibé

L-4

-cas como potencias atlánticas, en contraste con países como Inglaterra, que en el lapso de 1500 a 1700 experimentó un creciente poder económico y político, un crecimiento de sus actividades comerciales y de producción de manufacturas, lo cual le permitió lograr avanzadas en Asia, Africa y América, sobre todo en ésta última, en un intento de penetración en el aparentemente inexpugnable imperio español. Al mismo tiempo, Francia, bajo Colbert, emprendía la modernización de su estructura económica mediante la reforma impositiva, la protección de la industria, la creación de compañías comercializadoras y de una marina mercante. Por oposición, hacia 1700, la economía y todo el sistema social español se encontraban en delicada situación. La depresión de la actividad productiva era un hecho generalizado y el Estado no había podido modernizarse, proliferando y acentuándose cada vez más una estructura política de tipo patrimonial, aparato estatal cuya ineficacia era un serio freno a ulteriores desarrollos. Era notable la diferencia entre los precios de las manufacturas peninsulares y los del resto de Europa; el flujo de oro y plata americanos inflaba la estructura de precios y arruinaba las pocas industrias existentes. En España, la población emigraba; la aristocracia, la burocracia y la Iglesia crecían, lo mismo que las pensiones vitalicias, los beneficios eclesiásticos y la compra de cargos públicos heredables. La evolución socioeconómica de la metrópoli española no había sido propicia precisamente -y de cara a la experiencia colonial- para crear las condiciones objetivas del surgimiento de una burguesía nacional fuerte y de un grupo comercial capitalista suficientemente capaces de crear la infraestructura económicosocial que la propia potencia metropolitana necesitaba para hacer frente a una empresa de tal envergadura.(6)

En un comienzo, está claro que uno de los móviles esenciales de los conquistadores va a ser la búsqueda de metales preciosos y la Corona castellana lógicamente va a procurar la organización de las Indias con miras a la prosecución de ése objetivo. Las etapas iniciales van a ver surgir un imperio orientado fundamentalmente en torno a la minería andina, con sus correspondientes canales comerciales que posibilitasen el envío hacia la metrópoli de la mayor parte de ese tesoro metálico. La consecuencia de tal sistema se concretaba en una doble vertiente: a) la supremacía económica de los emisarios locales de la economía metropolitana, de modo que el fisco, por un lado, y los comerciantes, por otro, aseguraban el vínculo con la península; y B) el mantenimiento casi total de los demás sectores de la economía colonial al margen

de la circulación monetaria.(7) Pero además de la riqueza minera estaban también los hombres y las inmensas extensiones de tierra descubierta, y sobre la tierra y el trabajo indígena se iba a apoyar un modo de vida señorial que conservará hasta el siglo XIX los conocidos rasgos de opulencia y miseria. En este sentido, los señores de la tierra tendrán un importante predominio sobre amplias zonas de la sociedad colonial, sobre todo cuando la explotación minera decaiga para dar más importancia a las actividades agrícolas. Estas diferenciaciones o diversos "momentos" de la empresa colonial llevan al profesor I. Sotelo a distinguir entre una primera colonización antillana, de lapso muy corto (entre 1492 y 1521), una colonización minera del altiplano mexicano y andino (siglos XVI y XVII, fundamentalmente) y una colonización agrícola y ganadera (siglo XVIII)(8).

La casuística es amplia y conviene examinar algunos casos por separado. México se presentó como la región más poblada, rica y significativa para la economía europea. Los mineros, antes que los hacendados, son los que van a dominar la sociedad local; predominantemente blancos, ocupan la primera posición en la alta clase criolla que rivaliza con la peninsular y muchas veces la riqueza acumulada desemboca en el derroche ya que no encuentra modos de inversión útil. En el otro extremo encontramos una gran miseria popular, a la que se agrega un crecimiento demográfico muy por encima de las posibilidades reales de trabajo. Es indudable que México, por su riqueza minera, ocupa un lugar privilegiado en la política metropolitana. En la región antillana, Cuba va a resultar beneficiaria de una cierta expansión con ocasión del tabaco y el azúcar, expansión que enriquece rápidamente a núcleos de comerciantes y posteriormente a los grupos de plantadores. En la América central, la capitanía general de Guatemala permanecerá estática en cierta medida, caracterizada -al igual que otras zonas marginales del Imperio- por un sistema de grandes haciendas y comunidades indígenas fuertemente señorializadas y orientadas hacia el cultivo del índigo. Nueva Granada tiene su principal producto de exportación en el oro; no obstante, se trata de una región de cierta complejidad, en la que las diferencias entre las costa y el interior, las zonas de minerías y los grandes terratenientes, el comercio legal y el contrabando, etc., condicionan una realidad contrapuesta. Por su parte, Venezuela va a estar volcada al comercio ultramarino durante el siglo XVIII y después de un largo período de estancamiento y marginalidad, va a destacarse, como cultivo costero, el cacao, en manos de grandes propietarios que utilizarán mano de obra

predominantemente esclava; los señores del cacao, los mantuanos, serán parte decisiva de la sociedad venezolana. En la zona del Pacífico sudamericano, Quito presenta un predominio de la agricultura tropical para la exportación, de plantación y con mano de obra esclava, mientras que en la sierra predominan los indios, inmersos en una economía de autoconsumo. En el virreinato del Perú, al igual que en el de Nueva España (México), la minería es la actividad esencial y de gran importancia son las comunidades indígenas, dedicadas a la artesanía doméstica y a la agricultura de subsistencia, sin olvidar la región costera donde predominarán las grandes haciendas y los esclavos. Chile, en cambio, viene a ser uno de los territorios más aislados y remotos de las tierras de dominación española; durante el siglo XVIII, la producción de metales preciosos experimentará un ascenso, mientras que el campo estará dominado por la gran propiedad. La oposición entre peninsulares y americanos será esencial; la población negra, por el contrario será escasa y dentro del sector mestizo los aportes culturales españoles son significativos. El Río de la Plata conformará una región afectada por las transformaciones imperiales, sobre todo por coyunturas políticas centradas en la necesidad de establecer una barrera frente al avance portugués. Buenos Aires va a convertirse en cabeza de virreinato en 1776, conformando un hinterland económico que irá hasta el Pacífico y el Titicaca, al mismo tiempo que presentará una clase mercantil bastante amplia. En el Paraguay de las Misiones, la expulsión de los jesuitas va a producir un serio golpe a la estructura comunitaria indígena desarrollada al amparo de tales instituciones religiosas; la economía misionera será absorbida por la expansión del cultivo del tabaco y de la ganadería. En el caso del Brasil, estamos en presencia de un fenómeno en cierta forma diferenciado del resto del mundo colonial americano. Del mismo modo que en Castilla, en Portugal la corona, al no poder llevar adelante por sí sola la exploración y conquista, recurre a las capitanías las cuales pasan a formar un conjunto de factorías privadas en la región costera, de notable entidad: de ahí que su transformación en colonia de la corona sea más lenta que en Hispanoamérica y menos completa, esto es, la administración regia se ve obligada a respetar situaciones locales de poder en una medida aún mayor. Por otro lado, en Brasil vamos a encontrar cámaras municipales semejantes, en su estructura y origen, a los cabildos; habrá capitanes mayores semejantes a los corregidores, y bajo su mando, capitanes de la espesura (capitães do mato) que vigilan el orden de las zonas rurales. Pero el historiador

T. Halperin Donghi señala la existencia de una diferencia esencial: mientras que en Hispanoamérica la posesión de la tierra y de la riqueza, aunque suelen darse simultáneas con frecuencia, no van necesariamente juntas, en Brasil sí suelen acompañarse, de forma que las clases dominantes locales tienen un poder que en menos medida falta en las Indias castellanas tomadas en conjunto; por tanto, la creación de un poder central no puede darse con gran intensidad en Brasil en contra de esos reales poderes locales: el poder central nace debilitado.(9)

Considerada Hispanoamérica en forma global, cuando profundizamos en sus aspectos económicos y sociales en el período colonial, vemos cómo, en concreto, la actividad económica estuvo vinculada a España, como es obvio, y con Europa occidental a través de aquélla. Con el transcurso de la colonización, los elementos de esta economía van a diferenciarse progresivamente: a) en primer lugar, una serie de centros mineros en México y Perú; b) a su lado, regiones agrícolas y ganaderas periféricas a los centros mineros, orientadas hacia el aprovisionamiento de víveres y materias primas; y c) un sistema comercial edificado a fin de canalizar el envío de plata y oro en forma de numerario o lingotes a España, con el objeto de pagar los bienes importados del resto de Europa, y encauzado a través de un puerto español -Sevilla- para la distribución o redistribución a las colonias americanas (10). En efecto, los españoles iban a estimular un sector colonial minero esencial para el sostenimiento de la economía metropolitana y la posición internacional de España en el contexto europeo, y en este sentido, el auge minero que se produce entre 1545 y 1610 es un ejemplo de empresa privada en el que los mineros, los comerciantes y el Estado llegan a un acuerdo para la repartición de beneficios. La participación estatal se coloca en un porcentaje lo suficientemente amplio de la plata extraída, lo que, junto a los impuestos, viene a satisfacer en gran medida los gastos del Imperio. La base laboral de esta extracción minera va a constituirse principalmente mediante la explotación de grandes cantidades de mano de obra preferentemente india.(11) Junto a esta clara orientación exportadora de la economía colonial americana, los excedentes agrícolas y de fuerza de trabajo amerindios van a asegurar y complementar el éxito de la empresa minera y qué duda cabe que ésta vino a actuar como factor de estímulo, directo o indirecto, del capitalismo europeo en formación, a la vez que despedazaba, en la mayor parte de los casos, las estructuras socioeconómicas precolombinas.

Precisamente, como complemento de la economía minera -y en sustitución de los modos agrarios anteriores a la conquista- va a 50R-61R la hacienda, con el fin de abastecer a la actividad minera y permitir surgir un antiguo y ahora renovado símbolo de status social de sus poseedores. La hacienda es en realidad una entidad esencial al sistema colonial, de hondas repercusiones en diversos sentidos en la América colonial y postcolonial. Al lado de la hacienda, instituciones como la encomienda iban a contribuir a la forja de una unidad económica y social vertical donde la fuerza de trabajo (peonaje, servidumbre, etc) dependerá casi feudalmente del dueño de la hacienda. En forma paralela, el acrecentamiento de la hacienda, las compras de grandes extensiones de tierra por parte de mineros y comerciantes enriquecidos y la propia política de otorgamiento de iguales extensiones a los colonizadores y conquistadores por parte de la Corona, son factores que van a acelerar la formación del latifundio. La gran hacienda, en forma de latifundio, tiende a hacerse relativamente autosuficiente y, como unidad de producción y como núcleo social patriarcal, será capaz de sobrevivir, por ejemplo, en México hasta 1910, y aún más tarde incluso, en Guatemala, Ecuador, Bolivia y Perú. El latifundio iba a florecer principalmente en regiones coloniales periféricas como Cuba, Venezuela y la cuenca del Río de la Plata, orientado esencialmente hacia la exportación. En este orden de ideas, puede afirmarse que plantación y hacienda son términos que muchas veces se superponen y resulta artificioso establecer en la realidad histórica de tales fenómenos una línea de demarcación clara y determinante entre una y otra. La plantación, a fines del siglo XVII, se ve convertida en un fundo característico de zonas tropicales y subtropicales, especializado en un sólo cultivo que utiliza una fuerza de trabajo integrada por esclavos traídos de África, constituyendo una unidad económica independiente creada para una producción agrícola destinada al consumo externo o europeo. Su mecanismo puede ser descrito así: la plantación se especializa en un cultivo, utiliza los beneficios de la exportación para importar bienes y servicios demandados por sectores privilegiados, fundamentalmente víveres, productos manufacturados y artículos suntuarios. Como ejemplo claro de especialización económica, el prototipo de agricultura de plantación fue el ingenio brasileño. (46)

Partiendo de estas bases, la sociedad colonial se estructura, por un lado, con una aristocracia de riqueza, ingresos y poder, y, por otro, con una masa marginal y subordinada. Más aún, se trataría de una

estratificación social por color y fisonomía -fenotipo para los antropólogos-, es decir, una élite de blancos o casi blancos y una masa de gente de color. En otras palabras, una estructura social de dos vertientes o estratos: una élite de terratenientes, mineros, alta burocracia y clero, y una masa de pobladores rurales en comunidades indígenas o en haciendas o en plantaciones tropicales; y entre ambos grupos, un pequeño sector de comerciantes, burócratas y bajo clero; estructura social correspondiente a una economía minero-agrícola y pre-industrial. "No obstante, mientras que en la península ibérica el ingreso, el 'status' y el poder colocaban a la gente en uno u otro estrato, en las colonias iberoamericanas el color, al igual que el ingreso, el 'status' y el poder, determinaban la posición social" (13). Criterios de pureza de sangre y criterios religiosos informaban además la constitución de la élite social y política. Hacia 1700, la sociedad colonial americana era "un marco cultural en donde el 'status', los ingresos y el poder se concentraban entre aquellos juzgados como blancos o caucasoides, y se diluían conforme la escala descendía a amerindios y negros" (14). Simultáneamente, se verificaba el fenómeno de compartimentalización de las regiones coloniales, en el sentido de que las élites locales iban a ocupar progresivamente sus respectivos espacios de poder provincial o subregional. Regionalismo o provincialismo que va a producir entre los criollos una especie de nacionalismo incipiente con el paso del tiempo, en la dirección hacia un vago sentimiento de autogobierno en América frente a los administradores y comerciantes peninsulares. En este sentido, el reparto de la cuota espacial o geográfica de poder prepara de alguna manera el futuro antagonismo entre criollos y peninsulares.

Mucho se ha discutido en torno al problema de la caracterización socioeconómica del sistema colonial americano y sus efectos en la evolución posterior en un sentido global. Sin entrar de lleno en el tema (que por lo demás, a nuestro modo de ver, carece todavía de conclusiones definitivas), podemos tomar en consideración la opinión de Alberto J. Plá (15) para quien las poblaciones americanas precolombinas más desarrolladas en el momento de la llegada de los europeos (costa del Pacífico, excepto Chile, Centroamérica y México) y, en especial, en aquellas donde se daban formas más complejas de organización económico-social, se caracterizaban, siguiendo una categoría conceptual de Marx, por la vigencia del modo de producción asiático (16), el cual entraría en choque con el feudalismo traído por el conquistador europeo, originando una formación de coexis-

-tencia de modos de producción diferentes -o una combinación de ambos, el asiático y el feudal-, cuya consecuencia es una especie de fusión que descartaría la existencia de un régimen capitalista (17). En otros términos, en América Latina perdurarían, alteradas por procesos de fusión e imbricación, las formas tradicionales precapitalistas.

Por nuestra parte, en este aspecto creemos que hay que distinguir entre la racionalidad interna y la racionalidad externa del régimen socio-económico colonial. De ahí que nos parezca más interesante y más acertada la posición de Ignacio Sotelo (18), para quien tan difíciles son de negar los aspectos capitalistas, como los feudales, en la constitución histórico-social latinoamericana. Para este sociólogo, habría que adquirir conciencia de la necesidad de superar la antinomia capitalismo-feudalismo, ya que se trataría de una falsa problemática surgida de la utilización, sin previs crítica, de categorías elaboradas a partir del contexto europeo. Ahora bien, mientras no se universalizan otros conceptos apoyados en estudios concretos, habrá que insistir en la presencia de elementos capitalistas y feudales en el desarrollo histórico de la sociedad latinoamericana, "pero de tal forma conexos e integrados, que forman una nueva entidad, que lo mismo vale llamar, capitalismo embrionario y dependiente, que feudalismo tardío colonial, vinculado al capitalismo europeo. Lo decisivo es que quede constancia, tanto de la peculiaridad de sus estructuras internas, como de las relaciones de dependencia con las metrópolis europeas" (19).

2) Organización económica y social de Venezuela colonial.-

En un tema que tiene posibilidades de análisis desde diversos puntos de vista, conviene comenzarlo afirmando que, para el momento de la conquista española, la organización de los indios en territorio venezolano era esencialmente tribal, etapa previa a la existencia del Estado, imposible de darse en la rudimentaria organización del clan, estadio del que no pasaron jamás los aborígenes venezolanos, rasgo diferenciador con otras regiones latinoamericanas que el historiador J. Gil Portoul ha resaltado al decir que "Ni encontraron tampoco aquí los conquistadores, un gobierno nacional cuyo reemplazo les hubiera librado enseguida todo el territorio: tuvieron que dispersar sus fuerzas para guerrear con innumerables tribus que obedecían cada una

a su rey o cacique, lo cual, por diversas circunstancias que se explicarán después, explica por qué la conquista y colonización de Venezuela fue menos rápida que la de otras partes de América" (20). F. Brito Figueroa nos proporciona una clasificación de la estructura económica de las comunidades indígenas de Venezuela primitiva: a) poblaciones con una economía basada en la recolección, caza y pesca; b) poblaciones con incipiente cultivo de plantas; c) poblaciones con agricultura de azada; y d) poblaciones con agricultura de riego y sistemas de cultivo intensivo (21). En este contexto, el mismo estadio de desarrollo primitivo imponía fenómenos de cooperación colectiva elemental y de división natural del trabajo, en los que se podían observar rasgos típicos tales como la propiedad personal de algunos instrumentos de trabajo y la distribución colectiva de los bienes de consumo en buena parte de los casos. Era evidente que el trabajo de los indios, al limitarse a la satisfacción de las necesidades primarias más inmediatas, no arrojaba una plusvalía o plusproducto. Tampoco se observaba en el caso venezolano, elementos de apropiación individual de la tierra o el monopolio de ella por una categoría social privilegiada. Y es importante insistir en este punto, sobre todo para el examen del choque de estas estructuras indígenas con la cultura y la organización europeas en el momento de la conquista y colonización, y las subsiguientes transformaciones que se producen como resultado de este desigual encuentro (22).

Y es que el esencial significado económico de la conquista y de la colonización va a consistir, precisamente, en la incorporación de los territorios americanos descubiertos al conjunto de la economía mundial, en ese instante muy rudimentaria si la comparamos con la actual, pero en la que ya se establecía un fenómeno de división de funciones económicas entre economías proveedoras de metales preciosos, materias primas y frutos tropicales, y países necesitados de esos productos e interesados a su vez en colocar sus manufacturas en los países coloniales. Al vincularse la solicitud de aprovisionamiento de productos que no se encontraban en Europa, con el propósito de colonizar para asegurar una salida a los artículos de la metrópoli, nació el exclusivismo en el comercio colonial, particularmente estricto en el caso de España. Pero hemos visto cómo España no estaba en capacidad, por los avatares de su evolución económica y social, de desempeñar esa función proveedora de manufacturas a las tierras colonizadas, por el hecho esencial de que no poseía un desarrollo fabril como el que comenzaba a surgir en sus vecinos europeos, teniendo

que acudir a éstos para adquirir la mayor parte de dichas mercancías. Por otra parte, España iba a someter su actividad manufacturera y comercial a una reglamentación y a un sinnúmero de restricciones muchas veces ruinosas que impedirían su pleno desarrollo. Al mismo tiempo, en el campo del comercio exterior se va a instaurar un monopolio que obstaculizaba avances en esa misma dirección, sujetando la actividad económica a un marco preestablecido y cerrado en provecho de la metrópoli (23).

En Venezuela, al igual que en otras zonas del Imperio, el peninsular no se va a dedicar, en un principio, al establecimiento de una economía agrícola para la exportación, ni tampoco tuvo intenciones inmediatas de hacerlo. Su preocupación fundamental fue la búsqueda de metales preciosos y de perlas. La primera economía agrícola de la Colonia no vino a existir sino en función de las necesidades de abastecimiento de los recién llegados y su entorno de esclavos e indios como mano de obra dedicada a la exploración y explotación de las minas. En realidad, no va a ser sino hacia la segunda mitad del siglo XVIII, cuando, con el advenimiento y asentamiento de la Compañía Guipuzcoana en Venezuela, se pueda hablar de la existencia de una 'factoría colonial' encaminada a abastecer a Europa de productos tropicales (24). De hecho, las primeras actividades económicas de la colonia venezolana girarán en torno a la pesca de perlas, al tráfico de esclavos indios y una incipiente minería. Y como la riqueza minera no se va a caracterizar precisamente por su auge, al contrario de los casos de México y Perú, se producirá una reconversión económica que analizaremos en su momento. Por de pronto, la pesca de perlas, por el sistema de explotación directa, fortalece el desarrollo de relaciones de producción esclavistas: es un hecho el trabajo de esclavos indios y negros en diversos placeres perlíferos y puede afirmarse que este renglón aparece como significativo en la economía colonial hasta 1550, aproximadamente (25). De igual manera, el trabajo esclavo, de indígenas o de negros traídos de Africa, es un componente esencial en la explotación minera, del oro y del cobre, hacia mediados del siglo XVI. Otro renglón importante va a estar constituido por la ganadería, cuyo desarrollo será palpable durante los siglos XVI y XVII. Según el profesor Brito Figueroa, "en los llanos, la ganadería se transformó en el elemento fundamental de la producción, favorecida por las condiciones del medio geográfico y el desarrollo sociocultural de los pobladores indígenas de aquellas regiones, cuyas actividades de recolección facilitaron la formación de una economía ganadera primitiva con base pastoril-recolectora" (26).

Lo cierto es que en Venezuela la obtención de oro se lograba sólo irregularmente y en cantidad poco significativa; por el contrario, grandes extensiones territoriales se presentaban como áreas potenciales de riqueza agrícola ante el peninsular ansioso de metales y piedras preciosas. El hecho de que el subsuelo venezolano, para aquél momento, no mostrase abundancia de metales, como en Perú o en México, y que la riqueza perlífera hubiere mermado considerablemente, obligó al colonizador a un enfoque político-económico distinto en relación a estas áreas cuyas condiciones naturales las hacían propicias para los cultivos; como dice M González Abreu, "La realidad específica de los territorios americanos fue depurando la concepción metalífera, sublimada apriorísticamente por los dirigentes y expedicionarios" (47). Con su peculiar estilo, el cronista Juan de Castellanos, a mediados del siglo XVI, enfocaba certeramente la realidad diferenciada de la riqueza del Nuevo Mundo al destacar el carácter lucrativo de los recursos agrícolas:

"En Indias tierras hay do no se crían
Oro ni plata; mas en su distancia
Algunas veces hay tal granjería
Que suele dar riquísima ganancia,
Supliendo aquella falta que tenía
Con cosas de no menos importancia
Que causa natural allí compuso,
Y los hombres aplican á su uso" (48)

De otro lado, y paralelo al cambio del eje productivo hacia la agricultura, va a estar el proceso de desarrollo e introducción de la esclavitud de los negros, en correspondencia con la exigencia de incorporar un elemento de mayor productividad, que además supliera la carencia de fuerza de trabajo y añadiera más beneficios a los ya obtenidos por la encomendación de indios, al mismo tiempo que hiciera posible la explotación de grandes superficies de tierra. Para el caso específico de Venezuela, la importación de negros en calidad de esclavos iba a alcanzar un extraordinario auge y se tradujo en un refuerzo decisivo para la consolidación de la estructura productiva colonial. Recordemos que la introducción de negros esclavos en América constituyó un privilegio acordado por el Monarca, primero bajo la forma de licencias -favor del soberano-, y luego mediante el asiento o contrato en el cual el asentista, comprometido a traer cierto número de negros y ofrecerlos en venta, se le permitía importar a las Indias una cantidad fija de mercancías como excepción al sistema de comercio exclusivo

de la Corona. Más tarde, los Asientos se convirtieron en verdaderos tratados de derecho público, en el sentido de que era otorgados a potencias extranjeras (Inglaterra, Francia, Portugal), encargadas de traer los negros e introducir las mercancías que, como prima a esa introducción, se dejaba pasar a través de las mallas del monopolio del comercio exterior español (29). En este sentido, Carlos Siso ha destacado la hipótesis de que los negros traídos a Venezuela provenían principalmente de las posesiones portuguesas de Angola, Bengala y Loanda (30). Fueron encaminados desde un principio a los cultivos de "tierra caliente", de condiciones climatológicas parecidas a las reinantes en sus países de origen; en concreto, región costanera del mar Caribe, haciendas de cacao (Barlovento) y cañaverales, pequeñas plantaciones y valles interiores de Venezuela dedicados al cultivo de la caña de azúcar (Valles de Aragua).

El asentamiento definitivo del negro esclavo consolidó el proceso de colonización. La colonia venezolana tuvo así, al lado de otros territorios dependientes de España, un papel específico y diferenciado con relación al que desempeñaban, por ejemplo, aquellos donde la riqueza económico-social estaba constituida fundamentalmente por la minería. La utilización de la mano de obra esclava iba a poner de relieve el caudal de riquezas que era capaz de proveer la explotación agrícola. Los dirigentes metropolitanos, a pesar de su marcado interés por los metales preciosos, tuvieron que ajustar su política económica a la heterogénea realidad americana. A esta conclusión llegaron luego de haber estimado que las materias primas vegetales y animales eran tan importantes como el oro, sólo que en el caso concreto de la agricultura, ésta debía practicarse en aquellos renglones de alto rendimiento y creciente demanda y que sus frutos debían igualmente ser intercambiados bajo el control monopólico de los organismos estatales. Así fue cómo, en Venezuela, Cuba y otras colonias, la esclavitud se desarrolló en función del cultivo de grandes plantaciones y, en particular, en función de uno o dos productos básicos, tales como el cacao y el tabaco, que eran de elevado consumo y de rápida comercialización y rentabilidad. (31) En un intento por cuantificar el número de negros esclavos introducidos en Venezuela -siempre difícil por la carencia de estadísticas fiables y precisas al respecto-, el profesor Brito Figueroa nos da unas estimaciones que creemos suficientemente sólidas; de acuerdo con él, entrarían legalmente al territorio venezolano en el siglo XVI, 6.595 negros esclavos; en el siglo XVII, 10.147, y en el siglo XVIII, 34.099 negros.

En total, las comarcas venezolanas habrían recibido por vía de las licencias debidamente registradas y los asientos, 50.841 negros. A esta cifra, nuestro autor estima conveniente añadir el volumen de los llamados "negros de mala entrada", o esclavos importados clandestinamente y los que huyendo de las colonias extranjeras, se refugiaban en las costas venezolanas, que según Brito Figueroa elevarían hasta cerca de 100.000 el número de negros esclavos introducidos a estas comarcas en tres siglos de régimen colonial. (32)

La progresiva conformación del sector agrícola como centro de la actividad económica del medio colonial, es un proceso ligado directamente con una serie de instituciones concretas, entre las cuales está, ya es bien sabido, la institución de la encomienda. En realidad, la encomienda va a constituir una forma esencial de la explotación de la tierra. Es conocida la apreciación de que el colonizador, por medio de la "data", confería tierras en propiedad privada a los distintos pobladores, pero junto a las mismas y coexistiendo con ellas, la adopción de una forma especial de explotación de la tierra, como la encomienda -que llega a ser típicamente americana-, va a obedecer a causas muy particulares. Desde un punto de vista ideológico, el factor religioso implicaba la creación, por parte de la Corona española -imbuida sin duda por un ansia misional de propagación y defensa de la fé católica-, de instituciones orientadas a catequizar a los indígenas; de ahí que la encomienda haya sido, en sus orígenes, una recomendación de cristianizar in indígenas. Pero las condiciones del desarrollo de la vida material ejercían indudablemente una influencia aún más decisiva: visto desde la óptica colonizadora, se planteaba la necesidad de utilizar al indio para el trabajo y se demostró pronto imposible someterlo a un sistema de esclavitud directa, incompatible con su naturaleza y sus costumbres -in tento que por lo demás había despertado una gran polémica (33). De esta manera, la misma motivación que dictó la traída del negro, iba a imponer el establecimiento de un modo especial de explotación de la mano de obra indígena, que dejaba a los aborígenes una cierta y relativa libertad de movimiento y que les permitía a su vez la vida en común (34).

En este orden de ideas, es admisible la consideración de que la encomienda constituye una de las poderosas causas originarias del latifundio en América Latina. (35) Los repartos de indios encomendados con sus tierras, que recibían los conquistadores en virtud de "datas", de "mercedes", se convirtieron a menudo en latifundios mediante las llamadas "composiciones" concedidas por el Rey a través de dinero cons-

-tante y sonante.(36) De otro lado, en el sistema de la encomienda, todo parece indicar que el trabajo personal, en sustitución del tributo como obligación del encomendado, fue visto al principio como cosa natural e, incluso, de hecho, expresamente permitida. En la Venezuela colonial del siglo XVII, el servicio personal de los indios en las tierras propias del encomendero era práctica consuetudinaria pese a las restricciones y prohibiciones de la ley.(37) Es más, la supresión del servicio personal de los indios siempre iba a encontrar una fuerte oposición de la clase terrateniente venezolana de hacendados y encomenderos residenciados en Caracas.(38)

Lo cierto es que, agotados los placeres perlíferos y comprobado el bajo rendimiento de las minas, se iba a iniciar en Venezuela el desarrollo de una agricultura de plantación, sobre la base principal del cultivo del cacao, producto agrícola de mayor jerarquía a partir de la segunda mitad del siglo XVII y a todo lo largo del siglo XVIII. y sobre la base del cultivo del cacao se va a constituir una clase terrateniente criolla -los "grandes cacaos"- con un poder económico y social creciente, esto es, una élite de grandes propietarios que domina socialmente al resto de la población, ya sea urbana (pequeños comerciantes y artesanos), ya sea rural (esclavos, mano de obra enfeudada, población indígena).(39) Se trataría de una economía agro-esclavista, estructurada progresivamente, en lo interno, sobre el sistema de grandes propiedades, explotadas por medio del trabajo esclavo y servil (40), y en lo externo, como una economía orientada esencialmente hacia la exportación, en función de las necesidades de mercado de la metrópoli y de los países más avanzados de la época. Se configura con el carácter de una economía monoprodutora y monoexportadora, en torno al cacao como cultivo fundamental del período colonial. Monoproducción y monoexportación, rasgos que la economía venezolana conservará prácticamente hasta nuestros días. Si recurrimos a las cifras, el historiador Rafael María Baralt calculaba la producción anual de cacao, antes de 1730, en 86.000 fanegas y un consumo interno equivalente a un 25 por ciento. Después del establecimiento de la Compañía Guipuzcoana, la producción se triplicaría, llegando la cosecha hasta 116.000 fanegas en el período 1730-1764. Para el barón y viajero alemán, Alejandro de Humboldt, en las últimas décadas del siglo XVIII, la producción de todas las provincias supondrían unas 193.000 fanegas, de las cuales se exportaban unas 145.000 fanegas. Puede calcularse que

para 1775, el cacao representaba el 75,1% del valor total de los efectos exportados por el puerto de la Guaira, siguiéndole de lejos el sector de cueros con un 17,1%, el tabaco con el 6,7% y el añil con un 0,87% (41). El siguiente cuadro nos puede ilustrar acerca de la producción y exportación de cacao entre 1691 y 1780, y sobre todo de los lugares a que se destinaba: el cambio que se produce entre 1730 y 1740 está íntimamente ligado a las actividades de la Guipuzcoana en Venezuela: (el cuadro y las estimaciones son del prof. Brito Figueroa)

- Exportación de cacao de la provincia de Caracas - (fanegas)

<u>décadas</u>	<u>Nueva España</u>	<u>España</u>
1691-1700	109.861	15.470
1701-1710	136.892	9.436
1711-1720	143.744	4.736
1721-1730	181.464	40.243
1731-1740	188.945	225.795
1741-1750	173.862	158.558
1751-1760	177.956	317.931
1771-1770	159.881	343.242
1771-1780	91.228	335.437

(42)

En este nivel de la exposición, la alusión a la Compañía Guipuzcoana es obligatoria. Hemos visto cómo, de acuerdo a los postulados del mercantilismo de la época, la regulación del comercio en el seno del Imperio español se verificaba a través de prohibiciones y trabas y se centralizaba mediante instituciones concretas creadas al efecto. El Consejo de Indias, por ejemplo, era un cuerpo oficial y burocrático superpuesto a la Casa de Contratación de Sevilla -ente centralizador de la actividad comercial-, que hacía de juez de apelación de las decisiones de la misma, sirviendo al Monarca de cuerpo consultivo para las gestiones del Imperio colonial y asumiendo un papel decisivo en la determinación de la política económica colonial, el establecimiento de impuestos y otras normas de política financiera referidas al continente americano (43). El monopolio español del comercio exterior implicaba, en consecuencia, un dominio casi absoluto de las relaciones comerciales por, con y a través de España. La llegada a Venezuela de la Compañía Guipuzcoana venía a reflejar tales pretensiones de exclusividad, tan es así que puede hablarse de una especie de monopolio dentro del monopolio. Por lo demás, la constitución de Compañías

por acciones, modalidad ligada al capitalismo mercantil de principios del siglo XVIII, -como la Guipuzcoana-, van a constituirse en eficaces instrumentos de un proceso de acumulación primitiva del capital con obvias repercusiones en la formación colonial (44).

La Compañía Guipuzcoana, fundada el 25 de septiembre de 1728, debe ser situada en el contexto de la reforma política de los Borbones ilustrados del siglo XVIII español; política regeneracionista y centralizadora en lo político-administrativo y orientada hacia los ideales de lo que se conoce como despotismo ilustrado. Responde a estos ideales, en el orden económico y cultural, la fundación, por el Conde de Peñaflorida y otros notables vascos, de la propia Compañía y de la Real Sociedad de Amigos del País. La Guipuzcoana tuvo como primer accionista al mismo Rey Felipe V y fue uno de los negocios más fructíferos de la época. En éste último sentido, es significativo que, a los doce años de inversión de capital, los accionistas de la Compañía habían recibido un 160% de su aporte y en ocasiones el dividendo llegaba a un 25%. En un principio, las acciones se repartieron en el país de origen, pero luego, hacia 1760, se ampliaron entre compradores y principales representantes de la oligarquía de Caracas, tales como los Toro, Bolívar, Ibarra, Ponte, Tovar, La Madriz, Ascanio y otras poderosas familias (45).

Dos fueron las concesiones generales que otorgó el poder real a la Compañía en Venezuela: a) el monopolio del cacao; b) la vigilancia y persecución del contrabando y del comercio furtivo, para lo cual se montó un servicio de inspección de puertos y costas, facultándose a la Guipuzcoana para sostener a su cuenta y riesgo los hombres armados que le fueran indispensables a tal labor (46). Cuando la Compañía muere en 1781, al fusionarse, por disposición real, con la Real Compañía de Filipinas, la colonia venezolana se ha convertido ya en una atrayente zona del Imperio español. El crecimiento del cultivo del cacao y de las cosechas en el período 1735-1763, principalmente, ve configurarse una poderosa oligarquía criolla que va a jugar un papel decisivo en el movimiento emancipador. Y es que, en realidad, a partir de la Guipuzcoana sí puede hablarse del territorio venezolano como "factoría colonial", abastecedor de frutos tropicales a los países en vías de crecimiento capitalista de la zona templada norte. Sin duda que la Compañía, en la primera etapa de sus actuaciones, impartió un impulso dinamizador a las actividades económicas de Venezuela colonial; no obstante, al profundizar en su vertiente monopolística, las exageraciones y exclusivis

nos en que incurrió, la convirtieron, desde el punto de vista de la dialéctica socioeconómica colonial, en un freno y obstáculo para las mismas fuerzas económicas y sociales que había contribuido a impulsar, lo cual le iba a traer la progresiva oposición de los sectores del gran latifundio ya consolidado en la región central principalmente, y de los agricultores en general, es decir, entraba en conflicto con la nobleza terrateniente (48). Una referencia al modelo empleado por la Compañía en materia de comercio del cacao, puede ser útil para la búsqueda de una de las razones del conflicto. En efecto, el modelo empleado para obtener del cacao la más elevada rentabilidad era la compra del mismo a los ácultivadores a bajos precios y su venta ulterior a altas cotizaciones, prevalida, como hemos dicho, del exclusivismo que ostentaba y de la vigilancia que ejercía en todos los niveles de comercialización de dicho producto. Así, por ejemplo, la política de precios de la Compañía queda ilustrada en el hecho de que la fanega de cacao, valorada en 18 pesos durante el primer trimestre de 1733, disminuyó a 17 a partir del segundo hasta descender a 15 pesos para fines de ese año (49). En igual sentido, el historiador Antonio Arellano Moreno ha señalado una curva descendente de precios, calculando, para 1734, la fanega de cacao el 18 pesos, 14 pesos para 1737, 9 pesos para 1740, 8 pesos para 1746, y de 8 a 9 pesos para 1749 (50). Comprar barato y vender caro era una política que con el transcurso del tiempo provocará -junto a otros factores- un enfrentamiento entre los "grandes cacaos" y la Compañía Guipuzcoana, enfrentamiento que conlleva para los primeros un sentimiento de diferenciación con relación al mundo metropolitano y sus instituciones. Como dice Juan Oropesa, coincidiendo en este aspecto con la casi totalidad de los autores examinados: "La Compañía Guipuzcoana, al promover el incremento de la producción agrícola, sentó las bases del nascente poder de los criollos venezolanos. Ya hay riqueza, y, de consiguiente, una clase social que la detente. Su ojeriza contra los privilegios de que disfrutaban los agentes de la compañía, es el mejor indicio de que en ellos ha nacido voluntad de poder" (51).

Los temas de población y estructura social completarían este apartado y en ellos seguimos a Federico Brito Figueroa y ~~en~~ el volumen primero de su Historia económica y social de Venezuela, donde estos aspectos son tratados en forma exhaustiva a nuestro juicio. Así, la población venezolana se gestaría y configuraría lentamente durante el período colonial, caracterizándose por "la coexistencia de los europeos con la migración forzada de esclavos africanos y con los prámítivos

pobladores", lo que "condiciona un intenso proceso de mestizaje étnico-cultural que cualitativamente configura la morfología social de nuestra población e incide en el desarrollo de tendencias en la concentración y distribución, en la integración de áreas demográficas que se proyectan con fuerza hasta las primeras décadas de Venezuela contemporánea" (53) El proceso demográfico en los siglos XVI y XVII estaría primariamente condicionado por las condiciones de vida material, el tráfico esclavista y la transformación compulsiva de la población indígena en mano de obra esclava y servil, esencialmente (53). De otra parte, la migración blanca -integrada principalmente por peninsulares, canarios, portugueses y flamencos-, se acultura rápidamente, con el resultado de la aparición del criollo; y va a ser en este contexto en el que empieza a producirse el mestizaje, auténtica base real de la población venezolana (54).

En una primera fase, la pesca de perlas, como actividad productiva, supondría un primer elemento de integración demográfica, lo mismo que la ganadería imprimiría especiales características al poblamiento de los llanos venezolanos: alrededor de las estancias ganaderas, como centros de actividad económica en el llano, se formarían poblaciones y en algunos casos los propios hatos llegarían a ser caseríos y luego pueblos. Igual fenómeno presenciáramos con las plantaciones de cacao que, cultivadas por mano de obra esclava, canalizaron en buena medida el poblamiento a lo largo de la costa. En éste último sentido, Brito Figueroa nos proporciona una relación de áreas de población negra, de las que algunas todavía subsisten en la actualidad: área de la costa Caribe, área de los Valles centrales, área del Yaracuy y área del lago de Maracaibo (55).

No obstante, va a ser durante el siglo XVIII cuando se configure, en sus lineamientos esenciales, la población venezolana, tanto en su concentración y distribución regional, como en sus características étnico-culturales. Así, tendremos que la zona costero-montañosa (arco montañoso andino y costa centro-occidental y oriental, fundamentalmente) va a concentrar el 80 por ciento de la población, mientras que en los Llanos se situará un 18 por ciento, y en Guayana apenas el 2 por ciento de la población colonial del territorio venezolano (56). Más específicamente, durante la segunda mitad del siglo XVIII, va a tipificarse una urbe colonial con dinámica propia de desarrollo: no cabe duda que "El desarrollo económico de la sociedad colonial, las condicio-

-nes relacionadas con la vía natural que brindaba el mar, y el clima posibilitaron la transformación de Caracas en el centro urbano más importante del territorio venezolano" (57), y, por consiguiente, con una tendencia a constituirse en la capital político-administrativa y asiento de la oligarquía criolla. Para el período 1771-1784, la población de Caracas puede ser estimada en 18.669 habitantes; entre 1800 y 1810, en 42.000 habitantes, aproximadamente, lo cual indicaría un incremento de 23.331 personas y que nos da una idea de su importancia demográfica y política, sobre todo si pensamos que la tasa promedio de habitantes en ciudades, villas y pueblos de la época no sobrepasaba los 8.000 habitantes por término medio (58). En líneas generales, y salvando los obstáculos derivados de la carencia de fuentes precisas al respecto, Brito Figueroa calcula la población total venezolana en las últimas décadas coloniales, en unos 898.043 habitantes, de los que la Provincia de Caracas y los Llanos concentrarían unos 370.000 habitantes, aproximadamente (59). Entre 1750 y 1810, la población de Venezuela colonial se encontraría ya escindida y estratificada en grupos sociales y categorías étnicas diferentes, debidas a factores de carácter económico, jurídico y racial:

- Estratificación étnico-social de la población venezolana en 1800 -

Categoría étnica y social	Población	%	Población total %
blancos, penin. y canarios	12.000	1,3	20,3
blancos criollos	172.727	19,0	
pardos	407.000	45,0	
negros libres y manumisos	33.362	4,0	61,3
negros esclavos	87.800	9,7	
negros cimarrones	24.000	2,6	
indios tributarios	75.564	8,4	18,4
indios no tribut.	25.590	3,3	
pob. indig. margin.	60.000	6,7	
	898.043	100,0	100,0 (60)

Si comentamos este cuadro, cabe decir que los indios conforman un grupo étnicamente diferenciado de blancos criollos/europeos y negros africanos, encontrándose en general condición de inferioridad. De una parte, la población indígena marginal se refugia en las selvas

y los llanos, manteniendo en cierta medida su estructura comunal primitiva; de otra, los indios tributarios forman una categoría social de servidumbre, sometidos a un régimen de coerción extraeconómica por medio del tributo y los servicios personales. Los negros esclavos integran un grupo social explotado directamente en el proceso productivo por los amos terratenientes; una compleja superestructura jurídica, étnica y cultural los clasifica en términos similares a una casta: la condición de negro se identifica con la de esclavo. Los sectores de pardos, negros libres y manumisos forman un amplio y complejo estrato social, principalmente urbano y dedicado a los oficios "bajos y serviles" -pequeño comercio, artesanía, etc.- y en el campo calificado por Brito Figueroa como de población económicamente enfeudada (64). Se trata, en realidad, de capas o estratos intermedios -descendientes de esclavos negros, mulatos, zambos, mestizos en general y los llamados blancos "de orilla"- que ocupan una situación inferior a los blancos en todos los aspectos de la vida social, excluidos como estaban de las instituciones políticas de la sociedad colonial, con filtros tales como los estatutos de "limpieza de sangre" y la prohibición de uniones matrimoniales entre pardos y blancos: una situación de discriminación étnica, social y política contra la cual van a reaccionar pardos y negros libres como núcleo social, en conatos de insurrección a lo largo de la vida colonial venezolana.

El grupo social de los blancos, si exceptuamos el caso de los blancos "de orilla", constituye sin lugar a dudas la categoría privilegiada de la sociedad colonial venezolana. Dentro de ellos, un grupo de familias se enriquece progresivamente y adquiere la fisonomía de una clase social pudiente y cerrada, una clase de terratenientes esclavistas, propietarios de tierras y esclavos negros, que habitan en los centros urbanos más importantes, Caracas preferentemente, con manifiesto interés en la política municipal o local. Francisco Depons, un viajero francés, observaba así su situación:

"... principalmente y de ordinario residen los terratenientes en las ciudades, donde todo propietario tiene su casa y su familia. El hacendado que una vez al año visita sus haciendas está satisfecho de haberse ocupado bastante de sus intereses. La administración de las haciendas se confía a negros o mulatos, rara vez a isleños blancos, pero nunca a criollos, porque estos prefieren el ocio de los claustros, el atractivo de las charreteras o el laberinto de los tribunales a los nobles trabajos del campo. Aunque la mejor tierra del mundo les ofrezca todas las rique

-zas no está satisfecho en sus deseos mientras no obtienen un grado militar, un puesto en la hacienda pública, un oficio judicial o una orden honorífica" (63).

En el ámbito de la estructura política, los criollos propietarios de la riqueza territorial dominan las instituciones políticas locales, especialmente los Cabildos, cuyos cargos, vendibles y perpetuos, fueron heredables de padres a hijos, perpetuando así su preponderancia en dichas instituciones. Por otra parte, se ha estimado que la clase de terratenientes blancos, incluyendo criollos y peninsulares, estaba formada por unas 658 familias nucleares, las cuales venían a totalizar unas 4.048 personas, esto es, el equivalente a menos del 0,50% de la población venezolana a fines de la Colonia. (63) Es evidente que, por relaciones de parentesco, monopolización de las instituciones políticas locales y de la propiedad de la tierra, este sector integraba un grupo social oligárquico hermético y estratificado a su vez, si cabe, por lazos de familia. Desde el punto de vista de la dinámica sociocolonial, hacia la segunda mitad del siglo XVIII comienza un proceso de desarrollo de incipientes contradicciones que van a condicionar una estructura de diferenciación social en este grupo: se tratará de la aparición de las primeras fricciones entre criollos y peninsulares. Una contradicción importante será la necesidad de los primeros de colocar directamente en el exterior sus productos agropecuarios, pretensión que entra en conflicto con los segundos, es decir, con los intereses de los mercaderes importadores y el monopolio colonial. Se planteaba así, por la dinámica misma del grupo dominante de la sociedad colonial, una de las principales motivaciones de la emancipación política.

3) El nivel institucional.-

El análisis de la inserción de la dinámica socioeconómica en el nivel político-administrativo colonial arroja mucha luz sobre las características de aquél sistema y los elementos condicionantes de la evolución posterior, de sobremanera en el caso de Venezuela, donde éste nivel institucional germinal, pese a sufrir importantes reformas posteriormente, no va a dejar de gravitar en el curso de la historia polí-

-tica republicana, sobre todo si lo analizamos desde el punto de vista del proceso de territorialización. (64)

Conviene recordar, aunque sea brevemente, que el esquema político-administrativo de las Indias occidentales nos enfrenta con autoridades de designación directa o indirectamente metropolitana -virreyes, audiencias, gobernadores, regidores-, y otras de origen local -cabildos de españoles y de indios. Las Audiencias unen a sus funciones judiciales otras de control administrativo y aún ejecutivas; son las encargadas de promulgar nuevas normas originadas en la Corona, para lo cual se encuentran en comunicación directa con ésta a través del Consejo de Indias. Los Virreyes tienen funciones de administración, hacienda y defensa, que ejercen sobre territorios considerablemente extensos -tómese en cuenta que hasta principios del siglo XVIII hay sólo dos virreinos: México y Perú-; en este contexto, la delegación de autoridad es ineludible, aunque limitada, ya que no se la institucionaliza sino en muy pequeña medida. Por debajo del virrey, gobernadores y corregidores son administradores de distritos más reducidos, de designación regia en el primer caso, virreinal en el segundo. Los gobernadores suelen ser funcionarios de carrera; los corregidores, figuras de arraigo local, sin renta por el cargo que ocupan -obtenido mediante compra-, aunque resarcidos mediante el sistema de repartimiento. Los cabildos de españoles son instituciones municipales organizadas según el modelo metropolitano; dejan bien pronto de surgir de la elección de los vecinos para transformarse en cuerpos que se renuevan por cooptación o por venta. Tienen jurisdicción administrativa y de baja justicia sobre zonas relativamente amplias y a menudo escasamente urbanizadas. Los cabildos de indios, por el contrario, se crean sólo allí donde se da una población indígena densa, reflejando la tendencia de los colonizadores a delegar buena parte del control de los indígenas en una élite de origen prehispánico, a la que transforman en aliada y subordinada. Los complejos entrelazamientos de esta estructura se verifican por medios de control extraordinario: el caso de las visitas -funcionarios extraordinarios enviados desde la metrópoli para examinar y resolver situaciones especiales-; y las residencias -juicio de los funcionarios al terminar su actuación-.

Durante el siglo XVIII se va a asistir a un proceso de creación de nuevas unidades administrativas: dos nuevos virreinos, el de Nueva Granada, creado en 1717 -suprimido en 1724 y restablecido en

1739-, y el del Río de la Plata, creado en 1776; al mismo tiempo que se otorga mayor poder de decisión a las autoridades regionales dentro de los virreinos. En realidad, salvo disfuncionalidades obvias y has-intrínsecas a un proceso de reforma de este tipo, la intención última de la política de los Borbones es la de lograr un aparato administrativo sólidamente centralizado y controlado por la Corona. En este sentido, tal vez la más ambiciosa reforma se reflejó en la creación de las Intendencias de ejército y hacienda; tal hecho no hacía sino trasladar al mundo colonial una innovación previamente introducida en España en imitación del modelo francés. En Hispanoamérica, la creación de las Intendencias -que unifican atribuciones administrativas, financieras y militares antes dispersas- significa un paso adelante en la formación de un cuerpo administrativo integrado y dirigido desde la metrópoli y constituido en su mayoría por peninsulares. Hay que destacar igualmente la institución de los Consulados, orientados principalmente al fomento del comercio y la inversión de fondos en arreglo y construcción de caminos, en puertos y otras ayudas a la navegación; a la vez que financiaban instituciones de enseñanza técnica y reunían información y crítica sobre la situación económica local. Las reformas administrativas se extendieron además a la esfera militar, mediante modificaciones en el reclutamiento de los contingentes de soldados, ahora enganchados en la península y ya no reclutados predominantemente entre los criminales. (65)

En síntesis, el administrador o el burócrata colonial es el representante del establishment colonial. La administración colonial implica una teoría del imperio y unos códigos legales; pero lo cierto es que en la realidad el aparato político-administrativo colonial ibérico residía en una estructura de entrelazamiento del interés privado y los objetivos estatales a modo de legitimación de la conquista y la colonización. Las unidades administrativas coloniales -virreinos, capitanías generales, etc.,- actuaban bajo un concepto patrimonial (66) característico de la Monarquía española, y como un vasto sistema patrocinado por peninsulares y criollos. Si en un principio el control gubernamental es sólo nominal, mientras que el interés privado tiende a predominar en las actividades de conquista, con el paso del tiempo y las nuevas necesidades de poblamiento y colonización, se va a crear toda una superestructura política y burocrática, cuya cabeza es el virrey como representante del monarca y responsable final en América de toda la administra-

-ción. Junto a él, fuerzas compensadoras como los ya señalados cuerpos corporativos con jurisdicciones especiales, y la administración municipal residente en los cabildos, controlados progresivamente por la élite criolla, esto es, blancos españoles nacidos en América y descendientes de los primeros conquistadores. Todo este entramado estaba subordinado al Consejo de Indias domiciliado en España. No podemos olvidar que la autoridad eclesiástica juega un papel fundamental. Salvo notables excepciones, se produce una especie de simbiosis entre Iglesia católica, conquistador-colonizador y Estado en la práctica totalidad de los niveles de la sociedad. El cura viene colocado al lado del corregidor o alcalde mayor y es mantenido por diezmos y honorarios eclesiásticos, legitimando la jerarquía y el control desde el punto de vista de la fe. Las riquezas y los ingresos de la Iglesia colonial, al igual que lo sucedido en la metrópoli, la convierten en uno de los principales propietarios de tierras y bienes inmuebles. En el caso de Venezuela, hay que señalar que la Iglesia es un elemento importante en el proceso de acumulación relativa de una masa de capital usurario. La Iglesia cuenta siempre, y ello es un fenómeno general en la América colonial, con una renta constante incrementada anualmente, en forma de diezmos y primicias. Esta renta decimal -enriquecida por "obras pías", "capellanías", "Bienes de manos muertas"- era invertida en bienes inmuebles, esclavos, haciendas e incluso prestado a rédito al 15 y 20 por ciento (67). La Iglesia Catedral de Caracas, por ejemplo, se destacaba por ser una de las que mayor volumen de recursos manejaba. En Venezuela, el proceso de crecimiento de la renta decimal eclesiástica iba paralelo al crecimiento de la economía colonial en general: es a partir de 1738 cuando, al incrementarse los volúmenes de ésta última, la renta decimal de la Iglesia comienza a experimentar una línea ascendente. El profesor Brito Figueroa ha estimado que hacia 1810, en el momento de la ruptura formal del régimen colonial, el capital eclesiástico equivaldría a 32.355.896 pesos, con una renta anual de 1.617.794 pesos, por lo que "puede considerarse que en las últimas cuatro décadas del siglo XVIII la Iglesia recibió por concepto de diezmos entre catorce y quince millones de pesos" (68).

Se ha afirmado con razón que, desde la fundación de la Casa de Contratación de Sevilla en 1503, organismo rector de las cuestiones comerciales entre metrópoli y colonias, las instituciones establecidas para la administración colonial respondieron a la apremiante necesidad de estructurar una organización cuyos instrumentos legales y operacionales garantizaran el funcionamiento económico y la viabilidad de la relación

colonial. Las pretensiones de centralización administrativa ejercidas por España tendían a perfeccionarse a medida que se tomaba conciencia de la necesidad de un fortalecimiento institucional para hacer valer su dirección con eficacia. A ello corresponde el establecimiento de Virreynatos, y no por casualidad, en zonas estratégicas del Imperio, creando así una especie de "correa" institucional, suerte de conjunto organizacional interrelacionado (64). La política de los Borbones en el XVIII va a intentar una "nacionalización" -para emplear el término de los Stein (70)- de las economías interna y colonial, y no es casual que se comience por dar importancia a aquellas regiones antes desatendidas como Buenos Aires, Caracas y La Habana, mediante el fomento de las actividades agrícolas. Se trataría de una especie de "nacionalismo protoeconómico" (71) destinado a revigorizar las estructuras existentes en el gobierno, la economía y la sociedad coloniales; es decir, en el campo específico de lo institucional, una política de renovación orientada a crear un nuevo cuerpo de administradores, más adiestrados y convencidos por la idea del servicio al Estado, mejorando en este sentido la calidad de la jefatura. Lógicamente, las modificaciones emprendidas por los Borbones no intentaban sino una reformulación del pacto colonial, dirigida desde arriba, para el logro de una mayor eficacia y racionalidad del aparato institucional. (72)

En Venezuela, antes de las reformas del siglo XVIII, los Gobernadores habían sido los representantes directos del poder español y desde el primer momento habían cobrado singular importancia política. No obstante, esta significación va a quedar superada con la reforma del aparato político-administrativo emprendida por la nueva casa real española y, principalmente, por el Rey Carlos III. Las modificaciones se hicieron efectivas a través de varias instituciones, entre las cuales se destacaron por su importancia histórica, la Universidad de Caracas (1721), la misma Compañía Guipuzcoana (1728), la Intendencia de Ejército y Real Hacienda (1776), la Capitanía General de Venezuela (1777), la Real Audiencia (1786) y el Real Consulado de Caracas (1793) (). El Capitán General pasó a ser el jefe de todas las fuerzas y la Real Audiencia, como organismo corporativo de la administración de justicia y por cuanto cumplía funciones de gobierno, se constituyó en un organismo clave de la Colonia. Quedaba claro que la naturaleza del régimen colonial en lo político y administrativo se consolidaba con una fuerte connotación de carácter fiscal, aunque era también gobierno de jueces y poder mili-

-tar. El carácter militar del gobierno colonial estuvo agravado por la necesidad de proteger las costas, del contrabando y la piratería. Por lo demás, el sistema impositivo y el régimen hacendístico de la Corona en Venezuela, como en el resto del continente, era de una extraordinaria complejidad, por lo que el sistema de intendencia no obedece sino al propósito de centralizar los distintos recaudos fiscales, enmarañados como estaban en multitud de tasas y de cobros por los más disímiles conceptos.

Nos interesa, en este orden de ideas, ponernos en camino de dos instituciones -los Cabildos y el Real Consulado- de significación no cabe duda que excepcional en la dinámica política del período que nos ocupa. Los Ayuntamientos, Cabildos o Concejos Municipales, institución antigua en España y cuyo origen puede datarse en los tiempos del Imperio romano, aparecieron en América como entidad política fundamental de la comunidad local, avalada por la despoblación y la disgregación territorial. Se ha dicho que el municipio americano aparece como punto autónomo e inconexo con el resto del mapa administrativo, siendo incluso muchas veces el único poder eficaz (73). Su fuerza, en América, sin duda provino de la oligarquía criolla, la cual se refugió en él como palanca preautonómica e, incluso, como núcleo de resistencia. Es en este sentido que el Cabildo de Caracas ha sido llamado el "capitolio de la burguesía colonial venezolana" (74). Lo cierto es que los Cabildos lograron concentrar los intereses más poderosos que luego iban a influir más decisivamente en la historia venezolana y americana. Cabe afirmar que la escallada de estos grupos oligárquico-terratenientes criollos hacia formas más elevadas de poder político, tiene su plataforma básica en la institución municipal. En otros términos, como observa M. González Abreu, para los criollos, la utilización del Cabildo o Ayuntamiento colonial venía dada por la consideración del mismo como vehículo idóneo para institucionalizar la representación de la oligarquía terrateniente frente a la superestructura político-administrativa de la colonia. (75)

Al examinar la evolución de la institución municipal en España, J. Gabaldón Márquez considera que las prerrogativas y derechos conquistadas por las ciudades hispanas en el período de la Reconquista, echaron las bases de los núcleos matrices de las libertades modernas, al lograr principios tales como la igualdad ante la ley, la inviolabilidad del domicilio, una justicia propia, participación del ciudadano en la cosa pública, responsabilidad de los funcionarios públicos, todos ellos

coronados en una amplia facultad de petición ante el Rey (76). Los españoles trajeron a América la institución municipal, y así como en la reconquista fundaban o tomaban ciudades en regiones arrebatadas a los árabes, asimismo los conquistadores del Nuevo Mundo fundaron pueblos a todo lo largo de sus rutas hacia el interior del continente, dotándolos de sus respectivos cabildos. Pero la erección de estos cabildos, a imagen y semejanza de los existentes en España, encontraba en América -mientras que en la península decaían después de la derrota comunera de Villalar-, ya lejos de la autoridad real, bases para cobrar un nuevo impulso, constituyéndose en algunos casos como la máxima autoridad en ciudades, pueblos y villas donde, a causa de las dificultades de comunicación, no llegaba o no se sentía el poder de los virreyes o gobernadores del aparato administrativo colonial (77).

Los cabildos coloniales, formados por los regidores y alcaldes ordinarios, y presididos por el gobernador o su teniente, tenían como función esencial el gobierno económico y administrativo de la ciudad. Es importante señalar que los cabildos venezolanos conquistaron desde muy temprano poderes políticos, al quedar autorizados los alcaldes para el gobierno de los mismos en ausencia del gobernador. En efecto, don Sancho Briceño, procurador de los cabildos de la Provincia de Venezuela ante el Rey, obtuvo de éste una Real Cédula de 8 de diciembre de 1560, por la cual se facultaba a los alcaldes ordinarios de los cabildos a ejercer el gobierno político en las jurisdicciones de sus ciudades en ausencia del gobernador (78). En concreto, el Cabildo de Caracas, desde sus comienzos, adquirió significación en diversas actividades, principalmente en la dirección del gobierno económico de la ciudad, creciendo su radio de acción política a medida que se encargaba de los asuntos ciudadanos. Su papel en la formación de la clase terrateniente, y su vinculación recíproca con la misma, es cuestión esencial y suficientemente demostrada (79). Los primeros núcleos de grandes propietarios de la tierra, que comienzan a formarse a finales del siglo XVI y principios del XVII, en su mayoría descendientes de los primeros pobladores, eran beneficiarios de datas de tierras, la primera de las cuales la hizo el Cabildo de Caracas según testimonio de la sesión de fecha 8 de abril de 1568, con asistencia de Diego de Losada, fundador de la ciudad, quien proveyó de vastas tierras en propiedad a los primeros pobladores. De igual manera, por Real Cédula de 4 de abril de 1532 y la Ordenanza 58 de Población de Felipe II, de 25 de mayo de 1596, se repartirían las tierras con parecer

del Cabildo, con preferencia a los regidores. Muchos de los regidores, además de terratenientes, eran encomenderos, por lo que contaban con indios para trabajar sus tierras (30).

Por lo demás, a pesar de que la Real Cédula de 14 de septiembre de 1736 derogó el privilegio de los alcaldes de Caracas, de asumir la jefatura del cabildo en ausencia del gobernador, el sólo hecho de tener el poder y la facultad de hacerlo -la gestión más prolongada tuvo lugar entre 1674 y 1677- fue sin duda un estimulante para el ya aludido espíritu de autonomía política, en el sentido de saber gobernarse localmente y de no necesitar para ello la mano ductora de la metrópoli; es decir, una conciencia local que iba a aflorar con perfiles propios hacia la segunda mitad del siglo XVIII. La influencia de los criollos en el cabildo era ya un hecho a finales de dicho siglo, configurados, diríamos hoy, como una especie de "grupo de presión", dotado de cierta compactación en criterios y objetivos. El historiador C. Parra-Pérez nos da una descripción muy real de la relación oligarquía criolla-cabildos en la dinámica política de conjunto:

"Los ayuntamientos son el centro de la vida pública en la Colonia. Compuesto en su gran mayoría de criollos, el cabildo es el instrumento inmediato de éstos para ejercer un poder efectivo, suerte de tiranía doméstica a que sólo pone trabas la intervención de los agentes directos de la Corona. El cargo de regidor es venal y por consiguiente perpetuo, pero hay alcaldes de elección y alrededor de éstas se desarrollan actividades políticas de grande importancia (...) La historia política de la Colonia venezolana gira por decir así alrededor de las contiendas entre el ayuntamiento y el gobierno, cuya oposición se marca más y más en los últimos tiempos del régimen. Los criollos cabildantes, que pierden tiempo precioso en disputar sobre cuestiones de preeminencia y otras de igual cuantía, saben también defender contra el poder supremo lo esencial de las libertades municipales. En una provincia donde la oligarquía, dadas las condiciones sociales, es casi omnipotente, los agentes metropolitanos luchan porfiadamente para mantener su propia autoridad política; y en consecuencia, vienen a ser, a los ojos de las castas inferiores, campeones de la igualdad y en todo caso defensores naturales contra la opresión de nobles y burgueses. De ahí, en la época de la Revolución, la impopularidad de los oligarcas patriotas y la adhesión de las masas a la causa real." (31).

Cuestión que viene a unirse a la creación del Real Consulado de Caracas en 1793, cuyas ordenanzas habían sido redactadas por elementos locales agrupados en una Junta creada en 1785, integrada por diversas representaciones entre las cuales se destacaba una del Ayuntamiento

caraqueño. Resulta significativo, como hace notar Pedro M. Arcaya U., que en el primer Consulado nombrado por el Rey figuren, entre otros, el Conde de Tovar, Conde de San Javier, Feliciano Palacios y Sojo, Andrés Ibarra, Martín Jerez de Aristeguieta, Fernando Ascanio, Ignacio Gedler y Manuel Felipe Tovar, todos ellos criollos, siendo mayoría los agricultores o hacendados en relación a los comerciantes; lo cual demuestra una estrecha vinculación entre el Ayuntamiento y el Consulado, formados ambos por el mismo sector social de propietarios de la tierra, en una conexión que traduce criterios y objetivos similares (92).

Desde el punto de vista de su significación en el contexto colonial, M. Nunes Dias ha enfocado la institución del Consulado en el marco de la reformulación institucional ultramarina, planeada y ejecutada por los Borbones en Madrid, principalmente por Carlos III y Carlos IV. Según este autor, "El problema vital para Carlos IV consistía en mantener la seguridad de las conexiones con los diversos puertos marítimos de su Imperio americano. Sólo por la institución de Consulados en los centros considerados estratégicos, más que por el poder de su flota militar, o por el control político de las regiones geográficas de paso, podría conseguir la Corona mantener la continuidad de las relaciones económicas con sus dominios" (93). A ésta opinión sobre el significado de la institución consular en el marco del reformismo borbónico, habría que agregar la del prof. E. Arcila Farías, destacado estudiosos venezolano sobre estos temas, para quien "La intención que movió a los hombres de la España ilustrada de fines del siglo XVIII en lo tocante a la fundación de los cuerpos consulares, miraba menos a su ejercicio como tribunales mercantiles y menos aún a sus funciones como cabeza de los moribundos gremios, en relación con los objetivos más elevados y más en conformidad con los requerimientos de la época, de organismos promotores de una mayor actividad económica y de una nueva concepción del gobierno económico para América" (94).

Pero en el medio americano el cuerpo consular va a adquirir un nuevo papel, no previsto tal vez, en la motivación original que lo había creado. En este sentido, E. Arcila Farías, en el estudio introductorio al ya clásico libro El Real Consulado de Caracas (95), ha puesto de relieve un hecho que a su juicio no ha sido considerado suficientemente por la historiografía venezolana en torno al tema: con la creación del Consulado de Caracas, una gran parte de las funciones de gobierno no tocantes al Gobernador, a la Audiencia y al Intendente, pasaron a ma-

-nos de los criollos, quienes, por primera vez, van a ejercer una autoridad no ya municipal sino nacional, en el sentido de que comprendía la jurisdicción sobre la que años más tarde habría de erigirse la República venezolana. El Consulado vino a convertirse en un vasto campo de entrenamiento de los criollos para la administración del futuro nuevo Estado. Muchos de los hombres que figuraron al frente de aquél cuerpo, bien como funcionarios o como simples miembros de las asambleas de mercaderes y agricultores, fueron después primeras figuras en los años de la emancipación y de la vida republicana (96). "Permitir a los americanos influir en su propia felicidad", era la frase señalada por la Corona al crear los nuevos Consulados de América en el siglo XVIII, según se exponía en la Real Orden de 5 de septiembre de 1785, dirigida al Intendente de Caracas compartiendo las ideas de éste. En otras palabras,

"El Consulado proporciona a las clases influyentes de Caracas un instrumento de Gobierno como no lo habían tenido jamás, de manera que viene a representar un poder político tan poderoso como pudiera ser el del Gobernador o el del Intendente. En el caso venezolano esta circunstancia tiene una importancia muy especial, y es la de que contribuye a cohesionar bajo una autoridad caraqueña todas las provincias que, en lo militar y en lo económico y sólo desde una fecha muy reciente apenas, estaban sujetas al Capitán General y al Intendente de Caracas, autoridades metropolitanas. Es, pues, el primer bosquejo de gobierno nacional" (97).

Y es que el Consulado -al contrario del Gobernador, Intendente y Audiencia, funcionarios y componentes *nombrados* por el Rey- es elegido por los criollos en acto público, ampliando sus poderes más allá del ámbito tradicional de las municipalidades y, a su vez, arrebatando vastas atribuciones a aquéllos funcionarios y organismos de designación real. Así, no va a ser una casualidad el hecho de que, al producirse el movimiento emancipador, el Consulado, como organismo fundamentalmente criollo, se identifique con la Junta Suprema de Caracas y con el primer gobierno republicano, hasta el punto de que elevados personeros del Consulado colonial pasaron a ser altos representantes de los nuevos cuerpos gubernativos a partir de 1810, en calidad de asesores políticos y económicos. En este sentido, Arcila Farías ha observado una identidad de criterios y concurrencia de actitudes entre tres organismos, la Junta Suprema, el Ayuntamiento y el Consulado, en el momento germinal del nuevo Estado (98).

4) Dialéctica de la sociedad colonial venezolana.-

Muchos han creído ver el período colonial, tanto en el nivel americano como en el caso venezolano, bajo la óptica de una especie de "siesta colonial" en la que nunca pasó nada, o por lo menos, si algo pasaba no era para tenerlo en cuenta. Aquél período se caracterizaría, según esta visión, por tres largos siglos de paz que sólo turbarían las guerras independentistas. Pero nada más lejos de la realidad como esta apreciación: lo cierto es que la sociedad colonial tuvo sus conflictos y sus contradicciones, algunos de ellos de considerable gravedad, la suficiente como para otorgarles una importante entidad y una significación de gran peso histórico y social en la evolución posterior.

En este punto coincidimos plenamente con el historiador M.V. Magallanes, quien señala con razón que la historiografía venezolana "nos ha venido presentando la época colonial -y dentro de ella, incluso, la etapa inicial de la conquista- como un tiempo más o menos tranquilo, enmarcado en un típico determinismo, donde la vida transcurría de un modo apacible y sin sorpresas"; no obstante -continúa-, "esta visión idílica de nuestros primeros tiempos no concuerda exactamente con la realidad" (19). En base a este criterio, Magallanes ha distinguido una primera fase en la cual la resistencia es esencialmente indígena; un segundo período en que los conflictos se dan principalmente entre los ayuntamientos y los gobernadores; y un tercer período, que corresponde al siglo XVIII, donde habla de dos momentos, uno en el que el factor económico es el determinante -luchas contra la Compañía Guipuzcoana, rebeliones de negros e indios, levantamiento de los comuneros de los Andes, revueltas de los Llanos, etc.-; y otro en el cual el factor político adquiere primacía -movimiento autonomista de Gual y España, su blevación de la serranía de Coro, expediciones de Francisco de Miranda.

M.V. Magallanes -en su libro Luchas e insurrecciones en la Venezuela colonial- se ha ocupado prolijamente del estudio documentado de los conflictos durante los siglos coloniales, con una enumeración que quisiéramos transcribir y que ilustra la dinámica, no propiamente idílica, de la sociedad colonial: A) durante la conquista: primer enfrentamiento en Puerto Flechado (1499), venganza de los indios de Chiribidí (1519), reacción de los indios jirajaras y caquetíos (1532-1535),

revolución municipal de Coro (1533), resistencia de los indios jirajaras (1535-1628), sublevación de los indios zaparas (1558-1607), rebelión del Negro Miguel (1552), reacción de los timoto-cuicas (1557-1575), guerras del cacique Guaicaipuro (1560-1568), incursión de Aguirre y sus marañones (1561), venganza de los margariteños (1564), incursiones de los bucaneros (1565-1743), avance de los indios caribes (1572-y 1584), resistencia de los cumanagotos (1579), cimarrones de la Goajira (1583-1586), protesta de Caraballeda (1586-1590), levantamiento de los negros perleros (1603), sedición de Nirgüa (1628). B) durante la colonia: conflictos del Ayuntamiento de Caracas con los Gobernadores (1623-1725), motín de Fray Mauro y el Padre Sobremonte (1640-1654), cimarrones del Tuy (1650), acciones de los temibles otomacos (1652-1653), alzamiento de Carora (1671), los indios caribes contra las Misiones (1684, 1693; 1733-1735), conspiración de Barquisimeto (1705), alboroto de Guanare (1718), revuelta del negro Andresote (1730-1733), motín de San Felipe (1741), asonada del Tocuyo (1744), confabulación del esclavo Miguel Luen go (1747), conjura de los negros del Centro (1749), sublevación de Panagui re (1749-1751), invasión de los motilonos (1764-1777), partidas del Negro Guillermo (1771-1774), levantamiento de los comuneros de los Andes (1781), revuelta de los Llanos (1781-1789). C) movimientos pre-inde- pendentistas: insurrección de la serranía de Coro (1795), conjura de los indios de Jacura (1795), sedición de Gual y España (1797), alzamiento de Cariaco (1798), complot de Maracaibo (1799), expediciones de Miranda (1806), conspiración de los mantuanos (1808), revolución emancipadora (1810). (90)

La lista desde luego es abrumadora. No obstante, en una enumeración de acontecimientos conviene jerarquizarlos según una interpretación que destaque, a nuestro juicio, las principales líneas de la dialéctica de las luchas y conflictos del período colonial venezolano. Sin pretender ser exhaustivos, es interesante comenzar por la relación entre esclavitud y rebelión. Y es en este sentido en el que las cimarronerías -fuga y levantamiento de los negros esclavos- y los cumbes -comunidades de esclavos que huían de la severa disciplina de los amos-, estudiados por M. Acosta Saignes desde un punto de vista antropológico, en su excelente obra Vida de los esclavos negros en Venezuela, (41), pueden ser consideradas manifestaciones, no tanto de una conciencia de liberación organizada, como de significativas actitudes de evasión y alzamiento frente a una existencia social intolerable. Acosta Saignes comienza por señalar

que "el régimen de producción esclavista implica que el esclavo es una cosa, una simple propiedad, un medio de producción comprable y vendible como cualquier otro instrumento" (93), aunque, como se ha puesto de relieve, se trate de un régimen contestado, en el sentido de que los seres humanos esclavizados se rebelan contra el mismo casi desde el comienzo, huyen y protestan contra su sometimiento. Al referirse al momento histórico comprendido entre la segunda parte del siglo XVIII y la primera del XIX, observa que no se puede hablar de una estructura social única desde el siglo XVI hasta el XVIII, sin considerar la instauración de la encomienda, sus transformaciones, su reemplazo por un régimen esclavista que llegó a madurar, las modificaciones sufridas por éste y las formas de organización económico-social existentes alrededor de 1800. Después de hacer un análisis de la conocida obra de Sergio Bagú (94), inclinado a hablar por la existencia de un capitalismo colonial, y de un texto de Rodolfo Puiggrós (95), partidario más bien al contrario de la tipificación feudal de la colonización americana, concluye Acosta Saignes que una caracterización general de la sociedad colonial venezolana alrededor de 1800 conduce a la afirmación de que el régimen económico-social predominante era el esclavista, haciendo la salvedad de que algunos sectores progresivos, ante las limitaciones productivas, trataban de encontrar soluciones cediendo tierras a esclavos, pardos y en general gente libre, sometida a un régimen de renta tributo y renta trabajo; en otras palabras, que "dentro del régimen esclavista fundamental, surgían componentes de tipo feudal" (95). Así, para la Venezuela de 1800 habría dos clases fundamentales: los propietarios de los medios de producción (tierras instrumentos y esclavos) y los trabajadores esclavizados, con un sector intermedio, los pardos, como clase en/de transición (96).

En fin, uno de los ejemplos más interesantes de contestación del régimen esclavista es el estudiado por Pedro M. Arcaya, en base a una investigación de los documentos del Archivo del Registro Principal de Caracas, sobre el proceso que se inició en la ciudad de Coro por orden de la Real Audiencia y que se continuó en Caracas por ese mismo tribunal, en relación al origen, desarrollo y término de la insurrección de los negros de la serranía de Coro. Dicha insurrección de la población esclava y de color, acaudillada por José Leonardo Chirino, hijo de negro esclavo y de india libre, en mayo de 1795, proclamaba el establecimiento de la "ley de los franceses", la República, la libertad de los

esclavos y la supresión de los impuestos de alcabalas, lo cual es ilustrativo de un fermento ideológico, si bien no maduro totalmente, por lo menos interiorizado hasta el punto de provocar elementos de significación en el seno de la población esclava y de color de esta región (38).

Otros trabajos de carácter monográfico ponen de relieve la multiplicidad de los conflictos coloniales, según sea el tipo de enfrentamiento y sus motivaciones. Así, por ejemplo, F. Morales Padrón, el conocido historiador español, en su Rebelión contra la Compañía de Caracas (39) realiza una investigación detallada sobre la rebelión del canario-venezolano Juan Francisco de León contra la Compañía Guipuzcoana de Caracas en 1749-1752, haciendo resaltar las razones que llevaron a la protesta -la crítica al monopolio comercial- y el paralelismo del sector popular y de la nobleza territorial, que coinciden pero por diversas y hasta opuestas razones. En realidad, la actitud de la nobleza territorial se caracteriza por su ambivalencia y más bien lo que la define, pensamos nosotros, es su intento de instrumentalizar el conflicto. No se puede hablar todavía, en la justa mitad del siglo XVIII, de un levantamiento orientado al cambio político; se trata más bien, como en otros casos, de una contestación, ésta vez al régimen comercial de la Guipuzcoana, protesta que por lo demás es suficiente para ilustrar la dinámica alcanzada por el desarrollo de las fuerzas sociales y productivas, que con posterioridad van a adquirir un perfil más definido (40).

Similar caso, en muchos sentidos, de ambigüedad e instrumentalización de los enfrentamientos por parte de la oligarquía criolla, encontramos en la rebelión de los comuneros venezolanos en 1781. El estudio de Carlos E. Muñoz Orta, Los comuneros de Venezuela. Una rebelión popular de pre-independencia (41), basado en un examen exhaustivo de la documentación existente en el Archivo General de Indias de Sevilla, el Archivo General de la Nación de Caracas y el Archivo Histórico Nacional de Bogotá, contiene una pormenorizada descripción de la rebelión comunera andina que, en protesta contra la Intendencia de Ejército y Real Hacienda y sus funcionarios, conmovió en aquél año a la Provincia de Maracaibo y tuvo repercusión en casi toda la Capitanía General de Venezuela. Es indudable que en la rebelión comunera venezolana, movimiento de carácter popular y de reacción contra la política colonial española del siglo XVIII en Venezuela, sirven de estímulo la rebelión de Túpac Amará en el virreinato del Perú (1780) y la de los comuneros del

Socorro en el virreinato de Nueva Granada (1779) (14). Estos sucesos ponían de relieve, a fines del XVIII, elementos muy significativos de la contestación al régimen colonial. En el caso de los comuneros venezolanos, aunque la gente común o de la plebe -campesinos, principalmente-, y la clase de ricos propietarios territoriales, coincidieron al ver relacionados sus intereses, ambas, recelosas entre sí, operaron en direcciones paralelas. Los últimos, en previsión de que la rebelión llegara a convertirse en una mayor amenaza a sus intereses y privilegios, se distanciaron de la misma o adoptaron en todo caso una actitud ambivalente, siendo contados los casos de ricos propietarios que se adhirieron con lealtad al movimiento comunero. Lo que sí hizo éste sector, tal es el ejemplo de Caracas, fue aprovechar la insurgencia de la Provincia de Maracaibo para presionar a las autoridades gubernamentales coloniales a la rebaja y cese de muchos impuestos que le afectaban (14).

Si atendemos a los aspectos ideológicos de la ~~cont~~estación, vemos con más claridad cómo no se trataba ya sólo del tema del desarrollo de la vida material, sino también que se verificaba un cambio en la mentalidad política, esto es, la crítica del régimen colonial era hecha desde unos determinados conceptos, nuevos, que habían podido penetrar pese a todos los "cordones sanitarios".⁽¹⁵⁾ De ahí que, refiriéndose el profesor Pedro Grases a esta magnitud del proceso ideológico, haya podido afirmar que,

"El cambio de la vida colonial a la vida independiente en Hispanoamérica no radica únicamente en los hechos políticos y bélicos que determinan el paso del poder público, de manos de la metrópoli a los nuevos gobernantes de las nacionalidades constituidas en Estado a comienzos del siglo XIX. Mucho más profundo que el traspaso del dominio, es la conversión de los principios actuantes en las antiguas sociedades coloniales. Los renovadores conceptos filosófico-políticos del 'liberalismo' habrán de constituir el nervio y la razón de conducta de los hombres públicos" (16).

En efecto, en el mundo de las ideas el credo liberal impregnaba la conciencia de la época, un momento histórico-ideológico de posibilidades que buscaba la concreción en aquella síntesis doctrinal. Tal había sido el caso de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamados por la Revolución francesa y con filiación directa en la Declaración de Derechos norteamericana, el Bill of Rights británico y la filosofía europea de los siglos XVII y XVIII.

Eran manifestaciones de una doctrina que imbuía poderosamente a todo el mundo occidental a fines del siglo XVIII: el credo del liberalismo convertido en orientación ideológica de aquél tiempo histórico (105).

Las ideas del liberalismo, simbolizadas en los Derechos del Hombre, iban a tener en Hispanoamérica una importante vía de penetración a través de la Capitanía General de Venezuela, y lo que es interesante, precisamente a través de ^{desterrados (106)} españoles. En 1797, unos reos de Estado, Juan B. Picornell, Manuel Cortés Campomanes, Sebastián Andrés, José Lax, condenados por su participación en la conspiración republicana de San Blas en España, habían sido encarcelados en el puerto de La Guaira, donde poco después entraron en contacto con José María España, Manuel Gual y otros más, nativos del país. La conjunción conspirativa hispano-venezolana, conocida por la historiografía como Conspiración de Gual y España, cuyo mentor ideológico era sin duda el mismo Juan B. Picornell (107), va a dar lugar a la elaboración de unos escritos, destacándose entre los mismos, las "Ordenanzas", la alocución "Habitantes libres de la América Española" y, en especial, los "Derechos del Hombre y del ciudadano con varias máximas republicanas y un discurso preliminar dirigido a los americanos", textos que han sido estudiados al detalle por P. Grasés (108). Interesa destacar que el proyecto de cuarenta y cuatro ordenanzas sintetizaba el plan de operaciones conducente a la revolución, al establecimiento de un régimen político fundado en la igualdad natural de todos los habitantes, la abolición de la esclavitud, el reparto de tierras a los indios, la derogación de los tributos, la libertad de comercio y cultivo y otras medidas que venían a imponer una línea de ruptura con el orden imperante, hasta el punto de que los mantuanos de Caracas forman frente junto al gobierno colonial para impedir la insurrección (109). Los textos de 1797 llegarán a repercutir en la propia Constitución venezolana de 1819; además, si consideramos que las Constituciones de Venezuela son las primeras de Hispanoamérica, adelantadas en el tiempo a las que fueron sucediéndose en otras Repúblicas, el antecedente de 1797 adquiere mayor relieve como reflejo de la transformación de la mentalidad político-jurídica en el continente (110).

Claro está, la nobleza criolla, factor propulsor de la emancipación política años más tarde, se opone a la conspiración por razones de clase y no tanto ideológicas: era evidente que temas como la abolición de la esclavitud o el reparto de tierras no entraban dentro

de su propio proyecto político, demasiado exclusivista para poder compartirlo con otros que no estuvieran en su órbita. Como dice F. Brito Figueroa: "La posición de la oligarquía caraqueña es un elemento más para comprender los intereses de clase en juego. Los terratenientes, lesionados en sus intereses por la dominación colonial, aspiraban a liberarse, pero estaban más cerca de la condición de clase de los dominadores extranjeros que de las categorías sociales oprimidas. Conspiraban secretamente por la independencia, pero dirigida por ellos, limitada a sus intereses, y no por gente 'baja y servil', que por su propio origen conduciría la lucha hasta una tormenta que podía lesionar la base material del orden: la institución de la esclavitud, la servidumbre y la propiedad de la tierra" (11). Quedaba claro que la conciencia autonomista de los mantuanos, semioculta bajo una falsa adhesión a las autoridades españolas, se inspiraba en un ideal de independencia política orientado al mantenimiento de sus fueros y con atribuciones privativas en la administración del nuevo orden.

Un análisis del papel de la nobleza territorial venezolana en el conjunto de la dinámica social colonial puede aclarar y explicar sus tomas de posición. A pesar de la pausada evolución, durante la Colonia se verificó un proceso de diferenciación e integración de los estamentos sociales que en ella convivían. Como anota Carlos Irazábal desde el punto de vista de la dialéctica, la clase de los latifundistas se formó primero cuantitativamente, como clase en sí; luego, el choque de los intereses de esa clase en sí contra los intereses de otros sectores sociales contribuyeron a la forja de su conciencia de clase, de su función y de su papel histórico, haciéndose una clase para sí (12). Sobre el latifundio, los mantuanos, segregados del aparato burocrático en manos de los españoles peninsulares, controlaron en cambio los cabildos, convirtiéndolos en órganos cerrados y exclusivos de sus aspiraciones económico políticas. Para el momento de la insurrección de Juan Francisco de León contra la Compañía Guipuzcoana, la nobleza territorial ya es capaz de instrumentarla hábilmente; aunque la insurrección de León fue vencida, los derechos y prerrogativas de la Compañía fueron limitados, garantizándose de nuevo a los cosecheros criollos la posibilidad de comerciar con México, ordenándose también la creación de un comité con representación del Cabildo de Caracas, encargado de fijar cada año el precio justo del cacao y otros productos agrícolas (13).

Con el tiempo, la oligarquía territorial criolla no sólo conso-

-lida su influencia política en la institución municipal, sino que trata de ampliar su injerencia a otros niveles de la administración. En una conocida carta del Intendente Abalos al Monarca español, de 4 de abril de 1780, se decía:

"En la sustancia ha sido temeraria su pretensión //del Cabildo de Caracas//, y su empeño en sostenerla, obstinado. El modo de manejarse, explicarse y formar las respectivas representaciones y acuerdos que produjeron el Ayuntamiento y Procurador en este expediente se ha desviado muy mucho de la regularidad y moderación que debía caracterizar la sinceridad de sus procedimientos; aquel, con la representación del Cuerpo, se ha entrometido a contradecir, censurar y reprobar los arbitrios y medidas que me ha dictado la prudencia ... Su espíritu discolo, enemigo de la paz y lleno de ambición por autoridad que no le compete, en todo quiere que se cuente con él, y tener parte bajo el especioso pretexto y voluntario erróneo concepto de que los negocios e intereses del público están puestos a su cuidado; se han aprovechado del nombre de éste y del de la comunidad para desfogar los injustos presentimientos que tal vez han contraído como particulares para insultar a nuestros ministros y esparcir especies perjudiciales en el pueblo para conmover, conspirar y apandillar a éste, infundiéndole que está desatendido y despreciado; y en fin, no perdona medio de manifestar los sentimientos de que está poseído, y ha dado prueba en todos los tiempos" (14).

Pero el cabildo no sólo es instrumento político de la nobleza territorial frente a las autoridades reales, sino también frente a las aspiraciones de la masa laboriosa de gente de color. Desde temprano, diversas disposiciones impidieron a comerciantes, artesanos y gente de origen popular el acceso a los ayuntamientos: el dominio de la oligarquía criolla rayaba en la discriminación racial; y en este sentido es muy conocida la protesta estampada en el Acta del Ayuntamiento de Caracas, de 14 de abril de 1796, contra la Real Cédula de Gracias al Sacar. El Monarca español, urgido de fondos, dictó una cédula por la cual se vendían ciertas gracias a pardos y mestizos, de acuerdo con una tarifa proporcionada a la cantidad de sangre africana que tuvieran sus compradores. Dicha cédula dispensaba de la calidad de pardos y quinterones, y hacía blancos legalmente a los que no lo eran. Los criollos blancos se indignaron y el ayuntamiento caraqueño elevó una encendida protesta ante la Corona, en la cual entre otras cosas se afirmaba que,

"El tránsito de los pardos a la calidad de blancos es espantoso

"... a los vecinos y naturales de América, porque sólo ellos conocen desde que nacen, o por el transcurso de muchos años de trato en ella, la inmensa distancia que separa a los blancos y pardos, la ventaja y superioridad de aquellos y la bajeza y subordinación de estos..."

Estallarían, señalaba el documento,

"disensiones y turbaciones en las respectivas clases de la república por la dispensa de calidad que se les conceda a esas gentes bajas que componen la mayor parte de las poblaciones, y son por su natural soberbia, ambiciosas de los honores y de igualarse con los blancos, a pesar de aquella clase inferior en que les colocó el autor de la naturaleza" (15).

La oligarquía territorial pretendía, pues, mantenerse equidistante, tanto de las masas populares como de las autoridades metropolitanas. En este punto, su estrategia se nos presenta con bastante claridad. Los indicadores que reflejaban un resquebrajamiento del nexo colonial habían hecho acto de presencia en la segunda parte del siglo XVIII. La complejidad del proceso no impide observar el hecho de que se distingan con evidencia las posiciones frente al monopolio, como contradicción, diríamos esencia, de dicho proceso. Distanciados de la masa popular, los propietarios territoriales se esfuerzan por crear perfiles propios en lo económico frente a la política metropolitana. Las razones de este progresivo avance tenían indudablemente bases muy reales en la estructura social y económica, como dueños de las tierras, las cosechas y los esclavos; participando de una parte de los beneficios de la economía colonial, poseían recursos suficientes como para ejercer presión sobre los mecanismos monopolistas. En otras palabras, pese a su rigidez y aparente inmodificabilidad, la dominación colonial había engendrado las fuerzas de su propia erosión, "... la metrópoli fomentaba la colonia pero para su propio enriquecimiento; a su vez, no obstante, la colonia fue desarrollando sus propios intereses y sensibilidades ..." (16) La evidencia de un conflicto entre nobleza territorial y comerciantes peninsulares iba a tener consecuencias en el nivel político. En palabras de Carlos Irazábal, "La colisión de intereses económicos trascendió naturalmente a la esfera política. ¿Quién mantenía el régimen legal que favorecía a los comerciantes con mengua de los hacendados criollos? España. Por tanto, la lucha entre comer-

-ciantes españoles y agricultores nativos había de plantearse también, como en efecto de planteó, entre metrópoli y colonias" (197).

- NOTAS AL CAPITULO PRIMERO -

- (1) Ramón Escovar Salom, Evolución política de Venezuela, (Caracas: Ed. Monte Avila, 1975), p. 57
- (2) Marcos Kaplan, Formación del Estado nacional en América Latina, (Buenos Aires: Ed. Amorrortu, 1976).
- (3) Marcos Kaplan, ob.cit., pp. 59 y ss. Cf., Pierre Vilar, Historia de España (París: Librairie Espagnole, 1975), pp. 33 y ss. Sobre la revolución comunera; José Antonio Maravall, Las comunidades de Castilla. Una primera revolución moderna (Madrid: Ediciones de la Revista de Occidente, 1963).
- (4) De alguna manera y en los sectores clave (minero, p.ej.), las formas capitalistas -según M. Kaplan- terminarían por prevalecer sobre las feudales: la empresa colonial española vendría a ser parte de la expansión capitalista mundial. Kaplan, ob.cit., pp. 65 y ss.
- (5) Stanley J. y Barbara H. Stein, La herencia colonial de América Latina (México: Ed. Siglo XXI, 1975. 8a. edición, trad. de A. Licona).
- (6) S.J. y B.H. Stein, ob.cit., pp. 13-22
- (7) Seguimos a Tulio Halperín Donghi, Historia Contemporánea de América Latina (Madrid: Alianza Editorial, 1970. 2a. edición), capítulo inicial referente al legado colonial.
- (8) Ignacio Sotelo, Sociología de América Latina. Estructuras y problemas, (Madrid: Editorial Tecnos, 1972), pp. 51-58
- (9) Halperín Donghi, ob. cit., p. 71
- (10) Stein, La herencia colonial de América Latina, p. 30
- (11) Durante la Reconquista, los moros sometidos habían constituido una valiosa fuerza de trabajo; asimismo, los esclavos indios iban a proporcionar una fuerza de trabajo barata que resarciera los sacrificios financieros de las expediciones. La política indígena de la monarquía española reflejará un constante vaivén en el problema de la esclavitud indígena, muestra de las tremendas presiones de diverso tipo sobre el poder político. Diversas polémicas tuvieron lugar, entre teólogos y juristas, alrededor de la cuestión. La polémica sobre la juridicidad de la guerra y esclavización de los indios dió origen a una solución de compromiso: el Requerimiento; se trataba de un escrito leído a los indios por un intérprete al comienzo de una empresa de conquista, que contenía explicaciones sobre la creación del mundo, proclamaba la donación del Papa de todas las islas y tierra firme de mar océano

a los Reyes españoles y exhortaba a los aborígenes al sometimiento del nuevo señor y de la religión cristiana, y si no había sometimiento, se les amenazaba con la guerra y la esclavización. Las Casas tachó los requerimientos de injustos y absurdos. En un intento de limitar los abusos, Carlos V, en 1530, prohibió esclavizar a los indios, aún cuando hubiesen sido tomados prisioneros en una guerra justa. No obstante, conquistadores y colonizadores, viéndose perjudicados en lo económico, iniciaron una serie de protestas que culminaron en la decisión de la Corona, en 1534, que revocó la interdicción de la esclavitud. Pero el movimiento antiesclavista volvía a manifestarse cuando en 1541 se prohibió a los españoles en América la compra de esclavos indios, con lo cual, desde el punto de vista legal, la trata quedó muy limitada. Una ley dictada en 1542 proclamó que nadie podía esclavizar a los indios ni adquirirlos por compra. Las "Nuevas Leyes" (1542) recogieron esta disposición. Sin embargo, "la esclavitud de los indios no desapareció en Hispanoamérica sino paulatinamente, por la manumisión de esclavos o su muerte". A ello hay que agregar la admisión de excepciones a la prohibición general: esclavitud de indios antropófagos (pijaos y caribes), o demasiado belicosos (los araucanos). Para el siglo XVIII, la esclavitud indígena había cesado, mientras que la de los negros siguió siendo una institución legalmente reconocida. Hay que destacar - en el contexto de la economía minera - una forma tristemente célebre de explotación de la mano de obra india: la Mita. La mita la tomaron los españoles de las grandes culturas indígenas, donde consistía en la adjudicación coactiva de fuerzas laborales al inca, siendo conocida ya en el período preincaico. Tras la conquista, se utilizó la institución para proporcionar al encomendero las necesarias prestaciones indígenas. Pero donde la mita alcanzó importancia fue en la explotación de las ricas minas de plata del Alto Perú. Esta movilización laboral forzada generó una gran oposición, hasta el punto de que el virrey Conde de Lemos estudió la posibilidad de abolir la mita y sustituirla por un sistema de trabajo asalariado libre. El proceso culminó en la decisión de Felipe V (1719), que abolía la mita en las minas de Potosí. Pero el decreto permaneció en los archivos, sin despachar. No fueron sino las Cortes de Cádiz las que dispusieron la abolición definitiva de la mita, aunque para éste momento de hecho había ya desaparecido. Para estas precisiones, seguimos a Richard Konetzke, América Latina, II: La época colonial. (Madrid: Ed. Siglo XXI, 1971. Historia Universal, Vol. 22), pp. 153-160 y pp. 184-189.

- (12) Stein, ob.cit., p. 43. Cabe afirmar que el ingenio constituía de hecho una especie de subsector de la economía europea, en particular, de la economía holandesa, ya que los portugueses eran meros intermediarios: los holandeses reexportaban el azúcar brasileño, que con frecuencia era embarcado en buques holandeses, procesada en refinerías holandesas y distribuida en diversas zonas de Europa por comerciantes holandeses: Stein, ob.cit., pp. 44-45.
- (13) Stein, ob.cit., pp. 57-58
- (14) Ibid., p. 59

- (15) Alberto J. Pla, La burguesía nacional en América Latina, (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1975).
- (16) Sobre el modo de producción asiático: Maurice Godelier, Esquema de evolución de las sociedades (Madrid: Miguel Castellote Ed., 1974. 3a. edición), pp. 19 y ss.
- (17) Alberto J. Pla, ob.cit., pp. 11-19.
- (18) Ignacio Sotelo, Sociología de América Latina ..., edición citada.
- (19) Sotelo, ob. cit., pp. 39-40.
- (20) José Gil Portoul, Historia Constitucional de Venezuela, (Caracas, 1942), vol. I, p. 3. Citado por Juan Oropesa, 4 siglos de historia venezolana. Desde el Descubrimiento hasta la Revolución de Octubre, (Caracas: Ed. Centauro, 1973. 2a. edición), p. 29.
- (21) Federico Brito Figueroa, Historia económica y social de Venezuela, (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela, 1975), vol. I, p. 37.
- (22) Según Brito Figueroa, las comunidades indígenas venezolanas "se encontraban en estadios de desarrollo social, en los cuales la dirección del grupo es ejercida por la representación supervisada de la colectividad, que elige a los jefes de paz o guerra y señala a individuos, especializados para dirigir las operaciones de orden económico" (I, p. 47). Rituales y actividades mágico-religiosas constituían una base efectiva para el ejercicio de la representación colectiva de la comunidad, aunque estos individuos-representantes no formaban una categoría política como tal de gobierno y de aparato de coerción estatal. Para M. Briceño Iragorri, "Nuestros indios, o los indios que vivían en el actual territorio nacional, podríamos catalogarlos como pertenecientes a las tribus más atrasadas de América. Los restos arqueológicos hallados en huacas y sepulcros que indican un verdadero desarrollo cultural, no corresponden a la población hallada por los conquistadores; unos pertenecen a pueblos por entonces desaparecidos, otros a tribus ya en estado de decadencia; y los más sólo sirven para demostrar el radio de las migraciones culturales que, partiendo de las regiones realmente avanzadas, se expandieron por territorio americano": Mario Briceño Iragorri, Tapices de Historia Patria, (Caracas: Tipografía Garrido, 1942), p. 19; Citado por Carlos D'Ascoli, Esquema histórico-económico de Venezuela. Del Mito del Dorado a la Economía del Café, (Caracas: Banco Central de Venezuela, 1970), p. 35, nota 13. Acerca de la población precolombina en Venezuela, puede verse: Carlos Siso, La formación del pueblo venezolano. Estudios sociológicos (Madrid: Editorial García Enciso, 1951. 2 volúmenes), vol. I, pp. 35 y ss.
- (23) Carlos D'Ascoli, Esquema histórico-económico de Venezuela ..., pp. 15 y ss. Cf., C.H. Haring: El comercio y la navegación entre España y las Indias Occidentales (París-Brujas: Ed. de Desclée de Brouwer, 1939).
- (24) D'Ascoli, ob.cit., p. 43. Si las primeras incursiones obedecieron al deseo de encontrar oro, los expedicionarios fallaron en su búsqueda.

-queda ya que Venezuela tenía pocas minas en las partes accesibles para aquél momento. El surgimiento del mito del "Dorado" y de la misteriosa ciudad de "Manoa" es posiblemente una invención de los indios con el fin de alejar a los conquistadores: D'Ascoli, *ob. cit.*, p. 45.

- (25) Brito Figueroa, *ob.cit.*, vol.I, p. 66.
- (26) *Ibid.*, p. 70. La producción anual de ganado, por ejemplo, en 1720 se estima ascendía a 56.900 unidades; para 1800-1810, la riqueza ganadera estaba representada por 1.200.000 vacunos, 180.000 caballos, 90.000 mulos y multitud de carneros y ovejas: Brito Figueroa, vol.I, pp. 72, 74 y 75 (cálculos aproximados).
- (27) Manuel González Abreu, Dependencia colonial venezolana (Caracas: Publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-Universidad Central de Venezuela, 1974), p. 52.
- (28) Juan de Castellanos, Elogio de las Indias Orientales; citado por M. González Abreu, *ob. cit.*, p. 53. El decaimiento de la plata potosina, por el lento agotamiento de las vetas, iba a permitir una modificación del cuadro general de la economía colonial y de la propia división internacional del trabajo. El oro y la plata metálicas del polo de crecimiento de México y la actual Bolivia, en buena medida se los sustituye por productos también primarios, pero agrícolas, obtenidos mediante el empleo de mano de obra esclava. Las fuerzas humanas se desplazarán hacia actividades de tipo agropecuario: la decadencia de los polos de crecimiento minero da lugar al desarrollo de economías de plantación en otras áreas geográficas del Imperio, concretamente, la jurisdicción de Nueva Granada y la capitanía general de Venezuela. Al finalizar el siglo XVIII, han quedado ya conformados los centros económicos coloniales de Buenos Aires, México, Nueva Granada (Colombia y Venezuela) y el Alto Perú (Bolivia); los que precisamente van a tener mayor significación histórica en la lucha por la autonomía política.
- (29) Carlos D'Ascoli, Esquema histórico-económico de Venezuela ..., edición citada, pp. 112-113.
- (30) Carlos Siso, La formación del pueblo venezolano. Estudios sociológicos (Madrid: Ed. García Enciso, 1951. 2 volúmenes), en especial, vol.I, pp. 472 y ss. (sobre el elemento étnico negro). C. D'Ascoli (*ob.cit.*, pp. 115-116) destaca que, en realidad, los negros provenían, en su gran mayoría, de la costa occidental del continente africano, con el golfo de Guinea como centro y prolongaciones hacia el Sudán al norte y el Congo y Angola hacia el sur, esto es, una región comprendida aproximadamente entre los 20 grados de latitud norte y los 20 grados de latitud sur. Se trataba de enormes zonas africanas pobladas por naciones y subrazas del gran tronco negro, con niveles de cultura superiores a los pueblos aborígenes de América exceptuando los imperios azteca e inca. Presentaban complejos grados de organización política, cultural, económica y religiosa; pequeñas monarquías de "gobierno despótico" en las que se definía un sistema religioso de tendencias monoteístas frecuentes y una cultura plástica y musical de gran influencia posterior en el medio americano.

- (31) González Abreu, ob. cit., pp. 77-78. El comercio de esclavos con venía a unos y a otros y para fines del siglo XVI era ya induda- ble su carácter lucrativo: "Los tratantes entendían que las ganancias considerables derivadas de aquel intercambio permitían incre- mentar sus capitales mediante reinversiones sucesivas en las eco- nomías de sus respectivos centros. Para España, por otra parte, las operaciones de compra-venta de negros resultaban convenientes por dos razones fundamentales: de un lado, la provisión de mano de obra en sus posesiones de ultramar aumentaba el índice de ren- tabilidad territorial como consecuencia de la renovación de la fuerza de trabajo, y del otro, la obtención de ingresos extraor- dinarios estaba asegurada a través de los gravámenes fijados a las introducciones y por medio de una política de participación -especie de regalía- por ser la Corona la que otorgaba los llama- dos 'asientos' o derecho a colocar negros en sus dependencias": González Abreu, ob.cit., p. 65.
- (32) Brito Figueroa, ob.cit., vol.I, p. 97.
- (33) La polémica por el llamado justo título provino de la crítica de los teólogos de Salamanca, basados en las tesis de la escolástica medieval (Santo Tomás de Aquino): la formación de Estados surgía de la razón natural, siendo legítimo el poder estatal de los prin- cipes paganos; como el derecho natural era válido para todos los pueblos, los exploradores europeos no debían desposeer a los in- dios de su autoridad y de sus posesiones. Mientras Francisco de Vi- toria impugnaba el argumento según el cual el primer descubrimien- to concedía un derecho de propiedad sobre países habitados, Juan Ginés de Sepúlveda justificaba la guerra contra los indios, esto es, la necesidad del sometimiento de éstos por la fuerza de las armas como vía para la predicación del Evangelio. La escolástica salmantina iba a propugnar, frente a sus contrarios, la idea de un ius gentium, o derecho válido para todas las naciones: el orbe entero era una res pública y todos los pueblos estaban en relación recíproca, ya que una comunidad mundial abarcaba al género humano en su totalidad, sin distinciones o menoscabo de unos frente a otros. Un tratamiento más amplio de éste problema en Richard Konetzke: América Latina, II. La época colonial (Madrid, Ed. Siglo XXI, 1971) pp. 20-33. Puede verse, muy especialmente, Antonio Truyol y Serra, Les principes du Droit Public chez Francisco de Vitoria, (Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1946).
- No hay que olvidar tampoco la figura y la obra de Bartolomé de Las Casas. Diremos, muy brevemente, que Las Casas expuso en dos memo- riales las causas del aniquilamiento de los aborígenes y los medios para protegerlos, demandando la abolición de los repartimientos y la fundación de colonias integradas por indios libres que trabaja- ran para sí mismos. Propuso también la fundación de asentamientos campesinos mixtos de españoles e indios, mediante la emigración de familias pobres de la población rural, al mismo tiempo que creía se producirían numerosos casamientos mixtos, con lo que el proble- ma de los aborígenes se resolvería por vía de la fusión racial y la mezcla de poblaciones. Cf., Konetzke, ob. cit., pp. 165-168. Héctor Malavé Mata, en Formación histórica del antidesarrollo de Venezuela (La Habana: Ediciones Casa de las Américas-Instituto Cu- bano del Libro, 1974), habla de las ideas de Las Casas y de los teólogos de Salamanca como "la crisis de la conciencia inicial" del colonialismo hispano (p. 31).

- (34) D'Ascoli, ob.cit., pp. 60-61. Puede verse también Konetzke, ob. cit., pp. 163-165 y pp. 170-181. (sobre los repartimientos y la evolución de la encomienda).
- (35) Para Silvio Zavala, en su obra ya clásica La Encomienda Indiana (Madrid: Imprenta Helénica, 1935. Publicación de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de Estudios Históricos, Sección Hispanoamericana. -hay edición posterior-), no hay una relación mecánica y directa entre encomienda y hacienda en América colonial. La encomienda, que es fundamentalmente un reparto de indios, debe ser completada -para ser hacienda- con la merced de tierras. Es en ese momento cuando surge más nítidamente lo que llamaríamos el "hacendismo", que deviene en sinónimo de latifundio, de latifundismo. Para el caso venezolano, la obra fundamental sigue siendo la de Eduardo Arcila Fariás, El régimen de la encomienda en Venezuela, (Caracas: Instituto de Investigaciones de la Facultad de Economía-Universidad Central de Venezuela, 1966. 2a. edición. La 1a. edición publicada en Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1957). En esta obra, para los aspectos jurídicos de la encomienda, pp. 133 y ss.; el trabajo indígena, pp. 223 y ss.; y la relación entre encomienda y propiedad territorial, pp. 283 y ss.
- (36) Con la composición estamos en presencia de una figura jurídica que desempeña importante papel en la formación de la propiedad territorial agraria: "Partiendo de una merced de tierra, generalmente de límites imprecisos, o de la simple ocupación y sin documento legal alguno, los poseedores procedían a extender sus propiedades a costa de las tierras reservadas a las comunidades indígenas, de los terrenos realengos o de los ejidos y baldíos"; los amos de la tierra, a través del soborno y la intimidación, presionaban para que "escribanos y componedores de tierras les otorgaran los títulos de propiedad o procedieran a la ampliación de los originales mediante el pago de los derechos de composición": Brito Figueroa, ob.cit., vol.I, p. 87.
- (37) Recordemos que las leyes de Burgos (1512) y de Valladolid (1513) dotan a la encomienda de su fisonomía jurídica, cuando adquiere su carácter de institución aparentemente destinada a proteger, cristianizar y civilizar al indio a cambio de que éste pague al encomendero un tributo en dinero, que al principio fue legalmente sustituible por servicios personales y que luego continuó siendo en la práctica a pesar de expresas y reiteradas prohibiciones. Cf., Konetzke, pp. 170-181 (supra, nota 34).
- (38) "Cualquiera que se dejase guiar por el deslumbrante espectáculo de la Legislación de Indias, en lo referente a los derechos y a la protección que el indio le merecía al Legislador, cuando cambió radicalmente el concepto religioso y jurídico en que al principio se le tenía, tendrá que concluir que pocos seres habrá habido sobre la tierra tan libres y protegidos como aquél. Pero lo cierto era muy otro, como ya se notó, y entre la condición del negro esclavo y la del indio, había apenas diferencias muy tenues. El régimen de las encomiendas, aún cuando en su espíritu y en su letra tendía a la más absoluta protección y defensa de los indígenas, en la práctica fue inhumana y brutal explotación, que con-

-virtió a aquellos infelices en clase inferior, oprimida y explotada. Y era que esas leyes tan generosas, en apariencia, reflejaban nada más, y ello en un sentido puramente teórico, las ideas humanitarias y filantrópicas de Fray Bartolomé de Las Casas y del Padre Vitoria, principalmente, sin ser la expresión de ningún cambio que se hubiere realizado en la psicología del indio, ni mucho menos en la clase secularmente interesada en su sometimiento y explotación, la cual siguió guiándose por la teoría opresiva de Sepúlveda": José Santiago Rodríguez, Contribución al estudio de la Guerra Federal en Venezuela (Caracas: Editorial "Elite"-Lit. y Tip. Vargas, 1933. 2 volúmenes), vol.I, p. 21; citado por C. D'Ascoli, ob.cit., pp. 109-110.

- (39) "El cacao se transformó rápidamente en el principal fruto del comercio exterior y la importancia que adquirió en Europa permitió a Venezuela colocarse al frente de las colonias agrícolas de España, participando como país exportador en el mercado capitalista mundial": Brito Figueroa, ob. cit., vol.I, p. 101.
- (40) D'Ascoli, ob.cit., p. 137. Para H. Malavé Mata, la dinámica de esta estructura productiva estaría caracterizada por varios polos: propiedad territorial latifundista - estatuto social de la producción - esclavitud - insuficiencia de formación de capital - estancamiento económico. Se trataría de una estructura capitalista primaria de base colonial: relaciones de producción semi-capitalistas con predominio de la mano de obra esclava sobre la servil. Este autor insiste en el sistema colonial venezolano como un capitalismo inmaduro de tipo periférico, es decir, un sistema que existía como prolongación periférica del capitalismo europeo de dominación colonial, de estructura híbrida basada en la concentración de la propiedad territorial agraria, con economía predominantemente de plantación vinculada al comercio exterior; en otras palabras, capitalismo colonial de plantación. Cf., Héctor Malavé Mata, Formación histórica del antidesarrollo de Venezuela (La Habana, Ed. Casa de las Américas, 1974), especialmente, pp. 39-42 y pp. 68-73.
- (41) Brito Figueroa, Historia económica y social de Venezuela, vol.I, pp. 102 y 105 (para cifras).
- (42) Ibid., p. 103.
- (43) D'Ascoli, Esquema histórico-económico ..., edición citada, pp. 157-158.
- (44) Esta repercusión en el proceso de acumulación primitiva del capital de dichas instituciones comerciales sobre formaciones económico-sociales precapitalistas, es puesto de relieve por Brito Figueroa, ob.cit., vol.I, p. 118.
- (45) Sobre estas puntualizaciones, Ramón de Basterra, Los Navíos de la Ilustración. Una empresa del siglo XVIII, (Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1970), pp. 50 y ss.
- (46) Basterra, ob.cit., p. 51. Puede consultarse a José Estornés Lasa, La Real Compañía Guipuzcoana de Navegación de Caracas, (Buenos Aires: Editorial Vasca 'Ekin', 1948), especialmente, sobre las ba-

-ses constitutivas de la Compañía, pp. 15 y ss.; y sobre su tráfico comercial, pp. 29 y ss. También el libro de Vicente de Ameza-ga Aresti, El elemento vasco en el siglo XVIII venezolano (Caracas: Ediciones del Cuatricentenario-Tip. Vargas, 1966), donde se encuen-tra un minucioso estudio acerca del aporte del elemento vasco en la vida colonial venezolana de dicho siglo, principalmente centrado vía Compañía Guipuzcoana.

- (47) Ronald D. Hussey, en su documentado libro sobre este tema, La Compañía de Caracas. 1728-1784, (Caracas: Banco Central de Venezuela, 1962. trad. de L. Landaeta), se pregunta por la importancia de la Compañía y su papel dinamizador de las fuerzas sociales y producti-vas, y responde: "Su carácter fundamental y muchos pormenores de su carrera parecen ahora haber sido erróneamente interpretados. Si embargo, ella desempeñó papel principal en el desarrollo del Imperio español y de su sistema económico. El crecimiento de Venezuela no puede ser atribuido a la sola Compañía; pero subsiste el hecho de que ella encontró a Venezuela reducida a la situación de una pr-vincia agobiada por la pobreza, inútil para España y estancada en sus propios confines; que la dejó próspera, no más que provechosa-mente descontentadiza, revalorizada para el Imperio, y bogando en la plena corriente del comercio exterior" (Hussey, ob.cit., p. 31 Los subrayados son nuestros).
- (48) D'Ascoli, ob.cit., p. 179. Cf., Hussey, ob.cit., pp. 127 y ss (so-bre la rebelión de Juan Francisco de León contra la Compañía y sub siguiente reforma de la misma).
- (49) González Abreu, Dependencia colonial venezolana, edición citada, p. 117. Cf., Eduardo Arcila Farías, Economía colonial de Venezuela (México: Fondo de Cultura Económica, 1946).
- (50) Antonio Arellano Moreno, Orígenes de la Economía Venezolana (Méxi-co: Imprenta Nuevo Mundo, 1947), pp. 300-301. También, Eduardo Ar-cila Farías, esta vez en Comercio entre Venezuela y México en los siglos XVII y XVIII (México: Fondo de Cultura Económica, 1950), muestra la violenta caída de los precios del cacao en el mercado de Caracas durante los primeros veinte años de la Compañía Guipuz-coana.
- (51) Juan Oropesa, 4 siglos de historia venezolana (Caracas: Ed. Centau-ro, 1973. 2a.ed.), p. 43.
- (52) Brito Figueroa, ob.cit., vol.I, p. 123. El subrayado es nuestro.
- (53) Este último punto atenuado -sólo en cierto sentido- por el estable-cimiento de las misiones religiosas en la segunda mitad del siglo XVII, las cuales, a diferencia de las encomiendas, intentaron com-binar las actividades económico-productivas con algunas formas de trabajo y de reminiscencias colectivistas propias de algunas comu-nidades indígenas prehispánicas. En otro sentido, las misiones reli-giosas desempeñarían función pobladora en los llanos y contribu-yeron de alguna manera a modificar la fisonomía demográfica de a-quellas regiones.
- (54) Brito Figueroa, I, p. 133.
- (55) *Ibid.*, p. 140.

- (56) Ibid., p. 141.
- (57) Brito Figueroa, I, p. 150.
- (58) Ibid., pp. 154-155. (para las anteriores cifras)
- (59) Ibid., estimaciones en p. 156. Sin temor a adelantarnos, interesa destacar que la evolución político-territorial está ligada al proceso de poblamiento a través de una serie de etapas definidas: Provincia de Margarita (1525, depende de la Audiencia de Santo Domingo), Provincia de Caracas o Venezuela (1528, idem), Provincia de Nueva Andalucía (1568, id.), Provincia de Guayana (1762), por citar sólo las demarcaciones más significativas. Una evolución que culminará en la Real cédula de 8 de septiembre de 1777 por la que se crea la Capitanía General de Venezuela y que coloca bajo una misma dirección política, civil y militar a las Provincias de Caracas, Cumaná, Guayana, Maracaibo e Islas de Margarita y Trinidad.
- (60) Según estimaciones de Brito Figueroa, ob.cit., I, p. 160.
- (61) Ibid., p. 164.
- (62) Francisco Depons, Viaje a la Parte Oriental de Tierra Firme, Caracas, 1930; citado por Brito Figueroa, p. 170. "Los descendientes de los primeros pobladores y conquistadores heredaron el privilegio de la tierra; se operó el fenómeno de la concentración de la propiedad en pocas manos y el de su continuidad hereditaria" (...) "La nobleza colonial, cuyas grandes propiedades producían con la valorización de la tierra pingües rentas, podía vivir ociosamente en Caracas y en las principales ciudades, y a veces en Europa, ~~an-~~ ^{dejando} sus títulos nobiliarios en medio de la general admiración de una sociedad que puso todo su colorido vital en extrañas cuestiones de procedimiento y ceremonial, en sospechosas preocupaciones de jerarquía, y en lentos, pero elaborados cálculos políticos": Ramón Escovar Salom, Evolución política de Venezuela (Caracas: Ed. Monte Avila, 1975. 3a. ed.), pp. 51-52.
- (63) Brito Figueroa, ob.cit., I, p. 171.
- (64) Escovar Salom, ob.cit., pp. 29 y ss. (ver nota 59 de este capítulo). En el nivel jurídico, por ejemplo, "La Legislación de Indias fue la fuente inmediata del derecho colonial y la República conservó su estructura hasta 1870, aproximadamente, momento en que casi todos los países de América comenzaron la codificación, siguiendo las tendencias centralizadoras de la época. La recopilación de 1680, el derecho castellano y las Partidas fueron supletorias" : Escovar Salom, ob.cit., p. 38.
- (65) Tulio Halperín Donghi, Historia Contemporánea de América Latina, (Madrid: Alianza Editorial, 1970. 2a.ed.), capítulo inicial referido al legado colonial.
- (66) S.J. y B.H. Stein, La herencia colonial de América Latina, edición citada, pp. 69 y ss.
- (67) Brito Figueroa, I, p. 111.
- (68) Ibid., p. 114. "Aún antes de que los misioneros se hicieran

cargo de la ocupación española en el interior, el brazo secular de la Iglesia había construido un gran poder y prestigio en las áreas ya ocupadas en la montaña y la costa. No solamente dominaba en materia eclesiástica, sino que monopolizaba la educación. Y, a medida que la Iglesia comenzaba a acumular tierras, ejercía también un considerable poder económico. Además, su influencia política se acentuaba por la frecuente práctica real de designar clérigos para altos cargos de gobierno": Edwin Lieuwen, Venezuela (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1964. Trad. de R. Jiménez), p. 36.

- (69) González Abreu, ob.cit., p. 106.
- (70) Stein, ob.cit., p. 84.
- (71) Ibid., p. 85.
- (72) Sobre el impacto de esta política en España: Jean Sarrailh, La España ilustrada en la segunda mitad del siglo XVIII (México: Fondo de Cultura Económica, 1957. Trad. de A. Alatorre); y Richard Herr, España y la Revolución del siglo XVIII (Madrid: Editorial Aguilar, 1973. Trad. del inglés por E. Fernández M.).
- (73) Escovar Salom, ob.cit., p. 43.
- (74) Ibid., p. 44.
- (75) González Abreu, ob.cit., p. 138.
- (76) Joaquín Gabaldón Márquez, El Municipio, Raíz de la República (Caracas: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1961), p. 34.
- (77) Pedro M. Arcaya U., El Cabildo de Caracas (Caracas: Ediciones del Cuatricentenario-Editorial Arte, 1965), pp. 20-22.
- (78) Arcaya, ob.cit., p. 31. A falta de disposiciones legales que precisen con exactitud las atribuciones de los cabildos coloniales, Pedro M. Arcaya U. enumera las de administración de ejidos y bienes propios; policía de la ciudad; trazado y limpieza de calles y plazas; ornato público; pesas y medidas; acueductos, contribuciones, etc.; desde 1548 se les otorgó el derecho a emitir ordenanzas sobre asuntos locales; actuaban como tribunales de apelación de las sentencias dictadas por las justicias ordinarias de primera instancia. En sus primeros tiempos, los cabildos tenían la facultad de elegir los oficios concejiles -alguaciles, escribanos, mayordomos y fieles ejecutores- pero luego algunos de éstos se convirtieron en cargos venales. Por Real Cédula de 1 de noviembre de 1591 se hicieron vendibles para la Provincia de Venezuela la mayoría de los oficios concejiles; lo que sí conservaron los cabildos americanos fue la facultad de elegir a sus alcaldes ordinarios. Es obvio que la venalidad de algunos cargos municipales, además de constituir un medio de abastecimiento del fisco real, abría también la posibilidad de acceder a ellos, por compra, de personas económicamente influyentes en sus respectivas localidades. Cf., Arcaya U., ob.cit., pp. 32-33.
- (79) Cf., Federico Brito Figueroa, Estructura Económica de Venezuela colonial (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1963), en es-

-pecial el capítulo correspondiente a los orígenes de la propiedad agraria en los Valles de Caracas.

- (80) El mismo gobernador Juan de Pimentel, en un informe de 1578 al Rey, señalaba que de los sesenta vecinos que había en Caracas, cuarenta eran encomenderos. Cf., Arcaya U., El Cabildo de Caracas, edición citada, p. 61.
- (81) Caracciolo Parra-Pérez, Historia de la Primera República de Venezuela (Caracas: Tipografía Americana, 1939. 2 volúmenes), vol. I, p. IX. Del mismo autor, puede verse El régimen español en Venezuela. Estudio histórico (Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1962a.ed.), en especial sobre los aspectos institucionales, principalmente Cap. XII: "Los poderes públicos de la Colonia", pp. 305 y ss y Cap. XIII: "La administración colonial", pp. 323 y ss.; igualmente, de ésta obra resulta interesante el apartado "Indicaciones sobre el estado del Imperio español de América a fines del siglo XVI que es, en realidad, una conferencia leída por el Dr. Parra-Pérez en el Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad de París, en el segundo trimestre de 1954. (pp. 81 y ss.)
- (82) Arcaya U., ob.cit., pp. 121-122.
- (83) Manuel Nunes Días, El Real Consulado de Caracas (1793-1810) (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1971. Serie "Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela", volumen 106. Trad. del portugués por J. Tello), p. XXIV de la Introducción. El autor analiza la cuestión del reformismo modernizador de los Borbones y examina la situación española en el siglo XVIII en pp. 93 y ss. De igual manera, sobre la estructura del Consulado de Caracas, pp. 197 y ss.
- (84) Eduardo Arcila Farías (Int. y Comp.), El Real Consulado de Caracas (Caracas: Instituto de Estudios Hispanoamericanos-Facultad de Humanidades y Educación- Universidad Central de Venezuela, 1957), p. 21.
- (85) Arcila Farías, ob.cit., pp. 10 y ss.
- (86) Cronológicamente, el Consulado de Caracas (1793) fue el tercero en América colonial -después de los de México y Lima (1603 y 1614, respectivamente) pensados según el modelo tradicional sevillano-; inmediatamente le siguieron el de Buenos Aires (1794), con jurisdicción sobre todo el virreinato de la Plata; el de Cartagena de Indias (1795), con jurisdicción a todo el virreinato de Nueva Granada (a excepción de las provincias de Quito y Popayán); el de Veracruz (1795) y el de Santiago de Chile ése mismo año; siguieron los de Guatemala, La Habana, Guadalajara y Manila. Al terminar el siglo XVIII, había en América once Consulados: Arcila Farías, ob.cit., pp. 12-13. Cf., J. M. Ots Capdequí, El Estado Español en Las Indias (México: Fondo de Cultura Económica, 1946).
- (87) Arcila Farías, ob.cit., p. 31.
- (88) Ibid., pp. 32-33 y 46.
- (89) Manuel Vicente Magallanes, Luchas e insurrecciones en la Venezue-

- la colonial (Caracas: Editorial Tiempo Nuevo, 1972), p. 7.
- (90) Magallanes, ob.cit., pp. 11-155.
- (91) Miguel Acosta Saignes, Vida de los esclavos negros en Venezuela (Caracas: Ediciones Hespérides, 1967. Prol. de Roger Bastide).
- (92) Acosta Saignes, ob.cit., p. 297. Para la procedencia del componente africano en Venezuela, pp. 121 y ss., y el régimen esclavista, pp. 297 y ss.
- (93) Sergio Bagú, Estructura social de la Colonia. Ensayo de historia comparada de América Latina (Buenos Aires: Editorial "El Ateneo", 1952).
- (94) Rodolfo Puiggrós, De la Colonia a la Revolución (Buenos Aires: Editorial Carlos Pérez, 1969. Colección "Nuevo Pasado". varias ediciones, citamos la quinta edición ampliada).
- (95) Acosta Saignes, ob.cit., p. 335.
- (96) Ibid., pp. 335-336.
- (97) Pedro Manuel Arcaya, Insurrección de los negros de la serranía de Coro (Caracas: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1949. Pub. No. 7), pp. 34-38. En realidad, se trata del discurso de recepción del Dr. Pedro M. Arcaya en la Academia venezolana de la Historia, el 11 de diciembre de 1910; publicado también en el libro, del mismo autor, Estudios de sociología venezolana (Madrid: Editorial América, s.f., Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociales, volumen X), pp. 159 y ss.
- (98) Francisco Morales Padrón, Rebelión contra la Compañía de Caracas (Sevilla: Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1955).
- (99) Para los acontecimientos, gestación, desarrollo y final de la rebelión, Morales Padrón, ob.cit., principalmente pp. 35-60 y 77-142, una relación de fuentes utilizadas, algunas de ellas inéditas, en pp. 143-144.
- (100) Carlos E. Muñoz Oraa, Los comuneros de Venezuela. Una rebelión popular de pre-independencia (Mérida: Facultad de Humanidades y Educación-Universidad de los Andes, 1971).
- (101) Cf., Francisco Posada: El movimiento revolucionario de los comuneros (México: Editorial Siglo XXI, 1971. Colección "Mínima", 41) y Daniel Valcárcel: La rebelión de Tupac Amará (Lima: Editorial Universo, 1970. 3a.ed.).
- (102) Muñoz Oraa, ob.cit., pp. 157-158. En las conclusiones de su trabajo, Muñoz Oraa señala que "Un observador tan agudo de la sociedad venezolana del siglo XVIII, como lo fue el Intendente José de Abalos, dejó escrito su convencimiento, probado por los hechos tres décadas más tarde, que aquellos sucesos de la Provincia de Maracaibo y su repercusión en la Capitanía General, unidos a los del Perú y Nueva Granada, evidenciaban la existencia de condicio-

-nes proclives a la independencia. Señaló que sólo faltaban líderes y algunos otros elementos para conseguir los hispano-americanos cuanto por aquel entonces estaban a punto de lograr los colonos de la América del Norte": Muñoz Orta, p. 190.

- (103) Ramón de Basterra, en Los Navíos de la Ilustración, ha querido averiguar la razón por la cual los orígenes de la libertad de América no se producen, como sería lógico esperar, en las cabezas culturales de los grandes virreynatos -especialmente México y Perú-, sino en la Capitanía General de Venezuela, de rango administrativo secundario. La tesis de Basterra es la de que la Compañía Guipuzcoana vendría a actuar como transmisora de las ideas enciclopedistas, a través de grandes familias de origen vascongado que arraigan en Venezuela hacia 1760. Parte de la hipótesis de que el ~~rol~~ esencial de aquélla consistió en el papel difusor de las nuevas ideas en el asentamiento venezolano: "Adherido a sus alas veleras, va un polen espiritual, el Enciclopedismo"; más aún, "A esta visita periódica de las naves pirenaicas, a esta abeja mercante que trae los preludios del liberalismo, concedemos virtud de fecundar espíritus en Venezuela" (Basterra, ob.cit., p. 42). Más adelante, "Si el negocio marítimo que titula estas hojas no ve la luz del sol, la revolución americana hubiera acontecido fiel a sí misma en sus grandes trazos, pero hubiera estado falta de un elemento esencial: no hubiera tenido, según tiene, una dirección venezolana" (p. 93). Y agrega: "En el siglo XVIII traza Venezuela la línea del proceso mental que le apartará de la rancia España. Dilátase el proceso racionalista, que origina la progresión del cortejo americano, hacia sendas noveles, en tanto que la antigua cabecera imperial, España, permanece en la senda de los usos tradicionales" (p. 273). Por otra parte, opina C. Parra-Pérez (Historia de la Primera República de Venezuela: Caracas, Tipografía Americana, 1939. 2 volúmenes) que, de hecho, la Inquisición no tuvo la importancia que el tópico le atribuye en relación con las nuevas ideas: "A medida que el país progresaba materialmente y multiplicaba sus contactos con el extranjero, formábase un grupo intelectual, no sólo instruido en disciplinas de humanismo y de filosofía moderna, que propagaba intensamente la Universidad de Caracas, sino también conocedor de los problemas científicos y políticos de la época. Era tal grupo lector ávido de los libros que la Inquisición hartó negligente dejaba pasar entre sus mallas con idéntica facilidad a la que para burlar la aduana tenían las mercaderías de contrabando, pues apenas fue, en Venezuela, inofensivo espantajo el Santo Oficio. La cultura política y literaria de los 'intelectuales' caraqueños, fuesen clérigos o laicos, impresionaba favorablemente a los extranjeros que visitaban la ciudad, Humboldt, Ségur o Daune. Por sus teólogos, filósofos y abogados, la Universidad dará formas a la Revolución y el movimiento de la oligarquía contra España tomará carácter jurídico y semblante nacional": Parra-Pérez, ob.cit., vol.I, p. XIV de la Introducción.
- (104) Pedro Grases, La conspiración de Gual y España y el ideario de la Independencia (Caracas: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1949. Publ. No. 6), p. 11.
- (105) Resulta útil Mario Rodríguez, La revolución americana de 1776 y el mundo hispánico. Ensayos y Documentos (Madrid: Editorial

- Tecnos, 1976). Cf., el ya clásico libro de Harold Laski, El Liberalismo Europeo (México: Fondo de Cultura Económica, 1953. Trad. castellana, 2a. ed. Colección "Breviarios"); igualmente, André Vachet, La ideología liberal (Madrid: Editorial Fundamentos, 1972. 2 volúmenes).
- (106) Para el contexto español: Antonio Elorza, La ideología liberal en la Ilustración Española (Madrid: Editorial Tecnos, 1970). Del mismo autor (recop. y present.), Pan y Toros y otros papeles sediciosos de fines del siglo XVIII (Madrid: Editorial Ayuso, 1971).
- (107) Cf., Casto Fulgencio López, Juan Bautista Picornell y la conspiración de Gual y España. Narración documentada de la re-revolución de Independencia venezolana (Caracas: Editorial Nueva z,
- (108) Pedro Grases, La conspiración de Gual y España y el ideario de la Independencia, edición citada.
- (109) Malavé Mata, Formación histórica del antidesarrollo de Venezuela, edición citada, pp. 84 y ss., del Cap.IV: "Crisis y ruptura de la dependencia colonial" (pp. 77 y ss.).
- (110) Grases, ob.cit., p. 80. Los textos de 1797 serían el punto de partida básico de la legislación doctrinal de derecho público en Tierra Firme. Para Grases, la conspiración de Gual y España es el intento de liberación más serio en Hispanoamérica antes de las expediciones de Miranda en 1806. Salvador de Madariaga ha escrito que "Esta conspiración es el primer intento verdaderamente radical e igualitario con que nos encontramos en Hispano-América; y existen fuertes razones para pensar que al menos en parte se debió esta novedad a la influencia de los españoles republicanos que habían traído al continente las ideas revolucionarias y democráticas de Francia por vía de la francmasonería española": Salvador de Madariaga, Cuadro Histórico de las Indias, Buenos Aires, 1945, p. 843; citado por Grases, ob.cit., p. 27, nota 2.
- (111) Federico Brito Figueroa, Ensayos de historia social venezolana (Caracas: Publicaciones de la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, 1960), p. 199; citado por Malavé Mata, ob.cit., pp. 79-80.
- (112) Carlos Irazábal, Hacia la Democracia. Contribución al estudio de la historia económico-político-social de Venezuela (Caracas: José Agustín Catalá, Editor-Ed. Centauro, 1974. 3a. ed. Primera edición en México, 1939), p. 28.
- (113) Irazábal, ob.cit., p. 38.
- (114) Intendencia de Ejército y Real Hacienda, Tomo VIII: Archivo Nacional, Caracas; citado por Irazábal, pp. 40-42 del capítulo sobre "Las luchas económicas de la nobleza territorial venezolana", pp. 25 y ss.
- (115) Recogemos las frases textuales del documento de las citadas por Juan Oropesa, 4 siglos de historia venezolana. Desde el Descubrimiento hasta la Revolución de Octubre (Caracas: Ed. Centauro, 1977 pp. 52-53. Cf., Carlos Irazábal, ob.cit., capítulo sobre "Las lu-

-chas políticas de la nobleza territorial venezolana", pp. 55 y ss., en especial, pp. 58-62.

- (116) Eugene Genovese, Esclavitud y Capitalismo (Barcelona: Editorial Ariel, 1971. Trad. Cast.), p. 43; Citado por González Abreu, Dependencia colonial venezolana, ed.cit., p. 137.
- (117) Carlos Irazábal, en su libro Venezuela esclava y feudal. Episodios de la historia de Venezuela (Ensayos de interpretación dialéctica) (Caracas: José Agustín Catalá, ed., 1974. 2a. ed. Ed. Centauro), p. 28.
-

164

- C A P I T U L O S E G U N D O -

" RUPTURA POLITICA DEL NEXO COLONIAL Y

FORMACION DEL ESTADO REPUBLICANO "

1) Disolución del pacto colonial.-

El proceso que conduce a la autonomía política no puede ser visto, hace ya tiempo que dejó de serlo, bajo la óptica de una sucesión de hechos militares y de acciones épicas de unos determinados héroes. Tal visión, basada en un patriotismo mal entendido, ha dado lugar a serias deformaciones de la acción emancipadora, además de que ha impedido ver la realidad subyacente en lo social de tal proceso. Es innecesario insistir que el examen de la independencia de los países hispanoamericanos como una cuestión simplemente bélica, se cae por su propio peso.

Conviene empezar planteándonos el problema de los límites cronológicos de la época emancipadora, ya que los años de guerra, considerados como período estricto, no nos permiten comprobar los cambios ocurridos y las consecuencias de esos cambios en el proceso político-social que configura el siglo XIX y sus características estructuras políticas. En este sentido, es cierto que si ampliamos el alcance de nuestra visión histórica con la inclusión de los años postreros del reinado de Carlos IV y los tiempos inmediatos a la batalla de Ayacucho (1825), se nos hará mucho más evidente la diferencia entre el principio y el fin del período. Desde este punto de vista, las guerras de independencia, junto con las otras guerras de consolidación republicana posteriores, podrían considerarse, como señala Charles C. Griffin, como aspectos militares de una transformación de Hispanoamérica en la que, de una civilización colonial hispánica, modificada naturalmente por influencias autóctonas, se pasa a una civilización hispanoamericana autónoma, criolla, en la que los moldes originales ibéricos ceden en muchos casos a las nuevas influencias de la Europa occidental y, en algunos aspectos, de los Estados Unidos (4).

Si examinamos la cuestión desde la idea de que el proceso de ruptura del nexo colonial empieza mucho antes y termina mucho después de los hechos propiamente bélicos, podemos ver cómo todo el edificio colonial entraba ya en rápida disolución a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Las reformas político-administrativas de los Borbones no habían resuelto en realidad los problemas fundamentales de la América española: los síntomas de malestar continuaron y en algunos casos se hicieron más agudos, sobre todo a partir de 1790, como hemos puesto de mani-

-fiesto al final del capítulo anterior. Si bien es cierto que las novedades de la Francia revolucionaria empezaban a interesar en América colonial y eran fermentos ideológicos evidentes, la crisis de la independencia va a ser el desenlace de una degradación del poder español y de un alejamiento de los vínculos entre metrópoli y colonias. En rigor, la crisis, gestada ya con anterioridad, va a tener su detonante, su punto de partida, en la propia península: la invasión napoleónica y el subsiguiente cambio de dinastía significó un serio golpe al marco institucional de la Monarquía española. Lógicamente, en medio de éste naufragio, se encontraban unos puntos reales de disidencia que ni la veneración por el rey cautivo, ni la fe en un nuevo orden español surgido de las Cortes constituyentes de Cádiz, eran hechos capaces de aglutinar unas voluntades en constante tensión. Más aún, el posterior derrumbe de la España antinapoleónica iba a proporcionar a la América española una nueva oportunidad para definirse ante la crisis del poder metropolitano.(4)

Existió sin duda una interacción entre los acontecimientos que se producían en España y los cambios observados en las colonias americanas. La administración borbónica había querido reformular el pacto colonial aplicando una versión selectiva y conservadora del Iluminismo, sintetizándola en un plan de reformas empíricas dentro del orden existente, en el contexto de un absolutismo ilustrado de mayor contenido secular. Pero lo cierto es que para muchos intereses establecidos de la colonia, estas innovaciones liberalizantes resultaban insatisfactorias; así, por ejemplo, lo esencial del monopolio subsistía, con lo que las aspiraciones de los acaudalados criollos se sensibilizaban progresivamente. Había también las influencias externas provenientes del proceso general "euroatlántico" del siglo XVIII, especialmente en lo referente a países como Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, en sus distintos modelos de democracias aristocráticas-o-parlamentarias y de liberalismo económico (3). En el último caso, era indudable que la revolución norteamericana de 1776 proporcionaba un ejemplo de experiencia histórica ciertamente exitosa; por lo demás, la influencia de Francia en el plano de las ideas se hacía evidente e impactaba en profundidad a los elementos ilustrados de la élite criolla de las ciudades.

Si la invasión napoleónica de la metrópoli actuó como motor desencadenante del movimiento emancipador, el intento posterior de Fernando VII, repuesto en el trono, de aplastar incondicionalmente el movimiento americano, generó un fenómeno de radicalización progresiva en éste: se

produce una consolidación del colectivo autonomista hacia la dirección independentista. Pero lo más importante es que el proceso emancipador es un movimiento más elitista que popular. Promovido fundamentalmente por la élite criolla urbana, constituye más una revolución política que un cambio en las estructuras socioeconómicas heredadas de la Colonia. El conflicto adquiere características de guerra civil, en el cual se pasa de una vaga lealtad a la monarquía hispánica, a la voluntad explícita de la independencia política total (4). La revolución tiene por centro al Cabildo, que es el centro estratégico de la supremacía de las élites criollas (5). Y es que, en efecto, la emancipación consiste primordialmente y en última instancia, en "una rebelión de élites y grupos colonizadores de origen español contra el gobierno y las clases dominantes y monopolistas de la metrópoli" (6). La élite criolla hará promesas a las masas de mestizos e indios, quienes en posteriores etapas del movimiento serán sus aliados en la lucha, pero las promesas hechas no serán cumplidas en su totalidad. De ahí que las estructuras socioeconómicas pasen casi intactas a los nuevos Estados nacionales. De otro lado, la independencia formal va a ir acompañada de la desintegración de la América española en su conjunto: diversas fuerzas centrífugas que habían estado latentes, se desarrollarán y darán origen a una fragmentación del territorio en pequeñas soberanías, muchas veces constituidas artificialmente. Nuevos Estados, la mayoría de dudosa articulación interna, adoptarán la ficción del federalismo, al mismo tiempo que potencias como Gran Bretaña y Estados Unidos, contribuirán, por intereses muy concretos, a consolidar el fraccionamiento político (7).

La contradicción principal que enfrenta a españoles peninsulares con españoles americanos (criollos) se había fraguado en la época colonial. Para los criollos venezolanos, el sistema colonial se configuraba, a pesar de los intentos liberalizadores del comercio llevados a cabo por Carlos III, como una intrincada red de restricciones al tráfico mercantil entre las colonias y los países extranjeros y al desarrollo de una economía vernácula que hiciera competencia a la de la metrópoli. Las palabras de Simón Bolívar en su Carta de Jamaica pueden ser ilustrativas de la óptica criolla ante la situación:

"Los americanos, en el sistema español que está en vigor, y quizá con mayor fuerza que nunca, no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo, y cuando más, el

de simple consumidores; y aún esta parte coartada con restricciones chocantes: tales son las prohibiciones del cultivo de frutos de Europa, el estanco de las producciones que el Rey monopoliza, el impedimento de las fábricas que la misma Península no posee, los privilegios excluidos del comercio hasta los objetos de primera necesidad, las trabas entre provincias y provincias americanas, para que no se traten, no se entiendan, no negocien; en fin, ¿quiere Ud. saber cuál es nuestro destino? Los campos para cultivar el añil, la grana, el café, la caña, el cacao y el algodón, las llanuras solitarias para criar ganado, los desiertos para cazar las bestias feroces, las entrañas de la tierra para excavar el oro que no puede saciar esa nación avarienta ... Pretender que un país tan felizmente constituido, extenso, rico y populoso sea meramente pasivo, ¿no es un ultraje y una violación de los derechos de la humanidad?" (§).

Ello situado en un contexto internacional en el que Inglaterra, con su revolución industrial, comienza a estar urgida de nuevos y más amplios mercados, y en el que la libertad de comercio era ya un dogma de las relaciones económicas. Por otro lado, los criollos estaban excluidos de las altas funciones políticas, judiciales, militares y eclesiásticas del sistema colonial: "En consecuencia, existía en nuestra América una contradicción que era preciso resolver: la nobleza territorial, estamento dominante dentro de la economía, era una clase políticamente oprimida por la metrópoli. La solución de ese antagonismo fue uno de los móviles más importantes que empujaron a esa clase al movimiento de Independencia" (§). Es un movimiento dirigido por la aristocracia criolla, la cual postula una soberanía de la voluntad general que desvía el curso de los hechos hacia el campo de sus intereses de clase; su objetivo es la posesión del poder político, conservando a la vez la máxima jerarquía social en el orden emergente. Al tratarse de un cambio en el nivel político, de un relevo de los agentes del poder político, las relaciones sociales coloniales, insistimos, no quedan eliminadas sino más bien reactualizadas en la nueva situación (10).

Ahora bien, si el sentido de conjunto conduce a ver la independencia americana como un proceso bajo la dirección de la élite criolla, ello no implica una homogeneidad total: existieron diferencias entre unas y otras regiones y diversas velocidades en dicho proceso. Nos parece interesante e ilustrativo, en este sentido, recoger la tipología de las revoluciones de independencia ofrecida por Charles C. Griffin, quien habla de, a) una revolución mexicana que empieza como revolución social -Morelos e Hidalgo- y que luego evoluciona hacia una transacción con la

clase criolla terrateniente y conservadora en el conocido plan de Iguala, en el cual se consigue solamente una aceptación nominal de sus primigenios objetivos sociales; b) una revolución del norte de Sudamérica que empieza como movimiento de la clase alta criolla en favor de la autonomía y seguidamente en pro de la independencia política -caso de Venezuela-, y en la que, a causa de la hostilidad de los pardos, Bolívar va a orientar su acción hacia medidas de contenido social, política que tendrá éxito y atraerá a las masas a la causa patriota, aunque en los años finales de la Gran Colombia se registre una reacción que vuelve a subordinar las masas; y c) una revolución del sur de Sudamérica, que desde el Río de la Plata hasta el Perú no contempla contenido social de importancia, siendo llevada a cabo por la clase alta, que logra hacerse seguir por las masas sin necesidad de grandes concesiones: solamente a partir de 1820 veríamos el comienzo de una lucha social en las guerras de "montoneras", que al final se funden con las guerras civiles argentinas de la época de Rosas (11). Nota común es la significativa simultaneidad con que estalla el movimiento latinoamericano de la emancipación en las principales ciudades: el 19 de abril de 1810 en Caracas, el 25 de mayo en Buenos Aires, el 20 de julio en Bogotá, en México el 16 de septiembre y el 18 del mismo mes en Santiago de Chile, con una proclamación casi uniforme de los mismos principios políticos e ideológicos (16). Se trata de un sincronismo y de una identidad doctrinaria que reflejan la similitud del proceso histórico iberoamericano desde el propio arranque en la formación de los nuevos Estados.

2) Los grupos sociales y la guerra.-

La apertura del proceso independentista por parte de la élite criolla tuvo como respuesta una reacción del campo fiel a la monarquía metropolitana que produjo el hundimiento de los primeros intentos y la subsiguiente caída de los gobiernos autónomos de 1810 y 1811. Este hecho avizora ya que la guerra va a ser larga y enormemente destructiva: su duración, de quince años aproximadamente, nos habla de lo feroz del conflicto. La fuerte reacción del lado realista y la improvisación de los patriotas hacen que en 1815 sólo queden en revolución la mitad meridional del virreinato del Río de la Plata, Venezuela y algunas regiones

marginales, donde se había asistido a una movilización capaz, en principio, de desbordar el marco institucional preexistente. Se planteó entonces la necesidad de formar ejércitos más numerosos y preparados y, por tanto, transformar la revolución en un proceso que interesara de alguna manera a los grupos sociales consuetudinariamente marginados del escenario político. Tal vez sea Bolívar quien comprende mejor la necesidad de esta incorporación que reclamaba la coyuntura, si se quería llegar realmente al objetivo final. Se planteaba, pues, una guerra en regla, que la restauración del absolutismo en España (1823), después del corto trienio liberal, va a contribuir aún más a dilucidar las alternativas en cuestión. La neutralidad británica, por un lado, se inclinaba a favorecer la revolución, y los Estados Unidos emitían la doctrina Monroe (1823),⁽¹³⁾ la cual declaraba la hostilidad norteamericana a cualquier empresa de reconquista de la América española por la Europa de la restauración. Para éste momento, en el que los patriotas iniciaban, con éxito, una ofensiva a escala continental, la guerra de independencia había avanzado considerablemente. San Martín y Bolívar realizaban dos campañas militares de dimensiones y repercusiones globales. El primero, con el apoyo del sector chileno -O'Higgins- comenzaba un plan de ataque a la fortaleza realista peruana, en el cual la reconquista de Chile debía ser el primer paso del avance hacia Lima. Nuevos auxilios venían del norte con Bolívar, quien había ido forjando una imagen original de la revolución hispanoamericana, tal vez el proyecto político con mayor perspectiva histórica de los tantos que se habían forjado en el transcurso de los acontecimientos. La entrevista entre Bolívar y San Martín en Guayaquil trajo como consecuencia visible la retirada del segundo del campo de operaciones, con lo que el mando de Bolívar quedó ampliado en forma considerable; con la constitución de Perú y Bolivia como Estados independientes puede decirse que la guerra, a escala continental, había finalizado (1825-1826).⁽¹⁴⁾

En la brevísima síntesis histórica anterior se deja traslucir dos fases o etapas de la guerra que requieren un análisis más detallado. Si miramos con detenimiento, podemos observar que, en realidad, el período que va de 1810 a 1830 traduce la culminación de la crisis de la sociedad colonial y por ello es comprensible que en él se manifestaran todas las tensiones sociales generadas durante el lapso de gestación de la misma. En este sentido, no hay que olvidar que las tensiones entre pardos, esclavos y criollos sólo permitieron una conjugación de esfuerzos cuando, por una parte, los criollos dieron muestra de un aminoramiento de sus pro-

-pésitos esclavistas y discriminatorios y, por la otra, cuando las masas se convencieron de que los realistas sólo querían el regreso al viejo orden. Entre 1815 y 1821 es cuando tal conjugación se produce y es el resultado, por un lado, del alejamiento de las tropas populares del bando español debido a la política represiva de Morillo, y por otro, de la atenuación de la postura esclavista por parte de los criollos y la iniciativa de permitir a los pardos su incorporación a los cuadros de mando del ejército bolivariano. No obstante, como pone de relieve J.A. Silva Michelena, tal conjugación de clases y grupos sociales tan disímiles, iba a probar ser tan duradera como la misma necesidad de mantener un ejército en armas: una vez terminada la contienda armada, las tierras prometidas a los soldados no se distribuyeron y los criollos, junto al generalato surgido de la guerra y prestigiado por el valor demostrado en la misma, -como es el caso de José Antonio Páez-, terminaron por acaparar las posiciones de poder económico y político. (15)

Tenemos, pues, que en el contexto de la independencia surgen desde el principio las contradicciones derivadas de la sociedad colonial y del contenido socio-económico mismo del movimiento emancipador. Para Juan Oropesa, "La verdad es que la alta clase criolla sobreestima su posición, ya que si bien es cierto que ocupa la cúspide de la pirámide social, lo hace sin vertebración alguna con las grandes masas, acostumbradas siempre a mirar con rencor no disimulado, a aquella exigua minoría que todo lo monopoliza: riqueza, instrucción, honores y dignidades. Escaso trabajo ha de costar a la propaganda española, lograr atraerse en los primeros años de la lucha, a casi todos los pardos, atizando hábilmente el odio que bulle en el alma popular, contra la cerrada y exclusivista clase mantuana" (16). Los patricios de 1811, habituados a su situación de preeminencia como minoritario sector dominante, iban a encontrar la feti cencia y el recelo de las masas populares, y aquí está precisamente la raíz de un proceso que va a condicionar, a partir de 1830, el establecimiento de una República oligárquica y conservadora. Un conservador como Juan Vicente González, en su Biografía de José Félix Ribas, describió con acierto el problema:

"Aún tenía otras razones (-el pueblo-) que debemos considerar: la revolución debió parecer en otras ocasiones una secta de audaces pensadores: la servían las inteligencias más distinguidas, las personas más notables. Y luego formaban su base y la dirigían los que bajo el nombre de mantuanos, representaban la jerar-

-quía, la propiedad y la opinión"

"Dueños de grandes propiedades en la extensión de la república, su autoridad pesaba a lo lejos, la de los más célebres sobre todo, como la de Bolívar y Ribas, respetados y temidos en sus posesiones y a su alrededor. El mando político de los que eran sus señores naturales no era sino una argolla más añadida a la cadena. La opresión parecía entonces la independencia y constituyó una bandera de libertad negativa que se unió a las banderas realistas. Se les había convidado a liberar, mas con temores y recelos. Cuando Miranda publicó la Ley Marcial en 1812 y llamó los esclavos a las armas, los pocos que se alistaron se desertaron y se enrolaron en campo enemigo. Y no es que no amasen su libertad, sino que la creían una red ofrecida por los que habían sido sus señores" (17).

Tulio Chiossone, en Los problemas sociales en la formación del Estado venezolano (18), ha considerado los aspectos sociales de la guerra de independencia desde el punto de vista de una guerra civil de secesión; en el sentido de que el conflicto entre realistas y patriotas, la lucha entre la monarquía y la república, entre la integridad del Imperio y su desmembración, y entre la sujeción a la península y la independencia de las provincias americanas, se duplicaría, en Venezuela especialmente, con un conflicto social que permitiría, como decimos, calificar al proceso emancipador como una guerra civil (19). Según Chiossone, la sociedad venezolana de la emancipación presentaba las siguientes características: a) una constitución social heterogénea, integrada por grupos sociales disímiles: indios, negros esclavos, blancos europeos, blancos criollos y pardos, éstos últimos mayoritarios numéricamente; b) una situación de inferioridad del indio; c) institución de la esclavitud; d) luchas sociales motivadas por la reactivación de complejos de inferioridad, iniciadas por el realista Boves y otros caudillos; e) empobrecimiento de la población; y f) ignorancia por falta de instrucción. Entrelazado con estas explosivas características, existía también en forma latente el problema agrario (20).

Es evidente que todo ello es cierto, aunque la enumeración es sin duda muy esquemática. Ha sido el historiador Germán Carrera Damas (21), auténtico renovador de los estudios históricos en Venezuela, quien creemos ha visto con gran lucidez la problemática implícita de la relación entre los grupos sociales y la guerra de emancipación. Trataremos de seguir en la forma más fiel posible, sus interesantes planteamientos. Para Carrera Damas, durante la emancipación en su sentido más amplio (1800-

-1830), se darían dos grandes líneas de acción: la lucha por la libertad y la lucha por la igualdad, que expresarían ambas los intereses de clase implícitos en el movimiento independentista, poniendo de relieve las proyecciones socio-económicas dentro de la complejidad del proceso político e ideológico (44). Ello tiene una importancia fundamental, ya que en dicho período se observan contradicciones que se van a extender a los conflictos que pueblan la posterior etapa republicana del XIX venezolano (45).

La parte que corresponde a las ideologías es un fenómeno complejo y contradictorio, ya que la repercusión de la ideología revolucionaria francesa va a implicar una totalización muchas veces arbitraria y generalizadora, cuya traducción en la práctica sociopolítica pone en juego numerosos procesos de adaptación en razón a intereses de clase y relación entre fuerzas sociales. Puede afirmarse que el postulado libertario e igualitario de la Revolución francesa encuentra eco en los esclavos y pardos, pero en razón de circunstancias históricas induce a éstos a militar mayoritariamente contra la emancipación, hasta que se opera un cierto cambio ideológico en los criollos. Los criollos, por su parte, reaccionan contra la ideología revolucionaria francesa en cuanto se le atribuya de ateo y antirreligioso, tras lo cual se oculta evidentemente una reacción esclavista y antiigualitaria que los lleva a pensar en la emancipación como medio de evitar el contagio (44). Por otro lado, el período emancipador podría considerarse como punto de partida de un proceso de integración de la conciencia nacional y punto crítico en la evolución de la conciencia de sí en las clases sociales más desarrolladas. El camino hacia una conciencia nacional se produciría al cabo de una prolongada y dificultosa trayectoria, cuyas etapas estarían constituidas por la conciencia americana, la conciencia colombiana y la conciencia nacional venezolana propiamente dicha; con un primer rasgo de definición negativa o conciencia americana basada en la diferenciación respecto de lo europeo y peninsular, que pasaría transicionalmente por la conciencia colombiana, para ir hacia una diferenciación positiva luego de la desmembración del Estado grancolombiano, en el sentido de una afirmación propia de lo venezolano. (45)

La primera fase de la lucha (1810-1815) revelaría la complejidad ideológica del cuadro emancipador. Formas de lucha tradicionales y un ejército de oficialidad aristocrática presiden una justificación ideológica de la emancipación apoyada en la afirmación de la americanidad (46),

cuyo eje es la "conciencia criolla"; fase que pronto va a desembocar en la lucha armada, como afirmación del derecho de autodeterminación y el deslinde de lo americano y lo español: el Decreto de Guerra a Muerte de 1813. Esta primera fase, en la que las diversas clases y grupos sociales se esfuerzan por alcanzar objetivos particulares -no necesariamente vinculados con el concepto de independencia-, es progresivamente reemplazada, a partir de 1815, por otra en la cual la presencia de un ejército europeo de ocupación opera el deslinde y prepara el terreno para la convergencia de los intereses particulares de las clases en función de la emancipación. La lucha adquirirá entonces un sentido popular por su forma, no por su proyección (47). La acentuación del fenómeno de la politización en el campo de los promotores es un hecho. El problema de la lucha por la libertad, en este sentido, habría que entenderlo como la aspiración de romper los marcos institucionales que regulan las relaciones entre dos clases cuyo antagonismo caracteriza la sociedad colonial. Esta lucha enfrentaría a los esclavos con los criollos y opondría también a criollos y peninsulares. La lucha por la igualdad habría que entenderla como aspiración a romper el esquema de castas, enfrentando a pardos y criollos, con implicación a los esclavos, y oponiendo también a criollos y peninsulares (48).

La lucha de los esclavos por su libertad se apoyaría en las incontables y hasta hace poco escasamente conocidas rebeliones de esclavos ocurridas en el período colonial (49). Es una lucha que enfrenta los esclavos a los esclavistas, criollos y peninsulares, pero predominantemente criollos. Las formas de lucha son las fugas de esclavos, conspiraciones, rebeliones, cumbes, rochelas, "holgazanería", etc. Se trataría de conflictos entendidos a nivel de individuo o cuando más del grupo: no parece tratarse de una lucha contra la esclavitud como institución, aunque afecta de hecho una de las bases fundamentales de la sociedad colonial. Cuestión importante es que el conflicto presenta implicaciones raciales de marcada virulencia, proclive a los mayores excesos: exterminio de población blanca, destrucción de propiedades, etc., estando en la casi totalidad de los casos desprovisto de planteamientos teóricos o doctrinarios. De otra parte, la lucha de los criollos por la libertad reuniría un complejo de reivindicaciones expresado en la necesidad de remover los obstáculos -el nexo colonial- al ejercicio de derechos y garantías esenciales para el criollismo: libertad de comercio e industria, representatividad política, etc. Es decir, contra una reglamentación del comercio supeditada a la política

européa de España, definida con absoluta abstracción de los intereses propios de la Colonia; y por una representatividad política resultante de la tradición municipal de los criollos y la necesidad de instaurar un régimen que contemplase los intereses específicos de la Colonia, cuando la crisis del poder metropolitano auspicia su replanteamiento. No es posible subestimar el carácter acentuadamente clasista de este movimiento; así, por ejemplo, no hallan contradicción insalvable entre la reivindicación abstracta de la libertad y el mantenimiento de la esclavitud.⁽³⁰⁾ Y es que "En el arsenal -dice Carrera Damas en otro trabajo- de argumentos empleados por los criollos para justificar su emancipación de la Corona española, la invocación de la libertad ocupa lugar preferente y adopta modalidades diversas según el orden en que se inscribe el alegato: económico, social o político. De manera general puede resumirse esta invocación de esta libertad no sólo en el disfrute de la autodeterminación política y de la libertad de comercio, sino también y principalmente en la instauración de un Estado de Derecho que proscribiese de manera terminante dos de los más irritantes atributos del poder colonial: el despotismo y la arbitrariedad" (31). No obstante, sería un error creer que la reivindicación de la libertad por la oligarquía criolla conservaba en la práctica la pureza del principio doctrinario: "La visión escolar y patriótica de la historia ha hecho que se olvide lo siguiente: mirada desde el presente, la emancipación parece un valor en sí misma, al cual debía sacrificarse todo otro interés. Considerada al ras de los tiempos, estuvo lejos de ser tal cosa, al menos durante gran parte de su desarrollo: tenía un contenido concreto y éste variaba según los intereses de las clases de la sociedad colonial" (32).

En el caso de la lucha por la igualdad, queda claro que se trata de una fuerza que procede de la sociedad colonial, gestada como fue en el seno de una estructura social dedicada a fomentar y preservar la diferenciación entre grupos sociales y castas, fuerza que brotó con considerable energía en el momento en que la empresa emancipadora adquirió su perfil más nítidamente bélico. Cabría distinguir entre la acción igualitaria de los pardos y de los esclavos, y la igualación reclamada por los criollos respecto a los peninsulares. La lucha de los pardos por la igualdad no tendría una conciencia tan clara como la existente en la de los criollos. Los pardos -hombres libres y prestos a utilizar los canales de ascenso social como la actividad económica y la instrucción- se oponen sobre todo a los criollos y sus privilegios de casta. Los pardos constituyen el sec-

-tor social más numeroso y dinámico, al formar casi la mitad de la población y aumentar rápidamente, en contraste con el estancamiento de la población esclava y el lento incremento demográfico de los criollos. Estaríamos en presencia de un grupo social en pleno desarrollo, que se ve constreñido ante la negación de acceso a las oportunidades reservadas a la población blanca. Desde un punto de vista económico, el acaparamiento de las tierras más rentables por criollos y peninsulares les impedía llegar a ser propietarios en las zonas más pobladas, al mismo tiempo que las limitaciones derivadas de la ausencia de libertad de industria, estorbaban el desarrollo de los oficios, reservados a los pardos en razón de la llamada "actitud prejuiciada de los criollos y peninsulares ante el trabajo manual" (33). Si los signos visibles de desigualdad, concentrados en la maraña de prejuicios sociales y precedencias que fundamentaban la estructura social, se correspondía con la generada en el orden económico, es posible pensar que la corrección de estos factores podía plantearse y realizarse sin necesidad de alterar considerablemente la estructura económica de la sociedad. En efecto, factores de índole cultural favorecían el planteamiento de la cuestión de la igualdad social como un simple asunto de reorganización mediante principios liberales, los cuales, lejos de dañar los fundamentos reales de la desigualdad social, los disimulaban bajo la capa de una aparente igualdad (34). El cambio que se va a producir, sólo en el nivel formal de la categoría cultural, iba a permitir "dar salida a presiones sociales que habían llegado a ser incontenibles y preservar las bases reales de la desigualdad. A la condición genérica de vasallos del Rey, suerte de rasero teórico de la sociedad colonial, la va a suceder la de ciudadano, una categoría liberal cuyo significado verdadero será el reducir la desigualdad a su fundamento real: la propiedad, y como tal se expresará en la consagración del principio igualitario en el orden constitucional republicano" (35); esto es, la élite criolla, al abolir los privilegios nominales y dar con ello cauce principalmente a la lucha de los pardos, lograba conservar la dirección del movimiento.

En relación a la lucha de los criollos por la igualdad, ya se ha señalado que enfrentaba a éstos con los peninsulares, expresando la aspiración a una participación en la dirección y control de la sociedad que fuese correlativa con su fuerza económica y social. La necesidad de superar el simple control municipal chocaba con el monopolio peninsular de las altas dignidades de la administración colonial. A la vez, los criollos se veían presionados por la fuerza ascensional de los pardos, un

cierto número de los cuales, enriquecidos relativamente, aspiraba a posiciones hasta entonces exclusivas de los primeros. Así, bloqueados en la cima y presionados en la base, los criollos van a la emancipación con la voluntad de abrir nuevas posibilidades de desarrollo, pero defendiendo sus privilegios y reaccionando contra todo lo que pudiese afectarlos. Es obvio que los criollos, como sector social dominante, dirigen el proceso emancipador y no pueden adelantar su acción sin ofrecer algo a sus opositores dialécticos (36). De allí la medida de prohibición del tráfico de esclavos, que no de la esclavitud, que impedía al menos teóricamente la formación de nuevos esclavos. De ello se desprende que esta actitud no es fiel resultado de una concepción doctrinaria, sino que obedece más bien a la circunstancia de la lucha emancipadora. En relación a los pardos, estaba claro que su básica condición de hombres libres formalmente, preparaba el terreno para la implantación de formas igualadoras, de alguna manera compatibles con la ideología liberal propuesta para sustituir a la tradicional del ancien regime. El reconocimiento de una igualdad legal habrá de cimentarse con la incorporación creciente de los pardos a la lucha, sobre todo entre los años 1814 y 1817, cuando se les abre la posibilidad de acceso a los mandos militares medios. En consecuencia, la estructura originariamente aristocrática del Ejército republicano se transformaba con la disminución de la distancia social entre tropas y cuadros, si bien en la cúspide de la formación militar los criollos seguirán conservando la primacía de la dirección política y militar de la lucha. Los ofrecimientos mismos de libertad hechos por Bolívar a los esclavos a partir de 1816, traen como consecuencia, no tanto su incorporación definitiva a la lucha, como al menos su neutralización, al quedar desvanecidos temporalmente los temores de un recrudecimiento del régimen esclavista. El proceso de atracción de los pardos a la causa republicana, y la neutralización de los negros esclavos como potenciales o activos opositores, es favorecido a la vez por el hecho de que el Ejército realista pierde, a partir de 1815, el carácter masivamente popular que había adquirido con Boves, el caudillo asturiano, para volver a asumir un perfil discriminatorio y colonialista con Morillo, una vez restablecido el absolutismo en España (37).

Evidentemente, ello no va a impedir que a finales de la década de 1820, cuando la ruptura con España ya es definitiva, se produzca una reacción esclavista del lado del criollismo republicano, los emigrantes y algunos realistas arrepentidos, afanados por recuperar sus bienes y

poner en marcha nuevamente sus actividades económicas. La consecuencia es que la lucha de los esclavos por su libertad proseguirá hasta culminar en 1854 con la Ley de Abolición de la esclavitud, promulgada ante una resistencia ya menor en razón de la acelerada crisis estructural de la institución hacia mediados del siglo XIX. De igual manera, a partir de la década de 1830 proseguirán los conflictos entre los antiguos pardos y los criollos ahora dirigentes del Estado republicano, acentuados como resultado de la desaparición de la guerra como factor de movilidad social vertical. En este contexto, la formación del Partido Liberal en 1840 expresaría, aunque muchas veces en forma contradictoria, las aspiraciones sociales renovadas de sectores de la población en situación de inferioridad. Paralelamente, a partir de 1848, bajo la dinastía de los Monagas, con el reactualizado y poderoso desarrollo del latifundismo -favorecido por la política de enajenación de baldíos-, comenzarán a fraguarse las condiciones para que la lucha por la tierra se haga presente en todo su vigor como estímulo de la inquietud social que desemboca en la Guerra Federal de 1858-1863 (39). Y es que la realidad social no cambió en profundidad con la revolución de independencia: después de ésta, la estructura social siguió siendo la misma y el latifundio se consolidó como unidad productiva de la economía. Si bien es cierto que el cambio social más importante se tradujo en un aumento de la movilidad social como consecuencia de que pardos y mulatos pudieron ascender y desempeñar funciones en el aparato institucional que antes les estaban vedadas -en el seno de la aristocracia colonial se produjo una "apertura" que dió paso a elementos nuevos que habían triunfado por la vía de las armas-; la realidad era que la emancipación tuvo un carácter limitado: consistió fundamentalmente en un cambio de la estructura política y los demás niveles continuaron siendo los mismos que los de la época colonial, los de una sociedad tradicional, de economía agraria y estructura latifundista (39).

3) La política de Bolívar.-

Estamos lejos de militar en el "culto a Bolívar" y mucho menos somos aspirantes a formar parte de la legión de "sacerdotes del culto bolivariano", fenómenos analizados por el citado historiador Germán Carrera Damas en uno de sus más interesantes

trabajos (40). Y es que "El peso de los sentimientos patrióticos y de los prejuicios morales en la reciente historiografía venezolana sobre la independencia se manifiesta, entre otras formas, en el ocultamiento intencional de los aspectos moralmente chocantes, o que de alguna manera puedan rebajar la condición ética artificiosamente concedida a la par que exigida a los libertadores. Esta mojigatería llega al extremo de que bien puede decirse que sólo se cita alguno de esos rasgos indeseables para mostrar cuán pronta y ejemplarmente se le puso remedio, y de preferencia para hacer resaltar la enérgica rectitud del héroe en contraste con los desafueros de algún negro o mulato cuyos ojos aún no se habían abierto a la luz irradiada por ese mismo héroe" (41). En este sentido, "Nada de angelical tuvo la guerra de emancipación, y de ese pequeño infierno que se escenificó en Venezuela no fueron los opositores de la independencia los únicos responsables" (42). La lectura de algunas descripciones bastaría para comprender la intensidad y naturaleza de las fuerzas en conflicto (43). Carrera Damas ha llamado la atención sobre la urgencia de "poner al descubierto líneas interpretativas que devuelvan a la lucha de emancipación su carácter real de complejo enmarañamiento de situaciones y tendencias, dejando así de ser la plana confrontación del bien y el mal en que la ha convertido la historia oficial" (44).

Tal vez una de los aspectos más significativos en este orden de ideas, haya sido la cuestión referente a la práctica del saqueo durante la guerra, cuyo examen nos arroja luz sobre la problemática del conflicto (45). Carrera Damas pone de relieve cómo el saqueo constituyó una práctica común a ambos bandos, tanto a los que defendieron la causa del Rey como a los que lucharon por la República; incluyendo en el saqueo a las fórmulas disimuladas de éste -las exacciones- y bajo tres formas principales: a) los secuestros y confiscaciones de bienes pertenecientes a enemigos o emigrados sospechosos; b) el acopio de provisiones y recursos para la guerra, mediante embargo, despojo o compra con pago diferido y aleatorio; y c) los empréstitos forzosos, impuestos y contribuciones especiales, multas, donativos, etc. (46) Hay la evidencia de que la extrema necesidad de los combatientes, unido a las derivaciones de orden social y racial, determinaron la proliferación del saqueo y del pillaje hasta alcanzar niveles de absoluto descontrol, configurando hacia 1813-1814 el cuadro de la llamada 'guerra a muerte'. La práctica del saqueo, como principal factor de supervivencia de los ejércitos en lucha, tiene una estrecha relación con las condiciones objetivas que en el orden económico en-

-cuadraron el momento histórico, y que el historiador venezolano ha agrupado de la siguiente forma: a) penuria fiscal y desquiciamiento de la vida económica; b) rarificación del numerario y dificultades de abastecimiento; y c) empobrecimiento del territorio y bandolerismo (46); todo ello como consecuencia de un cúmulo de factores tales como la devastación causada por la propia guerra, el cese casi total del comercio exterior, la paralización de la vida económica y acontecimientos naturales como el terremoto de 1812, el exiguo rendimiento de las rentas en los territorios sucesivamente ocupados por ambos bandos, etc. La crisis prácticamente permanente del Erario público se manifestaba en la escasez de moneda agudizada a partir de 1810, cuando grandes caudales se extrajeron del país o fueron ocultados, lo cual llevó al pago de contribuciones en especie y a la reducción del comercio al nivel del trueque, aún en el caso de transacciones internacionales. La guerra en realidad iba a devorar casi todos los recursos existentes, circunstancia que traducía los signos correspondientes a la estructura misma de la economía colonial: el escaso rendimiento de la mano de obra esclava y la preferente dedicación de las mejores tierras, sobre todo del centro del país, al cultivo de frutos comerciables de exportación, se conjugaban para que aún en regiones eminentemente agrícolas se agotasen pronto los alimentos, haciendo imposible el estacionamiento prolongado de tropas en un determinado punto del territorio: por tanto, una admisible conclusión es que a fines de 1814 la región central del país había agotado su potencial económico, y cabe pensar que si la guerra pudo continuar, fue fundamentalmente por el traslado del teatro de operaciones, en los años siguientes, a regiones que, como el Oriente, los Llanos y Guayana, conservaban todavía mucho de su potencial (47). Es lógico pensar que a tal desquiciamiento de la estructura económica le acompañase un fenómeno paralelo en el ámbito de la organización política y administrativa. Es en este sentido en el que la práctica del saqueo, entendido en sentido amplio como apropiación violenta o arbitraria de recursos de todo orden con fines principalmente militares, constituyó uno de los rasgos más constantes y reveladores de la guerra emancipadora. Los secuestros, exacciones y multas eran, así, la única forma de financiar la guerra, dadas las condiciones de desorganización hacendaria, empobrecimiento del territorio e imposibilidad de otros recursos: los saqueos y embargos aparecen como la forma inmediata y directa de racionar y mantener las tropas, en situación de escasez de numerario y penuria fiscal. Se trataba de prácticas normales en tiempo de guerra y, insistimos, comunes a ambos

bandos en contienda. Es importante señalar que estas condiciones generales de la lucha armada en Venezuela durante la independencia van a perdurar a todo lo largo del siglo XIX (48).

La guerra emancipadora era, pues, en muchos sentidos, la manifestación más profunda de la crisis del orden colonial. El enfrentamiento entre el mantuanaje y los peninsulares traducía el intento del primero, de agregar a su dominio económico el amplio margen de autonomía y movilidad que da la posesión de los mecanismos y resortes del poder político. Este hecho explica que en los primeros momentos de la revolución venezolana, los criollos que toman el poder protejan sus intereses particulares y no se ocupen de la problemática social; más aún, éste último punto no entraba en el proyecto original, de ahí la primacía de los planteamientos políticos sobre otro tipo de consideraciones. Ello explica de igual manera el hecho de que los pardos de las ciudades y los llaneros secundaran a José Tomás Boves, el caudillo realista de origen asturiano, quien qué duda cabe interpretaba sagazmente decenios de resentimientos y rencores sociales de las masas populares contra los ricos propietarios. El mismo Simón Bolívar, en 1810, no se planteaba esta problemática: lo mismo que para sus congéneres de la revolución, la cuestión para él era puramente política, aunque éste tema lo considerara con una mayor carga de radicalidad, desde las tribunas de la Sociedad Patriótica, especie de club al estilo jacobino en el que se situaba el ala más avanzada del colectivo revolucionario, frente al sector más moderado o conservador de esencial formación jurídica y que argumentaba y justificaba una autonomía, y eventualmente, la independencia de la Capitanía General, pero en forma tal que la transición se cumpliera por vías estrictamente legales. (49) Contra esta tesis que podríamos llamar reformista, se erigía la de la ruptura, que postulaba la necesidad de borrar lo estatuido por un régimen que no había contado nunca con el asentimiento de los gobernados. Como miembro destacado de la Sociedad, Bolívar afirmaba en unas palabras ya muy conocidas lo fundamental del pensamiento de la organización:

"Se discute en el Congreso Nacional lo que debiera estar decidido. Y ¿qué dicen? Que debemos comenzar por una Confederación como si todos no estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera. Que debemos atender a los resultados de la política de España. ¿Qué nos importa que España venda sus esclavos a Bonaparte o que los conserve, si estamos decididos a ser libres? Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. Que los grandes proyectos deben prepararse en calma! Trecientos años de calma, ¿no bas-

-tan? La Junta Patriótica respeta como debe al Congreso de la Nación; pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad Sur-Americana: vacilar es perdersenos. Que una comisión del seno de este cuerpo lleve al Soberano Congreso estos sentimientos" (50).

Cuando Bolívar asuma la dirección militar del movimiento, va a tomar conciencia de la necesidad, en principio, de la formulación de una política social mediante la cual se pueda ganar las masas populares para la causa emancipadora. La ampliación del proyecto político hacia medidas de tipo social no formaban parte de planes previos de transformación de la sociedad; además, las reformas van a ser duramente combatidas o desnaturalizadas, si cabe, por los sectores sociales privilegiados, cerrados como estaban ante la posibilidad de que aquello sobrepasara imprevisiblemente límites no deseados. Unas medidas de política social destinadas a prohibir las lacras más vergonzantes del antiguo régimen -hay que reconocer que la gran mayoría de tales cambios no fueron planeados o previstos (51)- iban surgiendo de acuerdo a la coyuntura bélica y sus consecuencias, más que una liberación de la situación de indios y esclavos, se orientaban hacia la conversión de éstos, de trabajadores serviles a trabajadores asalariados, en los ejemplos bastante escasos en que esta conversión se produjo.

Un recorrido por dichas medidas nos conduce al 10 de octubre de 1817, cuando Bolívar dictó la Ley sobre repartición de los bienes nacionales entre los militares de las fuerzas patriotas de Venezuela, adoptada en Angostura y después confirmada por el Congreso de Colombia. La conocida propuesta bolivariana, para dotar de tierras a los soldados y oficiales del ejército colombiano, se traducía en una normativa legal que fijaba la cantidad de tierra pública que se cedería a cada soldado, cabo, sargento y a los oficiales en sus diversos grados (52). No cabe en realidad presentar esta Ley como una reforma agraria (53); para Ch. C. Griffin, "No hay duda de que el cumplimiento de esta ley hubiera traído una mayor distribución de la tierra en esa República. Sin embargo, el número de personas que podrían solicitar tierra de acuerdo con esta ley no puede haber pasado de quince o veinte mil en una población rural a lo menos diez veces mayor. Bolívar dijo a veces que su ejército era el pueblo en armas, y eso puede haber sido cierto en el sentido de que lo mejor de Colombia estuvo en sus filas. Pero todos los colombianos no estuvieron en la mi-

-licia. Por eso parece un poco exagerado denominar a un sistema de bonificaciones para los soldados, una 'ley agraria' (55). A ello habría que agregar que, pese a la voluntad contraria de Bolívar, el Congreso Colombiano autorizó la permuta y venta de los certificados y con otras disposiciones dificultó el cumplimiento del fin originalmente perseguido por el texto. De un modo u otro, en la realidad, fueron solamente los oficiales de rango superior los que llegaron a aprovecharse de los beneficios creados por dicha ley. Lo que sí puede afirmarse es que, más que reformas agrarias efectivas, de lo que se trataba con ésta y otras medidas, era de montar unos proyectos de colonización de tierras orientados, no a una transformación del régimen latifundista, sino a una política de poblamiento de grandes extensiones de tierra sin dueño.

Con similares perspectivas es abordado el problema indígena en Cundinamarca, el 20 de mayo de 1820, cuando Bolívar dicta un decreto en el cual se ordena se devuelvan "a los naturales, como propietarios legítimos, todas las tierras que formaban los resguardos según sus títulos, cualquiera que sea el que aleguen para poseerlas los actuales tenedores"; estableciéndose que los jueces políticos instruirían del contenido del decreto a los indios "instándolos a que representen sus derechos aunque sea contra los mismos jueces y a que reclamen cualquiera infracción", proponiéndose a la vez en el texto que las tierras sobrantes se arrendarían y su renta de aplicaría a un programa de instrucción para los naturales, previsto con minuciosidad (56). Lo mismo en el Cuzco (1825), donde decretaba que "ningún individuo del Estado exija directa o indirectamente el servicio personal de los peruanos indígenas sin que preceda un contrato libre del precio de su trabajo", declarándose que "los jornales de los trabajadores en minas, obrajes y haciendas, deberán satisfacerse según el precio que contrataren en dinero contante, sin obligarlos a recibir especies contra su voluntad, y a precios que no sean corrientes de plaza" (57). Más tarde, el 15 de octubre de 1828 promulgaba el decreto que liberaba a los indios de pagar "derechos parroquiales y de toda otra contribución nacional de cualquiera clase que sea" (...) "no se les llevarán derechos algunos por los tribunales y juzgados seculares y eclesiásticos" (...) "no podrán ser destinados los indígenas a servicio alguno por ninguna clase de personas sin pagarles el correspondiente salario según la costumbre del país"; los fiscales de las Cortes de Justicia se encargarían de promover "por cuantos medios estén a su alcance, el establecimiento de escuelas para la educación de los hijos de los indígenas"; los Curas



y protectores estimularían a los indígenas "por los medios más suaves a trabajar en común una porción suficiente de tierra del sobrante de los resguardos para invertir sus productos precisamente en beneficio de los mismos indígenas" (58).

El problema de los esclavos intentaba resolverlo en su Discurso de Angostura (1817), proponiendo la abolición de la esclavitud: "... yo imploro la confirmación de la Libertad absoluta de los Esclavos, como imploraría mi vida, y la vida de la República". Lo mismo se hacía en las instrucciones para los Plenipotenciarios de Colombia ante el Congreso de Panamá: "El interés que ha manifestado el mundo civilizado por la abolición y supresión del tráfico de esclavos de Africa, exige también que la Asamblea de los Estados Americanos se ocupe de ella. Esta materia presenta a nuestras Repúblicas una bella oportunidad de dar un ejemplo espléndido de la liberalidad y filantropía de sus principios"; la misión de los delegados habría de ser la de "lograr la abolición del tráfico de los esclavos de Africa y declarar a los perpetradores de tan horrible comercio incursos en el crimen de piratería convencional" (59).

Y es precisamente el Congreso de Panamá el proyecto auténticamente original de la política bolivariana en el contexto de la lucha independentista y lo que le confiere verdadera perspectiva hasta nuestros días. Conviene señalar que el movimiento político iniciado en 1810 presenta dos aspectos, uno interno y otro externo. El primero hace referencia a la organización interna de los nuevos Estados; el segundo, la necesidad subsiguiente de buscar un lazo de cooperación interamericana. El aspecto externo adquirió entonces y en forma progresiva una importancia cada vez mayor, al ponerse de manifiesto, por lo menos para las cabezas más lúcidas de la élite política de la emancipación, la urgencia de una comunidad interamericana basada en la unión, la paz, la cooperación y la defensa común frente a posibles enemigos exteriores. Si el movimiento político de 1810 tenía como principal objetivo el asegurar la independencia de las colonias españolas, para hacer estable ese status político de autodeterminación "era indispensable que todas las mencionadas colonias, convertidas en países libres gracias a la Revolución, presentasen un frente único ante cualquier intervención política y militar de Europa" (60). Por otra parte, era obvio, para la clase dirigente, que los Estados nacientes por obra de la emancipación, no iban a constituirse por el sólo hecho de proclamar su nacimiento ellos mismos, sino que necesitaban ser reconocidos como tales por Estados extraños a la contienda: "Así como los Estados Unidos habían

sido reconocidos por Francia y España, a pesar de las protestas de Inglaterra, los nuevos Estados Americanos querían serlo también por los EEUU mismos y las mencionadas potencias" (61). En esta línea de actuación, surgió el despacho de dos misiones diplomáticas, a los pocos días de producirse la declaración autonómica de Venezuela, con destino a Londres y Washington, compuesta la primera por Simón Bolívar, Luis López Méndez y Andrés Bello; y la segunda por Juan Vicente Bolívar, Telésforo de Orea y José Rafael Revenga. Una y otra misión tenían por objeto conseguir el apoyo de aquéllas potencias para la causa independentista que, aunque disfrazada, ya se mostraba evidente.

Bolívar observó con claridad estos imperativos de orden internacional del contexto emancipador; lo que podríamos llamar el "frente exterior" se presentó en él como un factor prioritario. Su idea esencial va a consistir en la unificación de América hispana en un sólo bloque político-económico para la defensa de sus propios intereses: un proyecto de unidad americana que tendría como bases sustantivas una serie de identidades: comunidad de origen, lengua, costumbres y religión, cimentándose sobre tales bases la integración propiamente política (62). Así, por ejemplo, en 1818, desde Venezuela reiteraba esta idea en carta a Juan Martín Pueyrredón, Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuando expresaba que "una sólo debe ser la patria de todos los americanos, ya que en todo hemos tenido una perfecta unidad"; para agregar que "cuando el triunfo de las armas de Venezuela complete la obra de su independencia, o que circunstancias más favorables nos permitan comunicaciones más frecuentes, y relaciones más estrechas, nosotros nos apresuraremos, con el más vivo interés, a entablar, por nuestra parte, el pacto americano, que, formando de todas nuestras repúblicas un cuerpo político, presente la América al mundo con un aspecto de majestad y grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas. La América así unida, si el cielo nos concede este deseado voto, podrá llamarse la reina de las naciones, y la madre de las repúblicas" (63).

El Congreso de Panamá (1826) vendría a ser la institución central de la unificación americana. (64) Sus funciones supremas se centrarían, por un lado, en la homogeneización de la conducta americana respecto al exterior -centro de coordinación de la defensa común-, y por otro, en ser órgano de conciliación y entendimiento entre las distintas nacionalidades latinoamericanas. A juicio de Bolívar, el Congreso de Panamá debía ser el árbitro de las posibles diferencias y la más calificada instancia

en cuanto al dictamen del sentido justo de los tratados públicos americanos, para ser, en síntesis, el órgano por excelencia de la paz y de la armonía en el continente. Con éste fin, pretendía que el Congreso tuviera un carácter permanente, celebrara reuniones periódicas, y estuviera dotado de ejércitos y flotas confederales propias, además de órganos institucionales de alcance supranacional (65).

El movimiento hispanoamericanista, que de esta forma daba sus primeros pasos, surgía con un profundo sentido político: "... cuando nace el Hispanoamericanismo nace con las armas en la mano y es ese motivo el cual hace que el Congreso de Panamá haya sido una alianza política, donde se propició la creación de un sistema internacional destinado a la defensa de las libertades conquistadas en las cruentas guerras de independencia, como también para el afianzamiento de la paz entre naciones americanas" (66). Y es que desde el punto de vista de las relaciones políticas internacionales, no hay que olvidar que el Congreso de Panamá repetía a las doctrinas absolutistas enunciadas por la Santa Alianza. La finalidad principal del Congreso de Viena (1815) -que celebrado por las potencias vencedoras de Napoleón significaba un retorno a la situación prerrevolucionaria anterior a 1789, es decir, la vuelta hacia una teoría dinástica y al antiguo sistema de equilibrio de poder- había sido la de fijar el esttuto territorial de los Estados europeos, modificado por la política imperial napoleónica, es decir, un retorno a los límites anteriores a la revolución francesa. Con el objeto de garantizar este orden reimpuesto nació la Santa Alianza, cuyo pacto de creación fue firmado el 26 de septiembre de 1815 en París por los soberanos de Prusia, Austria y Rusia. Los monarcas declaraban la perpetuidad de la alianza, cuyos objetivos principales eran el mantenimiento irrevocable de las particiones territoriales hechas por el Congreso de Viena; el fortalecimiento de los lazos de cooperación entre las monarquías europeas a fin de oponerse colectivamente a todos los esfuerzos destinados a cambiar las instituciones políticas; aplicar el principio de intervención en los asuntos internos de los Estados con el objeto de impedir posibles insurrecciones populares contra los gobiernos establecidos y garantizarse mutuamente el mantenimiento del régimen monárquico. Invocando estos principios se iban a justificar una serie de intervenciones que se prolongarán a lo largo de casi un siglo y cuyo ámbito pretendió extenderse hasta las costas americanas. En este sentido, recuérdese que el principio de intervención y las doctrinas reaccionarias enunciadas por la Santa Alianza, fueron confirmadas en

los Congresos de Aquisgrán (1818), de Troppau (1820), de Laibach (1821) y de Verona (1822), y ^{que} en los mismos se gestaron las intervenciones anti-liberales en Nápoles, en Grecia y en España, respectivamente. En el Congreso de Verona, por ejemplo, las cuestiones española y americana habían ocupado casi toda la conferencia (67). Por el contrario, contra el régimen monárquico y la doctrina del inmovilismo derecho divino,

reaccionaba el Congreso de Panamá con la enunciación de unos primeros conceptos del derecho público americano, que A. Silva Otero ha resumido en "la independencia de las naciones americanas y de sus instituciones republicanas contra toda agresión extranjera, el principio de la no-intervención como doctrina del Derecho Internacional, el respeto por la integridad territorial de todas las naciones, la condenación de la conquista y la renuncia a la guerra como instrumento de política internacional, organización de la cooperación internacional y orientación pacifista apoyada en la codificación del Derecho Internacional y en los procedimientos de arbitraje, conciliación, etc." (68).

4) La organización del nuevo Estado.-

Un examen superficial de la historia constitucional de Venezuela conduciría, al menos, al análisis de veinticuatro constituciones y un Estatuto provisional, desde la primera de 1811 hasta la última, vigente, de 1961. Tan numerosos cambios constitucionales, un auténtico fenómeno de "inflación constitucional" (69), no han significado ni mucho menos una modificación sustancial de la dinámica política del país, siendo más bien, en la casi totalidad de los casos, una serie de textos promulgados bajo la presión de circunstancias de coyuntura y de intereses políticos muy concretos. Se da el hecho de que muy pocos han reflejado una búsqueda original de un proyecto político capaz de funcionar con mediana eficacia; al contrario, se han caracterizado las constituciones venezolanas por una cierta uniformidad repetitiva y muchas entre ellas se han limitado a completar o modificar aspectos parciales e, incluso, anecdóticos, del ordenamiento constitucional vigente en cada momento. En líneas generales, y tomando la cuestión bajo una amplia perspectiva histórica, hay que admitir el gran fracaso de numerosas fórmulas de dichas leyes fundamentales, aunque no se puede descartar, en medio de todos los vaivenes,

una terca persistencia por consolidar una organización jurídico-política fundamental duradera: puede ello parecer contradictorio, pero ésa ha sido la característica dualidad del proceso político-constitucional venezolano y latinoamericano en general (70).

El período de la independencia, conflictivo como pocos en la evolución política latinoamericana, vio nacer los distintos Estados latinoamericanos que en su casi totalidad hoy conforman el conjunto regional. La concepción política que los guió a todos en su momento germinal fue prácticamente la misma: el espíritu del constitucionalismo liberal, en sus distintas vertientes. El esencial argumento político-jurídico estuvo basado en la ruptura de los lazos con la Corona española por la incapacidad en que se hallaba ésta para mantenerlos, lo cual bastaba para justificar el establecimiento de Estados independientes y soberanos en América (71). Para el caso de Venezuela, el profesor P. Grases, en Traducciones de interés político-cultural en la época de la independencia de Venezuela (72), se ha ocupado del análisis de diversos textos que circularon, traducidos al castellano, en la época de la independencia: "Por la privilegiada situación geográfica de Venezuela, colocada a la cabeza del continente meridional, en el cruce de los grandes caminos de comunicación entre Europa y América, y entre la parte septentrional americana y el Sur del continente, fue la vía de penetración de las nuevas ideas renovadoras que a fines del siglo XVIII iban a cuajar en el pensamiento que condujo a la Independencia" (73). Qué duda cabe que en los primeros textos constitucionales venezolanos va a quedar reflejada la transformación que desde las últimas décadas del XVIII se producía en el ámbito de las ideas políticas. Exponente de aquel cambio venía dado por el grupo de obras traducidas de otros idiomas que leían con interés los sectores ilustrados de la sociedad colonial venezolana y en las que aprendían los principios filosófico-políticos y culturales que sacudían el momento histórico: textos tales como los Derechos del Hombre y del ciudadano (La Guaira, 1797); La Independencia de la Costa Firme justificada por Thomas Paine treinta años ha (Filadelfia, 1812); el Contrato Social de Rousseau (Caracas, 1811); el Ensayo sobre el entendimiento humano, de Locke (Caracas, antes de 1810); el Arte de escribir, del Abate Condillac (Caracas, 1809-1810); las Cartas Americanas, de G. Carli (San Thomas, 1817); la Historia de América, de W. Robertson (San Thomas, 1817); el Ensayo sobre la Historia de la Sociedad Civil, de A. Ferguson (San Thomas, 1817); y la obra El Federalista, de Hamilton, Jay y Madison (Caracas, 1826) (74).

La primera constitución venezolana, la de 1811, era la culminación del proceso autonómico iniciado en abril de 1810 cuando, constituida la Junta Suprema de Caracas, que asume las funciones de poder ejecutivo, se convoca un Congreso constituyente que redacta la declaración de independencia y le da forma al primer texto constitucional, que es un documento de trascendencia ideológica en la formación del Estado venezolano, a pesar de su escasa vigencia (75). En este orden de ideas, la creación de la Capitanía General de Venezuela (1777), incorporando en una sola entidad política y administrativa las provincias hasta entonces separadas; la anterior creación del cargo de Intendente de Venezuela (1776) con jurisdicción ya en todas las Provincias que compondrían la nueva Capitanía General; la instalación de una Real Audiencia (1786); constituyen sin duda tres instrumentos que deben tenerse en cuenta, histórica y jurídicamente, como fundamento territorial del Estado venezolano, representando, según C. Parra Pérez, lo que pudiera llamarse la herencia constitucional de la monarquía (76): "Las entidades políticas fundadas durante el régimen colonial tuvieron por preocupación primordial la de conservar su unidad, y de allí el nacimiento de tantos nacionalismos locales, precursores de las disputas y a veces de guerras entre algunos de los nuevos Estados por cuestiones de mal definida frontera. La administración española, al crear virreynatos, capitanías y presidencias, había, por decir así, plasmado esos Estados que ahora proclamaban su soberanía y que debían forzosamente vivir y evolucionar dentro de cuadros territoriales que cada uno de ellos quiso por lo menos inmutables. Todos los patriotas americanos estaban de acuerdo para repudiar, con el dominio español, las instituciones que lo simbolizaban, excepto la territorial. El uti possidetis existente al comenzar la Revolución, no sufrirá alteraciones sino las veces en que algunas de las regiones sujetas en lo político a una formación más extensa, pero que gozaban en ésta de cierta autonomía administrativa, reclamaron a su vez rango de Estados independientes" (77).

Influencias norteamericanas y francesas guiaron a los constituyentes en la redacción de la primera carta constitucional de Venezuela; norteamericanas sobre todo, ya que en rigor las francesas se señalan sólo por el vocabulario, fórmulas retóricas y sonoros postulados humanitarios (78). En realidad, el proceso independentista norteamericano había producido en materia constitucional tres textos capitales: los Artículos de Confederación y de Unión Perpetua, suscritos por los delegados de las provincias insurgentes en julio de 1778; la Constitución dictada por la Convención en sep-

-tiembre de 1787; y las Enmiendas o Adiciones a la Constitución, de las que diez componen el bill of rights y que fueron ratificadas de 1789 a 1791. Todos estos instrumentos, no sólo el bill, tenían su origen en las leyes y prácticas políticas inglesas o eran el resultado de las controversias con la propia Corona a lo largo del proceso histórico. Por otra parte, antes de la promulgación de la Constitución federal, los Estados habían adoptado las suyas particulares, cuya influencia fue importante en la formación de aquélla. Los legisladores venezolanos iban a fundir en uno sólo los tres documentos citados, dándoles una nueva disposición y estructura (79). También es verdad que el sistema federal reconocido y aceptado por la naciente República venezolana tenía mucho que ver con una situación existente hacía ya décadas, y la Constitución de 1911 no hacía sino confirmar el principio y organizar su aplicación: la conformación del Estado como un Estado federal tenía su base en el caldo de cultivo de las pretensiones autonómicas locales de Cabildos y Ayuntamientos de las Provincias que luego configurarían la entidad estatal venezolana: "A partir de ese momento, el fantasma de la idea federal va a acompañar toda nuestra historia política y condicionar nuestras instituciones desde su mismo nacimiento" (80). En efecto, de acuerdo al texto de 1911, las provincias de Margarita, Cumaná, Barinas, Barcelona, Mérida, Trujillo y Caracas formulaban un pacto federativo, en base al supuesto de que cada provincia era soberana, por lo que toda autoridad no delegada a la autoridad central, quedaba conservada por aquéllas. Más aún, el temor de los representantes de las diversas provincias de Venezuela en relación a una hegemonía por parte de Caracas, provocó que la capital o ciudad federal se ubicase, según la Constitución, en la ciudad de Valencia (81). Y es que el modelo francés de república una e indivisible no interesaba, dadas estas circunstancias, a los autonomistas venezolanos; de allí que se hablara incluso de una Confederación, y no de una simple Federación. (82) No podían acogerse ni utilizar la fórmula bonapartista de la revolución francesa; vale decir, las constituciones consulares e imperiales no les ofrecían documentación aprovechable. Solicitaron entonces "las fuentes del derecho democrático, aplicable a una sociedad de hombres libres y las hallaron primero en Norte-América y luego en los principios y doctrinas de 1789, estrujados por la muela de la Convención" (83).

Las discusiones del primer Congreso venezolano, reunido en marzo de 1911, se habían centrado en problemas tales como la estructura federal o centralista del nuevo Estado -resuelto a favor de la primera opción-

los derechos de los pardos y el fuero eclesiástico; a los pardos se les equiparó legalmente con los blancos, pero el tema de la esclavitud no se tocó, suprimiéndose a la vez los fueros especiales, en concreto el eclesiástico. El texto, además de comenzar con una rotunda afirmación federalista -el título preliminar declaraba competencia de las provincias toda autoridad no delegada al poder federal (84)-, establecía también una rotunda manifestación de fe católica -que no volverá a aparecer posteriormente: "La religión católica, apostólica, romana, es también la del Estado y la única y exclusiva de los habitantes de Venezuela. Su protección, conservación, pureza e inviolabilidad será uno de los primeros deberes de la Representación Nacional, que no permitirá jamás en todo el territorio de la Confederación ningún otro culto público, ni privado, ni doctrina contraria a la de Jesucristo" (85). El poder legislativo es bicameral: una Cámara de Representantes -miembros elegidos por cuatro años y renovable por mitad cada dos años- y un Senado -por seis años y renovable por terceras partes cada dos años-. Las elecciones para las Cámaras eran de segundo grado y el derecho al sufragio correspondía a todos los hombres libres si reunían determinadas condiciones económicas (86). El poder ejecutivo residía en un Triunvirato elegido por cuatro años y el poder judicial, en una Corte Suprema de Justicia (87). En el marco de la llamada "época heroica del constitucionalismo", la primera constitución venezolana contenía enumeraciones dogmáticas y de principios morales: "Después de constituidos los hombres en sociedad han renunciado a aquella libertad ilimitada y licenciosa a que fácilmente los conducían sus pasiones propias del estado salvaje. El establecimiento de la sociedad presupone la renuncia de estos derechos funestos, la adquisición de otros más dulces y pacíficos y la sujección a ciertos deberes mutuos"; más aún, "Ninguno es hombre de bien, ni buen ciudadano, si no observa las leyes fiel y religiosamente; si no es buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen esposo y buen padre de familia" (88).

La Constitución de 1811 resultó prácticamente inaplicable; la Primera República se derrumbó como consecuencia del entronizamiento de la guerra y la retoma del poder por las tropas peninsulares. Va a ocurrir entonces un replanteamiento de la organización constitucional del naciente Estado venezolano: son las Constituciones de 1819 y de 1821, llamadas "Constituciones Bolivarianas" sin mucha propiedad ya que parte de su articulado se separa en cierta medida de las ideas políticas del Libertador. Las constituciones bolivarianas interesarían "como catálogos ideológicos

de lo que podrían ser formas políticas para Venezuela" (99).

La segunda constitución venezolana es promulgada en plena guerra de independencia; aprobada en Angostura, en agosto de 1819, comenzaba por adoptar una postura neutral ante la religión católica, que evita cuidadosamente mencionar, aunque la separación con la Iglesia no fuera total: los obispos pasaban a ser miembros honorarios del Senado, a la vez que se reconocía el fuero eclesiástico (90). La Constitución de 1819 era centralista; la República de Venezuela es "una e indivisible" (91), organizada en diez provincias, cada una con un gobernador sin funciones militares y dependiente del presidente de la República. La parte dogmática se conserva y las declaraciones morales se repiten; se enumeran los derechos del hombre -libertad, seguridad, prosperidad e igualdad-; no se declara la abolición de la esclavitud -que Bolívar había pedido ante el Congreso de Angostura-, y se regula la institución del habeas corpus. Los ciudadanos son divididos en activos y pasivos; pasivos aquellos que no tienen parte en la formación de la ley, no ejercen la soberanía nacional, ni gozan del derecho de sufragio; activos aquellos en posesión de propiedad raíz, ciencia o arte liberal-mecánica, grado militar o empleo con renta de 300 pesos por año (92); y aunque las elecciones para presidente de la República y representantes debían ser directas, la propia Constitución establecía por espacio de diez años la elección de segundo grado (93). El Congreso era bicameral; la Cámara de Representantes, elegida para cuatro años por las Asambleas electorales; el Senado, con igual número de miembros que eran elegidos la primera vez por la asamblea constituyente entre ciudadanos notables, siendo vitalicios en sus funciones. La elección del presidente de la República, para un período de cuatro años, se verificaba por las Asambleas electorales, siendo reelegible sólo una vez; se establecía un vicepresidente, y los ministros, designados por el presidente, podían ser interpelados en las Cámaras. El Poder Moral, propugnado por Bolívar, quedaba regulado en el apéndice, con vocabulario y estructura llenos de reminiscencias grecolatinas. El Poder Moral residía en el Areópago, el cual constaba de dos cámaras -veinte miembros-, la de Moral y la de Educación, que elegía el Congreso por primera vez, siendo sus miembros vitalicios. Los miembros se titulaban "Padres de la Patria" y eran sagrados y merecedores de un respeto filial. La Cámara de Moral se ocuparía de castigar los vicios y premiar las virtudes públicas, mediante la confección de unas listas de viciosos y virtuosos, quedando los primeros excluidos de los puestos públicos; por otra parte, la Cámara de Educación tendría co-

-mo misión la de educar física y moralmente a los niños hasta los doce años cumplidos (94). Por último, la Constitución de Angostura adquiría un carácter provisional de acuerdo a la frase final del texto: "Nos, los diputados de las provincias libres de Venezuela, en representación de toda la República, a cuya sanción se sujetará" (95). En realidad, los imperativos de la guerra la hicieron también inaplicable.

Si por la Ley fundamental de la República de Colombia (1819), las Repúblicas de Venezuela y de la Nueva Granada quedarían reunidas en una sola bajo el título de República de Colombia, el Congreso de Cúcuta iba a aprobar la Constitución de la República de Colombia el 31 de agosto de 1821: nacía así, bajo la inspiración de Bolívar, el Estado Grancolombiano. En el Congreso de Cúcuta se volvía a reproducir el enfrentamiento, esta vez para legislar sobre un marco territorial mayor, entre los partidarios del federalismo, que propugnaban una amplia autonomía de Nueva Granada y Venezuela dentro de la nación colombiana, y los del centralismo, apoyados por Bolívar esencialmente, que acabaron por imponerse. En este orden de ideas, la Constitución de Cúcuta tiene un carácter menos dogmático e intenta establecer un gobierno central fuerte. La nueva entidad se dividiría en departamentos, gobernados por un intendente nombrado por el presidente de la República. Las elecciones eran de dos grados y se exigían condiciones económicas para ser elector (96). Los electores de primer grado -para juntas parroquiales- debían saber leer y escribir y tener propiedad por valor de más de 100 pesos, oficio, profesión o comercio; los de segundo grado -para juntas provinciales-, tener propiedad por valor de 500 pesos, empleo con sueldo de más de 300 pesos al año o un grado científico. Las juntas provinciales designarían al presidente de la República, vicepresidente, senadores y diputados (97). Se reconocen la libertad de expresión y el habeas corpus y se hace una división de poderes de factura clásica. El Legislativo se integra por dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes -senadores, cuatro por provincia, y representantes, uno por cada 30.000 habitantes-. Los secretarios de despacho, de libre designación por el Ejecutivo, podían ser sometidos a interpelación por el Congreso. Se establecía, además, con carácter consultivo, un Consejo de Gobierno formado por los secretarios de despacho, un magistrado de la Alta Corte de Justicia y el vicepresidente de la República, siendo los poderes del presidente, en el texto, algo más limitados que los otorgados en la Constitución de Angostura. Por lo demás, la Constitución grancolombiana no contiene referencias en relación con el tema religioso.



El problema real de la Constitución de 1821 era mucho más complejo que lo que la simple normativa jurídico-política nos pudiera presentar. Diciéndolo de alguna manera, por ahora provisional, la cuestión esencial, como manifestación exterior de una realidad más profunda, residía en el localismo: los funcionarios locales actuaban de hecho con independencia del poder central. Al estar los gobiernos locales en manos de militares, éstos tendieron a convertirse en "ductores omnímodos dentro de su jurisdicción" (88). El caudillo local ~~hacía~~ acto de presencia contra el texto constitucional al concluir la guerra emancipadora; el movimiento de la Cusiata en Venezuela (1826), por ejemplo, en el que las municipalidades de Caracas y Valencia desconocieron la autoridad de Bogotá y otorgaron amplios poderes al general José Antonio Páez, era ya una manifestación, no sólo de la ruptura de la unión grancolombiana, sino de las auténticas relaciones de poder que surgían en el contexto venezolano, en su dinámica social, una vez concluida la actividad bélica: el ejército como única fuente de autoridad, lo que Bolívar había llamado el paso al "ejercicio de la tiranía doméstica". Y es que el propio Simón Bolívar había tomado conciencia de que la Gran Colombia no podía subsistir. En una carta desde Guayaquil al general O'Leary, en 1829, afirmaba que,

"El actual gobierno de Colombia no es suficiente para ordenar y administrar sus extensas provincias. El centro se halla muy distante de sus extremidades. En el tránsito se debilita la fuerza y la administración central carece de medios proporcionados a la inmensidad de sus atenciones remotas. Yo observo esto a cada instante. No hay prefecto, no hay gobernador que deje de revestirse de la autoridad suprema y, las más de las veces, por necesidades urgentes. Se podría decir que cada departamento es un gobierno diferente al nacional, modificado por las localidades y las circunstancias particulares del país, o del carácter personal. Todo esto depende de que el todo no es compacto ... Sufrimos, sin poderlo remediar, tal desconcierto, que sin una nueva organización el mal hará progresos peligrosos" (89).

5) Hacia una República Oligárquica.-

La pregunta sobre la fórmula del poder en Venezuela republicana aparece íntimamente ligada a la problemática de la evolución socioeconómica durante el período de las guerras de emancipación: "El estudio de esta transformación es esencial para comprender los fenómenos políticos

y sociales de la Venezuela que empezará ahora a vivir su destino ... dentro del marco mucho más modesto de su tierra, marco en que hacen de primera figura héroes segundones, para quienes la gloria nunca significó gran cosa, pero sí el acomodo personal y el poder como medio de enriquecimiento" (10). ¿Sustitución de los grandes cacaos de la época colonial por el gamonalismo de los militares republicanos? Sin duda que, para el estudio del sistema político tradicional en Venezuela, podría contestarse afirmativamente a esta pregunta, pero sólo provisionalmente y desde el simple punto de vista de las manifestaciones epidérmicas del proceso político en el siglo XIX venezolano. No dejan de ser ciertas en este sentido las ya tan citadas palabras de Laureano Vallenilla Lanz en su Cesarismo Democrático, en el sentido de que "Páez y algunos próceres, secundados por una porción de especuladores, comenzaron a comprar los haberes militares, sobre todo los de los llaneros de Apure, por precios irrisorios; de tal manera que el latifundio colonial pasó sin modificación alguna a las manos de Páez, Monagas y otros, quienes habiendo entrado en la guerra sin bienes algunos de fortuna, eran, a poco de constituida Venezuela, los más ricos propietarios del país" (11); ya que, en efecto, la sociedad republicana iba a edificar el poder político sobre la base del dominio de la propiedad territorial en un renovado proceso de concentración: el pago de los haberes militares se convertiría en elemento importante de movilidad social al favorecer una dinámica de traslación y reacomodación de la propiedad de la tierra a favor de un grupo militar que había jugado papel crucial en la contienda bélica emancipadora (12).

La cuestión agraria, pues, constituiría el eje en torno al cual se estructura la vida económica y social venezolana en el período 1800-1830. (13) De igual manera, el peso del problema agrario en el desarrollo de la historia republicana del país ha sido un aspecto suficientemente admitido por diversos historiadores y sociólogos, para quienes la lucha contra el latifundismo ha proporcionado una útil guía en la comprensión de la larga serie de conflictos civiles armados que conmovieron la Venezuela del siglo XIX (14). Para la época de la independencia, parece fuera de duda la existencia de un avanzado grado de concentración de la propiedad de la tierra en regiones agrícolas cercanas a Caracas, sobre todo en los Valles de Aragua, aunque también podría ser notable el contraste entre ésta situación y la que prevalecía en los Llanos, donde la población era escasa y se hallaba dispersa en inmensas extensiones con mínimos de actividad agrícola (15). La existencia, en las regiones llaneras, de tie-

-rras libres en abundancia sería un indicador de que no se había alcanzado por entonces un grado de concentración de la propiedad y de ocupación de la tierra comparable al existente en regiones cercanas a Caracas. No quiere ello decir que no existiese apropiación privada de la tierra en los Llanos, ni que esa apropiación dejase ya por entonces de crear dificultades. En este sentido, resulta muy significativa la elaboración, por la primera República venezolana, de unas "Ordenanzas de Llanos", estudiadas analíticamente por G. Carrera Damas (106). Las "Ordenanzas de Llanos" se dieron con el propósito de consolidar y proteger esa propiedad (107), aprovechando la existencia de un considerable ganado cimarrón, res común en las llanuras; vale decir, se reivindicaba de modo exclusivo una propiedad por los "criadores de ganado", que no podía sino chocar con usos arraigados en una población, los llaneros, acostumbrados a considerar aquél abundante ganado como algo sin dueño y aprovechable para sus necesidades más inmediatas (108).

La erección del ganado como símbolo social de la riqueza es un fenómeno que se ventila agudamente en aquéllos años. De ahí que, en realidad, el objetivo de la acción de los llaneros en orden a la propiedad y la riqueza, sin descartar la parte que pudiese corresponder a la tierra, era principal y precisamente la posesión de ése ganado. La reacción llanera contra la República de hacendados y criadores traducía el recelo y la desconfianza con que estas masas veían a la nueva organización estatal. El hecho concreto era que "dueños del poder político, los hacendados y 'criadores' intentan organizar su apropiación de las vastas llanuras y de los rebaños que las pueblan" a través de las Ordenanzas de los Llanos, cuyas disposiciones se orientaban hacia la afirmación de su exclusivo derecho de propiedad sobre los ganados libres o salvajes, disponiendo unos procedimientos destinados a considerar actos delictivos aquellos realizados por la población llanera para el disfrute de un bien visto por ésta tradicionalmente como común (109). Con las "Ordenanzas de Llanos" estábamos es presencia de una normativa auténticamente tiránica de la población llanera, que concentraba en manos de los criadores y sus representantes legales una considerable suma de poder, verificada en un régimen de trabajo forzado que colocaba al peón libre de la llanura a merced del propietario, vinculándolo con el hato y haciéndolo depender de la voluntad del patrón. Lógicamente, se hizo evidente que la implantación de este ordenamiento iba a quedar en suspenso durante la guerra, por el hecho mismo del desencadenamiento de fuerzas llaneras que luchaban por la continuidad de

de la práctica del disfrute de un bien casi libre como era el ganado, reducido a propiedad privada por la normativa de las "Ordenanzas" de 1811. Lucha que de todas formas se resolvió a favor de la privatización de la propiedad en los Llanos, cuando José Antonio Páez dictó en agosto de 1828, en su carácter de Jefe Superior, Civil y Militar de Venezuela, el nuevo "Reglamento para Hacendados y criadores del Llano", el cual exigía el respeto de la propiedad territorial aún carente de linderos o cercas, en términos semejantes a los de las "Ordenanzas", prohibiendo el tránsito por ellas sin previo "permiso expreso del dueño o mayordomo", y prosiguiendo el esfuerzo por vincular esa propiedad con la del ganado criado en libertad (14).

Aparece con claridad la circunstancia de que, en la Venezuela de las primeras décadas del siglo XIX, la burguesía no existe como clase evolucionada, ni siquiera grupos que puedan acercarse a tal categoría, tienen consistencia en el seno de la sociedad venezolana. Al contrario, la clase ~~económica~~ ^{económica} madura está integrada, principalmente, por terratenientes esclavistas y explotadores de una población rural sometida a condiciones de servidumbre (15), quienes necesitan del poder político para imponerse definitivamente como clase social dominante, escapando así a las restricciones jurídicas, económicas y comerciales impuestas por el régimen colonial.

La guerra de independencia y las guerras civiles posteriores iban a introducir cambios en la propiedad territorial agraria, en el sentido de fenómenos de transferencia de la misma, aunque sin transformar la estructura latifundista propiamente dicha. Basta recordar, a ello hemos aludido, que la política de secuestros de las propiedades de los adversarios de la emancipación, fue aplicada por los jefes militares republicanos de modo permanente a partir de 1813 y en la medida en que liberaban el territorio. Diversas medidas legislativas estuvieron destinadas a justificar jurídicamente esta política de secuestros de bienes de emigrados, adversarios de la independencia y propiedades del gobierno realista (16), lo cual se tradujo, como decimos, en un elemento de cambio en materia de propiedad territorial agraria, en especial en lo que se refiere al origen social de los nuevos amos de la tierra, ya que desde entonces un mayor número de personas participó en la posesión exclusiva de la misma. Es un hecho que a partir de 1821 adquirió intensidad la entrega de tierras a los caudillos militares más destacados en la guerra -Páez, Donagás, Mariño, etc.-; pero por el contrario, para los oficiales de mediana graduación,

clases y soldados, rigió la fórmula de los vales, a través de la cual se reconocía a los interesados el derecho a recibir oportunamente lo que el Estado les adeudaba en concepto de haberes militares (43). Dichos vales en su gran mayoría nunca fueron hechos efectivos y, en cambio, fueron comprados por los altos jefes militares, quienes, luego, haciendo valer su indudable influencia en la organización del nuevo aparato estatal, los transformaron en propiedades. De esta manera, una parte muy estimable de la riqueza social pasó a manos de los más significados caudillos militares, con lo que "El latifundio permaneció intacto como institución, y hubo, sí, transferencia de propiedad latifundista, de manos de un sector de la nobleza colonial a manos de los jefes militares de origen popular" (44); en otras palabras, el latifundio iba a integrar un elemento fundamental de la estructura socioeconómica de la República venezolana: el sector de propietarios experimenta cambios en su composición, pero el sistema de propiedad de la tierra no varía en lo esencial. (45)

Por otra parte, si fijamos nuestra atención en la actividad económica, observaremos sin duda el carácter enormemente destructor de las guerras de independencia (46). En el caso de Venezuela, la contienda bélica contribuyó decisivamente a la desarticulación de la producción agropecuaria. En efecto, las necesidades bélicas implicaron un enorme consumo y la ganadería, por ejemplo, se redujo considerablemente en el período 1812-1823; los valles de Aragua, Tuy y Caracas, Barlovento y tierras bajas del lago de Valencia, tradicionalmente activas en la época colonial, se vieron imposibilitadas de satisfacer las necesidades del mercado interior. El descenso de las exportaciones coincidía con la caída de los precios de los productos exportables: el cacao se cotizaba, en 1810, entre 45 y 50 pesos/fanega; en 1812, 35 pesos; en 1814, 30 pesos; en 1816 a 25 y en 1818 a 20 y 18 pesos (47). En renglones como el tabaco, se da la caída vertical de la producción: en la provincia de Barinas, p.ej., la producción anual de tabaco descendió de 28.000 a 3.000 quintales (48).

De otro lado, con la emancipación se produce la apertura del territorio venezolano al tráfico comercial internacional, lo cual va a repercutir muy sensiblemente en la vida económica del naciente Estado, ya que por los condicionamientos estructurales del país -nulo desarrollo industrial, limitaciones del mercado interno, monoproducción-, los altibajos de ése tráfico internacional condicionarán su desarrollo. Por lo demás, se trata de un proceso generalizado al ámbito latinoamericano: la vida política independiente postcolonial verá surgir nuevas modalidades de la dependencia externa. El arranque de la revolución industrial en Gran Bre-

-taña cambia el carácter de la producción y crea una compleja división del trabajo. Con el desarrollo técnico y el progreso material, éste país se coloca en un siglo a la cabeza de un nuevo sistema económico internacional que incorporará, en condiciones de subordinación, a diversos países de la periferia del sistema mediante vínculos cada vez más estrechos (14). América Latina pasa a ser parte importante de esta periferia como productora de materias primas esenciales para el mundo que comienza la industrialización. El interés británico por el continente hispanoamericano se articula en una estrategia destinada a la captación en condiciones de intercambio desigual. El proceso de penetración de Gran Bretaña en América Latina asumirá un carácter principalmente indirecto, utilizando una amplia gama de mecanismos e instrumentos, que van desde las exploraciones y el comercio hasta los préstamos y las inversiones. La finalidad primordial es la de lograr privilegios comerciales y financieros, reconociendo a la vez la soberanía de los países objeto de trato. Lógicamente, la llamada balcanización de Latinoamérica no será posible sin el apoyo y la estrecha alianza con los grupos dominantes locales y los sectores de terratenientes. En realidad, Gran Bretaña impone la incorporación de los países iberoamericanos a una economía internacional controlada por ella misma, dentro de un esquema de división y especialización internacional del trabajo. En este contexto, dichos países son convertidos en productores de materias primas agropecuarias y mineras a bajo precio para el abastecimiento de las nuevas metrópolis, en mercado para las industrias de las naciones desarrolladas y en zona de inversión para los capitales del mismo origen. En otros términos, la aplicación de un modelo de crecimiento hacia afuera se hace mediante estímulos primordialmente externos, en superficie y sin profundas modificaciones estructurales. Se trata de un crecimiento espontáneo y no planificado, condicionado por las etapas de auge o de crisis de los centros económicos mundiales. El papel de las inversiones foráneas se generaliza, dirigiéndose sobre todo a los sectores claves de las distintas economías -agricultura, ferrocarriles, minería, etc.,-. Este crecimiento impulsado desde el exterior va a traer como consecuencia, en la generalidad de los países, un desarrollo desigual según regiones y sectores en que repercute, sin grandes cambios en los elementos estructurales de las economías periféricas: de ahí la fuerte concentración del ingreso nacional y el surgimiento de enclaves privilegiados, desequilibrando aún más los des-niveles regionales preexistentes (14).

De acuerdo a los altibajos del comercio internacional, una vez con-

-solidada la emancipación política en Venezuela, se experimenta a partir de 1830 una situación económica favorable que beneficia a los productos agropecuarios venezolanos en precios y mercados. En los renglones productivos, el café pasa a ocupar el primer lugar, dejando en segundo puesto al cacao, después el añil, la ganadería y los cueros, mientras que Gran Bretaña se afirma como principal mercado de los productos venezolanos y abastecedor de mercancías, situación que se prolongará a lo largo de todo el siglo XIX y parte del XX. La supeditación del cacao por el café como principal producto de la economía venezolana postindependencia, va a tener una honda influencia sobre el posterior desarrollo económico, social y político. El nervio de la producción agrícola se va a trasladar progresivamente de las tierras bajas, hasta entonces cultivadas por la mano de obra esclava, hacia tierras templadas o semicálidas de altitud media, donde la tierra es trabajada por indios y mestizos libres, tierra que pertenecía menudo a un sector social de propietarios distinto al de la tradicional aristocracia agraria. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, el reinado del café iba a dar singular importancia a las entidades locales de la cordillera andina, hasta entonces una región de lugar secundario en el cuadro económico nacional (44). Sin embargo, los fenómenos de estabilización de la economía venezolana a partir de 1830, sólo tendrían un carácter relativo; para F. Brito Figueroa, esta estabilización "no reflejaba cambios estructurales ocurridos en el régimen económico heredado de la Colonia, sino la ampliación del mercado exterior de los productos exportables representado por la capacidad de consumo de los países industrializados o en vías de industrialización, de donde, por otra parte, se importaban las mercancías para satisfacer las necesidades del mercado interno y hasta el numerario que circulaba en el país. Esta doble conexión identificó la producción agropecuaria venezolana con los problemas fundamentales confrontados por la economía capitalista mundial, especialmente los relacionados con las crisis de sobreproducción" (44). A las crisis de sobreproducción exteriores se agregaba un elemento nuevo en el interior: la crisis de la agricultura esclavista; la agricultura de plantaciones sobre la base de la mano de obra esclava dejaba de ser rentable, y los hacendados comienzan a preocuparse ya, hacia la cuarta década del XIX, por su alto costo de mantenimiento. La misma guerra de independencia repercutió sobre el régimen de la esclavitud, mermando su capacidad productiva y acentuando su escasa rentabilidad, y ello a pesar de que la República no abolió la esclavitud, sino que se limitó a proscribir su tráfico. Las normas sobre manumisión no acabaron con la esclavitud como institución legal en sen-

-tido estricto, sino que el descenso de la mano de obra esclava se produjo como consecuencia de la manumisión de hecho por parte de los propietarios, las fugas y las deserciones. En éste último sentido, los datos son fehacientes: en el período 1830-1854 se desarrolla una lucha de los esclavos bajo la forma de fugas individuales, rebeliones, conatos de sublevaciones y participación en conspiraciones y revueltas organizadas por otros estratos sociales. Hay noticias sobre 145 rebeliones en dicho período y de 4.825 esclavos fugados entre 1835 y 1853, y recordemos que la población esclava de Venezuela se estimaba, para 1834, en unas 35.959 personas (44). En estas condiciones, los terratenientes se van a plantear la necesidad de abolir legalmente la esclavitud como instrumento de producción desvalorizado y cuya sujeción se hacía cada vez más difícil e, interesados como estaban en extraer de ella hasta el último beneficio, llegan a la Ley de Abolición definitiva de marzo de 1854, la cual elimina el régimen formalmente estableciendo nada menos que una indemnización a los propietarios. Pero las masas de esclavos, formalmente liberadas con la ley o manumitidas de hecho antes de la misma, van a tener que someterse a las condiciones generales de servidumbre impuestas por terratenientes y caudillos militares; en otras palabras, el liberto deviene en siervo de los propietarios de la tierra: los esclavos liberados y manumisos se convertirían en campesinos enfeudados (44), dependientes de la tierra y tributarios de los terratenientes por el uso de tierras, aguas y bosques; o bien pasaron a ser peones, recibiendo como jornal, no dinero metálico, sino vales y fichas que eran cambiados por productos de consumo en las tiendas de raya de la finca a precios generalmente inflados, situación ésta que estaba generalizada en la inmensa mayoría del campesinado venezolano.

En materia de morfología de la población, la acción bélica independentista diezmó pueblos enteros e impulsó migraciones en masa hacia las Antillas y España, identificadas o en oposición al régimen colonial. Se acentuó el proceso de mestizaje y, en medio de las violencias de la guerra, se redujeron, de hecho, algunas diferencias étnicas y de casta como factores de estratificación social. Sin embargo, no desaparecieron las tendencias en cuanto a la concentración y distribución regional de la población: la zona costero-montañosa localizaba un 80% de los habitantes, un 13% en los Llanos y un 2% en Guayana (45). Por otro lado, se ha estimado que durante el período 1812-1816 -años de aguda confrontación-, la población nacional sufre un descenso real de 241.748 personas, cifra equivalente al 30% del total de habitantes del país a lo que habría que agregar las emigraciones

masivas de los años de 1812, 1814 y 1816. La disminución de la población se sitúa esencialmente entre los 13 y 30 años -se trataría de la generación diezmada por la guerra-, con el predominio, en la pirámide poblacional, de las mujeres sobre los hombres (44). No será sino hasta 1830-1854 cuando empiece a observarse una estabilización relativa del proceso demográfico, y decimos relativa, porque las sucesivas guerras civiles afectarán también su crecimiento sostenido, además de otros factores relacionados con las enfermedades y las epidemias. En este sentido, se calcula la densidad demográfica en 26,3 hab/legua cuadrada: la provincia de Caracas (Valles de Aragua y Tuy, Barlovento, Guárico) ascendería a 85,4 hab/leg²; la provincia de Carabobo, 145,7 hab/leg²; Barquisimeto, 144,1; la de Maracaibo, 15,4; la de Guayana, 2,2, y las Andinas un promedio de 90 (44). Problemas graves de despoblamiento impulsaron una legislación de inmigración en 1831 y 1837, extensiva a canarios y otros países, estableciéndose zonas migratorias en el oriente, centro y occidente del país. Se estima que entre 1832 y 1844 llegaron a Venezuela unos 11.687 emigrantes, de los que muchos regresaron y que representa en cualquier caso apenas un uno por ciento del aumento de población ocurrido en esos años. En efecto, algunos datos señalarían un incremento de la población. En el período 1825-1839, la población habría aumentado en 252.659 personas; entre 1839 y 1847 se indica un aumento de 322.158; finalmente, para 1847 los padrones estimaban una población total de 1.267.692 habitantes en Venezuela (44).

Ahora bien, si los padrones del año de 1839 daban una población estimada en 392.933 habitantes, de los que 260.000 eran considerados como blancos, 414.151 como gente de color libre y 35.959 como esclavos en sentido estricto, puede afirmarse que el núcleo privilegiado estaría integrado por unas 10.000 personas (44), entre propietarios de tierras y esclavos, comerciantes en dinero y militares con bienes de fortuna. En concreto, los terratenientes no desaparecieron como clase social privilegiada, pero sí perdieron su condición de casta. Los jefes militares enriquecidos, muchos de ellos de origen popular y mestizo, devienen en un sólido apoyo de los terratenientes tradicionales y en estrecha alianza con ellos comparten la dirección política de la sociedad venezolana y, junto a sus agentes políticos más representativos, inician una penetración del nuevo aparato estatal a casi todos sus niveles -prensa, ayuntamientos, congreso, tribunales de justicia, jefaturas políticas locales, etc.-. En las posteriores fricciones y luchas civiles, dicha alianza va a constituir la base material del fenómeno del caudillismo; cada grupo disputará su parcela o cuota de poder por los medios más disímiles.

La propia Constitución de 1830 revela el contenido oligárquico de la naciente República venezolana, ya desligada del Estado grancolombiano. En Venezuela, el movimiento separatista, intensificado a partir de 1827, va a conducir al general Páez a la jefatura militar y civil del país; según C. Irazábal, "La clase dirigente de Venezuela no estaba de acuerdo con la unión porque estaba relegada a un segundo plano, porque no podía disponer libremente de los recursos del país estando en la obligación de entregar al gobierno central parte de esos recursos que ella necesitaba íntegramente para reponer su quebrantada economía" (13). Por su parte, el mismo general Páez manifestó con claridad que "Venezuela no podía ya ser feliz bajo la dependencia de Colombia, necesitaba de la individualidad de su gobierno lo mismo que de la libre disposición de sus propios recursos. Mal podría vivir a remolque de Bogotá, a quien pagaba todo género de tributos sin ninguna compensación equivalente" (14). En fin, en 1829, una asamblea reunida en Caracas aprobaba la secesión del gobierno de Bogotá y una asamblea constituyente convocada por Páez en Valencia lo ratificaba como presidente provisional de Venezuela. La discusión sobre el nuevo texto constitucional terminaba con una fórmula de transacción que se denominó centro-federal; en efecto, en la Constitución de 1830, el Estado se define como un ente unitario, pero las provincias gozan de amplia autonomía y cuentan con una diputación compuesta de un diputado por cada cantón (15). Reproduciendo numerosos artículos de la constitución de 1821, la de 1830 informa el territorio venezolano según cual era en 1810 con la Capitanía General de Venezuela (16), al mismo tiempo que el gobierno, declara, "es y será siempre republicano, popular, representativo, responsable y alternativo" (17).

Si los artículos 185 a 219 contienen una enumeración bastante amplia de los derechos individuales, sólo son sin embargo ciudadanos venezolanos los hombres libres (18) y para ejercer los derechos de ciudadanía se exigen condiciones económicas, al igual que en textos anteriores. Así, para gozar de estos derechos se requería -además de ser venezolano, casado y mayor de 21 años- saber leer y escribir, ser dueño de propiedad raíz de renta anual de 50 pesos, o tener profesión, oficio o industria útil que produjera 100 pesos anuales; para ser elector de segundo grado se exigía, además de saber leer y escribir, ser dueño de una propiedad raíz de renta anual de 200 pesos, o profesión, u oficio de 300 pesos anuales de renta, o gozar de un sueldo anual de 400 pesos; para los aspirantes a diputados o senadores, los requisitos anuales de renta y propiedad eran todavía más altos (19). La presencia de un sufragio censitario y restringido, en el marco de un sistema político oligárquico de casi nula participación política, se iba

a poner de manifiesto en las elecciones de 1846. Según los datos disponibles, los padrones para esa fecha estimaban la población venezolana en 1.273.135 habitantes, de los que 128.785 tenían capacidad legal (rentas requeridas) de sufragantes parroquiales, pero solamente ~~votaron~~ ^{votarían} 60.022, esto es, el 4,75% de la población total del país. En las elecciones de segundo grado del mismo año de 1846, de 2.798 representantes elegidos a los colegios para designar al presidente de la República, votaron únicamente 342, es decir, votaron 2,6 personas por cada 10.000 habitantes (43). De ahí que se haya dicho que ^{en} el sistema político-constitucional inaugurado en 1830, la ideología y la juridicidad de la Constitución no tenían cobertura nacional (43).

Por lo demás, el poder legislativo residía en dos cámaras, Representantes y Senado, que integrarían el Congreso. El ejecutivo se asienta en el presidente y el vicepresidente, elegidos por los Colegios electorales y no reelegibles en el período inmediato. Auxilia al presidente un Consejo de Gobierno -que en realidad va a servir para reunir en torno a la función ejecutiva a numerosos caudillos influyentes (44)-; se intenta lograr la separación y plena autonomía de los poderes, al mismo tiempo que se establece -por primera vez en el derecho político venezolano algo que no será precisamente muy respetado- que "la fuerza armada es esencialmente obediente y jamás puede deliberar" (44). Desde el punto de vista de la legislación, mientras que el Congreso de Valencia proclamaba al general Páez como primer presidente constitucional de Venezuela, la libertad religiosa se regulaba formalmente por ley en 1834; el año anterior era suprimidos los diezmos y un Código de Procedimiento Judicial fue aprobado en 1836; en lo civil, penal y mercantil continuaron en vigor, por varias décadas, las leyes españolas (45). La Constitución de 1830 se mantendría en vigencia por un período de 27 años.

- NOTAS AL CAPÍTULO SEGUNDO -

- (1) Charles C. Griffin, Los temas sociales y económicos en la época de la independencia (Caracas: Publicación de las Fundaciones John Boulton y Eugenio Mendoza, 1962), p. 21
- (2) Cf., Tulio Halperin Donghi, Historia Contemporánea de América Latina (Madrid: Alianza Editorial, 1970. 2a.ed.), capítulo correspondiente a la crisis de la independencia.
- (3) Cf., Marcos Kaplan, Formación del Estado nacional en América Latina (Buenos Aires: Amorrortu Eds., 1976), pp. 109 y ss. Augusto Mijares, en Ideología de la revolución emancipadora (Caracas: Instituto de Filosofía-Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, s.f., p. 5) se hace eco de las conclusiones del Congreso de Historia reunido en Madrid en 1949 en relación a las causas de la independencia americana: a) difusión de las teorías enciclopedistas francesas; b) hegemonía de mando de los españoles peninsulares, dando lugar al odio de los criollos; c) graves errores de la política seguida por la Península y su decadencia mundial; d) la agitación sembrada por Inglaterra y Francia, deseosas de destruir en provecho propio el Imperio español; e) el "recio individualismo de la raza hispánica"; y f) la reacción de los pueblos precolombinos.
- (4) M. Kaplan, ob.cit., p. 122. Para estos puntos es de gran utilidad el trabajo de Pierre Chaunu, "Interpretación de la independencia de América Latina", recogido en el libro La independencia de América Latina (Buenos Aires: Editorial Nueva Visión, 1973. pp. 11-41), donde el historiador francés hace una crítica del esquema tradicional (pp. 16-21), estudia el "complejo criollo de frustración" (pp. 21-27) y la participación de América en las "Luces" (pp. 28-30).
- (5) Halperin Donghi, ob.cit., cap.cit. Según Antonio Arellano Moreno, en Venezuela "Los Cabildos no sólo se convirtieron en voceros de una oligarquía poderosa sino que abusaron de su poder y defendieron con terquedad los privilegios y atribuciones de aquélla. Históricamente su altanería frente a disposiciones reales y sus grandes litigios con obispos y gobernadores. Su autoridad llegó a ser temida y respetada por estos últimos y en muchas ocasiones se abstuvieron los gobernadores de entrar en fricciones con los mantuanos o aristócratas del Ayuntamiento por el temor de perder la partida. Todo esto explica la presencia lideresca de los Cabildos en los acontecimientos de 1810 y 1811 y los líos de los Concejos Municipales con los gobernadores en los tiempos de la República". A. Arellano Moreno, Virador de Historia Política de Venezuela (Caracas: Oficina Central de Información- Imprenta Nacional, 1967), p. 127.
- (6) Kaplan, ob.cit., p. 128. "La actitud de los hombres de rango y de fortuna que desde el ayuntamiento caraqueño levantan la consigna de protección a los derechos de Fernando VII primero y de independencia luego, estaba impulsada propiamente por la aspiración de equilibrar

sus intereses económicos con los políticos. Los dueños de los instrumentos de trabajo querían ser dueños también de la política": Antonio Arellano Moreno, Orígenes de la economía venezolana (México: Imprenta Nuevo Mundo, 1947), pp. 434-435.

- (7) Sólo Brasil conserva la unidad heredada y la mantiene a través de un Imperio; América Central quedará dividida en cinco repúblicas; la Gran Colombia se desintegrará en tres países y, en general, puede decirse que las fuerzas centrífugas se orientarán por separado hacia los centros mundiales de poder, quedando integradas en la órbita de diversas potencias.
Por otra parte, las trabas al comercio, además de motivar la oposición criolla, empujaron a Inglaterra a fomentarla, primero subrepticiamente mientras fue aliada de España en la guerra contra Napoleón, luego más abiertamente cuando, caído el Emperador, ya no tenía tantos motivos para disimular su propósito de asegurarse, con la independencia de Latinoamérica, mercados libres para su producción manufacturera, aparte de la ocasión para rematar la liquidación del poderío trasatlántico de su ya inveterada rival, a la vez que aprovechaba la coyuntura para un cierto desquite en relación a la pasada actitud del gobierno de Madrid en su apoyo a la independencia de Norteamérica. (Cf., Carlos D'Ascoli, Esquema histórico-económico de Venezuela. Del mito del Dorado a la Economía del café, Caracas: Banco Central de Venezuela, 1970, pp. 204 y ss.
- (8) Citado por Carlos Irazábal, Hacia la Democracia (contribución al estudio de la historia económico-político-social de Venezuela) (Caracas: José Agustín Catalá Ed., 1974. 3a.ed.), pp. 90-91.
- (9) C. Irazábal, ob.cit., p. 95.
- (10) Cf., Héctor Malavé Mata, Formación histórica del antidesarrollo de Venezuela (La Habana: Ediciones Casa de las Américas, 1974), pp. 93-98.
- (11) Ch.C.Griffin, Los temas sociales y económicos en la época de la independencia, edición citada, pp. 72-73.
- (12) El caso de que una nobleza agraria haga suya la teoría revolucionaria de la burguesía -el ideario liberal- va a ser factor condicionante en el hecho de que la revolución independentista latinoamericana sea tan distinta a la revolución burguesa en Europa: la nobleza criolla, por circunstancias históricas y económicas, adoptaba una ideología que no era suya. Cf., Irazábal, ob.cit., pp. 105 y ss.
- (13) Sobre la doctrina Monroe, Cf., Federico G. Gil, Latinoamérica y Estados Unidos. Dominio, cooperación y conflicto, (Madrid: Editorial Tecnos, 1975. Trad. de D. Álvarez M.), Cap. III, pp. 59 y ss, en especial, pp. 62-63.
- (14) En Brasil la independencia se alcanzó sin una lucha que mereciese ese nombre: en efecto, hay interesantes diferencias entre la independencia de Brasil y la del resto de Iberoamérica. Portugal había renunciado a cumplir plenamente su función de metrópoli económica respecto de sus tierras americanas, manteniéndose al contrario dentro del bloque británico para poder mantener las líneas dominantes

de su circulación económica. Cuando se produce la fuga de la Corte a Río de Janeiro, ésta ciudad se transforma en la capital del imperio lusitano e Inglaterra pasaba a ser en la vasta colonia la nación más favorecida: todo ello debilitó los ya frágiles lazos entre el Brasil y su metrópoli política. En 1320, al estallar la revolución liberal en Portugal, el rey se decidió por el retorno y dejó a su hijo Pedro como regente del Brasil. Don Pedro proclamó la independencia en Ipiranga (1822), prácticamente sin lucha. Posteriormente, la corona imperial del Brasil iba a ser vista como el fundamento de la salvada unidad política de la América portuguesa.

- (15) José Antonio Silva Michelena, Cambio Político en Venezuela: Crisis de la Democracia (Caracas: Centro de Estudios del Desarrollo-Universidad Central de Venezuela, 1970), Cap.II: "El proceso histórico", pp. 82-83.
- (16) Juan Oropesa, 4 siglos de historia venezolana. Desde el Descubrimiento hasta la Revolución de Octubre (Caracas: Ed. Centauro, 1973. 2a. ed.), p. 84.
- (17) Oropesa, ob.cit., pp. 85-86. Cf., Juan Vicente González, Biografía de José Félix Ribas (Caracas: Biblioteca Popular Venezolana, 1946)
- (18) Tulio Chiossone, Los problemas sociales en la formación del Estado venezolano (Caracas: Gráfica Americana, 1964)
- (19) Chiossone, ob.cit., pp. 9 y 25.
- (20) Ibid., sobre la discriminación por razones de tipo racial, pp. 9 y ss. Para una discusión, en términos ideológicos, sobre la guerra de independencia como guerra civil y/o guerra internacional: Augusto Mijares, Ideología de la revolución emancipadora, ed.cit., pp. 14 y ss. Según Mijares, a partir de una interpretación del discurso bolivariano, la guerra adquiriría el carácter de un episodio universal al ser una contraposición entre las tendencias universales de la época, de revolucionarios y conservadores.
- (21) Cf., especialmente, el trabajo "Para un esquema sobre la participación de las clases populares en el movimiento nacional de independencia en Venezuela, a comienzos del siglo XIX", recogido en el libro, del mismo autor, Historiografía marxista venezolana y otros temas (Caracas: Dirección de Cultura-Universidad Central de Venezuela, 1967), pp. 69-99. Se trata de una contribución a una ponencia presentada por el prof. Pierre Vilar, de la Universidad de París, en el X Coloquio Internacional de la Comisión Internacional de Historia de los Movimientos Sociales y de las Estructuras Sociales del Comité Internacional de Ciencias Históricas, sobre el tema: "La participación de las clases populares (masas y dirigentes) en los movimientos nacionales de independencia en Oriente y Occidente"; agosto de 1965, con ocasión del XII Congreso Internacional de Ciencias Históricas, reunido en Viena (Austria).
- (22) Carrera Damas, trabajo citado, ob.cit., p. 72. Resulta interesante el cotejo del trabajo de Carrera Damas con el de Pierre Vilar, entre el caso venezolano y el ámbito latinoamericano, respectivamente. Así, Cf., Pierre Vilar, "La participación de las clases populares

en los movimientos de independencia de América Latina", recogido en La independencia de América Latina (Buenos Aires: Ed. Nueva Visión, 1973), pp. 45-63.

- (23) La eclosión de una teoría libertaria en 1910, entre los sectores cultos de la población venezolana, permitiría datar su germinación a periodos anteriores, aunque se trataría de una ideología todavía sumaria y cargada de elementos tradicionales. Cf., P. Villar, trabajo citado, pp. 51-53.
- (24) Carrera Damas, ob.cit., p. 76.
- (25) Ibid., pp. 76-77. Para Ch.C. Griffin, la formación de las nuevas naciones no fue obra instantánea ni labor de pocos años; al contrario éstas iban germinando en sus orígenes dentro del recinto de la organización imperial; luego avozoraban con el fragor de las guerras emancipadoras, aunque, a decir verdad, "muchos patriotas no llegaron a ser venezolanos, chilenos, argentinos o mexicanos hasta haber transcurrido casi una generación. Así como las fronteras geográficas de las nuevas repúblicas permanecieron fluidas, del mismo modo los sentimientos de nacionalidad quedaron incompletos": Los temas sociales y económicos en la época de la independencia, ed.cit., pp. 21-22.
- (26) Carrera Damas, "Para un esquema ...", ob.cit., p. 78.
- (27) Ibid., p. 78.
- (28) Ibid., p. 79.
- (29) Ver notas 89, 91, 97 y 100 del capítulo primero de este trabajo. Cf., muy especialmente, Miguel Acosta Saignes, Vida de los esclavos negros en Venezuela (Caracas: Ediciones Hespérides, 1967. Prólogo de Roger Bastide).
- (30) Carrera Damas, "Para un esquema ...", ob.cit., pp. 79-84.
- (31) Germán Carrera Damas, "Algunos problemas relativos a la organización del Estado durante la Segunda república venezolana", recogido en su libro Tres temas de historia (Caracas: Facultad de Humanidades y Educación-Universidad Central de Venezuela, 1961. pp. 90-165), p. 100.
- (32) Carrera Damas, "Algunos problemas relativos ...", ob.cit., p. 103.
- (33) Carrera Damas, "Para un esquema ...", ob.cit., p. 86.
- (34) Más aún, la proclamación del principio no impedirá una sistematización política de la desigualdad a través de la distinción entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos, tal como puede verse en los distintos textos constitucionales del naciente Estado: Carrera Damas, "Algunos problemas relativos ...", ob.cit., p. 108.
- (35) Ibid., p. 109.
- (36) Entraríamos en la dinámica del esquema, parte de la cual se ha cejado entrever en líneas anteriores, es decir, las contradicciones dialécticas enfrentadas por los criollos.

- (377) Carrera Damas, "Para un esquema ...", ob.cit., pp. 96-97.
- (388) Ibid., p. 98. Se trata de un proceso magistralmente estudiado por Federico Brito Figueroa en Tiempo de Ezequiel Zamora (Caracas: José Agustín Catalá, Ed.,-Ediciones Centauro, 1975. 2a.ed.).
- (399) Suelen citarse los casos de Bernardo Monteagudo, mulato, y José Padilla, también hombre de color, quienes pudieron llegar a ser ministro en el Perú y a almirante en Colombia, respectivamente. Sin embargo, "En el estudio de las grandes revoluciones que ocupan un lugar prominente en la historia de la civilización moderna de Occidente es necesario reconocer la importante diferencia que existe entre movimientos como el de la revolución francesa de 1789 y el de la rusa de 1917, por un lado, y los de las revoluciones americanas por otro, tanto la del norte de 1776 como la del sur que se inicia en 1910. En las primeras revoluciones hubo una transformación fundamental, al eliminarse una clase dirigente y privilegiada, y al crearse no solamente unos nuevos sistemas de gobierno sino también una nueva sociedad. En el caso de las revoluciones de independencia americanas el resultado fue la creación de nuevos Estados soberanos, pero no se produjeron transformaciones sociales tan importantes y fundamentales como en las revoluciones del viejo mundo. Solamente en nuestro siglo hemos visto aparecer en América movimientos cuyas consecuencias sociales, en México, en Bolivia y en Cuba, pueden quizás parangonarse con las producidas por las revoluciones clásicas ya mencionadas": Griffin, ob.cit., p. 11.
- (40) Germán Carrera Damas, El culto a Bolívar. Esbozo para un estudio de la historia de las ideas en Venezuela (Caracas: Instituto de Antropología e Historia-Universidad Central de Venezuela, 1969). El autor entiende por "culto a Bolívar", "la compleja formación histórico-ideológica que ha permitido proyectar los valores derivados de la figura del Héroe sobre todos los aspectos de la vida de un pueblo" (p. 21). En las conclusiones del trabajo se afirma, entre otras consideraciones, que "Dicho culto rendido a Bolívar constituye el eje del culto heroico venezolano, en su forma más general. Se ha estructurado históricamente a partir del momento en que las hazañas por él cumplidas o personificadas culminaron con el triunfo después de una lucha larga, azarosa y sangrienta. Fama y prestigio, a un nivel hasta entonces desconocido por los americanos, rodearon su nombre y lo distinguieron como el autor de la libertad de los pueblos" (...); más aún, "Al estructurarse como un culto, la veneración por Bolívar se convirtió en un factor de la vida política y social, además de principal componente de la fórmula cultural del pueblo venezolano. Por una parte, la dirección y la protección de ese culto por parte del Estado se tradujo en su organización administrativa e institucional. Por otra, el programa ideológico simbolizado por Bolívar ha prestado su prestigio a las más disímiles y contrapuestas causas" (pp. 285 y 290).
- (41) Germán Carrera Damas, Boves. Aspectos socioeconómicos de la guerra de independencia (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela, 1972. 3a.ed.), p. 68. En éste sentido, habría numerosos ejemplos del peso decisivo del testimonio bolivariano en la historiografía sobre la independencia, peso que deriva de "la condición de testigo perfecto que se le ha reconocido a Bolívar contra toda norma metodológica y todo principio científico": Carrera Damas, "Boves ...", ed.cit., p. 78

- (42) Carrera Damas, "Boves ...", ed.cit., p. 68.
- (43) Cf., Eloy G. González, La ración del boia (Caracas: Emp. "El Cojo", 1908); del mismo autor: Al margen de la epopeya (Caracas: Ed. Elie, 1935); también su Historia de Venezuela. Desde el Descubrimiento hasta 1830 (Caracas: Ed. Las Novecades, 1943. 2 vols.). En igual sentido, Rufino Blanco Fombona, Bolívar y la Guerra a Muerte. Época de Boves, 1813-1814 (Caracas: Impresores Unidos, 1942). (Información bibliográfica suministrada por G. Carrera Damas).
- (44) Carrera Damas, "Boves ...", ed.cit., p. 69. Sobre la relación entre Bolívar y la nobleza criolla, afirma C. Irazábal que "No fue un hecho casual que Simón Bolívar, el Libertador, el hombre de más recia complexión intelectual del continente americano en su época, fuera un mantuano, un noble criollo, un propietario territorial. La clase a que perteneció, por su fortaleza económica, por su capacidad intelectual, por la subordinación política a que estaba sometida por parte de los españoles peninsulares, había de ser históricamente el estamento líder de la Independencia. Fubo de ser también un miembro de esa clase social el intérprete más fiel de la reivindicación fundamental -la Emancipación- que fue compartida en un momento dado por las mayorías americanas ... La posición social del Libertador que hubo de reflejarse en su pensamiento político y en su acción histórica en nada mengua la magnitud de su obra. Ninguna personalidad, por singular que sea, puede liberarse totalmente de los requerimientos materiales y espirituales de su época, de la sociedad donde actúa, de la clase social a que pertenece -por origen o por adopción- cuyos anhelos y reivindicaciones defiende y trata de imponer como normas fundamentales de esa sociedad": C. Irazábal, "Hacia la Democracia..." ed.cit., p. 66.
- (45) Carrera Damas, "Boves ...", ed.cit., p. 56.
- (46) Ibid., p. 104.
- (47) Ibid., p. 147.
- (48) El fenómeno mismo del bandolerismo, en la independencia y guerras civiles posteriores, guardaría una estrecha relación con las formas de vida en la llanura y los hábitos sociales del llanero, es decir, con unas condiciones socioeconómicas que perdurarán durante casi todo el siglo republicano. Sobre el llanero: Carlos Siso, La formación del pueblo venezolano. Estudios sociológicos (Madrid: Editorial Arca Enciso, 1951. 2 volúmenes), vol. II, pp. 130 y ss.; Daniel Mendoza, El llanero (estudio de sociología venezolana) (Madrid: Editorial América, s.f. Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociales. Ed. orig. en 1846); Víctor Manuel Ovalles, El llanero: Estudio sobre su vida, sus costumbres, su carácter y su poesía (Caracas: Tipografía Herrera Irigoyen, 1905).
- (49) La Sociedad Patriótica, "el primer partido político fundado en Venezuela" (Manuel Vicente Magallanes, Los partidos políticos en la evolución histórica venezolana, Caracas-Madrid: Editorial Mediterráneo, 1973, p. 16), había tenido su origen en un decreto de 14 de agosto de 1810, por el cual la Junta Suprema creó una especie de centro de estudios para el progreso material del país, bajo el nombre de Sociedad Patriótica de Agricultura y Economía, llamada después simplemente

'Sociedad Patriótica'. La versión historiográfica más generalizada habla de la transformación de la Sociedad en un club al estilo frances. Un contemporáneo, Robert Semple (Bosquejo del Estado Actual de Caracas {1810-1811}, Caracas: Ediciones del Grupo Montaña-Ed. Arte, 1964, pp. 113-114), describía a la Sociedad Patriótica como un organismo "que se reúne regularmente para tratar temas políticos y con frecuencia discute con muy pocas reservas las medidas o lo que -según sus miembros- debieran ser las medidas de su propio gobierno. Un número considerable de franceses forma parte de esta Sociedad, en la cual desempeñan papel importante. En efecto, esta Sociedad tiene marcadísimas tendencias de origen francés y una estrecha afinidad con el memorable club de los jacobinos, tanto por la violencia y extravagancia de los discursos que frecuentemente se pronuncian en sus sesiones como por su influencia en los acuerdos que adopta el gobierno" (citado por K.V. Magallanes, Los partidos políticos en la evolución histórica venezolana, ed.cit., pp. 18-19).

Con independencia de su origen, puede afirmarse que Bolívar y Miranda contribuyeron a darle una activa fisonomía política a la Sociedad Patriótica. La Sociedad tenía una junta directiva compuesta por un presidente, cuatro diputados, dos fiscales o censores, un tesorero, tres secretarios y un portero. Cada directiva suraba en sus funciones un mes, reponiéndose cada día primero. Si bien comenzó sesionando los días martes, jueves y sábados, a medida que se fueron agravando los sucesos y aumentando los miembros, sus reuniones se hicieron diarias, nocturnas, o cada vez que ello fuere aconsejable. Su doctrina era republicana y su objetivo inmediato el de lograr la independencia política absoluta. Hay que hacer notar que la Sociedad estaba integrada por muchos de los señores mantuanos, sectores ilustrados y, sobre todo, la juventud proveniente de las familias distinguidas o de abolengo caraqueño. La admisión de los miembros se realizaba por votación secreta y a las reuniones concurrían algunas damas, esposas o familiares de los socios, lo cual constituía una novedad en la ciudad de Caracas y era motivo de murmuraciones. En la Sociedad Patriótica se discutían materias de carácter político, civil, militar y hasta religioso, llevándose a su seno y al Congreso, proyectos de leyes, decretos y resoluciones. (Magallanes, ob. cit., pp. 20-21)

Para abril de 1811, la Sociedad Patriótica había asumido la vanguardia en la conducción del movimiento emancipador. Desde las tribunas sus líderes hacían un análisis del pasado histórico, denunciando la dominación colonial; enfrentados al sector más moderado que vacilaba ante la independencia, se mostraban partidarios de la ruptura política con la metrópoli, poniendo como ejemplo, significativamente, a los Estados Unidos y su régimen institucional. La Sociedad, pues, presiona activamente a favor de la declaración independentista. Por otra parte, a ello colaboraba su órgano de prensa, el periódico Patriota Venezolano, que apareció en junio de 1811. La Sociedad también tuvo su himno, el "Viva el bravo pueblo" y su bandera, de colores amarillo, azul y rojo, en franjas horizontales de mayor a menor. Para el momento de la declaración de independencia, julio de 1811, tanto el himno como la bandera fueron adoptados más tarde como símbolos del nuevo Estado. (Magallanes, ob.cit., pp. 27-28).

(50) Citado por Juan Oropesa, 4 siglos de historia venezolana, ed.cit., p. 75.

(51) Griffin, ob.cit., p. 28.



- (52) Cf., Materiales para el estudio de la cuestión agraria en Venezuela (Caracas: Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico-Universidad Central de Venezuela, 1964). a) 1917 (10 de octubre): "Decreto de Simón Bolívar sobre reparto y adjudicación de bienes secuestrados a españoles y americanos realistas a los oficiales y soldados del ejército patriota", vol. I, documento no. 112, p. 204. También, b) 182 (6 de enero): "Ley sobre reparticiones de Bienes Nacionales entre los Servidores de la Patria", vol. I, documento no. 137, pp. 263 y ss. (vol. I; correspondiente al período 1800-1830).
- (53) Cf., José Luis Salcedo-Bastardo, Bolívar: un continente y un destino (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1972), pp. 165 y ss.
- (54) En este sentido, José Luis Salcedo-Bastardo, Visión y revisión de Bolívar (Quito: Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1961. 5a. ed.)
- (55) Ch.C. Griffin, Los temas sociales y económicos en la época de la independencia, ed.cit., pp. 48-49.
- (56) Todas estas disposiciones las ratificaría Bolívar en posteriores ocasiones, con ocasión de su campaña militar en el Sur. Cf., Salcedo Bastardo, "Bolívar:", p. 169.
- (57) Ibid., pp. 232-233.
- (58) Ibid., pp. 240-241.
- (59) Ibid., pp. 230-231.
- (60) Daniel Guerra Iñiguez, El pensamiento internacional de Bolívar (Caracas: Editorial "Ragón", 1955), p. 56.
- (61) Guerra Iñiguez, ob.cit., p. 59.
- (62) Salcedo-Bastardo, Bolívar, p. 185; Guerra Iñiguez, ob.cit., pp. 131 y ss.
- (63) Simón Bolívar, Obras Completas (La Habana: Ed. Lex, 1950), vol. I, p. 294. Citado por Guerra Iñiguez, El pensamiento, pp. 138-139. El subrayado es nuestro. Para D. Guerra Iñiguez, "Lo fundamental del pensamiento internacional de Bolívar fue la creación de una confederación que abarcara a todos los países que habían pertenecido a España y a los cuales la lucha por la Independencia los había hermanado hasta el punto de que abrazasen aquella causa simultánea y solidariamente sin la más mínima reserva. Su pensamiento fijo fue reunir a todos los representantes de estas naciones, presentar a la América unida en un sólo bloque económico y político, fijando normas de carácter internacional que orientasen a la nueva comunidad americana por senderos propicios al logro de su esplendoroso destino" (...). "Esencialmente lo que quería Bolívar era que todas las naciones hispanoamericanas, teniendo unos mismos intereses, se uniesen en un cuerpo internacional para realizar entre ellas la justicia a través de los métodos civilizadores del Derecho": Guerra Iñiguez, ob.cit., p. 183.
- (64) Salcedo-Bastardo, Bolívar, ed.cit., en especial, pp. 207-208 y 217-218.

- (65) Salcedo-Bastardo (Bolívar: un continente y un destino, ed.cit., pp. 217-218) hace notar que Bolívar, en lo nacional, se declara netamente centralista; en cambio, en lo interamericano es federalista. Se trataría, en esta dualidad, de dos problemas diferentes que reciben un tratamiento también diferente: la federación continental es antitética de la federación nacional. Más aún, la federación americana en que Bolívar piensa es sui generis. En efecto, se postula la representación exterior unitaria y la defensa interna común, pero la federación hispanoamericana deja de ser tal al carecer de un Ejecutivo común, por lo que se acerca más bien a la confederación. El mismo Bolívar utilizó indistintamente los dos vocablos y, en algunos momentos, declaró gustar más del término "unión".
- (66) Tal es la opinión de Arístides Silva Otero, El Congreso de Panamá (Caracas: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales-Universidad Central de Venezuela, 1969. Cuadernos del Instituto, Serie Docencia, No. 3), p. 25.
- (67) Silva Otero, ob.cit., pp. 25-26; Cf., también, sobre la Santa Alianza y las relaciones interamericanas, Federico G. Gil, Latinoamérica y Estados Unidos. Dominio, cooperación y conflicto (Madrid: Editorial Tecnos, 1975. Trad. de D. Alvarez Monteagudo), pp. 60-62.
- (68) Silva Otero, ob.cit., p. 26.
- (69) Cf., Antonio Lago Carballo, "Los Regímenes políticos iberoamericanos" trabajo recogido en Maurice Duverger, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional (Barcelona: Editorial Ariel, 1970, pp. 577-609. 5a. ed. española, dirigida por J. Solé-Tura).
- (70) En Venezuela tenemos las Constituciones de 1811, 1819, 1821, 1830, 1857, 1858, 1864, 1874, 1881, 1893, 1901, 1904, 1909, Estatuto Provisional y Constitución de 1914, las de 1922, 1925, 1928, 1929, 1931, 1936, Reforma Parcial de 1945 y Constituciones de 1947, 1953 y 1961. Allan-Randolph Brewer-Carías, en Cambio político y reforma del Estado en Venezuela. Contribución al estudio del Estado Democrático y Social de Derecho (Madrid: Editorial Tecnos, 1974), pone de relieve el caso contradictorio de Venezuela en el sentido de que "Fue el primer país latinoamericano en proclamar su independencia política en 1810 y sus líderes políticos y militares lo fueron también de gran parte de la América Latina, correspondiendo a Simón Bolívar, por ejemplo, el título de Libertador, no sólo de su tierra natal, Venezuela, sino de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y, sin embargo, ha sido quizá uno de los países latinoamericanos más dependientes económicamente de la política norteamericana por ser un país monoprodutor y monoexportador de petróleo; fue el primer país de América Latina en proclamar la democracia como base de su régimen político en 1811, pero ha sido el país que menos ha disfrutado de la democracia en toda su historia política hasta 1958; fue el primer país de América Latina en tener Constitución política en 1811, pero ha sido el país de América Latina que más Constituciones ha tenido en toda su historia política, siendo la de 1961, actualmente vigente, dejando a salvo la de 1830, la que más años de duración ha tenido": Brewer-Carías, ob. cit., p. 125, nota 3.
- Para América Latina en general, anota con propiedad el prof. Lago Carballo que "Hasta haberse acomodado a la historia iberoamericana para encontrar, como una evidencia insoslayable, el hecho de que aque-

llos pueblos, desde la aurora misma de su independencia y aún antes, han tenido por su más alta vocación política vivir en un sistema de libertad y de democracia. Pero también es suficiente detenerse en la consideración de esa historia para concluir que tal deseo ha sido más una pretensión frustrada que una realidad conseguida. Por un lado, han marchado las grandes definiciones programáticas; por otro, las realidades cotidianas: golpes de Estado, dictaduras, fraudes electorales, marginalidad política del pueblo, escasa participación social ...": A. Lago Carballo "Los Regímenes ...", ed.cit., p. 577. Por otra parte, Lago Carballo puntualiza cómo el nacimiento a la vida independiente de los países latinoamericanos coincide casi con la aparición del constitucionalismo escrito; y en este sentido, resultaba lógico que los nuevos Estados pretendiesen afirmar su personalidad soberana a través de un instrumento jurídico, como la Constitución, que articulase de alguna manera su voluntad de ir hacia una organización racional y coherente de su vida política, siguiendo el doble ejemplo del espíritu codificador de la Revolución francesa y de los creadores de los Estados Unidos de América con su Constitución de Filadelfia. Esta temprana adhesión de Iberoamérica al constitucionalismo se ha correspondido con una facilidad, podríamos decir que casi grotesca, para reformar los textos constitucionales o elaborar unos nuevos, de tal manera que no es tarea fácil el determinar el número preciso de Constituciones promulgadas en los diversos países a partir de 1810. Junto a dicha "inflación constitucional" hay que destacar la falta de adhesión o acatamiento a los mismos preceptos constitucionales, muchas veces violados impunemente o modificados de acuerdo al interés más inmediato o al capricho político, sin consideración a los medios de revisión previstos en los propios textos ("Los Regímenes ...", ed.cit., pp. 581-582).

- (71) Cf., el importante Estudio preliminar de Caracciolo Parra-Pérez en La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y Documentos afines (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1959), pp. 21 y ss.
- (72) Cf., Pedro Grases, Traducciones de interés político-cultural en la época de la independencia de Venezuela (Caracas-Madrid: Ediciones Guadarrama, 1961. Estudio publicado en el tomo II de la serie sobre "El movimiento emancipador de Hispanoamérica", preparada y editada por la "Mesa redonda de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia", Caracas, 1961.)
- (73) "... No fue factor extraño a este comercio intelectual la escasa distancia frente a sus costas de las posesiones inglesas y holandesas de las Antillas con las cuales mantenía activo contrabando": Grases, Traducciones ..., ed.cit., p. 11.
- (74) Grases, ob.cit., pp. 12 y ss.
- (75) La Constitución de 1811 iniciaría en Venezuela la tendencia de los textos constitucionales por desarrollar la parte dogmática de la Constitución con preferencia a la parte orgánica de la misma (Cf., Ramón Escovar Salom, Evolución política de Venezuela (Caracas: Monte Avila Eds., 1975. 3a.ed.), p. 86.
- (76) Caracciolo Parra-Pérez, estudio preliminar citado, en La Constitución Federal ..., p. 24.

- (77) Parra-Pérez, ob.cit., pp. 52-53. Los subrayados son nuestros.
- (78) Caracciolo Parra-Pérez, Historia de la Primera República de Venezuela (Caracas: Tipografía Americana, 1939. 2 volúmenes), vol. II, p. 130 y ss.
- (79) Parra-Pérez, Historia de la ..., ed.cit., vol. II, p. 131.
- (80) Brewer-Carías, Cambio político y reforma del Estado en Venezuela, ed.cit., p. 132. Para T. Chiossone, Los problemas sociales en la formación del Estado venezolano (ed.cit., p. 13), la organización política del municipio venezolano sería el germen de la idea federativa que tomaría cuerpo en la Constitución de 1811.
- (81) Art. 72 de la Constitución de 1811. El caudillismo político-regional venezolano encontraba así una consagración formal en el primer texto constitucional que procuraba garantizar el poder de la aristocracia regional sobre sus regiones, en un intento por frenar la hegemonía de la capital tradicional e "histórica" de Caracas (Brewer-Carías, ob.cit., p. 133). A partir de 1812, cuando las instituciones republicano-federales hacen crisis con el estallido de la contienda bélica, sólo la autoridad de Bolívar será capaz de sujetar las actividades y pretensiones de los caudillos militares regionales, y así se comprende que, a su muerte, la realidad del caudillaje emerge con fuerza en el sistema político.
- (82) Parra-Pérez, est. prelim., La Constitución Federal ..., ed.cit., pp. 24-26.
- (83) Ibid., p. 43. Según Carlos Irazábal, para los constituyentes de 1811, la cuestión fundamental es una cuestión de carácter político, la de organizar Estados republicanos eligiendo entre dos tendencias, la centralista o la federal. La escogencia federalista era el producto de imposiciones de la realidad social, en abierta pugna contra un sentido de unidad nacional: "No se podía con la promulgación de una simple ley constitucional superar la realidad ambiente sedimentada durante centurias coloniales, en cuyo período no se logró siquiera afianzar la unidad geográfica y vital. Por doquiera los núcleos urbanos, las pequeñas oligarquías municipales ... se aprestaron a constituirse por separado, movidos por ansias autonomistas, en cuerpos que, por estar en muchas partes constituidos por individuos ligados por vínculos de sangre y afinidad, fueron llamados con entera propiedad como Juntas de Familia ... Disgregado el poder central por la crisis política habían de surgir poderes locales que aspiraban en las respectivas localidades reemplazar la autoridad central en crisis o inexistente": C. Irazábal, Venezuela esclava y feudal. Episodios de la historia de Venezuela. Ensayos de interpretación dialéctica (Caracas: José Agustín Catalá Ed., 1974. 2a.ed.), pp. 66-67.
- (84) Cf., Las Constituciones de Venezuela (Recopilación y estudio preliminar de Luis Mariñas Otero. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1965. Prol. de M. Fraga Iribarne), pp. 3 y ss.
- (85) Art. 1 de la Const. de 1811.
- (86) Ibid., art. 26.
- (87) Mariñas Otero, est. prelim., p. 9.

- (88) Arts. 141 y 195 de la Constitución de 1811; Mariñas Otero, ob.cit., pp. 9-10.
- (89) Escovar Salom, ob.cit., p. 87. No acaba de lograrse una unidad en la interpretación del pensamiento constitucional bolivariano, por menos en los autores que hemos consultado. Así, por ejemplo, para Escovar Salom (ob.cit., p. 59), "Las constituciones de Bolívar constituyen un intento orgánico por encontrar solución americana a la organización constitucional sin que eso nos haga olvidar que el Libertador por su formación y por su temperamento, tenía la tendencia a encontrar soluciones políticas en las cuales más se contemplaba veces la antigüedad clásica que la materia prima de las realidades americanas"; en cambio, para T. Chiossone (ob.cit., p. 35), el proyecto constitucional de Bolívar pretendería sobre todo la creación de Repúblicas autónomas regidas por gobiernos fuertes, en los que mezclarían los principios de la soberanía popular con ideas políticas constitucionales derivados de la observación del medio venezolano, principios igualmente constitucionales depurados de las influencias de la ideología liberal-romántica, que consideraría inadaptables a pueblos de constitución étnico-social excepcional y diferenciada. En este marco conceptual y sobre la Constitución de Bolivia, puede verse Rafael Sureda Delgado, Ideario de Bolívar en materia constitucional (Caracas: Editorial Arte, 1966).
- (90) Mariñas Otero, ob.cit., pp. 16 y ss. Cf., Jaime Suria, Iglesia y Estado (1810-1921) (Caracas: Ediciones del Cuatricentenario, 1967. Prol. de P. Grasses).
- (91) Tit. II, sec. I, art. 1 de la Constitución de 1919.
- (92) Tit. III, sec. I, arts. 1, 2 y 4 de la Constitución de 1919.
- (93) Tit. IV, sec. II, art. 3 de la Constitución de 1919.
- (94) Mariñas Otero, ob.cit., pp. 16-19.
- (95) Ibid., p. 20.
- (96) Art. 10 de la Constitución de 1821.
- (97) Según el art. 83, el presidente, vicepresidente, senadores y diputados serían nombrados la primera vez por el Congreso; en realidad, nunca se verificaron elecciones para dichos cargos durante el plazo de vigor de la Constitución. (Mariñas Otero, ob.cit., p. 22).
- (98) Mariñas Otero, ob.cit., p. 26.
- (99) Citado por C. Irazábal, Venezuela esclava y feudal ..., ed.cit., pp. 125-126.
- (100) Juan Oropesa, 4 siglos ..., ed.cit., p. 175.
- (101) Citado por Oropesa, p. 176. Cf., Laureano Vallenilla Lanz, Cesarismo Democrático (estudio sobre las bases sociológicas de la constitución efectiva de Venezuela) (Caracas: Tipografía Universal, 1929. 2a.ed.). Para Oropesa, a partir de 1930 estaremos en presencia de una alianza mantuano-militar que Páez mismo estimuló de diversas

maneras: "La fórmula, por lo demás, se revelará invariable a través de casi cien años de revoluciones y contrarrevoluciones. En Venezuela, al revés de lo que pasó en otros países hispanoamericanos, la oligarquía civilista no pudo valerse por sí misma, organizando a su sabor una de esas democracias formales, como aquellas que en Colombia y Chile han perpetuado el prestigio de unos cuantos apellidos y junto con ello el reverencial acato por la organización jurídica de la Nación. Bien que invariable en su composición, la fórmula venezolana del poder admite variantes, según se rompa o se mantenga el equilibrio entre la clase burguesa -muy débil siempre- que suministra los letrados, y el caudillo con su estamento de subjeses, que le están ligados mediante vínculo de obediencia puramente feudal": ob.cit., pp. 177-178.

- (102) H. Malavé Mata, Formación histórica ..., ed.cit., pp. 115 y ss.
- (103) Cf., Materiales para el estudio de la cuestión agraria en Venezuela (Caracas: Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico-Universidad Central de Venezuela, 1964. Volumen I, correspondiente al período 1800-1830.).
- (104) G. Carrera Damas, Noves. Aspectos socioeconómicos de la guerra de independencia, ed.cit., p. 139. Cf., Miguel Acosta Saignes, Latifundio (México: Ed. Popular, 1938); C. Irazábal, Facia la Democracia (México: Ed. Morelos, 1939. 1a.ed.); Juan Uslar Pietri, Noves. Historia de la Guerra de Independencia de Venezuela (Caracas: Cromotip C.A., 1950); Luis Troconis Guerrero, La Cuestión Agraria en la Historia Nacional (Caracas: Biblioteca de Autores Tachirenses, 1962. No. 29.).
- (105) Seguimos, una vez más, a Carrera Damas, Noves ..., ed.cit., pp. 195 y ss.
- (106) Cf., Materiales, 1800-1830, 1811: "Ordenanzas de Llanos, de la Provincia de Caracas, hechas de orden y por comisión de su sección legislativa del Congreso, por los diputados firmados a su final", Documento No. 28, pp. 65 y ss.
- (107) Ibid., pp. 83-84.
- (108) Carrera Damas, ob.cit., pp. 196-197. Sobre los llaneros, ver nota 43 de éste capítulo.
- (109) Carrera Damas, p. 201.
- (110) Ibid., p. 207.
- (111) Federico Brito Figueroa, Historia Económica y Social de Venezuela (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela, 1975), vol. I, p. 190. Cf., también, Domingo Alberto Rangel, La Venezuela agraria (Caracas: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales-Universidad Central de Venezuela, 1969. Vol. I, de la serie "Capital y Desarrollo"), pp. 42 y ss.
- (112) Materiales, 1800-1830, ed.cit.,: en líneas generales, sobre adjudicación de grandes propiedades a altos oficiales del ejército patriota, es útil la documentación de los años 1821, 1822 y 1825; p. 291 y ss., 319 y ss., y 417 y ss., respectivamente.

- (113) Brito Figueroa, ob.cit., I, p. 219.
- (114) Ibid., p. 220.
- (115) Cf., Carlos D'Ascoli, Esquema histórico-económico de Venezuela . ed.cit., pp. 233 y ss.
- (116) Ch.C. Griffin (ob.cit., pp. 15y19) hace notar, a escala latinoamericana, el efecto destructor de las guerras luego de una época de prosperidad, según él, al final del período colonial, que trajo como consecuencia la ruina de la economía de varias regiones: en México, Colombia y Venezuela, Alto Perú y sur de Chile, el carácter de guerra civil del conflicto reflejaba su alta ferocidad en las prácticas comunes a ambos bandos. La interrupción de las rutas comerciales de comercio y de comunicación, y las dificultades para conseguir un balance equilibrado entre las exportaciones y las importaciones, trajeron una serie de crónicas crisis financieras que vieron a su vez una influencia depresiva sobre la estabilidad política.
- (117) Según cálculos de Brito Figueroa, ob.cit., I, p. 222.
- (118) Ibid., p. 223.
- (119) Para estos puntos, M. Kaplan, Formación del Estado nacional en América Latina, ed.cit., pp. 141-149. Desde un punto de vista metodológico, es de gran interés la aportación de Samir Amín, El desarrollo desigual. Ensayo sobre las formaciones sociales de capitalismo periferico. Barcelona: . . . onane . . . a.e . Trad. de M. Vidal).
- (120) "El interés británico por la región data de los días coloniales, pero aumentó con la obtención de la Independencia. No sólo quisieron los británicos proteger a Latinoamérica, con su omnipotencia naval y su vasto poder económico, de los designios de otras potencias europeas, sino que muchos súbditos de Gran Bretaña lucharon en las filas de las fuerzas patrióticas durante las guerras de Independencia. El comercio británico con la región aumentó rápidamente una vez que las naciones latinoamericanas se emanciparon. Este aumento fue acompañado por el desarrollo de las inversiones británicas, que en 1830 sumaban casi 200 millones de dólares. Por lo que se refiere a asuntos comerciales y a conexiones culturales, ningún otro país ocupó una situación más privilegiada en Latinoamérica durante el siglo XIX, preeminencia que sólo le fue disputada a Gran Bretaña cuando los Estados Unidos surgieron como potencia industrial y militar". Los ingleses iban a ser los pioneros de la construcción de los ferrocarriles latinoamericanos; la mayor parte de los préstamos extranjeros se obtenían en Londres. Del conjunto de países Argentina asumió más de la tercera parte del capital británico en el continente, destinado en aquella nación a grandes inversiones en ferrocarriles, envasado de carnes, cría de ganado, bancos comerciales, empresas navieras e instalaciones portuarias. Además, Argentina se convirtió en el mejor cliente de los productos manufacturados ingleses, y Gran Bretaña, a su vez, se abasteció en la Argentina de casi toda su demanda de carne: Cf., Federico G. Gil, Latinoamérica y Estados Unidos ..., ed.cit., p. 49.

- (121) Cf., C. D'Ascoli, Esquema ..., ed.cit., pp. 252 y ss.
- (122) Brito Figueroa, ob.cit., vol. I, p. 233.
- (123) Ibid., pp. 247-249.
- (124) Según la caracterización de Brito Figueroa, p. 253. En este sentido, el equilibrio logrado aparentemente por la República oligárquica, va a ser siempre inestable: "para poder subsistir, se debate entre la permanente insurgencia de la masa rural y las conspiraciones de elementos de la misma estirpe social, que en razón de su espurio enriquecimiento han devenido en eficaz fuerza represiva del Estado oligárquico-terrateniente. No pocas veces los militares descontentos y ambiciosos incorporan bajo su bandera a la famélica masa humana que vegeta en los latifundios o deambula "aguerrillada" por los llanos y serranías": Ibid., p. 277.
- (125) Ibid., p. 257.
- (126) Ibid., pp. 258 y ss.
- (127) Ibid., pp. 262-264.
- (128) Ibid., pp. 265-267. (cálculos y estimaciones; hay que tomar en cuenta la carencia de estadísticas o su relativa fiabilidad cuando existen).
- (129) Ibid., p. 272.
- (130) "... Venezuela continuó regida por un sistema social donde coexistían el régimen esclavista y formas equivalentes al régimen de servidumbre. Sobre esta realidad histórica concreta, los ideólogos, los amos de la riqueza social y los caudillos militares edificaron el orden jurídico y político": Brito Figueroa, ob.cit., vol.I, p. 271.
- (131) C. Irazábal, Hacia la Democracia ..., p. 134.
- (132) José Antonio Páez, Autobiografía, 1869-1870, New York, vol.II, pp. 31-32. Citado por Irazábal, p. 135.
- (133) L. Mariñas Otero, estudio preliminar de Las Constituciones de Venezuela, ed.cit., p. 33 y ss.
- (134) Art. 5 de la Constitución de 1930.
- (135) Ibid., art. 6.
- (136) Art. 10.
- (137) Brito Figueroa, ob.cit., I, pp. 273-274, afirma con acierto que se trataba de una Constitución "destinada a eliminar la intervención política de las masas populares y a otorgar los derechos de ciudadanía exclusivamente a los terratenientes y rentistas, a los descendientes de las "oligarquías municipales" y a los caudillos militares enriquecidos con las tierras destinadas a los soldados que habían realizado la emancipación".

- (138) Ibid., pp. 274-275.
- (139) Escovar Salom, Evolución política de Venezuela, ed.cit., p. 63. "El ideario demo-liberal, burgués, de la revolución latinoamericana carecía de la base económica adecuada y sus abanderados y dirigentes no fueron burgueses sino propietarios territoriales, feudales semifeudales, esclavistas, quienes, por intereses de clase, no podían rebasar los linderos de un mero cambio político -la Independencia, la tiranía doméstica- porque echar abajo los pilares de la economía, peana de su poderío social, hubiera equivalido a una auto-destrucción. Y por eso, los principios, los programas políticos, los ideales de igualdad proclamados por esos dirigentes fueron, en la práctica, simple retórica": C. Irazábal, Hacia la Democracia ... ed.cit., p. 128.
- (140) Escovar Salom, ob.cit., p. 90.
- (141) Art. 186 de la Constitución de 1830.
- (142) Mariñas Otero, trabajo citado, p. 36. Para una historia política y militar de la República durante los primeros años de su existencia, puede consultarse a Caracciolo Parra-Pérez, Mariño las guerras civiles (Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, Lumenes).
-

[121]

- C A P I T U L O T E R C E R O -

" EL REGIMEN POLITICO DEL CAUDILLO "

1) Caracterización del Caudillismo.-

(I)

La necesidad de interpretar los fenómenos políticos latinoamericanos desde una óptica distinta a la tradicional y simplemente formal de la evolución jurídica, ha llevado al prof. R. Escovar Salom a tomar en cuenta dos conceptos diferentes, el de la constitución jurídica y el de la constitución política, tomando como base la conocida distinción de Herman Heller (1), para quien la constitución jurídica vendría a ser sólo una regulación parcial de la conducta social integrada en el Estado, y la constitución política un complemento de la regulación prevista por lo jurídico. Desde el punto de vista de la tradicional hermenéutica, el orden constitucional es concebido como un círculo cerrado de normas, ajeno al contexto social o a hipótesis de conducta colectiva distintas a lo pautado en las normas escritas de las constituciones y de las leyes. La constitución liberal ilustró a la perfección el anterior criterio de que, paralela a ella, pudiera desarrollarse un estilo de acción no previsto por la norma. Y ocurrió precisamente en América Latina, donde fuerzas políticas y sociales de diverso signo desviaron muchas veces y de modo persistente, el naciente esquema constitucional creado según los modelos de Europa y de los Estados Unidos.

En el caso de Venezuela, en efecto, la Constitución contempló un conjunto de normas para el quehacer colectivo, pero en forma simultánea se dieron impulsos propios, extraconstitucionales, que no sólo rozaron el ordenamiento establecido, sino que a menudo lo infringieron y lo arrollaron con violencia, como expresión del hecho cierto de que la norma constitucional no llegó a ser, ni mucho menos, la única regulación imperante del sistema político desde sus propios orígenes. De ahí la importancia del estudio de una constitución no escrita, ya que "... debemos reconocer la existencia de un derecho político escrito y de una constitución no escrita, no normada, pero que algunas veces fue más fuerte que la creación pura de los constituyentes y de los legisladores" (2). Según ello, el derecho constitucional latinoamericano y venezolano presentaría con agudeza el conflicto entre normalidad, entendida como realidad, y normatividad, concebida como norma, de manera que "Los accidentes del Estado de Derecho en la América Latina no siempre son dificultades que pueda resolver el Derecho Político, por muchas que sean sus combinaciones para imaginar el funcionamiento de los poderes. Una constitución -como expresó

Lasalle- resulta de las relaciones reales de poder de la sociedad, es siempre necesariamente una relación de poder. De ahí que cuando esta relación cambia, y el orden constitucional no es capaz de combinar dentro de sí otras formas que sustituyan las anteriores, la Constitución se rompe" (3). El proceso político venezolano del siglo XIX se iba a desenvolver en el marco de esta dialéctica muchas veces violenta, de discontinuidad crónica del orden constitucional: una normativa inspirada en los modelos foráneos chocaría irremediabilmente con la realidad socioeconómica del país y con su expresión política definitiva: el poder del caudillo.

Aludimos, con los términos caudillo y caudillismo, a un poder real contrapuesto a la constitución jurídica propiamente dicha; caudillo y caudillismo configuran un sistema de poder que se coloca fuera de aquélla, la condiciona o la infringe, la crea o la impone. Es claro que el caudillo, latinoamericano o venezolano, -cuya autoridad no emana de juntas, directorios o constituciones-, es la resultante de una determinada sociedad. Si bien es cierto que con frecuencia se impone por sugestión, personalidad o carisma, la realidad es que el caudillo americano es, sobre todo, la síntesis de un conjunto de relaciones efectivas de poder, derivadas ellas mismas de circunstancias sociales, económicas y hasta naturales, donde la idea de Estado y de régimen constitucional son conceptos demasiado abstractos y con escasa capacidad para normar relaciones sociales distintas a las recogidas en la organización formal (4).

Max Weber, en Economía y Sociedad (5), caracterizó con su habitual profundidad el problema que nos ocupa desde el punto de vista de la teoría sociológica, y no podemos sino recordar las categorías conceptuales del brillante pensador y sociólogo alemán. En la distinción de los tres tipos ideales de dominación, Max Weber estudia la de carácter carismático, que descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o reveladas: la autoridad carismática. En éste caso, se obedece "al caudillo carismáticamente calificado por razones de confianza personal en la revelación, heroicidad o ejemplaridad, dentro del círculo en que la fe en su carisma tiene validez" (6). Para Weber, habría que entender por carisma "la cualidad, que pasa por extraordinaria (condicionada mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de profetas que de hechiceros, árbitros, jefes de cacería o caudillos militares), de una personalidad, por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas - o por lo

menos específicamente extracotidianas y no asequibles a cualquier otro-, o como enviados del dios, o como ejemplar y, en consecuencia, como jefe, caudillo, guía o líder" (7). Según Weber, la validez del carisma vendría dada por el reconocimiento por parte de los dominados; psicológicamente, se trataría de una entrega personal surgida del entusiasmo, de la indignación o de la esperanza. Si la jefatura carismática no aporta ningún bienestar a los dominados, se presenta la probabilidad de que su autoridad carismática se disipe. La dominación carismática supone, además, un proceso de comunización de carácter emotivo, en el que el cuadro administrativo no es ninguna burocracia, ni menos profesional; se trataría más bien de un "séquito", de los "hombres de confianza". No hay "jerarquía", ni "jurisdicción", ni "competencias", sino sólo limitación espacial o a determinados objetos del carisma y la "misión". No existe una "magistratura" firmemente establecida, sino misioneros comisionados carismáticamente con una misión; no existen reglamentos o preceptos jurídicos abstractos, ni aplicación racional del derecho, sino que formalmente lo decisivo son las creaciones de normas de caso en caso, como en una especie de creación de nuevos mandamientos (8).

Por otra parte, el héroe militar o el jefe carismático buscan medios materiales para su poder y afianzamiento de su prestigio de mando. En ellos existe un desdén por la actividad económica racional o tradicional "de cada día", es decir, se daría un rechazo al logro de ingresos regulares en virtud de una actividad económica dirigida a ello de un modo continuado. En efecto, las formas típicas de la cobertura de necesidades de carácter carismático serían las mecenásticas -donaciones, sobornos, grandes propinas-, las mendicantes y el botín o la extorsión violenta o -formalmente- pacífica (9). Si atendemos a la relación entre burocracia y dominación carismática, afirma Weber que "En oposición a toda especie de organización oficial burocrática, la estructura carismática no presenta ningún procedimiento ordenado para el nombramiento o sustitución; no se conoce ninguna "carrera", ningún "ascenso", ningún "Sueldo", ninguna formación profesional del portador del carisma o de sus ayudantes, ninguna autoridad a la cual se pueda apelar. Tampoco pueden asignársele jurisdicciones locales o competencias exclusivas. Y, finalmente, no existen instituciones independientes de las personas y del estado de su carisma puramente personal en la forma de las "magistraturas" burocráticas" (10). Pero lo más interesante para nuestro estudio es que la situación de la autoridad carismática es, por su misma naturaleza, específicamente inco-

-table. El portador puede perder el carisma, quedar privado de su aureola de prestigio frente a sus adeptos: "Su misión queda entonces extinguida, y la esperanza busca un nuevo portador carismático" (11). Y es que, en realidad, el carisma puro no reconoce otra legitimidad que la derivada de la propia fuerza que sin cesar se justifica: "El héroe carismático no deriva su autoridad, como ocurre en las "competencias" oficiales, de normas y reglas o, como en el poder patrimonial, de la tradición o de la promesa de fidelidad feudal. Sólo la alcanza y la mantiene por la prueba de sus propias energías en la vida. Si quiere ser un profeta, debe hacer milagros; si quiere ser un caudillo guerrero, debe realizar acciones heroicas" (12). Ahora bien, anota Weber que el destino específico del carisma va quedando pospuesto a medida que se desarrollan las organizaciones institucionales permanentes. En otras palabras, el camino hacia la racionalización de la vida política y social, esto es, la presencia progresiva de una burocracia, de un ejército profesionalizado, de una racionalización de la actividad económica, implican la disminución del radio de acción de la estructura carismática. Como dice el sociólogo alemán, "Con la racionalización de la satisfacción de las necesidades políticas y económicas tiene lugar inevitablemente, en cuanto fenómeno universal, la divulgación de la disciplina. Y esto reduce con frecuencia la importancia del carisma y del obrar individualmente diferenciado" (13).

(II)

Es un hecho que en América Latina, el Estado postcolonial del siglo XIX se estructura en condiciones de generalizado desequilibrio. El surgimiento o la profundización de los conflictos socioeconómicos entre intereses regionales y sectoriales, entre la capital y el interior, entre librecambistas y proteccionistas; los conflictos político-ideológicos entre conservadores y liberales, aristocratizantes y demócratas, unitarios y federales, civiles y militares, se resuelven muchas veces por vía de sangrientas guerras civiles que abonan el campo para la emergencia de caudillos -locales, regionales y nacionales-, cuyo vínculo con las masas se resume en lazos de lealtad personal directa: "El caudillo puede utilizar esta función dirigente y mediadora que se le confiere, ya sea para replegar-se hacia el poder regional y local, ya para pretender el logro y el ejercicio del poder nacional" (14). Es evidente que en este contexto, el modelo importado de soluciones políticas, europeas y norteamericanas, no va a ser la expresión real de un proceso interno: la inexistencia de una bur-

-guería capitalista, la debilidad y dependencia de los estratos medios, el atraso y la marginalidad de las mayorías populares, condicionan el hecho de que el sistema político-institucional sea sobreimpuesto de manera arbitraria y forzosa sobre estructuras básicamente tradicionales. Se produce un choque, prácticamente constante, entre el modelo ideológico y sus formas institucionales, y las estructuras y prácticas reales, que confluye de hecho y paradójicamente en la conformación de un Estado netamente oligárquico bajo la ficción teórica liberal. En este marco, "El dominio político de la oligarquía se ve favorecido por la inexistencia de partidos dotados de programas principistas, amplia organización formalizada y ancha base. Los existentes, oficialistas u. opositores, son partidos de notables conglomerados de grupos personalistas y de clanes, que buscan asegurar el manejo de la maquinaria política, tanto en el plano nacional como local. El aparato de gobierno es, de hecho, el único partido viable y formal" (15). De allí que -como afirman S.J. y B.H. Stein-, caudillo, cacique o coronel "funcionaban como el gobierno verdadero, legitimado por el sistema político, respetado por los gobiernos nacionales y sus representantes locales en la burocracia judicial, administrativa y militar" (16).

Nota común de dicho sistema político es la tendencia a prevalecer una concepción absolutista y centralista del poder ejecutivo: se va de la dictadura unificadora a la "apertura" liberal-democrática de participación muy restringida, o bien se combinan en él elementos de ambos tipos, bajo la hegemonía oligárquica. Las instituciones funcionan como garantía de la consolidación y expansión del sector agroexportador. La división de poderes o el régimen parlamentario son inexistentes y, en su lugar, un presidencialismo macrocefálico constituye la práctica real de la mecánica gubernamental. Cuando algunos países adopten el sistema federal -México, 1824-1836 y desde 1857; Argentina desde 1853; Colombia, 1863-1886; Venezuela, como consecuencia de la guerra federal de 1859-1863; Brasil desde 1889- se va a tratar de un federalismo puramente formal que evolucionará, de hecho, hacia la centralización y el unitarismo. Los derechos individuales son declarados solemnemente en los textos constitucionales, pero ignorados o subestimados en la práctica; el sufragio es altamente restrictivo y los derechos sociales y económicos no aparecerán hasta bien entrado el siglo XX.

En el fondo subyace una concepción autoritaria del ejercicio de poder en la que el caudillo es su máxima personificación. Como bien dice H. Malavé Mata, en el sistema caudillista "El derecho reconocía como ú-

-neco rival a la fuerza porque las ordenanzas de la espada invadían continuamente los fueros de la ley. Morir en combate contra el gobierno era sucumbir con frustraciones y agravios. Vencer al gobierno significaba asaltar las gangas del poder. La república era tierra de rebeldes en acecho que no reconocían la vigente organización jurídica y política porque apenas concebían autoridad y justicia de acuerdo a los valores de su propio código rural⁽¹⁷⁾. Se trataría, entonces, de describir un particular tipo de autoritarismo, cuyo grado varía a través de los diferentes momentos del siglo XIX latinoamericano y venezolano.

En este sentido y bajo una perspectiva de amplitud, caudillismo en América Latina ha venido a significar alguna alta personalidad o régimen cuasi-militar cuyos mecanismos de partido, procedimientos administrativos y funciones legislativas, son sujeto del íntimo e inmediato control de un líder carismático y de su cuadro más próximo de ayudantes; aunque fuera de América Latina, este amplio uso del término haya hecho lentamente del mismo un sinónimo de sistema político controlado por personal militar, lo cual, en rigor, no se corresponde con el fenómeno caudillista en sentido estricto, como tendremos oportunidad de ver. Y es que, históricamente, si seguimos a K.H. Silvert (43), el caudillo fue un líder autoproclamado; usualmente, un oficial militar -aunque a menudo algunos fueron civiles-, apoyado, y este es el factor diferencial principal con el régimen militar contemporáneo, por un ejército irregular no profesional, reclutado fundamentalmente en las áreas rurales y utilizado como catapulta en la extensión de su influencia hacia la capital nacional.

Los orígenes del caudillismo podrían encontrarse en los últimos años del período colonial, e incluso antes: se ha dicho, con mayor o menor suerte, que desde un punto de vista de puras relaciones de mentalidad, las ambiciones personales de muchos conquistadores podían parecer legitimadas por el sistema ibérico de valores, acuñado en siete siglos de guerra contra los moros. Pero lo cierto es que, si nos ponemos a buscar antecedentes, durante la época colonial, las unidades militares que estaban bajo el comando exclusivo de los españoles peninsulares iban a experimentar la reforma de Carlos III (1760) que incluía el establecimiento de una milicia colonial y el nombramiento regularizado de criollos como oficiales militares de la Corona española. Estos oficiales criollos, reclutados en un sector del grupo social dominante, concentraron los privilegios y las ventajas del fuero militar y conquistaron un status importante de carácter intermedio entre su origen colonial y los grupos militares

superiores. Muchos de dichos oficiales se convertirían en líderes significativos del movimiento independentista de 1810-1823/25, pero llegado este momento se vió que el número de oficiales era insuficiente para la prolongada contienda, por lo que se planteó la Apertura de los rangos militares a un contingente determinado de personas procedentes de los sectores populares. La "popularización" de los cuerpos de oficiales creaba sin duda el canal a través del cual los aspirantes a una posición social más alta obtenían el acceso a una parte del poder, en disputa con otros potenciales rivales de iguales ambiciones.⁽⁴⁹⁾ Cuando en 1823, la desaparición del rol español es ya un hecho, excepto en Cuba y Puerto Rico, la estructura de los nuevos gobiernos ve perfilar progresivamente una especie de coalición de intereses entre los caudillos prestigiados en la guerra y los terratenientes y conservadores de provincia, coalición que daría forma a la política de la mayor parte de los países latinoamericanos hasta 1860. Algunos caudillos gobernarían por largos períodos y muchos de ellos dejaron una honda impronta en las respectivas historias nacionales. Fueron los casos de Juan Manuel Rosas en Argentina (1829-1852) y de Rafael Carrera en Guatemala (1839-1865), por citar los más conocidos. En Venezuela, por el contrario, el régimen político del caudillaje se extendió mucho más allá en el tiempo, a lo largo de todo el siglo XIX y bien comenzado el XX. Determinadas circunstancias de orden interno y externo contribuyeron -tendremos oportunidad de analizarlas- a esta permanencia tan prolongada.⁽⁵⁰⁾

En este sentido, J.J. Johnson, en The Military and Society in Latin America (51), ha señalado que la conformidad social y económica y la ortodoxia política de los caudillos, hicieron de ellos los instrumentos de aquellos hacendados dedicados a la supervivencia de las viejas ideas y de las antiguas fórmulas. Además, debido a que el poder estuvo en este período basado en el magnetismo personal, en el carisma, pocos caudillos estaban capacitados para consolidar suficientemente su control y entregarlo a un sucesor elegido, de modo que se planteaba periódicamente la necesidad de reestructurar -a través de un nuevo personaje- la alianza entre caudillismo y oligarquías terratenientes. Ahora bien, hacia la segunda mitad del siglo XIX latinoamericano, la inestabilidad inherente al caudillismo se hacía insostenible. Las ciudades latinoamericanas crecían, los sistemas educacionales comenzaban a expandirse, los liberales en algunos sitios ganaban y controlaban el poder, al mismo tiempo que se iniciaba tímidamente una cierta profesionalización de la armada: podía verse entonces

que el tradicional caudillismo no encontraba sus bases materiales de sustentación y entraba en declive. (43)

Los estudiosos del tema han polemizado mucho acerca de los aspectos positivos o negativos del fenómeno caudillista. Algunos han justificado el caudillaje argumentando sobre su función nacional-integradora; otros, los partidarios del civilismo, han opuesto al rol militar los procedimientos democráticos. El creciente interés por la problemática de las relaciones entre civiles y militares a partir de la Segunda guerra mundial, ha enriquecido indudablemente la literatura en torno a la cuestión. Para un sector, el caudillismo clásico sería equiparable con la continuada política de intervención de los elementos militares en América Latina (44). El punto de vista opuesto, y a nuestra manera de ver el esencialmente correcto, consideraría que los caudillos de fuerzas armadas irregulares fueron fruto del temprano período nacional de las repúblicas latinoamericanas, por lo que, en un sentido estricto, el caudillismo no existiría desde hace tiempo y no podría ser confundido, en consecuencia, con el rol político de algunas fuerzas militares profesionalizadas de los años más recientes. (45). Así, el caudillismo, en términos históricos estrictos, habría sido posible por la desaparición de la autoridad central -o su debilitamiento-, lo cual iba a permitir el surgimiento de contingentes armados de carácter privado y otras fuerzas rurales semirregulares, con el objetivo de tender a la captura de la organización política de la nación en coalición con los diversos sectores de terratenientes. En efecto, si la creación de los Estados nacionales latinoamericanos a partir de 1830 modificó la estructura política formal anterior, la oligarquía criolla amparóse en ella y encontró su realización como clase detentadora del poder político. En este marco, es evidente que, como afirma Isaac Sandoval R., "Las condiciones para la segmentación política son previsibles. Rotos los vínculos de unión con España, debilitados los polos de crecimiento económico, reaparecen las manifestaciones de la crisis colonial. El caudillismo político es la máxima expresión de esta realidad" (46). La fragmentación es un fenómeno que se da igualmente a nivel de los caudillos locales:

"El ejército particular, localista, es perenne durante la crisis del caudillismo. En la alternabilidad, cambia sólo el comandante y por lo tanto, se mantiene la misma interrelación de fuerzas sociales. Rotos los vínculos políticos de unidad nacional, ausente de vertebración geográfica por el policentrismo, todo tiende a la dispersión, al atomismo disolvente. Lejos se vive de la época de los ejércitos contemporáneos, con organización regular, salidos

de las academias para servir a un orden impuesto por la oligarquía liberal. Los caudillos conducen huestes que nunca alcanzan la dimensión de un ejército regular y permanente, y están influidos por intereses de dominación externa (guerras fronterizas o de dominio) o por la disputa hegemónica en un mismo país" (2).

[III]

Situados en este punto de nuestra exposición, conviene hacer algunas precisiones, aunque sean de forma provisional, sobre la problemática del caudillismo y su función en la realidad latinoamericana del siglo XIX, tratando de poner de relieve tanto los aspectos que podríamos llamar superestructurales o de manifestación externa, como los que aluden a las relaciones que tal fenómeno histórico-político presenta con la estructura general de carácter social y económico.

Una primera precisión vendría dada por la posible conexión entre caciquismo y caudillismo, y en este aspecto es importante señalar tanto las similitudes y diferencias como los límites entre uno y otro fenómeno. En principio, cabe hacer la observación de que la palabra "caudillo" se ha usado tanto en dimensiones nacionales o de clase social entera, como en dimensiones regionales o locales. Así, se ha hablado de caudillos provinciales en países de gran extensión -casos de México o Brasil-, aun que también ha habido la tendencia a denominar a dichos caudillos de dimensión local con el nombre de "caudillejos", con una evidente connotación peyorativa. En México se ha mantenido sin embargo la palabra cacique para designar al "caudillejo".(4) En líneas generales, se supone que caudillo y cacique poseen ciertas cualidades personales que explicarían su autoridad carismática y en éste aspecto, la autoridad del caudillo esaría ligada a su papel en hechos de armas o a la posesión de determinadas virtudes.

De otro lado, es bien sabido que el caciquismo ha sido una realidad básica y dominante en la vida política latinoamericana durante el siglo XIX y en muchos países extendida hasta nuestros días. Es fundamental hacer notar que el caciquismo se ha encontrado en estrecha relación con el aislamiento y la supervivencia del latifundio, es decir, con los parámetros de la sociedad rural. En este tipo de sociedad, la virtud por excelencia ha sido la lealtad o fidelidad hacia el jefe; en otras palabras, un tipo de relaciones cuyas consecuencias fueron el debilitamiento de la autoridad del Estado y el parcelamiento de su soberanía. No obstante, puede haber un momento en que la autoridad del cacique rebasa el simple ámbito local, para proyectarse, en su acción personalista, hacia el

ámbito provincial-regional o hacia el Estado en su conjunto: es cuando el cacique se convertiría en caudillo. De esta forma, el caudillismo vendría a ser -en palabras de Jacques Lambert- la "dictadura o simple predominio de un hombre que se apoya en una clientela personal" (3). A veces, el caudillo era un militar, pero no necesariamente tenía que ser así: independientemente de su origen, el caudillo debía ser capaz de conducir sus fieles al combate, obteniendo después el título de general, título conquistado en plena revolución.

En una ampliación más acertada de la definición, Carlos M. Rama nos habla del caudillismo como aquel "sistema político, social y hasta cultural que supone un agrupamiento de una sociedad o una fracción importante de ella alrededor de la persona del caudillo" (4). El caudillismo implicaría un complejo de relaciones personales, de parentesco o de compadrazgo, que deviene en estilo y forma de conocimiento político, y en el que dichas relaciones personales del caudillo con sus fieles serían difícilmente transferibles en caso de desaparición del protagonista del caudillaje, tal como ha sucedido en numerosos ejemplos históricos. Por otra parte, el caudillismo puede implicar una relación de tipo militar: "El caudillo comienza por ser un jefe militar, un líder de un grupo armado, o se convierte en tal para llevar a la práctica las aspiraciones de poder de su grupo" (5). De igual manera, como hemos visto, la existencia de una admiración fanática o cuasi-mística del caudillo por parte de sus partidarios hay que insertarla en un conjunto de relaciones sociales, valorativas y culturales típicas de las sociedades rurales o de pequeñas comunidades.

En segundo término, cabe establecer una comparación entre caudillismo y presidencialismo. Se observa que el origen del poder del caudillo es ilegal; de allí que recurra casi constantemente a la violencia para perpetuarse en el poder, a la utilización de testaferros y agentes y al apoyo de la arbitrariedad de una policía omnipresente. Si algunos caudillos pretendieron ser ilustrados o progresistas (por lo menos así se autotitulaban), u otros fueron déspotas y sanguinarios, la característica común de la mayoría fue el establecimiento de una o varias formas de cesarismo necesariamente demagógicas (6). En fin, el caudillismo supondría una forma de hacer política en sentido tradicional, típica por lo demás del subdesarrollo político. De ahí que para muchos se considere superada en la actualidad en la mayor parte de los países latinoamericanos. Diversos factores parecen haber contribuido a tal superación: un mayor desa-

-rrollo de la organización estatal, la difusión de las comunicaciones y de los transportes, la creación de unos ejércitos profesionalizados de ámbito nacional, el retroceso del analfabetismo, etc. En consecuencia, el caudillo habría sido sustituido por el Presidente, figura que tiende hacia una autoridad funcional e impersonal. Así, para Arnaldo Córdoba, mientras que el caudillismo es forma propia de sociedades tradicionales, el presidencialismo se sitúa en el contexto de los movimientos sociales de occidentalización modernizadora (34).

De otro lado, en materia de relación entre caudillismo y constitucionalismo, vemos que la idea personalista de la soberanía que sin duda aquél trae consigo, explica en buena medida, además del considerable número de constituciones en la historia política latinoamericana, el hecho de que hayan sido las relaciones de tipo personal, y no las relaciones institucionales, las verdaderas bases de los mecanismos de gobierno y del ejercicio del poder. Asimismo, tal contextura personalista daría razón de la excesiva debilidad de las formas político-constitucionales de carácter federal o parlamentario ensayadas con tan poco o nulo éxito en Latinoamérica. En el primer caso, por ejemplo, el federalismo latinoamericano no sólo no se ha correspondido con la teoría federal propiamente dicha, sino que también y muchas veces ha llegado a identificarse con el propio caudillismo, lo cual evidentemente equivalía a su negación: el federalismo no se establecía con el fin de concatenar en el seno del Estado presumibles diferenciaciones de carácter étnico-cultural, sino más bien con el objeto de efectuar el reparto del poder entre los distintos caudillos y caciques en sus diversos feudos regionales. En el segundo caso, se puede constatar que el régimen parlamentario ha mostrado reiteradamente su sumisión al caudillaje, convirtiéndose en simple "registro de decretos" o revistiendo de forma legal a la voluntad del "jefe". De hecho, al margen de lo establecido en los textos constitucionales, en la práctica el centralismo ha sido algo peculiar e incluso privativo de la política latinoamericana y es cierto que el fenómeno caudillista del pasado ha colaborado ostensiblemente a este rasgo tan generalizado en la actualidad (35).

Se ha insistido con frecuencia en la existencia de una tendencia general en el fenómeno del caudillaje latinoamericano, cual sería la función necesaria que el caudillo habría cumplido en cuanto al proceso de unificación de tierras, esto es, el hecho "forzoso" de un poder arbitrario para decidir la formación de las naciones americanas. Para J. Lambert, por ejemplo, el caudillismo centralizador, una vez que ocupa el poder, vendría

a someter a las particularidades locales mediante un gobierno fuerte, destinado precisamente a conservar ese poder ocupado ilegalmente. Así, los diferentes caudillos -Rosas en Argentina, Santander en Colombia, Páez en Venezuela, Santa Ana en México- recogerían "los fragmentos dispersos del antiguo Imperio español, para convertirlos en vastos Estados y obligan a las fuerzas políticas divergentes a estructurarse en contextos nacionales" (34).

Desde luego que, en términos históricos, los caudillos, cada cual en su ámbito, contribuyeron a la formación de los Estados nacionales latinoamericanos, más aún, a la formación de las nacionalidades en cuanto factores de diferenciación de los distintos sentimientos de pertenencia comunitaria. Pero no podemos olvidar que la compartimentalización de la nación latinoamericana fue instrumentalizada por los intereses oligárquicos, que vieron en la parcelación del inmenso territorio la vía para consolidar sus privilegios, su poder económico y político. Y el caudillo fue en realidad un personaje idóneo para edificar unos Estados que a la postre resultaron débiles para hacer frente a las pretensiones hegemónicas de las grandes potencias.

2) Las bases sociales de la dominación caudillista.-

(I)

Pretendemos ahora dar cuenta del conjunto socioeconómico y cultural que hace viable la dominación caudillista en el nivel de las estructuras políticas del siglo XIX en Venezuela, y en relación con la evolución de América Latina, de la cual participa y se relaciona en variados aspectos.

Hemos reiterado la consideración de que, después de la emancipación, surge en Latinoamérica una sociedad de tipo oligárquico, término éste que pensamos debe tener, y efectivamente tiene, unos perfiles concretos para la realidad que intentamos analizar. La sociedad oligárquica de, y a partir de, 1830, descansa y se estructura alrededor de la tierra como núcleo fundamental de la vida económica, social y política. Es pues, una sociedad de estructura agraria, entendiendo por estructura agraria, con palabras de I. Sotelo, "el conjunto de relaciones e instituciones econó-

-mico-sociales que regulan la utilización de la tierra como factor de producción" (1) . Y dentro de esa estructura agraria, de la concentración de la propiedad y el uso de la tierra emerge el latifundio como la forma típica de aquella sociedad organizada en torno a la explotación de la misma. Se trata, entonces, de una organización social que se mueve sobre la base de la agricultura, de la actividad económica de carácter agrícola, orientada esencialmente a la exportación de los productos obtenidos para el mercado exterior. A este contexto habrá que referir todo un modo de vida de los hombres y toda una serie de comportamientos políticos de los mismos y todo un conjunto de relaciones sociales, personales y culturales que llamamos sociedad tradicional.

En América Latina, la estructura de la propiedad rural y la población campesina son los aspectos determinantes de la realidad que arranca en el siglo XIX. Aparece con claridad la inexistencia de una sociedad urbana propiamente dicha y no hay actividad industrial en el sentido estricto del término: "Si la revolución consigue su primer objetivo -la independencia- fracasa rotundamente en la meta final: consolidar una sociedad liberal y progresista, según el modelo europeo o norteamericano. La Independencia, con el fraccionamiento político y el desplazamiento del poder de la ciudad al campo, en vez de impulsar los elementos burgueses y capitalistas, incipientes pero reales, deja libre expansión a las fuerzas latifundistas y semifeudales. Como en la Península, la revolución provoca el triunfo de la contrarrevolución" (2). El fraccionamiento político desarticula los mercados interregionales y crea unidades aún más pequeñas, no tanto por la extensión, sino más bien por los recursos humanos disponibles, incapaces de impulsar un desarrollo industrial. A este fraccionamiento se corresponde la fragilidad constitutiva de los nuevos Estados en el sentido de que la debilidad del aparato estatal va a implicar un deterioro de la administración y de las finanzas y la situación crítica y periódica de la hacienda pública, dependiente de los ingresos aduaneros, oscilantes según sean las variaciones que experimenten los productos exportables en el mercado exterior. El crédito extranjero no va a hacer sin agravar las dificultades, al aumentar vertiginosamente el endeudamiento público. Sin medios y sin recursos, el Estado no puede afrontar las obras infraestructurales más elementales, y los mercados se reducen al mínimo, junto a la ⁱⁿestabilidad monetaria y la carencia de instituciones bancarias y crediticias. Se comprende así que en la postindependencia, la apertura al comercio internacional como reacción al monopolio comercial español,

-esto es, la instauración más o menos generalizada de una política económica de libre cambio-, traiga como consecuencia la congelación de las manufacturas existentes en el nivel artesanal (3).

Al contrario de planes y deseos, la existencia de una propiedad rural en pocas manos produce el latifundismo como signo concreto de la tenencia de la tierra, y su contrapartida, la multiplicación de minifundios tributarios del sistema latifundista o hacendista, según sea la región. Una oligarquía agraria se constituye como parte de ese sistema y la fuerza de trabajo es básicamente el peón esquilado por la tienda de raya o el campesino pongo de relación servil. Para Alberto J. Pla, las consecuencias -en el orden económico, social y político- de tal sistema pueden ser las siguientes:

- a) el mantenimiento y la pervivencia de la estructura agraria predominante contra cualquier intento que pretenda modificarla;
- b) nulidad en el desarrollo de manufacturas e industrias, las cuales en realidad quedan desplazadas por la relación entre la oligarquía agraria, los sectores mercantiles y el comercio exterior;
- c) el raquitismo de los sectores sociales medios, integrados por reducidos grupos de pequeños comerciantes y propietarios;
- d) en el nivel político, el rol principal corresponde a los caudillos, en representación de intereses localistas, a veces y en algunos casos con tintes de sentimientos justicieros, pero en su generalidad propiciando el atraso y las relaciones paternalistas de tipo tradicional;
- e) la inexistencia de obreros como clase social y, en su lugar, más bien artesanos y aprendices en talleres y oficios correlativos; y
- f) el rol marginal, primero, y después, ascenso de una burguesía comercial fundamentalmente intermediaria entre la producción agrícola y su comercialización hacia el mercado exterior (4).

Así, pues, la propiedad latifundista de la tierra constituye la forma primordial de organización y los grupos terratenientes, el núcleo decisivo de la economía, la sociedad, la política y la cultura:

"La gran propiedad latifundista se constituye y procede como unidad estructurante, con una amplia gama de funciones económicas, sociales, políticas y militares. Los poderes y privilegios que de ella derivan sus dueños se ejercen sobre los núcleos de población existentes y sobre todas las actividades desplegadas en el ámbito del dominio, y se proyectan además sobre el resto de la sociedad nacional. Los latifundistas concentran la propiedad y el uso de la tierra, las aguas, los capitales acumulables y los créditos necesarios para la producción en gran escala. Controlan también la oferta y la demanda de mano de obra

barata, explotada de múltiples maneras: baja remuneración, trabajo gratuito, participación en el producto de tierras arrendadas u otorgadas en uso, venta de bienes de consumo, compra de las producciones, usura. La concentración de la propiedad, la abundancia de tierras y mano de obra, la demanda de los mercados urbanos y de exportación, el crecimiento económico aprovechado sin haberlo promovido el poder político, posibilitan a los terratenientes el logro y concentración de elevados ingresos" (5).

Pero la oligarquía agraria se configura como una clase cuasiparasitaria que no promueve el desarrollo económico:

"Los terratenientes exhiben en general, salvo raras excepciones, un visible desinterés por el progreso, las funciones y tareas de tipo socio-económico, y por las innovaciones técnicas. La estructura económica que promueven e integran, la inserción en el sistema de dependencia externa, la estratificación social que conforman y usufructúan la tradición religiosa a que se asimilan, las pautas culturales y educativas, la tabla de valores de clase dominante, los predisponen a fundar su poder y su ingreso en la propiedad de tierras, un número limitado de actividades mercantil-financieras, los cargos políticos y militares, las profesiones liberales clásicas. Es correlativamente es caso su interés por la posesión y dirección de complicadas empresas financieras, industriales y de transporte: carecen de propensión empresarial y modernizante. Su actitud es básicamente estática y rutinaria, renuente a la promoción deliberada y enérgica de oportunidades favorables y a la orientación de cambios progresivos en el agro y en la sociedad global (...) El sector latifundista hace de este modo un uso ineficiente de la tierra y de la fuerza de trabajo (monocultivo, explotación extensiva, subutilización de suelos y mano de obra). Carece de incentivos para la inversión y la mejora tecnológica, y destina a tales fines una parte relativamente reducida de su acumulación" (6).

En este contexto, el latifundio, cualquiera que sea su denominación (hacienda de México, estancia argentina o uruguaya, fazenda de Brasil, finca de Guatemala, etc.), y su contrapartida en el minifundio, van a conformar una estructura que tiende sistemáticamente a la conservación del orden tradicional; en otras palabras, tal estructura es la culminación de una situación que va a ofrecer una gran resistencia al cambio social y político.(7) Desde el punto de vista histórico, el fenómeno del latifundio nació con el propio arranque de la colonización. Las capitulaciones, los repartimientos, las mercedes de tierra, la composición, constituyeron en la Colonia las vías originarias de la formación de la gran propiedad territorial. Pero la situación posterior evolucionó hacia una concentración aún mayor de la propiedad de la tierra. Después de la independencia, grandes superficies de tierra en manos de indígenas o del Estado van a pasar a antiguos o nuevos terratenientes. Hacia la segunda mitad del siglo

XII ya es realidad un fuerte proceso de latifundización que se perpetúa incluso hasta nuestros días.

Un proceso en el cual el alto valor de la tierra, en unas economías esencialmente agrícolas y exportadoras, llega a su culminación cuando los países latinoamericanos se integren plenamente en las coordenadas de la economía mundial en calidad de exportadores de materias primas, entre 1860 y 1910, aproximadamente, inserción que implicará en la mayoría de los casos la subordinación a la economía inglesa por entonces la dominante. Los grandes propietarios de la tierra pasan a convertirse así en detentadores de un poder político considerable y los mismos gobiernos se apoyarán en los latifundistas o crearán otros, ex novo, mediante premios en tierras a cambio de su colaboración. La tierra, pues, va a devenir en un instrumento de dominación política y social de primer orden y el proceso de concentración de la propiedad de aquélla se va a extender más allá de sus orígenes coloniales, en una línea evolutiva que conserva gran parte de sus típicos rasgos en la actualidad (8).

El latifundio, por supuesto, puede contemplarse bajo distintas formas que tienen por lo menos en común el monopolizar la tierra, despojando de ella a la mayoría de la población rural (9). Sin duda que el latifundio es un complejo sistema de relaciones sociales, económicas y políticas, que no cabe aprehender desde una perspectiva puramente económica. La comprensión del latifundio latinoamericano como una intrincada malla de relaciones socioeconómicas, políticas y culturales, aconseja distinguir dos formas fundamentales, cuales son la hacienda y la plantación, a las que habría que añadir la estancia ganadera, que en cierto modo constituye un subtipo del latifundio, a medio camino entre las dos primeras, aunque en realidad las diferencias entre estos tipos no deben hacer olvidar sus similitudes estructurales y el hecho de que, en la práctica, sus límites se confundan o aproximen (10).

En este orden de ideas, la hacienda tradicional aparece como la modalidad del latifundio más generalizada en la región latinoamericana, y aunque tiene su origen en el pasado colonial, su florecimiento como institución dominante ocurre durante la época republicana. La hacienda es un todo social: "La hacienda -dice Frank Tannenbaum- no es simplemente una propiedad agrícola que posee un individuo. La hacienda es una sociedad, bajo auspicios privados. Es un sistema colonial completo que gobierna la vida de aquellos a ella vinculados de la cuna a la sepultura" (11). Sobre este complejo sistema se asientan unas peculiares relaciones sociopolíti-

-cas: "La población servil ha nacido por lo general en la hacienda y es por completo dependiente de ella. Alrededor de la casa grande, a menudo en ruinas, se levanta la capilla, la escuela (donde la hay), los almacenes, los servicios. Toda la vida social gira alrededor de la persona del patrón, autoridad indiscutible y mítica, cuya voz se hace oír por sus representantes. El administrador se ocupa de los problemas particulares y a él acuden con sus dificultades. Un paternalismo eficiente robustece servidumbre y explotación. Estrechas relaciones de amistad o de parentesco entre los hacendados de la región, cierran la malla a nivel local, centralizando todos los poderes locales en una delgadísima capa social, que nombra las autoridades locales y ejerce una presión decisiva sobre las nacionales, en lo que respecta a los problemas de la localidad. El poder político, social y económico forman así una unidad indisoluble" (43).

En síntesis, siguiendo a Aldo Solari en su Sociología rural latinoamericana, con la hacienda estaríamos en presencia de un sistema social completo y autosuficiente, en el que se dan todas las funciones sociales mayores, cumpliendo además funciones políticas en el sentido de que hay una autoridad que decide las características del todo social y cuyos miembros o integrantes lucharán frecuentemente al lado de ella en los conflictos civiles. Dicha autoridad reside en el propietario y es ejercida mediante un marcado paternalismo: su poder prácticamente no reconoce límites. Los núcleos familiares e individuales encuentran en la hacienda un trabajo y una protección y su vida social es inconcebible fuera de este marco. En medio de unas claras relaciones de explotación, los roles se transmiten de padres a hijos casi sin posibilidades de movilidad, es decir, la estratificación es rígida y la jerarquía inamovible. El sistema existente de valores obedece a una cuidadosa manipulación, la cual lleva a aceptar la dominación del patrón como legítima: el patrón aparece como una especie de padre dispensador de todos los bienes y cuya figura hay que respetar además de agradecer. Como contrapartida, el buen campesino es aquel que asume su situación de sujeción: sumisión, trabajo, lealtad política y social son formas de retribución del campesino al propietario, por las posibilidades que éste le otorga (44).

[II]

Es obvio que, salvo diferencias de matiz, Venezuela no escapa a esta estructuración global de la sociedad latinoamericana del XIX, por lo menos hasta los primeros efectos de la explotación petrolera en la segunda década del presente siglo. Se configura sin ligar a dudas el marco e-

-señal de una sociedad agraria con una economía de tipo agro-artesanal, exportadora de frutos tropicales y dependiente en particular, para su prosperidad o decaimiento, de los precios del café, convertido ahora en el principal producto de exportación en sustitución del cacao colonial (). Un cuadro que va a perdurar, con una persistencia estructural que parece casi eterna, hasta el primer cuarto del siglo XX, cuando la aparición y expansión de la explotación del petróleo lo modifiquen en el sentido de una economía de tipo minero. En la economía agro-artesanal, la agricultura no va ser sólo la actividad económica a que se dedica la abrumadora mayoría de la población del país, sino que, además, va a derivarse de ella la parte más sustancial de la renta nacional en su conjunto. En este contexto, la actividad industrial será prácticamente nula y en su lugar predominarán de modo absoluto, como actividad económica que sigue de lejos en importancia a la agricultura, la labor artesanal en ciudades y villas llevada a cabo por trabajadores independientes dueños de un pequeño taller.

Tal vez una de las principales características de esta configuración sea precisamente el estancamiento de la vida social y económica, estancamiento entendido en sentido estructural, que no excluye ni mucho menos la presencia de profundas contradicciones, conflictos y antagonismos en el seno de la sociedad, como consecuencia fundamental de la miseria creciente de las masas campesinas en contraste con la opulencia de poderosos grupos de terratenientes, comerciantes y altos jefes militares. No se trata de una situación estática, al contrario, laten y afloran a la superficie, en el seno de aquella estructura social, con inusitada frecuencia, significativos enfrentamientos muchas veces cruentos entre los grupos sociales de poseedores y desposeídos, sintetizados en una larga sucesión de guerras civiles a todo lo largo de la etapa histórica de la Venezuela agraria (14). Pero más fuertes iban a ser los inamovibles obstáculos de estancamiento y retroceso: la propiedad latifundista, los rudimentarios procedimientos de cultivo; la falta de vías de comunicación entre las zonas agrícolas del interior y los puertos de la costa; el crédito caro y escaso; el dominio absoluto de las transacciones del comercio exterior por unas cuantas casas exportadoras de origen extranjero; el monopolio persistente de la cultura por una escasa minoría; y la baja productividad y nula capacidad técnica del sistema económico general. Se comprende que en estas condiciones vaya a ser muy difícil la consolidación del nuevo aparato estatal, particularmente después de las destructoras consecuencias

de la guerra emancipadora. Tal precariedad puede situarse en la base de las grandes convulsiones políticas que van a tener lugar y que culminarán en la Guerra Federal de 1858-1863 (14).

En Venezuela, como en otros países latinoamericanos, el régimen latifundista de propiedad agraria va a ser factor primordial en el atraso industrial, y alrededor del mismo gira la problemática del limitado mercado interno y la baja capacidad adquisitiva de la población venezolana. El latifundio condicionará una escasa población, el pauperismo y el bajo nivel intelectual de las masas laboriosas del campo; y es que el latifundio, para compensar los defectos inherentes a una técnica agrícola rudimentaria, necesita imponer jornadas exhaustivas de trabajo ("de sol a sol") y salarios de hambre; la consecuencia es el empeoramiento sin cesar de la situación del campesinado. En el nivel político, los dueños de la propiedad son los detentadores fundamentales del poder y en este sentido tiene validez la afirmación de que el latifundismo es la base económico-social del despotismo: latifundismo y despotismo vienen a ser, así, términos correlativos. La masa rural ha sido a menudo el contingente humano de los victoriosos caudillos, quienes en la mayoría de los casos utilizaron a aquélla como trampolín hacia el poder en las guerras civiles. En Venezuela, "Las revoluciones, conmociones internas e insurgencias, ha transferido la propiedad de la tierra de unos hombres a otros. Los jefes victoriosos, sin fortuna al comenzar la carrera política, al correr de los años se tornaron poderosos latifundistas. Por encima de todos, el más fuerte de todos, el máximo caudillo nacional a la cabeza del gobierno central. Ese ha sido, entre otros, el caso de Páez, Monagas, Guzmán, Castro y también el caso de Juan Vicente Gómez. Mientras tanto, en el interior, en las diferentes divisiones administrativas -Provincias o Estados- el poder controlado o detentado directamente por los caudillos regionales propietarios también de las mejores tierras de la región ... cada entidad provincial era un feudo de una o muy pocas familias dueñas de la riqueza agraria y usufructuarias del poder público ... El caudillo máximo se apoyaba en los caciques regionales para sostenerse en el poder" (15).

Es en este contexto en el que puede afirmarse que la cuestión agraria y su evolución histórica, sea tal vez la guía más reveladora como punto de orientación del esquema interpretativo y de los fenómenos estructurales de una sociedad como la del siglo XIX venezolano; entendiendo por cuestión agraria -tal como afirma G. Carrera Damas-, "la expresión sintética del modo de vida histórico de una sociedad en la cual todas las ma-

-nifestaciones sociales se hallan, de alguna manera, vinculadas con el trabajo de la tierra y con el régimen de apropiación de la misma ..." (17).

Hemos convenido en que durante las guerras emancipadoras, la política de reparto de bienes obtenidos en campaña, más que una intención transformadora del régimen de propiedad territorial, era un recurso para subvenir al sostenimiento de las tropas, de ambos bandos, en condiciones de casi absoluta carencia de otros medios para pagarlas, sin que exista documentación cierta y válida la cual demuestre que tales medidas reflejasen la aspiración de campesinos y llaneros a la posesión de la tierra. En diversos trabajos, el historiador G. Carrera Damas ha puesto igualmente de relieve el limitado alcance de la, según él, mal llamada política agraria bolivariana en Venezuela, bajo el criterio de que, cuando Bolívar dicta decretos de reparto de bienes al Ejército, se advierte más bien que el empleo de la propiedad territorial del enemigo como medio de suplir la carencia del Erario para pagar las tropas, se correspondía con las prácticas imperantes en materia de botín de guerra y no otro sentido tenía; ya que, por lo demás, la distribución de tierras como medio de indemnizar a los militares tampoco constituiría una novedad en una situación como la descrita (18). Mejor aún, habría que insistir en los resultados obtenidos con la aplicación práctica de dichas medidas, y en éste sentido lo cierto era que los soldados, provistos de vales que sufrían una depreciación de hasta el 95 por ciento en el acto mismo de la entrega, los vendían al mejor postor en búsqueda de algún beneficio concreto adecuado a sus apremiantes necesidades: "Testimonios de la época nos hablan del triste espectáculo de estos ex-combatientes voceando de casa en casa la venta de sus vales, para terminar éstos en manos de comerciantes, usureros y jefes militares que fueron, a la postre, los únicos favorecidos. Pese a que muchas voces se alzaron reclamando el cumplimiento del compromiso contraído por el Estado con los ex-combatientes, muy pocos lograron alguna adjudicación de bienes, y estos fueron, generalmente, altos jefes militares o funcionarios civiles, que pasaron de esta manera a la condición de terratenientes, venidos a reforzar una clase que reconstituía sus intereses, valiéndose de artimañas, legales o no, con el regreso de los emigrados, quienes reclamaban y conseguían la devolución de sus bienes" (19).

A partir del establecimiento de la República de 1830, un prolongado proceso de reasentamiento de la sociedad va a ser roto por la segunda gran crisis de la Venezuela del XIX, cual es la Guerra Federal (1858-1863), en la que aparece la cuestión agraria sobre todo por la vía del caudillo

Ezequiel Zamora, quien formula un propósito reformista de la situación de la tierra, más o menos asimilable al concepto de reforma agraria, con consideraciones si bien es cierto que algo vagas, no por ello lejanas de una aspiraciones ya urgentes y espontáneas en el seno de las masas campesinas que le acompañaron en su interesante acción, interrumpida súbitamente por la muerte en San Carlos. En cualquier caso, con la desaparición del General del Pueblo Soberano, el movimiento federal deriva hacia una solución conciliatoria que permitiría mantener sin demasiados cambios la estructura económica y social contra la cual habían insurgido las masas campesinas agrupadas bajo los cuadros del Ejército zamorista (40). Y es que en realidad, durante el siglo XIX venezolano logró sobreponerse, en el planteamiento del problema de la tierra, una tendencia progresiva al sometimiento de la tierra a apropiación privada individual, en detrimento de la propiedad comunal, baldía o nacional: la legislación republicana responderá fielmente a dicha tendencia (41).

En el volumen correspondiente al período 1829-1860 de los Materiales para el estudio de la cuestión agraria en Venezuela, la profesora Carmen Gómez R. (42) hace unas interesantes puntualizaciones sobre la materia que conviene examinar como corroboración a lo ya señalado por distinguidos investigadores venezolanos. En efecto, los estudiosos de la cuestión agraria en Venezuela han considerado las tierras baldías como una de las bases constitutivas de la gran propiedad territorial durante el siglo XIX. En concreto, la consolidación del régimen latifundista en el país a lo largo del período 1830-1858 se explicaría por la concentración de las tierras nacionales en manos de los jefes militares, proceso que tuvo lugar durante el gobierno de la llamada Oligarquía conservadora (1830-1848), y por la adjudicación desmesurada de dichas tierras realizada bajo el gobierno personalista de los Monagas o de la denominada Oligarquía liberal (1848-1858), en beneficio sustancial de la familia gobernante y de todo el séquito vinculado al régimen (43). Carmen Gómez R. llega a la conclusión de que entre 1830 y 1858, el Estado consideró el ramo de tierras baldías como una importante fuente de recursos fiscales, aprediación que sin embargo no se correspondió con los exiguos ingresos obtenidos por concepto de arrendamiento y venta de las tierras nacionales; resultado que por otra parte de explicaría en parte por la poca demanda que tuvieron las citadas tierras en los sectores mayoritarios de la población del país. No obstante, desde el punto de vista fiscal, la importancia del ramo de baldíos se manifestó durante el período de la oligarquía conservadora en contribuir

a desgravar el Erario de una porción considerable de la deuda por haberes militares. Durante la dinastía de los Monagas, la adjudicación de baldíos contribuyó igualmente a amortizar diversos renglones de la deuda pública. En relación a los baldíos como factor constitutivo de la propiedad privada de la tierra, dicha autora en su documentado estudio ha observado que para el período de la Oligarquía conservadora "la adjudicación de baldíos a los acreedores militares determinó la formación de nuevos latifundistas entre los militares de alta graduación y el resurgimiento de propiedades que habían decaído como consecuencia de la Guerra de Independencia" (24). La adjudicación en pago de haberes militares favoreció también a varios civiles, en virtud de las negociaciones realizadas con los vales. Más aún, durante el período de gobierno de la Oligarquía liberal, la apropiación privada de la tierra contó con un instrumento legal expreso, la Ley de 10 de abril de 1848, que tenía como uno de sus objetivos el facilitar a los particulares porciones de baldíos para establecimientos de agricultura y cría: "La aplicación de esta ley favoreció el acaparamiento de las tierras nacionales por un reducido número de personas entre las que se contaron algunos arrendatarios y usufructuarios de las mismas, miembros de la familia gobernante y personas vinculadas con el régimen" (25).

Ni siquiera la guerra larga o de los cinco años de 1858-1863 logra implicar una modificación de la estructura latifundista; al contrario, a pesar de la misma, el latifundio se incrementará poderosamente en la segunda mitad del siglo XIX, ampliando su radio de acción por vía de secuestros y expropiaciones y a expensas de las tierras nacionales y baldías. Un mismo representante del gobierno de la oligarquía liberal no ocultó las consecuencias sociales y políticas del proceso de consolidación del latifundio. Se iría ...

"... acumulando en pocas manos una riqueza territorial inmensa, destruyendo la proporción en que pudieran conservarse las fortunas, preparando para el futuro otras calamidades como la esclavitud y la miseria, con un crecido número de colonos humildes e infelices, a cambio de un número demasiado pequeño de opulentos y soberbios propietarios; esa desigualdad debiera prevenirse, a tiempo, pues habrá de influir en la ruina de las instituciones políticas y en el atraso material e intelectual de la sociedad" (26).

La Guerra Federal, que implicó, además del proyecto político, un enfrentamiento entre la población rural y los dueños de la riqueza territorial, no destruyó sin embargo la estructura latifundista, sino más bien

trajo como consecuencia fenómenos de transferencia de propiedad de manos de terratenientes, caudillos militares, godos o conservadores, oligarcas; a manos de terratenientes-caudillos militares conocidos como liberales, tioligarcas o federales. En realidad, los principales beneficiados iban a ser los caudillos federales que fueron premiados con grandes asignaciones en bienes raíces y en tierras baldías, en pago de haberes militares. A pesar de las obvias dificultades que se derivan de la inexistencia de estadísticas al respecto, F. Brito Figueroa nos proporciona unas cifras ya de por sí suficientemente elocuentes. Para 1873, la tierra de propiedad privada se podría estimar en 15.890 leguas cuadradas, distribuidas entre 29.202 agricultores y ganaderos, de los que 980 propietarios controlaban unas 8.400 leguas cuadradas. La progresión es ascendente y se caracteriza por su persistencia: en 1881 tendríamos unas 16.970 leguas cuadradas censadas y 20.176 propietarios, de los que 1.022 controlaban 9.725 leguas; y para 1891, 19.184 leguas cuadradas, 21.035 propietarios rurales, entre los cuales unos 1.184 controlaban cerca de 14.184 leguas cuadradas, es decir, un setenta por ciento aproximadamente de la tierra de propiedad privada censada (2).

[III]

Si en América Latina el proceso que se inicia a mediados del siglo XIX es el de la fijación de un nuevo pacto colonial, que transforma a la región en productora de materias primas para los centros de la nueva economía industrial y en consumidora de la producción manufacturera de aquellas áreas, en el orden interno la consolidación de dicho proceso se ve facilitada mediante la adopción de políticas librecambistas: el libre cambio pasa a ser la ideología común de dirigentes gubernamentales y sectores locales altos beneficiados directamente por tal adopción. En muchos países, los conflictos, a menudo violentos, no afectarán la vigencia de esta coincidencia fundamental, en el marco de las más variadas alternativas de prosperidad y depresión. Por lo demás, las víctimas de este nuevo orden se situarán esencialmente en el amplio sector de la población rural. En países de marcada configuración indígena, el resultado de la expropiación de las comunidades es el mantenimiento de los indios en tierras que ahora son de grandes propietarios individuales, para cultivos de subsistencia, a cambio de una prestación laboral cuyo fruto corresponde al propietario.

La expansión se produce, sí, pero como conjunto de booms productivos: cobre y trigo en Chile, lana en el Río de la Plata, guano en el

Perú, café en Brasil, Nueva Granada y Venezuela; azúcar en las Antillas, por citar sólo los casos más conocidos. Expansión además vinculada con la instalación de redes ferroviarias y telegráficas, generalmente uniendo centros productores del interior con puertos de exportación ultramarina, bajo el dictado hegemónico de la Gran Bretaña, país que retiene un predominio no disputado de los mecanismos bancarios y financieros. (23) La tecnología avanza paralelamente a la expansión de cultivos para el mercado mundial. La comercialización y el transporte interoceánicos quedan en su casi totalidad en manos extranjeras, mientras que los intereses locales dominantes se reservan las actividades primarias. Para 1880, el avance en casi toda Hispanoamérica de una economía primaria y exportadora significa la sustitución, finalmente consumada, del pacto colonial de las metrópolis ibéricas, por uno nuevo, en el que el crecimiento está acompañado de crisis explosivas y periódicas, turbulencias debidas a la vinculación creciente con las nuevas potencias dominantes igualmente sacudidas por las coyunturas económicas (24).

En este sentido, Venezuela se constituye como parte periférica de un sistema económico mundial, el del capitalismo de la libre competencia. Se tratará, en el caso venezolano, de un crecimiento concentrado casi exclusivamente en el renglón exportador y dentro de éste, en el café como rubro más importante. En Venezuela, el comercio extranjero va a ser la única variable importante del crecimiento económico. La relación entre auge económico y niveles consentidos por el mercado internacional, es directa. Las fuerzas internas, por otra parte, demostrarán carecer de impulsos propios para promover el desarrollo; en definitiva, estaremos en presencia de un crecimiento simple (25). La acción exterior sobre la periferia se traducirá con desigual intensidad; la configuración de un desarrollo desigual se plasma con acierto en las palabras de Domingo Alberto Rangel: "El capitalismo imparte impulso diferenciador a las sociedades. Móvido por la anarquía de la producción, que es proveniente del carácter individual de la apropiación del producto, ese sistema sigue una línea ciega, irracional de desenvolvimiento en la cual resultan favorecidas unas actividades en detrimento de otras. La tasa de beneficio, en sus oscilaciones alrededor del promedio, constituye la aguja de esas sinuosidades económicas que se resuelven en un comportamiento caprichoso. El desarrollo resulta sí, bajo el capitalismo, un claroscuro permanente. En unas zonas económicas habrá apoplejía, en otras anemia" (26).

Los contrastes serán reales en el ámbito geográfico e interre-

-gional. La importancia del factor tecnológico contribuirá a la distribución de las orientaciones del desarrollo desigual, ya sea en los países de estructura capitalista avanzada o en el caso de los enclaves tecnológicamente sofisticados de los países atrasados. (12) En el caso venezolano, la demanda exterior va a favorecer fundamentalmente al café, con sus correspondientes consecuencias en la correlación de las fuerzas regionales: la región andina, antes marginada y ahora principal foco del cultivo cafetero, va a adquirir progresivamente una significación real en el contexto socioeconómico y político.

Una guerra tan larga y devastadora como la de la Independencia, tenía que traer graves consecuencias sobre el normal desarrollo de la actividad económica en Venezuela. Sin duda que acontecimientos tales como la destrucción de haciendas, pérdida de cosechas y plantaciones, exterminio de la ganadería, descenso de la población por muerte y migraciones, fueron algunas de las distorsiones cuyo estudio en profundidad ayudaría a comprender la evolución económica y social del país durante el siglo XIX. El hecho más notable que surge como resultado de la observación del panorama agrícola venezolano, pasado ya el período bélico y el inmediatamente posterior de reconstrucción, es que, en efecto, el cacao ha perdido definitivamente su primacía entre los renglones de exportación, para colocarse el café en primer lugar de los mismos. Lógicamente, se trataba de un cambio estimulado ya desde finales del siglo XVIII. En aquél momento, en una época de continuas guerras que dificultaban sensiblemente el tráfico marítimo, se planteó la necesidad de cultivar un fruto menos corruptible que pudiera ser conservado en espera de mejores oportunidades; por otra parte, el incremento de las relaciones comerciales, legales o no, con colonias extranjeras vecinas, contribuían al alza del interés de un producto como el café, de mayor demanda que el cacao en los mercados europeos y cotizado a mejores precios.

En este orden de ideas, para Miguel Izard (13), la causa determinante tuvo carácter endógeno: el cultivo del café surgió de la necesidad de superar un "cuello de botella" a que había llegado la agricultura colonial venezolana. El cultivo del cacao exigía laboriosos sistemas de riego y drenaje y sólo podía sembrarse en reducidas tierras llanas cercanas a los ríos; la inexistencia de caminos sólo lo haría rentable en las zonas costeras y en los valles próximos a las corrientes navegables. Dichas circunstancias limitarían extraordinariamente el área que podía dedicarse al cultivo del cacao y es previsible que aquélla llegara a un te-

-cho a fines del siglo XVIII. Para amortiguar una fase de estancamiento, la economía venezolana debía orientarse hacia otro tipo de cultivos; el café, cultivo que no exige el regadío y que se acomoda en las laderas - con lo que su drenaje se efectúa en forma natural-, vino a darle solución a este problema (34).

El mismo investigador, en otro trabajo (35), anota -entre otros factores que contribuyeron al cambio,-, el hecho de la considerable superioridad del rendimiento por hectárea del café con respecto al cacao y al algodón (36). La expansión del café fue tan notable y se colocó a tal distancia de los demás productos exportables, que Venezuela se convirtió prácticamente en país monoprodutor (37). El proceso de sustitución es posible observarlo mediante la evolución de la relación café cacao y a través de sus porcentajes sobre el valor total de las exportaciones:

Años	café%	cacao%	Años	café%	cacao%
1830	38	28	1880	43	6
1840	39	21	1890	75	9
1850	42	20	1900	38	16
1859	44	13	1910	52	16
1869	56	6	1920	38	15

Según estas cifras y proporciones, a partir de 1830 el cacao pierde importancia y el café se erige en el principal producto de exportación. Los altibajos y las variaciones en la relación café-cacao son consideradas como normales de unos productos agrícolas que dependían del resultado de las cosechas, por una parte, y de las alteraciones de los precios internacionales, por otra, ligados a las fluctuaciones económicas de las sociedades en vías de industrialización acelerada (38).

De otro lado, M. Izard pone de relieve cómo, a partir de 1870, se registró una notable expansión de la producción cafetera, que no sólo tuvo lugar por un aumento productivo en las zonas tradicionales, sino sobre todo por una considerable expansión geográfica del cultivo: en la década de los años setenta del siglo XIX, las laderas de los Andes venezolanos iban a ser invadidas por el cafeto (39). Existe también una conexión entre el auge del café durante dicha década y el alza de precios que tuvo lugar en los mismos años. Fue la década del "despegue" del café andino. Hacia 1880, el Estado Táchira ocupaba ya el segundo lugar entre los esta-

-dos venezolanos productores de café con una aportación de más de 4.600 toneladas. Para fines de siglo, en 1894, el Estado de los Andes (Mérida, Táchira y Trujillo) producía un 26 por ciento del total nacional. Todavía en 1924, la región andina aportaba el 45,45 por ciento del café venezolano (46).

Ciertamente, cuando el cultivo del café llega a convertirse en la principal actividad económica de Venezuela en el XIX, buena parte de la dinámica de ésta va a estar íntimamente vinculada a las fluctuaciones del precio y la demanda, cuya variación no se realizaba de acuerdo a intereses y necesidades venezolanos, sino según la coyuntura y vicisitudes de los mercados europeo y norteamericano. Pero, según el investigador hispano, se dió la paradoja de que, si bien la dependencia de Venezuela respecto del café aumentó en forma progresiva, el lento avance del cultivo y el descenso de los rendimientos, hicieron que el papel de Venezuela dentro de la producción mundial fuera menor cada vez, sobre todo si lo comparamos con el considerable auge de la misma en algunos países del entorno, tales como Brasil o Colombia. Esta circunstancia situó a Venezuela en una posición peculiar en el campo del comercio y la economía mundiales. Cada vez más, a lo largo del ciclo cafetero, buena parte de su actividad económica y de su comercio exterior iban a depender de las fluctuaciones de precios -originadas fuera de su territorio- de un producto que, si ocupaba un lugar primordial dentro de la economía del país, no bastaba sin embargo para asignar a Venezuela un papel importante en el concierto de países productores de café. Ello hacía que la dependencia del país fuera más considerable que la de otros, ya que estaba muy supeditada a la demanda, y pocas presiones podía realizar en el ámbito de la oferta (46).

Todo un cúmulo de factores obstaculizaban el desarrollo económico y profundizaban igualmente los niveles de dependencia de Venezuela. Si bien un elevado porcentaje de la población venezolana, a lo largo del siglo, siguió habitando cerca de la costa, zona en la que también tenía lugar buena parte de la actividad económica, la carencia de redes viales de penetración hacia el interior del país, nos indicaría que no se pudo colonizar el resto del territorio venezolano y estructurar así un mercado nacional. Incluso, rutas necesarias para esta actividad localizada cerca de la costa, permanecieron durante largo tiempo en un estado que dificultaba el desenvolvimiento normal de los transportes. El resto de las vías de comunicación era casi intransitable y el comienzo de una red ferroviaria, cuya construcción se inició hacia 1873 bajo el gobierno de Antonio

Guzmán Blanco -el Ilustre Americano-, no se planificó con la intención de comunicar entre sí las distintas regiones del país, sino con la de facilitar la salida de los productos agrícolas de la zona litoral y los productos de las zonas mineras, o enlazar una especie de "cuadrilátero de la prosperidad", cuyos ángulos eran La Guaira, Caracas, Valencia y Puerto Cabello. Para 1912, el total de kilómetros de la red ferroviaria en funcionamiento puede calcularse en algo más de 822, cifra irrisoria para un país de las dimensiones de Venezuela (42).

Mientras en otras zonas del mundo se producían transformaciones socioeconómicas y políticas de gran alcance, Venezuela permanecía anclada en una agricultura no evolucionada, con una población estancada y unos niveles de vida casi primitivos. Precisamente, la escasa población -si la ponemos en relación con lo extenso del territorio- generaba una penuria de mano de obra, según testimonios de la época (43). De otro lado, una limitación al comercio interior era la escasez de numerario en circulación, lo que obligaba al trueque y a la circulación de monedas de otros países. Eran también notorias las deficiencias del servicio de correos y telégrafos, y en este sentido, hacia 1912, Leonard V. Dalton hablaba de que "En realidad, es precisamente la falta de medios adecuados de comunicación entre las diferentes regiones de la República lo que constituye el principal obstáculo, antes que cualquier otra causa determinada, para el progreso y el desarrollo nacional" (44). Se han señalado además factores como las epidemias y pestes, la escasez de capitales, los obstáculos de mentalidad y la corrupción administrativa como frenos de la evolución; en fin, uno de los impedimentos más considerables para el desarrollo vendría dado por la interminable serie de guerras civiles que asolaron el país a lo largo del XIX. Un viajero que observó agudamente las destrucciones ocasionadas por dichos conflictos, fue el alemán Friedrich Gertsacker, quien las señalaba como culpables de la incertidumbre que paralizaba a los comerciantes, del robo y la depredación de los ejércitos en lucha, de las migraciones internas y de la paralización de obras de infraestructura: "¿Quién va a emprender algo aquí e invertir dinero en un experimento si, aún en el caso privilegiado de tener éxito, no le reportaría ningún beneficio? Cualquiera nueva revolución echa todo por tierra y los habitantes de un país en esta situación prefieren a fin de cuentas dejar que todo se pierda antes de verse siempre de nuevo despojados de los frutos de su trabajo" (45). De ahí que con razón afirme Antonio Arellano Moreno el poderoso caldo de cultivo de una situación como la descrita, para el ascenso del caudillismo

-mo; en efecto, las dificultades económicas "eran uno de los grandes al-
tientes para que los caudillos salieran en busca de la Tierra Prometida
seguidos de una romería de campesinos que anhelaban sacudir el régimen
miseria en que vivían. El gran vacío que dejaba la caída del máximo Cau-
llo que ocupaba el Poder o la muerte del mismo favorecían estas incursio-
nes y de los escombros que dejaba la contienda armada se iban alimentan-
nuevos caudillos. Estos eran subproductos del deterioro económico; del i-
fradesarrollo del país; de las condiciones históricas que permitían la
liferación de los mismos" (46).

Por lo demás, los indicadores estimados de la evolución del pro-
ducto reflejan la presencia de un crecimiento simple de la economía ven-
zolana, el cual no tuvo carácter acumulativo. Las estimaciones de Domin-
Alberto Rangel, para el período 1830-1873, dan una tasa media anual del
3% de crecimiento del producto por habitante, aproximadamente. Si ampli-
mos el período, desde 1830 hasta 1913, tendríamos un incremento del 4,6
anual (47). La evolución del producto territorial bruto presentaría tres
fases alternativas, en conexión con la demanda exterior y en ascenso o
descenso según sea el caso. De 1830 a 1891, el producto ascendería con
meza, particularmente entre 1830 y 1850, lo cual indicaría una demanda i-
ternacional creciente. En el período 1830-1840 se daría un crecimiento
dio anual del 15,7%, línea ascendente que se interrumpe hacia mitad del
siglo XIX por las repercusiones negativas sobre la economía venezolana
la crisis europea de 1848. En Venezuela, una época de quiebras y de mal-
tar entre los campesinos tiene lugar y va a influir poderosamente en la
Guerra Federal. Siguiendo al economista venezolano, entre 1860 y 1873,
las nuevas condiciones exteriores condicionarán un crecimiento del 7,4%
anual en la tasa del producto bruto. A partir de allí se combinarán pe-
ríodos de alza -1881-1891- y períodos de retroceso -hasta 1910-. En el
marco de una economía de crecimiento hacia afuera, el desenvolvimiento
producto seguiría todas las fluctuaciones experimentadas por las alzas
bajas del mercado internacional (48).

Mientras tanto, el ahorro existente, proveniente de la agricul-
tura, es captado por el comercio: los beneficios comerciales constituye
un gran porcentaje del ahorro global de la colectividad -un 45% en 1910,
un 50% en 1914, y un 70% en 1920 (49). Son beneficios comerciales que pro-
vienen de la plusvalía agrícola que el comerciante exportador arranca a
los agricultores mediante la adquisición de sus productos destinados al
mercado internacional. Todo ello va a confluir en una serie de deforma-

-ciones estructurales que el Censo económico de 1912 iba a poner a la vista: para aquella fecha, la agricultura y la cría poseían un capital de 315 millones de bolívares; el comercio unos 361 millones, el transporte se situaba en unos 170 millones y la llamada "industria" (incluyendo el artesanado), alcanzaba unos 73 millones (50). La desproporcionada magnitud del capital mercantil traducía una estructura contradictoria en la que el comercio retenía la mayor parte del ahorro nacional, dedicando a- quél casi toda su actividad a la importación de bienes de lujo, destinados al consumo suntuoso de los grupos privilegiados. La otra cara de la mone- da se resumía en el estancamiento relativo de las estructuras agrarias, su- jetas, desde ya mucho tiempo, a un régimen latifundista; en otras palabras el excedente económico, escaso ya de por sí, no era reinvertido en activi- dades reproductivas. (51)

La distribución y comercialización de la producción agrícola es realizada por casas mercantiles de alemanes, ingleses y franceses, las cuales se asientan en los principales puertos y controlan el comercio del café y del cacao. Dichas casas mercantiles se constituyen así en podero- sos intermediarios entre los agricultores y el comercio internacional de productos agrícolas primarios. El comercio exterior aparece, por tanto, monopolizado por manos extranjeras en el cuadro general de una dependencia económica. En este caso, el comerciante foráneo realiza una acumulación que no revierte al país, sino al contrario, va a engrosar el desarrollo de los capitales en las naciones industrializadas. Si en Venezuela el co- mercio generaba un 20%, aproximadamente, del producto bruto del país, la acumulación era realizada por elementos del exterior que se apropiaban de una parte importante del excedente interno (52). El comercio monopoliz- ador fijaba con facilidad, en este contexto, las condiciones del inter- cambio y se verificaba una transferencia de plusvalía desde el campo ha- cia las casas comerciales, y de allí al exterior. Quedaba claro que las casas comerciales, filiales o agentes de casas alemanas o francesas, van a controlar las exportaciones venezolanas de café. La casa Brever Moller, por ejemplo, tuvo una participación en las exportaciones de café del or- den del 25 por ciento y hubo años en que las colocó en las cercanías del 35 por ciento. Por el Puerto de la Guaira, las casas extranjeras llega- ron a absorber más del 70 por ciento de todo el tráfico de exportación, en el que destaca Elohm and Co., con porcentajes que oscilaron alrededor del 30; el mismo caso se daba en Puerto Cabello, donde la casa Kolster ocupaba una posición preeminente (53).

Paralelos fenómenos de control se daban en las primeras inver-

-siones extranjeras en el inicio de los ferrocarriles venezolanos a fine del siglo XIX, proceso directamente ligado a la concentración y centralización del capital en aquellos países desarrollados, en los cuales la acumulación había alcanzado grandes proporciones, originándose una masa relativa de capital sobrante que va a comenzar a invertirse en áreas periféricas de la economía central. Para la construcción de las vías férreas, es en el último tercio del XIX cuando se establecen los primeros ferrocarriles en Venezuela, con capital inglés y alemán. (54) Lógicamente, existe una producción de café y cacao que necesita un medio de transporte, el cual la conecte más directa y fácilmente, con el mercado mundial. Un indicio de la importancia de las inversiones ferroviarias viene representado por el hecho de que, en 1891, casi el 40 por ciento del producto territorial bruto está constituido por aquellas (55). Pero las líneas férreas construidas no tienen otro destino que la racionalización del tráfico de exportación. Su tendido se hizo esencialmente desde las zonas productoras hasta los puertos de embarque, teniendo como último objetivo el conectar el café y el cacao con el mercado exterior: predominó, pues, el interés de los grupos de exportadores sobre cualquier análisis de desarrollo integrador y va a ser precisamente la subordinación de la construcción de los ferrocarriles a las necesidades del mercado internacional, lo que determinará su posterior fracaso. (56)

Si fijamos nuestra mirada sobre la estructura social y demográfica vemos que, a pesar de las conmociones sociales ocurridas, siguen persistiendo a todo lo largo del XIX las características de una sociedad pre-industrial, precapitalista y rural-latifundista (57). Hacia la segunda mitad de siglo, los cambios sociales se van a sintetizar, sin modificar el conjunto, en la desaparición de la mano de obra esclava, las insurrecciones de la masa rural y capas pobres contra los amos de la tierra, y el desarrollo de limitados núcleos de asalariados en los centros mineros y en la construcción de las vías férreas. Para 1873, 1881 y 1891, menos del 1 por ciento de la población sigue concentrando la riqueza territorial agraria, a la vez que la población económicamente activa se distribuía en la producción agropecuaria en forma abrumadora. Se destacaban también, a amparo del comercio exportador, núcleos de burguesía comercial-usuraria, cuyo progresivo poder, a fines del XIX, la convierte en importante prestamista de la administración pública. Por lo demás, la estructura social permaneció impermeable a los cambios de las instituciones políticas a partir de la reinstauración del federalismo.

La agricultura de plantación -café y cacao, esencialmente-, se vio incrementada por el sistema de medianerías (59), que permitió a los propietarios aumentar la extensión de sus tierras y el número de plantas cultivadas a un costo mínimo. La fuerza productiva sometida y explotada en el medio agrario va a verse incrementada, después de la Ley abolicionista de 1854 (59), por grupos de exesclavos asimilados a categorías rurales como peones, jornaleros, arrendatarios, etc., esto es, un campesinado empobrecido que practica una agricultura estacional y de subsistencia y que permanece atado a la tierra por inacabables compromisos con sus propietarios -los llamados por F. Brito Figueroa, "lazos de enfeudamiento". La inmensa mayoría de la población económicamente activa se dedica a las labores agrícolas y en este sentido los datos son elocuentes: para 1873, del total de dicha población, unos 394.128 personas, esto es, el 79%, estaba dedicada a actividades agropecuarias (jornaleros, arrendatarios, peones y sirvientes); unas 29.202, menos del 1 por ciento, eran propietarios, y 100.931, el 19,3%, eran capas laborales de centros urbanos. Igualmente, los distintos censos nacionales acusaban un predominio prácticamente abrumador de lo rural sobre lo urbano: el 1873, sólo cuatro centros de población tenían más de 20.000 habitantes; en 1881, su número había ascendido a cinco, y en 1891, eran otra vez cuatro: Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto. Desde el punto de vista de la concentración y distribución regional de la población, para el período 1873-1891 se acusaban las mismas características que se habían configurado en los años coloniales, con escasas modificaciones. Así, la región de Guayana, con 413.750 km² (45,3% de la superficie total), concentraba una población equivalente a un 4 por ciento como máximo; los Llanos, con 320.500 km² (35,15% del total), concentraba un promedio del 32 por ciento de la población nacional; la región costero-montañosa, con 177.590 km² (19,18% del total), un promedio del 64 por ciento de la población del país. Por otra parte, la población crecía a un ritmo relativamente lento, a lo que contribuía una elevada tasa de mortalidad derivada de las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias y al estado casi permanente de guerra civil con su secuela de muertes. Así, datos de 1873 arrojan una población de 1.784.194 habitantes; para 1881, 2.075.245 (+ 291.051 en ocho años); en 1891, 2.323.527 habitantes (+ 248.282 en diez años); en términos de crecimiento vegetativo (o/o), 20,2 - 10,4 - y 10,2 - respectivamente. (60)

Es evidente que, en buena medida, acontecimientos como la liberación de los esclavos y la Guerra federal de 1858-1863, aceleraron fenóme-

-nos de movilidad social en sentido vertical de la población venezolana; en especial porque contribuyeron de alguna manera a resquebrajar pretendidas fundamentaciones de superioridad étnica, que subsistían todavía en algunos círculos en calidad de reminiscencias de la sociedad colonial. Se produjeron también, en el período 1850-1900, fenómenos de movilidad social en sentido horizontal, tales como emigración a las Antillas de población blanca -propietarios conservadores y familiares- durante los años de la guerra larga; inmigración de población negra liberada en las Antillas inglesas hacia la Guayana venezolana; migraciones internas de pequeña escala hacia centros artesanales de Caracas y Valencia o migraciones internas de campesinos sin tierra hacia las montañas. El marcado estancamiento de la economía, las rígidas estructuras agrarias sin incentivos especiales, la inestabilidad política y otros factores, contribuyen a que el proceso inmigratorio sea muy lento entre 1850 y 1900. Se ha estimado, por ejemplo que entre 1874 y 1888 entraron en Venezuela unas 26.090 personas en calidad de inmigrantes, cifra muy baja si la comparamos con la inmigración a similitud por otros países americanos durante el mismo período: los Estados Unidos recibieron un total de 5.881.000 de inmigrantes entre 1874 y 1888, con un promedio anual de 392.066; Argentina, 1.036.000 y 69.047, respectivamente; Canadá, 729.000 y 66.250 de promedio anual; Brasil, 530.000, con 55.335 inmigrantes anuales-promedio; Venezuela, los escasos 26.000 estimados, con un promedio de 1.733 inmigrantes por año (4).

En síntesis, el largo tiempo histórico que va desde 1830 hasta las primeras décadas del siglo XX en Venezuela, etapa durante la cual asienta su vigencia el régimen político del caudillo, produce un tipo de sociedad que se estratifica progresivamente, aunque en forma muy lenta y siempre dentro de los moldes de una realidad agraria y tradicional. Tipificación económicas, sociales, educacionales y político-militares, condicionan, como es obvio, la ubicación de los individuos a lo largo del período. Si hacia 1830, el sector dirigente está integrado esencialmente por los grandes propietarios y la tierra es el símbolo fundamental de la riqueza, a partir de aquella fecha se va a adherir al mismo el incipiente núcleo mercantil que sirve de enlace en las relaciones comerciales con el exterior. El sector dirigente va almacenando con el tiempo y sucesivamente restos de camarillas burocráticas de distinta procedencia; los núcleos de carácter mercantil y exportador se transforman en importantes agentes de capital foráneo y el resultado esencial es la carencia de una burguesía nacional fuerte y capaz de institucionalizar un Estado demo-liberal en Venezu-

-la; al contrario, el régimen político se configura en un sentido claramente autocrático y personalista, y en sus momentos más críticos, es simplemente una dictadura arbitraria y despótica.

Los pardos de la colonia devienen muchos de ellos en grupos intermedios, integrados por artesanos, funcionarios, pequeños propietarios rurales, comerciantes minoristas, intelectuales y profesionales. Se trata de un sector o sectores escasos y débiles, que pasan a ser más bien víctimas del orden autocrático del caudillo de turno, entre la espada y la pared del dominio del latifundismo rural y los prestamistas usureros de las pocas ciudades. En la base, una población rural de hecho esclavizada, el campesinado: los siervos y peones de las haciendas, dispersos a lo largo de la geografía venezolana, sujetos a la recluta militar y a la explotación de los latifundistas. Los núcleos de obreros brillan por su ausencia y lo mismo sucede con las organizaciones sindicales: la sociedad venezolana es una sociedad fundamentalmente agraria y preindustrial. Habría que esperar hasta 1896 para ver la realización de un Primer Congreso de Obreros instalado en Caracas, esfuerzo organizativo que va a naufragar posteriormente a pesar de significativas deliberaciones (62).

3) La política de los caudillos en Venezuela.-

(1)

Robert L. Gilmore, en Caudillism and Militarism in Venezuela, 1810-1910, (1), sitúa al caudillismo como el rasgo preeminente del sistema político venezolano desde 1814 hasta 1935 (2) y lo define como la unión del personalismo y la violencia para la conquista del poder; en otras palabras, una forma de selección y establecimiento del liderazgo político en ausencia de una estructura social y de unos grupos políticos adecuados al funcionamiento del gobierno representativo (3). En el Estado caudillesco, la violencia política se constituye en factor de movilidad social; de ahí que la situación política de Venezuela entre 1830 y fines del XIX pueda resumirse en la célebre frase de uno de sus caudillos-presidente, Antonio Guzmán Blanco: "El país es como un cuero seco, usted lo pisa por un lado y se levanta por el otro". Las 39 revoluciones de importancia y los 127 alzamientos menores, que sumados tienen una duración de 8.847 días, ilustran bien esta situación de conflicto permanente y de crónica inestabilidad política de la Venezuela del caudillo (4).

Y es que el desarrollo de una autoridad nacional y de una mayor integración social iba a ser el resultado de una contradictoria centuria en que los períodos de anarquía y de imposición autocrática se turnaron casi cíclicamente. Si la política venezolana entre 1830 y 1935 estuvo caracterizada por el rol del caudillo, para quien la cuestión política es algo más un asunto personal que un asunto público, la actividad desempeñada por aquél no modificó sensiblemente las bases estructurales de poder en lo social y económico, al contrario, contribuyó a consolidarlas en aras de su propio provecho. Desde el momento en que los elementos de actuación manejados por el caudillo consisten en la formación de alianzas personales cimentadas sobre la base de una comunidad de intereses primarios, la fuerza de la personalidad y los lazos de amistad, parentesco y familia, es indudable que la movilización política resultante de este "estilo" retrasará la institucionalización de una autoridad nacional y, por ende, el llamado Estado-nación no podrá operar efectivamente como árbitro secular de la vida nacional, en el sentido de una regulación y dirección mínimas de carácter económico y social (5). Queda claro que en Venezuela, como en otros países latinoamericanos, la conservación del orden social oligárquico se va a asegurar a través de caudillos prestigiosos: el liberalismo constitucionalista, asumido como ideología política, no iba a encontrar un núcleo burgués suficientemente fuerte y capaz de prestarle apoyo para la realización práctica de tal proyecto ideológico.

Se explica así, por ejemplo, la preponderancia política, en Venezuela, del caudillo llanero José Antonio Páez, quien encontró sólidos fundamentos "cuando se transformó en el más fuerte propietario territorial del país y por ende en la cabeza visible de la clase conservadora y terrateniente que ya asentaba sus reales en toda América" (6), a partir de 1830 con el arranque del Estado republicano. En este sentido, el caudillo aparece como el nuevo dirigente de la situación postbélica y como la síntesis del poder económico y social, apoyándose en una serie de elementos carismáticos, que en el caso de Páez pueden resumirse en el prestigio ganado como jefe de los llaneros en la guerra de independencia. En la circunstancia venezolana, el intento de elaborar un "modelo" del tipo caudillo encuentra obvias dificultades, aunque también es cierto que pueden señalarse elementos y líneas de continuidad de utilidad para el análisis.

En primer lugar, la figura del caudillo en Venezuela constituye muchas veces un complejo contradictorio de afirmaciones y negaciones. De una parte, estamos en presencia de una insatisfecha rapacidad y una in-

-eliminación irresistible al autocratismo arbitrario y corruptor. A la vez, hay promesas sociales, pero posteriores olvidos de las mismas una vez alcanzado el poder, y en éste, el fomento por todos los medios de la adhesión de carácter personalista: las formas institucionales nacen ya debilitadas y subordinadas por esta voluntad personal. De otra parte, en el caudillo, la carencia de nociones académicas no excluye una intuición política y un don innato para el manejo y manipulación de los hombres e, incluso, de ciertos intelectuales que, a cambio del favor personal que el jefe les otorga, pretenden elaborar concepciones doctrinarias que justifiquen teóricamente de alguna manera la presunta inevitabilidad del "gendarme necesario" y del llamado régimen del "cesarismo democrático" (7). Si el caudillo venezolano afianza su poder sobre la base de la tierra, el latifundio y la explotación tradicional de las masas rurales desposeídas, ello no excluye la observación de un nivel de autonomía en el campo de su acción política, por lo que es susceptible de variantes, de distintos "estilos" o modos de actuación, según sea la coyuntura y los condicionamientos más inmediatos.

En Venezuela, José Antonio Páez se erigía ya en el árbitro del juego político desde 1826 y a partir de 1830, el general Planero será el garante del orden constitucional oligárquico. Jefe de gobierno de la llamada Oligarquía conservadora (1830-1848), el Benemérito General, Ciudadano Esclarecido, Sostenedor del Poder Civil, etc., -para nombrar sólo algunos de los epítetos del caudillo-, fue también el primer presidente de la República (1831-1835) y fue reelegido para un segundo período de cuatro años en 1839: "En los años en que no ocupó personalmente el cargo presidencial -dice E. Lieuwen-, siguió siendo, hasta 1848, el poder entre bambalinas. Solamente los hombres que le respondían podían ser administradores, y solamente la política aprobada por él podía aplicarse" (8). El mismo Centinela de la Patria condensaba en 1825 lo que podría ser el "programa común" de las autocracias caudillistas: "Este país necesita otra cosa distinta de la presente, que establezca el orden, le dé la debida consideración a los que la merecen e imponga silencio a los tramoyistas" (9). Entre los ingredientes de la supremacía paecista -desmedido personalismo, enriquecimiento en el poder, inmoralidad, violación de la legalidad constitucional y perpetuación en el mando-, se destaca significativamente el citado en segundo término; en efecto, Páez fue un típico ejemplo de enriquecimiento conseguido al amparo del poder: ya en 1822 escribía a Santander que "Mi cabeza está llena del deseo de destruir a mis enemigos: si

mañana fuesen expulsados del territorio, mi sola ambición sería gobernar y aumentar las propiedades que la patria me ha dado (...) la patria me ha llenado de honores; ha recompensado superabundantemente los esfuerzos que hice por mi propia defensa y por la independencia" (40).

En el marco de un Estado plutocrático, el régimen de la oligarquía conservadora pierde al cabo de una década su original homogeneidad y comienzan a aparecer las primeras fisuras en la aparentemente monolítica estructura política que había creado. La inquietud de algunos elementos civiles es patente ante el creciente poder de la camarilla militar; esto es, dentro del propio bloque dominante surgieron tensiones entre la fracción terrateniente hegemónica y los sectores comerciales y profesionales, aunque probablemente "el factor más importante de todos fue el creciente antagonismo popular ante los evidentes propósitos de parte de la Oligarquía conservadora de reconstruir el sistema colonial, con un general venezolano en lugar del rey español, abogados criollos en lugar de ministros peninsulares, y conservando intactas la sociedad y la economía coloniales" (41). En realidad, la fórmula política de la oligarquía conservadora se iba a revelar incapaz de asegurar la pacífica evolución del país con la que habían soñado sus mejores ideólogos (42). Son las motivaciones que contribuyen al surgimiento de un Partido Liberal, formalmente de oposición, en la segunda década del XIX. La escisión del bloque político entre Conservadores y Liberales es por lo demás el modelo partidista de muchos países latinoamericanos en la misma época y refleja fundamentalmente las discrepancias políticas que ocurrían en el seno de los propios sectores dominantes de la sociedad oligárquica. No eran tampoco partidos en el sentido moderno y estricto del término, sino más bien organizaciones de notables bajo el liderazgo de caudillos carismáticos.

El Partido Conservador o Godo (43) es el principal apoyo político del régimen paecista bajo las banderas de la Constitución, la paz y el mantenimiento del orden. Un partido ministerial que emerge desde el poder y se integra por altos funcionarios, gobernadores de provincia, prefectos de distrito y alcaldes municipales: "Sus organismos de dirección se corresponden con los órganos del Estado. Tal como Páez en sus campañas militares movilizaba con sus instrucciones a sus oficiales en todo el país, así ahora pone en acción a los empleados civiles de la administración para sus campañas políticas. El concepto es el de partido en el poder que utiliza todos los recursos que proporciona el mando" (44). El partido conservador -o godo, constitucional, legalista, civilista, ministerial, oligár-

-~~quiere~~! tales eran sus variados calificativos-, se constituye como defensor a ultranza del status quo inaugurado en 1830 y de las principales instituciones políticas configuradas por la Constitución de aquél año. Su esencial núcleo socioeconómico estará constituido por un sector mercantilista -"canastilleros"- y restos del mantuanismo aristocrático con aspiraciones de cargos públicos y administrativos (8).

De otro lado, se ha dicho que el Partido Liberal tiene un antecedente remoto en la Sociedad Patriótica: "Como antes parte del mantuanaje feudal, señores de la tierra, viene inicialmente a integrarse en el nuevo partido. Ya no se trata de quitarse el tutelaje extranjero, sino de sustituir al grupo oligarca que detenta el poder. Este será el verdadero objetivo" (16). En 1840, un grupo de notables de la capital, principalmente civiles, resolvían fundar una asociación con el ánimo de participar en el debate político. Tomás Lander era quien concebía la idea de la organización, su iniciativa y su programa; fomentando la reunión constitutiva y la colecta para fundar un periódico. Si en un principio se piensa en un partido de carácter local y se le llama Sociedad Liberal de Caracas, después se denominará simplemente Partido Liberal, extendiendo su acción a todo el país. Entre sus fundadores, además de los publicistas Tomás Lander y Antonio Leocadio Guzmán, tendremos representantes de la aristocracia criolla tales como los ex-marqueses Francisco Rodríguez del Toro y Manuel Felipe Tovar, y el ex-conde Juan Bautista Mijares (17). El programa de la asociación liberal condensaba lineamientos frente al régimen conservador: el principio de alternabilidad en los cargos públicos; el uso del poder electoral; el examen libre de los intereses de la comunidad; el rechazo de la fuerza en la resolución de las cuestiones políticas; el imperio de la ley; la independencia de la Iglesia, del poder judicial, universidades y colegios; guerra al monopolio y al privilegio y organización de la milicia nacional (18). Con el objetivo de poner en marcha el programa, los liberales acordaron la creación de un periódico de circulación semanal, con el nombre de El Venezolano, dirigido por Antonio Leocadio Guzmán. El primer número, de agosto de 1840, enunciaba el objetivo de "combatir con el lenguaje de la razón los principios de la oligarquía política que afligía a Venezuela; los errores de la administración y los extravíos de las legislaturas pasadas; sostener y consolidar la opinión de los que forman el partido de los verdaderos principios constitucionales; y favorecer y sostener la marcha franca y liberal de la República" (19). En el primer editorial, Guzmán afirmaba el grito de hombres nuevos,

principio alternativo, como auténtico leit motiv del movimiento, su consigna central; en palabras del historiador J. Gil Fortoul, "A las voces de hombres nuevos y alternabilidad democrática acudieron a ampararse bajo la bandera liberal cuantos por razones varias vivían descontentos del gobierno o se veían apartados de los puestos públicos, o aspiraban a una gradual transformación en la estructura misma de la República" (20). El lema se iba a repetir por todas partes en forma sistemática; de ahí que en cierta medida haya venido a confundirse el nacimiento del partido liberal con la fundación de El Venezolano, tomando Antonio Leocadio Guzmán una figuración de primer plano como jefe supremo del liberalismo, como caudillo civil del partido liberal. (41)

(II) Si la oligarquía conservadora estuvo signado por la supremacía de Páez, la llamada Oligarquía liberal (1848-1858) va a estar sujeta al caudillismo de los orientales, a la dinastía de los Monagas, y con ésta se profundiza considerablemente, como hemos visto en el apartado anterior, la concentración de la propiedad territorial agraria. Con el gobierno de los Monagas (José Tadeo Monagas, por ejemplo, el Sol de Oriente), el reparto de la tierra va unido a un nepotismo cerrado, excluyente y corrupto. Son gobiernos de estilo autoritario y personalista, en los que la posesión de poder político es instrumentalizada para la apropiación de los mejores suelos por parte de la familia gobernante. (21) Sin duda que la manera como los Monagas van a entender la liberalización del poder, no pudo ser más peregrina. "Liberalización" llaman a una actitud complaciente para con la Iglesia católica, a través de dos consignas bien dispares: por un lado, la reconstitución de la Gran Colombia, y por otro, el reconocimiento de la religión católica como religión oficial del Estado venezolano, punto que lograron imponer en la Constitución de 1857, la cual, en realidad, era consecuencia de las propias aspiraciones del general José Tadeo Monagas en cuanto a facilitar su perpetuación en el mando.

Bajo el manto del "liberalismo", la práctica dictatorial muchas veces, no impedirá que en el texto de 1857 regrese a afirmaciones de carácter religioso, tales como que "El Estado protegerá la religión católica, apostólica y romana y el Gobierno sostendrá siempre el culto y sus ministros conforme a la ley" (22). Lógicamente, el liberalismo contradictorio tenía también sus compensaciones en cuanto a que en dicho texto se reiteraba la supresión de la pena capital por delitos políticos y la abolición de la esclavitud, medidas ambas del gobierno del hermano y predecesor de

(44)

José Tadeo, José Gregorio Monagas. La ciudadanía pasaba a adquirirse siendo venezolano mayor de 18 años o casado, se suprimían los requisitos económicos y se aplazaba hasta 1980 el de saber leer y escribir; sin embargo, para ser elector de segundo grado se conservaban los condicionamientos de tipo económico (45). El cambio de denominación de Representantes por el de Diputados y la creación de un Poder Municipal, limitado a una relativa autonomía de los ayuntamientos, estuvieron unidos al aumento del período constitucional a seis años -que era en realidad el principal motivo, junto a la prohibición de reelección, de la reforma constitucional de los Monagas.

Si el liberalismo era sólo una excusa, queda claro que en la cuestión de la esclavitud, ni conservadores ni liberales, política y económicamente, tenían mayor interés en su conservación. El sistema esclavista, como régimen socioeconómico, entraba en decadencia paulatina con el auge del café, cultivo de tierra templada, y el debilitamiento relativo del caudío y de la caña de azúcar. La esclavitud perdía así su interés económico para ambos grupos políticos y al contrario se presentaba ya como una costosa carga para los terratenientes: la Ley de abolición de la esclavitud, de 1854, fue más la consecuencia de las necesidades de éstos que de los postulados de la filosofía liberal, aunque la medida estuviera rodeada de considerables elementos propagandísticos y de una retórica para impresionar. El liberalismo en Venezuela, que ocupa altos cargos en la administración monaguista, fue más la práctica del oportunismo que otra cosa, el aglutinante del descontento de "todos los que no estaban en el Poder y todos los que lo ambicionaban" (46). Si el liberalismo logró identificarse con el movimiento federal, lo fue sin organización ni programa alternativo. El objetivo parecía ser simplemente la destrucción del Partido Conservador, que no implicaba una alternativa concreta de poder. La Guerra federal de 1858-1863 iba a poner de relieve las profundas fracturas de una sociedad que no se había modificado sustancialmente desde los últimos años coloniales.

La última oportunidad de los sectores de la inteligencia liberal-conservadora era precisamente la Constitución de 1858, cuando, tras el derrocamiento de los Monagas, un Congreso Constituyente se reúne en la ciudad de Valencia con el objeto de discutir un futuro texto fundamental que en opinión de muchos significa una transformación del proceso constitucional venezolano. En su parte dogmática distinguía por primera vez en Venezuela entre derechos, garantías y declaraciones. La enumeración de los derechos individuales no era limitativa; se reiteraba la supresión de la pe-

-na de muerte por delitos políticos, y en lo relativo a los delitos comunes, se declaraba que "el Código Penal limitará en cuanto sea posible la imposición de la pena capital" (27). La omisión a declaración alguna sobre la religión implicaba la vuelta al régimen de libertad de cultos consagrado en la ley de 1834. La parte orgánica, por otra parte, ponía de manifiesto la primacía de las tesis descentralizadoras, sin llegar a una estructura federal del Estado venezolano. El poder se dividía en Nacional -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y Municipal, que residía en las provincias y cantones. La autonomía local era amplia; en cada provincia habría una legislatura -3 diputados por cantón-, electa por dos años en sufragio directo y secreto. Las Legislaturas podían elegir a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y a los Senadores nacionales, y les correspondía el fomento de la instrucción pública, de la emigración y todas las materias no reservadas al poder nacional. Los Gobernadores provinciales eran agentes del poder nacional, elegidos por cuatro años, por sufragio de los ciudadanos de la provincia, no siendo reelegibles para el período inmediato (28). El Legislativo seguía siendo bicameral, con diputados elegidos por cuatro años, a razón de uno por cada 25.000 habitantes; los senadores por igual período y dos por provincia. La Constitución de 1858 estableció una ampliación del sufragio, extendiéndolo a todos los varones casados y los solteros mayores de 20 años; siendo directas todas las elecciones, a excepción de la de senadores. Se conservaba la exigencia de medios económicos tan sólo para ser senador: renta anual de 1.200 pesos, profesión de 1.500 o empleo de 2.000 (24). Presidente y vicepresidente no eran reelegibles y los poderes extraordinarios al primero sólo podían ser otorgados por el Congreso para un plazo de 90 días. El establecimiento, finalmente, del juicio por jurados en las causas criminales era otra de sus innovaciones más interesantes. Sin embargo, pese a estas disposiciones de sentido renovador en la estructura político-constitucional del Estado venezolano, el estallido de la Guerra federal iba a convertir en inaplicable la Constitución de 1858. Era cierto que los constituyentes de Valencia aparecían como portavoces de una "buñuesía nonata" y de ahí que "su obra no podía tener solidez ni sus ideas arraigo alguno, en una sociedad en la que no contaban sino el Caudillo y la masa inorganizada, la cual menea instintivamente el abismo que la separaba de aquellos en quienes concurrían todos los privilegios: privilegio del nacimiento, de la educación de la riqueza" (34).

[III]

Dado una óptica eminentemente conservadora, José Santiago Rodríguez, en su Contribución al estudio de la Guerra federal en Venezuela, afirma que "Si se estudia, con detenimiento y sin prejuicios, el proceso histórico de nuestra guerra de la federación o de los cinco años, se cae en la cuenta de que dos factores principales influyeron en los sucesos que lo caracterizaron: la subversión que, tanto en el orden político como en el social y económico, había creado la lucha por la independencia, y los naturales efectos que tenía que producir, en un ambiente saturado de anarquía y analfabetismo, principalmente entre las clases proletarias, la propaganda política que, de 1840 a 1846, hará que no se piense en otra cosa sino en considerar a la agrupación que venía ejerciendo el poder desde la fundación de la República, como fiel continuadora del poderío español, contra la cual debía lucharse con el mismo o mayor empeño que el que se había empleado en combatir a aquél. Desde luego que otros factores más contribuyeron también; pero ninguno de éstos tuvo, a nuestra manera de pensar, la amplitud e importancia que alcanzaron aquellos dos" (31). En otras palabras, y contraleiendo el texto que trata de ver la Guerra federal como un problema de "anarquía" y "subversión", no cabe duda que serios conflictos en la estructura social venezolana, que giraban alrededor del problema fundamental de la tierra, iban a explotar con inusitada fuerza en aquel auténtico terremoto que fue la contienda de 1858-1863. El movimiento federal iba a traer como consecuencia el surgimiento de una explosión popular de signo social que incorporó de varias maneras a las masas campesinas a la lucha, dándole a la crisis un perceptible perfil agrarista. La guerra federal es un momento clave en el proceso político y social de Venezuela y sólo comparable a la guerra de independencia en el nivel de los recursos movilizados y las fuerzas en conflicto.(1)

El hecho cierto es que el bloque social dominante, bajo cuya hegemonía se había constituido la República de 1830, experimentó una progresiva escisión, cuando en 1840, los elementos representativos de la oposición al gobierno godo o conservador decidieron organizarse políticamente a través del Partido Liberal. Mientras que los liberales extienden su base social, en términos siempre relativos, explotando el descontento creciente de las masas populares, la oligarquía conservadora se muestra incapaz de paliar los efectos de la crisis económica mundial que hacia 1845 afecta a Venezuela, y que va a pagar con la pérdida de su hegemonía política. Va a ser el momento en que el general José Tadeo Monagas ascienda a

la presidencia apoyado por Páez para luego rebelarse contra la tutela conservadora. Entre 1848 y 1858 los problemas fundamentales persisten, esta vez bajo un liberalismo de fachada y, simultáneamente, en 1858, otra crisis económica internacional va a repercutir en Venezuela, provocando la baja del precio del café en un 20 por ciento, el de los cueros en un 70 por ciento y el de los productos de la caña en un 50 por ciento. De otro lado, a partir del año fiscal de 1852-53, se había observado en los presupuestos una tendencia progresiva hacia el déficit hacendario, el cual, según cifras, había alcanzado a más de 5 millones de bolívares en 1854, y en 1855-56 pasaba de los 11 millones de bolívares (33). En este contexto, una coalición liberal-conservadora ponía término al gobierno de los Monagas sin que mejorara el estado de cosas existente, con lo que el descontento se agudizaba hasta confluir en el estallido de la guerra. La clase dirigente padecía de una notable ceguera y no parecía darse cuenta de los nuevos horizontes sociales y políticos que demandaba gran parte de la población: "Injusticias y desigualdades -dice el historiador J. Nucete Sardi- que venían de la Colonia y se mantuvieron a pesar de la Independencia, fueron encrespando las aspiraciones populares. Personalismos, revoluciones, golpes militares se suceden. Hay una pugna entre los viejos soldados de las guerras de Independencia y los nuevos valores políticos y militares. Esta pugna, muchas veces, se establece aún entre los hombres de la misma generación independentista. No siempre son las ideas las que comandan, sino los personalismos. Así se llega a la revolución de 1958 que forma un gobierno de liberales y conservadores, el cual es barrido por la Revolución Federal" (34).

Una agitación de perceptibles, aunque no muy claros, matices sociales y económicos precedió a la contienda federal. El mismo Fermín Toro, de la intelectualidad conservadora, en sus Reflexiones sobre la Ley del 10 de abril de 1834 -publicadas por primera vez en 1845-, señalaba la angustiosa situación económica de Venezuela en aquellos años. Una de las causas de esta situación era precisamente la misma Ley sobre libertad de contratación, que había favorecido la usura y llevado a la ruina, en muchos casos, a pequeños y medianos agricultores y a trabajadores de la tierra (35). Junto a ello, la propaganda política de los liberales en oposición al régimen conservador, mediante su órgano de prensa, El Venezolano, entre 1840 y 1846, contribuía también a despertar la conciencia popular, a veces más allá de los límites queridos por los propios liberales; así, "La oligarquía quietista -citando a Nucete Sardi-, la riqueza acumulada

en pocas manos; el exacerbado personalismo, la profunda crisis económica que se acentúa a partir de 1843, aumentaron el malestar social y adelantaron el proceso revolucionario" ... "El pueblo buscó en las filas federalistas igualdad y un nivel de vida menos llenos de miserias, ofrecido -a veces demagógicamente desde 1846- por el contradictorio y hábil líder Antonio Leocadio Guzmán ..." (X).

Ahora bien, el movimiento federal es en sí mismo contradictorio y contempla la heterogeneidad misma de los grupos sociales en conflicto. Es indudable que para las masas populares -campesinos, peones, exesclavos, fundamentalmente-, el lema político -Federación- tuvo un contenido mucho más amplio que el de la simple autonomía provincial. Así es como bajo las consignas políticas de la guerra federal se compendian anhelos económicos y antiguas expectativas de justicia distributiva de la riqueza social. Pero al lado de estas aspiraciones populares estaban también las ambiciones personales, los deseos de captura del poder político y la concepción caciquil de la provincia de muchos caudillos federales y por supuesto, detrás de ellos, los sectores privilegiados que, a pesar de la crisis, se mostraban dispuestos, por decirlo así, a jugarse el todo por el todo a fin de detener la marea popular levantada con las consignas de la Federación. Frente a las masas populares, para muchos caudillos el federalismo no era sino la vía para la justificación, en los niveles de la futura estructura política del Estado, de su predominio regional.

Pero la más notable excepción dentro de la dirigencia del movimiento federal fue sin duda la acusada personalidad de Ezequiel Zamora, el General del Pueblo Soberano. Caudillo federal el más cercano a las aspiraciones populares, gran organizador y estratega militar, Zamora cayó sin vida cuando la victoria de la revolución estaba ya muy cercana. Ciertamente, con Zamora los resultados del movimiento hubieran sido muy distintos a los obtenidos por las soluciones conciliatorias que después llevaron a cabo otros caudillos como Juan Crisóstomo Falcón y el mismo Antonio Guzmán Blanco, hijo del líder liberal Antonio Leocadio, con los sectores sociales dominantes. En efecto, Ezequiel Zamora proponía una plataforma doctrinaria que si bien es cierto estaba en el marco de la teoría demócrata liberal-federal, mostraba una inquietud social mucho mayor que la de sus contemporáneos. Sus ideas en buena medida rebasaban el planteamiento puramente político para dirigirse al problema del mejoramiento económico de los sectores populares, víctimas del dominio oligárquico. Para Carlos Irazábal, tantas veces citado en este trabajo, las ideas sociales de Zamora, no to-

-talmente maduras por la reflexión y el análisis, perfilaban ya una concepción distinta de la tradicional en la política venezolana, con la influencia incluso de planteamientos ligados al socialismo utópico (37).

El substrato de la fracción zamorista va a estar integrado fundamentalmente por esclavos y manumisos, soldados de la guerra de independencia o sus descendientes, masas campesinas fundamentalmente llaneras, y gozará del apoyo de muchos pequeños y medianos propietarios agobiados por el agio y la usura (38). Hacia 1859, cuando Zamora organiza el primer Estado Federal en Coro, lo hace con un programa de gobierno que contempla a) la abolición de la pena de muerte; b) la libertad de prensa, tránsito y asociación, inviolabilidad de la correspondencia, libertad de cultos y eliminación de la prisión por deudas; c) la igualdad ante la ley sin distinción de clases sociales; d) inviolabilidad de la propiedad e impuesto a la riqueza; e) independencia del poder electoral, elección universal, directa y secreta del presidente de la República, legisladores, magistrados civiles, gobernadores de Estados y jueces; f) gratuidad de la administración de justicia; gratuidad y derecho a la asistencia de la salud pública para todo el pueblo venezolano; y g) prohibición de la prisión sin juicio y educación obligatoria gratuita. Más aún, en los postulados de Zamora es perceptible un deseo de incorporación de las clases desposeídas a la producción nacional; un enfrentamiento con la concentración de la propiedad de la tierra bajo la consigna de la distribución de la misma; una participación activa del pueblo en las decisiones nacionales y una autonomía del gobierno provincial emanado de asambleas populares y democráticas. (39) Pero la muerte de Zamora trae como consecuencia la restricción del movimiento hacia un simple problema político; como dice J.A. Armas Chitty,

"Zamora es el hombre de la guerra. En las provincias que decretó Estados Federales -Coro, Yaracuy y Barinas-, dió mayor participación al pueblo en la administración y dejó sentado que los gobernantes serían los que el pueblo diese. Difiera esta forma de administrar de la que habían puesto en práctica, tradicionalmente, todos los que gobernaron ..."

Ezequiel Zamora

"... hablaba de Federación con mística y arrojo, y en nombre de ese principio, con audacia, que le sobraba; ardido contra el grupo oligárquico de Páez, contra el de Tovar, su acción habría impulsado reformas que unos, por cansancio, y otros, por variados intereses, estaban incapacitados y hasta descalificados de promover. Falcón y su grupo estaban demás en aquella marcha hacia el centro, en todo aque-

-llo que representaba, con errores y defectos, con pasión y violencia, fe y aliento, lo que desaparece ante la bala anónima en la mañana de San Carlos" (4c).

Su eliminación desvía el curso mismo de uno de los aspectos más interesantes de la Guerra federal: "La muerte del general Ezequiel Zamora puede apreciarse como la quiebra de la revolución. Lo que realizan después Páez y Palcón es un diálogo de cansancio, y el entendimiento de Coche entre Pedro José Rojas y Antonio Guzmán Blanco, no es en nombre de principios, sino en el del tanto por ciento" (41). Si existió un contraste entre muchos dirigentes federales y las masas que los seguían en lo concerniente al contenido del movimiento, el final de la guerra va a mostrar precisamente la primacía de los intereses caudillescos y de los sectores privilegiados sobre las aspiraciones populares. El peligro que la revolución federal entrañaba para los grupos dominantes, conduce a una reacción que da sus frutos en el llamado Tratado de Coche (1863), pacto que pone fin a una guerra de cinco años que conmovió social y políticamente en niveles sin precedentes inmediatos a la práctica totalidad del país. El convenio de Coche vino a legalizar el compromiso entre la jefatura federal y los godos frente al imprevisible empuje de las masas populares. La "consagración legal de la traición" viene a significar en definitiva la recomposición del círculo dirigente y el olvido de las formulaciones sociales y económicas anunciadas; quedarían, sin embargo, la herida de muerte del conservatismo y la democratización de ciertas relaciones personales e interpersonales en la sociedad venezolana, en el sentido de una mayor conciencia de sentimientos igualitarios en los sectores populares.

Las bases materiales de dominación quedan prácticamente incólumes, pero se comprende pronto la necesidad de reformular el esquema político, que debe ahora dar entrada a todos aquellos que reclaman su correspondiente cuota de poder. En este sentido, luego del acuerdo de Coche, de marzo de 1863, la convocatoria de una Asamblea constituyente dará a Venezuela una estructura federal que se ha mantenido, al menos formalmente, durante más de un siglo. En efecto, la Constitución de 1864, inspirada en la Constitución de los Estados Unidos de Colombia (aprobada por la Convención de Río Negro en 1862), pasa las trece provincias de Venezuela a veinte, que "se declaran Estados independientes y se unen para formar una nación libre y soberana con el nombre de Estados Unidos de Venezuela" (art.1); los Estados "reconocen recíprocamente sus autonomías, se declaran iguales en entidad política y conservan en toda su plenitud la soberanía no dele-

-gada expresamente en esta Constitución" (art.12); además, "todo lo que no está atribuido a la Administración General de la Nación en esta Constitución es de la competencia de los Estados" (art.90). En los Estados el Gobierno central no podía tener otros funcionarios que los de Hacienda y las fuerzas militares, y éstas carecen de autoridad fuera de los cuarteles y fortalezas (art.99). Se presentaba como posible que todo acto del Congreso o del Ejecutivo nacional que violase los derechos garantizados constitucionalmente a los Estados, pudiera ser declarado nulo por la Alta Corte de Justicia (art.92). La reforma de la constitución era posible también, si lo solicitaban las legislaturas de los Estados (art.122), los cuales determinarían igualmente la forma de nombramiento de los senadores y diputados que los representaran. Los tribunales estatales adquirirían además carácter de independientes (art.91). Pero se ha resaltado que la gran autonomía de los Estados quedaba neutralizada por otra serie de disposiciones del texto de 1864, que convertía a Venezuela, no tanto en una federación absoluta como en una de tipo mixto (44). Así, por ejemplo, los Estados no podían separarse de la federación (art.13-10^o) y estarían regidos por una misma legislación sustantiva en lo civil y criminal (art.13-22^o).

Por otro lado, la Constitución enumeraba ampliamente los derechos individuales; reconocía la igualdad civil y política de los ciudadanos, la libertad de prensa; declaraba abolida la prisión por deudas y la pena de muerte para toda clase de delitos; por primera vez en Venezuela, establecía la enseñanza gratuita para la educación primaria y de artes y oficios proclamaba la tolerancia religiosa y declaraba que solamente la religión católica podría realizar actos de culto público fuera de los templos (art 14-13^o). El poder legislativo federal era bicameral; dos senadores por cada Estado y un diputado por cada 25.000 habitantes. Las Cámaras tenían voto mutuo y se intentaba garantizar su independencia. El presidente de los Estados Unidos de Venezuela era elegido por votación directa y secreta; cada Estado tenía un voto que era el de la mayoría de sus electores (art. 63), correspondiendo a las Cámaras el escrutinio. Por lo demás, el máximo órgano del poder judicial era la Alta Corte Federal, auténtico guardián del sistema federal (45).

[IV]

Si la Constitución de 1864 estuvo diez años en vigor, el acceso de Antonio Guzmán Blanco al poder en 1870 va a dejar a la federación venezolana suspendida en la práctica (46). En realidad, el federalismo en

Venezuela va a servir a objetivos muy distintos a los establecidos por la propia teoría política y constitucional. No hay que olvidar que sobre la categoría socioeconómica del latifundio y sus expresiones sociales y políticas, fundó el caudillo su autoridad como soberano local, fenómeno que cobra radical importancia después de la guerra federal. En la práctica, lo que se perfiló en Venezuela entonces con mayor claridad fue un sistema político en el que los caudillos locales van a pugnar entre sí y con el gobierno central, basados en fuerzas organizadas y adictas mediante vínculos de lealtad y lazos personales; y tan es así, que se ha hablado de "la inexistencia práctica del gobierno central, disgregado en manos de los caudillos regionales" (45); lo que para otros sería el predominio absoluto del "feudalismo político provincial" (46). Se trataba de un vacío de poder puesto en evidencia antes y después de la guerra y que sólo será superado años más tarde bajo la férrea voluntad de Guzmán Blanco (47).

Antonio Guzmán Blanco, hijo del caudillo liberal Antonio Leocadio Guzmán, ocupó el poder a los treinta y cuatro años de edad y, sin contar períodos de interinato, gobernó directamente catorce años: durante 1870-1877, 1879-1884 y 1886-1888. Para Germán Carrera Damas, la consecuencia más importante de la Guerra federal hay que buscarla precisamente en el Guzmánato (1870-1888), durante el cual se producen las primeras medidas modernizantes del Estado venezolano (48). Es así como, según Arturo Usler Pietri, Antonio Guzmán Blanco configuraría un tipo humano en quien una variedad de los rasgos del fenómeno del caudillo, aparecerían combinados con una especie de "moderación reflexiva": un civil que deviene en militar; un hombre aficionado a la cultura y enamorado de algunas ideas liberales, cuya acción política reflejaría un deseo de contribuir al progreso nacional; su dureza, calculada, y su crueldad, más ostentosa que efectiva, harían del análisis de su personalidad algo ciertamente complejo y difícil (49).

Un estudioso como George S. Wise, en Caudillo. A portrait of Antonio Guzmán Blanco, al examinar el contexto histórico-político del Ilustre Americano Regenerador de Venezuela, pone de relieve cómo los recurrentes conflictos de la sociedad venezolana convirtieron a la solidaridad social y el acuerdo ideológico en verdaderas utopías del proceso histórico; y el camino que encontró el orden político nacional para ser restablecido fue precisamente a través de un liderato fuertemente personalizado. Guzmán Blanco aparecía como el vehículo idóneo para responder a esta necesidad política (50). En un marco ambivalente, Guzmán Blanco ha-

ce frente a dos clases de necesidades; por un lado, juega un papel importante en la reconstrucción del país, consolidando la estructura política e intentando integrarla mediante el desarrollo de las comunicaciones y los transportes y la estabilización de las actividades agrícolas y comerciales, a la vez que impulsando la educación y eliminando los aspectos más pronunciados del control social de la Iglesia. Pero simultáneamente, observó también sus intereses personales, haciéndose rico e instrumentalizando a las personas a su alrededor y violando, incluso, las propias normas constitucionales que había creado (54). Son estos últimos aspectos los que llevan a decir a E. Lieuwen que "Aunque se proclamaba vocero del Partido Liberal y defensor de sus principios, Guzmán Blanco no tenía ideología política ni responsabilidad partidaria. Sus despiadados ataques a los conservadores nacían de la venganza personal, no de principios partidarios. Hizo mofa del liberalismo político al fraguar elecciones, amordazar a la prensa, y aterrorizar a toda la oposición. El federalismo por el que había luchado tanto tiempo el partido quedó pervertido en un centralismo autocrático dentro del cual el mismo Guzmán Blanco asumió el papel de un César vanidoso" (55).

Con el Guzmanato, la autocracia caudillista adquiere cierto matiz européista. Guzmán Blanco había vivido en Europa y los Estados Unidos y, entre sus congéneres, era el único con estudios universitarios. Reformas tan significativas como el decreto de instrucción primaria, gratuita y obligatoria; la implantación del matrimonio civil y del registro civil; la organización de la administración pública y la construcción de diversas obras públicas (teatros, acueductos, tranvías, etc.), sintetizaban el nuevo perfil del régimen. De otro lado, la reordenación de las finanzas nacionales con la promulgación de un Código de Hacienda a fin de centralizar las cuentas del Estado, estuvo acompañada del establecimiento de un régimen monetario uniforme. El caudillismo ilustrado se reflejaba también en la creación de servicios postales y telegráficos extendidos a las principales ciudades y en la construcción de los primeros ferrocarriles. La disminución del poder de dos importantes instituciones extragubernamentales como la Iglesia católica y el caudillismo regional, se verificaba, primer caso, mediante el reconocimiento del matrimonio civil, la iniciación del registro civil (nacimientos, matrimonios y defunciones) y la apertura de los cementerios a los no católicos. Conventos y monasterios fueron abolidos en medio de un laicismo rabioso e independiente y algunas tierras de la Iglesia confiscadas: la cuestión llegó al punto de amenazar

Guzmán Blanco a la Santa sede con un cisma que sustracía a Venezuela de la catolicidad romana (53). Al mismo tiempo, en el segundo caso, en un intento por cortar las fuentes financieras de los caudillos locales, se va a establecer el control y explotación nacional de los recursos naturales, y es igualmente fijada una asignación anual a los gobiernos locales, el llamado Situado Constitucional, que viene a reemplazar fuentes previas de financiación local, con lo que los caudillos a este nivel van a convertirse progresivamente en una especie de pensionistas del gobierno nacional (54). Guzmán Blanco también se cuidó de conectar con los símbolos nacionales, exaltando la memoria de Simón Bolívar con motivo de la traída de sus restos para depositarlos en el Panteón Nacional de Caracas, al mismo tiempo que desarrollaba un programa de obras públicas en la capital -edificios públicos y de ornamentación- de acentuado afrancesamiento arquitectónico (55). Paralelamente, la actividad científica y universitaria registraba cierto florecimiento y las primeras influencias del positivismo filosófico se manifestaban en Venezuela.

Pero todo ello no excluía la presencia del personalismo en la práctica gubernamental. Guzmán Blanco hizo nombrar a su padre, Antonio Leocadio, Ministro del Interior y Justicia, luego Canciller y Miembro de Número de la Academia, y el propio Congreso, en 1873, le daba el título de "Ilustre Prócer de la Independencia Sudamericana". De otro lado, Guzmán Blanco, además de presidente de la República, se hizo designar presidente de siete Estados del país, de la Alta Corte, Director de la Academia de la Lengua, Rector de la Universidad y, por si fuera poco, Ministro Plenipotenciario en nada menos que siete países europeos (56). Ello no le impidió tampoco formar uno de los mayores patrimonios privados hasta entonces conocidos y poseídos por un venezolano, al amparo del poder y mediante fraudulentas negociaciones. Se trata de la "otra cara" del Guzmanato que entra de lleno en la parte intrínseca del régimen caudillista, en lo que tiene de irresponsabilidad ideológica, uso impropio y sin reservas de la fuerza, argucia financiera y desmedido personalismo. Son características que se proyectan decisivamente hacia el interior del sistema de gobierno guzmancista y son en buena medida responsables de su espíritu y formas de actuación. En este punto aparece con claridad que la política de Guzmán Blanco no está directamente adherida a principios o convicciones predeterminadas. Efectivamente, si profesa adherencia a la causa liberal en muchas ocasiones, la historia y los hechos de su gobierno indican una constante oscilación de objetivos, un frecuente remover de ideas y progra-

-mas y una total falta de responsabilidad hacia esa política, los principios y las alianzas. En este sentido, el oportunismo de Guzmán Blanco lo es en un alto grado. Asimismo, en las condiciones prevaletentes en Venezuela durante su período de gobierno, mientras hubo una constitución formal que consagraba las libertades civiles, existía de hecho a todo lo largo y ancho del país una continua serie de movimientos revolucionarios, situación que alternaba además con un estado de guerra actual o potencial. Bajo estas condiciones, Guzmán Blanco estuvo predispuesto a ver los signos de desafecto y discrepancia como algo que había que reprimir duramente; en otras palabras, cualquier voz de disenso era considerada, no sólo como una ofensa personal al caudillo, sino también como un acto contrario al propio sistema de gobierno y preludio, por tanto, a la insurrección. De igual manera, la carrera política del caudillo de la Federación muestra una preocupación por amasar una gran fortuna personal, tanto que es difícil distinguir o dibujar una línea entre las transacciones financieras que Guzmán Blanco hizo en beneficio del país, y las que hizo en su propio provecho. Su nombre y los nombres de su círculo familiar más inmediato, estuvieron asociados a casi cualquier empresa económica en Venezuela durante su administración. En fin, si fue característico su personalismo en la gestión gubernamental, es un hecho prácticamente intrínseco el que el "cáncer de la vana gloria" haya acompañado siempre su carrera de caudillo (57); muchas de sus más espectaculares medidas expresaron más bien poderosos deseos de endiosamiento y magnificencia.

Lógicamente, la búsqueda de un estilo más actual por parte de la administración guzmancista, plasmado en medidas como la creación del ministerio de Instrucción Pública, la regularización de la moneda en sentido uniformizador, la redacción de los Códigos civil, criminal, mercantil y militar, el fomento de la inmigración y el levantamiento de los primeros censos venezolanos de población con criterios más técnicos que los anteriores, contribuyen sin duda a darle al Guzmanato un sentido moderno que pasadas autocracias caudillistas no tuvieron. En este sentido, el "camino" hacia una autoridad nacional como punto de referencia de las fuerzas políticas y sociales, es un proceso verificable y real bajo su mandato. No por eso el caudillo deja de propulsar reformas constitucionales para satisfacer deseos personales y de egolatría consumada. Ilustran bien estos afanes las ligeras modificaciones de detalle -verificadas a instancias de Guzmán Blanco- introducidas en la Constitución de 1874, que por lo demás es copia casi literal de la de 1864. En efecto, con el fin

de halagar al primer magistrado, se va a cambiar el nombre de algunos Estados de la Federación venezolana y así, por ejemplo, el Estado de Caracas pasó a llamarse, para no insistir, Estado Guzmán Blanco (53).

Con parecidas intenciones, la Constitución de 1881, reproduciendo casi literalmente el texto de 1874, contemplaba diversas reformas de sabor europeo sugeridas por el caudillo, quien era admirador y visitante asiduo del Viejo continente. Las principales novedades eran, en 1881, la reducción del número de Estados; la creación de un Consejo Federal; el aumento a cuatro años del período de diputados, senadores y miembros de la Alta Corte Federal; y la introducción del recurso de casación, tomado sin duda de la legislación francesa (54). La creación del Consejo Federal, con procedencia formal del derecho helvético, dió lugar a que la Carta de 1881 fuese llamada la "Constitución Suiza", destinada, claro está, dirían algunos no sin ironía, para los helados territorios de la Venezuela tropical. Pero a pesar del acierto o no de las importaciones constitucionales, El Consejo Federal aparecía inspirado directamente por la Constitución helvética de 1874 y se componía de un senador y de un diputado por cada entidad política y un diputado más por el Distrito Federal, que serían elegidos por el Congreso cada dos años de entre las representaciones de los Estados y del Distrito Federal. A su vez, el Consejo Federal estaría encargado de la elección, entre sus miembros, del presidente de los Estados Unidos de Venezuela y de la persona que habría de reemplazarla en casos de falta temporal o absoluta (55). Por lo demás, establecía también el texto de 1881, una Corte de Casación independiente de la Alta Corte Federal, con funciones que comprendían, además de la resolución del recurso de casación, el juicio por responsabilidad de los altos funcionarios, la dilucidación de competencias entre los funcionarios de los Estados y la información sobre las dificultades que se presentasen en la aplicación de las leyes (56); en realidad, la Corte de Casación vino a cumplir la función de órgano dirimente de la competencia en materia judicial entre los Estados y la Federación (57).

[Y]

Ramón J. Velásquez, en un excelente libro, La caída del liberalismo amarillo. Tiempo y drama de Antonio Paredes (63), hace una interesante exposición del cuadro político de la Venezuela inmediatamente anterior a la hegemonía del caudillismo andino y pone de relieve cómo, hasta el gobierno del general Ignacio Andrade (1898-1899), la política venezolana va a estar dirigida por los actores principales o de segundo orden del movimiento social y militar de la Federación. Federalistas, guzmancistas, reivindicadores, rehabilitadores o legalistas, bajo la denominación común de liberales amarillos, constituyen el grupo dominante y excluyente del poder: "Partiendo desde Caracas que es el vértice, la organización cubre toda la República. Cada uno de los Estados de la alianza federal es en realidad un gran feudo, subdividido o repartido en verdaderas encomiendas políticas entre los tenientes o aliados de los grandes señores provinciales quienes de esta manera garantizan al que está en Caracas la seguridad de la paz o los contingentes humanos necesarios para hacer la guerra. Así en escala descendente que no deja fuera de sus redes ni a la más remota aldea" (64).

Al régimen político censitario y esclavista de las oligarquías conservadora y liberal, había sucedido, como consecuencia de la Guerra larga de 1853-1863, el régimen llamado federal. En la Venezuela federal, el poder de un Guzmán Blanco o de un Joaquín Crespo -el Tigre Crespo- descansaba esencialmente en el funcionamiento más o menos eficaz de un pacto que ligaba a terratenientes y guerreros diseminados por las vastas y aisladas provincias del país. Pero precisamente, el advenimiento de la hegemonía andina, primero con Cipriano Castro y luego con Juan Vicente Gómez, va a significar la liquidación de muchas cosas y entre ellas la de dicho sistema de pactos entre los caudillos federales que durante casi cuarenta años ejercieron un dominio absoluto sobre Venezuela. Y es que junto a Cipriano Castro iban a hacer acto de presencia un conjunto de nuevas masas humanas -las masas andinas-, que hasta ese instante habían permanecido al margen de la conflictiva política nacional. La dominación andina, como nuevo y prácticamente último ciclo del caudillismo, es de sumo interés para el proceso político venezolano, no tanto porque se produzca en un contexto específico de la historia venezolana, sino más bien por las consecuencias que va a engendrar en el sentido de una dirección política que hará inviable el propio régimen caudillista. Por lo demás, los condicionamientos estructurales de la sociedad venezolana permanecerán incólumes por lo menos hasta la primera década del siglo XX (65).

Si seguimos a Domingo Alberto Rangel (66), vemos, en efecto, que el cuadro político instaurado por la revolución federal era ya un régimen inscripto para el momento del advenimiento de los caudillos andinos. El régimen reposaba, desde la década de 1860, en el equilibrio inestable de un caudillo nacional cuyo prestigio y autoridad configuraban los lazos de unión entre las desperdigadas regiones venezolanas ahora convertidas en feudos -Estados de la Federación-. El sistema federal y postfederal descansaba en una especie de pacto de vasallaje, en el mismo sentido en que a un rey le rodean los señores de cada feudo, sostenidos a su vez por un caudal de personajes menores y en las masas campesinas agobiadas por la servidumbre. El dominio del rey sería simplemente nominal porque la soberanía efectiva vendría a recaer en sus feudatarios que tenían en sus manos las armas y el poder económico. La Venezuela creada por los caudillos de la Federación sería una copia de este mecanismo político: "El Presidente de la República actuará como un 'primus inter pares' de la numerosa familia de caudillos que se apropian de las distintas regiones del país. La primera capacidad que ha de ostentar el jefe del Estado es la de ganarse a los discolos amos de la retacada geografía nacional. El orden impera cuando los feudos regionales no tienen aspirantes -y un solo caudillo los explota- o sobreviene una tregua en la disputa por el botín. Pero es el caso excepcional porque mucho más frecuente resulta el espectáculo de las riñas lugareñas de las cuales tiene que servir de árbitro el Presidente de la República" (67).

En el contexto federalista, mientras vivieron un Antonio Guzmán Blanco o un Joaquín Crespo, el sistema pudo funcionar, aunque penosamente y con el alto costo de las luchas y los conflictos casi permanentes. Sin duda que con la muerte de Crespo la Federación se desplomó y el camino quedó abierto para el caudillaje andino, cumpliéndose así el último ciclo de control político nacional por parte de elementos regionales: "Los Llanos habían producido al general Páez como primer gobernante estable de la República, luego subieron sucesivamente al poder el general Monagas de la húmeda costa nordeste, seguido por el mariscal Falcón de la árida costa noroeste. La última parte del siglo fue dominada por Guzmán Blanco, de Caracas. Con la llegada al poder de los andinos, al terminar el siglo, había cumplido un círculo completo el patrón del control político de la nación por caudillos regionales" (68).

Pero la llegada del andinismo a la política venezolana también participa de una causalidad compleja y múltiple. Es cierto que consigna como

orden administrativo, fiscal y policial eran cuestiones que en la Venezuela de fines del siglo XIX, brotaban insistentemente de unos grupos dominantes de la oligarquía, cansada ya de soportar a los caudillos federales e arbitrariedad improductiva. De otra parte, las masas estaban poseídas de una sensación de cansancio histórico, quemados sus ánimos en las frustradas guerras civiles que una tras otras formaban una espiral de nunca acabar. Eran factores que confluían y formaban parte de una crisis ya crónica que abonaba el terreno a la hegemonía andina. (69) Pero lo que es más interesante, durante casi setenta años de vida republicana, los Andes constituían una región que había permanecido al margen del poder político. El monopolio de éste se había circunscrito esencialmente a las tierras bajas y cálidas del país -llanos occidentales, centro y oriente de la república hasta el punto de que los Andes vivieron aislados y configurando un entorno geopolítico más abierto hacia Colombia que a la propia nación venezolana. Precisamente por su aislamiento, la región andina pudo sustraerse al cataclismo que, en lo económico y social, supuso la Guerra federal e, incluso, beneficiarse de él y del desequilibrio subsiguiente al mismo: no vemos que a los Andes emigraron acaudaladas familias que huían del enfrentamiento y vastos sectores de población llanera. Comenzaba también entonces un acrecentamiento del cultivo del café que en diversas etapas iba a convertir a la región en la más próspera del país, proceso que indudablemente repercutirá en el nivel político, en el sentido de que los Andes sentirán con fuerza suficiente para aspirar al gobierno de la República. G. Carrera Damas hace una síntesis acertada de la cuestión cuando afirma que "El vacío de poder que se produce en el centro del país por el agotamiento de los partidos tradicionales, el debilitamiento del gobierno central por la ineptitud y la anarquía caudillista, la relativa bonanza económica de la región andina, en gran parte a salvo de trastornos profundos y depredaciones prolongadas padecidas por el resto del país, todas las circunstancias que concurren en el advenimiento de la época andina de la historia de Venezuela" (70).

No es coincidencia por consiguiente que cuando se produce la Revolución Restauradora (1899), acaudillada por el tachirense Cipriano Castro un año antes el movimiento total del comercio exterior de Venezuela alcanzara a Bs. 74.489.003; de los cuales, Bs. 61.847.542 eran producidos por la exportación de café (71). En este sentido, podía afirmarse que Castro sumía los imperativos de una economía -monoproducción cafetera- que reclamaba el mando y se sentía madura para ello. (72) Cipriano Castro, quien

había entrado con sesenta hombres por el occidente andino desde Colombia en mayo de 1899, ocupaba a Caracas en octubre de ese mismo año rodeado de innumerables tropas y sin necesidad de disparar un solo tiro. El Siempre Vencedor, Jamás Vencido según unos, o el Milcíades Americano según otros, entraba proclamando la necesidad de "nuevos hombres y nuevos procedimientos" e iba a gobernar hasta 1908, "nueve años de autoritarismo desbocado, corrompido y corruptor" (13), durante los cuales en realidad no hubo soluciones a los graves problemas que aquejaban al país: "Castro no restaura nada, sino que prolonga la habitual manera de conducirse frente al problema del poder en Venezuela, los Césares de turno" (14). Más aún, una personalidad mental alterada hace que el Castro que se consolida en el poder sea "un personaje que bien pudiera figurar en la galería de Césares pintados por Suetonio. Megalómano, poseído de satiriasis; cruel y disipador, su gobierno pasa como un viento de orgía, sobre la esquilmada tierra venezolana" (...) "La adulación y el servilismo le cercan por todas partes. Más que ministros, lo que tiene son cortesanos que se pliegan a todos sus caprichos. Le desvanecen con toda clase de elogios haciéndole pensar que es estratega genial, elocuente orador, árbitro de elegancia en los salones y, todo cuanto puede idear el ingenio de los áulicos a fin de halagar la vanidad de los poderosos" (15).

El período gubernamental de Cipriano Castro (1899-1908) será recordado, entre otras cosas, por el ataque y bloqueo naval impuesto a Venezuela de parte de varios países europeos, unidos en el objetivo común de forzar al pago de las deudas con ellos contraídas por el Estado. La intervención por lo demás no era algo excepcional en la historia latinoamericana. El siglo XIX encontraba a los Estados hispanoamericanos debilitados desde el punto de vista militar y la conciencia de esta debilidad les mantuvo en constante alarma ante la posibilidad de ser reconquistados por España, o bien agredidos u ocupados por otras potencias europeas. El temor a la intervención extranjera no carecía de fundamento vistas las distintas ocasiones en que, por diversos motivos, ciertas potencias occidentales hicieron tentativas de apoderarse de distintas partes de Latinoamérica. Recordemos, por ejemplo, la intervención de España en México (1829); las de Francia e Inglaterra en Argentina y Uruguay entre 1838 y 1850; la guerra entre México y Estados Unidos en 1846-1848; la intervención de Francia, España y Gran Bretaña en México de 1862-1867; y la de España en Perú en 1865. El bloqueo naval de Venezuela de 1902-1903 por parte de Alemania, Gran Bretaña e Italia puede cuadrar muy bien con aquello de que "la his-

-toria de la diplomacia latinoamericana en el siglo XIX es en gran parte una lista de reclamaciones extranjeras" (74). En efecto, la resistencia de Venezuela a pagar daños a los ciudadanos europeos iba a conducir a la intervención de dichas potencias que, decididas ya a actuar por la fuerza, establecieron el bloqueo de los puertos venezolanos de Puerto Cabello y de Maracaibo. Pero lo más importante de este episodio no iba a ser tanto el resultado final del arbitraje al que se llegó, sino las violentas reacciones que se produjeron en todo el Continente con motivo del intento de cobro de deudas mediante la fuerza (75).

El nacionalismo ciertamente retórico de Castro cuando con motivo del bloqueo acuña la conocida frase de que "la planta insolente del extranjero ha osado profanar el sagrado suelo de la patria" (76), no refleja ni mucho menos la cuestión esencial del problema que en la mente del caudillo andino aparece simplemente de emocionalidad patriótica. Lo más importante va a ser sin duda las consecuencias del bloqueo en el plano del derecho público americano, es decir, la formulación de la llamada Doctrina Drago. Ante los acontecimientos de Venezuela, el canciller y jurista argentino Luis M. Drago elaboraba una larga nota que situaba el problema en sus reales términos. Escribía que "El capitalista que suministra dinero a un Estado extranjero tiene siempre en cuenta cuáles son los recursos del país en que va a actuar y la mayor o menor probabilidad de que los compromisos contraídos se cumplan sin tropiezo". "El acreedor sabe que contra una entidad soberana y es condición inherente a toda soberanía que no puedan iniciarse ni cumplirse procedimientos ejecutivos contra ella, que ese modo de cobro comprometería su existencia misma, haciendo desaparecer la independencia y la acción del respectivo gobierno". "Todos los Estados, cualquiera que sea la fuerza de que se disponga, son entidades de derecho, perfectamente iguales entre sí y recíprocamente acreedoras por ello a las mismas consideraciones y respeto". De ahí que "El cobro impulsivo e inmediato, en un momento dado, por medio de la fuerza, no traería otra cosa que la ruina de las naciones más débiles y la absorción de un gobierno con todas las facultades que le son inherentes por los fuertes de la tierra" (77). De esta manera, el canciller argentino dejaba toda la dudosa legalidad de la acción de bloqueo y sus afirmaciones se iban pronto a convertir en normas de derecho internacional americano. La doctrina Drago podía considerarse entonces como una notable declaración de solidaridad americana (78).

Con Castro en la Restauradora había venido un colaborador direc

-to, su compadre Juan Vicente Gómez. Antiguo campesino y cultivador de café, comerciante y contrabandista en los Andes colombo-venezolanos, Juan Vicente Gómez va a ingresar en la política por la vía del compadrazgo, primero, y de la traición, después, a Cipriano Castro. A fines de 1908, Castro viajaba a Europa por motivos de salud y el 19 de diciembre de aquél año, el vicepresidente -encargado de la primera magistratura- general Gómez daba un sibilino golpe de Estado para hacerse cargo del poder, ratificándolo así la Constitución de 1909: ante la necesidad de legalizar el golpe, Gómez procedió a inspirar una nueva reforma constitucional, al igual que Castro lo había hecho antes, en 1901 y 1904, con el fin de continuar en la presidencia. El Benemérito general Gómez, Héroe de la Paz y del Trabajo, manejará a Venezuela como un feudo personal durante veintisiete años (1908-1935) y sólo dejará el poder por muerte natural, en el marco de uno de los regímenes más despóticos que haya conocido la historia latinoamericana.

Si en un principio se pensó que Gómez sería un fenómeno pasajero, su larga autocracia sin embargo iba a romper con la medida que habían alcanzado todos sus antecesores en el mando. Tan dilatado y omnímodo poder puede encontrar su explicación en los propios antecedentes de la evolución social y política de Venezuela, aunque más importantes son sin duda los factores coetáneos que contribuyeron al sostenimiento del régimen gomecista. En este último sentido, el inicio de la explotación petrolera en Venezuela vino a inyectar al régimen unas formidables energías: la coyuntura internacional y el apoyo norteamericano lo preservaron desde su comienzo y lo consolidaron posteriormente. Sin perjuicio de una ampliación ulterior en próximos apartados de este trabajo, si conviene ahora distinguir tres etapas de los veintisiete años de gomecismo en el nivel económico. Entre 1908 y 1917, la agricultura en Venezuela es la actividad predominante y el café continúa siendo el principal producto de exportación, seguido del cacao y la ganadería. A partir de 1917, hasta 1926, el arranque de la producción petrolera se combina con la actividad agrícola que en 1925 aún presenta un importante volumen de exportación. Los primeros signos de una prosperidad monetaria derivada del ingreso petrolero no impiden que el café tachireño proporcione igualmente un importante volumen de ingresos. Pero ya entre 1926 y 1935, la explotación de hidrocarburos termina por superar a la tradicional exportación agropecuaria: es el momento en que la Venezuela agraria deviene en la Venezuela petrolera. (31)

El paso de la Venezuela agraria a la Venezuela del petróleo supone como resultado un cambio en la tradicional economía venezolana, que tiene

más de deformación que de transformación real hacia niveles superiores. En todo caso, una serie de desajustes harán su aparición al amparo de las operaciones en gran escala de las poderosas compañías petroleras transnacionales, "cuyo resultado en un país de tan raquítico desenvolvimiento económico, no podía ser otro que el de hacer saltar en añicos su clásica estructura" (34). Y son, precisamente, las compañías petroleras las que actúan como principal soporte exterior e interior del régimen gomecista, a cambio de las tristemente célebres jugosas concesiones para la extracción del oro negro. La disolución, muy rápida si se toman en cuenta las coordinadas históricas y sociales, del orden agrario y su base material hace desde luego inviable el caudillismo; más aún, el petróleo le va a dar a este sistema un golpe mortal por la serie de consecuencias que engendra en la estructura socioeconómica del país. Anota con propiedad R. Gallegos Ortiz la significación de la relación entre petróleo y caudillismo:

"La fórmula del caudillismo se impuso en Venezuela -en mayor o menor grado- hasta la llegada del petróleo. Paulatinamente se fue desvaneciendo. Juan Crisóstomo Falcón le asienta el primer golpe, cuando deroga aquella práctica de que las tropas deben procurarse por sí mismas la manutención. Prohíbe el alojamiento y mantenimiento de oficiales por deudores morosos. Herma la 'bolsa' de los ejércitos particulares. Cipriano Castro fue aún más decisivo en su determinación. De aquí el odio que le 'dis pensaron' muchos caudillos lugareños. En la Constitución de 1904, expropia a los Estados -y por ende a los gamonales- de su poder militar, al establecer que 'todos los elementos de guerra pertenecen al gobierno nacional'. Pero es el petróleo quien da el golpe decisivo. Gómez no terminó con los caudillos; lo hizo la economía petrolera. Una economía que centraliza los ingresos, fortifica un ejército nacional que le garantice sus bienes, abre vías de comunicación, estrangula la producción cafetera y empobrece a los hacendados" (35).

Y algo muy importante, cuestión que analizaremos más tarde con mayor detenimiento: el cierre del ciclo campesino de la historia venezolana, para dar paso al llamado "ciclo urbano", implicará un cambio en las motivaciones y la dinámica del proceso político y social; como observa D.A. Rangel "El factor explosivo de la política venezolana no será ya, de ahora en adelante, la inconformidad campesina que se agotó en las estériles guerras del caudillismo. En su lugar aparecerá la efervescencia de las clases medias -y décadas más tarde la protesta del proletariado- que impartirá a nuestro proceso un sello totalmente distinto" (36). Y es que, en efecto, ya en los años finales del gomecismo (1928-1935), la presencia contesta-

-taria de los primeros núcleos de las futuras fuerzas políticas y sociales de la Venezuela contemporánea, y el aplastamiento por el Ejército gomecista de los conatos de sublevación de los viejos caudillos, mostraba ya que la etapa de las revoluciones fraguadas en tanto que empresas exclusivamente militares, estaba cancelada en Venezuela, o por lo menos ya no tenía suficientes sustancias para nutrirse.

De todas formas, aunque Gómez fuese el último caudillo, no por ello iba a ser menos autócrata que los demás que le precedieron en el mando. Y la palabra autócrata se queda corta ante la voluntad omnímoda y despótica de un personaje casi de novela (85). El sólo dato de la creación, en 1922, de dos vicepresidencias para su hermano e hijo; la utilización de tres hombres en la presidencia, conservando siempre la jefatura militar; y las siete modificaciones a la Constitución, ilustran bien el personalismo gomecista, sin hablar de una policía omnipresente y de unas cárceles repletas de opositores y disidentes políticos. Las modificaciones constitucionales (1909, 1914, 1922, 1925, 1928, 1929 y 1931) se hacen simplemente para acomodar los cargos de presidente y jefe del ejército a los designios personales del autócrata, según sea el momento o la coyuntura, y por supuesto, para reforzar al máximo los poderes del ejecutivo y justificar así, con la ley fundamental en la mano, los repetidos abusos. La hipocresía constitucional se institucionaliza y en la práctica un régimen tucanidnástico se pone en funcionamiento. Quedaba claro el ángulo personalista del derecho político venezolano, que Gómez elevaba a la máxima expresión; en palabras de A. Arellano Moreno:

"Monagas lo utiliza una vez, Guzmán Blanco dos, Castro otras dos y siete Juan Vicente Gómez. Es en los tiempos pastoriles y monótonos de éste último cuando el recurso hubo de alcanzar la mayor de las utilizaciones. Otros dictadores, venciendo obstáculos, habían hecho cuantas reformas constitucionales habían querido, pero Gómez los supera. No necesita consultar generales, caudillos o grupos oligárquicos. Tampoco necesita dar órdenes, sufrir contrariedades o buscar el apoyo de la mayoría parlamentaria, porque sus cortesanos adivinan sus intenciones, descifran sus parábolas, redactan los capítulos y alzan la mano en señal de aprobación" (...)

"Es esa tendencia universal de acomodar la Ley a la voluntad del dictador, lo que obliga a juristas y políticos gomecistas a realizar las siete enmiendas a la Constitución Nacional que tienen lugar durante los veintisiete años de vida dictatorial. Es el afán de disponer de un instrumento legal que sirva de base para que el Jefe asiente sus botas sin peligro de que se le enrostre su arbitrariedad o su irrespeto a la ley. Se efectuarán los cambios legales y todo se hará de conformidad con disposiciones

constitucionales. En esa forma se podrá gritar hacia todos los horizontes que el gobierno es constitucional y se podrá hacer alarde de legalismo, se podrán redactar comunicados y circulares en los que se dirá que la soberanía reside en el pueblo y que los Estados son autónomos. Que el Congreso es autónomo, lo mismo que la judicatura. No importa que en los cementerios, en las cárceles o en el exilio se encuentren los opositores, lo que importa es que la voluntad del jefe o del subalterno se hayan convertido en ley nacional" (30).

.....

- NOTAS AL CAPITULO TERCERO -

1) Caracterización del Caudillismo.-

- (1) Cf., Herman Neller, Teoría del Estado (ed. en esp. por el Fondo de Cultura Económica, México).
- (2) Ramón Escovar Salom, Evolución política de Venezuela, ed.cit., p.14
- (3) Escovar: op.cit., p. 16.
- (4) "El caudillismo en Venezuela -según Escovar Salom- se desarrolla por dos razones fundamentales: relaciones primitivas de vida social y económica y la debilidad del Estado. Una vez que el Estado se desarrolla y el poder se centraliza orgánicamente, los prestigios caudillescos se desvanecen" : op.cit., p. 78.
- (5) Max Weber, Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva (México: Fondo de Cultura Económica, 1964. 2a.ed. en español, de la cuarta en alemán -1956-. 2 volúmenes. Trad. de J. Medina Echeverría, J. Roura Parella, E. García Maynez, E. Imaz y J. Ferrater Mora.)
- (6) M. Weber, op.cit., vol I, cap. III: "Los tipos de dominación", pp. 172-173.
- (7) Para Weber, el modo objetivo de valoración de dicha cualidad, sea desde un punto de vista ético, estético y otro cualquiera, sería cosa indiferente al concepto de carisma, ya que lo importante es saber cómo se valora "por los dominados" carismáticos, por los "adeptos". El concepto en pag. 193, vol. I, cap.cit.
- (8) Ibid., pp. 194-195. En este sentido, la dominación carismática se opone, en cuanto fuera de lo común y extracotidiana, tanto a la dominación racional (burocrática), como a la tradicional (patriarcal y patrimonial-castamental, especialmente). Dice Weber, diferenciando los tres tipos: "La dominación burocrática es específicamente racional en el sentido de su vinculación a reglas discursivamente analizables; la carismática es específicamente irracional en el sentido de su extrañeza a toda regla. La dominación tradicional está ligada a los precedentes del pasado y en cuanto tal igualmente orientada por normas; la carismática subvierte el pasado (dentro de su esfera) y es en este sentido específicamente revolucionaria": p. 195.
- (9) Si consideramos la dominación carismática desde la perspectiva de una economía racional, veríamos que aquella es una fuerza típica de la "antieconómicoidad", ya que rechaza toda trabazón con la actividad económica cotidiana y regular. Por otro lado, Weber llama la atención sobre el hecho de que el carisma viene a ser la gran fuerza revolucionaria en las épocas vinculadas a la tradición; el carisma puede

ser una renovación desde dentro que signifique una reorientación de las actitudes anteriores: "En las épocas prerracionalistas tradición y carisma se dividen entre sí la totalidad de las direcciones de orientación de la conducta": para estos puntos y cita, pp. 196-197.

- (10) Weber, op.cit., vol. II, cap. IX: "Sociología de la dominación", p. 848.
- (11) Ibid., p. 850.
- (12) Ibid., p. 850.
- (13) Ibid., p. 889. (ver nota 4 de este apartado).
- (14) "... Del caudillismo y contra él surgen dictaduras personales que tienden a imponer un orden nacional unificado": M. Kaplan, Formación del Estado nacional en América Latina, ed.cit., p. 201.
- (15) Kaplan: op.cit., p. 207. "... la empresa hispanoamericana no fue innovadora, independiente en su orientación o centrada en la solución de problemas, sino dependiente y orientada hacia España a través de estructuras verticales. Los hispanoamericanos se relacionaban entre sí en términos de grupos de estatus fijo, cuyos miembros lo eran en virtud de una superestructura formal. La solución de problemas consistía principalmente en dirimir conflictos de jurisdicción o de distribución de privilegios. La preocupación general se centraba en aprovechar las ventajas que podían proporcionar quienes estaban constituidos en autoridad" (...) "Nunca se pusieron los cimientos de una comunidad societal, y cuando las circunstancias históricas dieron lugar a la creación formal de naciones, no había bases normativas sólidas para la construcción de las mismas. Las exigencias funcionales de una sociedad -integración, división del poder socialización de los valores comunes y división racional del trabajo- fueron atendidas en los territorios nuevamente delimitados mediante estructuras que sólo sabían representar el papel de complemento de un sistema social más amplio": Iván A. Vailier y Vivian Vallier, La sociedad en Iberoamérica: América del Sur (voz en Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, David. L. Sills, editor; Madrid: ed. esp. de Editorial Aguilar, 1975. Vol. 5, p. 570)
- (16) S.J. y B.H. Stein, La herencia colonial de América Latina, ed. cit. p. 160.
- (17) H. Malavé Mata, Formación histórica del antidesarrollo de Venezuela ed.cit., p. 192.
- (18) Cf., K.H. Silvert, voz Caudillism, en International Encyclopedia of Social Sciences (ed. en ingl.: The Mac Millan Cny. and The Free Press. David.L. Sills, ed.), vol. 2, pp. 347-350 (1968).
- (19) K.H. Silvert, artículo citado, pp. 347-348.
- (20) Insistimos sobre éste particular tipo de autoritarismo y confirmamos la idea de que es necesario no confundir el componente militar en el caudillismo, con otras clases de gobiernos militares en las áreas subdesarrolladas.

- (21) Cf., J.J. Johnson, The Military and Society in Latin America (Stanford: California University Press, 1964).
- (22) Es evidente, por supuesto, que en el uso común -desde los periódicos, por ejemplo- el título de "caudillo" se ha aplicado impropia-mente a cualquier líder carismático -Perón en Argentina, Betancourt en Venezuela, Fidel Castro en Cuba, etc.-. También, y a menudo, el término ha sido aplicado a los jefes políticos locales. No obstante, queda claro que, en rigor, "caudillismo" y "caudillo" tienen un significado histórico-político concreto y sólo genera confusión la utilización de dicha terminología como modelos o prototipos para la caracterización de movimientos político-sociales contemporáneos o de figuras políticas de otras regiones del llamado tercer mundo.
- (23) En este sentido: E. Lieuwen, Arms and Politics in Latin America (New York: Praeger Publishers, 1960).
- (24) J.J. Johnson, op.cit.
- (25) Isaac Sandoval Rodríguez, Las crisis políticas latinoamericanas y el militarismo (México: Siglo XXI Eds., 1976), p. 61.
- (26) I. Sandoval R.: op.cit., p. 68.
- (27) Seguimos a Carlos M. Rama, voz Caudillo (caudillismo, caudillaje), en Diccionario de Ciencias Sociales, Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1975. Vol. I, págs. 353-355.
- (28) Jacques Lambert, América Latina. Estructuras sociales e Instituciones políticas (Barcelona: Editorial Ariel, 1973. 3a.ed., Prol. rev. y adiciones de A. Lago Carballo), p. 282.
- (29) Carlos M. Rama, artículo citado, p. 354.
- (30) Rama, art.cit., p. 354.
- (31) J. Lambert: op.cit., pag. 291.
- (32) Cf., Arnaldo Córdoba, La formación del poder político en México (México: Ediciones ERA, 1972).
- (33) Los criterios para definir lo que ha sido el caudillo centralizador no han sido suficientemente establecidos: la gran profusión y variedad de caudillos, característica de la historia latinoamericana, ha hecho difícil esta labor en el campo de la investigación política y social.
Para J.A. Silva Michelena (Cambio político en Venezuela: Crisis de la Democracia, Caracas: Centro de Estudios del Desarrollo -CEDES-, Universidad Central de Venezuela, 1970. pp. 37 y ss.), tal vez el criterio más efectivo para distinguir al caudillo centralizador del poder, es el grado en que ha logrado organizar y equipar un ejército a escala nacional. Este matiz sería el indicador probable de que el país en cuestión estaría experimentando una cierta prosperidad económica, o al menos que tendría los ingresos fiscales suficientes como para mantener un ejército que abarcara de manera efectiva todo el territorio nacional. Pero el contexto histórico-político y social en que el caudillo de tipo centralizador realiza este esfuerzo -dic

tadores ambiciosos, implacables, personalistas, apoyados a su vez en subcaudillos regionales-, permite comprender el hecho de que en América Latina, la concentración del poder nacional no haya impulsado paralelamente un proceso de racionalización de la autoridad, el establecimiento de normas específicas de funcionamiento, orientadas hacia el logro de objetivos nacionales explícitos, habría en contrario serios obstáculos en las inclinaciones personalistas, caudillistas y nepóticas heredadas del pasado.

(34) J. Lambert: op.cit., p. 294.

2) Las bases sociales de la dominación caudillista.-

(1) Ignacio Sotelo, Sociología de América Latina, ed.cit., p. 64.

(2) Sotelo: op.cit., p. 108.

(3) Ibid., pp. 110-111.

(4) Alberto J. Pla, La burruésia nacional en América Latina, ed.cit., p. 42.

Aldo Solari (Sociología rural latinoamericana, Buenos Aires: Ed. Paidós, 1968. 2a.ed.): un análisis de síntesis nos revelaría que la sociedad rural se caracteriza "por la presencia de un estrato social de muy pocas personas y familias pero dotado de gran poder y de estratos interiores de gran número y de escaso o nulo poder social" (p. 78). El número de integrantes de las clases bajas rurales es muy alto y su nivel de vida, bajísimo. Desde el punto de vista de la alimentación, A. Solari ha distinguido dos grandes grupos (p. 89): a) sector de subalimentación intensa, cuantitativa y cualitativa (Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, noroeste y extremo sur de la Argentina, parte occidental del Paraguay y mitad norte de Brasil); y b) un sector de relativa suficiencia, pero donde se carece total o parcialmente de ciertos elementos nutritivos (centro, oeste y sur de Brasil, nordeste argentino y Uruguay).

(5) H. Kaplan, Formación del Estado nacional en América Latina, ed.cit. p. 175.

(6) Kaplan: op.cit., p. 176.

(7) Ciertamente que el ilustrado español Gaspar Melchor de Jovellanos, en su Informe sobre la Ley Agraria, esbozaba postulados que desgraciadamente tienen todavía mucho valor en buena parte de los países latinoamericanos. Refiriéndose a la problemática del latifundio en el Imperio Romano, afirmaba: "Pero en la inmensa acumulación de la propiedad territorial, y en el establecimiento de las grandes labores, el empleo de esclavos en su dirección y cultivo, y su consiguiente abandono, la ignorancia y el vilipendio de la profesión inseparable de estos principios, no pudieron dexar de sujetarla a los vicios, y al desaliento, que en el sentir de los Geopónicos antiguos, y de los Economistas modernos, son inseparables de semejante estado. Ya se lamentaba amargamente de estos males Columela, que fue poco anterior de Augusto; y ya en tiempo de Vespasiano se quejaba Plinio el Viejo, de

que la gran cultura, después de haber arruinado la agricultura en Italia, iba acabando con la de las regiones sujetas al Imperio: latifundia, decía, perdidere Italiam, jam vero et provincias" (citado por C. Irazábal, Venezuela esclava y feudal, ed.cit., p. 144). Cf., Gaspar Melchor de Jovellanos, Informe sobre la Ley Agraria (Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1955. Frol. de V. Andrés Alvarez).

- (8) A. Solari: op.cit., pp. 46-52. (Cf., ...)
- (9) Cf., Sotelo: op.cit., p. 67. Por otra parte, hay que distinguir entre latifundio -gran concentración de la tierra con muy baja productividad- y plantación en régimen de empresa capitalista con medio y alto rendimiento.
- (10) En el caso de Venezuela, puede afirmarse que han coexistido los tres tipos: hacienda, plantación de café o cacao, y estancia ganadera (el "hato").
- (11) Frank Tannenbaum, Ten Keys to Latin America (Nueva York, 1964. p. 80); citado por Sotelo, p. 70.
- (12) Sotelo: op.cit., p. 71.
- (13) Solari: op.cit., pp. 61-69.
- (14) Para este apartado resulta muy útil, de Domingo Alberto Rangel, La Venezuela Agraria (Caracas: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, 1969. Tomo I de Capital y Desarrollo).
- (15) Sobre el estancamiento económico en el XIX: C. D'Ascoli, Esquema histórico-económico de Venezuela: del mito del Dorado a la economía del café, ed.cit., pp. 391-394.
- (16) C. Irazábal: Hacia la Democracia, ed.cit., pp. 203-204.
- (17) Germán Carrera Damas, "Algunas consideraciones sobre la cuestión agraria en Venezuela", en Temas de historia social y de las ideas (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela, 1969. pp. 117-137) La cita es de p. 118.
- (18) Ibid., p. 134.
- (19) Carrera Damas: op.cit., p. 135.
- (20) Cf., Federico Brito Figueroa, Tiempo de Ezequiel Zamora (Caracas: José Agustín Catalá Ed.,-Ediciones Centauro, 1975. 2a.ed.), pp. 452 y ss.
- (21) Carrera Damas, op.cit., pp. 136-137.
- (22) Cf., Materiales para el estudio de la cuestión agraria en Venezuela (Caracas: Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico-Universidad Central de Venezuela, 1971). Volumen correspondiente al período 1829-1860: "Enajenación y arrendamiento de tierras baldías", con un estudio preliminar de Carmen Gómez R.: "Política de enajenación y arrendamiento de tierras baldías (1830-1859)", pp. VII-LXXII.

- (23) La mención más completa sobre la política de baldíos seguida por la Oligarquía liberal (1848-1858) la proporciona Luis Franco Guerrero en La cuestión agraria en la historia nacional (Caracas: Biblioteca de Autores Tachirenses, 1962. pp. 86-87), quien hace referencia a la extensión de baldíos adjudicada en cada provincia de 1848 hasta 1857 y al beneficio obtenido por la familia Monagas y sus partidarios: C. Gómez R., est. prel., p. XL.
- (24) C. Gómez R.: estudio citado, p. LXVIII.
- (25) *Ibid.*, p. LXVIII. Cf., 1848 (10 de abril): "Ley de 10 de abril de 1848, sobre averiguación de tierras baldías, su deslinde, mensura, justiprecio y enagenación que deroga las disposiciones precedentes de Colombia", en Materiales ..., Documento No. 158, pp. 377 y ss.
- (26) Memoria del ministro de Hacienda, Jacinto Gutiérrez, en 1855-1856; citado por F. Brito Figueroa, Historia económica y social de Venezuela, ed.cit., vol. I, p. 294.
- (27) Brito Figueroa: Historia ..., I, p. 295.
- (28) Sobre la hegemonía británica y el surgimiento del orden neocolonia en América Latina, véase T. Halperin Donghi, Historia Contemporánea de América Latina, ed.cit., pp. 134-207 y pp. - .
- (29) *Ibid.*, pp. 207 y ss.
- (30) Sobre el crecimiento simple, véase A. Córdoba y H. Silva Michelen Aspectos teóricos del subdesarrollo (Caracas: Instituto de Investigaciones Económicas-Universidad Central de Venezuela, 1967).
- (31) Domingo Alberto Rangel, La Venezuela Agraria, ed.cit., p. 74.
- (32) Resulta útil para el análisis de las situaciones fundamentales de período de expansión "hacia afuera" y la problemática de los encl el libro de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y Desarrollo en América Latina (México: Siglo XXI Eds., - a.ca 166 pags.)
- (33) Miguel Izard, El café en la economía venezolana del XIX. Estado de la cuestión (Va enc a -Lspana-: Es u. s., oc u re e , pp. 205-273). En este trabajo, el autor se hace eco, como muchos otros sobre el XIX venezolano, de las considerables dificultades para la obtención de información y datos fidedignos y seriados en relación al tema; las fuentes son sumamente fragmentarias.
- (34) Izard: El café en la ..., pp. 207-208.
- (35) Miguel Izard, La Venezuela del café vista por los viajeros del siglo XIX (Caracas: Separata del Boletín Histórico de la Fundación John Boulton, No. 20, mayo de 1969)
- (36) Superioridad que compensaba su elevado costo de producción. Otros factores colaborarían en el fenómeno de sustitución: la evolución de la relación entre los precios de los distintos productos; el r pimiento de las relaciones comerciales con España, al parecer el yor consumidor de cacao y sus derivados hasta principios del XIX;

el hecho general de que, a la hora de realizar nuevas siembras, tras las sistemáticas destrucciones de la guerra emancipadora, se tuvo en cuenta cuál era el tipo de cultivo con mayores beneficios y mercados más amplios. Para estos puntos, Izard: La Venezuela del café, pp. 29-30.

- (37) Por lo demás, M. Izard se ha ocupado del examen de las observaciones que diversos viajeros europeos recopilaban sobre el cultivo cafetero. Entre otros, los casos de Edward B. Eastwick, Venezuela o apuntes sobre la vida de una república sudamericana con la historia del empréstito de 1864 (Caracas: Banco Central de Venezuela, 1959. Trad. del ing. de A. R. Villasana. Londres, 1868); Friedrich Gertsacker, Viaje por Venezuela en el año 1868 (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1963. Trad. del ale. de A. Ka. Gathmann. Jena, 1868-69); M. M. Lisboa, Relación de un viaje a Venezuela, Nueva Granada y Ecuador (Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 1954. Bruselas, 1866); Pal Rosti, Memorias de un viaje por América (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1968. Trad. del hung. por J. Sarosi. Pest, 1861); Izard, La Venezuela del café ..., pp. 47-48.
- (38) Izard: op.cit., cuadro en p. 34, con ayuda de cifras de R. Veloz, Economía y Finanzas de Venezuela; para las distintas observaciones, pp. 34-35. Los datos, según los autores, varían y habría que tomarlos en términos de tendencias.
- (39) Izard: El café en la ..., p. 211.
- (40) Ibid., pp. 213-214. El ciclo de prosperidad ligado al café se prolonga aproximadamente hasta la década de los 20 de este siglo. Algo antes había comenzado a producirse incluso un descenso en la inversión de capitales, unido a una notable baja en los precios de los mercados mundiales.
- (41) En este aspecto, los datos son significativos: en 1890, Venezuela producía un 6,50 por ciento de la producción total mundial de café y ocupaba el puesto número 3 en la escala de productores; para 1925, con un 3,70 por ciento del total, el puesto número 4; en 1933, un 1,40 por ciento y el octavo puesto; y para 1939, un 1,55 por ciento y el décimo lugar: Izard, pp. 261-262.
- (42) Izard: La Venezuela del café ..., pp. 39 y 40-41.
- (43) Cf., J.A. Barral, Porvenir de las grandes explotaciones agrícolas establecidas en las costas de Venezuela (Caracas: Ediciones del Cuatricentenario, 1966. Trad. del fran. de H.A. Vila. París, 1881): aludía a la mano de obra y a la instalación de haciendas de tipo capitalista, afirmando la necesidad de contratación de obreros cubanos e importación de fuerza de trabajo de la India, Canarias e Italia (Izard: op.cit., p. 42).
- (44) Cf., Leonard V. Dalton, Venezuela (Caracas: Banco Central de Venezuela, 1966. -Londres, 1912-. Trad. del ingl. por A.R. Villasana), p. 252 (citado por Izard, La Venezuela del café vista por los viajeros del siglo XIX, p. 43).
- (45) F. Gertsacker, Viaje por Venezuela en el año 1868, ed.cit.; (Izard:

op.cit., p. 46.

- (46) Antonio Arellano Moreno, Mirador de Historia Política de Venezuela (Caracas: Oficina Central de Información-Imprenta Nacional, 1967), p. 189.
- (47) D.A. Rangel, La Venezuela Agraria, ed.cit., pp. 151-152.
- (48) Ibid., pp. 159-160.
- (49) Rangel: op.cit., p. 179.
- (50) Ibid., p. 179.
- (51) Por el contrario, era manifiesta, en las primeras décadas del siglo presente, una tendencia de la inversión hacia el sector de la construcción, preferentemente de carácter coyuntural y ligada a las actividades comerciales. Así, por ejemplo, en 1910, la inversión real en la industria de colocaba en 2,7 millones de bolívares, mientras que en la construcción era de 13,7; en 1920, 12,9 y 85,9 millones bolívares, respectivamente (Rangel: op.cit., p. 186).
- (52) Cálculo de Rangel: op.cit., p. 266.
- (53) Ibid., pp. 267-268, 271 y 273. Las condiciones estructurales de la agricultura de exportación en la Venezuela del XIX van a determinar unas modalidades peculiares: son las casas de comercio las que asumen las funciones que normalmente caracterizarían a un sistema bancario. Las casas comerciales reciben el excedente agrícola de exportación, lo retienen en forma de mercancías extranjeras y lo colocan por vía de anticipos en cuenta corriente hacia diversas comarcas. El tipo de interés para los créditos es fijado por aquéllas, principales instituciones crediticias por la privilegiada situación de que gozan. Como es obvio, esta peculiar estructura retrasó en Venezuela el surgimiento de un sistema de bancos, como hubiera sido propio de países de capitalismo autónomo: la banca, en este contexto, se presentaba como innecesaria. La deformación introducida llegó al extremo de que las casas comerciales no sólo cumplieron funciones de banca de depósito, sino también las de un banco central, al encontrar la posibilidad de controlar el volumen de circulante. Por otra parte, el capital bancario propiamente dicho, registró en Venezuela un lento proceso de acumulación hasta el advenimiento del petróleo. Si hacia 1899 funcionaban ya el Banco de Venezuela, el Banco de Caracas y el Banco de Maracaibo, los capitales bancarios alcanzaban a 19,2 millones de bolívares, y en 1920 se cifraban en 19,6 millones: el estancamiento era evidente (Rangel: op.cit., pp. 242-24 y 250).
- (54) En concreto, obtuvieron concesiones las compañías The Central Railway of Venezuela Ltd., Quebrada Lind Railway and Mining Company, South Western of Venezuela Company y Grosche Venezuela Firebricks Works Ltd., ésta última con capitales de Barclays Bank Ltd., de Hamburgo (Brito Figueroa: Historia económica y social de Venezuela, I, p. 306).
- (55) Rangel: op.cit., p. 225.

- (56) La construcción de las vías férreas implicó la absorción de una determinada cantidad de mano de obra: una población campesina que, sin trabajo, acudió a las regiones donde se trazaban las nuevas vías, atraída indudablemente por las nuevas expectativas. Pero la construcción de las líneas duró pocos años (entre 1883 y 1898) y se limitó a restringidas zonas. La mano de obra empleada, una vez terminado el tendido, quedó desocupada y se proletarizó, no retornando en su mayor parte a los lugares de origen, sino yendo a formar parte de los primeros núcleos del proletariado urbano.
- (57) Brito Figueroa: op.cit., p. 317.
- (58) La medianería "es un contrato por medio del cual el propietario de la tierra entrega al campesino un lote de ella, generalmente en las partes montañosas o en los linderos del fundo, para que lo siembre, a condición de que le entregue la mitad de las plantas al llegar al estado de producción y le venda la otra mitad al primer requerimiento; para cultivar estas tierras vírgenes, el medianero recibe anticipos del propietario, poniendo en garantía las plantas de su proyectada medianería, quedando generalmente incorporadas a las grandes plantaciones en pago de deudas por concepto de anticipos": Brito Figueroa: op.cit., p. 296.
- (59) Cf., John V. Lombardi, The Decline and Abolition of Negro Slavery in Venezuela, 1820-1854 (Westport -Connecticut-: Greenwood Publishing Corporation, 1971. A Negro Universities Press Publication; Contribution in Afro-American and African Studies, No. 7). El autor hace un análisis de las diversas etapas y momentos seguidos en el proceso de declive y abolición de la esclavitud en Venezuela; desde 1820 cuando el Congreso de Angostura aprueba la primera legislación sobre el asunto. Pone de relieve cómo la década de 1820 es un período de transición económica que marca el comienzo del cambio de la producción de cacao a la producción de café, cambio que tuvo un efecto significativo sobre la naturaleza de la esclavitud y su abolición (p. IX del prefacio). Parte del supuesto de que la esclavitud en Venezuela no fue un factor dominante en la economía y en la sociedad; a pesar de que fue importante durante el siglo XVIII, no fue elemento preponderante de la estructura socioeconómica y, en este sentido, jugó un papel distinto al que tuvo en las experiencias de Brasil, Cuba o los Estados Unidos (pp. 6-7 de la introducción). Un tratamiento detenido en Cap. 5: "The Economy and Slavery", pp. 95 y ss. Como un libro anecdótico y literalmente inundado por la retórica, el de José Manuel Núñez Ponte, Ensayo histórico acerca de la esclavitud y de su abolición en Venezuela (Caracas: Empresa "El Cojo", 1954. 3a. ed.).
- (60) Brito Figueroa, op.cit., pp. 292, 310, 311-312, 316.
- (61) Ibid., p. 315.
- (62) En 1889, el publicista Luis López Méndez señalaba cómo "El sufragio universal ha sido hasta ahora en Venezuela una hermosa utopía consignada en las leyes, pero jamás realizada en las costumbres. En teoría nuestros gobiernos han de nacer de la voluntad popular libremente manifestada, y en la práctica vemos que el poder ha hecho siempre las elecciones, confeccionado a su sabor la representación nacional e impuesto al país los magistrados que lo han presidido: esto, cuan-

-do las revoluciones armadas no se han encargado (como ha sido lo más frecuente) de elevar a sus caudillos triunfantes y de perpetu los en la silla dictatorial con mengua de las instituciones y en nombre de los servicios prestados a una causa o a un partido que, por grande que sea, nunca debe confundirse con la nación ni menos supeditarla": Luis López Méndez, Los partidos políticos 1887-19 (Caracas: Publicaciones de la Presidencia de la República, 1963), lección "Nuestro siglo XIX". "El sufragio universal", artículo publicado en junio de 1889), pp. 31-32.

3) La política de los caudillos en Venezuela.-

- (1) Robert L. Gilmore, Caudillism and Militarism in Venezuela 1810-191 (Athens -Ohio-: Ohio nivers y ess, . pags.
 - (2) A partir de ésta última fecha, Venezuela, entre los cambios sociales ocurridos, observaría la formación de los característicos grupos de presión de una sociedad en vías de modernización. Uno de esos grupos con efectiva organización, iba a verse envuelto inevitablemente en el rápido proceso de cambio social: el militarismo aparecía entonces como un fenómeno reciente y ligado a la conflictividad del propio proceso en curso (Gilmore: op.cit., pp. 3 y ss.).
 - (3) Gilmore: op.cit., p. 47 (Cap. 3: "On Caudillism", pp. 46 y ss.)
 - (4) Cf., Juan Escano, "Aspectos de la Vida Social y Política de Venezuela", en 150 Años de Vida Republicana (Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 1963) (citado por J.A. Silva Michelena, Cambio político en Venezuela. Crisis de la Democracia, ed.cit., p. 84) R.L. Gilmore utiliza la expresión "Estado caudillesco", para diferenciarlo del "Estado Pretoriano" (op.cit., pp. 7 y ss.). Sobre la violencia como factor de movilidad social: Cap.4: "On the occasions of violence", pp. 69 y ss.
- Enlazando con afirmaciones anteriores, y a riesgo de reiterarlas en exceso, recogemos las consideraciones del sociólogo I. Sotelo, según las cuales el hecho de que la mayoría de los caudillos vistan un uniforme y hayan alcanzado el título de general, no autoriza a confundir este fenómeno con el militarismo posterior. Lo que queda de los ejércitos surgidos en la coyuntura de las guerras independentistas, no son cuerpos orgánicos y disciplinados, sino más bien un conjunto de bandos y grupos armados, vinculados personalmente a su jefe. A nudo, las distintas facciones militares van a encarnar intereses sociales antagónicos. En general, estos conjuntos militares se caracterizan por el enorme grado de deserción de la tropa, falta de disciplina, de preparación y de armamento; el mando está casi siempre corrompido y sólo interesado en conseguir prebendas del poder constituido al que pone en jaque permanentemente. En algunos países, el sistema caudillista de poder se eclipsa desde la segunda mitad del XIX -en Argentina con la caída de Rosas y en México con la de Santa Anna-, mientras que en América Central y Venezuela, el caudillismo se prolonga hasta bien entrado el siglo XX: Ubico cae en 1944 y Juan Vicente Gómez muere en 1935. En términos históricos, se trata de un fenómeno sociopolítico ya desaparecido, y que sólo de manera residual y en vinculación con formas modernas de militarismo, se percibe aún hoy en día: El militarismo, como fenómeno específico del siglo XX latinoamericano, iba a exigir, en cambio, la existencia de un ejército pr

-fessionalizado, que intervendrá, como tal institución, en la vida política (Sotelo: Sociología de América Latina, ed.cit., pp. 195-196).

- (5) Cf., David Eugene Blank, Politics in Venezuela (Boston: Little, Brown and Company, 1973. Colección "The Little, Brown Series in Comparative Politics"), pp. 8-9.
"Para que la democracia hubiera podido en realidad funcionar, se habría necesitado un cambio en la estructura económica de la nación, cambio que no advino, ni como resultado de la guerra de la Independencia, ni como consecuencia tampoco de la guerra federal cuya desbordada furia, no encontró el cauce en que su violencia ... hubiese podido poner en movimiento a un país donde la historia se ha visto condenada a reproducir a cada nueva voltereta de la situación política, el mismo espectáculo del caudillo omnipotente, rodeado del grupillo de los que hacen agosto de aquélla por un lado, y por el otro, la masa expoliada": Juan Oropesa, 4 siglos de historia venezolana ... ed.cit., pp. 197-198.
- (6) Citamos a Ariel Peralta Pizarro, El Cesarismo en América Latina (Santiago de Chile: Editorial Orbe, 1966.), p. 109.
- (7) Sobre la justificación ideológica de la dominación caudillista: Laureano Vallenilla Lanz, Cesarismo Democrático. Estudio sobre las bases sociológicas de la constitución efectiva de Venezuela (Caracas: Tipografía Universal, 1929. 2a.ed.) (ver apéndice de este trabajo).
- (8) Edwin Lieuwen, Venezuela (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1964. Trad. cast. de MR. Jiménez), pp. 48-49.
- (9) Citado por José Luis Salcedo-Bastardo, Historia fundamental de Venezuela (Caracas: Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, 1972. 3a.ed.), p. 444.
- (10) Citado por José Luis Salcedo Bastardo, en Polívar: un continente y un destino (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1972), p. 302.
- (11) Lieuwen: op.cit., p. 50.
- (12) "La oligarquía, ahora calificada de conservadora, permanecía corda, porque modificar la Constitución era poner en peligro el mando político que tenían en sus manos y el destino de sus propios intereses. Muy inteligente, muy honorable, pero muy insensible ante los reclamos de la opinión pública. No permitió que en su debida oportunidad se estableciera el voto directo para la elección de los gobernantes en vez del voto indirecto y de segundo grado, ni que se aboliera la pena de muerte por delitos políticos, ni la esclavitud, ni que se introdujeran otras innovaciones que pedía el momento histórico. Cuando la oligarquía conservadora quiso hacerlo, cuando asistió a la Convención de Valencia en 1857, era demasiado tarde. Allí confecciona una Carta de tinte progresista, pero las multitudes no creyeron en la buena fe de sus actores, ni en los principios consagrados. El creciente malestar de las masas campesinas y urbanas no daba tiempo para analizar las benevolencias de las nuevas doctrinas constitucionales": A. Arellano Moreno, Mirador de Historia Política de Venezuela, ed.cit., pp. 6-7.

- (13) "El cognomento godo fue un término atribuido, desde la época de la Independencia, a los españoles monárquicos, a los servidores del gobierno peninsular, a los partidarios del régimen colonial y, más tarde -ya dentro de la República-, a los ex-realistas. Godos se llamó a los europeos e isleños canarios que se sublevaron contra la Junta Suprema y godos fueron para los caraqueños los que en el Congreso de 1811 se mostraron opuestos a la declaración de independencia. Godos, también, los adversarios de la Sociedad Patriótica, cuyos miembros proclamaban la emancipación absoluta y, por antonomasia, godo pasó a nombrarse todo quien fuera contrario a la libertad de Venezuela y al progreso del país": M.V. Magallanes, Los partidos políticos en la evolución histórica venezolana (Caracas-Madrid: Ed. Mediterráneo, 1973), p. 75.
- (14) Magallanes: op.cit., pp. 77-78.
- (15) Ibid., p. 78.
- (16) Magallanes: op.cit., p. 79.
- (17) Ibid., p. 79.
- (18) Idem., pp. 80-81.
- (19) Cf., Liberales y Conservadores, Textos Doctrinales, 2 tomos, Colección Pensamiento Político Venezolano (Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 1961), vol. II, tomo II, p. 158. (Citado por Magallanes: op.cit.)
- (20) Cf., José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela (Caracas: Ed. Las Novedades, 1942. 3 volúmenes), vol. II, pp. 232-233. (Citado por Magallanes: op.cit.). Antonio Leocadio Guzmán, "el primer gran demagogo urbano que pone en una prosa galicada la teoría liberal y casi socializante que recogió en las gazetas europeas" -según el escritor Mariano Picón Salas (Oropesa: op.cit., p. 193).
- (21) J.A. de Armas Chitty, en Vida política de Caracas en el siglo XIX (Caracas: Editorial América Libre, 1976), señala como "Aunque con anterioridad algunos periódicos habían tratado de encauzar la oposición //al régimen conservador//, es El Venezolano el que inicia a fondo, con definida actitud doctrinaria, la discusión democrática. En algunos círculos se consideró como audacia y hasta irrespeto el hecho de censurar a Páez o a Soublette, tal vez por venir estos hombres de la guerra de Independencia. Causaba también asombro aquella censura agria y dura contra la administración pública". El Venezolano aparecía, en 1840, como símbolo del movimiento liberal y bajo el lema de "Más quiero una libertad peligrosa, que una esclavitud tranquila" (pp. 31-32).
- (22) Sobre la oligarquía liberal o el liberalismo contradictorio: Oropesa, op.cit., pp. 198 y ss.; Escovar Salom, op.cit., pp. 123 y ss.; Irazábal, op.cit., pp. 223 y ss.; la "patria de los Monagas": Kalavé Mata, op.cit., pp. 152-155.

- (23) Art. 4 de la Constitución de 1857.
- (24) Arts. 98-y 99 (1857).
- (25) Cf., Luis Mariñas Otero, estudio preliminar en Las Constituciones de Venezuela, ed.cit., p. 39.
- (26) Según R. Escovar Salom, Evolución política de Venezuela, ed.cit., p. 123.
- (27) Art. 151 de la Constitución de 1858.
- (28) Mariñas Otero, op.cit., pp. 41-42.
- (29) Ibid., p. 42.
- (30) J. Oropesa, op.cit., p. 233.
- (31) José Santiago Rodríguez, Contribución al estudio de la Guerra federal en Venezuela (Caracas: Editorial "Elite"-Tip. y Lit. Vargas, 1933. 2 volúmenes), vol. I, pp. 17-18. (los subrayados son nuestros)
- (32) Cf., Malavé Mata, Formación histórica, pp. 165-170. "Por su envergadura tanto como por su duración y por las consecuencias que de ella se han desprendido, la guerra llamada de cinco años representa la convulsión más decisiva de la historia venezolana. La propia guerra de independencia no resquebrajó, en la medida en que lo hiciera la federal, las estructuras sociales, ni puso en libertad tal cantidad de elementos de instintiva reberldía, de igualitarismo social, de caótica aspiración revolucionaria": Oropesa, op.cit., pp. 227-228.
- (33) Cifras de C. Irazábal, Hacia la Democracia, p. 173.
- (34) José Nucete Sardi, "El manuscrito de un coronel federal", prólogo a Emilio Haverro, La Revolución Federal, 1859 a 1863 (Caracas: Imprenta Nacional-Ediciones Conmemorativas del Primer Centenario de la Revolución Federal, 1963), p. X.
- (35) Decía Fermín Toro que "Los partidarios de la escuela de Say, de Bentham, y de algunos otros escritores modernos, principalmente economistas, miran la libertad como objeto, como principio el más sagrado; y aplicándola a la industria, la subordinan, o más bien le sacrifican la igualdad que sí puede llamarse fin y objeto de la sociedad"... "La ley de 10 de abril fue hecha únicamente en favor del acreedor bajo el doble punto de vista de libertad en la estipulación de los intereses y de seguridad en el cobro de su préstamo. El deudor fue necesariamente sacrificado bajo ambos aspectos: la usura legalizada le quita todo apoyo legal, aún en los contratos más monstruosos, y el remate de sus bienes sin justiprecio, ni condición alguna en su favor, le pone sin amparo de ninguna especie en manos de su acreedor. Este es el carácter prominente de esta ley": F. Toro, Reflexiones sobre la ley de 10 de abril de 1834 (Caracas: Cooperativa de Artes Gráficas, 1941), pp. 37 y 102 (Citado por J.A. de Armas Chitty, Vida política de Caracas en el siglo XIX, pp. 23-24. Puede consultarse, sobre el tema, de José Angel Ciliberto, Fermín Toro y las doctrinas económicas del siglo XIX (Caracas:

Editora San José, 1974).

- (36) Nucete-Sardi: prólogo citado, pp. XVIII-XIX. Un clásico estudio de la guerra federal es el de Lisandro Alvarado, Historia de la revolución federal en Venezuela (Caracas: Tip. La Nación, 1953. Publicaciones del Ministerio de Educación, Volumen V, 662 pags., (1956))
- (37) C. Irazábal, Venezuela esclava y feudal, ed.cit., pp. 249-250. Sobre la difusión de las ideas del socialismo utópico entre los colaboradores de Ezequiel Zamora, Véase P. Brito Figueroa, Tiempo de Ezequiel Zamora, ed.cit., pp. 473 y ss.
- (38) Cf., José León Tapia, Por aquí pasó Zamora (Caracas: Ediciones Centauro, 1976): "Toda esta gente que acompañó a Boves, quienes les ofreció reivindicaciones y los bienes de los blancos, luchando en nombre de un Rey a quien no conocían, solamente por hacerlo en contra de sus antiguos amos que iniciaron la independencia, (...), ahora desesperanzados y sin caudillo, buscaban una luz en la oscuridad de la opresión a que eran sometidos de nuevo por las antiguas clase dominantes que habían vuelto por sus fueros. Encontraron ellos en Ezequiel Zamora la ilusión de una Patria mejor y la motivación para recomenzar la lucha" (p. 29).
- (39) León Tapia: op.cit., pp. 35 y ss.
- (40) Armas Chitty: op.cit., p. 112.
- (41) Ibid., p. 115. El texto del Tratado de Coche y su modificación, en pp. 181-183 (Documento No. 7).
- (42) Mariñas Otero: op.cit., p. 45.
- (43) Ibid., pp. 45-47.
- (44) "Durante un siglo Venezuela ha sido una República Federal con el nombre de Estados Unidos de Venezuela, de acuerdo con la Constitución escrita. Pero en la práctica ha funcionado como un centralismo, esto es, un Estado en que el Gobierno político está concentrado en manos del Presidente de la República": Guillermo Morón, Historia de Venezuela (Caracas, 1961), p. 399 (Citado por Mariñas, p. 47).
- (45) Irazábal, Venezuela ..., p. 256.
- (46) Lieuwen, Venezuela, p. 54.
- (47) Irazábal, siguiendo al historiador Level de Goda (Historia Contemporánea de Venezuela), habla de aquella crisis, entre ... y ..., en la que "cada Estado vino a ser regido por una personalidad federal con el nombre de Presidente; y lo era casi siempre el General más prestigioso de cada localidad ... Desde los primeros meses del trienio federal comenzó el desorden en la administración general y en los llamados Estados soberanos; en éstos seguían sus gobernantes el ejemplo del caudillo federal; y como se despertó entre muchos de los vendedores una gran avaricia de dinero, así como el jefe de la Nación aumentaba las contribuciones generales y comenzaba a disponer a su alijo de las rentas públicas, los jefes de los Estados procedían de

igual modo con las contribuciones y rentas de sus respectivas localidades, de las que, en algunas de éstas, fueron los peajes las principales ... hubo cesos, hasta en las cercanías de la capital, en que uno de tantos generales de la federación, sin ser gobernante y estar autorizado, estableciese un peaje cerca de donde habitaba, y era forzoso pagarle para pasar" (Citado en Venezuela esclava y feudal, p. 261).

- (48) Cf., "Visión histórica de Venezuela", en Tomas de historia social y de las ideas (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela, 1969. pp. 23-40), esp., pp. 34 y ss.
- (49) A. Uslar Pietri, en el Prefacio al libro de George S. Wise, Caudillo. A portrait of Antonio Guzmán Blanco (Westport -Connecticut-: Greenwood Press, Publishers, 1970. 1a.ed. en Nueva York: Columbia University Press, 1951), pp. V-VI.
- (50) G.S. Wise: op.cit., pp. 62-63. También, cap. III: "Background of The Federal War and The Rise of Guzmán Blanco", pp. 33y ss. Para Wise, el caudillismo es una forma de gobierno dictatorial que puede ser claramente diferenciada de otros tipos de dictadura: p. X del preámbulo.
- (51) Wise: op.cit., cap. IV: "The Broken Road to Power", pp. 64-65.
- (52) IJeuwen: op.cit., p. 57.
- (53) Cf., J.L. Salcedo Bastardo, Historia fundamental de Venezuela, ed. cit., pp. 450 y ss.
- (54) Véase Santiago G. Suárez, Evolución histórica del Situado Constitucional (Caracas: Editorial Arte, 1965).
- (55) D.E. Blank, Politics in Venezuela, ed.cit., pp. 13-14. En 1872, Guzmán Blanco decretó la construcción del Capitolio, sede del Parlamento desde esa fecha: Manuel Alfredo Rodríguez, El Capitolio de Caracas. Un siglo de historia de Venezuela (Caracas: Ediciones del Congreso de la República, 1974), cap.II: "El palacio legislativo", pp. 19 y ss.
- (56) Salcedo-Bastardo: op.cit., p. 451 (nota 36) y p. 452.
- (57) Wise: op.cit., pp. 111-112, 134, 145, 161 y 173.
- (58) Mariñas Otero: op.cit., p. 49. (Constitución de 1874).
- (59) Ibid., p. 50.
- (60) Idem., p. 51 (Arts. 61 y 62 de la Constitución de 1881).
- (61) Art. 85 (1881).
- (62) Mariñas Otero: op.cit., p. 52.
- (63) Ramón J. Velásquez, La caída del liberalismo amarillo. Tiempo y drama de Antonio Paredes (Caracas: Talleres Cromotip, 1973. 2a.ed., con una carta de J.R. Pocaterra y una Explicación del autor).

- (64) R.J. Velásquez: op.cit., p. VII de la Explicación.
- (65) "Hasta la primera década del siglo XX, el cuadro social, económico y político del país es de una simplicidad elocuente: de un lado las masas campesinas, desorganizadas y analfabetas, y del otro, los amos de la tierra, convertidos en caudillos naturales de aquellas masas. Agricultura rudimentaria y ganadería casi silvestre, los dueños de fundos y dehesas son naturalmente los señores de la paz y de la guerra" ... "Fuera de esta clase de los propietarios rurales, apenas si puede dejar oír su voz el gremio de los grandes comerciantes. En un país de tan incipiente organización económica, ellos ejercen un conjunto de funciones que los hace cada día más prósperos y poderosos. Como prácticamente no existe la banca, son los banqueros de los agricultores, de los pequeños comerciantes y del mismo gobierno. Además fijan los precios de las cosechas y se aprovechan de manera exclusiva de las grandes ganancias que por los frutos de la tierra logran en los negocios de exportación. Actúan en Caracas y en tres o cuatro puertos de la República y son los únicos exportadores de café, cacao, cueros, sarrapia, balatá y plumas de garza y los importadores de todo género de mercaderías ...": Velásquez: op.cit., pp. VII y ss de la Explicación.
- (66) Cf., Domingo Alberto Rangel, Los andinos en el poder. Balance de una hegemonía, 1899-1945 (Caracas: Talleres Gráficos Universitarios, 1964):
- (67) Rangel: op.cit., pp. 71-72.
- (68) Citamos a E. Lieuwen, Venezuela, p. 59. "La muerte de Joaquín Crespo y el entronizamiento de Cipriano Castro desatan sobre Venezuela un huracán de violencia y anarquía. La quiebra del liberalismo amarillo y el consiguiente relevo generacional, se suman a la instauración de la hegemonía del Táchira y producen un estallido de fuerzas disolventes que hacen del quinquenio 1898-1903 una especie de breve Medievo venezolano. El precio de la transición será el copioso tributo que pagarán con sangre y con bienes los actores y espectadores de la clausura del viejo período y el advenimiento del nuevo ciclo" M.A. Rodríguez, El Capitolio de Caracas ..., ed.cit., p. 456.
- (69) D.A. Rangel ha puesto de relieve las dos etapas que corresponden a necesidades sucesivas del régimen caudillesco. Una primera que llamaría de "la montonera en armas", en que el caudillo traza un mensaje para dar conciencia siquiera elemental a su clientela rural; e la etapa ascendente donde los caudillos son luchadores rodeados de masas rurales cuya acción se orienta hacia el conflicto armado. Una segunda etapa en la cual el medio social impone su ley. La carencia de una burguesía desarrollada o de un proletariado consciente lleva que las luchas caudillescas sean meros episodios de rapiña. Las guerras civiles no conducen al establecimiento de un nuevo orden en el campo ni a reformas profundas en el aparato estatal o en los mecanismos esenciales de la sociedad. Las masas rurales que acompañan a la empresa caudillesca pronto sienten la frustración y el desencanto. Si la empresa se ha coronado con el éxito, el caudillo, convertido jefe regional o nacional, levanta un aparato de terror a fin de evitar que otros, siguiendo su ejemplo, conquisten a las masas rurales. Y como la guerra deviene en vía de enriquecimiento, el gobierno de caudillo tiene que recurrir al robo y al saqueo administrativo, so-

-bre la base de que sólo el terror impuesto le garantizará el cobro de sus haberes de vencedor, la apropiación del botín que piensa haberse atribuido. Así, de esta manera, surgían dos fenómenos que alternaban, persistentes, en la historia venezolana del siglo XIX: guerra civil y distadura como movimientos pendulares, como una especie de modus vivendi en política, que se turnan invariablemente a lo largo del proceso histórico de aquella sociedad agraria y tradicional: op.cit., pp. 55-56.

- (70) Carrera Damas, "Visión histórica de Venezuela", estudio recogido en Temas de historia social y de las ideas, ed.cit., p. 36.
- (71) Cifras de Rafael Gallegos Ortiz, El Cachorro Juan Vicente Gómez (Caracas: Editorial Fuentes, 1977. 2a.ed.), p. 65.
- (72) "Cuando se produce la independencia, aparece en plenitud el caudillo local. América del Sur -con sus 7.200 kilómetros de longitud y 4.300 de anchura- estaba aislada de sí misma. Y también estaban aisladas las ciudades provincianas y la aldea. No había caminos. Los contactos escaseaban. Las montañas eran muy quebradas y altas o el mar muy largo y peligroso. Aquel aislamiento fortalece el regionalismo. El orgullo local. Se limita la comprensión política y social. Y lógicamente la hacienda ... con sus peones, su sistema que gobierna la vida de todos, la choza, los animales de trabajo, las "fichas", viene a determinar el destino latinoamericano durante el siglo XIX. Las familias más poderosas -cuyas haciendas crecen a expensas de las comunidades- van adquiriendo el liderazgo de la región. Sus peones son los soldados. Lo determina la fidelidad y el patriaraje. El lejano y cómplice gobierno central, poco podía hacer ante el poder del cacique local. Era una época más de brujos que de médicos. Más de ganonales que de gobernantes. La economía estancada tendía a la autosuficiencia regional. Así se fue encadenando el mal del caudillismo, lo impulsó el régimen de la hacienda. En Venezuela, primero gobernaron los caudillos enraizados en la producción del cacao. Luego los ganaderos. Y por último la gente del café. Por esta razón, observamos que sucesivamente marchan los "caudillos" caraqueños -los grandes cacaos- con sus sembradíos en los valles del Tuy y de Aragua. Inmediatamente después los del llano, a lo Pérez y Crespo con sus cabezas de ganado. Y posteriormente los andinos con Cipriano Castro, el verdadero "General Café". El caudillismo nos resulta así, no una consecuencia étnica o geográfica, sino económica": Gallegos Ortiz, op.cit., p. 19.
- (73) Salcedo-Bastardo: Historia fundamental ..., p. 454.
- (74) Oropesa: op.cit., p. 290.
- (75) Ibid., p. 296.
- (76) En palabras de Federico G. Gil, Latinoamérica y Estados Unidos. Dominio, coexistencia y conflicto (Madrid: Editorial Tecnos, 1975), p. 42.
- (77) En la bibliografía anglosajona se encuentran relatos detallados de esta cuestión en J. Fred Rippy, Historical Evolution of Hispanic America (Nueva York: Appleton-Century-Crofts, 1945. pp. 435-58); y en Chester Lloyd Jones, The Caribbean Since 1900 (Englewood Cliffs:

; M.J.: Prentice-Hall, 1936. pp. 219-49). Un trabajo monográfico más reciente es el de Miriam Hood, Gunboat Diplomacy, 1895-1905. Great power pressure in Venezuela (London: George Allen & Unwin Ltd., 1975), pp. 163 y ss.

- (78) "Un penacho de humo en el horizonte marino, unos fogonazos y el estrépito de los obuses sonando contra las viejas fortalezas coloniales. Se erosionaron las torres veteadas de sucio y antigüedad y al suelo cayeron unos puñados de polvo y algunas vidas venezolanas. Pudo de las arcaicas fortificaciones españolas y sangre de nuestro pueblo recogió la historia del país en aquel episodio. Era el bloqueo naval, hecho a cañonazos, por las potencias europeas. Inglaterra, Alemania e Italia se colocaron a la cabeza de una coalición aventurera y criminal que pretendió cobrarnos, en tributo de humillación, las deudas que el país había contraído con sus banqueros y comerciantes. Hasta entonces, no registró la América Latina un despliegue descarado de fuerza y de rapiña contra la soberanía de uno de sus países": Rangel, Los andinos ..., p. 135.
- (79) Cf., Mariano Picón Salas, Los días de Cipriano Castro (Lima: "Edición Latinoamericana", 1958. Primer Festival del Libro Popular Venezolano-Biblioteca básica de Cultura Venezolana, Primera Serie, No. 5 p. 149. De esta clásica obra es interesante, para una descripción pormenorizada de los acontecimientos y negociaciones relativas al bloqueo, el capítulo XI: "La planta insolente", pp. 140 y ss.
- (80) Cf., Enrique Bernardo Núñez, El hombre de la levita gris. Los años de la restauración liberal (Caracas-La Roca: Ediciones del Caribe, 1973), pp. 113-114.
- (81) Salcedo-Bastardo: op.cit., pp. 490 y ss.
- (82) Oropesa: op.cit., p. 303.
- (83) R. Gallegos Ortiz, El Cachorro Juan Vicente Gómez, ed.cit., pp. 120.
- (84) Rangel: op.cit., p. 127.
- (85) La literatura venezolana ha abundado suficientemente en la personalidad de Juan Vicente Gómez. Sin pretender ser exhaustivos, señalamos sólo una de las novelas más recientes sobre el período: Franco Herrera Luque, En la casa del pez que escupe el agua (Caracas: Editorial Fuentes, 1976. 2a.ed.), en especial lo narrado en pp. 23 y ss.
- (86) A. Arellano Moreno, Mirador de Historia Política de Venezuela, ed.cit., pp. 9 y 10-11.
"El caudillo, tal como lo padecimos en Venezuela, fue una supervivencia de los tiempos primitivos. En las sociedades rudimentarias los vínculos políticos se establecen a través de una persona. Las élites sociales no tienen conciencia clara de sus intereses y actúan con cierta tardanza frente a los acontecimientos. En una sociedad avanzada, las clases tienen una conciencia lúcida que las lleva a actuar prontamente. Cada uno de sus miembros intuye el sentido de los hechos sociales y reacciona activamente. Los movimientos de las élites se hacen por uno como consenso paulatino en que la ~~manipulación~~ ide

-dad del objetivo se logra a medida que el estímulo exterior lo reclama. Las sociedades atrasadas carecen de semejantes mecanismos. No hay en su seno esas clases perfectamente formadas que capten y depuren sus conveniencias. El caudillo sustituye, en el proceso de la lucha, la acción unánime del grupo social. Las sociedades avanzadas tienen líderes que consultan y se inspiran en la evidente voluntad de sus compañeros de clase. Las sociedades atrasadas poseen caudillos que golpean la conciencia de los grupos hasta darles el toque de despertar que los lleve a la acción. El caudillo se traza una misión simple, transformar la inercia en empuje y la confusión en orden. La medida de su éxito estará siempre en la capacidad que demuestre para sembrar un mensaje. Ser comprendido por sus compatriotas significará el mejor acierto de un aspirante a caudillo. Comprender a los suyos entrañará, por el contrario, para el líder, su más cumplida faena histórica".

"El caudillo fue en todo momento la síntesis humana de las clases o grupos que buscó interpretar. Su cultura estuvo en razón directa del grado de atraso o adelanto que privaba entre quienes formaban su clientela. Los caudillos bárbaros de nuestra América -algunos de cuyas criaturas más espectaculares nacieron en Venezuela- traían en su rostro el barro de nuestros campos. Tenían que proceder salvajemente porque era la única manera de equipararse con sus gentes. Había brotado de los caseríos y su vida se forjó entre la ignorancia y la miseria que jamás dejó de bordear la vida de nuestras comunidades campesinas. Su misión consistió en trazar un camino elemental a las masas para sacarlas, con ese impulso eléctrico, de su pasividad ancestral. La personalidad de las masas lograba liberarse de las inhibiciones y su conciencia intuitiva, por lo menos, los objetivos más inmediatos. La ferocidad del caudillo era, en el fondo, el único medio de mantener la cohesión de sus partidarios. Sin el despojo y la opresión, la primitiva conciencia de las masas rurales habría perdido el motivo que las lanzaba al combate. Un ejército caudillesco de raíz campesina que no deprimiera y matara fallaba a la necesidad táctica de guardar su compactación. La barbarie de nuestros caudillos no fue otra cosa que el instinto defensivo de clases sociales que por carecer de desarrollo encontraban en la simple venganza la manera de conservar su impulso guerrero".

(Rangel: Los andinos en el poder, pp. 53-54, del cap. IV: "Los caudillos semiletrados", pp. 53 y ss.).

202

- CAPITULO CUARTO -

" PETROLEO, SOCIEDAD Y CAMBIO POLITICO "

1) Venezuela agraria y Venezuela petrolera.-

5

(I)

A la vista de las circunstancias, queda claro que, en nuestro tiempo, el petróleo ha venido a ocupar un lugar preferente en la política exterior y en la estrategia económica de las grandes potencias industriales. Y en contrapartida, es igualmente importante la presencia de esta fundamental materia prima en los países que la producen, generalmente, economías subdesarrolladas y dependientes, que venden un producto esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones avanzadas del mundo occidental.

Así, se ha puesto de manifiesto que, en el contexto mundial, los países que poseen petróleo no escapan a todo un complejo sistema, el llamado game of nations, correlación o juego entre naciones en base a una geoestrategia muy definida, que converge, en nuestros días, alrededor de la obtención y aprovisionamiento de aquél recurso básico para el desarrollo: el petróleo. Aspecto que por lo demás ha resumido Jean-Jacques Berreby, el conocido experto francés, con meridiana claridad:

"La economía mundial del petróleo está regida por una geopolítica particular: con dos notables excepciones, que son la U.R.S.S. y los Estados Unidos, -salvo algunos casos menores aislados- la gran masa del petróleo mundial se produce en algunos países subdesarrollados y se consume a millares de kilómetros en algunos países industrializados ... el 95% lo suministra una docena de países y lo compra y consume, principalmente, otra docena. Su explotación, transporte y comercio es la obra de un puñado de compañías internacionales de las que alrededor de una quincena controla el 90% de los intercambios"

Más aún, el mismo autor ha señalado las considerables derivaciones de tal situación en el nivel político interno de los Estados:

"La energía en general, y el petróleo en particular, se han convertido en objetivos estratégicos, económicos y sociales de tal importancia, que se adscriben a las más altas instancias del Estado, con igual título que la defensa, las finanzas o los negocios

extranjeros, a los que se hallan directamente vinculados. Por eso, se ve cada vez más a menudo que los asuntos petroleros y otros problemas energéticos se tratan en los más altos niveles de un país. En Francia el general De Gaulle se había reservado los asuntos del petróleo al mismo tiempo que la defensa y la política extranjera. En Brasil no hay que extrañarse de que el presidente de la Petrobras, sociedad petrolera estatal, el general Ernesto Geisel, se convierta en el presidente de la República. De tal manera van hoy los asuntos petroleros, que ya no se pueden dejar entre las manos ni de compañías privadas ni de servicios subalternos" (4).

Y precisamente, alrededor de este marco económico-político, y en directa interacción con él, ha venido girando un proceso de anunción, en términos de nacionalización, de la riqueza petrolera por parte de los países productores, árabes y no árabes; al mismo tiempo que una actualización del valor de dicha riqueza en términos de precios, que ha originado sin duda una de las problemáticas más arduas y difíciles de las relaciones internacionales en nuestros días (4). Nacionalización o "descolonización del petróleo", fenómeno al que asistimos principalmente a partir de 1970, como un momento de la segunda fase de la descolonización, ésta vez económica, que siguió a la fase inicial de descolonización política propiamente dicha, característica del período de postguerra, con el surgimiento de una multiplicidad de Estados árabes, africanos y asiáticos.

Tal vez, los primeros signos anunciadores del proceso de descolonización del petróleo estaban, precisamente, en la posición venezolana de 1948, cuando se establecía a las compañías concesionarias el reparto fifty-fifty de los beneficios petroleros: una política petrolera de nuevo cuño de amplias repercusiones en el exterior, se iniciaba en aquellos años bajo la inspiración del experto venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, quien tiempo después -y no por casualidad-, iba a ser el gran propulsor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); sin olvidar un antecedente aún más remoto como el de la nacionalización, en 1933, de los bienes de la compañía Shell, en México, durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas (3).

Ha sido una realidad, por tanto, la de que, en materia petrolera -nacional e internacional-, los factores políticos, estratégicos y sociológicos han sido tanto o mucho más importantes que los datos puramente técnicos y económicos (4). Para el caso de Venezuela lo expresaría con gran acierto, ya en 1943, Leonardo Ruiz Pineda, uno de sus más brillantes y prometedores líderes políticos:

"El petróleo ha sido para la historia de los últimos veinticinco años venezolanos manzana de discordia, factor decisivo y fundamental. El petróleo nos ha orientado hacia todos los rumbos. Nos convirtió en tema puntual para las charlas doradas de Wall Street. Nos incluyó en las chequeras de Deterding, Mellon, Morgan y Rockefeller. Luego nos ha traído a esta condición de lacayos del capital inversionista. Nos ha hecho célebres y expertos en maquinaciones palaciegas, en combinaciones diplomáticas, en gestos urbanizados de politiqueros. Hacia todos los rumbos nos ha aventado el petróleo con su soplo majestuoso. No hay renglón en esta historia venezolana de los últimos veinticinco años sobre el cual no haya caído la gota de petróleo para bautizar una intriga" (5).

Nos toca, por consiguiente, examinar los cambios y las nuevas relaciones que la explotación petrolera introdujo en el seno de la sociedad venezolana, y en qué medida y sobre qué condicionamientos se iba a producir un nuevo tipo de actitudes y de comportamiento políticos, de fuerzas sociales y culturales hasta aquel momento desconocidas, y la liquidación gradual, en la práctica, de la vieja política autoritaria.

.../(II)

(II)

La Venezuela agraria se nos presenta como un país estancado:

"Cuando se cierra el ciclo agrario, el país estará casi en las mismas condiciones de 1830. Han transcurrido casi cien años de historia venezolana. Y en ese lapso apenas ha aparecido, con vigor, una nueva riqueza, el café ahora moribundo. En 1925, un venezolano de otros tiempos que hubiese resucitado, habría visto el mismo país de principios del siglo XIX. Si se exceptuaba a los Andes, transformados por el café, el resto de Venezuela era la misma nación enclenque, pobre y estancada de los días de la independencia. Quizás éramos más atrasados en 1925 que en 1830. Porque habían desaparecido el añil y el tabaco, el algodón y el ganado sin que los hubiésemos reemplazado con otras riquezas. Los llanos del Guárico, de Apure y de Barinas tenían menos ganado hacia 1930 que en las épocas gloriosas del "catire" Pérez. Esa era Venezuela. El café no logró modificar su destino, porque fue incapaz de crear, desde el campo, un orden capitalista susceptible de abarcar el grueso de nuestra estructura. El Poder siguió siendo, por ese fracaso del café, el coto de las clases más atrasadas e inútiles de nuestra sociedad. Comerciantes extranjeros, oligarcas caraqueños y terratenientes zafios formaban la espina dorsal del Estado venezolano. Y una población sin derechos sufría los efectos del embrutecimiento y de la degradación que todo ello aparejaba como consecuencia histórica"

Según la expresiva prosa de D.A. Rangel,

"El petróleo iba a clausurar, violentamente, el siglo XIX aún estancado en un país podrido de dictaduras y fermentado en los odres de un feudalismo que no se resignaba a morir. Seguramente, la reacción de los venezolanos de esa época debió ser de estupor. Un poco a la manera de los africanos asombrados frente al despliegue de los europeos que los conquistaron, nuestros compatriotas de 1917 debieron mirar el desfile de aparatos y de hombres traídos por el petróleo con una mezcla de incredulidad y de angustia. Su mentalidad de hombres acostumbrados a la modestia del feudalismo, a la pequeñez económica y al atraso político de un país acartonado, tenía que sorprenderse junto a las diabólicas energías y a las tremendas perspectivas del petróleo. Esa parálisis de la sorpresa que produce en los pueblos débiles la llegada de las técnicas superiores del capitalismo ha sido siempre una de las ventajas no por momentáneas menos eficaces de los conquistadores. Venezuela aterrada por Juan Vicente Gómez, embrutecida por una explo-

-tación secular y cortada de las corrientes internacionales del pensamiento por las modalidades de su evolución social, iba a ser presa segura por algún tiempo en manos del imperialismo petrolero" (6).

Rango específico de la penetración petrolera es que ésta sobreviene, desde sus inicios, mediante gigantescas oleadas de inversiones de capital. Baste señalar que en Venezuela, durante los años de la década de 1920, la colocación de capitales petroleros supera el valor del producto nacional bruto en uno cualquiera de dichos años. Y es que las implicaciones técnicas del petróleo impiden recolectar copiosas ganancias si no es al precio de inversiones colosales. El impacto de estas voluminosas inversiones en Venezuela va a ser de tal magnitud, que a partir de 1920 el país va a recorrer un trecho más largo que en los siglos transcurridos desde la conquista española: es ya un lugar común el afirmar que el capitalismo petrolero va a importar a Venezuela una dinámica socio-económica completamente inédita. El ritmo de crecimiento, con todo su complejo de deformaciones que tendremos oportunidad de analizar, será uno de los más rápidos de América Latina. Ahora sí que el modo de producción capitalista va a penetrar en la estructura económico-social venezolana, aunque con desigual intensidad y a diversa velocidad según sean los sectores estudiados. En la estimación del profesor Rangel, éste es el gran cambio que ha suscitado el petróleo en el seno de la sociedad venezolana (7).

En un nivel analítico muy similar al anterior, el profesor Ramón Losada Aldana, en Dialéctica del Subdesarrollo, pone de relieve cómo, con la actividad petrolera en Venezuela, van a coexistir dos órdenes estructurales distintos y se va a consolidar inducidamente una tercera organización estructural. Tenemos, por un lado, al capitalismo monopolista; por otro, el latifundio feudal precapitalista, y, por último, un conjunto de relaciones capitalistas nacionales. Estaríamos en presencia de una estructura pluriparticular, "con sus tres intraestructuras respectivas y unos márgenes estructurales de cierta flotabilidad social": sobre este conjunto de relaciones productivas pluriestructurales se levantarían todas las relaciones sociales que caracterizan la Venezuela contemporánea y su actual formación socio-económica:

"Es decir, Venezuela, como sociedad global concreta, individualizada actualmente en la esfera del mundo, traza sus contornos históricos

... en la realidad impresa por la explotación petrolera. Bases estructurales, proyecciones superestructurales, canales de intercomunicación recíproca, intrincada configuración de nexos y contradicciones, complejos desajustes y erráticos impulsos conflictivos, todo este conjunto centra en el petróleo su problemática más honda. Ese es el hecho fundamental: De él se deriva todo lo demás. Sin entenderlo, la Venezuela actual se nos torna inasible" (8).

En efecto, la economía petrolera cambiaba radicalmente una historia tradicional caracterizada por el dominio decisivo del latifundio en la vida venezolana, y un nuevo tipo de explotación -hasta entonces extraña a la organización social del país- iba a ocupar un lugar preeminente. La crisis de la agricultura latifundista de exportación se ponía en evidencia en el testimonio de una publicación del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, donde se afirmaba que "Durante 1926 la demanda de trabajo se desplazó de la agricultura hacia los campos petroleros, obras públicas y otros sectores, causando congestión en las ciudades y un notable incremento del costo de la vida. La demanda de trabajo incrementó los salarios hasta un nivel sin precedentes, especialmente en los campos petroleros. La partida de trabajadores de las haciendas ha sido tan extensiva que ha comenzado la agitación por parte de los propietarios de la tierra para lograr que el gobierno detenga los programas de construcción de carreteras y devuelva los trabajadores a las labores agrícolas" (9).

El petróleo haría cesar lo que había sido una especie de ley histórica, por espacio de un siglo: el estancamiento. Se introducía una dinámica de crecimiento, totalmente insólita, sí, pero de perfiles extremadamente contradictorios. Es así como, en el proceso de instauración del capitalismo petrolero en Venezuela, va a tener lugar una especie de "eutanasia económica", consistente en la supresión de ramas productivas y estímulo de otras sin significación anterior. Productos como el cacao y el café entran en decadencia, a la vez que sectores enteros de la economía son empujados a un crecimiento vertiginoso para los parámetros de la época. El surgimiento de un abismo -geográfico, demográfico y económico- entre aquellas zonas o ramas que ascienden y las que permanecen estancadas o en retroceso, no excluirá una tendencia general hacia el crecimiento económico. . . A lo largo del período petrolero, el producto venezolano se va a incrementar a tasas excepcionales. Entre 1936 y 1950, la tasa media de crecimiento anual del producto bruto

fue del 8,6%. En el período 1950-58, el ritmo del incremento fue del 8,3%. Virtualmente, entre 1936 y 1960, la economía venezolana no conoció, desde el punto de vista de las macromagnitudes, crisis o desfallecimientos importantes (10).

Si dicha evolución la comparamos con la del resto de América Latina, veremos cómo, en el período 1945-60, el producto bruto venezolano se expandió a una tasa media anual del 10,5%; la misma magnitud para los otros países latinoamericanos se situaba en apenas el 4,5%. Es evidente que el referido ascenso global de la economía venezolana es la resultante de un fuerte proceso de acumulación de capital. La presencia de voluminosos capitales petroleros echó por tierra los obstáculos que impedían tal acumulación. Más aún, la acumulación de capital, concentrada primariamente en el sector petrolero, va a difundirse progresivamente al resto de la economía, hasta el punto de que D.A. Rangel podía afirmar, en el trabajo citado publicado en 1963, que el nivel medio de capitalización de la economía venezolana era ya bastante superior al que predominaba en otros países subdesarrollados de parecidas magnitudes (11).

Los efectos de este cambio, en el ámbito de las clases sociales venezolanas, eran igualmente decisivos, tanto en sus aspectos cuantitativos como en los propiamente cualitativos. A riesgo de adelantar análisis posteriores, podemos afirmar, junto a R. Losada Aldana, la verificación de una alianza entre la clase de los latifundistas o propietarios de la tierra y los sectores capitalistas externos: pasado el "primer susto", resulta evidente una convergencia entre los señores del latifundio y los señores del petróleo, quienes vienen a coincidir por el hecho de que muchos terratenientes muestran interés en la venta de sus tierras, cuyo valor comenzaba a decaer. Unido a ello, se observa un cierto proceso de mutación capitalista en el seno de algunos latifundios. Por otra parte, una burguesía intermediaria o sector mercantil -dedicada antes al financiamiento y exportación de la producción agrícola- cambia significativamente gracias al petróleo, pasando a convertirse en un agente de importación de la producción capitalista extranjera. A las posibilidades de capitalización que trae consigo la actividad petrolera, se va a corresponder igualmente la aparición de una burguesía industrial, sobre todo después de la segunda guerra mundial, la cual, en términos generales, va a intentar una industrialización independiente o sustitutiva. De otra parte, tendríamos el desarrollo del proletariado venezolano, y de manera particular, de los obreros petroleros como núcleo privilegia-

-do de aquél. (42)

El Estado, tradicional órgano político de los grandes señores terratenientes y de sus caudillos militares, con una organización señorial de ingresos y egresos exigüos y una tasa de inversión colectiva sumamente precaria, sufre en la Venezuela petrolera una mutación considerable, no sólo por las fuertes presiones externas e internas que experimenta, sino por la posesión de voluminosos recursos fiscales que le permitirán asumir la instalación y el desarrollo de las industrias básicas. Y en el nivel de la dinámica política, quedará claro que con el advenimiento del petróleo, el campo deja de ser en Venezuela el eje de la vida nacional. La desaparición de las crónicas guerras civiles y de los movimientos agrarios dirigidos por jefes o caudillos, da paso a la lucha política en las ciudades y van a ser éstas el escenario de la evolución política más reciente. El desplazamiento de la actividad política del campo hacia la ciudad implicará también otras tácticas nacidas de instrumentos de análisis distintos a los que imperaron tradicionalmente.

La crisis de la sociedad tradicional venezolana revierte en transformaciones importantes y el proceso de acumulación de capital se constituye en base material que posibilita dichas transformaciones. En palabras de Sergio Aranda, "La inserción de Venezuela en el sistema capitalista mundial a través de exportaciones petroleras cuya explotación estuvo hasta ayer casi exclusivamente en manos de gigantescas empresas transnacionales extranjeras produjo modificaciones cualitativas en la sociedad tradicional del país, al posibilitar sucesivos cambios en el patrón de acumulación" (43).

(III)

Entre los comienzos del presente siglo y la crisis de 1929 se producen importantes cambios en el sistema económico internacional, con repercusiones concomitantes en la América Latina. El capitalismo entraba ya en una segunda revolución industrial de carácter más científico y tecnológico. Las fuentes de energía, luz y calor, se ampliaban progresivamente con el petróleo y la electricidad; se producía la invención del motor a explosión y del motor eléctrico, y la siderometalurgia recibía un nuevo impulso, al igual que la industria mecánica

química. La segunda revolución industrial venía a significar el paso del capitalismo liberal clásico al capitalismo monopolístico e imperialista. Se creaba una sociedad de tipo urbano-industrial en las metrópolis del sistema, que era proyectada hacia el resto del mundo periférico bajo el signo general de un nuevo status de dependencia. Se daba un poderoso avance a la centralización y concentración de capitales y empresas con enormes inversiones de capital fijo en sectores fundamentales o básicos de la economía. El carácter monopolístico se plasmaba en convenios de precios, pools, cárteles, trusts, holdings y distintas formas de consorcios empresariales. Las consecuencias de tal evolución iban a ser decisivas: "El monopolio produce efectos de dominación irreversibles en lo económico, en lo social y en lo político. Las grandes empresas fijan precios mínimos, imponentes por una coacción de hecho; discriminan los precios por categorías de consumidores; recurren exitosamente al dumping; ejercen controles de exclusividad. Regulan la aplicación del progreso técnico (patentes) y el mercado de trabajo, el volumen de la ocupación y el nivel de las remuneraciones, influyen decisivamente sobre la vida política, el Estado, la cultura y la ideología" (14).

El monopolio acelera la aparición de excedentes de capitales en los países desarrollados y tiende a buscar urgentemente su inversión en países menos desarrollados, donde la abundancia de mano de obra barata se va a traducir en ganancias superiores a las obtenidas en sus lugares de origen. La industria y el capital europeos, cada vez más necesitados de materias primas, se va a lanzar, pues, hacia las regiones periféricas en busca de níquel, nitratos, cobre, plomo, caucho, petróleo y otros elementos esenciales para la civilización industrial nueva que nace. El capital monopolista, mediante una agresiva expansión imperialista, va a operar como movimiento mundial que intenta abarcar a todos los países industriales y ejercer su influencia sobre todo el planeta. Se llegaba así a una interconexión económica y financiera de ámbito universal, en que la división del trabajo y la internacionalización de la producción se cumplían a escala global. Los cárteles internacionales se extenderían por diversas ramas y regiones, por naciones enteras en las que intentarían dominar sus estructuras socio-económicas.

En este sentido, la industria petrolera se va a presentar como rama clave del capitalismo monopolista, como sector plenamente representativo de su estructura (15). Ha quedado claro que, en la etapa reciente de la evolución del mundo contemporáneo, los hidrocarburos son el principal

combustible para la actividad económica y bélica; que ~~constituyen~~ una materia prima de creciente importancia para la industria química; que ha sido una de las mercancías más importantes en el comercio internacional; que es una actividad decisiva en materia de exportación de capitales; que es la actividad petrolera la de mayor integración vertical a escala internacional; que la explotación de los hidrocarburos es la de más alto grado de concentración, tanto en la propiedad del capital como en su control a nivel internacional; que el petróleo ha sido uno de los negocios más lucrativos del mundo moderno; que el petróleo es la actividad con mayor densidad de capital, mayor productividad del trabajo y mayor lucratividad por trabajador; que se ha constituido en la primera rama industrial del mundo capitalista con la consiguiente mayor influencia política en el seno del mismo, sobre todo desde un punto de vista estratégico (46).

En forma paralela a la aparición del capitalismo monopolista se produce un cambio de potencias hegemónicas en el sistema. En efecto, durante el siglo XIX, Gran Bretaña se había erigido como potencia dominante del mundo capitalista. Pero ya desde 1875 se había percibido un retroceso relativo de dicha nación con relación a países ubicados dentro y fuera de Europa -Alemania, Japón y Estados Unidos-, que iniciaban un ascenso amenazador para el predominio británico. Gran Bretaña va a experimentar progresivamente un descenso en la competencia económica internacional, a mismo tiempo que su aparato productivo y tecnológico va a crecer con más lentitud que en años anteriores. La segunda revolución industrial le har perder parte de su preponderancia casi monopolística en la producción. Y es un hecho importante a tener en cuenta en el proceso venezolano, el de que el desplazamiento del carbón por el petróleo la va a perjudicar visiblemente con relación a los Estados Unidos, poseedor en cambio de vastas reservas del oro negro.

En realidad, se trata de un proceso más general de erosión del predominio europeo, esto es, una evolución en virtud de la cual van surgiendo fuera de Europa nuevos centros de población y de poder. En este sentido, Estados Unidos concluía ya por aquellas fechas -finales del XIX- la ocupación de su ámbito interior y realizaba un proceso de acumulación de capitales y de desarrollo industrial que lo llevaría rápidamente a la etapa de expansión externa. Su posición como productor y exportador se consolida a principios del siglo XX, y hacia 1914 comienza ya a invertir en Canadá, América Central y el Caribe. Astutamente, a la vez que su expansión se proyecta hacia el Pacífico, elude las complicaciones de la

política europea, pero manipulándolas a fin de promover sus intereses.

La guerra de 1914-1918 -primera gran guerra mundial y reflejo de los conflictos de carácter interimperialista- refuerza la tendencia al debilitamiento de Europa, cuyos países, vencedores o vencidos, tienen que vérselas con grandes pérdidas humanas y materiales. Más aún, la Revolución bolchevique de 1917 en Rusia y la desaparición del Imperio Otomano implicarán igualmente la pérdida de poderosos lazos económicos y políticos por parte de los capitalistas europeos. Resultado visible era el de que los Estados Unidos emergían del conflicto como el más poderoso país industrial del mundo, dominante en el mercado internacional, acreedor y principal exportador de capitales y sucesor de Europa en el goce de la hegemonía dentro del sistema capitalista. Mientras tanto, Gran Bretaña perdía en la guerra unos 740.000 hombres -el 10% de su población masculina activa-, a la vez que debía utilizar una parte importante de sus inversiones exteriores para financiar las operaciones militares. Su producción descendía un 16% entre 1914 y 1918, y no llegaba a recuperar después de la guerra el nivel logrado en 1913. Como consecuencia, la expansión colonial británica iba a experimentar una detención de velocidad y se debilitarían sus exportaciones de capital y su comercio exterior. Su participación en el intercambio comercial mundial bajaría del 13,11% en 1913 al 9,37% en 1929. Además de la debilitación de su potencial demográfico, Gran Bretaña iba a conocer el desempleo crónico, así como una primera gran huelga general de envergadura en 1926 (47).

Como es evidente, las modificaciones del contexto internacional inciden en América Latina y se proyectan, en mayor o menor medida y con características diferenciadas para cada país, sobre la estratificación social, la cultura y la ideología, el sistema de poder y el Estado. El desplazamiento de la hegemonía británica a la norteamericana tiene consecuencias significativas. Gran Bretaña ha sido librecambista; especializada en la producción industrial; compradora de materias primas y alimentos y gran inversora. Estados Unidos en cambio es un país tradicionalmente proteccionista, sobreequipado y gran productor de materias primas agropecuarias y de alimentos, en directa competencia con los productos latinoamericanos. A su acción comercial y financiera se agrega una creciente tendencia a las inversiones directas, en forma de enclave, y en los sectores industriales. A diferencia de Gran Bretaña, encerrada en el esquema de la relación colonial clásica, Estados Unidos va a introducir un tipo de dominación más diversificada y compleja sobre las estructuras socio-

-económicas latinoamericanas, con magnitudes y elementos cualitativos distintas a las anteriores.

(IV)

La Venezuela del petróleo no escapó a los enormes condicionantes externos que dicha materia prima le imponía desde multitud de ángulos; condicionantes que vinieron a suponer auténticas servidumbres, verdadera hipotecas, en su evolución política y social. La diferencia era que el petróleo traía consigo una peculiar dinámica derivada de la naturaleza misma del producto.

De gran papel en los procesos de acumulación de capital, el petróleo se encontraba en una posición privilegiada -para la óptica de los intereses dominantes- en relación a fenómenos tales como el crecimiento de la industria pesada y de armamentos; la sustitución del carbón por petróleo en la industria naval; la invención de los motores de combustión interna; el motor de explosión en los automóviles y aviones; la calefacción y los sistemas de aire acondicionado; la creciente utilización de combustibles líquidos (diesel) en las máquinas de ferrocarriles; las innumerables aplicaciones de los derivados del petróleo en multitud de facetas de la actividad económica moderna y una considerable gama de utilizaciones de todos conocidas en la vida cotidiana. Por ése lado parecía quedar garantizada una demanda constante y ampliada del oro negro.

Junto a ello, hay que destacar la relativa inelasticidad del petróleo, en el sentido de que es una mercancía que crece sostenidamente en los períodos de auge del sistema capitalista y resiste mejor las adversidades de la depresión: el petróleo se muestra relativamente resistente a las coyunturas depresivas, lo cual confiere una excepcional importancia estratégica a los países productores del mismo y explica en buena medida la relativa ventaja de éstos en períodos de crisis.

Por otra parte, la peculiar distribución mundial del petróleo ha creado las condiciones para un monopolio geográfico, por lo menos a lo largo de un período considerable de tiempo. Así, para 1950, el 60% de las reservas mundiales se localizaban en Medio Oriente y Venezuela, es decir, en áreas subdesarrolladas (4). Al contrario, la ausencia de

petróleo en Europa llevó frecuentemente a potencias como la Gran Bretaña, a la búsqueda del mismo en la periferia (Irán, Indias holandesas, Venezuela, etc.). Las tensiones provocadas por el encuentro entre Estados Unidos e Inglaterra en esta materia van a desembocar en un acuerdo para repartirse el monopolio petrolero. Surgía así el Cartel Petrolero Internacional, como coalición de carácter monopolista que agrupará a las principales empresas del ramo. El Cartel Petrolero Internacional tuvo su origen en el acuerdo firmado en 1928 en el castillo de Achnacarry (norte de Escocia), entre la Standard Oil of New Jersey, la Royal Dutch Shell y la Anglo Iranian (después denominada British Petroleum). Al modelo fundador iban a unirse de inmediato las demás grandes empresas internacionales con sede en los Estados Unidos.

Las compañías integrantes del cartel son conocidas como las "siete grandes" y aún dentro de ellas se revela una concentración todavía más acusada de poder económico, polarizada en torno a dos grupos: a) el grupo Standard Oil como parte del conjunto integrado por las empresas descendientes de la primitiva Standard Oil Company, fundada y dirigida por John D. Rockefeller; b) el grupo predominantemente británico, formado por la Royal Dutch Shell y la British Petroleum, en el que los intereses estatales y privados de Gran Bretaña han colocado a los participantes holandeses en un segundo plano. Estos dos grandes grupos han poseído más de las tres cuartas partes del Cartel internacional. En cifras, la realidad de este control resulta abrumadora: el núcleo central del Cartel petrolero ha controlado desde hace años más de la mitad del petróleo producido en todo el mundo y unos tres quintos de la producción en el área no socialista. Desde el punto de vista del comercio internacional, de los 3.500 millones de barriles de crudo y derivados exportados por los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1962 -equivalentes al 90% de la exportación neta del área capitalista-, casi 3.100 fueron vendidos por las empresas del Cartel, esto es, el 90,4 por ciento. En cuanto a la refinación, baste señalar que, para el año de 1961, el 65 por ciento de la capacidad mundial estaba en manos de las grandes compañías internacionales, contra el 21 por ciento de empresas llamadas "independientes" y un 14 por ciento en manos de empresas estatales (4).

En Venezuela, los condicionamientos políticos imperantes en las primeras décadas del siglo XX fueron un factor esencial desde el punto de vista interno, para la distribución del subsuelo entre los monopolios

petroleros internacionales. La penetración del capital petrolero internacional encontró en las concesiones el medio jurídico y contractual idóneo para su expansión en territorio venezolano. La corrupción en la política de concesiones durante la dictadura de Gómez se iba a imponer impulsada por los consorcios angloholandeses utilizando a intermediarios venezolanos, a través de métodos auténticamente fraudulentos. No cabe duda de que el capital norteamericano y el capital angloholandés pugnaron por el control del petróleo venezolano, mediante el soborno y la corrupción de funcionarios y prestanombres de la dictadura gomeciata:

"La lista de los concesionarios primitivos demuestra claramente que Gómez otorgaba las concesiones a sus favoritos, y que el solicitante que resultó más favorecido fue su yerno Julio F. Méndez, a quien se concedieron diecisiete arrendamientos de 15.000 hectáreas (cada uno de estos arrendamientos). La mayoría de las concesiones de 1919 fueron compradas por la Maracaibo Oil Exploration Company, empresa especuladora norteamericana, cuyo objetivo era más bien negociar en terrenos petrolíferos que producir. En 1920 se adjudicaron 176 concesiones, todas a favoritos venezolanos, y nuevamente fueron vendidas a compañías norteamericanas (...) las empresas petroleras averiguaron pronto quién podía y quién no podía conseguir concesiones; los afortunados intermediarios se convirtieron, en realidad, en agentes de las compañías. Un representante de una de éstas se ponía en contacto con uno de los favoritos de Gómez y le informaba acerca de la concesión deseada, el venezolano la obtenía y la vendía a la compañía" (20).

De hecho, cuando en 1922, el pozo de los Barrosos, en el campo de La Rosa del lago de Maracaibo, saltó con violencia inusitada en un inmenso chorro de aceite negro, tal vez nadie en la Venezuela de aquel momento se dió cuenta de la significación que tal suceso iba a tener en la vida económica, social y política de la nación. Estábamos contemplando un país cuya población sobrepasaba escasamente los 2.300.000 habitantes; una sola ciudad, Caracas, la capital, tenía más de 100.000 habitantes; en la práctica, no existía comunicación entre las distintas regiones y el presupuesto nacional era sólo de 72 millones de bolívares (21). Por el contrario, como afirma P.E. Mejía Alarcón,

"Los descubrimientos de ricos yacimientos -especialmente los del Zulia- notician al mundo la riqueza petrolera de Venezuela. Compañías con nombres en inglés o en castellano con nombres yanquis o venezolanos caen ávidamente sobre el territorio del país. Gómez tiene para todos una importante porción de botín

lucrativo. Las empresas petroleras, legal o ilegalmente, en base a tráfico de influencias, el soborno y las gestiones del propio Gómez se ensañorean en Venezuela y desde entonces comienzan a decidir sobre nuestro destino" (23)

uan Vicente Gómez favorece a familiares y amigos con jugosas concesiones petroleras, y todo esto acontece durante un período "en que las destrucciones ocasionadas por la Primera Guerra Mundial, aumentaron intensamente los requerimientos de petróleo. Y para abastecer ese expansivo mercado los recursos petroleros venezolanos fueron presa en disputa de los consorcios internacionales yanquis y británicos. Venezuela fue escenario de la fiera competencia de entonces. Los británicos defendiendo el mantenimiento de sus posiciones -prácticamente hegemónicas- en el territorio venezolano y los norteamericanos -básicamente de la Standard Oil- tratando de lograr concesiones en las áreas más promisorias de la recién descubierta provincia petrolera. Empleados yanquis haciéndose pasar por británicos y agentes británicos haciéndose pasar por yanquis son actores de la contienda. Las representaciones diplomáticas de los Estados Unidos y de Inglaterra activan sus gestiones ante el dictador Gómez tratando de lograr beneficios para las empresas de sus respectivos países. Pleitos entre las empresas, demandas y contrademandas, juicios de la nación contra las empresas y de las empresas contra la nación. Nuevas leyes petroleras y consecutivas derogaciones signan el período". (24)

[V]

En el esquema de la economía venezolana durante las primeras décadas de la explotación petrolera, se introduce una drástica ley de desarrollo desigual. El petróleo va a crecer con ímpetu y de manera unilateral, sin que ello ocasione movimientos de la misma magnitud en otras ramas de la economía nacional. Los coeficientes de inversión van a elevarse notablemente por encima de los niveles que prevalecieron en el ciclo agrario, pero ello es esencialmente una inversión petrolera de capital extranjero, sin que en las restantes ramas de la economía haya un crecimiento inversor de tanta espectacularidad:

Coefficientes de inversión de las dos esferas fundamentales
de la economía venezolana - (24)

	<u>sector petrolero</u>	<u>sector no petrolero</u>
1925	63,0	11,7
1926	62,6	22,2
1927	76,4	28,9
1928	32,3	15,2
1929	37,1	23,3
1930	19,3	14,4
1931	9,5	10,8
1932	8,6	6,1
1933	10,6	8,3
1934	3,4	5,3
1935	4,5	1,9
1936	6,6	5,3

En los años de su aparición y consolidación, el petróleo suscita inversiones que llegan a los 1.808,9 millones de bolívares; durante el mismo período, todos los sectores ajenos al petróleo registraron una inversión global equivalente a 1.634,2 millones de bolívares (25). Por otra parte, el elevado nivel técnico de la industria petrolera, de una alta mecanización, le confiere igualmente una alta productividad junto a una superior composición orgánica del capital, delegando como elemento secundario al factor mano de obra. Las crecientes disparidades estructurales en esta materia hacen surgir una diferenciación entre una economía autóctona de técnica rudimentaria y una economía petrolera de considerable nivel tecnológico.

Se ha afirmado que Venezuela es uno de los casos de crecimiento "hacia afuera" más espectaculares de la historia del comercio mundial a partir de la explotación petrolífera. El vigor mostrado iba a ser tan importante, que ya en 1940, el comercio exterior venezolano era tres veces más alto que en 1920:

Indicces comparativos del comercio mundial y del comercio exterior
venezolano (26)

<u>comercio mundial</u>		<u>comercio venezolano</u>	
1920	100	1920	100
1925	110	1925	87
1930	123	1930	246
1935	151	1933	174
1940	191	1935	213
1945	223	1940	284

Si bien es cierto que en los países subdesarrollados donde hay inversiones extranjeras, éstas ocasionan procesos de crecimiento simple, las verificadas en petróleo constituyen un singular impulso hacia un tipo de crecimiento abierto que se concreta en el mercado internacional mediante las exportaciones. En este sentido, Venezuela perteneció al escaso grupo de países en que las exportaciones superan al ingreso nacional. La explicación deviene sencilla: el petróleo ha sido capaz de obtener mercados seguros y expansivos; y ello explica también la transformación de los países productores de petróleo en potencias financieras, aunque las cuantiosas reservas de oro y divisas no sean producto de un desarrollo nacional divorificado. La consecuencia es la extrema dependencia del país con respecto al petróleo y las subsiguientes graves deformaciones que una relación de este tipo introduce en el interior de la estructura económica y social.

Más aún, esa dependencia tiene, en el caso venezolano, un signo concreto y específico. A partir de la primera guerra mundial, el capital norteamericano va a sustituir rápidamente al capital de procedencia anglo-holandesa. La explotación petrolera genera una pugna entre aquéllos, tensión que es resuelta a favor de los monopolios norteamericanos después de los acuerdos petroleros que dan origen al Cartel internacional. Las inversiones norteamericanas pasan de 3 millones de dólares en 1912, a 247.238.000 en 1938, mientras que las de capital anglo-holandés, en el mismo período, van de 41.350.000 a 125.000.000, aproximadamente (mill.de dol.) Ya para 1956, el conjunto de la producción petrolera aparecía controlado en un 68% por las empresas norteamericanas y en un 32% por las empresas angloholandesas. La distribución territorial de las concesiones petroleras presentaba el hecho de que sobre un total de 6.292.696 hectáreas, correspondían a los monopolios norteamericanos 4.957.700 ha., el 80%, y 1.334.996, el 20%, a las empresas de capital angloholandés (4). Progresivamente, se constata una tendencia del mercado exterior venezolano, cual es la de su limitación al área de los Estados Unidos y luego su casi absoluta dependencia del mercado de ese país.

Unos datos pueden ser ilustrativos. En conjunto, para 1953, la exportación a los Estados Unidos por concepto de petróleo representaba el 44,1% del valor total; la correspondiente a café el 36,2%, la de cacao el 74,5% y la de hierro el 99,7%. En el mismo sentido, en dicho año las importaciones provenientes de USA equivalían al 57,2% del total (25). Unas relaciones de dependencia que se han visto fortalecidas por los tra-

-tados comerciales de reciprocidad -felizmente denunciados en tiempos recientes- firmados entre Estados Unidos y Venezuela y que han impuesto a ésta la obligación de importar los excedentes de todo cuanto produce aquí. (29)

La evolución de la composición de las exportaciones venezolanas acusa el fenómeno de todos conocido: el paso de una economía agropecuaria a una economía minero-extractiva. En 1913, el café y el cacao representaban el 73,2% del valor de las exportaciones; el balatá, sarrapia y ganado vacuno totalizaban el 11%. En 1921, el café y el cacao predominaban con un 77%, y el petróleo comenzaba a participar con un 3,4%. En 1925 el café había descendido al 43%, y el petróleo había aumentado al 12%. En 1935, café y cacao llegaban al 11,1%, y las exportaciones petroleras representaban el 81,3%. En 1938, las exportaciones café-cacao apenas equivalían al 5,2%, en tanto que las del petróleo totalizaban el 87,7%. En 1945, la relación era de 4,3% y 92%, respectivamente; y en 1951, de 2,2% y 96,4%, respectivamente (30). Gráficamente, la evolución mostraba una gran rapidez: en sólo diez años el cambio tuvo lugar:

Evolución de la composición de las exportaciones venezolanas - (31)

Décadas	Productos de exportación (%)			
	café-cacao	petróleo y der.	hierro	otros
1910	73			22
1920	92	2		6
1930	15	83		2
1940	4	94		2
1950	3	96		1
1960	2	90	6	2

Desde un punto de vista cualitativo, la inversión radical de estas relaciones no modificaba uno de los rasgos estructurales del comercio exterior venezolano: su dependencia de un solo producto de exportación. A ello hay que agregar que, a diferencia de los productos agrícolas, la producción petrolera y de mineral de hierro presenta riesgos de agotamiento en el sentido de que la duración de la capacidad de exportación está en directa relación con la tasa de producción, de tal manera que la aceleración de ésta última impulsa la liquidación del potencial exportable. Por otra parte, la producción agrícola era ejercida por elementos nacionales; la petrolera ha estado aprovechada sustancialmente por elementos extranjeros: buena parte del valor exportado ha quedado sin regresar al pa-

La situación de dependencia estructural, interna y externa, del país con respecto a la actividad petrolera es puesta de manifiesto por el profesor F. Mieres con cifras representativas del quinquenio 1958-1963. Durante este período (con variantes menores, los datos han sido similares para otros lapsos de tiempo): 1) La producción de petróleo cubría más de las cuatro quintas partes de la producción de bienes materiales obtenidos por empresas extranjeras en Venezuela. El petróleo absorbía una proporción aún mayor de todas las inversiones foráneas en el país; 2) El sector capitalista extranjero se presentaba como el sector fundamental de la estructura económica venezolana, produciendo casi dos tercios de los bienes físicos creados en el país, es decir, el doble que todos los sectores nacionales juntos, creando a la vez casi el 40% del producto territorial bruto; 3) El producto petrolero por sí solo representaba el 53% del producto territorial material y más del 90% de las exportaciones; no obstante, la contribución del petróleo al ingreso nacional era bastante menor, situándose en torno a un 20%; el capital existente en esta rama era el 13% del capital territorial en el país; la relación producto-capital era la mayor -superior a 1- y equivalía a dos veces y media la relación en los sectores nacionales; el petróleo ocupaba, por el contrario, sólo un 1,3% de la población económicamente activa del país, de aquí que su densidad de capital era 10 veces superior al promedio de los sectores nacionales. La discrepancia llegaba al máximo en materia de productividad del trabajo: la del petróleo equivalía a 28 veces la productividad por hombre en los sectores nacionales (32).

En realidad, la Venezuela petrolera sufrirá de una desintegración visible en sus relaciones con el exterior: las exportaciones se divorciarán abruptamente del ingreso internacional. Las compañías internacionales del petróleo van a realizar todo el ciclo productivo y ellas mismas asumirán, en virtud de su integración vertical, la colocación y distribución del producto en el mercado exterior, de manera que una porción sustancial de la plusvalía petrolera permanece fuera y sólo queda en el país la que toma el Estado mediante los impuestos asignados a la explotación de los hidrocarburos (33). El café dejaba de ser el regulador de la balanza de pagos; al contrario, los fondos líquidos para la inversión y el consumo procederán esencialmente de la riqueza petrolera. De igual manera, las importaciones crecerán rápidamente y parte importante de los recursos petroleros serán destinados a financiarlas, transfiriendo aquellos capitales por mercancías de uso corriente.

Puede afirmarse que hasta 1927, la industria petrolera suministró al país más valores que los que ella misma sustruía por medio de las utilidades y amortizaciones. Pero a partir de dicho año, las proporciones se invierten ostensiblemente: los beneficios netos y la amortización van a exceder ampliamente a las reinversiones. En otros términos, la industria petrolera se autofinancia sobradamente desde 1927. La tasa de ganancia jamás bajaría del 10% y con frecuencia fluctuaría entre el 30 y el 40 por ciento. Ello nos puede dar una idea de lo lucrativo del negocio petrolero. A ello habría que agregar la actitud sumisa del Estado venezolano, que participó en forma irrisoria en los niveles de beneficio y que, por lo menos hasta la década de los 40, no formula una política petrolera de sentido nacional y conservacionista. En materia de beneficios, D.A. Rangel ha estimado que, entre 1925 y 1940, las compañías establecidas en Venezuela percibieron utilidades por 4.832 millones de bolívares, mientras que los impuestos y salarios pagados por ellas alcanzaron la suma de 2.195 millones de bolívares, es decir, menos de la mitad de las utilidades percibidas. (34) Más aún, cifras publicadas en 1963 señalaban rendimientos considerables:

Inversiones extranjeras en Venezuela y sus rendimientos - (35)
(millones de bolívares)

Sector	Inversión neta	Utilidad	Rendimiento %
Petróleo	8.285	3.129	38
Industria	496	91	18
Minería	654	79	12
Comercio	518	55	11
Bancos	139	5	4
Seguros	66	4	6
Servicios	73	3	4
Construcción	100	7	7

2) Petróleo y Estructura Social.

(I)

En un libro de entrevistas y reportajes sobre la realidad venezolana más reciente, el periodista Juan Manuel Polo resumía uno de los tantos casos de quiebra del orden agrario con el advenimiento del petróleo en Venezuela. Refiriéndose al Estado Trujillo, anotaba,

"El algodón fue lo primero que se cosechó en 'la provincia de los cuicas'. Y de ahí vinieron los tejidos y telares en su época inicial. Después se vivió del cacao y tanta debió de ser su calidad y de importantes sus cosechas, que la riqueza y el prestigio que adquirió la ciudad de Trujillo fue acicate para que el pirata Gromont se atreviera a saquearla. Tras el cacao vino el café. Y más riqueza. Hasta que el deterioro de la agricultura -producción variada de otros productos de buena calidad para el consumo y la exportación- llegó con el petróleo. Los campesinos se trasladaron para emplear sus brazos. Y hubo pueblos que casi se morían, no produciendo ni para subsistir" (4).

En este sentido, se ha dicho con acierto que "Las contradicciones entre aquel punto focal que representaba el petróleo y la periferia nacional tenían que resolverse en una disgregación lenta de los modos precapitalistas de la Venezuela anterior a la llegada de las compañías" (4). Disgregación que, en el caso venezolano, se iba a traducir en una decadencia agrícola, en un proceso que se extiende entre 1930 y 1955. La participación de la agricultura en el producto disminuirá ostensiblemente:

Proporción de la agricultura en el Producto territorial - (3) %

1920	35,0
1925	24,6
1930	21,5
1935	19,8
1950	7,9

En buena medida, se trataba de un fenómeno de descapitalización, en el sentido de que los capitales invertidos en la actividad agrícola van a crecer a un ritmo mucho menor que el experimentado en las áreas urbanas,

y es que además aquella transfirió buena parte de sus excedentes hacia las ciudades, donde los costos de oportunidad se presentan ahora más atractivos que en el campo. En otros términos, la tasa de ganancias de la agricultura se colocará, por el impacto petrolero, por debajo de la tasa media de la economía en su conjunto. El resultado sería el abandono de muchas áreas agrícolas, abandono ya definitivo en muchas partes pese a recuperaciones relativas en años posteriores.

Todavía más, cifras del sector agrario para el año de 1959 reflejaban una diacronía ya estructural. En efecto, la Memoria del Banco Central de Venezuela correspondiente a ese año señalaba un Producto territorial bruto (PTB) de 26.066 millones de bolívares, dentro del cual el sector agrícola representaba apenas el 6,4% (1.640 millones de bolívares). Con tan precaria relación, el sector agrícola acogía el 30% de la población activa total, correspondiendo a esa población sólo el 8,6% de la remuneración total del trabajo, debiendo aclararse además que ese 8,6% estaba sustancialmente formado por remuneración del trabajo en el sector agrícola capitalista que se había venido desarrollando en las zonas centrales del país (4).

En este sentido, Salvador de la Plaza, al hablar de las repercusiones del petróleo sobre la estructura socio-económica tradicional, afirmaba que "... la pervivencia de la apropiación latifundista de la tierra y del sistema de grandes plantaciones al condenar a la mayoría de la población a vivir en condiciones precarias de existencia y hacer depender los ingresos nacionales de los precios en el mercado mundial de los productos de exportación, obstaculizaron la acumulación de capital nacional y la adecuación de condiciones indispensables para que fueran creadas industrias y en general se iniciara e incrementara el desarrollo de una economía capitalista". Una situación que va a ser modificada con el inicio de la explotación petrolera a partir de 1917: para de la Plaza, desde entonces va a comenzar a darse en Venezuela un fenómeno de coexistencia entre una atrasada estructura semifeudal y una capitalista, altamente tecnificada, controlada por capital extranjero y desvinculada de la economía nacional (5).

Se habría producido, pues, una importante incidencia en el medio tradicional, y ello porque las compañías petroleras -para sus operaciones de exploración y perforación de pozos, construcción de instalaciones, etc.- van a contratar mano de obra que es suplida principalmente por el campo venezolano. A pesar de ser bajos los salarios que dichas

compañías pagaban, se comprende que -en el contexto de una sociedad de las características que se han descrito- para aquellos campesinos las pagas pareciesen enormes y las expectativas creadas aumentasen día a día. Ello dió origen a que familias enteras emigrasen hacia los campos petroleros, surgiendo pueblos e incluso ciudades al amparo de la actividad de circulación de salarios, en niveles desconocidos hasta entonces. La emigración de la mano de obra, y su absorción en parte por la industria petrolera y sectores conexos -mano de obra que era la fuente de la renta de los latifundistas-, produjo un deterioro de la producción agropecuaria: "A medida que los grandes propietarios de tierra, al no disponer de mano de obra esclavizada, fueron abandonando las haciendas y convirtiéndose en comerciantes importadores, contratistas de obras públicas, banqueros, especuladores al amparo de la distribución que entre ellos y la alta burocracia a través del Presupuesto Nacional, se realizaba de los ingresos provenientes del petróleo, y que el éxodo campesino engendraba en las ciudades una población depauperada e improductiva que encontraba ocupación en las obras públicas, en esa misma medida los campos quedaban despoblados y las tierras ociosas" (6).

En forma paralela a esta crisis del medio agrario, los fenómenos de concentración de la propiedad de la tierra subsisten e incluso, en algunos casos, se incrementan. A este respecto, señala Brito Figueroa que "El desarrollo de las explotaciones petroleras no liquida sino que fortalece el latifundio o propiedad territorial agraria en la misma situación que existe en las últimas décadas del siglo XIX. Las empresas petroleras, al dominar como personas jurídicas sobre extensas áreas territoriales, devienen de hecho el primer latifundista del país, y aunque el concepto no es totalmente exacto, lo cierto es que en realidad las compañías controlan grandes extensiones de las mejores tierras de cultivo y producción agrícola, transformadas desde entonces en zonas de explotación y reservas petrolíferas". Al proceso de dominación petrolera tan poco escaparían las tierras comunales indígenas que todavía subsistían, ni tampoco las tierras de dominio público (terrenos nacionales, municipales y baldíos en general), obtenidas por intermediarios y luego cedidas a las compañías mediante jugosas comisiones, hasta el punto que "Este proceso de despojo del ager publicus superó con creces -no es posible establecer una comparación- la usurpación y ocupación, legalizada por vía de composición, que se comprueba en Venezuela colonial en las últimas décadas del siglo XVIII" (7).

En efecto, los Censos Agropecuarios realizados en Venezuela a partir de 1937 han mostrado la realidad de la consolidación del latifundio después de la irrupción del petróleo en la vida nacional. Así, por ejemplo, el Censo de 1937 señalaba que el 75% de las tierras aptas para la agricultura, valoradas en Bs. 111.832.606, no estaba cultivado, y sólo un 25%, unas 729.974.000 hectáreas, con un valor de Bs. 473.491.394, se encontraba en situación de cultivo, en condiciones rudimentarias de técnica primitiva y sin inversión de capital. En los Estados Miranda, Aragua, Carabobo, Trujillo, Táchira y Distrito Federal, 2.341.902 hectáreas eran de propiedad particular, de las cuales 1.829.628 pertenecían solamente a 1.320 propietarios de más de 150 hectáreas, es decir, que el 78% de la tierra estaba controlada en la relación de un propietario de más de 150 hectáreas por cada 1.000 habitantes. Las 512.274 hectáreas restantes estaban controladas por 34.570 medianos y pequeños propietarios. Para el año de 1941, si excluimos las tierras propiedad de la Nación, 59.014 propietarios poseían 3.437.648 hectáreas, con la siguiente distribución: 2.568 latifundistas, el 4,4% del total de propietarios, concentraban 2.705.388 hectáreas, el 78,8% de las tierras incorporadas al dominio privado; 56.446 medianos y pequeños propietarios, el 95,4% del total, poseían apenas 731.795 hectáreas, el 21,3% de las tierras ocupadas (8).

Pero simultáneamente comenzaba un proceso de inversión de capitales en algunos sectores de la producción agropecuaria y en específicas zonas del país. Es cierto que en la generalidad de los países subdesarrollados, la penetración del capitalismo internacional suele quedar circunscrito a ámbitos muy reducidos, limitado sólo a aquellos sectores claves de atracción de la inversión extranjera; esto es, no suele haber una irradiación hacia la periferia del país donde llega, en la que las formas precapitalistas continúan subsistiendo, sólo en cierto sentido desarticuladas del resto de la economía. Sin embargo, en el caso Venezolano y, en general, en países productores de petróleo, puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido, que ciertas variables puedan modificar esta tendencia antes señalada y difundir con gran vigor el modo de producción capitalista. Cuando las inversiones son tan cuantiosas, como en el caso del petróleo, se va haciendo progresivamente difícil la persistencia de formas arcaicas: los cambios que se generan en el sistema económico son tan radicales, que poco a poco se va haciendo problemática la existencia de las realidades tradicionales y cabe la posibilidad de que éstas lle-

- para constituirse en excepcionalidad.

En Venezuela se va a manifestar una gestación capitalista interna capaz de proyectarse hacia el campo, hacia el medio agrario. En un principio, la agricultura venezolana sufrió los embates desarticuladores de la industria petrolera, pero después, ante las nuevas condiciones creadas por ella misma, se verificó un reacomodamiento de la situación sobre todo a partir de la década de los años 40. Son los años en que aparecen los primeros núcleos capitalistas de la ganadería en tierras del Zulia y de Carora, paralelos al establecimiento de granjas avícolas y hortícolas, regidas con criterios modernos de producción y organización. Durante la década de 1950 se registrará un reflujo de capital hacia el agro, reflujo que, aunque menor que el registrado en comercio y construcción, representará sumas considerables y hasta entonces desconocidas.

Serán inversiones propiciadas esencialmente por el Estado mediante créditos y rescate de tierras, política sanitaria de erradicación de enfermedades como el paludismo, construcción de una red vial, establecimiento de silos para el almacenamiento de granos, sistemas de riego de tierras, etc. Ya para 1950 hay que registrar una próspera ganadería en el Estado Zulia, y una agricultura floreciente en el Estado Portuguesa. Ello no obsta para decir que se trata de un desarrollo desigual, tanto en regiones como en productos cultivados. Algunos Estados ven declinar su importancia agrícola (Sucre), mientras en otros no llega el esfuerzo inversor (Falcón, Monagas, etc.). En cambio, en las regiones donde arraiga el estilo capitalista, las viejas formas de la agricultura de subsistencia, como el conuco, tienden a desaparecer. Pero incluso, aún en aquellas regiones que más progresan va a subsistir una periferia (subregional) en régimen precapitalista.

Por otra parte, el surgimiento de un capitalismo agrario no modificará sustancialmente la estructura de la propiedad de la tierra. Más aún, se darán muchos casos en que los pequeños y medianos productores serán en gran medida sacrificados a favor de los grandes productores, sobre todo en cultivos como el algodón y el tabaco (9). Así, se va en vías de configurar un marco de gran propiedad en las explotaciones de agricultura capitalista, cuyo denominador común es un apreciable nivel de mecanización, lo cual implica pocas posibilidades de absorción de mano de obra rural. De ahí que la emigración de las zonas rurales hacia las ciudades no se vea interrumpida y continúe incluso en nuestros días, contribuyendo a engrosar los cinturones de miseria de las áreas urbanas y conformando

amplias capas de población marginal. Puede confirmarse en este sentido la afirmación del profesor Orlando Araujo: "... la incrustación del petróleo dentro del esquema de una economía atrasada provoca el surgimiento de nuevas relaciones económicas y altera el desenvolvimiento crítico de aquel atraso. Mas lo importante ... es que no resuelve la crisis sino que la margina y la pospone". (10)

(II)

Ignacio Sotelo ha puesto de relieve cómo entre 1270 y 1930 se configura la fisonomía de América Latina en sus rasgos más fundamentales, como consecuencia de su integración en el sistema del capitalismo industrial. En aquél lapso quedaba claro que Latinoamérica reunía las mejores condiciones para tal integración: su posición geográfica -no lejos del Atlántico Norte, auténtico mare nostrum del mundo industrial-; su temprana europeización con la conquista ibérica -factor cultural que le daba cierta ventaja en relación a Asia y África-; sus recursos naturales -posibilidades para producir en abundancia los alimentos, minerales y combustibles precisados por los países industriales-; en síntesis, se trataba de la incorporación a un sistema internacional de división del trabajo que ya aparecía como una de las características esenciales de la economía mundial (11).

Pero al mismo tiempo, el final de aquél lapso -la crisis económica de 1929- iba a significar ciertamente un momento clave en la historia social y política contemporánea de la región, al traducirse en un duro golpe que de repente experimentaba el sistema internacional de división del trabajo. Precisamente, la crisis de los años treinta mostraba un aspecto significativo: su contenido didáctico, en el sentido de que la economía latinoamericana, modelada por los intereses del sector exportador, se revelaba incapaz de afrontar las terribles consecuencias de la conmoción del sistema dada su situación de dependencia (12). De otra parte, la crisis del 29 ponía en evidencia dos hechos esenciales: primero, su carácter estructural, y segundo, el desplazamiento ya confirmado de Inglaterra como potencia hegemónica en la región, apuntalándose de manera indiscutible la supremacía de los Estados Unidos.

Cara al interior lo fundamental era por sobre todo que la crisis repercutía directamente en la cuestión de la industrialización. La nece-

-sidad de reducir drásticamente las importaciones abrió a la industria nacional la posibilidad de llenar el vacío dejado por el producto extranjero: se iniciaba así, con enormes dificultades y en grado diferente según los países, el desarrollo industrial por sustitución de importaciones, que otros han llamado industrialización "no intencional" para describir un proceso de industrialización espontánea, originado por el decaimiento de la capacidad de importar. Mas aún, la segunda guerra mundial empalmaba con la crisis de los años treinta, contribuyendo al impulso de la industria latinoamericana al hacer coincidir la escasez de productos manufacturados -los países industriales en conflicto han volcado sus economías a las necesidades bélicas- con una demanda creciente de materias primas.

Sin embargo, lo significativo de esta evolución del proceso industrializador latinoamericano va a ser la circunstancia de que, una vez conculcidas las motivaciones exógenas de la coyuntura internacional, la década de los 60 ve presenciar -sobre todo en aquellos países que habían logrado imprimir una mayor intensidad al proceso- unos característicos síntomas de estancamiento. Tal vez el caso de mayor gravedad sea el de Argentina, con una progresiva situación de estrangulamiento interno y externo que está en la base de la inestabilidad política de dicho país en los años más recientes. El hecho era que, una vez agotado el proceso de sustitución de importaciones, se acumulan y afloran nuevamente las dificultades, en especial para consolidar una industria pesada capaz de impulsar autónomamente a los demás sectores. Por otra parte, se hacía evidente la dependencia de las empresas industriales con respecto al exterior en materia de equipo técnico y suministros. El control de buena parte de la industria latinoamericana por el capital extranjero reforzaba los obstáculos al generar, en las condiciones en que se le daba entrada a aquél, las conocidas manifestaciones de dependencia financiera y tecnológica. En concreto, la adopción de una tecnología extraña y sofisticada va a provocar una contracción del mercado de trabajo, aumentando la población que queda al margen del proceso productivo y comprimiendo consiguientemente las posibilidades de ampliación del mercado interno. Y si agregamos a ello la desigual distribución del ingreso, nos vamos a encontrar con que sólo un pequeño segmento de la población es auténtica y realmente consumidor, con lo que se perdían las ventajas de la producción a gran escala (13).

Venezuela, en el contexto latinoamericano, puede ser considerada

como un caso singular en materia de industrialización, aunque como es obvio comparte con el resto de la región elementos comunes y parecidas características. Ya sabemos que la explotación del petróleo, como mercancía de alta significación en el comercio internacional, genera unos elevados ingresos para los países poseedores de yacimientos. El capital inversionista no deja de llevarse la parte del león, pero el saldo de la extracción de los hidrocarburos supera los niveles conocidos por los países subdesarrollados en cuestiones de ingreso. De ahí que las posibilidades industriales sean mucho más altas que en el resto de las naciones atrasadas.

En Venezuela, el desarrollo de un capitalismo industrial fue lento en las primeras décadas del siglo XX. Para 1912, el exiguo capital industrial existente estaba invertido en centros más artesanales que otra cosa: manufacturas ligeras, fábricas de cigarrillos, telares, etc. Pero las inversiones de capital extranjero (petróleo) van a modificar este contexto artesanal, introduciendo progresivamente las relaciones propias del capitalismo. Entre 1920 y 1936 comienza ya a percibirse una incipiente evolución de los centros artesanales hacia formas de pequeña y mediana industria, núcleos incipientes localizados en Caracas, Valencia, Maracay y Maracaibo. Va a ser a partir de la década de los 40 cuando, al calor de las medidas de protección arancelaria, se verán favorecidos importantes renglones de la industria ligera, especialmente en el sector textil y manufacturero. En este sentido, el papel jugado por el Estado venezolano puede calificarse de fundamental, como factor dinamizador en la transformación del taller artesanal manufacturero en fábrica capitalista.

Las preocupaciones sobre el desarrollo industrial van paralelas a la apertura del proceso político. Indudablemente que hay un impulso proveniente de un hecho ajeno a la dinámica interna de Venezuela: la segunda guerra mundial, hasta el punto de poder afirmarse que "el desarrollo de nuestra industria manufacturera como cambio de un sistema artesanal con base en el trabajo familiar fundamentalmente, a un sistema capitalista urbano, es un fenómeno de postguerra" (14). En efecto, las dificultades y trastornos del comercio en tiempo de guerra -que impedían el abastecimiento normal de productos importados- va a influir en el surgimiento y desarrollo de una conciencia industrialista puesta de manifiesto en la formación de una burguesía industrial de poder creciente, que, a pesar de su inicial debilidad, comenzó a constituir una fuerza social de intereses propios y diferenciados y que reclamó con el tiempo una mayor

beligerancia en los asuntos políticos (45).

En estas circunstancias, se va a intentar llevar a cabo un proceso de crecimiento "hacia dentro", contando para ello con el esencial impulso financiero del Estado mediante la Junta para el Fomento de la Producción Nacional, de 1944, y la Corporación Venezolana de Fomento en 1946. Si recurrimos a las cifras, se ha calculado que en el período 1925-1950, el ingreso urbano -aquel que se origina en actividades distintas a la agricultura- creció, de 475 millones de bolívares (1925), 882 millones (1931), 1.418 millones (1935), a 6.331 millones de bolívares en 1950. (46) Ello testimonia sin duda un avance de los niveles industriales. Pero las tendencias a la industrialización se manifiestan en sectores muy concretos y determinados: sectores de la construcción y manufacturero. A partir de 1950, dos factores estimulan el crecimiento de éste último: el aumento sustancial de los ingresos petroleros (mayor volumen de gasto público y mayor disponibilidad de divisas) y la reapertura del comercio internacional en términos de la normalidad de postguerra (47). Los índices de crecimiento lo demuestran con una gran velocidad:

Expansión de la actividad industrial: índice manufacturero de 1950 - Base año 1950 = 100 (48)

Alimentos	261
Bebidas	271
Tabaco	221
Textiles	444
Vestimenta	566
Artículos de cuero	227
Productos de papel	1403
Química	228
Neumáticos	567

Mientras tanto, entre 1953 y 1959, el producto industrial bruto se movía con variaciones estimadas entre un 10 y un 15 por ciento en su tasa interanual media, superior al nivel alcanzado por otros países de economía similar a la venezolana y sólo comparable al nivel que ha presentado el Brasil (49).

Sin embargo, tal evolución no quedaba libre de deformaciones, desigualdades y marcados contrastes. Entre éstos hay que destacar el desmesurado crecimiento del sector comercial y de servicios, que han llegado a participar en el producto territorial bruto con proporciones insólitas y

dismensuradas, superiores incluso a las del sector industrial. Ha sido y es un caso claro de derroche del excedente (20), que confirma la apreciación de que, en las sociedades subdesarrolladas, "cuanto más fuerte sea el ascenso de los ingresos derivados de la exportación de un producto primario, mayor y más extendida será la tendencia al derroche que proviene de esta fuente" (21). Implicada de lleno en la problemática del efecto demostración, la Venezuela petrolera va a estimular de muy diversas maneras este derroche de excedente: los casos de tendencia a la especulación con los bienes raíces, la colocación de recursos en hipotecas y principalmente, el voraz consumo de bienes suntuarios, hecho éste último que contribuye decisivamente a un hipercrecimiento de la actividad comercial. En la economía petrolera se dará el caso normal de que la tasa media de beneficio del comercio exceda en muchas ocasiones a la que impera en otras ramas de la actividad económica. Se trata de unas distorsiones que arrancan temprano. Así, por ejemplo, según el Censo de 1936, la tasa de beneficio del comercio era del 25%; la industria alcanzaba un 15,1% y los servicios un 13,0%. (22)

El resultado ha sido el favorecimiento, por el mecanismo del ingreso petrolero, de una estructura comercialista de importación la cual, en coyunturas de altos precios, adquiere una fuerza impresionante, contribuyendo a dar la imagen de una abundancia muchas veces superficial. De ahí que alguien haya hablado de "industrialización importadora" (23) para designar este proceso económico de crecimiento de la Venezuela petrolera. De otro lado, el proceso industrializador se ha visto acompañado de un afán de mecanización de singular magnitud. Se ha estimado que para 1936, la maquinaria instalada por la industria equivalía a 119 millones de bolígrafos; en 1953, dicha parte llegaba a 964 millones de bolígrafos (24). Pero la relación del considerable esfuerzo capitalizador no se ha correspondido con un aumento proporcional de empleo de la fuerza de trabajo disponible. Los sectores de mayor capitalización han mostrado en gran medida una condición estacionaria en cuanto a la absorción de mano de obra y, en algunos casos, regresiva a medida que se introducían los avances tecnológicos. En contraste, los sectores de más baja productividad son los que tradicionalmente han absorbido la mayor cantidad de mano de obra. El mantenimiento de esta relación productivo-empleadora conducirá a unos disparidades y desajustes muy graves entre sectores y subsectores. Por de pronto tendríamos que constatar la acumulación de un desempleo estructural.

Así, en 1958 las estadísticas fijaban en un 12% la cifra de desempleo en la población activa; en otras palabras, había alrededor de unas 250.000 personas sin trabajo. Para 1965, el desempleo se estimaba en un 14% y unos 350.000 desempleados, mientras que el desempleo en los centros urbanos se calculaba en un 17% (25). Según la Oficina de Coordinación y Planificación de la Nación (CORDIPLAN), la evolución en el período 1950-1962 había sido la siguiente:

Ocupación, desocupación y fuerza de trabajo - (24)

(miles de personas a fines de cada año)

Años	Ocupación	Desocupación	Fuerza de trabajo	Desocupación % de fuer. de trab.
1950	1.734	115	1.849	6,2
1951	1.766	140	1.906	7,3
1952	1.831	135	1.966	6,9
1953	1.874	157	2.031	7,7
1954	1.933	166	2.099	7,9
1955	1.966	205	2.171	9,4
1956	2.043	197	2.240	8,8
1957	2.113	198	2.311	8,6
1958	2.129	243	2.372	10,2
1959	2.172	261	2.433	10,7
1960	2.148	341	2.489	13,7
1961	2.217	349	2.566	13,6
1962	2.337	308	2.645	11,6

Las fuentes de ocupación presentaban la siguiente relación en prácticamente el mismo período: (24)

Sectores	-1951-		-1962-	
	U. de trabajo	%	U. de trabajo	%
Agricultura	789	45,1	774	34,5
Petróleo	43	2,4	43	1,9
Manufacturero	227	13,0	323	14,4
Construcción	96	5,5	117	5,2
Electricidad	6	0,3	29	1,3
Servicios	589	33,7	957	42,3
Subtotal	1750	93,3	2243	86,1
Desempleo	127	6,8	363	13,9
Total ...	1877	100,0	2606	100,6

De las anteriores cifras pueden desprenderse varias consideraciones y la observación de distintas tendencias:

a) La industria petrolera venezolana -de gran mecanización y alta tecnol

-logía- ha utilizado un bajísimo porcentaje de mano de obra y en este sentido su capacidad de absorción ha sido mínima.

b) Los datos disponibles indican, para los períodos señalados, que al incrementarse la fuerza de trabajo ha aumentado el desempleo, no obstante el poderoso ritmo de crecimiento económico del país.

c) Entre 1951 y 1962, el sector agrícola vio declinar su porcentaje de absorción de mano de obra en un 11 por ciento, aproximadamente.

d) Los sectores manufacturero y de servicios son los que presentaron mayor capacidad de absorción de mano de obra, pero en forma muy desigual: el sector servicios lo hizo a un ritmo considerable y evidentemente desproporcionado en relación al resto, con el agravante de que generalmente se trata de un trabajo improductivo y que no contribuye sustancialmente al desarrollo social y económico.

La cuestión se nos complica aún más si consideramos que un altísimo crecimiento demográfico y una tasa de mortalidad decreciente son factores que han confluído en que la pirámide poblacional venezolana presente una notable mayoría de población juvenil. El Censo de 1950 señalaba que el 42 por ciento de la población era menor de 14 años y el Censo de 1961 elevaba esa proporción al 45 por ciento; más aún, revelaba que el 54 por ciento era menor de 19 años, en tanto que sólo un 9,8% de venezolanos tenía más de 50 años. Ello determinaba obviamente que cada año enormes contingentes de personas se sumasen a las fuerzas laborales, en cantidades tales que la naturaleza de la economía del país se veía imposibilitada de dar satisfacción a tal demanda de empleo. De otra parte, ha existido el problema de la cualificación de la mano de obra. Para 1960, el 45 por ciento de los desempleados era trabajadores no calificados, y el 95 por ciento de los que buscaban ocupación por primera vez, carecían de profesión o conocimientos específicos. En contraste, había una oferta insatisfecha de empleo cualificado que fue suplida en gran medida por mano de obra extranjera (43). Lógicamente, el éxodo rural condicionaba la alta tasa de desempleo en las zonas urbanas, a la vez que se encontraba ligado a la naturaleza arcaica de la estructura agraria. Buena parte de la economía rural experimentaba una subocupación crónica, hecho que impulsaba la emigración a las ciudades haciendo en éstas el problema del desempleo todavía más agudo.

Simultáneamente, la Venezuela del petróleo presenciaba la problemática de los fenómenos de concentración de capital. Concentración manifiesta sobre todo en el sector de la industria de transformación, bajo

la forma de monopolios o de duopolios y que daba lugar a poderosos grupos de presión, cuya acción va a repercutir visiblemente en el ámbito del sistema político. Los grupos monopolistas, ligados íntimamente a sectores de la banca y estructuras de financiamiento en general, se iban a organizar en torno, por ejemplo, al grupo Mendoza, que controlará o participará en fábricas de cemento, papel, constructoras, cervcerías, financiadoras, urbanizadoras, seguros, importación, etc. Destacábase también el grupo Volmer-Zuloaga en el renglón de electricidad, licores, producción de azúcar, bancos, seguros, etc. En el mismo sentido, los grupos Velutini y Phelps, además de otros de segunda categoría. Su influencia llegaba incluso a los medios de comunicación social (29).

Pero los ingresos y las rentas del petróleo facilitaban igualmente la conversión del Estado venezolano en uno de los principales inversores del país, si no el principal en casi todas las empresas dedicadas al desarrollo de las infraestructuras, tales como el transporte, las comunicaciones, los servicios públicos y la energía; en una considerable cadena de instituciones crediticias -Corporación Venezolana de Fomento, Banco Agrícola y Pecuário, Banco Industrial, Banco Obrero, Banco de los Trabajadores, fondos para inversiones, organismos regionales de distinto tipo, etc.-; en la industria pesada -plantas siderúrgicas, complejos petroquímicos e hidráulicos-; en refinerías de azúcar, fábricas y organismos estatales de construcción, hoteles, minería y petróleo, ferrocarriles, líneas aéreas y marítimas de pasajeros, sistema telegráfico y telefónico, y un sinnúmero de actividades de diverso orden. Tanto es así que el desarrollo del Estado venezolano en los últimos años permite hablar de la configuración de un progresivo capitalismo de Estado.

El cambio en las relaciones entre Estado y economía se verificaba con sólo seguir la evolución de los ingresos y gastos públicos, cuya curva iba a experimentar un vertiginoso ascenso. El nivel de acumulación alcanzado va a cchar por tierra la idea del Estado liberal tradicional: se planteará la necesidad de un enérgico propósito de intervención estatal. Si algo iba a quedar claro era precisamente que el futuro sería de un Estado de gestión que tomaría parte en aspectos antes reservados a la empresa privada y asumiría funciones de reglamentación y planificación de la economía nacional. Antes de 1914, la maquinaria estatal venezolana se limitaba a ser garante de la acumulación mercantil del sector agrícola: estábamos en presencia de un Estado formalizado mediante el consenso -muchas veces roto y a menudo conflictivo- de los grupos domi

antes de la Venezuela agraria. Pero ya a partir de 1936, y sobre todo con los cambios políticos del trienio 1945-48, el sector público va a tomar en sus manos actividades económicas fundamentales, y lo que es más importante, va a crear y desarrollar muchas otras. Beneficiado de la riqueza fiscal del petróleo, el Estado venezolano se constituirá en la primera empresa del país.

La realidad es que el Estado se coloca a la cabeza de las entidades que en la Venezuela petrolera pueden amasar un excedente, hasta el punto que, tanto en épocas de prosperidad como de depresión, el fisco venezolano dispondrá de un coeficiente de ahorro mucho mayor que el de las esferas privadas de la economía. Baste señalar, por ejemplo, que cálculos para el lapso 1920-1950 sitúan a los ingresos ordinarios totales en 15.218 millones de bolívares, mientras que los gastos corrientes sumarían en el mismo período unos 10.636 millones de bolívares; el ahorro en consecuencia sería de unos 4.582 millones de bolívares, con un coeficiente del 30,1% (30). En este orden de ideas, el caso venezolano no encontraría parangón en ningún otro país de América Latina, donde los coeficientes de ahorro fiscal son mínimos e incluso nulos. Como es obvio, una situación de este tipo ha puesto en manos del Estado las palancas del crecimiento económico y puede afirmarse que Venezuela ha crecido como resultado de la capitalización del fisco y, por consiguiente, el intervencionismo estatal ha devenido inexorable. Su potencia económica ha obedecido a la naturaleza de sus relaciones con la industria petrolera y la economía interna ha sido, muchas veces, una función del volumen que a ella ha llegado del gasto público.

Así, el Estado va a poder ser factor amortiguador de los conflictos sociales, latentes o en activo, generados por el desarrollo del capitalismo en el país. Esa ha sido precisamente la esencia de la política económica de los distintos gobiernos democráticos en los últimos veinte años: se ha intentado llenar el vacío dejado por las desigualdades del proceso productivo. Pero si la afluencia masiva de capitales de la industria petrolera ha traído consigo un reforzamiento del rol y de los poderes del Estado venezolano, hay que destacar que ello ha consolidado igualmente el camino hacia la centralización política, hacia la unificación e institucionalización de un poder nacional como único elemento de referencia del sistema político.⁽⁵⁾ El Estado puede actuar así como el ente redistribuidor por excelencia del sistema económico mediante el voluminoso gasto público; pero estando como está, dotado de un gran poder de

intervención sobre la mayor parte de las actividades económicas de la nación, no hay que pensar como es obvio que haya sido y sea completamente independiente de los poderosos grupos económicos privados, los cuales ejercen frecuentemente considerables presiones sobre la orientación de las decisiones a tomar por los órganos integrantes del aparato estatal, cuestión que tendremos oportunidad de analizar en el siguiente capítulo.

(III)

La estructura demográfica de Venezuela a partir de 1936 va a reflejar los procesos de cambio observados en el período de entronización de la economía petrolera: por un lado, se acentuarán los fenómenos de movilidad social de la población, y por otro, disminuirá la significación de la población rural, cuya migración hacia los centros urbanos va a presentar una magnitud tal que alterará la estructura demográfica del país, rompiendo un esquema que parecía eterno e inclinando la relación campo-ciudad a favor de ésta última: la irrupción del petróleo someterá a las economías agrícolas a un drenaje constante de mano de obra. Comenzaba el éxodo rural.

Se ha observado que la población, entre 1920 y 1926, registraba un aumento de 614.926 personas; de 1926 a 1936, un aumento de 464.281; entre 1936 y 1941, uno de 459.121 personas; y en el período 1951-1961, el incremento era ya de 2.489.162 personas; en otras palabras, tenía ya lugar el comienzo de un ritmo de crecimiento auténticamente geométrico. Entre 1873 y 1936, la población venezolana había necesitado 63 años para duplicarse; entre 1941-1951 y 1961, había necesitado solamente unos 20 años para volver a duplicarse (34).

El cambio en la velocidad de crecimiento, de un nivel de estancamiento a uno de alta tasa de expansión, está en relación con la disminución de la alta tasa de mortalidad como resultado de la acción del Estado, por vez primera, en materia sanitaria. En contraste, la tasa de natalidad se mantiene e incluso crece, lo que ocasiona un alto crecimiento vegetativo. Los datos son ilustrativos. La mortalidad general disminuyó, durante la década 1941-1951, en un 9 por ciento; la natalidad presentó un incremento del 94 por ciento. La tasa de incremento natural de la población asciende de 1,18% en 1938, a 2,26% en 1945 y a 4,31% en 1951. De

igual manera, se observaba un aumento de la esperanza media de vida del venezolano, de 30 años en las primeras décadas del siglo, a 40,9 años en 1941 y 44 años en 1952 (33).

Contribuía poderosamente al incremento poblacional el factor constituido por las migraciones externas. Los datos hablan de que en 1941, el número de extranjeros residentes en el país ascendía a 33.711 personas; en 1950, a 194.000, aproximadamente; en 1957 a 468.365, y en 1959 a 406.913 personas. Los europeos formaban el grupo más numeroso, seguido de los latinoamericanos y los norteamericanos. Dentro de los europeos, los más numerosos eran los italianos, seguidos de los españoles, portugueses, ingleses y otros países. La mayoría de estos emigrantes se incorporaba a actividades de construcción, comercio, servicios e industrias manufactureras (34).

En conjunto, para 1961, los patrones de distribución y concentración regional de la población seguían mostrando, en líneas generales, una cierta continuidad con el pasado. En este sentido, no cabe dudar que, desde el punto de vista de la localización geográfica de la población, la actividad petrolera va a afianzar la filialción caribe de Venezuela. Y ello porque las cuencas petroleras más importantes van a encontrarse situadas en los bordes de aquel mar, o por lo menos a corta distancia del litoral, como ha sido el caso de las cuencas de las mesas orientales. De ahí que, en este aspecto, la localización de la producción petrolera haya colocado a Venezuela en una posición geoestratégica de primera importancia regional y mundial. La orientación caribe de la demografía venezolana quedaba reflejada en el siguiente cuadro estadístico:

Distribución porcentual de la población venezolana en el período
1936-1961 - (35)

<u>Dominio</u>	<u>Años</u>			
	1936	1941	1950	1961
Costa-montaña	79,67%	78,94%	78,12%	77,80%
Depresión llanera	17,81%	18,52%	19,14%	19,19%
Guayana	2,52%	2,54%	2,74%	2,92%
	100, %	100, %	100, %	100, %

+ 3.500.000 hab. + 3.800.000 + 5.000.000 + 7.500.000

Para el período señalado es visible un aumento considerable de la población, pero hay que hacer notar que, según los datos disponibles, dicho crecimiento no se verificó por igual en todas las regiones. En efecto, el crecimiento intercensal 1950-1961, del orden del 40,5%, no fue igual en todas las entidades federales. Nueve estados registraron un aumento superior: los casos del Distrito Federal (77,3%); Barinas (74,25%); Miranda (73,25%); Bolívar (67,75%); Portuguesa (66,75%); Aragua (65,9%); Zulia (64%); Anzoátegui (57,77%) y Carabobo (57%) (36).

Mientras que la intensa movilidad provoca cambios importantes en el status social de amplias capas de la población, la dinámica de las migraciones internas de la Venezuela petrolera contemplará varios polos de atracción de la población migrante. De los datos anteriores se observa, por ejemplo, que las zonas mineras y petroleras constituyen un primer punto de atracción: regiones como Zulia, Falcón, Anzoátegui, el norte del estado Falcón. Lo mismo sucede en aquellas zonas donde predominan las actividades industriales, comerciales y burocráticas: tal es el caso del Distrito Federal, Aragua, Carabobo e incluso el Zulia. En el mismo sentido, la migración se da también hacia áreas de desarrollo agropecuario moderno: casos de Portuguesa, Guárico, Barinas, además de Aragua y Carabobo. Puede afirmarse que el denominador común de las zonas de migración está constituido por la atracción de la ciudad sobre la población rural, fenómeno igualmente válido para la generalidad de América Latina durante lapsos de tiempo más o menos similares, aunque con motivaciones de distinto orden según países y regiones.

En este último sentido, para América Latina como totalidad se han constatado dos hechos: (37)

- a) Un rápido crecimiento de la población urbana: en 1925, más de las dos terceras partes de la población latinoamericana habitaba en localidades con menos de 2.000 habitantes; en 1970, más de la mitad de la población, el 54,4%, vive en centros urbanos que superan ese tope. Más aún, América Latina ha devenido, en relación con Asia y África, una región considerablemente urbanizada: para 1960, el 25% de los latinoamericanos vivía en ciudades de más de 20.000 habitantes, mientras en Asia lo hacía un 13% y en África sólo un 9%.
- b) Los países con mayor proporción de población urbana, son también los que tienen su población más concentrada en ciudades de más de 100.000 habitantes; observándose al mismo tiempo un alto grado de concentración de la población urbana en grandes metrópolis, las cuales centra-

lizan la casi totalidad de la actividad económica, política y cultural del país. En cambio, la población urbana que vive en núcleos de tamaño medio (de 20.000 a 100.000 habitantes) es de menor importancia relativa y de crecimiento más lento. El predominio absorbente de una gran ciudad, la "ciudad preeminente" (primate city), caracteriza a la mayor parte de los países latinoamericanos: Buenos Aires, Montevideo, Asunción, Santiago, Lima, México, La Habana, Caracas, constituyen todas ellas, además de la capital, los centros político-económicos de superioridad indiscutible, aglutinando un alto porcentaje de la población urbana del país respectivo.

Así, el crecimiento desmesurado de las grandes ciudades latinoamericanas se ha estudiado y designado con el concepto de superurbanización: "Superurbanización significa urbanización excesiva, exceso que se patentiza en relación con otras variables: desarrollo económico, ocupación del territorio, distribución de la población urbana. Atestigua una desproporción entre grado de industrialización e índice de urbanización, entre zonas altamente urbanizadas y vastísimas regiones prácticamente deshabitadas, entre el tamaño e importancia de la ciudad preeminente y los demás centros urbanos del país. Esta desproporción bien puede denominarse excesiva, al originar una serie de fenómenos que encajan dentro de una 'patología social' (38). Como conjunto de problemas, la superurbanización va a expresar la incapacidad de la ciudad para proporcionar ocupación, vivienda y servicios a una parte considerable y creciente de la población en ella establecida. Las consecuencias son la desocupación y el subempleo; la amplitud desmesurada del sector terciario; la escasez de servicios tales como vivienda, agua potable y transportes; pocas y deficientes instituciones educacionales y recreativas; deterioro progresivo del medio ambiente y expansión violenta de las zonas marginales (39).

En Venezuela, el acelerado proceso de urbanización es un fenómeno cuya tendencia comienza a partir de la década de los años 40 y que se realiza fundamentalmente a expensas de la población rural. Si bien es cierto que estamos en presencia de un proceso de desplazamiento que obedece, como en otros países, a un deseo de hallar mejores condiciones de vida, de mejores salarios y oportunidades, el contexto petrolero le confiere unas características y perfiles propios que lo diferencian de otros procesos similares. Por de pronto hay que hacer constar que la tasa de urbanización venezolana ha sido una de las más altas del continente americano: se ha calculado en un 29 por mil, mientras que la de países como México, Co

-lombia, y Argentina ha estado situada en un 17 por mil para el período 1945-1955 (46). El siguiente cuadro nos muestra la velocidad del desplazamiento:

Población urbana y rural según los Censos de 1936-1941-1950 y 1961 - (41)

Año	Total	Urbano	%	Rural	%
1936	3.364.347	1.168.039	34,7	2.196.308	65,3
1941	3.850.771	1.519.444	39,4	2.334.327	60,6
1950	5.034.838	2.709.344	53,8	2.325.494	46,2
1961	7.523.999	5.078.624	67,5	2.455.375	32,5

En este contexto, un fenómeno de macrocefalia demográfica comenzaba a ser observado en torno al área metropolitana de la ciudad de Caracas, cuya población registraba un crecimiento vertiginoso: en 1936 tenía unos 283.896 habitantes; en 1950, 495.064 hab.; en 1961, 786.000 habitantes y su área metropolitana concentraba nada menos que 1.347.000, población que ascendió en 1965 a 1.647.728 habitantes. (47) La cuestión era que casi la mitad de esta población va a integrar el infraproletariado urbano en la zona de los tristemente célebres ranchos. Por lo demás, las estadísticas mostraban que más de la mitad del contingente inmigratorio extranjero escogía la capital caraqueña como lugar de residencia.

Problemática específica presentarán los movimientos migratorios con destino a las zonas de explotación petrolera: nos referimos al complejo socio-económico de la "ciudad petróleo" (48), y en general, a la cuestión de los llamados "Estados petroleros" (49).

En efecto, estados como Anzoátegui, Monagas, Falcón y Zulia experimentarán la recepción de movimientos migratorios masivos al amparo de la explotación de petróleo en los mismos. En términos amplios, la puesta en movimiento por la industria petrolera de centenares de miles de personas será el factor primordial en la transformación de la situación demográfica existente en Venezuela antes de 1920. Todavía más, en el marco de los efectos que dichos movimientos van a tener sobre las regiones de llegada, uno de los principales es la destrucción del equilibrio demográfico establecido entre los distritos del interior del propio Estado, como resultado de -y agravado por- las migraciones interiores en el seno de la misma entidad federal. Por vía de ejemplo, el Estado Zulia, el estado petrolero por excelencia, además de quintuplicar su población entre 1920 y 1950, va a concentrar en tres ciudades -Maracaibo, Cabimas y

Lagunillas- más del 80 por ciento de su población total (45). De otra parte, el crecimiento numérico auténticamente excepcional de algunas regiones o de ciertas aglomeraciones va a dar lugar a las llamadas, por Fernand Marchand, villes-champignons (46), caracterizadas por la convivencia caótica de los pobladores inmigrantes provenientes mayoritariamente del medio rural.

El comienzo de la problemática socio-económica de la "ciudad petróleo" puede situarse hacia la segunda década del presente siglo, al amparo de los años del boom petrolero en Venezuela. Son los años en que aldeas como La Rosa, Cabimas, Lagunillas (Estado Zulia) -por citar sólo u nos ejemplos-, pasan a transformarse en aglomeraciones caóticas de nuevo signo. La "ciudad petróleo" surge y se desarrolla en estrecha conexión con la actividad del campo petrolero, como satélites del mismo, y en base a un reagrupamiento económico y social que ha sido estimado por el profesor Rodolfo Quintero de la siguiente manera: (47)

Posición de la ocupación	% de la población total
Exdueños de la tierra	3.0
Grandes comerciantes	10.0
Empleados públicos	10.0
Pecueños comerciantes	20.0
Artisanos	10.0
Trabajadores asalariados	10.0
Miembros de familia	7.0
Sin ocupación definida	30.0

Como vemos, en estas ciudades el nuevo sistema de estratificación y el fenómeno de culturas superpuestas no consiguen eliminar totalmente el patrón tradicional. La dinámica de cambio encuentra elementos de resistencia constituidos principalmente por los sectores existentes antes de la llegada de las compañías. En realidad, las "ciudades petróleo" parecerán más bien un subproducto social de las compañías petroleras extranjeras en territorio venezolano. Se trataría más acertadamente de "conglomeraciones parasitarias que la explotación petrolera engendra sin proponérselo" (48).

Si seguimos, por ejemplo, el caso de Cabimas, el Censo levantado a fines de 1953 registraba 1.244 establecimientos distribuidos en 78 manufactureros, 307 de servicios, 855 comerciales y 4 de transportes. La deformación de la actividad económica de la ciudad era evidente: del total de establecimientos, el noventa por ciento aproximadamente se dedi-

-caba al sector servicios; la carencia casi absoluta de industrias que no fuesen las petroleras y el predominio abrumador de actividades directamente no productivas, generaba, como describe expresivamente Rodolfo Quintero, "una ciudad de calles empetroladas, estrechas, interrumpidas por casas de madera llenas de moscas y malos olores, de niños desnudos que se bañan en charcas de agua sucia y aceite mineral. Calles de ambiente caótico, de las cuales se sale sorpresivamente para caer en una avenida amplia y plana, tendida entre grandes construcciones. Ciudad donde el lujo contrasta con la miseria, el hambre con la abundancia de alimentos; con mercados llenos de día y de noche, de ricos y de pobres, de criollos y de extranjeros, donde se compra y se mendiga, se roba o se pasa el tiempo simplemente" (49).

En fin, desde la óptica del puro crecimiento demográfico, no cabían dudas acerca de lo auténticamente vertiginoso del mismo. Los datos para algunos ejemplos de "ciudades petróleo" lo confirman: (en números redondos) (50)

Hombres	año de su fundación	Pob. en 1920	Pob. en 1950	Pob. en 1961
Maracaibo	1571	46.706	235.700	421.400
Cabimas	-	1.940	42.300	92.700
Lagunillas	-	982	24.400	54.200
La Concepción	-	3.709	33.000	170.000
Maturín	1760	-	25.000	54.300
Cantaura	1740	-	66.000	148.000

De igual manera, los porcentajes de aumento, considerado el período 1950-1961, acusan esta velocidad desconocida en la demografía urbana del pasado venezolano:

Porcentaje de aumento en diez años -

Nombre	% de aumento 1950-1961
Maracaibo	79
Cabimas	119
Lagunillas	123
La Concepción	414
Maturín	116
Cantaura	125

.....

(IV)

Considerada globalmente, la Venezuela del petróleo es una sociedad donde el modo de producción capitalista deviene dominante, aunque coexistan con él realidades socio-económicas distintas. En todo caso, queda claro que la formación socio-económica capitalista somete progresivamente a las otras a su dinámica estructural desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Lo que sucede es que el capitalismo en Venezuela adquiere peculiares perfiles, derivados de su particular conformación petrolera; por ende, las categorías y grupos sociales que surgen han de ser examinados tomando en cuenta dicha realidad. La estructura social estará marcada, si cabe, por estas particulares condiciones. (51)

A) La clase latifundista, cuyo núcleo original surgió en la época colonial, va a sufrir el impacto del proceso petrolero y, aunque subsistirá como grupo histórico, la fracción o fracciones de ella que no han sabido o podido adecuarse al cambio, entrarán en decadencia. En su lugar, aparecerán nuevos sectores latifundistas de agricultura moderna y mecanizada quienes, al contrario, podrán adaptarse y transformar las explotaciones. Dentro de los sectores en decadencia hay que señalar a los plantadores de café de la región andina, que había constituido la fracción más importante de la clase latifundista venezolana hasta las primeras décadas del presente siglo y que se vio en crisis a raíz de la quiebra económica del sistema latifundista de producción tradicional, el desarrollo de la economía petrolera y las repercusiones de la gran depresión de 1928-1933. Por lo demás, se trataba de sectores ligados a la vieja política y a formas de vida cada vez más en desuso (52).

En conjunto, la clase latifundista estaba representada, para el año de 1950, por 3.422 terratenientes, que en total poseían 17.403.120 hectáreas, esto es, el equivalente del 79% de la tierra cultivable y el 19% del territorio nacional (53). Pero el desarrollo de un capitalismo rural facilitaría sin duda, como hemos señalado, la transformación de núcleos de latifundistas en categorías propias de la burguesía agraria: terratenientes que, en los últimos años y sobre la base de créditos estatales y bancarios, pudieron modificar en sentido capitalista sus explotaciones o desarrollaron nuevos sectores productivos agropecuarios.

De otro lado, el campesinado venezolano está allí, hoy, aunque su significación social haya variado, cuestión que se comprende con lo ya observado referente a la progresiva disminución de la población rural en el conjunto total. Dicho descenso ha estado en íntima conexión con la estructura de la población económicamente activa: en 1926, el 57% de la población activa correspondía a labores agropecuarias; para 1941 había descendido al 51%, y al 35,3% en el año 1961 (54). La población rural recibía el impacto petrolero y sin duda fue sobre ella donde los efectos se sintieron con más intensidad. La fulminante puesta en marcha de considerables contingentes migratorios traía como resultado la disminución de la importancia cuantitativa de la población rural y, paralelamente, la formación de los primeros grupos del proletariado venezolano en las actividades petroleras y en los sectores flotantes ligados a los primeros núcleos de industrialización.

Tomando en cuenta esta evolución, es posible afirmar que la categoría socio-económica más numerosa del campesinado existente ha sido el semiproletariado rural -peones, jornaleros, conuqueros- que ha emigrado de modo permanente hacia los centros urbanos. Por otra parte, las transformaciones del medio agrario, verificadas con la incorporación de la riqueza territorial agraria a la influencia de la dinámica capitalista, hicieron surgir un proletariado rural localizado principalmente alrededor de los centrales azucareros y similares. En igual sentido, habría que registrar un campesinado medio, categoría formada por productores rurales de pequeñas y medianas parcelas de tierra, que tendía a incrementarse sobre todo en las zonas ligadas a los planes de colonización agraria, influidas algunas de éstas por contingentes de migración europea. La categoría de campesinos medios, que no han experimentado tendencias a la emigración, era calculada para 1937 en unos 10.392 productores; en 1950, unos 12.900 y en 1956, unos 29.172 productores agropecuarios. Los campesinos medios han podido ser definidos como una nueva pequeña burguesía rural en proceso de desarrollo (55).

B) El llamado infraproletariado urbano puede ser caracterizado desde la óptica del área de los ranchos en Caracas y ciudades importantes. Datos fiables señalaban que en los ranchos edificados a partir de 1956, el 43% de la población económicamente activa no trabajaba ni un día a la semana; el 33% lo hacía durante tres días semanales y solamente el 18% estaba en situación de ocupación permanente. En conjunto, sólo el 20% de esta masa

que habitaba en el área de ranchos estaba incorporada a actividades fabriles (54). En todo caso, los denominados sectores marginales se constituyeron como una población en situación de miseria permanente y de desocupación constante, marginados prácticamente de la vida social, económica y cultural.

Puede decirse que el proletariado venezolano es hijo del siglo XX, aunque sus orígenes se remontan a las últimas décadas del siglo XIX, "relacionados con la concentración de asalariados en la construcción de líneas ferroviarias y en las minas explotadas por capitalistas extranjeros, y, también, en menor grado en los talleres manufactureros -sobre todo textiles y cigarrillos- establecidos desde la octava década del siglo XIX" (55). Pero hay que observar que el proletariado venezolano se desarrolla, en sus comienzos, como una clase social nacional sin conexiones con una burguesía nacional de tipo industrial, y sí ligado a unas explotaciones petroleras conectadas con el capital financiero internacional. En un principio, sólo núcleos muy pequeños de mano de obra asalariada se encontrarán en los centros urbanos en función de una igualmente incipiente industria ligera.

Si durante los primeros años las compañías petroleras necesitaron mano de obra, especialmente no calificada, para la construcción de los complejos infraestructurales, pronto se va a observar que las condiciones intrínsecas de la industria petrolera -mecanización avanzada y automación- traerá como resultado la progresiva declinación de su capacidad de absorción de mano de obra, y la consecuencia será el paro forzoso en los campos petroleros como realidad permanente. Y precisamente el volumen de paro estará integrado esencialmente con mano de obra no calificada, una vez superado el período de explotación extensiva y de planes infraestructurales. Algunas cifras ilustran este aspecto. En 1943, el número de trabajadores petroleros ascendía a 55.170, pero a partir de esa fecha se registraba una disminución de los asalariados incorporados a ese sector: 36.898 en 1961 y 27.257 en 1962 (56). La disminución del proletariado petrolero era simultánea al predominio en el sector de los considerados como empleados y elementos técnicos. Por lo demás, la acusada combatividad sindical de los trabajadores petroleros confluye en la consecución de sustanciales reivindicaciones y ya en 1946 disfrutaban de un contrato colectivo. Hay que constatar que su ingreso crece rápidamente y por encima de las alzas del costo de la vida, lo que les permite pasar a un consumo que está muy por encima de la generalidad

de los asalariados del país. En este sentido, los trabajadores del petróleo devienen gradualmente una especie de aristocracia de la clase obrera venezolana: "Hay una disparidad en la mano de obra que convierte a los obreros del petróleo en auténticos aristócratas dentro de su clase" (5).

En conjunto, ha sido visible el crecimiento cuantitativo y cualitativo del proletariado venezolano: cálculos de 1965 permiten afirmar que representaba ya el 20 por ciento de la población económicamente activa. Dicha categoría abarcaría desde los obreros y empleados de la industria petrolera, del hierro y manufacturera; del transporte y la construcción; ensamblaje, electricidad, gas, servicios en general; obreros de centrales azucareros y centros agropecuarios modernos. Históricamente hablando, era a partir de 1921 cuando los antiguos "gremios" comenzaron a transformarse en instituciones de tipo sindical y ya en el período 1926-1935 participarían en las primeras luchas de carácter económico y reivindicativo. El proceso político posterior a 1936 posibilitaría la organización sindical del proletariado venezolano: las huelgas de 1937 y 1938, especialmente las de la industria petrolera, indican ya una toma de conciencia política en el marco de la consecución de un Estado democrático que garantizara el derecho de asociación sindical, cuestión que aparecía por primera vez en la Constitución de 1936 y en la Ley del Trabajo de 1938. En líneas generales, el sindicalismo en Venezuela hacía acto de presencia impulsado políticamente por concepciones derivadas en parte del radicalismo social-democrático, dirigidos por cuadros intelectuales de los sectores medios urbanos (6).

El desarrollo de la explotación del mineral de hierro era otro elemento que iba a contribuir a incrementar el proletariado venezolano, aunque el número de trabajadores incorporados a esa actividad haya sido relativamente escaso: 2.673 en 1954, 4.144 en 1958 y 4.022 para 1961. Se trataba aquí en todo caso de asalariados ya proletarizados por el desarrollo capitalista y de una mano de obra calificada con excepción de las labores previas y complementarias. Por otra parte, el proceso de industrialización de importantes sectores de la producción nacional impulsaba también la proletarianización de la masa laboral venezolana, en sectores industriales de ensamblaje de vehículos automotores, enlatados de alimentos, gaseosas, textiles, etc. La evolución de la relación artesano-obrero manufacturero quedaba reflejada en las siguientes cifras: para 1936, los artesanos y trabajadores a domicilio representaban el 79% de la mano de obra de la industria manufacturera y los obreros strictu

censu el 21%; en 1944, la proporción era de 69% y 32%, respectivamente; en 1952, 52% y 48%, respectivamente; en 1959, los artesanos y trabajadores a domicilio descendían al 37%, mientras que los obreros fabriles aumentaban al 63%; para 1960, la proporción era de 36% y 64%, respectivamente. En 1963, de 315.000 trabajadores ligados a las actividades manufactureras, el 72% correspondía a la mano de obra fabril y el 28% a los llamados artesanos y trabajadores independientes. Los trabajadores de la industria manufacturera representaban a su vez el 10% de la población económicamente activa y el 16% del proletariado nacional. Por otro lado, los trabajadores de la construcción pasaban a formar una de las categorías más numerosas del proletariado venezolano; provenientes mayoritariamente del infraproletariado urbano, han sido trabajadores no calificados incorporados esencialmente a obras públicas realizadas por el Estado. El crecimiento de conjunto de esta categoría era evidente: de 91.104 trabajadores en 1950, a 116.160 en 1955, y a 186.770 en 1959. También aumentaban significativamente los trabajadores dependientes de empresas de electricidad y agua; e igual sucedía con los trabajadores del transporte automotor: de 52.239 en 1950, a 75.159 en 1955, y a 85.607 en 1959. Pero el sector de comercio y servicios era el que absorbía la mayor cantidad de personas: para 1950, el sector comercio registraba 149.678 y los servicios 341.829 trabajadores; en 1959, 249.350 y 521.914, respectivamente. La hipertrofia de esta actividad era manifiesta (6).

C) En la Venezuela del siglo XIX y primeros años del presente pudo constatare la existencia de unas categorías intermedias entre los poseedores de la riqueza territorial y comercial y la masa de población campesina: eran los intelectuales e ideólogos -los "hombres de pluma y discurso" y de "verbo empalagoso"-, modestos funcionarios civiles, militares y eclesiásticos, comerciantes detallistas, etc. Se trataba de elementos de escaso peso cuantitativo en la estructura social de la Venezuela agraria. El desarrollo de la economía petrolera iba a facilitar, a la vez que la desaparición de algunas de estas categorías, el surgimiento y desarrollo de otras en condiciones de gran amplitud, en la medida en que se desarrollaban nuevos sectores de la producción que ampliaban el mercado de trabajo manual e intelectual, limitado hasta entonces a los ámbitos de la burocracia y de la política.

En efecto, la economía petrolera desencadenó por de pronto un alza de los ingresos de la población urbana. Los gastos públicos se orienta-

-ron en gran medida hacia las ciudades, cuya demanda de bienes y servicios comenzaba a crecer en forma ascendente. En una primera aproximación, los núcleos de estratos medios recibían un impulso con el crecimiento cada vez mayor de la burocracia gubernamental, la cual pasaba de 13.500 a 56.100 personas en el período 1920-1936 (64). En otras palabras, el Estado debía utilizar más técnicos y profesionales y el gasto fiscal proporcionaba así nuevas oportunidades a los recién egresados de las universidades. Los primeros núcleos industriales y las actividades comerciales principalmente, eran otros campos para la acción ascendente de los estratos medios, cuyo progreso social se instrumentaba mediante la constitución de entes gremiales y profesionales: colegios profesionales y organizaciones de empleados que surgirán sobre todo después de la muerte del general Gómez en 1935.

Dentro del ámbito de los estratos medios urbanos, la pequeña burguesía intelectual era sin duda la que presentaba una mayor homogeneidad grupal, con un nivel de concienciación suficiente como para identificarse más plenamente con las nuevas aspiraciones de reforma social y política en Venezuela, haciéndose vehículo difusor de las nuevas concepciones ideológicas que propugnaban un cambio en la situación. En este sentido, el movimiento estudiantil de 1928 viene a participar congruentemente de esta nueva dinámica social. Los estratos medios podían de esta manera constituirse en elementos directivos de la lucha contra el despotismo gomecista, abriéndose camino entre unas clases tradicionales comprometidas con el régimen y un proletariado todavía incipiente. Los estratos medios, en definitiva, tienden progresivamente a sentar las bases de un nuevo estilo político en el país, inspirándose en motivaciones ideológicas más avanzadas que las tradicionales doctrinas conservadora y liberal.

Era indudable que el desarrollo de los sectores medios, en su amplia gama de especializaciones socio-profesionales, se multiplicaba en la misma medida en que se producía la transferencia de poder de los elementos tradicionales dominantes -terratenientes latifundistas y burguesía comercial agraria- a los más modernos en sentido capitalista, esto es, la burguesía financiera, comercial-importadora e industrial nacional y el capital foráneo. Cálculos y estimaciones permiten afirmar que, para la cuarta década del siglo XX, la población económicamente activa ascendía a 1.240.628 personas, de las cuales podrían considerarse como sectores medios unas 183.297 personas; en otras palabras, el 14,7% del total (65).

b) Se ha repetido con insistencia que América Latina ve aparecer, durante el siglo XX, una burguesía autóctona -el caso de Argentina es el más citado- que ya es algo más que un grupo mercantil. Pero a diferencia de los países desarrollados, el surgimiento de la burguesía latinoamericana se realiza como epicentro de lo que acontece en el proceso de la economía mundial (léase crisis de 1928). Esta situación originaría condicionar la notoria debilidad del estamento burgués en la región, característica que la lleva a ser, en muchos casos, una especie de socio menor del capital extranjero (64).

En Venezuela el origen iba a ser un tanto distinto, y aunque la burguesía presentará características muy similares a las de otras naciones latinoamericanas, hay que hacer constar que la dinámica política y social del país le imprimirá una configuración peculiar. En realidad, la explotación petrolera, como en otros niveles, contribuyó poderosamente a acelerar el proceso de formación de la burguesía venezolana; más aún, en sus orígenes mediante la forma más veloz de acumulación de capital: el peculado. Se han puesto así de relieve los tres puntales básicos del desarrollo del estamento burgués en sus comienzos: la connivencia con el capital extranjero, el disfrute de prerrogativas amparadas por el Estado gomecista y el abierto saqueo al Tesoro público. En palabras de G. Carrera Damas, "Se creaban de esta manera las condiciones básicas para el desarrollo de la actividad económica de la burguesía nacional. En contraste con la lenta acumulación de capital que permitía la explotación comercial del campesino, el peculado en grande escala favorecido por el ingreso derivado de las concesiones petroleras y las negociaciones a que éstas dieron lugar, fungirán de acumulación primitiva de capital que permitirá extender y consolidar el poderío económico de la nueva clase. De esta suerte, el peculado se convertirá en fuerza económica de primerísimo orden, y nada exagerado resultaría considerarlo factor decisivo en el proceso de maduración de la burguesía nacional" (65).

Este enriquecimiento en términos originarios daba lugar a una burguesía burocrática y peculadora, cuyo capital era invertido principalmente en bienes inmuebles o depositado en instituciones bancarias, tanto nacionales como extranjeras. Pero el surgimiento de grupos pre-o-industriales en algunos centros urbanos implicaba también núcleos de burguesía productora de bienes de consumo o burguesía industrial nacional, sobre

todo a raíz de las necesidades de autoabastecimiento impuestas por la segunda guerra mundial. La burguesía industrial iba a tomar parte en la utilización de los mecanismos del poder político y de la renta petrolera para orientar una política de reformas económicas y sociales relacionadas con una mayor participación del Estado venezolano en la riqueza petrolera, la modificación de la estructura agraria en un sentido capitalista, la protección del desarrollo industrial y la intervención del Estado en la vida económica en general. En este sentido, la frase "sembrar el petróleo" venía a reflejar o sintetizar el programa ideológico del proceso de modernización de las estructuras económicas del país.

En forma sucesiva, se verificaba la constitución igualmente de grupos financieros nativos en términos monopolistas y ligados, por diferentes vías, al capital extranjero: "La imagen del viejo usurero-banquero del siglo XIX ha sido sustituida por la imagen del inversionista moderno que controla la banca, las compañías de seguros y reaseguros, domina sobre la industria importadora de productos semielaborados, controla la producción agropecuaria mecanizada y se lucra con los préstamos otorgados por el Estado, presiona ante las instituciones financieras del Estado para que sus empresas obtengan préstamos, que luego invierte en actividades no reproductivas, o a la vez, aumentando el interés, facilita a la mediana industria, que también aspira a controlar y a la que asfixia en el juego de la competencia regida por los monopolios" -dice F. Brito Figueroa con respecto al papel jugado por la burguesía financiera en el proceso económico del país. (66)

E) La configuración de una nueva estructura social mostraba a su vez unas radicales injusticias. En términos de distribución de la riqueza, cifras de 1960, por ejemplo, afirmaban que menos de la tercera parte de la población era perceptora de ingresos, lo cual quería decir que el 75 por ciento de los venezolanos dependían del ingreso del 25 por ciento restante. Las disparidades se presentaban profundas. El 45 por ciento de los perceptores recibía el 9 por ciento del ingreso, mientras que el 49 por ciento del ingreso se concentraba en el 12 por ciento de los perceptores. Al lado de estas desigualdades en la distribución personal de la riqueza, hallábamos amplios contrastes en la distribución regional entre áreas rurales y urbanas. Se observaba por ejemplo que en Caracas, donde se situaba el 17 por ciento de los perceptores, se percibía el 40 por ciento del ingreso, mientras que el otro 60 por ciento debía atomizarse

entre el 83 por ciento restante. En las áreas y poblaciones rurales inferiores a los 500 habitantes, en las que se localizaba el 38 por ciento de los perceptores, sólo tenían acceso al 9 por ciento del ingreso (67).

En términos de desarrollo cultural, adquiría perfil definido la relación entre el hombre venezolano y el petróleo. Para R. Quintero, la relación hombre-petróleo en Venezuela, desde el punto de vista de una consideración global, revelaría "la existencia de una cultura, conjunto de modalidades, efectos sociales y psicológicos definidos. Expresada en actividades, invenciones, instrumentos y factores no materiales como lengua, arte, ciencia. Mucho más que en descripciones de sucesos y cuadros estadísticos, manejados sin cesar por especialistas criollos y extranjeros" (68). El advenimiento de la cultura del petróleo, cultura de conquista según el estudio antropológico del autor citado, generaba un cambio en el sistema de valores prevaliente hasta ese momento y preparaba las condiciones para el surgimiento de un estado de alienación cultural, en especial por la vía de los medios de comunicación social -prensa, cine, radio y televisión- que alabarían y estimularían el seguimiento de modelos de vida propios de la nación norteamericana:

"Periódicos de Caracas, tomados al azar, contienen dos o tres páginas de noticias sobre asuntos financieros, políticos internacionales, sucesos cotidianos y deportes en su totalidad elaboradas con material informativo enviado desde Nueva York; no menos de dos crónicas sobre lo sucedido en el extranjero, elaboradas por autores norteamericanos; una página de tiras cómicas producidas y distribuidas por agentes publicitarios de Estados Unidos; alrededor de tres páginas de anuncios de juguetes norteamericanos; nunca faltan anunciantes de agencias de cadenas norteamericanas establecidas en el país que abarcan toda clase de artículos; más de tres páginas de anuncios de líneas aéreas norteamericanas y productos de la misma procedencia: cigarrillos, plumas, lapiceros, automóviles, máquinas de escribir, pastas para los dientes; una página de anuncios de productos nacionales elaborados por máquinas y según procesos (que se hacen constar) norteamericanos, o fabricados con materiales plásticos, metálicos o de otra sustancia del mismo origen; notas y comentarios cortos escritos por periodistas a 'la manera' de los columnistas norteamericanos"

(69)

3.- () La dinámica del proceso político: Transición, ruptura e involución (1928-1958).-

(I)

Para América Latina, la crisis económica de 1928-1930 arrastró consigo a más de una de las situaciones políticas imperantes. Y es que la depresión revelaba la fragilidad del orden mundial al que Latinoamérica había querido incorporarse. En efecto, la crisis creaba a la economía latinoamericana una serie de problemas que no podían resolverse con los instrumentos por entonces vigentes. Y aunque la segunda guerra mundial iba a corregir en parte las consecuencias negativas de la crisis, América Latina verá el comienzo de un costoso esfuerzo de adaptación: la entera economía, y con ella el equilibrio social y político, evolucionarán en una dirección distinta y que va a variar según sean las condiciones y las dimensiones de cada país.

Más aún, las consecuencias de la crisis económica eran diferentes según los sectores a considerar. El elemento común era la caída de los precios de los productos del sector primario, hecho paralelo al creciente deterioro de los términos de intercambio. Los efectos que cabía esperar estaban todos interrelacionados: una disminución brusca del poder de compra derivado de las exportaciones; la sustitución de importaciones adquiriría ahora una máxima relevancia; el Estado se veía forzado a gobernar de alguna manera el ritmo de la producción y de la exportación; el proteccionismo industrial y la diversificación productiva pasaban al primer plano de la política económica.

Sin duda que todas estas innovaciones significaban la ruina del liberalismo económico, sin que por supuesto se abandonaran las huellas de la etapa anterior y de todas sus servidumbres. En el mismo sentido, la guerra de 1939-1945 estimulaba los núcleos de nueva organización industrial, pero permanecían los rasgos estructurales de una economía subdesarrollada: insuficiencias de infraestructura, dependencia tecnológica, desigual distribución del ingreso, analfabetismo, penetración del capi-

tal extranjero en los sectores claves, etc. El sector primario permanecía muy poco tocado en sus bases económico-sociales: la economía agraria, mal dirigida y mal incorporada al mercado nacional, generaba la aparición de un sobrante humano que se volcaba a las ciudades en un número mucho mayor de lo que las nuevas estructuras industriales podían absorber. La creciente concentración urbana adquiría así las deformaciones de todas conocidas, planteando una nueva problemática, al parecer sin solución. Podría afirmarse que las fallas estructurales acumuladas desde el pasado eran de tal calibre que iban a producir el agotamiento de las posibilidades del proceso industrializador: las cosas se complicaban en vez de arreglarse. (4)

Lógicamente, la crisis del llamado orden neocolonial iba a tener consecuencias políticas de primera magnitud. A pesar de todo, si algo quedaba claro era que la política tradicional servía para muy poco y que eran necesarios unos nuevos planteamientos. En este sentido, tiene razón James D. Cochrane cuando afirma que "La característica dominante durante el siglo XX en Iberoamérica ha sido la presión constante hacia un cambio fundamental en lo social, en lo económico y en lo político" (5). La insistencia en el cambio por parte de los movimientos político-sociales del siglo XX, marcaría un contraste con el pensamiento político de la etapa anterior. Y es que aquél pensamiento, de origen predominantemente europeo, fue el monopolio de una pequeña élite que disfrutó del poder político y económico y de un status social privilegiado desde los mismos días de la Independencia. Dicho pensamiento defendía la situación o propugnaba cambios de escasa importancia en el plano político, económico o social. El positivismo comtiano venía a constituir lo más homogéneo de aquellas ideas, a la vez que lo más avanzado, al proponer una sociedad secular en el marco del progreso económico lineal, pero sin cambiar sus fundamentos estructurales y las relaciones de poder establecidas.

En los nuevos movimientos del siglo XX latinoamericano existen semejanzas considerables. Propugnaban el desarrollo y diversas reformas económicas; la intervención estatal; reformas sociales -lucha contra el analfabetismo, más educación, asistencia social-. Invocaban el apoyo de las masas y la modificación del sistema tradicional, al mismo tiempo que una participación más amplia del pueblo en la vida política nacional. En el aspecto económico, se mostraban nacionalistas -con un mayor o menor grado de antiimperialismo- y hacían llamados a la solidaridad e integración de los pueblos latinoamericanos. No obstante, existen también

numerosas diferencias entre estos movimientos político-sociales. Mientras que unos poseían una base teórica o filosófica bien desarrollada, otros se mostraban fundamentalmente pragmáticos. Se distinguían, de otra parte, según el hincapié puesto en la consecución de determinadas metas, y en los medios de conseguir los cambios ambicionados y en las características de la sociedad futura. Las diferencias había que situarlas en el marco de diversos factores, tales como el nivel de desarrollo social, económico y político alcanzado por el país que se trate; la variedad de actitudes, inclinaciones y valoraciones de los individuos que proporcionan el liderazgo intelectual y práctico de los distintos movimientos, aspecto éste último de enorme significación en el contexto de los países latinoamericanos.

En líneas generales, los nuevos movimientos reaccionarán contra las condiciones económicas imperantes, contra las condiciones sociales y las circunstancias políticas, propugnando, con diversos matices, un modelo de cambio político y social. Las influencias intelectuales eran muy heterogéneas y procedían de diversos frentes: el socialismo europeo y el marxismo (las repercusiones de la revolución rusa de 1917), el pensamiento liberal-radical de Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, el reformismo de Franklin D. Roosevelt -el New Deal-, la acción del laborismo británico; todo ello combinado por primera vez con análisis propios de la realidad latinoamericana.

Así, entre las dos guerras mundiales aparecía en Perú un partido de ideología muy peculiar, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). El aprismo, los apristas, liderizados por la figura ya legendaria de Víctor Raúl Haya de la Torre, formulaba un programa centrado en la necesidad de integrar al indio en la sociedad. Los apristas sostenían el imperativo de la unificación de América Latina como único medio de frenar al imperialismo y fortalecer la posición de aquélla. El desarrollo económico era la meta, lo mismo que la democracia en el proceso político. En forma simultánea, aparecían otros partidos de ideología afín al aprismo, aunque en muchos de ellos predominaría una peculiar concepción nacional: en Cuba, el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico); en Venezuela, Acción Democrática; en Costa Rica, Liberación Nacional; en Paraguay, el Partido Febrerista; en Haití, Mouvement Ouvrier et Paysan, y en Puerto Rico, el Partido Popular Democrático (3).

El modelo nacional-reformista (4) contó desde el principio con el apoyo de grandes masas populares, y esto fue una realidad en el caso de

las derivaciones populistas de Argentina -el peronismo- y Brasil -el getulismo- en las décadas de 1930, 1940 y 1950. Los ideales del reformismo nacionalista se centran en el desarrollo mediante la aplicación de una política "hacia dentro", en sustitución del llamado crecimiento "hacia afuera". El postulado de una planificación económica a corto y largo plazo era acompañado de la pretensión de modificar la distribución del ingreso nacional a fin de incrementar los ingresos de las capas medias urbanas, los sectores populares -trabajadores y campesinos-. El proyecto político implicaba el debilitamiento de las oligarquías tradicionales mediante la democratización de las instituciones, y la consiguiente constitución de un Estado nacional independiente con verdadero poder de decisión nacional (5). En muchos casos, el liderazgo de este amplio frente de clases -que incluía al llamado empresariado progresista- estaba ostentado por las clases medias de las áreas urbanas. (6)

No hay que olvidar que el siglo empieza con la revolución mexicana de 1910; según Carlos M. Rama, "seguramente el movimiento proletario más importante de América Latina en la primera mitad del siglo XX" (7). Desde esta perspectiva, a partir de la primera guerra mundial y de la revolución rusa de 1917, serán perceptibles las sucesivas modificaciones del clima cultural e ideológico. El Estado oligárquico pasa a ser cuestionado por el ascenso de las capas medias y de los trabajadores de las ciudades. En el plano puramente político, el ascenso de las primeras se traduce en una creciente exigencia de participación en el sistema de poder y en el Estado, mediante el ejercicio efectivo de la soberanía popular, y la universalidad, libertad y pureza del sufragio. La presión de las capas medias se constata en forma característica por el despliegue de tácticas reformistas y modificaciones parciales del sistema: la consecuencia más inmediata es la debilitación de los mecanismos de dominación tradicional, con lo que lógicamente la bipolarización entre liberales y conservadores entra en crisis. La aparición de la problemática de los derechos sociales se corresponderá con el fortalecimiento del Estado, que intenta canalizar de alguna manera las aspiraciones de los sectores medios, ampliando por ejemplo la oferta educacional y reafirmando su carácter laico en el marco de una política de secularización de las relaciones sociales en general. Y es importante señalar que en este nuevo clima ideológico, se le asigna un nuevo papel a las fuerzas armadas, aunque con muy regular éxito: su profesionalización y modernización técnica, en base a una política que pretende la subordinación de los cuerpos militares al poder civil.

Finalmente, puede decirse que, ante el agrietamiento del sistema de dominación oligárquica, se abre paso la cuestión de la democracia formal como fundamento de legitimidad del poder y de las decisiones públicas. Ahora bien, si la oligarquía se ve obligada a modificar sus comportamientos, no queda excluida la posibilidad de que, en muchos casos -así lo demuestra la historia latinoamericana-, el conflicto en realidad sea negociado, en el sentido de que las capas medias efectúen las reformas sin destruir totalmente la estructura existente, reacomodándola con aspectos modernizantes. De allí surgirá un híbrido, característico de muchas estructuras políticas de la región: un peculiar sistema de reconciliación política (8).

(II)

Cipriano Castro consideraba a su compadre Juan Vicente Gómez como el más fiel y valioso de sus comandantes en campaña y lo había recompensado con la gobernación del Distrito Federal cuando los andinos tomaron Caracas en 1899. Más tarde, como premio a sus victorias militares sobre los adversarios de Castro, Gómez ocupó la vicepresidencia de la República en 1904. Pero cuando Castro viajó a Europa en 1908 por motivos de salud, Gómez, mediante un sutil y oportunista golpe de Estado, se hizo elegir presidente. Se iniciaba así una larga dictadura que iba a durar unos interminables 27 años.

En efecto, la autocracia gomecista, de diciembre de 1908 a diciembre de 1935, "constituye el más dilatado período de poder concentrado en manos de un hombre a través de toda nuestra historia política" (9). Con presidentes-títeres que ocuparon el sillón presidencial, Gómez ejerció una autoridad suprema desde su cargo alterno de comandante del Ejército; la oposición fue eliminada mediante el espionaje, el arresto arbitrario, el encarcelamiento, la tortura y el asesinato, mientras que una apología propagandística intentaba decorar verbalmente las presuntas bondades de la dictadura feroz.(10)

En realidad, las bases del poder de Gómez eran, en esencia, las mismas de sus predecesores: el ejército, el latifundio y ciertas cualidades personales de caudillo ambicioso y astuto. El hecho de que haya podido lograr una concentración tan efectiva de todo el poder en sus

manos por tan largo tiempo, eliminando a su vez a los caudillos regionales, nos introduce necesariamente en la búsqueda de una respuesta satisfactoria, aunque de carácter contingente. Puede afirmarse que ello ocurrió debido a su habilidad para incrementar y hacer más eficientes sus bases tradicionales de poder, para lo cual utilizó precisamente la coyuntura brindada por la explotación del petróleo. En efecto, la combinación de una dictadura cuya base de poder era agraria, con una de las industrias extranjeras, tecnológica y organizativamente una de las más avanzadas del mundo, determinó no sólo su estabilidad y los fenómenos recurrentes de concentración, sino también los condicionamientos de carácter histórico y económico del tipo de desarrollo que posteriormente Venezuela iba a experimentar (11).

Según este lado de la cuestión, desde principios del régimen gomecista, el capital extranjero va a jugar un papel capital, y el capital específicamente petrolero va a estar particularmente comprometido. Una de las primeras tareas de Gómez va a ser precisamente la modificación de las leyes mineras existentes para atraer a Venezuela el capital foráneo. Como es obvio, los Estados Unidos, ansiosos de una 'estabilidad' interna en el país, dan su cooperación inmediata al plan, garantía de jugosos dividendos. La alianza entre Gómez y los intereses petroleros extranjeros marca aquel período de manera decisiva. El otorgamiento de amplias concesiones a precios ridículamente bajos y las disposiciones legislativas que contenían exenciones de derechos aduanales para equipo y maquinaria importados por las compañías petroleras, significaban de hecho los signos de "buena voluntad" de la política de entrega de la riqueza nacional, y el consiguiente menoscabo de la soberanía del país. El capital extranjero, por otra parte, iba a permitir al régimen gomecista la eliminación de la deuda externa, hecho del cual el régimen hacía uno de sus más importantes usos propagandísticos. En una concepción bastante peculiar que relacionaba la "independencia" económica de la nación con la eliminación de la deuda, la utilización de los ingresos petroleros por Gómez va a ser esencial para financiarla; en otras palabras, cualquier medio parecía útil, no importaba la entrega del país ni las consecuencias futuras de tal acción, con tal de que ello sirviese para decir que no se debía nada (12).

Pero desde el punto de vista interno, el Ejército era la columna vertebral de aquél régimen autoritario impuesto por el general Gómez, hasta el punto de que puede afirmarse que el Estado venezolano será una resultante de un Ejército centralizado, poderosamente armado y firmemen-

-te constituido por primera vez en la historia del país (43). Las cifras de gastos militares pueden ilustrar la nueva situación, y su comparación con el resto del gasto público resulta significativa. Para 1920, los gastos de defensa absorbían 18 millones de bolívares, los de educación 3,8 millones, y los de sanidad, 2,8. En 1935, las asignaciones de defensa llegaban a 29,6 millones de bolívares, educación y sanidad, 8,4 y 5,5, respectivamente. En 1940, defensa recibió el 10 por ciento del gasto fiscal, mientras que educación y sanidad captaban el 6 y 5 por ciento. Para 1955, durante la dictadura de Pérez Jiménez, las proporciones eran parecidas (44):

Evolución de los gastos militares (% respecto de los gastos globales)

1910	1915	1920	1925	1930	1936	1940	1945	1950	1955
12,1	16,0	17,0	8,2	12,3	14,3	10,0	8,2	9,3	9,4

Todavía más, el Ejército era el primer ramo de la organización estatal que recibía en Venezuela los primeros elementos de un proceso de tecnificación, mediante compra de material, misiones extranjeras de entrenamiento, envío de oficiales para cursar estudios en academias foráneas, asesoramiento militar y estratégico norteamericano, etcétera. En realidad, la formación de un Ejército regular culminaba institucionalmente en el establecimiento de un Estado Mayor Central ligado a comandos regionales permanentes, lo cual permitía sin duda al dictador el control militar del país en un grado desconocido hasta entonces. El proceso de centralización del Ejército bajo un mando único en todo el territorio nacional arrojaba definitivamente al pasado las intentonas caudillistas, y la lealtad de los oficiales quedaba asegurada mediante buenas pagas y privilegios sociales (45). Los levantamientos carismáticos de irregulares armados fracasarían en su totalidad.

En este sentido, la dialéctica de la dinámica social de la Venezuela petrolera pronto iba a poner de manifiesto la paradoja rigurosamente histórica de que, si bien es cierto que las nuevas fuentes de ingreso petrolero proveyeron al dictador de los fondos necesarios para consolidar su poder a corto y medio plazo, también es una realidad la de que, al mismo tiempo, los nuevos recursos fomentaban la creación de nuevas condiciones para afectar las bases tradicionales del poder en Venezuela y las rela-

-ciones entre las distintas clases, grupos y sectores sociales. La propia literatura testimonial del período muestra palpablemente que ya en muchas conciencias surge el imperativo y la necesidad del cambio. El testimonio principal y ya clásico provino de la pluma poderosa del escritor José Rafael Pocaterro con su libro tantas veces citado, Memorias de un venezolano de la decadencia (46), "la más completa radiografía de una época y el pliego de cargos más quemante contra una tiranía" (47). Sin olvidar tampoco a Cecilia Pimentel, Bajo la tiranía. 1919-1935, "una de las más descarnadas radiografías de aquella mineralizada era Juanvicentista, de treinta años de áspera y brutal parálisis" (48).

Pero nos parece de enorme interés detenernos más ampliamente en un texto que revela con ira y desesperación los imperativos del momento. Se trata de Jorge Luciani y su libro La dictadura perpetua de Gómez y sus adversarios, publicado en 1930 (49). Luciani expresaba que,

"La actual dictadura de Venezuela se caracteriza por el uso y el abuso de la farsa. Gómez vive y vivirá sobre el tinglado. Es un palurdo con sus ribetes de actor, en veces cómico, en ocasiones trágico. Siempre, o casi siempre, el gran público descubre el hilo de sus tramas, pese a la habilidad de autores y directores escénicos. Mas, ¡qué importa! El prosigue imperturbable su carrera de comediante, la noche del crimen en el alma, la sonrisa hipócrita en los labios. La historia de su autocracia constituye una sucesión de patrañas grotescas, tejidas con el exclusivo objeto de burlar al pueblo -¡el pobre pueblo que paga la representación con su sangre inocente!- y de engañar a la opinión extranjera, tan dócil al empeño cuando median intereses pecuniarios"

Más adelante,

"¡Exterminar, exterminar, exterminar! He ahí el lema de este Bárbaro; he ahí su sabia política. Cuantos se subleven contra la arbitrariedad hecha norma, cuantos alcen la voz contra la opresión, cuantos piensen siquiera en libertades públicas, son unos "malhechores y fascinosos" que "deben ser exterminados radicalmente", o, en otras palabras, "malos hijos de la patria", "mala plaga que debe destruirse de raíz". Y a fe que Gómez procede al tenor de sus palabras. Una fiera semejante, que reclama a gritos la jaula, no alcanza a comprender que haya patriotas inconformes con su inícuo modo de gobernar; que alienten ciudadanos refractarios a la adulación, al peculado y al crimen; que existan militares de pundonor cuyas espadas no sean sostén de tiranía e instrumento de esclavitud; que vivan todavía, después de más de veinte años de matanza sistemática, venezolanos dignos y conscientes ansiosos de darle fin a su dictadura vitalicia"

Anotaba,

"Un tirano caduco rodeado de áulicos y esbirros, sostenido y condecorado por los gobiernos de las naciones que se dicen civiliza-

-das, bendecido solemnemente por el Papa; el pueblo en un estado de analfabetismo absoluto; mucho oro en el Erario y mucha pobreza en los particulares; legiones de pillos que lucran con los altos empleos, con las concesiones de hidrocarburos, con el contrabando, con la justicia, con los monopolios, con las obras públicas, con el soborno, con el espionaje, con el regionalismo, con los hospitales, con la adulación, con los cuarteles, con las cárceles, con los vicios; el paludismo y la anquilostomiasis reinando como señores en media república; ciudades importantes -Barinas, San Carlos, Guanare, Calabozo, etc.-, antaño florecientes y populosas, convertidas en escombros; Maracaibo, con más de cien mil habitantes, exportando cantidades fabulosas de petróleo y sin acueducto; el terror siempre a la orden del día; oficiales franceses al servicio de la dictadura en la aviación; el país inerme gracias a una ley de porte de armas que concede únicamente a los gomecistas el derecho de herir y de matar; los comerciantes extranjeros inmiscuyéndose en nuestros asuntos internos y firmando felicitaciones; los varones eminentes por su virtud, por su patriotismo y por su ciencia, enclaustrados en sus hogares o asesinados en "La Rotunda" y los Castillos de Puerto Cabello y San Carlos; el presupuesto de guerra y marina infinitamente superior al de instrucción; la juventud ahrojada en las prisiones, trabajando en las cerreteras, perseguida, desterrada; los excelentísimos ministros diplomáticos acreditados en Caracas, salvo rarísima excepción, de rodillas ante el Buey Apis; el crimen todopoderoso y opulento; la probidad andrajosa, ignorada y escarnecida; dos o tres "hábiles" soñando con la "evolución" a base del doctor Juan Bautista Pérez, presidente nominal y primer lacayo efectivo; los procónsules armandose subrepticamente en sus provincias y haciendo "política" para cuando el Amo desaparezca volar sobre el centro al asalto del Capitolio Federal; todo el mundo, en fin, pendiente de la vida de un hombre que se derrumba lentamente ... Tal es la situación dentro"

En el exterior,

"... Cuatro, cinco, seis "caudillos", abrumados por los años, el descrédito y las responsabilidades -los 'caudillos': antiguos señores feudales que no consumaron ninguna obra útil ni honorable en el poder ni han evolucionado en el destierro ... detrás de los "caudillos" varios grupitos que se odian entre sí y se injurian y se embisten ..."

s la juventud la que tiene en sus manos la solución del problema venezolano:

"... en su cerebro, en su voluntad y en su corazón se viene incubando la renovación espiritual, moral y material de Venezuela ... una generación tan sufrida y tan gallarda como no existió otra nunca, cuenta entre sus obligaciones la de plasmar la democracia auténtica en nuestra patria ... Encabezando con energía, no una revuelta más, sin trascendencia y sin principios, que remate sustituyendo a un Gómez por un García, ni una "evolución" falaz y corruptora a la sombra de una constitucionalidad irrita, sino una verdadera revolución, la revolución por antonomasia. Un movimiento que destruya para siempre el sistema, y sacuda hasta las más pro-

-fundas fibras del alma venezolana, y despierte las iniciativas ciudadanas que duermen, y resuelva equitativamente las relaciones del capital y del trabajo. Una revolución que cambie totalmente los conceptos, las costumbres, el gobierno, los estudios, los medios, los fines, los seres y las cosas; que extermine tantas imposturas y prejuicios tantos; que transforme por fuera y por dentro, en los individuos y en los hechos, esa "guácharitocracia" que ha sido nuestra existencia en el curso de cien años de adulteraciones, de mentiras y de fraudes. Una revalorización de personajes, de famas, de ideologías. El resurgimiento a la vida de millares de campesinos y de obreros a quienes la codicia de unos cuantos y la incuria de los más han relegado a la triste condición de bestias de labor. Una igualación que no sea desorden ni anarquía sino idénticos derechos para las nobles aspiraciones. Una conmoción social, política y económica, en fin, que eche al suelo todo el andamiaje de una burguesía parásita y mediocre y que levante por la educación y la justicia a las clases explotadas".

(III)

G. Carrera Damas ha puesto de relieve la necesidad de admitir que la existencia histórica de Venezuela expresaría una trabajosa incorporación a la llamada "historia universal" en la pretensión de reducir un desfase (décalage) constantemente arrastrado. El Guzmanato (1870-1889) quedaría sólo como un intento prematuro de compensar el aludido desfase histórico, restablecido por lo demás en las siguientes décadas. Los nuevos intentos se realizarían a partir de 1936, fundamentalmente, con una fase aguda o de fractura entre 1945 y 1948. En este sentido, lo que llamamos Venezuela contemporánea vendría a nacer en conjunción con la segunda guerra mundial: a partir de ésta es cuando se advierte la presencia de una nueva problemática en la sociedad venezolana, una fractura entre el orden tradicional y la emergencia de los nuevos grupos sociales. Semejante cambio presupondrá la existencia de un período de transición durante el cual madura la nueva problemática y que se extendería desde 1928-1930 hasta 1945 (30).

El lapso 1928-1945, como período de transición hacia la contemporaneidad, se enfrenta con una situación caracterizada por el estancamiento y la tradición, a pesar de los esfuerzos modernizadores de los gobiernos del general Antonio Guzmán Blanco, de los que algunos elementos precarios de estructuración nacional del poder iban a ser aprovechados con posterioridad. En este marco se situaba el surgimiento del factor diná-

-mico que impulsó el desarrollo dependiente de la sociedad venezolana: la explotación del petróleo. Entre 1928 y 1936 comenzaron de alguna manera a tomar cuerpo los elementos de cambio en el seno de la sociedad tradicional venezolana, entendiéndose por tal aquella que subsistía a finales del siglo XIX y principios del XX. Era la actividad extranjera la que, actuando según una dinámica propia y respondiendo a necesidades del mercado internacional, proyectaba sobre el Estado y la sociedad múltiples influencias. La consolidación de un enclave petrolero actuaba como trastornador de la estructura tradicional, principalmente mediante la distribución del cada vez mayor gasto público. La explotación del petróleo "significó un impacto de alta intensidad en la sociedad venezolana: favoreció la concentración nacional del poder ... trastornó el orden rural tradicional, reestimulando el proceso de urbanización y desencadenando migraciones internas que son la base demográfica de la clase obrera; constituyó factor determinante del crecimiento y desarrollo de la burguesía"; pero en contrapartida, "produjo la abolición real de la soberanía nacional, la vinculación absoluta del país con los intereses y dictados de las compañías petroleras norteamericanas e inglesas, y sus respectivos gobiernos, y causó profundos traumatismos en la sociedad cuyos efectos, ..., afloraron a partir de 1936" (24).

En efecto, diversos factores y estímulos entraron en contradicción con el tono hasta entonces vigente en lo social y político: claros signos de inquietud culminaron en la rebeldía estudiantil de 1928, que condujo a la cárcel a buen número de universitarios, entre quienes figuraban la mayoría de los que habrían de regir la vida política venezolana después de 1945. Igual toma de conciencia política ocurría al hacerse patente el abandono de los tradicionales cánones del caudillismo por la reivindicación de los modelos de organización partidista, extinguidos a fines del XIX, pero con la novedad de que ahora no se trataría de revivir los arcaicos cuadros de notables, sino de crear organizaciones políticas modernas y de masas. (25)

Sin duda que en Venezuela, en las condiciones de la dictadura de Gómez, el centro receptor de todo lo que estaba sucediendo en el mundo vino a quedar localizado en la Universidad, la cual, a falta de partidos y sindicatos, en cierta manera los sustituyó para desempeñar un rol de primera importancia (26). No es posible olvidar que se había producido el movimiento de reforma universitaria de Córdoba (Argentina) en 1918, de poderosa repercusión en muchas universidades lati-

-noamericanas y en los estamentos más brillantes de la intelectualidad continental (24). La Universidad era igualmente el ambiente normal de unos estratos medios que comenzaban a configurarse, donde se lee marxismo, literatura rusa pre y postrevolucionaria y se reacciona contra una enseñanza escolástica, vacía y retórica. Pero hay también una acción más profunda dirigida contra la dictadura y que pretende de alguna manera la modificación de las estructuras de poder por Gómez representadas. Y aunque el movimiento estudiantil venezolano de 1928 se presente como algo todavía confuso desde el punto de vista ideológico, es antecedente indudable de futuros procesos de la historia contemporánea de Venezuela. En este sentido, la generación venezolana de 1928 ha jugado un papel decisivo en la modernización política del país durante los últimos cincuenta años. (25) Rómulo Betancourt ha escrito con razón que,

"En la época gomecista, los no incorporados a la próspera tribu alzada con el poder, simple y llanamente, se arruinaban; y sufrían el rigor de un régimen que para el desmán no se ponía a sí mismo frontera alguna. No existían partidos políticos, ni sindicatos, ni opinión pública visible. Esporádicos alardes de rebeldía estallaban, en forma de montoneras de viejo estilo, que eran abatidas por los fusiles de repetición que junto con los dólares y las libras esterlinas habían llegado de los Estados Unidos e Inglaterra. El pueblo trabajador, indefenso, analfabeto, humillado, con su paludismo y su sífilis, era ciervo de la gleba en las haciendas gomecas, artesanos explotándose a sí mismos, esclavo asalariado en los campamentos mineros. Y mientras tanto, la única prensa que en el país podía leerse -la regimientada por la dictadura- reproducía los elogios panegíricos prodigados a Gómez y a su administración por estadistas y escritores, en periódicos de todas las naciones y todas las lenguas. Los hombres que por su cultura e inteligencia debieron descubrir y encauzar la soterrada marea colectiva de resistencia al despotismo, no podían hacerlo porque estaban a su servicio (...). Esa conjunción de factores nacionales e internacionales en favor de la tiranía, crearon en Venezuela un enrarecido ambiente de opresión y angustias colectivas. Fue bajo este signo y dentro de este clima que actuó la generación del 28 (...). De la entraña misma del binomio Gómez-petróleo, resultado de la alianza del caudillismo militar con el imperialismo colonizante, como su consecuencia y negación dialécticas, surgió el equipo de hombres que iba a dotar al pueblo venezolano de la herramienta política y del repertorio de ideas capaces de conducir al rescate paulatino de nuestro patrimonio minero, y de la soberanía nacional con ella, de manos del capital monopolista; y de redimir al país del atraso institucional y del despotismo crónico"

Un mundo político exterior en ebullición acusaba su influencia:

"Nos llegaban por los intersticios de la especie de muralla china tendida en torno del país, ráfagas de los vientos de fronda que sacudían al mundo, reflejos del conmovedor episodio histórico que

fue la revolución rusa de 1917 y de los cambios sociales que hubo en el occidente europeo al concluir la primera guerra mundial. Las noticias sobre la Revolución mejicana, para aquellos años en su etapa de mayor resonancia americana, llegaban hasta nosotros como un estímulo poderoso. En algunas revistas leíamos, brillándonos los ojos juveniles con la emoción de quien se asoma a un mundo inédito, las noticias de las luchas universitarias de Córdoba, de las manifestaciones callejeras de Lima, de los enérgicos inicios de la batalla que libraría Cuba contra el 'Machadato'. Y fue bajo el reflejo de esa inquietud insurgente que conmovía a las juventudes americanas como resolvimos organizar la Semana del Estudiante" (26).

En efecto, la iniciativa de una Semana del Estudiante, propuesta por la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV) para principios de 1928, iba a revelar pronto los primeros elementos de agitación pública bajo la dictadura gomecista, como consecuencia inmediata de los discursos pronunciados por Jóvito Villalba, Pío Tamayo, Joaquín Cabaldón Márquez y Rómulo Betancourt. La reacción gubernamental ante aquellos textos que aludían a las libertades y el imperialismo fue el encarcelamiento de los principales dirigentes de la Semana, lo cual a su vez provocó espontáneas reacciones de solidaridad en Caracas y otras ciudades del país, tales como huelgas, manifestaciones y producción de panfletos clandestinos de crítica abierta de la situación. (27)

A raíz de las separaciones provocadas por los exilios y las prisiones, los distintos grupos estudiantiles van a recibir influencias que permiten comprender la pluralidad de actitudes que a partir de 1936 caracterizará a esta generación. Tentativamente, puede constatarse una división entre "izquierdistas" y "conservadores": los primeros pasarán a la organización de núcleos clandestinos de células comunistas que van a dar origen al Partido Comunista venezolano. Otro grupo se interesará por las actividades de tipo literario (conciertos, tertulias) discutiendo lo que publicaba por entonces la Revista de Occidente y la Gaceta Literaria. Pero no es el arte por el arte; al contrario, se trata de ir hacia un cierto compromiso con la realidad nacional: la actividad artística devenía una forma de ser antigomecista: anotaba el escritor Guillermo Meneses que "Todo lo que fuera arte verdadero -lo que se apartaba de la anécdota grandilocuente en pintura, lo que en la literatura era extraño a la oratoria ...- parecía ser en aquellos momentos un ataque al régimen, una separación del coro de los aduladores y de los incondicionales"; más aún, la influencia del momento español en este grupo era singular: "Nos ayudaba a todos -y en alto grado- España. Eran justamente los mo

mentos que preparaban la República. En la dictadura de Primo de Rivera hallábamos -erradamente, porque el general español era muy diferente al que gobernaba nuestro país- un reflejo tambaleante de Gómez. Nos sacudían Unamuno y Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Marañón, Vallé Inclán, mezclados con los más jóvenes, con los que nos mostraban las posibilidades del español contemporáneo ..."(23). Otro importante sector en que se fraccionó el estudiantado del 28 estuvo constituido por todos aquellos que fueron al exilio, especialmente a Francia y a España. En España eran sentimentalmente republicanos y admiraban a don Manuel Azaña: éste y su grupo político, Acción Republicana, tenían un especial atractivo para muchos. Se da el caso de que pertenecieron en España a varias agrupaciones estudiantiles latinoamericanas: la Unión Latinoamericana de Estudiantes (ULAE) y la Federación Universitaria Latinoamericana (FULA); e intentaron desarrollar propaganda antigomecista. Para esta labor la posición estratégica española parecía la más adecuada: Isaac Pardo escribía a Raúl Leoní que "Allí (en París) la labor de propaganda es muy difícil (...). En España, por el contrario, hemos sido objeto de una calidísima acogida por parte de los estudiantes (...) Allí (en el Ateneo Barcelonés) atacamos enérgicamente la dictadura de Gómez y procuramos hacer ambiente para una ulterior propaganda, sobre todo periodística"(24).

De otro lado, un grupo en el exilio estuvo disperso por la cuenca del Caribe y parte de América del Sur, donde se centraron en el estudio del marxismo y en la preocupación por la acción política futura. Con respecto al grupo del Caribe, decía uno de sus miembros, Rómulo Betancourt:

"Fue operándose en nuestras conciencias un proceso de esclarecimiento ideológico. Comenzamos a darnos cuenta de cómo Gómez era algo más que un déspota nacional: era el instrumento y el vehículo para el control foráneo de la economía venezolana, aliado y siervo de poderosos intereses extranjeros. Comenzó a hacer crisis en nosotros la fé en los métodos de lucha contra la dictadura que no respondieran a un programa político-social definido, a objetivos ideológicos precisos, a una organización y disciplina diferentes de la primitiva y precaria adhesión de hombres a hombres, factor determinante del proselitismo caudillesco."

"Nos entregamos a la apasionada indagación de las raíces doctrinarias de las diversas tesis políticas. Devoramos, más que leímos, libros de historia, de economía, de ciencias sociales. Se operó en la mayoría de los estudiantes exiliados este fenómeno común a las juventudes americanas de los años treinta: con fervor de neófitos sorbimos cuanto escribieron los clásicos del socialismo. Por un momento, inclusive, creímos que en Rusia se estaba forjando un tipo de organización social de vigencia ecuménica. Llegamos a soñar con una revolución de la bolchevique, con nuestro zar de Maracay fusilado al amanecer" (25).

El grupo del Caribe, residenciado en Barranquilla (Colombia), se auto-constituía en la Agrupación Revolucionaria de Izquierdas (ARDI) y daba a la luz pública el llamado Plan de Barranquilla (1931), en un programa que reunía un conjunto de aspiraciones, tales como la lucha contra el caudillismo militarista; libre expresión y derechos individuales; confiscación de los bienes de Gómez y familia; creación de un Tribunal de Salud Pública para investigar los delitos del despotismo; medidas de protección de la clase trabajadora; campañas de alfabetización de masas obreras y campesinas; revisión de los contratos y concesiones entre la nación y el capitalismo nacional y extranjero; control por el Estado y municipios de las industrias de servicios públicos; convocatoria de una asamblea constituyente, gobierno provisional y reforma de la Constitución (31).

Pero ya casi desde el comienzo, la Agrupación Revolucionaria de Izquierdas -grupo político promovido por Betancourt, y que tenía entre sus principales dirigentes al líder estudiantil Raúl Leoní (futuro presidente de la República entre 1964 y 1969)- intentaba deslindar su estrategia y táctica de la de los comunistas, progresivamente más ortodoxos debido al auge del estalinismo y su dependencia de las directrices de la Tercera Internacional. En realidad, como ha puesto de relieve R. Escovar Salom, la táctica de ARDI coincidía mejor con los postulados políticos que Víctor Raúl Haya de la Torre había propuesto con la Alianza Popular Revolucionaria Americana: sin duda, había similitudes de interpretación con el partido aprista peruano y otros de Latinoamérica, en el sentido de una flexibilización del marxismo como instrumento de análisis de los procesos históricos que ofrecían las naciones latinoamericanas (32). En forma sucesiva se fue imponiendo una diferenciación cada vez más clara en el seno del naciente movimiento progresista de Venezuela, diferenciación que en el futuro iba a convertirse en un abierto antagonismo. En este sentido, Betancourt ha aclarado que,

"Ninguno de los que después fundaríamos Acción Democrática llegó a militar durante su primer exilio en grupos políticos subordinados a la III Internacional. No obstante ser bastante jóvenes, porque la mayoría acababa de trasponer la veintena, resistimos la tentación de enajenar nuestra voluntad política a la rectoría soviética, entonces tan atrayente para la juventud universal. Es que al acercarnos a las toldas comunistas recibí serios impactos el raigal sentimiento venezolano y americano del grupo. Nos topamos con una agrupación extranjerizante, sorda y ciega ante las vitales necesidades de nuestros pueblos, suerte de bestia genuflexa ante las imperiosas consignas de los burós del comintern. El pequeño grupo de compatriotas ya organizado entonces en embrión de lo que

después sería "Partido Comunista de Venezuela", se encargó de abocar la zanja abierta entre nuestro grupo y ellos, desatando contra nosotros una ofensiva de denuestos a la cual se mantienen aún aferrados con extraordinaria tenacidad (...) Pero no nos cruzamos de brazos al rechazar las fórmulas y etiquetas de importación, para afrontar la realidad venezolana y la de Hispanoamérica en general, con ánimo de contribuir a modificarlas y rehacerlas. Por lo contrario, comenzamos a articular un sistema de ideas y de planes; para aportárselos a Venezuela como caminos para la solución de sus problemas básicos. Nos definimos y proclamamos defensores del nacionalismo económico, de la democracia agraria y de la justicia social ...

..." (33).

(IV)

Después del fallecimiento de Juan Vicente Gómez (diciembre de 1935), Venezuela entra en una etapa de conmociones y manifestaciones populares por la restitución de las libertades públicas, y que sintetizan los sucesos de febrero de 1936, en los que amplios sectores populares se movilizaron masivamente frente a los poderes públicos. Tales acontecimientos hicieron evidente la imposibilidad de mantener a la sociedad venezolana bajo los moldes vigentes de la etapa dictatorial precedente. En efecto, el sucesor de Gómez, general Eleazar López Contreras -proclamado presidente constitucional en abril de 1936-, intentó en principio un equilibrio entre las formas tradicionales y las de reciente aparición.

Las exigencias populares de restauración de las libertades civiles llevaron desde luego a las primeras medidas gubernamentales de liberación de presos políticos y permisividad en cuanto al regreso de los exiliados que luego iban a encabezar el movimiento hacia el desmantelamiento de la dictadura y el cambio político. Pero, una vez superado el momento crítico, la política de equilibrio de López Contreras se rompió a favor de los sectores más reaccionarios y por presión de éstos al mismo tiempo se intentó volver hacia atrás, haciendo caso omiso de las nuevas aspiraciones.

El gobierno de López Contreras -una especie de gomecismo sin Gómez -nació y se desenvolvió -en palabras de G. Carrera Damas- bajo la inspiración del más manido de los principios de sociología política que formó el arsenal de las clases sociales dominantes: 'el pueblo venezolano no está maduro para el ejercicio de la democracia' (34). Con una política bigua y de grandes vacilaciones posiblemente calculadas, pretendió aplacar el movimiento democrático con la eterna acusación de "comunista", e

-pecie de "sambenito que no se vacilaba un instante en colgar al pecho de todo aquel que mostrase espíritu de independencia, o de crítica, así estuviese ésta concebida desde el más ortodoxo punto de vista demo-liberal" (35). En realidad, la reacción no se hace esperar y su principal preocupación va a ser la de impedir el "contagio" de las ideas democráticas avanzadas que traían del exilio los jóvenes de 1928, no vacilando en el empleo de la represión como, cuando en 1937, fueron puestos fuera de la ley las nacientes agrupaciones políticas y exiliados varias decenas de dirigentes de las mismas -Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Jóvito Villalba, en otros-. De esa manera, López Contreras parecía encaminarse hacia una virtual dictadura y la oposición no tuvo otra alternativa que la clandestinidad. (36)

Por añadidura, se orquestaba un culto bolivariano como ideología oficial, según el cual los no partícipes del mismo eran los "antipatriotas". Surgían así las Agrupaciones Cívicas Bolivarianas como partido oficial, demostrativo de la incapacidad para aceptar una oposición o promover un auténtico proceso de democratización política: "En verdad, la liberalización que tuvo lugar en Venezuela en la era inmediata a Gómez era el mínimo requerido para acallar presiones populares. El Congreso de 1936, todavía en manos de los diputados y senadores nombrados a dedo por Gómez, se negó a toda reforma fundamental de la Constitución. No se dispuso medida alguna para ampliar la base electoral -tan solo un dieciseisavo de la población tenía derecho al voto- y la ciudadanía seguía excluida de toda participación directa en la elección de presidente y de congresales. Estos últimos seguían siendo escogidos por las legislaturas de los estados y los concejos municipales, mientras el presidente era elegido por el Congreso" (37).

En efecto, la Constitución de 1936 limitó el sufragio a la población masculina y alfabetada, estableciendo que "La Nación garantiza a los venezolanos: el derecho de sufragio, y, en consecuencia, los venezolanos varones, mayores de veintinueve años, que sepan leer y escribir y que no estén sujetos a interdicción ni a condena penal que envuelva la inhabilitación política, son aptos para elegir y ser elegidos ..." (38). A la vez, se reconocían los derechos políticos pero ratificando la prohibición del llamado "comunismo", ampliándola para incluir también al anarquismo: "Se consideran contrarias a la independencia, a la forma política y a la paz social de la nación las doctrinas comunistas y anarquistas; y los que las proclamen, propaguen o practiquen serán considerados como traidores a la Patria y castigados conforme a las leyes" (39).

L 41-3

Pero 1936 era también el año en que se iniciaba el movimiento sindical venezolano, como culminación más inmediata de un proceso gestado por variados y frecuentes conflictos sociales bajo el régimen de Juan Vicente Gómez. Ya en los años que siguieron a la primera guerra mundial se habían producido huelgas de zapateros, tranviarios y panaderos, que fueron brutalmente reprimidas. Las nuevas inquietudes tendrían ciertos reflejos legales, producto más que todo de una preocupación típicamente paternalista (40). La misma puesta en vigencia de una Ley del Trabajo en 1928 fue un hecho provocado ante todo por la necesidad de cumplir los compromisos internacionales contraídos por el gobierno gomecista sobre mejores condiciones de trabajo, y para neutralizar a la opinión pública, favorable entonces a las acciones combativas de los estudiantes y de grupos de trabajadores.

En 1936, el Congreso aprobaba otra Ley del Trabajo, que concedió a los trabajadores el derecho a organizarse en sindicatos y a afiliarse a centrales obreras internacionales, pero la cobertura real de la ley encontró serios obstáculos: las compañías petroleras se opusieron al reconocimiento de las organizaciones sindicales de empleados y obreros a su servicio. En diciembre de ese mismo año, ante la intransigencia de los empresarios frente a distintas reivindicaciones formuladas, se produce una huelga de veinte mil obreros de la industria petrolera que va a tener importantes repercusiones en la vida social y política del país: como afirma Rodolfo Quintero, "Marca el momento de la historia nacional en que los trabajadores organizados en sindicatos, actúan como factor de cambio de la sociedad venezolana, y aumentan las posibilidades de transformaciones estructurales, todavía insuficientes para superar las contraposibilidades. Inicia un proceso donde diversos problemas se plantean a la sociedad, en la medida que ésta se aleja de formas de vida anteriores, tradicionales, y de organiza conforme a un nuevo patrón"; porque, "La desaparición progresiva de las diferentes formas de corporaciones de oficios, y la formación y predominio del sindicato como organización de los trabajadores que cuentan en su seno con una clase obrera incipiente, se asocia a marcadas alteraciones en los mecanismos tradicionales de control social de la familia patriarcal y de las prácticas religiosas parroquiales, en dinámica de los grupos artesanales, en la vida de los poblados y hasta la conducta individual" (41).

Si seguimos al profesor Quintero, vemos cómo, al mismo tiempo -en los últimos días de 1936-, se reunía en Caracas un Congreso de Trabajadores de Venezuela con el fin de estudiar la situación socio-económica

de los afiliados; mejorar la condición orgánica de los sindicatos existentes; planificar la creación de organismos de defensa en las industrias y coordinar la gestión del movimiento laboral en toda la nación. En sus reuniones se aprobaron resoluciones sobre salario mínimo, seguro social, jornada de trabajo de mujeres y niños, vivienda obrera, etc., y se recomendó que, una vez creadas las federaciones de trabajadores de las distintas regiones del país, se unieran en una central nacional denominada Confederación de Trabajadores de Venezuela. Pero la celebración del Congreso fue coincidente con la gran huelga petrolera, que duró 47 días y fue seguida de una feroz represión, que llevó otra vez a la cárcel y al exilio a los principales dirigentes del movimiento político y sindical. Elló paralizó temporalmente el proceso de creación de las federaciones sindicales regionales, e impidió el nacimiento de la proyectada central sindical nacional (42).

No es necesario insistir en que 1936 fue un año de intensa actividad sindical directamente vinculada a la inquietud política de entonces. Numerosas organizaciones políticas y sindicales participaron en huelgas y acciones de protesta a fin de conseguir mejoras de salarios, reducción de la jornada laboral y otras reivindicaciones socio-económicas similares. La misma huelga general nacional que tuvo lugar en junio de 1936 fue dirigida, significativamente, por un comité compuesto por representantes de organizaciones laborales, partidos políticos democráticos y sectores estudiantiles. La represión subsiguiente condicionará el hecho de que 1937, en cambio, sea un año de descenso vertical de la actividad sindical. Sólo un número pequeño de organizaciones va a funcionar con efectivos igualmente reducidos en proporción apreciable. A comienzos de 1938 se va a intentar reconstruir el movimiento y hacia este fin se dirigen grupos de dirigentes obreros, quienes, habiendo logrado burlar la persecución policial, decidieron convocar una conferencia sindical nacional. Entre los acuerdos tomados por esta reunión, en la clandestinidad, destacan el de adoptar la fecha del Primero de Mayo como día del movimiento obrero venezolano, y el de elegir un comité ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela; acuerdos que sin embargo fue imposible llevar a la práctica debido a las condiciones políticas restrictivas imperantes en aquél momento (43).

De la misma manera, en 1936, los miembros de la generación estudiantil de 1928 aparecerán al frente de distintas organizaciones políticas -las primeras de la Venezuela contemporánea- que reflejaban ya los distintos matices ideológicos de aquélla. En este sentido, Unión Nacional

L 100

Republicana, si bien es cierto que incluía pocos representantes del grupo del 28, integraba sobre todo a destacados caraqueños que habían hecho oposición a Gómez. Pretendían dar "soluciones modernas a los problemas sociales y económicos de Venezuela", "favorecer la conversión de Venezuela en un Estado Moderno mediante la aplicación de procedimientos de un socialismo constructivo ..."; proclamaba el derecho fundamental de los individuos a la libre expresión de sus opiniones y la obligación de someterse a la opinión de la mayoría expresada en el voto y el sufragio universal. Según M.V. Magallanes, Unión Nacional Republicana (UNR) desempeñaría el papel de una burguesía liberal que reflejaba las más ilustradas opiniones de los caraqueños de clase alta (44). El Partido Republicano Progresista (PRP) se constituía como el primer esfuerzo organizativo legal de los comunistas venezolanos, debido esencialmente a la imposibilidad de éstos de aparecer con su denominación auténtica por causa de la señalada prohibición constitucional. El Manifiesto del PRP incluía unas medidas democráticas (derechos políticos, sufragio universal, mandato revocable, representación proporcional) y unas medidas económicas (confiscación de los bienes de Gómez y familia, revisión de las concesiones petroleras, impuestos progresivos sobre el capital, parcelación de los grandes latifundios) acompañadas de unas medidas de protección al trabajador y de estímulo a la cultura (45). Por su parte, Organización Venezolana (ORVE), cuyo antecedente más directo era la Agrupación Revolucionaria de Izquierdas (ARDI), era fundada con el propósito inicial de unir a todos los sectores antidictatoriales en un solo frente. Sus organizadores publican un documento en el cual, después de afirmar que "el problema de Venezuela es un vasto problema nacional que afecta a todos los órdenes de la nación en materias tan fundamentales como la economía, la higiene, la educación y el trabajo", que "la causa mayor de este vasto problema nacional es la pasada dictadura gomecista", proclaman que la solución al problema radica en una serie de reformas realizadas en una sociedad integrada socialmente: "modernización de la agricultura", "adaptación de las leyes internacionales del trabajo a las condiciones de Venezuela", "el implantamiento de un régimen de efectiva justicia que sustituya a la explotación y a la opresión del absolutismo gomecista", "crear una economía nacional moderna que sustituya al feudalismo económico de la dictadura" y "desarrollar nuevas carreteras y nuevas empresas" (46). Como una continuación de la política de profundización de las aspiraciones democráticas, UNR, el PRP y ORVE van a unirse para formar el llamado Bloque de Abril (1936), a fin de orientar y movilizar la opinión pública hacia la consecución de fórmulas concretas

que fueran sometidas a la consideración del Congreso Nacional, para su incorporación a la legislación venezolana. La plataforma de acción del Bloque de Abril aparecía, si se quiere, con un sentido sumamente moderado en cuanto a la vía escogida, aunque las reformas pedidas sin duda eran una revolución política en el contexto venezolano de aquellos años: enmienda a la Constitución que permitiera la convocatoria de unas elecciones generales, ley de sufragio y ley de censo electoral, elecciones municipales (47).

En esta dinámica, todavía plena de oscilaciones, vaivenes e, incluso, ingenuidades, el último intento de actuación uniforme y, si cabe, conjunta, por parte de las tendencias políticas existentes va a ser la creación del Partido Democrático Nacional (PDN). El PDN representaba una coalición de diversos grupos políticos y la pretensión de aglutinar a los sectores que militaban en diversos partidos para formar un solo frente, especie de "partido único de izquierda", capaz de combatir exitosamente a las fuerzas tradicionales y antidemocráticas:

"El PDN será la organización política que unificará a los venezolanos interesados en la implantación de un régimen auténticamente democrático que garantice la independencia y la libertad de nuestro pueblo (...) Luchamos por la restitución a nuestro pueblo de su soberanía mediante la elección de sus representantes por el sufragio universal y, como fase también inmediata, la liquidación efectiva del gomecismo mediante el enjuiciamiento de sus cómplices más señaladamente responsables y la persecución sin contemplaciones de los vicios y taras políticas que nos legara: peculado, abuso de autoridad, favoritismo, nepotismo. Consideramos que la libertad no puede fundamentarse sin una enérgica política democrática de respeto a los derechos y libertades ciudadanas expresamente garantizadas por la Constitución Nacional" (48).

El programa del Partido Democrático Nacional, representativo de una etapa más avanzada en el proceso de modernización de las fuerzas políticas, se estructuraba en cuatro categorías esenciales: Transformación del Estado autocrático gomecista en Estado democrático constitucional; Reconstrucción económica de Venezuela: reforma agraria, defensa de las riquezas naturales, mejoramiento de la clase obrera; educación, sanidad y reformas legislativas; e incorporación de los indígenas a la vida de la nación. Dirigido por dos líderes de creciente prestigio, Rómulo Betancourt y Jóvito Villalba, el PDN en la clandestinidad -como consecuencia de la negativa a su legalización por el gobierno de López Contreras- propugnará una estrategia de desarrollo nacional autónomo desligada de patrones extranjeros y esencialmente inspirada en las circunstancias na-

-nacionales.(49) Pero las diversas tendencias que se movían en el seno del partido originaron diversas pugnas y tensiones internas (los militantes comunistas terminarán por salir de la organización) que confluirían, después de diversas escisiones, con la redacción en 1939 de la "Tesis Política y Programa del PDN", contentivo de un análisis más perfilado de la situación del país y un conjunto de objetivos por lograr: una reforma socio-económica en el marco de un Estado democrático.(50) En realidad, el PDN sufrirá progresivamente un proceso de decantamiento, tanto ideológico como de liderato, quedando reducido a destacados miembros de la generación del 28, quienes, junto a la generación de 1936 y otras personalidades del mundo intelectual -el poeta Andrés Bello Blanco, el novelista Rómulo Gallegos-, fundarán más tarde, en 1941, el partido Acción Democrática (AD). En este sentido, la "Tesis Política" del PDN pasará a ser el antecedente más directo de la doctrina y el programa de Acción Democrática. Puede afirmarse que numerosos cuadros del PDN constituyeron el núcleo de lo que luego hubo de convertirse en Acción Democrática.

(v)

En abril de 1941, el Congreso eligió presidente de la República en la persona del General Isaías Medina Angarita, sucesor designado por López Contreras. Medina Angarita, enfrentado a la candidatura de Rómulo Gallegos -candidatura más bien simbólica de la oposición democrática pues la elección del primero era algo ya previsto dado el mecanismo empleado-, había sido la "mano derecha" de López Contreras entre 1931 y 1935, y de 1935 a 1941, su ministro de Guerra. La cuestión sucesoria había sido, pues, solucionada a la manera tradicional y el continuismo parecía consolidarse.

No obstante, las tendencias de la sociedad venezolana a la innovación habían hecho acto de presencia: las aspiraciones a un cambio político iban en aumento y presionaban sobre el sistema en su conjunto. En realidad, tras algunas vacilaciones, a Medina no le quedó otro remedio que "tomar el tren" del proceso de modernización e, incluso, estimularlo con algunas modificaciones parciales. No deja de ser cierto que ...

"La fuente primera -en la modernización política- es el mismo liderato tradicional designado forzosamente, cuyos miembros pueden llegar a la convicción o a la necesidad de decidir que el sistema que han heredado del pasado está anticuado y que ~~necesita~~ necesita un cambio drástico, una modernización política" (51).

Es cierto que a partir de 1941 se va a iniciar en Venezuela una especie de "fractura del desenvolvimiento histórico decimonónico" (52), y en tal sentido hay que tomar en cuenta tanto los condicionantes externos como la propia dinámica interior. Por de pronto, entre los primeros, hay que destacar el impacto de la segunda guerra mundial en el orden venezolano y el hecho de que los factores exógenos de cambio comiencen a operar con acento cada vez mayor. La apertura interior en el ámbito de los derechos ciudadanos e individuales y en la legalización de los partidos Acción Democrática y Comunista de Venezuela, está sin duda en relación directa con la coyuntura bélica, la cual imponía ciertamente un sinceramiento en el campo de la democracia, a fin de fortalecerlo en su enfrentamiento con el fascismo, aunque la apertura del medinismo tuviera sus conocidos límites: la liberalización de la vida política no incluiría los mecanismos de formación del poder político, ya que siguieron operando los tradicionales procedimientos para la designación del sucesor a la presidencia. Esto será un punto clave en los acontecimientos posteriores. De otra parte, la guerra ponía de relieve la intensidad de la relación de dependencia que vinculaba ya a Venezuela con los Estados Unidos. La condición de país productor y exportador de petróleo lo situaba en el marco del conflicto desde sus inicios, hecho ostensible a partir de diciembre de 1941 como resultado del ataque japonés a Pearl Harbor. Y de igual manera, hacia el interior la guerra era la coyuntura para una toma de conciencia, por parte de los propios venezolanos, acerca de su debilidad como país, al ponerse en evidencia la carencia de una estructura económica capaz de hacer frente a las consecuencias de una restricción del comercio por motivos bélicos a pesar de ser un país tenido por rico (53).

A nuestro juicio, Medina Angarita ocupa un punto intermedio en la dinámica de modernización política, una especie de punto equidistante entre el orden tradicional que ya caduca y el orden democrático que ya emerge. En este sentido, es claro que Medina intenta la creación de un tipo de coalición política no necesariamente basada en la camarilla militar, aunque él mismo sea un general del Ejército; su apoyo social hay que buscarlo sobre todo en la burocracia gubernamental y en elementos significados de la clase alta y media de Caracas. Hay sectores de la clase dominante

que aceptan una flexibilización del sistema político; criados bajo el gomecismo, se dan cuenta que la muerte del dictador cerró una etapa y un modo despótico de gobierno imposible de continuar faltando la cabeza que lo sostuvo y le dio vida. Pero al mismo tiempo, la liberalización que apoyan no deberá tocar la esencia de la estructura política; se tratará de permitir una actividad opositora, una libertad de expresión -con límites-, una organización de sindicatos, etc., que no implique la modificación sustancial de los mecanismos para la toma de decisiones políticas; en otras palabras, se estará en presencia de una flexibilización dentro del sistema político que se viene arrastrando, pero que no llega a transformarse en otro completamente abierto y permisivo, que integre a todos los agentes e instaure el libre juego en elecciones competitivas

Medina intenta, en principio, orientar su acción política con atisbos de nacionalismo y progresividad. Así, pretende aumentar la participación del gobierno en los beneficios del petróleo y de hecho la reforma petrolera de 1943 tenía éste como uno de sus objetivos, junto a un mayor control por parte del Estado de la industria petrolera. Se propone dar impulso a las obras públicas de infraestructura en carreteras y puertos se esfuerza por un mayor control de las importaciones mediante una tarifa protectora. La creación, en 1944, de la Junta de Desarrollo de la Producción Nacional representa en este sentido el comienzo de un esfuerzo por coordinar un proceso industrializador nacional. También se intenta una legislación agraria que culmina con un texto en septiembre de 1945 y sobre el que se ha dicho que era "un esfuerzo épico entre las mejores intenciones por una parte y la más decidida resistencia por otra" (54). La ley agraria en efecto no daba derecho al agricultor a participar en la dirección de la reforma y el procedimiento expropiatorio estaba lleno de numerosos obstáculos (55).

En el área educativa, un ligero aumento se produce en el presupuesto de la misma, que es ya del 7,3%. Los programas a realizar incluían centros escolares y la iniciación de la Ciudad Universitaria de Caracas, junto a modificaciones en algunas escuelas superiores, a la vez que se daba comienzo a un programa de alfabetización con un proyecto piloto para 5.000 personas que se extendería a otras 15.000, a todas luces insuficiente para el grado de analfabetismo existente, calculado en más de un setenta por ciento de la población. Más aún, se daba el caso de que, aunque el presupuesto educacional llegó a ser el siete por ciento del total, sólo un tres por ciento estaba destinado a las áreas rurales, donde precisamente vivía la gran mayoría de la población venezolana. En materia de

salud y vivienda, el gobierno medinista inició programas de construcción de cloacas y acueductos y proyectos de drenaje en regiones infectadas; campañas específicas sobre malaria, anquilostomiasis, tuberculosis y lepra. De hecho, la tasa de mortalidad bajó levemente, de 16,4 en 1941 a 15,3 en 1945 y la mortalidad infantil registró un descenso de un 22%, aunque permanecía siendo alta (5%). Medidas todas que, en conjunto, indican ya el atisbo germinal de la participación del Estado en la vida económica y social.

Pero el problema clave, en el nivel político, se sitúa en la cuestión de la reforma electoral y la tendencia de Medina en este aspecto fue sin duda la preservación de la élite tradicional a costa de concesiones "razonables" a los sectores emergentes. La tímida liberalización es puesta de relieve con la Reforma constitucional de 1945. La modificación del texto fundamental de mayo de ese año sigue muy de cerca el modelo de la Constitución de 1936: si bien traduce el impacto producido en el sistema político venezolano por las nuevas condiciones económico-sociales y las demandas políticas de la población, éstas pretenden ser satisfechas mediante significativas limitaciones. Aparece un cierto grado de control y planificación de la economía del país, aumentándose las facultades del poder federal en cuanto a leyes de trabajo y previsión social, legislación agraria, expropiación por causa de utilidad pública y social y administración de justicia. Se establece que el poder federal "puede dictar en circunstancias extraordinarias las medidas económicas que fueren necesarias para racionalizar y regular la producción, circulación y consumo de riqueza" (57). A la eliminación de la anterior prohibición de las actividades comunistas y anarquistas, hay que agregar la introducción del sufragio femenino, pero limitado éste exclusivamente a las elecciones municipales; el derecho de sufragio general sigue atribuido a los venezolanos varones, mayores de veintiún años y que sepan leer y escribir, conservándose la forma de elección del Presidente de la República: dentro de los primeros quince días de cada período constitucional, las Cámaras reunidas en Congreso, elegirán presidente de los Estados Unidos de Venezuela (58).

Con razón afirma H.S. Howard que "la intención de Medina al extender el poder no era el de realizar una completa reforma electoral, sino más bien la de poner el poder en manos de su partido, el Partido Democrático Venezolano. Su legislación y alianza con los comunistas fue realizada probablemente para crear una muralla contra la amenaza más inmediata de Acción Democrática, más que para mejorar efectivamente la posición

de la clase trabajadora" (59). En efecto, el presidente Medina fundaba un partido desde arriba, artificioso y progubernamental, el Partido Democrático Venezolano (PDV), de carácter eminentemente coyuntural y formado con el fin de controlar la maquinaria electoral y comicial y darle así una apariencia más democrática al sistema. De otro lado, la convergencia entre el medinismo y los comunistas venezolanos llegaba incluso a una alianza para las elecciones municipales que pronto devino, más que un acuerdo local, en una colaboración interpartidista entre el PDV y el PCV. En este sentido, dice R. Escovar Salom que "Un análisis político de esta época revela con facilidad que esa experiencia le hizo daño a los dos: al gobierno de Medina, porque lo debilitó con las fuerzas armadas y los grupos que tradicionalmente apoyaban el status quo en Venezuela; y al Partido Comunista, porque esa táctica no era asimilada con facilidad por las masas de entonces, fundamentalmente antigubernamentales" (60). Pero no solo porque las masas fuesen simplemente antigubernamentales, sino porque, como hemos insistido, la política liberalizante del medinismo dejaba las demandas políticas de la época -sufragio universal, democracia representativa, transformación social y económica- completamente insatisfechas. Al PCV le faltó sin duda amplia perspectiva histórica y no comprendió que la dinámica generada en el seno de la sociedad venezolana iba a desbordar rápidamente los esquemas en juego, ello sin olvidar las directrices soviéticas de la coyuntura: los comunistas venezolanos -bajo el lema de "con Medina contra la reacción"- seguían la política del Komintern, sintetizada en impulsar a todos los partidos de Latinoamérica a una alianza con regímenes parcialmente democráticos para formar un frente antifascista en vista del contexto bélico. Ocurrió aquí algo que ha sucedido con frecuencia a los partidos comunistas latinoamericanos: la primacía de los dictámenes del centro de poder exterior soviético sobre el análisis de las respectivas realidades nacionales.

Mientras tanto, en estas circunstancias la oposición al régimen que daba protagonizada casi en solitario por el partido Acción Democrática, que iniciaba un intento de vertebración y articulación a escala nacional, ganando progresivamente adeptos en la opinión pública, y que llevaría a erigirse en el primer partido político moderno y de masas de la historia política venezolana contemporánea. Al mismo tiempo, la opción acciondemocratista esencialmente atacaba la contradictoria política medinista y sus ambiguos resultados. Después de todo, tal vez por exceso de una prudencia bien calculada, Medina no pasó de ser un reformador de liderazgo tradicional. Citando a C.E. Black, cabe reconocer que ...

"... este tipo de reformador está pocas veces preparado para realizar plenamente su labor, porque más temprano o más tarde viene a darse cuenta que se está reformando a sí mismo, a su familia y a sus amigos, quitándoles la posición que han tenido tradicionalmente, y poniendo en marcha un proceso que está destinado a minar la base de esa posición. Esas reformas, aunque con frecuencia tienen efectos perdurables, suelen ser de un carácter limitado, protector, defensivo, patricio" (61). Resultaría claro muy pronto que el rol de la reforma política y social iba a ser desempeñado por el partido opositor, Acción Democrática. Pero para ello iba a ser necesario romper abruptamente con el pasado.

(VI)

El llamado "Trienio Adeco" (1945-1948) se presenta definitivamente como el momento de ruptura con el viejo orden político tradicional. La crisis de éste es un hecho cierto y constatable, hasta el punto de que la única manera que hallarán los elementos tradicionales para oponerse al cambio político y social será el expediente usado frecuentemente en esta parte del mundo: el golpe militar.

En efecto, "bajo el impacto de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo a partir de 1943-1944, comenzó a cristalizar en el país una situación caracterizada por la aparición de nuevas formas de acción política y social ..., y por la adopción y los conatos de implantación de medidas de orden socio-económico y político que respondían al cuadro universal de lucha contra el fascismo. Aunque predominaban los factores exógenos de cambio, (...), resultaban estimulados considerablemente los incipientes factores internos de cambio, y debilitados los apoyos del status quo ..." (62). El movimiento cívico-militar de 18 de octubre de 1945, resultado de un acuerdo entre la oficialidad joven media del Ejército y el partido Acción Democrática dirigido por Rómulo Betancourt, iba a tener un profundo eco en todos los ámbitos de la sociedad. Su inesperada irrupción venía a poner término a la polémica existente sobre el modo de desenvolvimiento de la vida política del país, entre la continuidad evolutiva o el cambio acelerado. Las expectativas vinieron a justificarse por la existencia, en el seno de la sociedad venezolana, de un poderoso factor de cambio en estado potencial, cual era el del excedente de poder adqui-

-sitivo acumulado como consecuencia del incremento de la producción petrolera exigido por la guerra, del casi total cese del comercio internacional y de la escasez reinante en el país durante unos cuatro años (63).

Aparte de factores más inmediatos, lo cierto es que entre 1945 y 1948, la sociedad venezolana se va a enfrascar de lleno en la práctica de la democracia representativa por primera vez en el siglo XX: la profunda politización del país no dejará fuera sector ni institución alguna. La Junta Revolucionaria de Gobierno (1945), bajo la presidencia de R. Betancourt, iba a conducir a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (1946) que redactaría una nueva Constitución de hondo sentido democrático y social en 1947. Los comicios celebrados en ese mismo año para elegir presidente de la República y Cámaras legislativas de acuerdo a las nuevas normas, darían como resultado el triunfo de Acción Democrática y de su candidato el escritor Rómulo Gallegos. Durante aquellos tres años, la política, popularizada hasta límites no conocidos, parecía quedar definitivamente sustraída al juego exclusivista de restringidas camarillas y convertida en una actividad de masas. En este sentido, el trienio 1945-1948 manifestaría un enfoque cualitativamente distinto en materia de democracia, reforma y desarrollo, así como también en casi todas las cuestiones capitales.

Para 1945, en opinión de muchos se fue haciendo evidente que las tímidas reformas de la administración de Medina funcionaban a un ritmo que parecía deliberadamente lento. Los acontecimientos que dieron lugar a la convergencia cívico-militar de octubre de ese año indicaron que la liberalización medinista había llegado a sus propios límites, insuficiente ya para contener un proceso gestado hacía varios años, cuando en 1933 aparecieron nuevos sectores sociales y políticos emergentes. La alianza entre la oficialidad joven del Ejército y el partido Acción Democrática mostraba que, además del descontento militar por la situación, al menos en aquel momento y con distintas motivaciones, la balanza se inclinaba, en el seno de los sectores medios de la institución militar, a favor del cambio. Y en efecto, la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Betancourt integraba -además de significados miembros de AD- a dos mil tares, uno de los cuales era el coronel Mario Vargas, de reconocida filiación democrática.

La Junta se orienta a un cambio radical en lo político y a una profundización de la reforma en lo social. La posición política de Betancourt a principios de los años treinta, manifestaba gradualmente la repercusión de las ideas marxistas, tanto en lo referente a la propiedad como a la

organización. Indudablemente, sus experiencias en Venezuela y Costa Rica le enseñaron la necesidad de edificar una base político-social con qué combatir el orden existente. Pero desde el comienzo podían detectarse puntos en los que Betancourt disenta de los marxistas venezolanos exiliados o residenciados principalmente en México, rechazando lo que consideraba tácticas de "ultraizquierda" de un partido exclusivamente proletario que estimaba inadecuadas para Venezuela. La táctica de frente unido (obreros manuales, maestros de escuela, estudiantes, pequeños burgueses, intelectuales divorciados de su clase, artesanos, campesinos), parecía, a su juicio, ser más capaz de conseguir adeptos. Las disensiones con los marxistas "puros" existían también en materia programática: más que subrayar sólo un programa socialista, prefería Betancourt la adopción de un enfoque dual: un programa máximo o a largo plazo y un programa mínimo o a corto plazo, destinado a satisfacer los anhelos de libertad de las masas en favor de reformas electorales democráticas y mejoramientos inmediatos de sus condiciones de trabajo, es decir, un programa reformista. En este orden de ideas, afirmaba el trabajo político como un duro proceso de educación de las masas, cuyas tácticas y lenguaje debían adaptarse a la circunstancia y realidad de Venezuela. El proletariado de los campos de petróleo era sólo una pequeña proporción de la fuerza laboral total; de ahí que los esquemas de la revolución proletaria le parecieran imposibles aún en términos puramente marxistas. Previo a la transformación nacional, era necesario "un movimiento dirigido contra la entumecida conciencia política ..." (64); en otras palabras, despertar primero a las masas y luego proceder a impulsar sus condiciones de vida. (65)

Lo cierto es que para 1936, Betancourt había escogido la reforma como solución permanente y se hallaba ya envuelto en lo que iba a ser una constante rivalidad con los comunistas. Una vez rechazado el concepto de partido de una sola clase, Betancourt, con la creación de Organización Venezolana (ORVE), prefiguraba ya lo que a partir de 1941, con la fundación de Acción Democrática (AD) iba a ser el tan traído y llevado poli-clasismo, como un intento de abarcar virtualmente a todos los estratos de la sociedad, excepto los militares tradicionales, los latifundistas y la burguesía proimperialista, si bien es cierto que poniendo el énfasis policlasista en los sectores populares: la nascente clase obrera y el campesinado. El partido, "no tan tímido como los liberales clásicos, no tan radical como los comunistas" (66), subrayaría un carácter civil, social y democrático. Tendríamos, en síntesis, una organización política homolizable con los esquemas del radicalismo social-demócrata (67).

El reformismo nacionalista iba a expresarse en multitud de medidas, todas ellas de gran alcance social, económico y político. Así, la Junta revolucionaria [...] justificaba la determinación tomada el 18 de octubre. En un mensaje a la nación, Betancourt afirmaba que,

"El respaldo fervoroso dado por el pueblo a la revolución, la legítima. El desmoronamiento del régimen en el curso de escasas horas, revela cómo estaban minadas sus bases y cómo carecía de asideros en la opinión. Pero oportuno es el momento para decir que la valerosa y fervorosa Unión Patriótica Militar y la dirección del Partido del Pueblo, Acción Democrática, acordadas e identificadas en sus finalidades revolucionarias desde hacía varios meses, prefirieron siempre la fórmula evolutiva. El país sabe cuántas fueron las proposiciones conciliatorias que se formularon al gobierno de Medina Angarita, después por Ejército y Pueblo unidos el 18 de octubre, para que se realizara una consulta electoral idónea a la ciudadanía. El régimen, imbuido de orgullo demoníaco y resuelto a mantener a todo trance una situación que le permitía a sus más destacados personeros enriquecerse ilícitamente y traficar con el patrimonio colectivo, desoyó ese llamado de la opinión democrática. Y el país se vió al borde de la guerra civil, prolongada y cruenta, entre las dos facciones personalistas, animadas por idénticos objetivos antinacionales, y jefaturadas, respectivamente, por los generales Medina Angarita y López Contreras. La respuesta del pueblo soberano, la réplica airada de Venezuela a quienes persistían considerarla feudo suyo ..., fue la eliminación definitiva de ese régimen, de la vida política de la Nación. El procedimiento extremo a que se apelara, fue provocado por quienes se negaron obstinadamente a abrir los cauces del sufragio libre, para que por ellos discurriera el vehemente anhelo de los venezolanos de ejercitar su soberanía eligiendo directamente a sus gobernantes" (§§).

Y desde el primer momento la Junta procedió, entre varias medidas, a exigir contribuciones a los monopolios petroleros con el fin de intentar asegurar para el Estado el cincuenta por ciento (50%) de los beneficios del petróleo, a la vez que apoyaba a los sindicatos petroleros, reconociéndolos y aprobando aumentos sustanciales para sus trabajadores en salarios y otros beneficios a expensas de las compañías. Se reducía el precio del gas y del petróleo para uso interno y se aumentaban gradualmente las refinerías del oro negro en territorio venezolano, acordándose la política de no más concesiones. Por lo mismo, se produjo un enorme aumento de los ingresos gubernamentales, que llegaron en 1948 a ser el doble de todo el ingreso percibido por el gobierno durante los últimos años de Medina.

Al mismo tiempo se iban tomando decisiones referentes al desarrollo industrial. Se insistía en la industria pesada como área vital, así como

en la necesidad de una planificación de la economía. En el sector de la industria pesada, se creía que ésta contribuiría vitalmente a aumentar la tasa de crecimiento en el futuro ya que, por lo demás, Venezuela se hallaba en posesión de ingentes recursos de hierro y minas a cielo abierto. La Junta comenzó en este sentido un proyecto conjunto -no realizado ya que no habían terminado los estudios cuando se produjo el derrocamiento del gobierno constitucional de Rómulo Gallegos- sobre las cataratas del Río Caroní, en Guayana, que debía incluir una planta eléctrica para una capacidad final de 200.000 kilovatios, una fábrica nacional de acero y una fábrica de aluminio. Pero el criterio central, tanto de la Junta como de la posterior y muy corta administración de Rómulo Gallegos, iba a ser la utilización del ingreso petrolero como palanca para el desarrollo económico del país. Para el gobierno, apareció como de primera importancia la formulación de un amplio programa infraestructural, especie de plan racional y comprensivo mediante dos esquemas que fueron el Plan de Vialidad de 1947 y el Plan de electrificación. Bajo Gallegos se extendió el esquema hacia un vasto plan de comunicaciones que incluía un completo sistema de teléfonos, radioteléfonos y telégrafos.

En materia agrícola, la Junta insistió en mejoras técnicas y de las condiciones de trabajo, pero no en una modificación sustancial del sistema de propiedad latifundista. Sin embargo, la postergación de la reforma agraria no excluyó un importante programa para organizar comunidades agrícolas, según el cual la Corporación Venezolana de Fomento colaboraría con el Instituto de Inmigración y Colonización en la fundación de comunidades mixtas agrarias entre venezolanos e inmigrantes recién llegados. Para noviembre de 1948, había catorce (14) comunidades de este tipo, sobre una superficie de 33.000 hectáreas en once (11) estados. Además, se estudiaba la posibilidad de crear cooperativas agrícolas en zonas indígenas, junto a centros educacionales a fin de introducir en la vida nacional a una población cifrada en unas 111.000 personas. Hay que señalar que dichas comunidades, en régimen de trabajo semicolectivo, presentaron un aumento de la producción que en algunos casos fué significativo, con repercusiones en materia de cambio social de la mentalidad rural (6). También, el pequeño campesino comenzó a recibir créditos del Banco Agrícola y Pecuario. El incremento de los pequeños agricultores que participaron en esos créditos fue notable si tomamos en cuenta tan corto período de tiempo. En 1945, unos 1.146 recibían 33,8 millones de bolívares; para 1948, se constataban unos 81.093 con un total de créditos por valor de 96,4 mill.Bs. (10)

En materia de salud, con la Junta revolucionaria el enorme incremento cuantitativo en gastos sanitarios traducía también un salto cualitativo. No sólo se triplicaba el presupuesto sanitario -calculado en un 26 por ciento del total, si sumamos sanidad, beneficencia y obras públicas en hospitales- sino que las mayores disponibilidades permitieron al gobierno acciondemocratista concentrarse en las necesidades sanitarias del país a una escala sin precedentes y así, se registraron notables mejoras respecto a la malaria, asistencia médica a las zonas rurales, educación sanitaria y control de enfermedades infecciosas. En igual sentido, el presupuesto educacional era otro ejemplo de cambio cualitativo mediante considerables inversiones de los ingresos provenientes del petróleo. El programa de alfabetización de adultos significó, por ejemplo, un palpable progreso respecto al pasado: si en 1944 el gobierno medinista había destinado 56.000 bolívares a un proyecto piloto que beneficiaba a 600 personas; en 1945-46 se gastaron 260.000 bolívares y 250 maestros enseñaron de hecho a 15.000 personas. La campaña más intensa comenzó en 1947, cuando se alfabetizó a más de 41.000 personas; en 1948, con un presupuesto de 3.177.810 bolívares, era probable una alfabetización entre 31 y 37 mil personas. Auténticas "legiones alfabetizadoras" eran utilizadas en los programas y campañas y la falta de maestros se obviaba con estudiantes y jóvenes. Existía un precedente cercano en la campaña alfabetizadora mexicana de 1942, bajo el popular lema de "cada uno enseña a otro" (11). Sin embargo, la contratación de maestros de escuela ascendía de 1.200 en 1945 a 4.500 en 1948. Las escuelas secundarias registraban un avance de 29 a 47 liceos, y de 11.500 a 22.000 estudiantes; los estudiantes universitarios pasaban de 2.940 a 61.000 (12).

Por otra parte, la política laboral se orientó en un doble frente: dar estímulos a la formación de una burguesía industrial que ya había comenzado su proceso de desarrollo, y apoyar las mejoras de salarios, beneficios y condiciones de vida de los trabajadores. El incremento del poder de compra de los trabajadores estaría en relación directa con el avance del proceso industrial: dentro del esquema reformista se trataba de dar al factor trabajo el lugar que se le había negado en el Estado oligárquico. El apoyo al movimiento sindical fue prácticamente automático, cuestión que iba a reconocer la Constitución de 1947 mediante garantías específicas, tales como la huelga, pensiones, vacaciones pagadas, seguros de enfermedad, indemnizaciones por despido y participación en los beneficios. A su vez, la multiplicación de los sindicatos se reflejaba en el hecho de que en noviembre de 1948 había registrados 1.014 en el nuevo Ministerio

de Trabajo. La contratación colectiva pasaba a ser la fórmula del trienio: 227 en 1946; 483 en 1948 (74). Quedaba claro que octubre de 1945 iba a ser la fecha a partir de la cual se iniciará el auge y encuadramiento sindical del movimiento obrero en Venezuela. Después de las luchas por la hegemonía en el movimiento obrero, entre el Partido Comunista y Acción Democrática, la cuestión iba a resolverse a favor del segundo: la constitución, en 1947, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) con un Comité ejecutivo integrado por siete miembros, todos ellos afiliados a AD (74).

Desde el punto de vista del proceso constituyente, la Junta lo inició formalmente en marzo de 1946 con la promulgación de un Estatuto para la elección de representantes a una Asamblea Nacional Constituyente, acompañado de un decreto sobre garantías ciudadanas. El Estatuto instauraba el sufragio femenino en igualdad de condiciones que el masculino, al mismo tiempo que este derecho se ampliaba a los analfabetos. Las elecciones para la Asamblea, verificadas el 27 de octubre de 1946, dieron como resultado un triunfo aplastante del partido Acción Democrática. Participaron distintas formaciones políticas: el Partido Comunista (ya público con su correspondiente denominación), Unión Republicana Democrática (URD), bajo el liderazgo de Jóvito Villalba y el partido COPEI (social-cristiano) encabezado por Rafael Caldera y otros dirigentes egresados de los institutos católicos privados, además de otros grupos de pequeña importancia. De un total de 160 diputados, AD obtuvo 137; Copei, 19; URD, 2, y el PCV, 2 diputados. La votación popular se distribuyó en un 78,43% para AD; 13,22% para Copei; 4,26% para URD y 3,62% para el PCV (75).

En julio de 1947 se aprobaba el nuevo texto constitucional, uno de los más completos de la historia constitucional venezolana y que al mismo tiempo significaba una ruptura con todo el pasado constitucional más reciente, por sus claras innovaciones y la incorporación de las demandas políticas tan discutidas en los años posteriores a la muerte de Gómez. Aspiraciones de justicia social y gobierno democrático eran enunciadas en su Declaración preliminar: "La Nación venezolana proclama como razón primordial de su existencia la libertad espiritual, política y económica del hombre, asentada en la dignidad humana, la justicia social y la equitativa participación de todo el pueblo en el disfrute de la riqueza nacional (...) La sustentación de la democracia como único e irrenunciable sistema de gobierno ... y la colaboración pacífica en el designio de auspiciar ese mismo sistema en el gobierno y relaciones de todos los pueblos de la tierra. La nación venezolana repudia la guerra, la conquista y

El abuso del poderío económico como instrumentos de política internacional ..."(76).

El texto, de 253 artículos y 19 disposiciones transitorias, es sin duda más lógico, técnico y moderno que el de anteriores precedentes. La enumeración de los derechos individuales es la tradicional de otras constituciones, aunque agregándose el derecho de asilo por motivos políticos (art. 33). En los artículos 38, 39 y 40 se establece enfáticamente la separación de la Iglesia y el Estado y se prevee la posibilidad de un Concordato entre ambas entidades. El Estado se propone la protección de la familia, la maternidad y el niño; establece el patrimonio familiar inembargable y pretende eliminar las causas sociales de la prostitución (arts. 47, 49, 48 y 50). El Estado también establecerá progresivamente un sistema de seguridad social y fomentará la construcción de viviendas baratas (art. 52). La educación "será orientada a lograr el desarrollo armonioso de la personalidad humana, a formar ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la democracia, a fomentar la cultura de la nación y a desarrollar el espíritu de solidaridad humana" (art.54). La iniciativa privada en materia educacional recibirá el estímulo del Estado siempre que esté de acuerdo con los principios constitucionales y se declara la riqueza histórico-artística del país bajo control y salvaguardia del Estado (arts. 56 y 59).

Los derechos del trabajador son ampliados en relación a anteriores legislaciones: jornada de 8 horas, salario mínimo y regulación del trabajo de mujeres y menores, vacaciones anuales remuneradas, indemnización y preaviso en caso de despido, derecho de huelga, participación en los beneficios de la empresa, etcétera (art.63). Se reconoce el derecho de propiedad, con las limitaciones de la utilidad pública o el interés general (art. 65). Se asienta el principio del reparto progresivo y proporcional de los impuestos de acuerdo a la capacidad económica de los contribuyentes (art.232). Se reitera el carácter universal -masculino y femenino- del sufragio para los mayores de 18 años, sepan o no leer y escribir. El poder público es Municipal, de los Estados y Nacional, y éste último se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El texto regula también lo referente a funcionarios públicos, partidos políticos -con protección a los partidos minoritarios- y Fuerzas Armadas. El Municipio es autónomo y su órgano superior, el Concejo Municipal, es elegido por sufragio universal, directo y secreto. La denominación "Estados Unidos de Venezuela" sufre un vaciamiento de contenido: las Asambleas Legislativas estatales son elegidas por sufragio universal, directo y secreto, pero la competen-

-cia de los Estados se reduce drásticamente. Los Estados no tienen administración de justicia independiente de la nacional y su gobernador, representante del poder ejecutivo estatal, "es el agente del Poder nacional en el respectivo Estado" (art.134), siendo de libre elección y remoción por el presidente de la República. A su vez, el poder nacional puede tener en los Estados los funcionarios civiles y militares que requiera; el 25 por ciento de los ingresos por rentas del Fisco nacional serán entregados como situado a los Estados, Distrito Federal y Territorios Federales, y de ellos, el 20 por ciento será cedido a su vez a los municipios. Queda claro que en la Constitución de 1947 el poder nacional se convierte en la fuente básica de los ingresos de los Estados y Municipios, orientando y controlando sus fondos, sujetos a la supervisión de la Contraloría General de la Nación (arts. 123, 238 y 247). En consecuencia, hay un paralelismo evidente entre el crecimiento del Estado como principal agente económico y el papel asignado a éste en el texto constitucional.

Finalmente, el Legislativo nacional se organiza en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, cuya elección para ambos es directa, previéndose la representación de las minorías en ambas cámaras; los primeros en razón de uno por cada 40.000 habitantes, y los segundos en dos por cada Estado y Distrito Federal, que por primera vez está representado en la Cámara alta. Una Comisión Permanente del Congreso Nacional funcionará mientras éste no se encuentre reunido, elegida anualmente y formada por el presidente y vicepresidente del Congreso, y 21 miembros del mismo elegidos por éste en representación de las minorías. El presidente de la República es elegido por cinco años mediante sufragio universal, directo y secreto y no reelegible para el período constitucional inmediato (arts.192 y 193). El poder judicial reside en la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados son elegidos por el Congreso nacional, encomendándosele, entre otras funciones, la del control de la constitucionalidad de las leyes. Por último, la fiscalización de los ingresos y gastos públicos es competencia del Contralor General de la Nación, cargo elegido también por el Congreso (art.244) (H).

La importancia de la Constitución del 47 era puesta de relieve en el discurso pronunciado por Rómulo Betancourt en el acto de su promulgación:

"Esta Constitución que hoy se promulga consagra avanzados principios del moderno Derecho Público. Devuelve al pueblo, definitivamente, su inalienable derecho a elegir por voto directo, universal y secreto,

al Presidente de la República y a todos los organismos deliberantes del Estado, desde los Concejos Municipales hasta el Congreso de la República. Fija pautas que harán ya imposible el ilícito tráfico con el erario público y erradica ya para siempre del organismo estatal la secular lacra del peculado. Nacionaliza la Justicia y abre la posibilidad cierta de moralización de la judicatura. (...) Inserta una carta del trabajo, moderno decálogo de los derechos de la clase más revolucionaria y coherente que le ha nacido a la sociedad, explícita aceptación del hecho sociológico de que la Venezuela de hoy y de mañana traxinará rutas de progresiva superación en la medida en que se haga justicia social a sus forjadores más calificados: los obreros del pensamiento y del músculo. Ratificando el respeto a la propiedad privada, relación de derecho sobre la cual se afirma la estructura económica nacional, limita y condiciona su ejercicio, de acuerdo con el pensamiento que informa la legislación contemporánea, hija legítima del clima revolucionario que satura nuestro tiempo (...) Precisa y define la alta, indelegable función de las Fuerzas Armadas, organismos técnicos, apolíticos y no deliberantes, centinelas alertas en las fronteras de la Patria, institución al servicio de la paz y del orden público, substraída ya para siempre al juego de las combinaciones políticas y al imperio deprimente de jefes autocráticos. (...) Providencias de estímulo a la producción y de defensa nacionalista de nuestra economía; normas nuevas en educación; derechos del niño; incorporación definitiva de la mujer a la vida política de la Nación. Y junto con éstos y otros principios de altísimo contenido democrático, precisamente para hacer posible su vigencia, la Constitución que hoy se promulga estipula fórmulas para la defensa del Estado nuevo que ha de surgir cuando ella regule la vida política, económica y social del país" (4).

No obstante, el proceso reformista se manifestaba altamente conflictivo. Lo demostraba el carácter de la campaña presidencial de 1947, en la que los poderes conservadores tradicionales reaccionaban con fuerza ante la amplia serie de reformas de la Junta revolucionaria. Esta había promovido una serie de juicios por peculado y corrupción contra sus predecesores, lo cual movilizó a los sectores tradicionales, que, en represalia, intentaron pasar a la conspiración y el golpe. La campaña de Rómulo Gallegos, postulado por Acción Democrática, tal vez en previsión de lo que pudiera ocurrir con el proceso democrático, se orientó -sin divorciarse de la Junta y de la necesidad de reformas- hacia ideas de concordia, responsabilidad cívica y paz social. Ello no excluía la oposición fanática de algunos grupos católicos que apoyaban a Rafael Caldera, líder del partido social-cristiano Copei. Para estos grupos, el votar por Gallegos era nada menos que un pecado y Acción Democrática aparecía como el enemigo de la Iglesia junto a los socialistas y a los ateos (4).

A las elecciones para Presidente de la República (período 1948-1953), celebradas el 14 de diciembre de 1947, concurrieron tres partidos políticos: AD (con Gallegos), Copei (con la candidatura de Rafael Caldera) y

el Partido Comunista (PCV) con Gustavo Machado. De un total de votos de 1.172.543 (emitidos), Gallegos obtuvo 871.752; Caldera, 262.204, y Machado, 38.587 votos. Asimismo, en términos aproximados, AD obtenía 38 senadores y 83 diputados; Copei, 8 senadores y 20 diputados; Unión Republicana Democrática (que no presentaba candidato a la presidencia), 2 y 8, respectivamente; y el PCV, 2 y 6, respectivamente.⁽⁹⁰⁾ La victoria de Gallegos y de AD en las urnas era, pues, considerablemente holgada y el proceso electoral se había significado como el más democrático del país tal vez en toda su historia. El triunfo de Gallegos podía ser considerado, de otra parte, como la identificación de las mayorías populares -hasta entonces marginadas de toda participación política- con el proceso reformista en curso.

Pero el desarrollo del proceso reformista iba generando progresivamente la oposición de los elementos más recalcitrantes e intransigentes de la élite tradicional, y precisamente la reforma educativa se convirtió en uno de los aspectos de más alta conflictividad. Si el proceso general era ya cuestionado desde el momento en que se inició, la nueva legislación en materia educacional concentró los más enconados debates de aquél período; el sólo intento de reformar el sistema tradicional de enseñanza chocó frontalmente con la oposición de los sectores eclesiásticos, cuya influencia sobre la escuela era notable. La Junta de Gobierno, con el famoso decreto 321 (mayo de 1946), había querido regular lo relativo a calificaciones, promociones y exámenes en todas las escuelas, incluyendo las privadas o de la Iglesia u órdenes religiosas en su mayoría. La reacción del partido social-cristiano Copei, de orientación confesional-católica, se manifestó plenamente en los movidos debates de la Asamblea Constituyente por boca de uno de sus representantes, el diputado Barrios Mora: "Desde el punto de vista católico debo declarar aquí que el Decreto 321 tiene una fundamentación que no puede de ninguna manera encajar en la doctrina católica ... es una concepción socialista, extremadamente socialista o comunista, que nosotros no podemos admitir. La doctrina católica nunca ha podido reconocer, porque no es justo, el derecho que se pretende arrogar el Estado de orientar la educación de un país, porque eso sería ir contra el derecho natural de los padres de familia, e ir también contra el derecho sobrenatural de la Iglesia y contra el derecho de todas aquellas sociedades que quieran ejercer su libertad y su derecho a la educación en su Patria" (91).

De otro lado, en la nueva ley de educación toda la enseñanza quedaba sujeta a la inspección estatal, bajo la autoridad del ministro de

Educación, con la facultad de crear y administrar los establecimientos educacionales oficiales, fijar la validez legal de los estudios y vigilar la formación de la enseñanza nacional; se estipulaba también que la enseñanza en los establecimientos oficiales, como en los privados que aspiraban a tener una validez legal, debería estar regida por planes y programas dictados por el órgano ministerial. En ninguna escuela se permitirían doctrinas antidemocráticas ni antagonismos religiosos; se limitaba a la Iglesia, en concreto a los jesuitas (la mayor parte de ellos extranjeros), en la disposición que afirmaba la enseñanza de la geografía, historia, educación cívica y otras materias directamente relacionadas con el medio venezolano, como asignaturas a ser impartidas por venezolanos de nacimiento. En fin, la enseñanza religiosa (léase religión católica) se administraría a los niños cuyos padres así lo exigiesen, y no al contrario. Luis Beltrán Prieto, ministro de Educación del gobierno de Gallegos, afirmaba en este sentido la necesidad, en materia educativa, de un 'humanismo democrático' en base al cual la educación masiva llegaría a "formar hombres en nuestro país que tengan los pies en el suelo y que se dediquen en forma entusiasta y fervorosa al cultivo de la democracia, a la formación de hábitos y aptitudes para vivir en una nación democrática; pero al mismo tiempo, queremos con ello expresar que incorporamos al viejo concepto del humanismo el nuevo concepto de la tecnificación, del hombre para la explotación de las riquezas, de manera que éstas se pongan al servicio de todos, y no al servicio de una casta o de un grupo de privilegiados seleccionados en una forma que algún sociólogo llama la selección invertida, que no es siempre selección de los mejores sino de los más vivos" (32).

Por lo demás, la política agraria del trienio se iba a plasmar mediante la formulación de una ley agraria (1948) con la administración de Gallegos, después de que medidas de este tipo fueran pospuestas por la Junta revolucionaria. Pero de la normativa agraria podía deducirse una política de coexistencia entre la pequeña propiedad, la intermedia, las cooperativas y empresas comunales, y las grandes y mecanizadas explotaciones de tipo capitalista. Estábamos en presencia de una reforma agraria que, más que abolir radicalmente la gran propiedad latifundista, pretendía una redistribución de la propiedad dando poder a la masas rurales organizadas en sindicatos campesinos, la mayor parte de ellos influidos por Acción Democrática, y agrupados en la Federación Campesina de Venezuela. No obstante, el compromiso evidente que dejaba traslucir aquella normativa, los acontecimientos políticos iban a frustrar su aplicación:

el golpe militar de noviembre de 1948 dejaría en suspenso la legislación reformista en materia^agraria y como es obvio el proceso mismo de reforma política y social para dar paso a la involución.

Y es que el cambio político y social que se estaba operando en Venezuela no podía por menos de plantear graves interrogantes a los sectores que lógicamente se veían perjudicados por las reformas realizadas o en vías de realización. La oposición al régimen reformista fue radicalizándose progresivamente y pronto vió que por la vía electoral iba a ser imposible lo-grar sus objetivos. En realidad, ya se habían producido intentos de tipo conspirativo y reacciones violentas, en otras palabras, intentos de desestabilización que de alguna u otra manera indicaban que el orden tradicional se negaba a morir. Pero la solución no iba a ser la vuelta al caudillismo -habían desaparecido las condiciones socio-políticas que lo habían hecho posible-, sino que la opción tomará el camino del militarismo puro y simple, es decir, la dictadura militar tal y cual como se conoce en la época contemporánea. Y lo que es más importante, se tratará de aprovechar las discrepancias en el seno del Ejército, proponiendo a su fracción más conservadora la toma de la dirección de la institución militar. Factores circunstanciales como la traición del ministro de Defensa del gobierno de Gallegos no pueden hacer olvidar -pensamos- esta cuestión, que no ha sido por lo demás suficientemente analizada en la literatura sociológica en Latinoamérica: el Ejército no es una institución homogénea; más bien en su seno se mueven distintas tendencias, fracciones, sectores, que responden a orientaciones divergentes. Lo que hay que estudiar es cuál de ellas priva sobre las otras y qué condicionamientos permiten que, en un momento dado, un ejército que se declara apolítico y profesional, abandone súbitamente dicho papel y pase a intervenir en la vida política (1).

En este sentido, puede afirmarse que el golpe militar del 24 de noviembre de 1948 registra la confluencia, por un lado, del predominio de la fracción o fracciones reaccionarias del Ejército, con los sectores oligárquicos que no vieron otra forma de acabar con las reformas del trienio sino a través de la intervención militar. En efecto, la Junta Militar constituida después del golpe reaccionó violentamente contra las medidas reformistas, volviendo en cierta manera a la situación anterior a 1945. Y si en una primera etapa (1942-1952) se registra una indecisión respecto de la dirección a seguir, después no quedaron dudas acerca del predominio total de los sectores militares más duros, que llevarán a cabo incluso una depuración de los elementos militares demócratas o disidentes.

(VII)

Sin duda que una de las causas del golpe residía en el problema de la institucionalización de las Fuerzas Armadas, institucionalización que había avanzado desigualmente. Si bien es cierto que el Ejército se había tecnificado e introducido un sistema de escalafones que definía los criterios de selección y promoción de la oficialidad, todavía parte de la alta oficialidad se consideraba a sí misma como una especie de árbitro supremo del destino nacional. De otra parte, la alianza entre AD y la oficialidad joven se había realizado en forma circunstancial y posteriormente no se consolidó orgánica, programática ni ideológicamente, cuestión que aprovechó el militarismo histórico para reclamar un papel en la situación, aduciendo la consabida tesis de que el país estaba sumido en el "desorden" y el "caos".

Desde el punto de vista del cambio y la modernización política, el golpe militar que derriba al gobierno constitucional del escritor Rómulo Gallegos puede resumirse como la reacción de las fuerzas conservadoras de la sociedad venezolana ante el intento de ruptura del orden social tradicional, rechazando la vigorosa apertura democrática y la política reformista del trienio en lo económico y social. La década 1948-1958 se inicia bajo el signo de la represión política, encaminada esencialmente a desarraigar partidos y sindicatos y el movimiento democrático se ve seriamente afectado por el asesinato político y los condicionantes del exilio al que se ven obligados gran cantidad de dirigentes de aquéllos. En realidad, el triunvirato militar -integrado por los coroneles Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Luis F. Llovera Páez- dirige toda su fuerza persecutoria principalmente contra el partido Acción Democrática y las organizaciones sindicales y agrarias generalmente influenciadas por dicha organización. AD será declarada fuera de la ley, mientras que URD, Copei y un sector del PCV continuarán operando públicamente. De hecho, miembros de URD y Copei aceptaron cargos públicos en la administración militar recién estrenada, fundamentalmente en sectores medios y locales.

Las tensiones y pugnas por el poder en el seno de la cúspide militar no tardarán en hacerse presentes. Después del asesinato del presidente Carlos Delgado Chalbaud, en noviembre de 1950, Marcos Pérez Jiménez emer-

glo como el "hombre fuerte" del gobierno, ayudado por el boom petrolero a raíz del conflicto de Corea y la forzada despolitización. El intento de legitimar el gobierno militar mediante la convocatoria electoral de 1952, que URD ganó con la vital ayuda de los votos de la disuelta Acción Democrática, terminó en la anulación del resultado electoral adverso, en el exilio de muchos líderes urrredistas y en la ascensión de Pérez Jiménez a la jefatura del Estado. Será en este momento cuando Copei y URD pasen a la oposición a la dictadura.

En efecto, los resultados de estas "elecciones" confirmaron de alguna manera la fortaleza popular de la oposición clandestina y de resistencia civil propugnadas principalmente por Acción Democrática. La formación de un Frente Electoral Independiente (FEI), pro-gubernamental, no pudo contener los 1.198.000 votos a favor de URD. El partido dictatorial obtuvo 403.000 y el Copei, 306.000 -aproximadamente. Como decimos, el resultado fue desconocido y Pérez Jiménez se autoproclamó presidente de la República en una célebre sesión de un Congreso espúreo reunido en abril de 1953. (34). En tales condiciones se promulgó una nueva Constitución que derogaba expresamente a la de 1947 y seguía muy de cerca el modelo de la Constitución de 1936, reformada en 1945 bajo el medinismo. El texto de 1953 era más breve, centralista y socialmente conservador. Acogía la teoría de la plataforma continental al definir el territorio nacional (art.2) y el federalismo era reducido a su más mínima expresión, abandonándose el nombre de "Estados Unidos de Venezuela" por el de "República de Venezuela". Las competencias del poder nacional se ampliaban en forma extraordinaria, asumiendo funciones que antes correspondían a los Estados, y a "toda materia que la presente Constitución no atribuya a otros poderes" (art.60-29^o). En la parte dogmática se volvía a la estructura tradicional, omitiéndose incluso la enumeración de algunos derechos sociales aparecidos en la constitución de 1947. Por otra parte, si los diputados eran elegidos por sufragio universal, directo y secreto (cuestión que nunca se aplicó), los senadores vuelven a ser elegidos por las asambleas legislativas estatales, y los correspondientes al Distrito Federal por el Concejo Municipal. Pero lo que reflejaba en forma más cruda la situación dictatorial era una disposición transitoria que autorizaba al presidente para tomar medidas a fin de preservar en toda forma la seguridad de la nación, la conservación de la paz social y el mantenimiento del orden público (35).

La ideología del régimen perezjimenista -si tal cabe-, bajo la rúbrica del llamado "Ideal Nacional", exaltaba con connotaciones fascistas los elementos patrióticos de un nacionalismo regresivo y conservador,

y que estaba muy lejos de la filosofía latinoamericanista de la etapa inmediatamente anterior. Más bien, las proclamas y celebraciones patrióticas del gobierno actuaban como cortinas de humo de una realidad signada por la violación constante de los derechos humanos más elementales. (86) Como un ejemplo de tantos basta recordar la política auténticamente anti-óbrera seguida por la dictadura y destinada a liquidar a las numerosas organizaciones sindicales surgidas entre 1945 y 1948. La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) desaparecía como central obrera y sus principales dirigentes eran encarcelados a raíz del golpe militar o se veían obligados a exiliarse. Los intentos de hacer frente al régimen terminaron en el fracaso y el gobierno militar decretó la disolución de los distintos organismos afiliados a la CTV. No obstante, en años sucesivos el movimiento sindical logró iniciar acciones de lucha contra la dictadura en la clandestinidad, en combinación con los partidos Acción Democrática y Comunista, de incuestionable importancia en los sucesos que confluyeron en el derrocamiento del régimen, en enero de 1958 (87).

El régimen militar de 1948-1958 se vio favorecido y apoyado en la expansión petrolera que, sin embargo, no eliminó sino profundizó más bien una serie de desajustes estructurales que se venían arrastrando desde hacía tiempo. La dictadura perezjimenista en este sentido entregaría al régimen democrático posterior una complicada herencia de problemas sociales y económicos que nos atrevemos a decir perduran hoy todavía bajo formas agudizadas y en relación directa con el propio modelo de desarrollo seguido hasta ahora. En la etapa dictatorial, a pesar de que el producto territorial bruto creció a una tasa anual del 8 por ciento, las desigualdades en materia de ingreso, empleo y producción se ampliaron y agudizaron con gran fuerza. Si el Estado continuaba su proceso de crecimiento e intervención en la vida económica, la inexistencia sin embargo de una racionalidad administrativa y el perfeccionamiento de los vicios de peculado, nepotismo y compadrazgo constituían una realidad cotidiana que deformaba constantemente el aparato político direccional. La proposición y realización de una política de construcción y de obras públicas, la mayor parte de carácter suntuario, se hizo a costa de una reducción considerable de la inversión en materia educativa y sanitaria, con lo que el rezago en la satisfacción de las necesidades sociales del país fue un hecho permanente.

En este orden de ideas, resulta ya un lugar común el señalamiento del despilfarro de recursos que originó, sin cambio alguno en la estructura económica del país, la política inversionista del gobierno de Pérez Jiménez. En un estudio de la CEPAL (Comisión Económica para América

Latina) se demostraba cómo la concentración de la inversión en viviendas y carreteras llevó al olvido la de educación y salubridad. Basta señalar cómo la inversión en atracciones turísticas fue dos veces mayor que la correspondiente a educación, la cual, por otra parte, sólo absorbió poco más del 1 por ciento del total de gastos de capital. La política inversionista de la dictadura estuvo más orientada al mantenimiento de una estructura dependiente que a favorecer un desarrollo autónomo de la economía nacional: las supercarreteras, los hoteles de turismo de lujo traducían el carácter suntuario de la inversión pública en este período, e incluso con un predominio de lo 'ornamental' por sobre criterios de rentabilidad, como se demostraría con el carácter fuertemente deficitario de muchas de estas faraónicas construcciones. La consecuencia fue un auge inusitado -por desproporcionado y anormal- de la industria de la construcción y la canalización de la inversión privada hacia esos sectores, en desmedro de la industria de bienes y de la agricultura (99).

Cabe decir que uno de los rasgos más importantes de este período lo constituye el fortalecimiento del poder económico de la burguesía venezolana, que apoyó sin duda al régimen hasta el momento en que se produjo la crisis administrativa y hacendística. En efecto, la etapa perezjimenista es para la burguesía criolla un lapso de fortalecimiento y consolidación, del cual sale con plena conciencia de sus intereses de clase, tal como se iba a poner de manifiesto a partir de 1958. En efecto, la crisis económica de 1956-57 jugó un notable papel en la caída de Pérez Jiménez. El origen de esta crisis hay que buscarlo en la disminución de la tasa de crecimiento de las exportaciones petroleras: la finalización de la reconstrucción europea, la conclusión en los Estados Unidos del proceso para generalizar el uso del diesel y la resolución de las crisis de Corea y del canal de Suez, hicieron estabilizar la demanda mundial de petróleo, que repercutió directamente en los ingresos fiscales venezolanos. El gobierno militar, con el fin de cubrir compromisos con la deuda interna, recurrió al expediente de otorgar nuevas concesiones petroleras en 1956, que si bien trajeron un ingreso adicional al Estado, manifestaba el entreguismo de una dictadura que nada tenía que hacer con la soberanía nacional. Las concesiones, por un total de 821.000 hectáreas, significaron ingresos por 2.188 millones de bolívares que sin embargo no fueron suficientes (99).

Fue haciéndose evidente que la paz impuesta en lo político y sindical, el desenfrenado enriquecimiento de grupos oligárquicos y la entrega de los recursos mineros a las compañías internacionales, no bastaban

para garantizar la permanencia del régimen. La farsa del plebiscito de diciembre de 1957 iba a traer como consecuencia el aislamiento del dictador en el seno de las propias fuerzas armadas.⁽⁹⁰⁾ La verdad es que la realización de un plebiscito increíblemente manipulado y fraudulento, destinado a prolongar el poder de Pérez Jiménez, dió estímulos a movimientos de disidencia militar que culminarían en una insurrección cívico-militar que iba a cerrar la etapa dictatorial el 23 de enero de 1958. ■ Por lo demás, la intensificación de la oposición a la dictadura tomaba cuerpo entre grupos urbanos de clase media, entre los estudiantes universitarios y el movimiento obrero, así como también por parte de la Iglesia: la carta pastoral del arzobispo Rafael Arias Blanco (mayo de 1957), que criticaba la política social de la dictadura, significó el paso del catolicismo jerárquico y oficial a la oposición. La apertura de comunicaciones entre AD, URD y Copei, llevó a una reunión en Nueva York entre sus máximos líderes, Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera, respectivamente; la formación de una Junta Patriótica (AD, URD, Copei y PCV) en el interior, eran muestras manifiestas de una convergencia de las fuerzas políticas existentes para buscar una salida a la situación. Finalmente, se produjeron fenómenos de redefinición y recomposición de fuerzas en el seno de la institución militar que iban a permitir la evicción del dictador. No hay que olvidar tampoco la actitud progresivamente crítica de sectores importantes de la burguesía venezolana: el establishment económico había hecho pública una Declaración en relación a la situación política del país el 10 de enero de 1958, en la que hacía un llamado al retorno a la austeridad, honestidad y libertades civiles. Destacados empresarios figurarían en el gobierno provisional que siguió a la caída de Pérez Jiménez ⁽⁹¹⁾.

Tal vez el más grave pliego de acusaciones formulado contra la dictadura de 1948-1958 sea precisamente la Exposición de réplica presentada por Antonio José Lozada, Fiscal General de la República, el 10 de enero de 1968 ante la Corte Suprema de Justicia, en el juicio seguido contra el ex-dictador por perpetración del delito de peculado continuado y agravado ⁽⁹²⁾:

"El 24 de noviembre de 1948, el acusado, como jefe de una rebelión militar, derrocó el gobierno presidido por el ilustre venezolano Don Rómulo Gallegos. Con este acto de fuerza atentó contra la soberanía del pueblo, depuso un régimen de derecho e instauró en su lugar una de las más terribles dictaduras que ha padecido el país. Sus integrantes cometieron toda clase de delitos contra las personas y sus bienes, por lo cual fueron procesados después del 23 de enero de 1958 como fue demostrado en el sumario por el Procurador quere-

-llante. Las detenciones ilegales eran la regla. No se respetaba edad, sexo ni condición social. El general (r) Marcos Pérez Jiménez impartía las órdenes precisas para que el Director de la Seguridad Nacional y los funcionarios subalternos de la llamada 'Sección Político-Social' llevaran a efecto todos esos hechos contra la libertad y la integridad física de las personas" (...) "De esta persecución política, de todos conocida, no escaparon ni siquiera los miembros de las Fuerzas Armadas, los propios compañeros del procesado, los cuales fueron sometidos a estrecha vigilancia y muchos fueron encarcelados o extrañados del país"

"Fue público y notorio que el gobierno usurpador del general (r) Marcos Pérez Jiménez desconoció y atentó contra los derechos políticos y los individuales referentes a la inviolabilidad de la vida y la libertad personal y violó todas las garantías que la Constitución consagra a los venezolanos:"

- a) "Las personas, incluso los delinquentes comunes, eran detenidas, en la generalidad de los casos, sin la orden de la autoridad judicial. A los calabozos de la Seguridad Nacional y de sus dependencias fueron a parar millares de personas que discrepaban del régimen. Los campamentos de 'Guasina' y 'Sacupana' y las cárceles de Ciudad Bolívar, Caracas y otras ciudades del país, resultaron insuficientes para albergarlas" (...) "Esos recintos fueron testigos de torturas sufridas por los detenidos para obligarlos a reconocer culpabilidad en expedientes elaborados por la Sección Político-Social de la Seguridad Nacional. Como consecuencia de ese trato inhumano, muchos perdieron la vida o sufrieron lesiones corporales y daños morales" (...)
- b) "El hogar doméstico y la correspondencia en todas sus formas fueron constantemente violados durante el gobierno despótico del acusado. Cuanto al primero, los allanamientos ocurrían sorpresivamente a altas horas de la noche. Estos y la ocupación de cartas, telegramas y demás papeles privados, se ejecutaban sin intervención de ninguna autoridad judicial. Igualmente fue desconocido el derecho de transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o de residencia, ausentarse del país y volver a él. En cumplimiento a órdenes del procesado fueron extrañadas millares de personas a las cuales se les negó el derecho de regresar a Venezuela mediante instrucciones impartidas a los Consules para negar las visas requeridas en esa época, aún para ciudadanos venezolanos" (...)
- c) "El derecho a expresar el pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura previa, fue cercenado por el gobierno presidido por el acusado. La prensa estuvo estrictamente censurada, al punto de que la simple información sobre la comisión de delitos comunes se controlaba o suprimía. Hasta la obra literaria o científica era intervenida por el lápiz rojo del examinador para no permitir la más leve referencia a cualquier tema que pudiera considerarse lesivo al régimen imperante. Las partes y sus abogados estuvieron también restringidos en el derecho de exponer en estrados lo que considerasen necesario para la defensa de sus intereses económicos y de la libertad personal" (...)
- d) "En la mayor parte del tiempo del gobierno presidido por el acusado fueron suprimidos los derechos de reunión pública o privada y el de asociación con fines lícitos; especialmente el de los venezolanos para el ejercicio del voto de integrarse en partidos políticos para participar en la orientación de la política

nacional. El acusado impidió, sistemáticamente y violentamente, cualquier tipo de manifestación pública; y los partidos políticos que existían para el 24 de noviembre de 1948, los disolvió por decretos ilegales, pronunciados, unos, a raíz del derrocamiento del gobierno de Don Rómulo Gallegos; y los otros, después del 30 de noviembre de 1952, en represalia por los resultados adversos de la consulta electoral realizada en esa oportunidad" (...)

- e) "Durante el gobierno despótico del acusado fue restringido el derecho a la educación. Los programas de alfabetización establecidos en el período 1945-48 desaparecieron. Fue desatendida la formación de personal docente y la construcción de locales adecuados para escuelas y liceos. La educación especial, que el régimen tendía a evitar su gratuidad, estuvo reservada a las personas pudientes. Al derrocamiento de la dictadura, apenas alcanzaban a trescientos mil los niños asistentes a las escuelas primarias" (...)
- f) "El gobierno dictatorial arremetió siempre contra el derecho de trabajadores y de patronos a asociarse en sindicatos para la mejor realización de sus funciones y la garantía de los derechos de sus miembros. Durante su imperio fueron disueltos todos los sindicatos que existían para el 24 de noviembre de 1948, por lo cual se restringió a los trabajadores en su derecho al pago de un salario justo por la labor realizada. Sólo se permitió la subsistencia de los formados bajo la dirigencia de personas afectas a la dictadura, interesadas en la perpetuación del régimen para su beneficio personal, y no en la protección de los intereses de los escasos grupos cuya representación se atribuían" (...)

En cuanto a la acción administrativa del perezjimenismo, la labor de éste

"se limitó a la ejecución de obras suntuarias en la capital de la República y en algunos Estados centrales, con el mayor olvido de la provincia. Los problemas de ésta quedaron sin resolver y afloraron a raíz del derrocamiento del régimen dictatorial. Así lo demuestra la migración masiva hacia las principales ciudades, lo cual agravó el problema del desempleo ..." (...) "La acción administrativa se dirigió también, en la mayoría de los casos, hacia los amigos y protegidos del dictador con el fin de que se enriquecieran económicamente en detrimento de la buena marcha de los servicios públicos" (...)

De igual manera fue notoria la actitud sumisa del régimen militar hacia las compañías explotadoras de petróleo:

"(...) Es del conocimiento público que en el año 1957, como paliativo del déficit fiscal y de la profunda crisis económica que padecía el país como consecuencia de la administración del régimen despótico, la Nación sufrió la mayor afectación en sus intereses por el otorgamiento de concesiones a las Compañías que abarcaron gran extensión de su territorio. El considerable valor pagado por el otorgamiento de las concesiones aludidas permitió la subsistencia de la dictadura por más de un año, hasta que la referida crisis económica y fiscal hizo explosión y unificó a todas las corrientes de la opinión nacional y de la economía. A tal punto que en los días 21 y 22 de enero de 1958 se produjo el estallido de una huelga general contra el gobierno del acusado, la cual no pudo abortar con todos los medios de represión que

utilizó contra ella. Tal estado de cosas obligó a la oficialidad democrática de nuestras Fuerzas Armadas a sumarse al movimiento popular, hasta concluir con el derrocamiento del tirano, el 23 de enero del mismo ... año" (...). (43).

- NOTAS AL CAPITULO CUARTO -

1.- Venezuela agraria y Venezuela petrolera.-

- (1) Jean-Jacques Berreby, El petróleo en la estrategia mundial, (Madrid: Ed. Guadarrama, 1974. Trad. de P.Valera Lacasa), pp. 40 y 144.
- (2) Sobre este tema, sin pretender ser exhaustivos, puede consultarse Peter R. Odell, Petróleo y poder mundial. Una interpretación geográfica (Caracas: Editorial Tiempo Nuevo, 1971. Trad. de S.I. Santamaría); Pierre Péan, Petróleo: la tercera guerra mundial (Caracas: Monte Avila Editores, 1975. Trad. Ugo Ulive, prólogo de J.-P. Vigier); Denis Bauchard, Le pétrole: présent et avenir, en Revue Tiers Monde, t.XVII, No.66, abril-junio de 1976, pp. 401-417 (número colectivo sobre Les produits de base et la politique internationale); Michael T. Klare, "La stratégie américaine dans le Golfe Arabo-persique", artículo recogido en Le Monde Diplomatique, número 264, marzo de 1976, pp. 6-7; finalmente, Mahmoud Hussein, Sobre el papel activo de la periferia: el ejemplo árabe, ensayo recogido en La crisis del imperialismo, colectivo de S. Amin, A. Fajre, M. Hussein y G. Kassab (Barcelona: Ed. Fontanella, 1975. Trad. P. Carnell, pp. 159-179).
- (3) Berreby: op.cit., pp. 79, 161 y ss y 166. De Juan Pablo Pérez Alfonso, Política Petrolera (Caracas: Imprenta Nacional, 1962; también, Juan Pablo Pérez Alfonso (ponente), La dinámica del petróleo en el progreso de Venezuela (Caracas: Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, 1965. Colección Foros y Seminarios).
- (4) Berreby, p. 172.
- (5) Leonardo Ruiz Pineda, Ventanas al Mundo. Autobiografía. Acción parlamentaria. Artículos de Prensa (Caracas: Ed. Arte, 1961. Biblioteca de autores y temas tachirenses, Edición Cuatricentenario), p.144.
- (6) Domingo Alberto Rangel, El proceso del capitalismo contemporáneo en Venezuela (Caracas: Publicaciones de la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, 1968), Cap.VI: "La borrasca petrolera", pp. 111-112 y 113-114.
- (7) Rangel: op.cit., p. 129.
- (8) Ramón Losada Aldana, Dialéctica del Subdesarrollo (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela, 1976. 3a.ed. Prolog. de D.F. Maza Zavala), p. 214 del Apéndice "Fetichismo del Petróleo" (pp. 213 y ss).

- (9) Ver Armando Córdoba y Héctor Silva Michelena, Aspectos Teóricos del Subdesarrollo (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1967), p. 137. Citado por Losada Aldana, p. 217.
- (10) Para estas estimaciones, Rangel: op.cit., p. 134. El mismo autor señala la particularidad de esta evolución económica: "En ese lapso -(1936-1960)- ocurrieron una guerra mundial y tres recesiones en las economías occidentales. En Venezuela ninguno de tales fenómenos se tradujo en debilitamiento del ritmo de crecimiento. Pocas naciones pequeñas han logrado salir inmunes frente a las peripecias del ciclo capitalista internacional de nuestros tiempos. Siempre se dio el caso, como lo comprueban los estudios de las Naciones Unidas, de un quebrantamiento de la cadencia del producto bruto cuando sobrevinieron, en los planos de las relaciones internacionales, las crisis en que se manifiesta el modo de producción capitalista. A corto plazo, las perturbaciones exteriores han impreso en los países de América Latina una atonía pronunciada a la tasa de incremento del producto bruto. Existe una correlación, matemáticamente precisada por las investigaciones de la CEPAL, entre las dificultades económicas internacionales y el pulso del producto bruto en casi todas las naciones de nuestro continente. Venezuela resistió victoriosamente, aún a corto plazo, el influjo descoyuntador que proviene de las recesiones del capitalismo. El debilitamiento del auge de su producto bruto, en esas contingencias, jamás duró más de un año en todo el ciclo que va de 1936 a 1960. (...) Venezuela denota una tendencia vigorosa al crecimiento en un mundo caracterizado por las oscilaciones más penosas" (pp. 134-135).
- (11) Rangel: op.cit., pp. 135 y 138.
- (12) Losada Aldana: op.cit., pp. 225-231.
- (13) Sergio Aranda, La Economía Venezolana. Una interpretación de su modo de funcionamiento (Bogotá: Siglo XXI Editores de Colombia, 1977), p. 19.
- (14) Citamos a Marcos Kaplan, Formación del Estado nacional en América Latina (ed.cit.), p. 268.
- (15) "El capitalismo monopolista es la fase más desarrollada del sistema capitalista, aquella en que, como consecuencia del proceso de concentración de la propiedad y de la producción, el conjunto de relaciones económico-sociales ha venido a quedar dominado por un reducido número de grandes empresas, con poder determinante en el control de la oferta tanto de bienes de consumo como de medios de producción, incluso de dinero. Así, lo que era típico y esencial en el mecanismo funcional del capitalismo de los siglos XVIII y XIX, la competencia atomística o 'libre competencia', queda sustituida por lo que es característico en el funcionamiento del capitalismo contemporáneo en los países más avanzados y, por tanto, en el área capitalista mundial como un todo: la competencia monopolística": Francisco Mieres, El petróleo y la problemática estructural venezolana (Caracas: Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-Universidad Central de Venezuela, 1969. Colección Esquema), p. 9. (los subrayados son del autor)
- (16) Mieres: op.cit., especialmente Cap.II: "La industria petrolera en el área capitalista del mundo", pp. 27 y ss.

- (17) Para estos datos, Kaplan, op.cit., p. 284.
- (18) Cf., Domingo Alberto Rangel, El Rey Petróleo (Tomo II de "Capital y Desarrollo. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1970), p. 85.
- (19) Sobre estas precisiones y cifras, Mieres: op.cit., pp. 63 y 68-71. Es útil en este sentido Harvey O'Connor, El imperio del petróleo (México: Ed. Humanismo, 1956).
- (20) Edwin Lieuwen, Petroleum in Venezuela. A History (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1954. University of California Publications in History, Volume 47); edición en castellano: Caracas, 1964, pp. 29-30. Citado por Federico Brito Figueroa, Venezuela Siglo XX (La Habana: Ediciones Casa de las Américas, 1967), p. 35. En la edición en inglés, Lieuwen estudia el período inicial de la actividad petrolera en Venezuela en Cap.III: "Gestation Period" (1913-1922), pp. 18 y ss, y la primera expansión en Cap.IV: "Boom Era" (1922-1929), pp. 33 y ss.
- (21) Ver Arturo Uslar Pietri, "Discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Versalles", recogido por Piar Martínez Natera en Geografía Económica de Venezuela (Caracas: Ediciones CO-BO, 1972. 5a.ed. coorr. y ampl.), pp. 193-211.
- (22) Pedro Esteban Mejía Alarcón, La industria del petróleo en Venezuela (Caracas: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Facultad de Economía-Universidad Central de Venezuela, 1972), pp. 101-102.
- (23) Mejía Alarcón: op.cit., p. 102. Sobre la corrupción en la política de concesiones del gomecismo, Lieuwen: op.cit., (edición en inglés) pp. 34 y ss.
- (24) Rangel: El Rey Petróleo, ed.cit., p. 160.
- (25) Idem., pp. 164-165.
- (26) Rangel: op.cit., p. 118.
- (27) Estimaciones de Brito Figueroa, Venezuela Siglo XX, ed.cit., pp. 120 y 132.
- (28) Brito Figueroa, op.cit., p. 179.
- (29) Sobre la dependencia económica de Venezuela respecto de USA y el deterioro de la relación de intercambio, ver D.F. Maza Zavala, Venezuela, una economía dependiente (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1964), pp. 311 y ss y 319 y ss.
- (30) Brito Figueroa: op.cit., p. 166.
- (31) Tomamos el cuadro de Brito Figueroa, p. 168.
- (32) F. Mieres, El petróleo y la problemática estructural venezolana, ed.cit., pp. 177-178.
- (33) Han existido dos categorías de impuestos: los regulares y los oca-

-sionales. Los impuestos regulares han sido los pagos ligados a las actividades corrientes de producción, tales como las regalías y el impuesto sobre la renta, mientras que los impuestos ocasionales se han conectado al otorgamiento de nuevas concesiones y a las operaciones derivadas de éstas (impuestos iniciales de exploración y explotación). Los impuestos regulares se erigieron en decisivos para la nación venezolana. Así, la regalía o pago de las empresas al gobierno se realizaba como contrapartida del disfrute de los ya cimientos que les era concedido por el Estado, propietario de los mismos (equivaldría a un royalty). Durante más de tres décadas, la regalía fue el principal impuesto regular -casi el único-; luego fue alcanzado y superado por el impuesto sobre la renta, pasando a ocupar el segundo lugar en importancia (Mieres: op.cit., pp. 183-185).

- (34) Rangel, op.cit., p. 201.
- (35) Mieres: op.cit., p. 58. La fuente del autor es la Memoria del Banco Central de Venezuela (Caracas: 1963), p. 189.

2.- Petróleo y Estructura social.-

- (1) Juan Manuel Polo, Venezuela insólita (Caracas: Ed. Centauro, 1976), p. 165.
- (2) Rangel, El Rey Petróleo, ed.cit., p. 225.
- (3) Ibid., p. 228. Cálculos del autor y Banco Central de Venezuela.
- (4) Orlando Araujo, Venezuela violenta (Caracas: Tipografía Adriático, 1968), p. 46.
- (5) Salvador de la Plaza, La economía minera y petrolera de Venezuela (Caracas: Publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-Universidad Central de Venezuela, 1973. Prol. de H. Malavé Mata), pp. 23-24.
- (6) De la Plaza: op.cit., p. 29.
- (7) Brito Figueroa, Venezuela Siglo XX, ed.cit., pp. 40-41 y 43. Un caso notable e insólito era el de Juan Vicente Gómez. En 1936, los bienes del dictador fueron estimados en 800 millones de bolívares. Las mejores tierras de los valles centrales, llanos, cordillera andina, pertenecían a Gómez y familiares. El autócrata ocupó literalmente las fincas más representativas de la riqueza agropecuaria venezolana. Latifundios con auténtica historia. El de Chuao, por ejemplo, formado en la Venezuela colonial por mercedes de tierras otorgadas a Cristóbal Mexías de Abila, perteneció luego a la Iglesia a título de Obra Pía; en 1826, Bolívar lo incorporó al patrimonio de la Universidad de Caracas, hasta 1883, cuando A. Guzmán Blanco se apropió de sus bienes; en 1917, Gómez terminó haciéndose con la hacienda Chuao. De la misma manera, las haciendas Tapatapa y La Trinidad, en la Colonia propiedad del marqués de Casa León, pertenecieron durante la República a José Antonio Páez y fueron adquiridas posteriormente por J.V. Gómez (Brito, pp. 50-51).

- (8) Ibid., pp. 208-209.
- (9) Cf., Rangel, op.cit., pp. 331 y ss.
- (10) O. Araujo: op.cit., p. 39.
- (11) I. Sotelo, Sociología de América Latina, ed.cit., pp. 112-113.
- (12) Ibid, pp.117-118.
- (13) Sotelo, pp. 118-125. En este sentido, Vania Bambirra ha propuesto una tipología de la dependencia (tipos específicos de capitalismo dependientes), distinguiendo un tipo A: países con comienzo de industrialización antigua (Brasil, México); un tipo B: industrialización producto de la integración monopólica (Perú, Venezuela); y un tipo C: países con estructura agrario-exportadora sin diversificación industrial (Paraguay, Haití): Vania Bambirra, El capitalismo dependiente latinoamericano (México: Siglo XXI Editores, 1974).
- (14) Araujo, op.cit., p. 66.
- (15) Cf., C. Irazábal, Hacia la Democracia, ed.cit., pp. 261-263.
- (16) Estimaciones de Rangel, pp. 308.
- (17) Ibid., pp. 314 y 317 y ss.
- (18) Ver E. Lieuwen, Venezuela, ed.cit., p. 159. La fuente del autor es la Memoria del Banco Central de Venezuela (Caracas, 1959), pp. 131-140.
- (19) Brito Figueroa, p. 237., y Rangel, p. 314.
- (20) Recordemos que Paul Baran ha distinguido tres variantes del concepto de excedente económico: (a) el excedente económico real o "diferencia entre la producción real generada por la sociedad y su consumo efectivo corriente"; siendo idéntico al ahorro corriente o acumulación, tomando cuerpo en los activos de diversas clases que se agregan a la riqueza de la sociedad durante el período de que se trata; en otras palabras, sería la parte de la plusvalía que está siendo acumulada; el excedente económico real habría sido generado en todas las formaciones socioeconómicas y, aunque su tamaño y estructura han diferido notoriamente de una fase de desarrollo a otra, su existencia ha caracterizado a casi toda la historia; (b) el excedente económico potencial o "diferencia entre la producción que podría obtenerse en un ambiente técnico y natural dado con la ayuda de los recursos productivos utilizables, y lo que pudiera considerarse como consumo esencial"; ello presupone una reorganización más o menos drástica de la producción y distribución del producto social, implicando cambios de gran alcance en la estructura de la sociedad; este tipo de excedente aparece bajo cuatro aspectos distintos: b.1) el consumo excesivo de la sociedad, b.2) el producto que pierde la sociedad por la existencia de trabajadores improductivos, b.3) el producto perdido a causa de la organización dispendiosa e irracional del aparato productivo, y b.4) el producto no materializado a causa de la existencia del desempleo; (c) finalmente, el excedente económico planificado, o "diferencia entre el producto 'óptimo' que puede obtener la sociedad en un ambiente natural y técnico históricamente

dado y en condiciones de una utilización planeada 'óptima' de todos los recursos productivos disponibles, y el volumen 'óptimo' de consumo que se elige"; los "óptimos" involucrados serían distintos a los manejados en la economía burguesa y no reflejarían las consideraciones de ganancia de las empresas individuales de un orden capitalista; al contrario, la utilización de los recursos implicaría -en el contexto de una economía socialista- una racionalización de gran alcance del aparato productivo de la sociedad, la eliminación de las diferencias entre los "productos redundantes", la abolición del trabajo improductivo y una política científica de conservación de los recursos humanos y naturales. "Lo que importa es que el volumen de producción no estará determinado por el resultado fortuito de un número de decisiones no coordinadas de los empresarios individuales y de las grandes empresas, sino por un plan racional que expresará lo que la sociedad quiera producir, consumir, ahorrar e invertir en un tiempo dado"; en otros términos, el excedente real generado no estará determinado por el mecanismo de la elevación al máximo de las ganancias, sino por un plan racional "que reflejará las preferencias de la sociedad respecto al consumo corriente frente al consumo futuro", tal sería el destino dado al excedente económico en el socialismo: Paul Baran, La economía política del crecimiento (México: Fondo de Cultura Económica, 1961. 2a.ed. en español. Trad. de N. Warman. Ed. original: The Political Economy of Growth, New York, Monthly Review Press, 1957), pp. 39-40, 40-41 y 60-61, del Cap.II: "El concepto de excedente económico", pp. 39 y ss.

- (21) Citamos, una vez más, a Rangel, p. 342.
- (22) Ibid., p. 350.
- (23) Araujo: op.cit., p. 71.
- (24) "Este robustecimiento -dice Rangel- del capital fijo y de su técnica evidencia una de las leyes en que los países petroleros derogan un poco las constantes del subdesarrollo": op.cit., pp. 317-318.
- (25) Ver Antonio Arellano Moreno, "El desempleo: un fenómeno estructural", en Mirador de Historia política de Venezuela (Caracas: Imprenta Nacional, 1967), pp. 63-64.
- (26) Arellano Moreno, op.cit., p. 64.
- (27) Ibid., p. 65.
- (28) Arellano, pp. 67-68.
- (29) "Los monopolios son los propietarios de los medios de masas, controlan las agencias de publicidad, son los anunciantes de mayor peso económico y forman culturalmente a los profesionales de la información, los publisher men surgidos en los últimos tiempos": Brito Figueroa, op.cit., p. 251. Sobre este tema ver Antonio Pascualí, Comunicación y cultura de masas (Caracas: Monte Avila Editores, 1976. 3a.ed.). Sobre los grupos económicos en Venezuela desde el punto de vista financiero, comercial e industrial, Domingo Alberto Rangel, La oligarquía del dinero (Caracas: Editorial Fuentes, 1971. Tercer volumen de "Capital y Desarrollo").
- (30) Rangel, pp. 293-294. Desde esta perspectiva, el caso venezolano

sería un ejemplo concreto de la tendencia universal del Estado de nuestro tiempo. Sobre esta problemática, ver el interesante libro de Manuel García-Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo (Madrid: Alianza Editorial, 1977. Colección Alianza Universidad).

- (31) La historia de la banca nacional puede ser tomada como ejemplo del proceso de institucionalización del poder. Aún cuando en 1830 se dictó una ley para la creación de un Banco Nacional, éste nunca se llegó a constituir. Entre esa fecha y 1890 se constituyeron no menos de siete bancos, todos de carácter privado, de los cuales solamente uno pudo subsistir. Se constata que no es sino hasta 1939 cuando se crea el Banco Central, con la responsabilidad de la emisión única de billetes de curso legal: hasta ese entonces cada banco emitía sus propios billetes. Ver Eduardo Arcila Farías, "Evolución de la Economía en Venezuela", en Venezuela Independiente (Caracas: Fundación Mendoza, 1962), p. 397.
- (32) Brito Figueroa: op.cit., pp. 264-265.
- (33) Ibid., pp. 270 y 272.
- (34) Idem., pp. 277-279.
- (35) Tomado de P. Martínez Natera, Geografía Económica de Venezuela, ed.cit., p. 34. Sobre la filiación caribe de Venezuela, Rubén Carpio Castillo, "Venezuela: país caribe de la América meridional", ensayo recogido en el libro, del mismo autor, México, Cuba y Venezuela. Triángulo geopolítico del Caribe, Caracas, 1961, pp. 157-226.
- (36) Martínez Natera: op.cit., p. 35.
- (37) I. Sotelo: op.cit., p. 89.
- (38) Ibid., p. 102.
- (39) Cf., Jacques Dorselaer, "Les facteurs de l'urbanisation et la crise tertiaire en Amérique Latine", en Cinq Aspects de Société Latino-Américaines, Cahiers de l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine, Paris, 1965.
- (40) Arellano Moreno: op.cit., p. 70.
- (41) Ibid., p. 71.
- (42) Brito Figueroa, p. 306.
- (43) Rodolfo Quintero, La cultura del petróleo (Ensayo sobre estilos de vida de grupos sociales de Venezuela) (Caracas: Ediciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-Universidad Central de Venezuela, 1968), en especial, Cap.III: "La 'Ciudad Petróleo'", pp. 59 y ss.
- (44) Bernard Marchand, Vénézuéla, Travailleurs et villes du pétrole (Paris: Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine, 1971. Université de Paris: Travaux & Memoires de l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine, No. 26).

- (45) Carpio Castillo, op.cit., p. 197. "Los zulianos ... son los primeros que en nuestra geografía caen bajo las novísimas alienaciones de un capitalismo ya faustiano para usar la palabra de Oswald Spengler. El 'Quaker', los 'Pan cakes', el 'Banana Split', el 'Pay Roll', los 'Corn Flakes' y, suprema deidad, la Coca Cola, ingresan a Venezuela por el portillo del Zulia": D.A. Rangel, "Evolución económica de Maracaibo" (artículo), en revista Semana, Nc. 342, noviembre 28/4 diciembre de 1974, p. 25.
- (46) B. Marchand, op.cit., pp. 33 y ss.
- (47) R. Quintero, op.cit., p. 63.
- (48) Ibid., p. 65.
- (49) Idem., p. 66. (Ibid., datos censales)
- (50) Para éste y el siguiente cuadro, Quintero, op.cit., pp. 67-68.
- (51) En este apartado seguimos fundamentalmente a Brito Figueroa, op.cit., pp. 324 y ss. Hay que constatar una notable carencia de estudios de estratificación social para el período de transición y cambio de la Venezuela contemporánea.
- (52) Brito, p. 324. "La riqueza petrolera sorprendió al país con una élite dirigente que consideraba a la tierra el objeto social más valorado y cuyo nacionalismo no iba más allá de la ritual veneración de los libertadores": José A. Silva Michelena, Cambio político en Venezuela: Crisis de la Democracia (Caracas: Centro de Estudios del Desarrollo -CENDES-, Universidad Central de Venezuela, 1970), p. 74.
- (53) Estimación de Brito Figueroa, p. 329.
- (54) Ibid., p. 331.
- (55) Idem., p. 343.
- (56) Ibid., p. 348.
- (57) Idem., p. 353.
- (58) Brito, p. 358.
- (59) Citamos a Rangel, El Rey Petróleo, p. 252. Para diciembre de 1962, la Creole, filial de la Standard Oil Co. (New Jersey), la Shell de Venezuela, del grupo Royal Dutch-Shell, la Mene Grande, filial de la compañía norteamericana Gulf Oil Co., y la Móvil de Venezuela, del grupo americano Socony Mobil Oil Co., concentraban ellas solas el 90,3% de la mano de obra total de la industria petrolera (B. Marchand: op.cit., p. 7). Marchand, al estudiar la formación de la mano de obra petrolera, alude a lo que llama la "originalidad del trabajador del petróleo": se trataría esencialmente de un ser humano desarraigado, nacido de ordinario a centenares de kilómetros de su lugar de trabajo, habiendo dejado un medio rural pobre y atrasado para entrar en la industria más poderosa y sofisticada de Venezuela; paralelamente, sería un trabajador rico, o privilegiado en todo caso debido a los altos salarios percibidos; su calificación profesional es por término medio superior a la de los otros trabajadores de la

nación, formando la "categoría piloto" que entrena a los otros en los movimientos de reivindicación económico-salarial, movimientos que conducen a contratos colectivos cuyas cláusulas le garantizan una estabilidad en el empleo como las que no tiene el resto de la población trabajadora; estaríamos en presencia de una condición signada por las contradicciones: un campesino mal urbanizado que deviene conservador integrado en las clases medias; un ser desarraigado en vías de crearse una nueva patria, un sindicalista originalmente revolucionario y batallador que comienza a entenderse con los trusts petroleros; un obrero privilegiado que todavía no se habitúa a las ventajas de los buenos salarios; campesino fascinado por la vida urbana, que busca sin saber aceptar todo lo que ella implica; en fin, dice Marchand, "curioso tipo humano que tiene a la vez algo de campesino de los Andes y de obrero americano" (Op.cit., pp. 88-89 y 208).

- (60) Vid., Rodolfo Quintero, Sindicalismo y cambio social en Venezuela (Caracas: Universidad Central de Venezuela -Edición especial del Boletín Bibliográfico de la Facultad de Economía-, 1966. Boletín No. 8). En esta obra el autor comienza por señalar la carencia en Venezuela de una literatura sociológica integral sobre el desarrollo del movimiento obrero y su proyección en la dinámica socio-política del país (p. 11).
- (61) Brito Figueroa, pp. 362, 364, 366, 368, 369 y 370.
- (62) Rangel: op.cit., pp. 247-248.
- (63) Brito, pp. 398-399. Vid., Walter Dupouy, La clase media en Venezuela (Caracas, mayo de 1949. Edición facsímil, sin pie editorial).
- (64) Cf., Alberto J. Fla, La burguesía nacional en América Latina, ed.cit. en especial, Cap.IV: "La burguesía en el siglo XX", p. 57.
- (65) Germán Carrera Damas, Tres Temas de Historia, ed.cit., en "Proceso a la formación de la burguesía venezolana" (pp. 13-87), cita pp. 54-55.
- (66) Brito, pp. 419-420.
- (67) O. Araujo, Venezuela violenta, ed.cit., p. 104. Fuente: Informe sobre el Sistema Fiscal Venezolano, Ministerio de Hacienda, Caracas, 1960.
- (68) Rodolfo Quintero, El petróleo y nuestra sociedad (Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela-Imprenta Universitaria, 1970), p. 5. Del mismo autor, Antropología del petróleo (México: Siglo XXI Editores, 1972. 1a.ed.), en especial, pp. 103 y ss., y 207 y ss. Es indudable que la era del petróleo en Venezuela ha sido un factor determinante en las transformaciones de las formas tradicionales de pensar, sentir y actuar de los venezolanos, y ha sido igualmente un período de modificación de los estilos de vida y sistemas de valores de la sociedad nacional. En concreto y en un nivel de evolución moral, la ruina del cuadro familiar tradicional pudo ser la primera de las consecuencias del cambio social inducido por la explotación petrolera. La familia dejaba de ser una célula productiva y en ella cada miembro devenía en trabajador asalariado; el desarrollo de la vida urbana y la importancia creciente

de la instrucción van a conducir, sino a la quiebra, por lo menos a la decadencia del sistema de valores sociales y morales de la familia clásica de la Venezuela agraria (Marchand: op.cit., p. 212.)

- (69) Quintero: El petróleo y nuestra sociedad, ed.cit., pp. 71-72.

3.- La dinámica del proceso político: Transición, ruptura e involución (1928-1959).-

- (1) T. Halperin Donghi, Historia contemporánea de América Latina, ed. cit., pp. 356 y ss.
- (2) James D. Cochrane, "Movimientos políticos en Iberoamérica", en Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales (David L. Sills Ed., edición española de Editorial Aguilar, Madrid, 1975), Volumen 5, pp. 576-583, cita p. 576.
- (3) J.D. Cochrane: art.cit., p. 579. Sobre el aprismo, Harry Kantor, The Ideology and Program of the Peruvian Aprista Movement (Berkeley: University of California Press, 1953. Universidad de California, Publicaciones de Ciencia Política, vol.4, No.1).
- (4) El término de modelo nacional-reformista ha obtenido consenso: Vid., Isaac Sandoval Rodríguez, Las crisis políticas latinoamericanas y el militarismo (México: Siglo XXI Editores, 1976), en la literatura más reciente.
- (5) I. Sandoval R.: op.cit., 142-143. En Venezuela, como reflejo de estas proposiciones típicas de los años treinta, decía C. Irazábal: "¿Cómo oponerse a esta acción del capital financiero? Es preciso realizar un conjunto de medidas económicas, nacionalistas, que propicien el desarrollo de nuestra propia economía, tales como la protección del gobierno a la industria nacional, tarifas arancelarias proteccionistas, campaña pro-consumo de los productos de elaboración nacional y mayor participación del Estado venezolano en la explotación del petróleo": Hacia la Democracia, ed.cit., (la.ed. en 1939), p. 253.
- (6) Como es obvio según ha demostrado la experiencia histórica, las derivaciones populistas del reformismo nacionalista -casos más notorios del peronismo argentino y el getulismo brasileiro- han resultado un fracaso. La crisis del populismo está en estrecha conexión con la problemática de la institución militar en los países donde ha tenido lugar. Puede decirse provisionalmente que la intervención militar se va a producir cuando las luchas sociales -y las propias incoherencias y demagogias de los partidos populistas- por el control del poder dan lugar a una inestabilidad que de inmediato es el pretexto para el advenimiento del militarismo. El llamado régimen "colonial-fascista" encabezado por los generales buscará entonces el control total del aparato del Estado en una integración del poder político y del poder militar. El nivel político (civil) y el nivel militar, fusionados como si se tratase de rememorar en otras circunstancias la antigua alianza entre Iglesia y Estado, intentarán un modelo de desarrollo económico sin democracia y sin participación política y, por supuesto, sin modificación del orden social existente. La innovación tecnocrática y

tecnológica de los Ejércitos va a permitir una distribución racional de objetivos estratégicos cara a este proyecto, cuyo ejemplo más significativo ha sido el Brasil de los últimos años (Sandoval: op.cit. pp. 147-165). Sobre este tema, L.A. Costa Pinto, Nacionalismo y Militarismo (México: Siglo XXI Editores, 1972); y el esclarecedor libro de Sergio Vilar, Fascismo y Militarismo (Barcelona: Ediciones Grijalbo, 1978. Colección Nuevo Norte, 22).

- (7) Carlos M. Rama, Historia del movimiento obrero y social latinoamericano contemporáneo (Barcelona: Editorial Laia, 1976. 3a.ed. Prol. de A. Nells), p. 53.
- (8) Para una discusión en el plano teórico sobre las características del sistema de reconciliación política, David E. Apter, The Politics of Modernization (Chicago: The University of Chicago Press, 1965).
- (9) Citamos a María de Lourdes Acedo de Sucre y Carmen Margarita Nones La generación venezolana de 1928. Estudio de una Elite Política (Cas-Barcelona: Editorial Ariel, 1967. Int. de F. Rubio Llorente), p. 43.
- (10) "Es difícil de imaginar en estos tiempos. Veintisiete años de la historia de una nación entera, completamente sin escribir, o peor, escrita falsamente para la glorificación de un tirano engreído y poderoso la entera expresión artística de un pueblo detenida en su nacimiento los poetas condenados a cantar alabanzas falsa y dolientemente o permanecer mudos, los pintores a ennoblecer los gestos del déspota y de toda su familia y de todas sus ocupaciones, o escapar del país": Thomas Rourke, Gómez. Tyrant of the Andes (New York: Greenwood Press, blishers, 1969. First Greenwood Reprinting. Publicado originalmente en 1936), p. XIII del prefacio. "Unión, Paz y Trabajo" era el lema del gomecismo, al que jocosamente muchos caraqueños contestaban con el de "Unión en las cárceles, Paz en los cementerios y Trabajo en las carreteras" (Rourke: op.cit., pp. 225 y ss).
- (11) Seguimos a J.A. Silva Michelena, Cambio olítico en Venezuela. Crisis de la Democracia, ed.cit., p. .
- (12) Ver Harrison Sabin Howard, Rómulo Gallegos la revolución burue en Venezuela (Caracas: Monte v a E ores, . . ra . e . Sa grera), Cap. III: "El gomecismo", pp. 41 y ss, en especial, pp. 6-64.
- (13) Rangel: El Rey Petróleo, ed.cit., p. 288.
- (14) Ibid., p. 289. El cuadro: Rangel, p. 288. Las fuentes del autor s el "Resumen demostrativo de la Estadística Fiscal en el lapso 19 1933" (Caracas, Tip. Americana, 1933), y "La Economía Venezolana los últimos veinticinco años" (Banco Central de Venezuela, Caraca 1965). Otras cifras aluden a porcentajes parecidos aunque con una clasificación distinta: entre 1911 y 1920, mientras se destinaba 26,5% del presupuesto para Relaciones Interiores, un 26,4% para Hacienda, un 19,5% para Guerra (ministerio de la) y un 12,4% para Obras Públicas, sólo había un 6,4% para Fomento y un 5,2% para Instrucción Pública. Entre 1921 y 1931, el porcentaje educacional bajó a 4,3%, oscilando entre 3,3% (1925-1926) y 6,3% (1933-1934). Como contrapartida, el analfabetismo en la población adulta alcanzaba tísimas cotas: en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación

presentada en 1936 se hacía constar que para 1935-36 sólo el 10 por ciento de los venezolanos sabía leer y escribir (Acedo y Nones: op. cit., p. 77).

- 15) Vid., E. Lieuwen, Venezuela, ed.cit., pp. 62-63.
- 16) José Rafael Pocaterra, Memorias de un venezolano de la decadencia (Caracas: Editorial Elite, 1937. 3a.ed. venezolana. dos volúmenes.) Hay edición en francés: La tyrannie au Vénézuéla. Gómez, la honte de l'Amérique. Fragments des "Mémoires d'un Vénézuélien de la décadence" (Paris: André Delpeuch. Poitiers: Imp. "Moderne", 1928).
- 17) En palabras de D.A. Rangel, Los Andinos en el Poder (Caracas, ed. de 1974), p. 206 (Citado por Howard, pp. 196 y 219).
- 18) Cecilia Pimentel, Bajo la tiranía. 1919-1935 (Caracas: Litografía y Tipografía "La Bodoniana", 1970); citamos a L. Villalba Villalba, quien prologa el libro ("El nacimiento de un libro").
- 19) Jorge Luciani, La dictadura perpetua de Gómez y sus adversarios (New York: De Laisne & Rossboro, Inc., 1930). El ejemplar consultado en la Biblioteca Hispánica de Madrid (Centro Iberoamericano de Cooperación) lleva la siguiente dedicatoria manuscrita: "A don Rufino Blanco Fombona, el gran proscrito, Con la franca admiración de Jorge Luciani. 1733 Amsterdam Ave. New York City". Los cinco párrafos citados provienen de pp. 46, 65 y 187-190.
- 20) Seguimos a Germán Carrera Damas, Historia contemporánea de Venezuela. Bases metodológicas (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela, 1977), pp. 153-154 y 157-158. Cf., del mismo autor, La dimensión histórica en el presente de América Latina y Venezuela (Caracas: Escuela de Historia-Universidad Central de Venezuela, 1972).
- 21) Carrera Damas: op.cit., p. 163.
- 22) Fenómeno concomitante con la liquidación de los partidos históricos venezolanos. Las dictaduras del XIX y primeros 35 años del XX liquidarían en Venezuela a los Partidos Liberal y Conservador y a todas las derivaciones de este tronco bipolar. Si liberales y conservadores se difuminaron para dar paso a grupos políticos dirigidos por caudillos nacionales o regionales (grupos sin programas coherentes ni estructuras partidistas estables, sino más bien unidos por lazos de solidaridad personal), durante el período gomecista estos mismos grupos iban a quedar reducidos a mínimas expresiones a medida que se desarrollaba el aparato estatal: "El hecho político y económico más importante de Venezuela en el siglo XX es el de la explotación petrolera. La dictadura de Gómez se fortalece y asegura su continuidad en el mando, porque por primera vez el Estado venezolano cuenta con recursos seguros, dejando de ser aquel Estado indigente, sin rentas ni fisco estable, que era en el siglo XIX. El poder deriva ahora ingresos permanentes y el Estado, desde el punto de vista fiscal, se convierte en un fenómeno continuo y no en un hecho accidental, precario y circunstancial, como era en el siglo pasado": R. Escovar Salom, Evolución política de Venezuela, ed.cit., p. 126.
- 3) Nos referimos a la intelligentzia, "el grupo de intelectuales, raramente creadores de ideas, educados en Universidades extranjeras o,

en todo caso, en ideas extranjeras, desempeña en la política de todo país subdesarrollado un papel fundamental" (...) "Dada la pasividad e invalidez de las masas, son ellos los verdaderos motores del progreso histórico" (F. Rubio Llorente, de la introducción a Acedo y Nones, *La generación venezolana de 1928* ..., ed.cit., p. XXVIII. "El término 'intelligentzia' fue empleado por primera vez en Rusia en el siglo XIX; se refería a los individuos que habiendo pasado por la Universidad, habían recibido una cultura de origen esencialmente occidental. Estos individuos constituían un grupo poco numeroso y exterior a los cuadros tradicionales. Estaban formados, principalmente, por los 'segundones' de las familias aristocráticas, los hijos de la pequeña burguesía e incluso por los hijos de campesinos acomodados. Aislados de la antigua sociedad, se sentían unidos por los conocimientos adquiridos y por la actitud adoptada frente al orden establecido": Acedo y Nones: op. cit., p. 27.

- (24) Así, por ejemplo, en José Carlos Mariátegui, *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana* (Barcelona: Editorial Crítica-Grijalbo, 1976. 1a.ed. española. ed.orig.: Lima, Biblioteca Amauta, 1928), sobre la reforma universitaria de Córdoba, programa y repercusiones, pp. 100-124.
- (25) Escovar Salom: op.cit., pp. 127-128. Vid., John D. Martz, "Venezuela's Generation of '28: The Genesis of Political Democracy" (Reprint from *Journal of Inter-American Studies*, Vol. VI, No. 1, enero de 1964)(posteriormente incluido en su trabajo sobre el partido Acción Democrática).
- (26) Rómulo Betancourt, *Venezuela: Política y Petróleo* (México: Fondo de Cultura Económica, 1956), pp. 66-67. (Citado por Acedo y Nones, pp. 83-84 y 100).
- (27) Se ha observado que los estudiantes del 28 provenían de los sectores sociales con mayores posibilidades económicas del interior del país y, esencialmente, de las clases alta y media de Caracas y en menor medida de los sectores populares de trabajadores urbanos y campesinos. Existe un acuerdo generalizado acerca del carácter de clase media del movimiento estudiantil, aunque es necesario hacer algunas precisiones. Si bien es cierto que estaríamos en presencia de sectores medios con cierta capacidad económica -que no derivaba precisamente del ejercicio del poder político-, hay que tomar en cuenta que en Venezuela, un país carente de industrialización para 1928, los sectores medios no representaban todavía un porcentaje significativo de la población total. En realidad, en esta primera fase de presión hacia el cambio político en un sentido moderno, se trataría de estudiantes con posibilidades económicas inferiores respecto a la cúspide del poder oligárquico, pero también superiores en cierto sentido a las de los estratos medios y bajos, sin excluir a elementos individualizados de connotadas familias gomecistas que desaparecieron de la escena con posterioridad (Acedo y Nones: op.cit., pp. 101-102).
- (28) Guillermo Meneses, "El número aniversario de 'Elite' en 1930", revista *Elite*, Caracas, 18-IX-65, citado por Acedo y Nones, p. 110.
- (29) Carta de Isaac Pardo a Raúl Leoni (18-XII-30), citada por Acedo y Nones, p. 110.

- (30) R. Betancourt: op.cit., p. 69. (Acedo y Nones, p. 112).
- (31) Ibid., pp. 112-113.
- (32) Escovar Salom: op.cit., pp. 128-129.
- (33) Betancourt, Venezuela: Política y Petróleo, p. 69. (Acedo y Nones, p. 115).
- (34) Carrera Damas, Historia contemporánea de Venezuela, ed.cit., p.165.
- (35) Como anota Juan Oropesa, Cuatro siglos de historia venezolana, ed. cit., p. 320.
- (36) Ver Luis Enrique Osorio, Democracia en Venezuela (Bogotá: Editorial Litografía Colombia-Ediciones de "La Idea", 1943). Se trata de un libro de reportajes sobre los años de López Contreras y los comienzos de Medina Angarita; el autor, colombiano, aclara que no se trata de un tratado, sino de una "vivisección" de aquella coyuntura política de la "Venezuela nueva".
- (37) Citamos a Lieuwen, Venezuela, p. 70.
- (38) Art. 32-14^o de la Constitución de 1936. (Cf., L. Mariñas Otero, Las Constituciones de Venezuela, ed.cit., pp. 83 y ss.).
- (39) Art. 32-6^o de la Const. de 1936.
- (40) En 1910 se promulgaba una ley de sociedades cooperativas, reformada en 1917 e incluida dos años después en el Código de Comercio. En 1917 se aprobaba también una ley de talleres y establecimientos públicos, que contenía disposiciones acerca de higiene y seguridad laborales, horario de trabajo y descanso dominical: "Esta ley, en su articulado refleja la preocupación del Estado dictatorial por el descontento que manifiestan grupos de trabajadores y el posible efecto de las noticias que llegan al país sobre las luchas obreras desencadenadas en Europa. Sin embargo, la debilidad numérica y la desorganización de los grupos de trabajadores, permite que las clases dominantes legislen sobre la materia sin hacer concesiones sociales de importancia" (R. Quintero, Sindicalismo y Cambio Social en Venezuela, ed.cit., p. 25).
- (41) Quintero: op.cit., pp. 28-29.
- (42) Quintero, op.cit., especialmente Cap.III: "Nacimiento y Desarrollo del Movimiento Sindical Venezolano", pp. 59 y ss. En principio, queda claro que los trabajadores de la industria petrolera son los primeros que adoptan la organización de tipo sindical; otros sectores de trabajadores se organizan igualmente en sindicatos "impresionados sus dirigentes por el nombre manejado con anterioridad en los cursillos y las reuniones semiclandestinas donde participaban anarcosindicalistas españoles, venidos al país para trabajar por contrato en la construcción de edificios y vías de comunicación principalmente" (pp. 59-60. El subrayado es nuestro). Quintero estima que el Congreso de trabajadores de diciembre de 1936 se constituyó con 219 delegados, representantes de cerca de 200.000 trabajadores organizados en sindicatos (p. 60).

- (43) "La pasión bolivariana del Presidente de la República y la presión de las fuerzas reaccionarias del país, se manifiestan en una resolución oficial donde se establece que el Día del Obrero es el 24 de julio, fecha aniversaria del nacimiento de Simón Bolívar. El desconocimiento de lo dispuesto por el gobierno y la proclamación del Primero de Mayo por la conferencia sindical, acentúa la represión. Más dirigentes y militantes de sindicatos son encarcelados. Y nuevamente se queda en proyecto el plan de estructurar y hacer funcionar una central nacional de trabajadores" (Ibid., pp. 62-63).
- (44) M.V. Magallanes, Partidos Políticos Venezolanos (Caracas: Tipografía Vargas, 1959), p. 80.
- (45) Cf., Presidencia de la República, Documentos que hicieron Historia: Siglo y medio de vida republicana. 1810-1961 (Caracas: Edición conmemorativa del Sesicentenario de la Independencia, 1962. 2 volúmenes). Citado por Acedo y Nones, p. 122.
- (46) Memorándum del Movimiento de Organización Venezolana (ORVE) sobre la situación política, periódico El Heraldó, 19 de marzo de 1936 (Acedo y Nones, p. 122).
- (47) Acedo y Nones, pp. 126-127.
- (48) Ibid., del programa del PDN, pp. 127-128. El programa apareció por primera vez en El Popular, No. 29, 31 de octubre de 1936. En su organización inicial, el PDN incluía los nombres de Miguel Otero Silva (escritor), Jóvito Villalba (Secretario General), Rómulo Betancourt (Secretario de Organización), Juan Oropesa (Secretario de Prensa), Raúl Leoni y otros. En el seno del PDN se movían la Federación de Estudiantes de Venezuela (rama política), ORVE, PRP, Frente Obrero, Frente Nacional de Trabajadores y Bloque Nacional Democrático de Maracaibo.
- (49) Escovar Salom, op.cit., p. 132. Entre 1937 y 1941, el PDN experimentará la separación de sus dos líderes más importantes, Betancourt y Villalba, éste último fundador de Unión Republicana Democrática (URD) en 1946.
- (50) Ver Acción Democrática, Doctrina y Programa, "Tesis Política y Programa del PDN" (Caracas: Publicaciones de la Secretaría Nacional de Prensa y Propaganda, 1962). Sobre este tema, Rubén Carpio Castillo, Acción Democrática, 1941-1971. Bosquejo histórico de un partido (Caracas: Ediciones República, 1971), pp. 41 y ss.
- (51) C.E. Black, The Dynamics of Modernization (New York: Harper & Row, 1966), p. 64. Citado por H.S. Howard, Rómulo Gallegos y la revolución burguesa en Venezuela, ed.cit., p. 156.
- (52) Carrera Damas, op.cit., p. 166.
- (53) Ibid., pp. 167-168.
- (54) Howard, p. 167.
- (55) Ibid., pp. 165-169.
- (56) Ibid., pp. 172-174.

- (57) Art. 32-9^o de la Constitución de 1945 (Cf., Mariñas Otero: op.cit., pp. 89 y ss). También arts. 15-4^o y 15-7^o.
- (58) Mariñas, pp. 89-90; Escovar Salom, pp. 100-101.
- (59) Howard, p. 176.
- (60) Escovar, p. 137.
- (61) C.E. Black, op.cit., p. 64. (Howard, p. 171).
- (62) En palabras del tanta veces citado Carrera Damas, p. 169 de su Historia contemporánea de Venezuela. (ed.cit.)
- (63) Ibid., p. 171.
- (64) JD. Martz, "Venezuela's Generation of '28", publ.cit., pp. 22 y ss. (Howard, pp. 210 y 222).
- (65) Ibid., pp. 207-209.
- (66) Howard, p. 213.
- (67) Sobre el programa de Acción Democrática tenemos noticia de Robert Mattews, Acción Democrática: The Story of Social Democracy in Venezuela, 1928-1948 (trabajo de maestría no publicado, Departamento de Historia, Universidad de Nueva York) (referencia de Howard, p. 217, nota 3).
- (68) Rómulo Betancourt, Trayectoria democrática de una revolución (Discursos y conferencias pronunciados en Venezuela y en el exterior durante el ejercicio de la presidencia de la Junta Revolucionaria de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela) (Caracas: Imprenta Nacional, 1948), p. 5 (Alocución).
- (69) Según Howard, este experimento, aunque "por su escala no amenazaba a los latifundios, encarnaba potencialmente el embrión tanto de un modo de producción como de una mentalidad que era la antítesis de los mismos. Las colonias eran revolucionarias en un sentido utópico socialista, es decir, eran comunidades modelo que debían actuar como guía para el cambio social" (p. 244.)
- (70) Ibid., p. 244. (de R. Betancourt, Venezuela: Política y Petróleo, p. 327).
- (71) Howard, cifras pp. 251-252.
- (72) Ibid., p. 255.
- (73) "Los hombres de negocios, acostumbrados a su propia ineficiencia tradicional, a la maquinaria envejecida y con frecuencia a tratar con trabajadores ineptos (...), experimentaban presiones para aumentar los salarios y otros beneficios de los trabajadores. Sentían que la carga principal pesaba sobre sus hombros, debido a la alianza entre el Ministerio del Trabajo y Acción Democrática" (Howard, op.cit., p. 267).
- (74) Unos veinte dirigentes de la CTV fueron a las Cámaras legislativas

en las listas electorales de AD y muchos de ellos formarán parte de las direcciones de organismos públicos o estatales (Quintero: Sindicalismo y cambio social en Venezuela, ed.cit., pp. 65-66).

- (75) Ver Consejo Supremo Electoral, Escrutinios de las Elecciones. Desde 1946 hasta 1968 (Caracas: Publicación de la Oficina de Relaciones Públicas del Consejo Supremo Electoral, s.f.), pp. 5-6. (en términos aproximados). Aunque en dicha publicación oficial no aparecen suficientes datos sobre participación electoral, es posible suponer que ésta fue superior al ochenta por ciento.
- (76) Declaración Preliminar de la Constitución de 1947; Mariñas Otero, pp. 91 y ss., y p. 837.
- (77) Seguimos a Mariñas, op.cit., pp. 96-99.
- (78) R. Betancourt, Trayectoria democrática de una revolución, ed.cit., pp. 288-289 (Discurso).
- (79) Diario Católico, citado en el periódico El País (progubernamental), 3 de diciembre de 1947. Si bien es cierto que Caldera nunca utilizó este tipo de expresiones, tampoco se disoció de los que las sostenían (Vid., Howard, p. 292).
- (80) Consejo Supremo Electoral, publicación citada, "Votaciones de 1947", pp. 9-11. No existen datos acerca de posibles niveles de abstención o de participación electoral aunque, como en el caso anterior, cabe suponer por deducción una participación abrumadora.
- (81) Diario de Debates de la Asamblea Nacional Constituyente, citado por Howard, p. 297.
- (82) Diario El País, 4 de noviembre de 1948. (Howard, p. 299).
- (83) Vid., el libro ya citado de Sergio Vilar, Fascismo y Militarismo, ed.cit., especialmente su análisis sobre los orígenes de la dictadura en Italia, Alemania, España, Argentina y Brasil.
- (84) Consejo Supremo Electoral, publicación citada, "Votaciones de 1952", p. 15. El crecido número de votos a favor de URD se explica debido a que el electorado acciondemocratista, siguiendo las consignas finales del partido en la clandestinidad, participó activamente y votó por las listas urredistas (Carpio Castillo, Acción Democrática..., ed.cit., p. 90).
- (85) Mariñas Otero, p. 102. La disposición transitoria tercera derogaba en la práctica la escuálida parte dogmática de la Constitución: "En tre tanto -decía el texto- se completa la legislación determinada e el Capítulo sobre Garantías Individuales de esta Constitución, se mantienen en vigor las disposiciones correspondientes del Gobierno Provisorio y se autoriza al Presidente de la República para que tom las medidas que juzgue convenientes a la preservación en toda forma de la seguridad de la nación, la conservación de la paz social y el mantenimiento del orden público" (Escovar Salom, pp. 103-104).
- (86) "El régimen del 'Ideal Nacional' o del 'Bien Nacional' es uno de los más grotescos engendros entre las dictaduras latinoamericanas de la era contemporánea. Considerado en rigor es el último esfuerzo

del gomecismo, pero también incluye elementos aportados por las Logias Militares del Sur e ingredientes de procedencia netamente fascista al estilo de la llamada 'Semana de la Patria'. Del gomecismo asimila una cabal reivindicación de sus métodos y motivaciones pero, a diferencia del Rehabilitador, el pretense caudillo fabricado por Vallenilla Lanz (hijo) esquivo asumir personalmente la plenitud de sus responsabilidades y aun constitucionalizado prefiere escudarse tras un supuesto mandato de las Fuerzas Armadas. De las Logias Militares del Sur extrae la retórica, la ornamentación y el menosprecio por todo cuanto no proceda directamente de la fuerza y de la subordinación incondicional. Del fascismo recoge un predominio de la policía política que progresivamente se sobrepone al Ejército y no se detiene en el camino de acosar y humillar a las jerarquías castrenses. Esta circunstancia da como resultado la insólita novedad de que el jefe de la Seguridad Nacional se convierta de hecho en el segundo personaje del Estado y logre una categoría similar a la que tuvo Himmler en la Alemania nazi. El propio Ministro del Interior ... se ve superado o cuando menos igualado por la prepotencia efectiva del policía doblado en dirigente político. Lo demás es la imitación de la política de obras públicas de Guzmán Blanco, la negociación antipatriótica de las reservas petroleras, los asesinatos, el levantamiento de campos de concentración, el sometimiento de las Universidades a un régimen de cuartel, la agresión a todos los valores históricos y culturales del proceso democrático y el saqueo inmisericorde de los dineros públicos": Manuel Alfredo Rodríguez, El Capitolio de Caracas. Un siglo de historia de Venezuela (Caracas: Ed. del Congreso de la República, 1974), p. 516.

87) R. Quintero pone de relieve cómo con el gobierno militar establecido en 1948 aparece en la actividad petrolera un nuevo personaje: el gangster sindical, instrumentalizado por el dictador a fin de formar su propio "movimiento obrero". En combinación con la policía política, este elemento se dedica al desplazamiento violento de los dirigentes democráticos de los sindicatos petroleros: "El surgimiento del gangster sindical marca en nuestro país el comienzo de una época difícil y sangrienta del movimiento obrero. Días en los cuales mueren muchos obreros y los sindicatos 'sesionan' con la presencia en el local de la temible 'Seguridad Nacional' y de funcionarios del Ministerio del Trabajo. El gangsterismo provoca cambios cuantitativos y cualitativos del grupo social de los petroleros: sus efectivos más antiguos son eliminados y sus puestos ocupados por recién llegados a los campos, cuidadosamente escogidos por la policía privada de las empresas. Veteranos trabajadores del petróleo tienen que pasar a formar parte de otros destacamentos de la clase obrera nacional; se convierten en choferes de plaza, pequeños comerciantes, trabajadores de la construcción o desaparecen en la dimensión indefinida de los desclasados". Los trabajadores petroleros padecen la embestida dictatorial, convirtiéndose en aquellos años en un grupo débilmente integrado, con poca iniciativa, que evita los conflictos y teme al gangsterismo y a la vigilancia policial; tiende a producirse un fenómeno de despolitización, de resignación y de derrotismo; la baja de la tasa de sindicalización es un hecho bajo la presión del Estado dictatorial (en La cultura del petróleo, ed.cit., pp. 47-48).

8) Silva Michelena, op.cit., pp. 109-111; vid., "El desarrollo de la economía venezolana en el último decenio", Boletín Económico de América Latina, vol.V, No.1, Santiago de Chile, marzo de 1960 (citado por F. Kieres, El petróleo y la problemática estructural venezolana, ed.cit., pp. 374-376.)

- (89) Silva Michelena, pp. 111-113; Mejía Alarcón, La industria del petróleo en Venezuela, ed.cit., p. 118 (cifras sobre concesiones).
- (90) Los resultados de tal consulta sintetizaban unos 2.342.000 votos favorables al SI y unos 658.000 favorables al NO. Sin las mínimas garantías y con un final preparado de antemano mediante las más disímiles artimañas, concurren Venezolanos y Extranjeros con derecho a opinar por medio de dos tarjetas; cada concurrente presentaba la cédula de identidad y recibía un sobre con una tarjeta azul y una roja: con la azul afirmaba y con la roja negaba. Vid., Consejo Supremo Electoral, publicación citada, "Plebiscito verificado el 15 de diciembre de 1957 con base para el continuismo (1958-1963)", p. 15.
- (91) D.E. Blank, Politics in Venezuela (Boston: Little, Brown and Company, 1973), p. 27. Sobre estos sucesos, Domingo Alberto Rangel, La revolución de las fantasías (Caracas: Ed. Ofidu, 1966) y Philip B. Taylor (jr), The Venezuelan Golpe de Estado of 1958: The Fall of Marcos Pérez Jiménez (Washington D.C.: Institute for the Comparative Study of Political Systems, 1968); finalmente, Testimonios de la Revolución en Venezuela (Caracas: Tipografía Vargas, 1958).
- (92) Ver Antonio José Lozada, Proceso a la dictadura (Caracas: Oficina Central de Información, 1968. Colección "Papeles Públicos", No.29), párrafos citados en pp. 7-8, 9, 11, 12, 12-13, 14, 15, 17 y 22-23.
- (93) Señalaba el Fiscal, en su Exposición de réplica en relación con la corrupción y el peculado bajo la dictadura, que fue el propio Pérez Jiménez "el mayor incurso en la comisión de delitos de concesión, corrupción y lucro de funcionarios, perpetrados como medios de ejecución del de peculado continuado y agravado que se le imputa en la que rella y en los escritos de cargos del Representante del Ministerio Público y la acusación. Igualmente permitió, como también aparece probado, en el expediente, el que altos, medios e inferiores funcionarios públicos de su régimen se enriquecieran ilícitamente o incurrieran en la comisión de delitos contra la cosa pública. Al efecto, las decisiones de la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios o Empleados Públicos y los procesos cursados ante los tribunales ordinarios, prueban que el Contralor General de la Nación, los Ministros del Despacho Ejecutivo, Gobernadores de Estado y Administradores de Institutos Autónomos y otros funcionarios, salvo contadas excepciones, incurrieron en los referidos hechos punibles; y que, mediante esos procedimientos, como aparece del informe presentado por la nombrada Comisión al Congreso Nacional, agregado a los autos en copia certificada, la Nación pudo recuperar una suma superior a los doscientos millones de bolívares (Bs. 200.000.000,00), la cual se encontraba en poder y había acrecentado ilícitamente el patrimonio de los funcionarios corruptos" (pp. 25-26).

[319]

- C A P I T U L O Q U I N T O -

■ SOBRE EL SISTEMA POLITICO ACTUAL ■

1) Estabilidad del sistema político venezolano.-

(I)

Podemos comenzar con una constatación evidente: el sistema político venezolano ha logrado, en sus últimos veinte años de existencia, un nivel apreciable de funcionamiento estable, a pesar de las marcadas desigualdades en la distribución de la riqueza nacional. Hay hechos que pueden ilustrar tal aseveración: la realización de varios procesos electorales según los lapsos constitucionalmente establecidos, con alto índice de participación y con el turno en el poder de oposición-gobierno; la acomodación y actuación de partidos anti-sistema dentro del marco de la legalidad e institucionalidad democráticas; la existencia de un movimiento obrero organizado; la existencia de una política de consulta y participación institucionalizada de los sectores empresariales privados en las estructuras del Estado; unas fuerzas armadas que han aceptado el papel que el nuevo sistema democrático les asignó a partir de 1958; y la aceptación, en fin, de los parámetros básicos del sistema por parte de la jerarquía de la Iglesia católica (1).

Se ha observado que el actual sistema político venezolano discurre en la línea de desarrollo de una democracia reformista, la cual, sin requerir cambios estructurales cualitativos totales o de raíz, sí es lo suficientemente flexible como para aceptar reformas, más o menos superficiales, más o menos profundas, en el conjunto de la estructura socio-económica de la nación. Ello no implica que, en el contexto del desarrollo político latinoamericano, el caso venezolano aparezca como excepcional, dado que, para la década de los años 70, Venezuela ha constituido prácticamente la única nación latinoamericana con un proceso político democrático de perfiles que lo distinguen del resto de la evolución regional.

En efecto, desde 1958 los cambios de gobierno se han efectuado en Venezuela mediante elecciones libres y competitivas, siendo el actual presidente de la República, Luis Herrera Campins (partido social-cristiano Copei), no sólo el quinto presidente electo (diciembre de 1978) en sucesión,

sino la tercera vez, en cuatro oportunidades, que el gobierno cambia de manos, esto es, que el gobierno en el poder pierde las elecciones. La primera vez ocurrió cuando Raúl Leoni (Acción Democrática. 1964-1969) entregó el gobierno al líder de la oposición Rafael Caldera (partido social-cristiano Copei. 1969-1974), triunfador de las elecciones de diciembre de 1968. Asimismo, Caldera entregaría el poder al candidato victorioso de la oposición, Carlos Andrés Pérez (Acción Democrática. 1974-1979), en las elecciones de diciembre de 1973. Ahora bien, si es difícil predecir hasta cuándo durará este mecanismo de rotación gubernamental por vía electoral en Venezuela, no es menos cierto que en la actualidad el sistema aparece estable y sólido, mientras que en el resto de América Latina la dirección predominante va por la vía de un autoritarismo militar que tuvo, tal vez, su aspecto más dramático en el golpe militar chileno que derribó al gobierno constitucional de Salvador Allende, en septiembre de 1973. Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, son otros casos de esta tendencia, con el caso peculiar de Cuba en el Caribe y algunos tradicionales regímenes autoritarios de América Central. Quedarían México, con su sistema de partido hegemónico, y Colombia, con un turno bipartidista liberal-conservador que parece haber entrado en crisis, además del pequeño Estado de Costa Rica, en el que sobrevive un pacífico y, por varios conceptos, ejemplar sistema liberal. En síntesis, en el caso de Venezuela estaríamos en presencia de una opción política que va a dejar a un lado tanto la salida revolucionaria como el camino autoritario; vale decir, un intento de combinar la democracia política con reformas socio-económicas bajo diversas coyunturas y oscilaciones y que presenta una continuidad desde el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez (1958) hasta nuestros días (1979). (2)

(II)

Es indudable que hay una estrecha conexión entre el actual sistema político venezolano y el surgimiento del sistema de partidos políticos a partir del año de 1936. Hemos visto cómo aquellas primeras organizaciones dirigieron su actividad esencialmente a la formación de los primeros núcleos sindicales, la liberalización política, las reformas sociales y económicas, la institucionalización de la vida partidista y el establecimiento del sufragio universal, directo y secreto. El movimiento cívico-militar de octubre de 1945 abrió, en este sentido, las puertas para una

nueva e inédita dinámica política en el país con el comienzo del moderno sistema de partidos en Venezuela: en efecto, como dice J.C. Rey, "Hasta 1945 el sistema político venezolano se caracterizaba, por un lado, por el hecho de que las vías de acceso de la sociedad hacia la política se encontraban bloqueadas a través de instituciones tales como el sufragio restringido y la elección indirecta de los representantes, y, por otro lado, funciones como el reclutamiento y la participación política se realizaban a través de camarillas personales, grupos familiares y, en general, mediante procedimientos caracterizados por el uso de criterios adscriptivos o particularistas. A partir de esa fecha, con la excepción de los diez años de intervalo dictatorial, los partidos políticos se convierten en el principal -y en la práctica, a veces, en el exclusivo- medio de acceso de la sociedad a la política" (3).

Así, el nuevo orden implantado en el llamado "trienio adeco" (1945-1948), "implicaba el establecimiento de un nuevo estilo político en Venezuela, caracterizado por la organización y movilización de grandes masas y significaba un cambio sustancial en las 'reglas de juego' hasta entonces imperantes, mediante la fijación de nuevos actores y la exclusión, en la práctica, de las élites políticas tradicionales. Los nuevos actores de proceso político, los partidos, se convierten en principales vehículos o canales de la acción"; sin embargo, no dejaban de producirse tensiones de importancia, ya que "una parte considerable de los sectores tradicionales que se ven desplazados de la actividad política, viendo peligrar la conservación y reproducción de sus privilegios e intereses debido a la orientación progresista del nuevo gobierno, rechazan pura y simplemente la legitimidad de unas reglas que implicaban, en la práctica, convertirlos en perpetuos perdedores y pasan directamente a la conspiración"; de la misma manera, diversos sectores de la economía privada veían "amenazado su status a causa de la tesis del estado docente, los nuevos derechos sociales de los trabajadores, la creación y legitimación de una fuerza sindical organizada y el deterioro del poder político y social tradicional de los terratenientes en el campo mediante la reforma agraria y la organización de los campesinos" (4).

Si una parte considerable de los sectores tradicionales escogía la vía conspirativa sin ocultar las apariencias, otros decidían más bien un aceptación formal de la situación y su utilización para modificar las reglas adversas; ahora bien, incapacitados para lograr una organización política propia, prefirieron utilizar aquella de las existentes que por su

características pudiera darles más fácil acogida. Tal partido iba a ser, fundamentalmente, el Comité de Organización ^{Política} Electoral Independiente (COPEI), que por su inspiración católica y por hallarse en aquél momento en el extremo derecho del espectro partidista, se convirtió en el centro de atracción de muchos grupos conservadores (5). De otro lado, el propio hecho de la aplastante superioridad de Acción Democrática en las elecciones de 1946 y 1947 contribuía a hacer más tensa la situación, ya que experimentaba la tendencia a interpretar los resultados electorales como una autorización para imponer su voluntad sin tener en cuenta a las otras fuerzas políticas: para muchos portavoces de AD, la bandera de la transformación de la sociedad y la política venezolanas era de la exclusiva propiedad del partido, de modo que desde esta perspectiva, las críticas y oposiciones a su gestión gubernamental eran consideradas como expresiones contrarrevolucionarias que era necesario eliminar.

La pugna, pues, entre partidos asumió la forma de un conflicto existencial entre antagonistas irreconciliables: la tensión reinante se tradujo en un conflicto generalizado que Acción Democrática no iba a poder controlar. Las relaciones entre AD y otros grupos políticos, especialmente Copei, partido que se había convertido en representante de los intereses amenazados por el proceso reformista en curso, se transformaron en relaciones de lucha frontal; y como no hubo o no se produjo la aceptación de unas reglas comunes que todos hubieran estado interesados en defender, sólo AD y sus organizaciones sindicales, profesionales y campesinas van a tratar de defender el gobierno legítimamente constituido del presidente Rómulo Gallegos cuando adviene el golpe militar de noviembre de 1948 (6).

(III)

No cabe duda que "Los diez años de dictadura sometieron a los partidos políticos venezolanos a un aprendizaje forzado sobre la necesidad de lograr un mínimo de entendimiento si se quería asegurar el mantenimiento del sistema que nuevamente estaba configurándose" (7). La crisis de la dictadura perezjimenista abría la posibilidad de un acuerdo para sentar las bases de un sistema democrático. Desde esta perspectiva, era perceptible, tanto en AD como en Copei, el surgimiento de un planteamiento que limara los antagonismos y llevara a una tolerancia recíproca. En Copei,

principalmente, se va a producir una evolución depuradora de ciertos elementos ultraconservadores, al mismo tiempo que comienzan a hacerse sentir sobre los sectores juveniles del partido las corrientes progresistas de nuevo pensamiento demócrata-cristiano. Por su parte, Acción Democrática volvía a la vida pública después de los duros años de la clandestinidad con una moderación del lenguaje y unas formulaciones más transaccionales sobre el destino político y social del país.

En este sentido, el llamado Pacto de Punto Fijo (1958) vino a suponer la formalización de unas normas compartidas por los partidos Acción Democrática, social-cristiano Copei y Unión Republicana Democrática (quedó fuera el Partido Comunista de Venezuela), sintetizadas en la no utilización de procedimientos que pudieran llevar a la violencia interpartidista; el reconocimiento de un programa común y mínimo de gobierno; la conciencia de evitar una oposición sistemática; y el compromiso de los partidos para -con independencia del resultado electoral- participar en un gobierno unitario. En líneas generales, el propósito fundamental del acuerdo se centraba en la necesidad de consolidar la estructura democrática del Estado venezolano (8). En síntesis, si AD, Copei y URD pasaban a convivir en los canales principales de la acción política, la Iglesia católica firmaba un modus-vivendi con el Estado, a las fuerzas armadas se les asignaba un papel institucional y los intereses de la empresa privada eran conocidos como legítimos en el nuevo orden democrático.(9)

Pero junto al pacto tripartito, había que constatar la existencia de intereses menos visibles que intervienen decisivamente en la delimitación de las líneas básicas del nuevo sistema en formación. De un lado, lo que se refiere a la formulación de una posible política económica, presencia, en la Junta provisional de Gobierno encargada de preparar las elecciones de 1958, de importantes representantes de la empresa privada. De otro, el impacto causado por la Revolución cubana, que va a provocar graves contradicciones en el seno de Acción Democrática, las cuales culminarían en 1960 con una escisión que da lugar al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), integrado esencialmente por los cuadros juveniles universitarios más radicalizados de AD, quienes van a unirse posteriormente al Partido Comunista venezolano en la guerra de guerrillas. No hay que la lucha guerrillera iba a crear graves tensiones en el sistema, por la contrapartida el intento de traspasar el modelo de toma del poder. La Cuba revolucionaria no tuvo éxito por diversas razones de tipo coyuntural y estructural.

Entre los factores que contribuyeron a la radicalización ideológica principios de la década de 1960 habría que señalar, entre otros, la opia moderación de la organización accióndemocratista -con las subsi-
entes tensiones internas-; la depresión económica del país que duró
ta 1961-62 y que se tradujo en un aumento del desempleo a la cifra de
14 por ciento; el contexto internacional de la guerra fría y las enor-
expectativas que generó la audaz acción del ejército fidelista cuba-
. Pero junto a la actividad guerrillera de los sectores de la extrema
uierda, el precario equilibrio consensual fue puesto en peligro tam-
n por los intentos de involución política protagonizados por la derecha
recalcitrante. Lo agudo de la conflictividad produjo divisiones y rup-
as, no sólo en los partidos políticos, sino también en diversas organi-
ciones gremiales y sindicales, universitarias y educacionales en distin-
s lugares del país; el conflicto ideológico penetró igualmente, y en
ofundidad, en casi todos los grupos de carácter político-cultural y aún
algunos grupos económicos, aunque en menor intensidad (40). Finalmente,
spués de un doloroso proceso de violencia, represión y autocrítica, bue-
parte de la extrema izquierda inició su reincorporación al marco legal
funcionamiento del sistema político, participando con candidatos pro-
be en las elecciones de 1973, bajo una estrategia ya iniciada en 1968.

Quedaba claro, sin embargo, que la combatividad de aquéllos años es-
a en estrecha relación con la pesada y problemática herencia que había
jado el colapso ^{del} costoso y desordenado proceso de cambio de las estructu-
tradicionales, sobre todo bajo el período 1948-1958. Si bien es cierto
maduraba la noción de cambio -entendida como reforma de los aspectos
ativos de la organización social-, tenían que afrontarse también abru-
ros planteamientos y nuevos requerimientos de una sociedad que cambia-
caótica y desordenadamente. En efecto, enfrentarse con el crecimiento
mesurado de las urgentes necesidades implicaba la formulación de una
rategia de desarrollo y escala de prioridades en el campo de la acción
ítica y gubernamental. Y a ello obedeció precisamente la creación de
Oficina de Coordinación y Planificación de la Nación (CORDIPLAN) como
e canalizador de la política oficial del reformismo democrático y el
lenzo de la exaltación de la planificación en Venezuela como instrumen-
idóneo para conducir al país hacia el desarrollo, entendido éste como
a liberadora de la problemática del subdesarrollo, esto es, de la mar-
alidad social, del desempleo, de la injusta distribución del ingreso y
otra serie de cuestiones correlativas.

A pesar de que los resultados de tal política fueron y han sido bien escuálidos -a lo que habría que agregar el agravamiento de muchos problemas y el surgimiento de otros completamente inéditos-, ello no excluía ni excluye el consenso sobre la adopción de la vía reformista para combatir el subdesarrollo dentro de los lineamientos y en el marco de lo pautado por el Estado liberal-democrático, alternativa que se pretendió se pretende superadora, tanto de la experiencia autoritaria como de la revolución social pura y simple, Racionalización de la vida económica, política de industrialización y aumento de la participación del Estado el producto petrolero eran, en síntesis, los objetivos a conseguir en forma más inmediata. (41)

La superación de una primera de provisionalidad (Junta de Gobierno de enero de 1958, presidida por el contralmirante Wolfgang Larrazábal y sucesivas remodelaciones por imperativos de coyuntura) condujo a los comicios que dieron el triunfo a Acción Democrática y a su candidato presidencial -máximo líder- Rómulo Betancourt para el quinquenio 1959-1964. Tal vez ha sido Betancourt el político venezolano que ha encarnado con mayor fidelidad en Venezuela la teoría y la praxis del reformismo y el mejor de sus intérpretes en cada situación. Betancourt puede ser calificado como el constituyente del actual sistema político; como su principal constructor y factor clave de consolidación del mismo en su etapa más difícil. En coalición con Copei y URD (éste último partido la abandonaría posteriormente), el gobierno de Betancourt, enfrentado a una tenaz acción insurreccional y guerrillera, va a promulgar una discutida ley de Reforma Agraria, a aplicar fundamentalmente sobre las tierras de propiedad estatal o pública, estableciéndose normas para asistencia técnica, créditos agrícolas, organización comercial y otros servicios. La ley reflejaba bien el sentido de la estrategia política en curso: sin transformar la estructura latifundista, se optaba por la revalorización de las tierras ociosas con disposiciones en favor de los campesinos en materia técnica y de ayuda económica. Estábamos en presencia de una reforma agrícola, de un proceso de colonización que admitía secundariamente algunos aspectos de reforma agraria (42). De otra parte, el gobierno se constituía en promotor entusiasta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), al mismo tiempo que creaba la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), primera empresa venezolana frente al monopolio extranjero. Finalmente, en 1961 se promulgaba una nueva Constitución, hasta hoy vigente, que ampliaba el contenido democrático de la de 1947 y recogía

alguna manera las inquietudes del nuevo período histórico en materia económica y social.

El triunfo de Acción Democrática y de su candidato presidencial, el . Raúl Leoni, en las elecciones de diciembre de 1963 para el quinquenio 64-1969, mostraría en cierta manera la continuidad de la estrategia inicial. Bajo el gobierno de Leoni el desarrollo hidroenergético iba a recibir un gran impulso, al mismo tiempo que se seguían ampliando los programas de la administración anterior en educación, sanidad, vivienda, etc. Pero simultáneamente la política de sustitución de importaciones para la industrialización desembocaba en su primera crisis, mientras que el gobierno dedicaba energías al objetivo prioritario de mantener la estabilidad del sistema democrático; como contrapartida, ciertos problemas estructurales de la sociedad venezolana proseguían su camino crítico. Ello lleva a G. Carrera Dumas a hablar, durante esta etapa, del surgimiento de una especie de "empantanamiento" del proceso de cambio planteado y esbozado en la etapa anterior: no se iban a fortalecer con vigor los factores que habían de impulsarlo, reconstituyéndose los que lo cortaban y entrando en crisis los que lo exigían con premura; en esta etapa, la cuestión fundamental no sería ya "la implantación de la noción de cambio, sino la forma que éste habría de tomar, la profundidad que habría de alcanzar y los medios de realizarlo" (43). Por de pronto, la experiencia de la fase anterior -con su dialéctica de represión policial-militar vs. acción guerrillera y terrorista- trajo como resultado más inmediato el obligar a las clases dominantes a tomar conciencia de lo ineludible que era promover ciertos cambios y reformas urgentes si se quería prevenir la posibilidad de una salida revolucionaria.

Mientras tanto, en el escenario partidista tenían lugar modificaciones y conflictos que iban a influir decisivamente en las elecciones de diciembre de 1968. La posibilidad de una escisión en Acción Democrática, especie de mal endémico de la importante organización política venezolana, se abrió paso por tercera vez con motivo de las discrepancias surgidas por la postulación presidencial, cuestión que indudablemente fue factor clave en el triunfo electoral, por escasísimo margen, del partido social-cristiano Copei y de su candidato el Dr. Rafael Caldera. La organización social-cristiana había venido progresando en su caudal de votos en las anteriores jornadas comiciales y poco a poco se estructuraba a escala nacional como partido con aspiraciones de poder. Caldera, quien ya había mostrado su perseverancia como candidato en 1947, 1959 y 1963, pre-

-sentaba un programa de gobierno que anunciaba para la sociedad venezolana nuevos rumbos, pero el reducido margen de triunfo obtenido y la situación de minoría de su partido en el Parlamento implicó el olvido de buena parte del programa. Una política de pluralismo ideológico en lo internacional y una política de pacificación en lo interno -abriendo con ello una perspectiva de liquidación de los movimientos guerrilleros- caracterizaron su mandato, al mismo tiempo que el establecimiento de una política de "áreas de coincidencia" entre AD (primera mayoría minoritaria en el Congreso) y Copei, contribuyó a garantizar en cierta medida el funcionamiento del sistema democrático y la propia gestión administrativa y gubernamental que se refería a los intereses nacionales prioritarios.

Por otra parte, a fines del período constitucional y en clara conjunción con la campaña electoral, se iban a producir una serie de importantes decisiones que abrirán un proceso de redefinición de los términos de la relación de la sociedad venezolana con el sistema capitalista mundial: la nacionalización del gas natural, la denuncia del Tratado comercial con Estados Unidos, la fijación por el Estado venezolano de los precios del petróleo, la legislación sobre reversión de la industria petrolera, la nacionalización de algunas ramas industriales, etc. La coyuntura propicia creada por la crisis energética mundial acercaba el debate sobre el problema de la nacionalización del petróleo. Sin dejar de agudizarse los problemas tradicionales de la sociedad venezolana (baja producción, crisis agrícola, desempleo, ineficacia administrativa), el súbito auge fiscal y hacendario derivado del alza de los precios del petróleo plantearía unas posibilidades, para muchos insospechadas, en la meta del desarrollo económico nacional.

En este contexto, el proceso eleccionario adquiría una importancia inusitada, que Acción Democrática iba a aprovechar a plenitud. Perdidas las elecciones de 1968, la veterana organización había iniciado un proceso de reestructuración del aparato partidista, de positivos resultados por cuanto señalaba la cicatrización de las escisiones anteriores y la toma de la ofensiva política en la vida pública como principal partido de la oposición. Bajo el liderazgo de su secretario general Carlos Andrés Pérez, colaborador directo e íntimo de Rómulo Betancourt en el pasado, el objetivo central residía en la "reconquista del poder", y así sucedió en efecto, aprovechando las contradicciones y los flancos débiles del gobierno y del partido social-cristianos, cuando AD y su candidato obtuvieron un resonante triunfo en los comicios, resultado que de paso mos-

traba con nitidez la configuración de un bipartidismo en la correlación de las fuerzas políticas venezolanas: AD y Copei obtenían, juntos, más del 75 por ciento de los votos emitidos.

El quinquenio 1974-1979 marca, a nuestro juicio, un período clave de la historia política venezolana de los últimos veinte años. Arranca con una de las viejas aspiraciones de los venezolanos: la nacionalización del petróleo; posteriormente se nacionaliza la industria del hierro y van a formularse costosísimos planes de desarrollo de la industria pesada en general, al amparo de los cuantiosos ingresos fiscales provenientes de la subida del valor de la riqueza fundamental del país. No hay duda que Pérez imprime una dinámica de gran velocidad al conjunto de la nación y son enormes las expectativas en torno al desarrollo de la gestión gubernamental. La política internacional del gobierno va a transcurrir bajo el esquema de la defensa de los derechos humanos en el continente: la actuación del gobierno frente a los casos de Nicaragua y Santo Domingo es manifestación concluyente de las renovadas aspiraciones en el ámbito de la defensa de las libertades públicas en la región. La inserción, que parece definitiva, del partido gubernamental en el seno de la Internacional socialista le confiere unos canales de comunicación con el exterior de los cuales en buena medida había carecido. Más aún, en el seno de la organización internacional de los partidos socialistas y social-demócratas del mundo parece surgir la idea de la validez del "modelo venezolano" como esquema "exportable" hacia otros lugares de América Latina, vista la avertada combinación, según muchos observadores, entre reforma socio-económica y democracia política.

Sin embargo, para muchos era evidente que "la procesión iba por dentro", en el sentido de que la problemática aplicación del programa gubernamental creaba frustraciones y desencantos derivados sin duda de una maquinaria administrativa obsoleta e incapaz de llevar a buen término las ideas propuestas. De otro lado, la avalancha de petrodólares ponía en primer lugar del debate público la cuestión de la corrupción en el seno del aparato administrativo del Estado, con lo que la credibilidad de la gestión gubernamental experimentaba un visible deterioro. Y al igual que en 73, Copei como principal partido de la oposición aprovechaba con astucia dos los puntos flacos, que da frutos con su victoria en las elecciones diciembre de 1978, por un margen no muy amplio de votos y sin visible yoría parlamentaria en las cámaras legislativas. Hasta tal punto el realismo ha calado hondo en la conciencia política de los venezolanos,

que el programa electoral del nuevo presidente social-cristiano, Luis Herrera Campins, contempla precisamente dichas coordenadas: lucha contra la corrupción, contra la marginalidad social, reforma educativa, programa de viviendas, etc. A la vez, su triunfo para la nominación presidencial del socialcristianismo indica de momento una modificación de la correlación de fuerzas internas en Copei, en el sentido del predominio hasta el momento de su ala más progresista: el cristianismo avanzado que trata de alejarse de las viejas posiciones tradicionalmente conservadoras. Y al igual que en 1968, la derrota electoral de AD va a plantear seguramente nuevas reestructuraciones y redefiniciones en el seno de una organización que aparece desgastada y burocratizada, pero que sin duda está destinada a seguir jugando un papel esencial en el futuro político de Venezuela.

2.- Los partidos políticos.

(I)

Para Maurice Duverger, la analogía de las palabras utilizadas comúnmente no debe conducir a errores:

"Se llama igualmente 'partidos' a las facciones que dividían a las repúblicas antiguas, a los clanes que se agrupaban alrededor de un condotiero en la Italia del Renacimiento, a los clubes donde se reunían los diputados de las asambleas revolucionarias, a los comités que preparaban las elecciones censatarias de las monarquías constitucionales, así como a las vastas organizaciones populares que enmarcan a la opinión pública en las democracias modernas. Esta identidad nominal se justifica por una parte, ya que traduce cierto parentesco profundo: ¿no desempeñan todas esas instituciones un mismo papel, que es conquistar el poder político y ejercerlo? Pero vemos, a pesar de todo, que no se trata de la misma cosa. De hecho, los verdaderos partidos datan de hace apenas un siglo. En 1950, ningún país del mundo (con excepción de los Estados Unidos) conocía partidos políticos en el sentido moderno de la palabra: había tendencias de opiniones, clubes populares, asociaciones de pensamiento, grupos parlamentarios, pero no partidos propiamente dichos. En 1950, éstos funcionan en la mayoría de las naciones civilizadas, esforzándose las demás por imitarlas" (1).

Los partidos actuales constituyen en realidad una comunidad con una estructura particular. Los partidos modernos se van a caracterizar antes que nada por su anatomía: "a los protozoarios de las épocas anteriores, señala Duverger-, ha sucedido el partido con organismo complejo y diferenciado del siglo XX"; evolución que por otra parte se traduce en el lenguaje: los norteamericanos hablan de la "maquinaria" para designar algunas formas que a veces revisten sus partidos; los comunistas llaman aparato a la estructura jerárquica del suyo y lo designan generalmente con el término de "Organización", con una O mayúscula muy sintomática e lo que se quiere aludir (2).

El siglo XIX latinoamericano, en sus lineamientos más generales, observó -al igual que el caso de Venezuela- una división de los partidos políticos ciertamente sencilla y a la manera clásica: conservadores y liberales; partidos de cadres para utilizar la terminología del profesor y onstitucionalista francés (3). Los conservadores, principalmente terratenientes y miembros del alto clero, alta oficialidad del ejército, partidarios acérrimos del principio de autoridad, del derecho de propiedad, del orden jerárquico, de las libertades controladas y del sufragio selectivo. Los liberales, integrados por profesionales, intelectuales, comerciantes, pequeños hacendados, funcionarios, se proclamaban individualistas, demócratas, adherentes a la idea del progreso, defensores de una ampliación del sufragio y de la libertad de pensamiento. Se trataba de un esquema que perduró a lo largo del XIX, para luego dar paso progresivamente a un sistema partidista más diversificado, en virtud del ascenso de nuevas clases sociales, del crecimiento demográfico y de aspiraciones nuevas de participación política. Iba a ser en los países receptores de la emigración europea donde las masas de inmigrantes y sus descendientes constituirán la clientela de los nuevos partidos, y un ejemplo expresivo es precisamente el Partido Radical de la Argentina. Así, pues, frente a los partidos tradicionales o de notables, harán acto de presencia los primeros partidos de masas, fenómeno que corre paralelo, insistimos, a la entrada en la escena política de las clases medias y populares, alentadas por la incipiente industrialización, el aumento del comercio exterior y el crecimiento de las responsabilidades del Estado -en un contexto histórico imbuido por las resonancias de la revolución mexicana de 1910 y la rusa de 1917, la ascensión del socialismo en Europa y el nacionalismo ideológico -en sus diversos matices antiimperialistas y de recuperación de lo autóctono- e alentarán distintos sectores sociales y de la inteligencia (4).

(II)

II.a) Organización y miembros.-

En Venezuela, Acción Democrática fue la primera organización política del país que logró abarcar todo el territorio nacional siguiendo el modelo de un moderno partido de masas. Su modelo de organización (5) sigue esencialmente el de los partidos socialistas europeos, aunque adaptado a la realidad nacional: una estructura piramidal que confluye en los organismos directivos nacionales; los distintos escalones siguen la división administrativa del país (nacional, estatal, distrital y municipal), mientras que la base es integrada por organismos locales de barrios y caseríos. En cada nivel se da una división funcional entre asamblea deliberativa, órgano ejecutivo y órgano judicial (disciplinario). Existen, entre los niveles, comunicaciones verticales, ascendentes y descendentes y cada nivel goza de cierta autonomía de acción. Junto a esta estructura piramidal, existe una horizontal o funcional constituida por las llamadas "fracciones" gremiales, profesionales y del partido (obreros, campesinos universitarios, juventud, etc) (6).

Puede decirse que el esquema organizativo de AD ha sido imitado, con diversas matizaciones, por la mayoría de los partidos venezolanos, aunque con desigual éxito en su realización práctica. Sin duda, el partido socialista Copei es el partido que ha realizado más cabalmente en la práctica el esquema formal de organización, al lograr cubrir la totalidad del territorio nacional y presentar a AD una triunfal competencia en este orden. El Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), resultado de la tercera más grave escisión de Acción Democrática, si bien se hallaba inicialmente en vías de constituir un aparato semejante, en época relativamente reciente fue objeto de una labor de reconquista de su militancia y dirigentes medios por AD, que afectó decisivamente su organización hasta convertir en uno más de los "minipartidos" existentes en la actualidad. De otro lado, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), de marcada tendencia pro-sovietista, ha asumido tradicionalmente el llamado centralismo democrático y aunque no ha sido históricamente una organización de amplio alcance electoral, su deterioro se ha incrementado por sucesivas escisiones, como el "Vanguardia Comunista" y el Movimiento al Socialismo (MAS). Este último

escisión anti-estalinista del PCV, está en cierta manera influenciado por las ideas de la new left en contra del burocratismo y los aparatos partidistas, sin dejar obviamente de aceptar la necesidad de unas estructuras jerárquicas, si bien flexibles.

Otras organizaciones como Unión Republicana Democrática (URD), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, primera escisión de Acción Democrática), Fuerza Democrática Popular (FDP), por citar las más significativas, no son sino micropartidos en el sentido literal del término. En realidad los resultados electorales de los últimos dos comicios (1973 y 1978) han venido reflejando con claridad el fenómeno de polarización entre los dos grandes partidos del sistema, Copei y Acción Democrática; el resto de las organizaciones en liza no ha obtenido más del 15 por ciento de los votos (sumándolas todas) y su representación parlamentaria ha sido mínima, aunque pueda ser importante como grupo en el resultado de votaciones legislativas en el próximo quinquenio de 1979-1984: ni AD ni Copei tendrán la mayoría absoluta por lo que las minifracciones parlamentarias serán decisivas si no hay acuerdo entre las dos grandes formaciones del país. De otro lado, el desarrollo mismo de las campañas electorales ha reflejado la formación en el seno de AD y Copei -y en menor medida en el Movimiento al Socialismo- de una especie de subaparato profesional y tecnocrático que pudiera originar tensiones con la parte tradicional de las respectivas organizaciones: tal es el caso de las llamadas "unidades de análisis político", las cuales tienden a asumir un papel de primera magnitud durante los procesos electorarios y a aparecer como los primeros elementos de consulta por las direcciones nacionales de los partidos en los momentos de captación y análisis de las tendencias del electorado (7).

En la hora actual, y a falta de estudios cuantitativos y datos fidedignos que lo verifiquen, puede afirmarse que el grado de participación partidista de la población venezolana es relativamente elevado, si lo comparamos por lo menos con otros países democráticos e, incluso, de democracia avanzada. Los altos porcentajes de participación electoral en los distintos procesos -un 85 por ciento y más, por término medio desde 1958- pueden ser indicadores significativos del grado de interés con que los venezolanos asumen la vida política. Sin temor a exagerar, y de acuerdo a los datos por nuestra parte valorados muy por lo bajo, los militantes de Copei rebasan cómodamente los 2 millones de personas, de un electorado de 6 millones en cifras globales. En este sentido, si las elecciones de diciembre de 1973 revelaron respecto de Acción Democrática el cuadro

de un partido restablecido de su debilidad en los centros urbanos, lo mismo que una proporción alta del voto juvenil a su favor, Copei también, a pesar de la derrota electoral de aquél año, apareció como un partido con arraigo en todas las capas de la población y nacional desde un punto de vista geográfico. Más aún, y a falta de análisis más rigurosos en procesamiento, los comicios de diciembre de 1978 mostraron un fenómeno que llamaríamos de invasión del espacio electoral de AD por parte de Copei, y es así como creemos que hay que interpretar la victoria electoral del partido demócrata-cristiano venezolano: no sólo por su crecimiento organizacional hasta igualar e incluso superar el aparato acción democrática en algunas zonas del país, sino también por su habilidad en la captación de capas populares tradicionalmente adictas a su contendor histórico, sobre todo en aquellas que abcedían por primera vez al censo electoral. De todas formas, conviene aclarar que se trata de un proceso muy fluído y de unas tendencias que pueden revertir con facilidad dada la extraordinaria movilidad horizontal y vertical del electorado venezolano independiente y no ligado por lazos específicos a las organizaciones partidistas, sector que ha demostrado constituir el elemento decisorio en los actos comiciales más recientes.

II.b) Doctrina y programa.-

En su gran mayoría, los partidos venezolanos se autodenominan poli-clasistas, esto es, partidos nacionales de clases, aunque los matices de tan traído y llevado policlasismo sean diversos según sea la organización que lo sustente. No quedan eliminadas por ello las dificultades y contradicciones en el seno de los partidos en el sentido de la conciliación de intereses obviamente tan variados. Al mismo tiempo, todos invocan el principio de democracia interna, aunque la realidad más patente es la de una mayor centralización en las decisiones. En este sentido, corresponde a la Dirección Nacional o Comité Nacional de cada partido el señalamiento de la estrategia y táctica a seguir, y si bien es cierto que periódicamente suelen hacerse convenciones o congresos, éstos casi siempre suelen ratificar, con pocas modificaciones, lo que las direcciones nacionales les proponen. El fenómeno de la centralización, que por lo demás no es exclusivamente venezolano, ha coadyuvado a que los partidos políticos tengan y asuman un carácter nacional que hace difícil la aparición de partidos regionales (8)

En el aspecto puramente doctrinario, el partido Acción Democrática, que usa como lema distintivo el de Partido del Pueblo, es una agrupación que tiene por objeto -según el art. 1 de sus Estatutos- "actuar en el campo político nacional para organizar, educar y conducir el pueblo de Venezuela a la plena realización de una estructura social y económica basada en la libertad y la justicia"; definiéndose como una asociación democrática y revolucionaria integrada por organismos de base y de dirección, que se rige por el régimen de asambleas y resuelve por decisión mayoritaria; adoptando para sus miembros, como gentilicio político proveniente de su nombre, el calificativo "accióndemocratista" y, como derivado de sus siglas -AD-, el término "adoísta". Se presenta como tradicional en AD el trato de "compañero" entre su militancia, teniendo como consigna central obligatoria en todos sus documentos oficiales, la frase de corte nacionalista "Por una Venezuela libre y de los venezolanos" (9). Acción Democrática es un partido que respondería a los postulados teóricos de la democracia social, y dentro de éste concepto, el partido se compromete a luchar por la efectividad de las libertades, la modificación profunda y la democratización de la estructura económica nacional, el establecimiento de un régimen de gobierno que permita el libre juego de las fuerzas sociales, quebrante las relaciones feudales de propiedad en el campo, intervenga en la producción industrial, desarrolle el comercio y proteja a los sectores de menos recursos. Se ha definido como una organización de izquierda evolucionaria, basada en conceptos de republicanismo democrático y que concibe la revolución -según se expresa en su Tesis Sindical- como una lucha evolutiva hacia el socialismo (10). Se afirma como un partido nacionalista, entendiendo por nacionalismo "la ampliación y defensa de la industria nacional, la participación justa de la nación venezolana en la explotación racional de sus riquezas naturales, el fomento y la difusión de la cultura propia, la elevación a niveles de civilización y progreso de las clases populares del país, la defensa del territorio patrio y de sus intereses sin chauvinismos, dentro de una actitud fraternal de alianza con los pueblos de todas las naciones, especialmente con los pueblos de América". Se considera un partido antiimperialista comprometido a luchar contra toda dependencia extranjera y contra toda forma de penetración colonizadora. Se estructura socialmente como partido policlasista, ya que todos sus militantes (estudiantes, obreros, empleados, profesionales universitarios y técnicos, comerciantes, industriales, artistas y escritores) constituirían -se afirma- "un pacto que los une en el propósito de edificar

(22)

una patria emancipada de fuerzas bojuzadoras, de crear una economía propia, de realizar la transformación del medio social venezolano, de poner en marcha todas las capacidades productivas de la nación, de superar la situación de atraso cultural, de mejorar el nivel de vida de las clases populares y de rescatar de la miseria a los sectores marginados". Al definirse como partido popular, vinculado a las reivindicaciones sociales de las clases desposeídas, Acción Democrática mantiene, en materia religiosa, una absoluta libertad de conciencia, en el marco de un respeto a las ideas y sentimientos religiosos de los ciudadanos venezolanos y de cualquier otra nacionalidad. Se autodefine como partido venezolano, en el sentido de "defensor de las instituciones, del hombre, de las tradiciones y de la naturaleza venezolanos, pero receptivo a las inquietudes y perspectivas universales, dispuesto siempre a incorporar las experiencias sociales útiles que se realicen satisfactoriamente en cualquier latitud" (14). Leonardo Ruiz Pineda -secretario general de AD en la clandestinidad, asesinado por agentes de la policía política de la dictadura perezjimenista- sintetizaba así la doctrina de Acción Democrática: "Somos un partido policlasista, de izquierda revolucionaria, deslastrado de demagogia eruptiva, llamado a cumplir la revolución democrática y antiimperialista con el concurso de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales interesadas en la transformación del país. Dentro de esta empresa tienen su punto de acción todos los venezolanos anhelosos de honestidad administrativa, paz económica y social, nacionalismo económico, democracia agraria, progreso industrial, ejercicio de libertades públicas y soberanía popular" (15).

El Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) es -según el art.1 de sus Estatutos- "un partido político democrático al servicio del pueblo de Venezuela, con las responsabilidades y atribuciones que en tal carácter le atribuyen la Constitución y las leyes"; de acuerdo a su programa, está "inspirado por una íntima convicción de servicio a la patria venezolana, penetrado por la necesidad de una honda reforma social basado en la justicia y alentado por los valores legítimos de la tradición nacional", por lo que "lucha democráticamente por realizar los mejores anhelos de la nación y por satisfacer las necesidades de sus clases populares" (16). Si bien la denominación inicial -Copei- ha devenido en la más popular, es actualmente el único partido en el país con pluralidad de nombres, ya que de acuerdo con sus Estatutos, también se identifica con los nombres de 'Partido Social Cristiano', 'Partido Demócrata Cristiano' y 'Democracia Cristiana', los cuales se han venido usando de manera indis-

-tinta a lo largo del tiempo. Se trata de una organización nacional que responde y se homologa con los intereses mundiales de la Democracia Cristiana, atendiendo a una estrategia también internacional de credo y proselitismo, aunque de alguna manera adecuada a las circunstancias venezolanas, siendo su consigna central la de "Por la Justicia Social en una Venezuela mejor" (14).

Ahora bien, en el ámbito latinoamericano no cabe dudar que uno de los principales lazos que han surgido entre los valores con base católica y su desarrollo político, ha sido precisamente la democracia cristiana. Los partidos demócrata-cristianos han tenido importancia nacional principalmente en Chile y Venezuela, y significativas representaciones en Argentina, Perú y El Salvador, sin descartar grupos menores y pequeñas asociaciones de igual inspiración en otros países. No es menos cierto tampoco que, en su origen, nacieron como organizaciones ultraconservadores, ligadas en muchos aspectos a las doctrinas del falangismo español y al pensamiento más tradicional de la Iglesia católica. Con posterioridad se produjo una evolución -acorde también con la que experimentaba parte del pensamiento católico- hacia un sentido menos confesional y más secular, hasta llegar a la elaboración de una línea de diferenciación y desarrollo políticos en Latinoamérica, debido a su potencialidad para alinear cambio social e ideas cristianas en los últimos cuarenta años, sin olvidar tampoco las derivaciones más radicales de esta evolución, como son los casos de la llamada 'izquierda cristiana' o de 'cristianos para el socialismo', aunque hay que decir que éstos últimos escogieron en la mayoría e los casos la ruptura con sus organizaciones originales, formando grupos diferenciados o ingresando en los partidos de la izquierda revolucionaria (15).

En todo caso, si la democracia cristiana surge como una reacción tanto contra el 'liberalismo ateo' como contra el 'socialismo de Estado', o es menos cierto que los partidos demócrata-cristianos intentan aunar a doctrina social y política que aspire a la pureza del valor democrático con una mayor intensidad del cristianismo en su acción temporal. Siguiendo las recomendaciones de Luigi Sturzo, fundador del Partito Popolare en Italia, no deben nunca proclamarse católicos ni pretender monopolizar las virtudes del cristianismo autodeclarándose depositarios ortodoxos de la fe católica, sino defender los principios e ideales de la civilización cristiana para buscar el progreso de la sociedad; se afirman como un movimiento social, político, económico y cultural de carácter universal, que

puede concretarse o no en organización política; tienen como fundamento de su ideología las enseñanzas del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, ya que presumiblemente es ésta la que interpreta con más fidelidad el mensaje de Cristo yaclara la aplicación de la ley natural que rige el desarrollo de la sociedad humana. En síntesis, la democracia cristiana se ha definido como "un régimen que establece la alianza de la política con la moral, la cooperación mutua entre la Iglesia y el Estado, la armonía entre los diferentes sectores sociales, la coexistencia del bien común y la libre iniciativa privada, la conciliación de la autoridad estatal con los derechos de la persona humana, la compatibilidad del patriotismo con la fraternidad universal y la síntesis de la justicia social con las libertades políticas" (16).

En atención a estos postulados, el partido social-cristiano Copei de Venezuela ha elaborado un conjunto de principios que forman su acervo doctrinario y que M.V. Magallanes resume en los siguientes: a) Copei es un partido nacional que considera a Venezuela como una nación con fisonomía propia; b) es un partido socializante que aspira a la justicia social basada en la idea cristiana de la dignidad del trabajo, afirmando la necesidad de la intervención del Estado en la vida económica en la medida en que el interés social lo exija -respetando justos derechos de particulares- y defendiendo el derecho a la propiedad privada, aunque reclamando el cumplimiento de su función social; c) es un partido policlasista que propicia la solidaridad y armonía entre las clases y grupos sociales en el sentido de una colaboración pacífica entre las mismas; d) es un partido democrático que considera a la democracia como el mejor sistema de gobierno, entendiéndola no sólo como soberanía popular, sino también como garantía de los derechos de la persona humana, repudiando el totalitarismo y la autocracia; e) es un partido cristiano porque sustenta el ideal cristiano como elemento integrador de la nacionalidad, de la justicia social, de la acción humana y del servicio público; f) es un partido progresista porque reclama una labor de progreso material y moral; g) es un partido unitario porque proclama la unidad de Venezuela por encima de las divisiones sociales o étnicas y, aunque reconoce el sentimiento regional como estímulo de responsabilidad cívica, condena toda tendencia regionalista de sentido negativo o que desconozca los intereses nacionales; h) es un partido pacifista que condena la violencia y la coacción; y i) es un partido anticomunista que combate al comunismo como sistema contrario a la democracia y la civilización cristiana (17).

Son éstas las dos principales corrientes ideológicas de Venezuela.

Por un lado, la social-democracia accióndemocratista, por otro, la democracia cristiana de Copei. Sin embargo, no hay que creer que la competitividad entre los dos grandes partidos del sistema se verifique mediante la dialéctica de las doctrinas que sustentan: en realidad, el sistema de partidos implantado a partir de 1958 ha experimentado progresivamente una disminución considerable de la carga ideológica existente, por ejemplo, bajo el "trienio adeco" (1945-48). Sin descartar que en determinadas coyunturas las posiciones doctrinarias sean motivo de tensión o conflicto, lo cierto es que el enfrentamiento partidario se produce sobre la base de motivaciones de tipo pragmático: gran parte de las diferencias existentes no versan tanto sobre los objetivos a realizar cuanto sobre los medios y la velocidad de su realización.

En relación al resto de los partidos, cabe señalar que, desde un punto de vista doctrinario y programático, el Movimiento al Socialismo (MAS) ha constituido un fenómeno novedoso en la historia de los partidos políticos venezolanos de los últimos años. El MAS fue el resultado de una de las últimas escisiones del Partido Comunista y quedó constituido en enero de 1971, en un intento por distanciarse de los dogmas del marxismo-leninismo más tradicional y característico de la formación política histórica de los comunistas venezolanos. Según el art.1 de sus Estatutos, el MAS se ha considerado como "una fuerza comunista venezolana, una organización de lucha formada por la unión libre, voluntaria y democrática de obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales de avanzada y demás sectores sociales que combaten de manera consecuente para poner fin a la opresión imperialista sobre la patria y para la construcción de una nueva sociedad: la sociedad socialista"; y así, en su Declaración de Principios el MAS decía, en referencia a su ruptura con el PCV, que en el seno de éste había tenido lugar una fractura con la cual culminaba "un proceso de crisis interna con profundas raíces teóricas y políticas. Traumatizada por los efectos de una lucha heroica que la lanzó a la conquista de un poder revolucionario durante la década de los 60, la izquierda venezolana se ha visto desgarrada por pugnas intestinas, divisiones y polémicas, muchas veces estériles, que la han llevado casi a la condición de fuerza marginada en la sociedad venezolana. La crisis del PCV no es ajena a esta dramática situación de la izquierda. Lo que ha ocurrido, sin embargo, o es una división más. No nacemos para fundar un nuevo dogmatismo ni para mpantanarnos en el oportunismo de derecha en nombre de un pretendido

realismo político o para derivar en vanguardismo estéril en nombre de una pretendida pureza revolucionaria. Tampoco para enfrascarnos en una polémica infecunda con nuestros antiguos camaradas. Los términos mismos en la discusión planteada en el PCV y nuestra posición en ella, así como las raíces nacionales de un movimiento que por ello mismo no se apoya en las cómodas referencias externas a que estamos tan acostumbrados, juegan la posibilidad de que el MAS pueda prestar una contribución significativa, tanto a la inaplazable tarea de enseñar una vía venezolana hacia el cambio revolucionario y hacia el socialismo como a la reconstrucción inmediata de una alternativa revolucionaria para los venezolanos. En esta tarea empujaremos nuestro esfuerzo". En el Preámbulo de los Estatutos, los fundadores del MAS se definían de la siguiente manera: "Somos comunistas de nuevo tipo. Queremos colocarnos a tono con los nuevos tiempos y con los nuevos fenómenos. Queremos renovar viejos esquemas, romper dogmas, ser más amplios. Somos internacionalistas, pero soberanos, con sentido de fuerza nacional. El mensaje socialista que expresamos surge ahora con mayor pureza, nitidez y posibilidades de realización. Somos marxistas-leninistas. Esto significa que el marxismo-leninismo es nuestra doctrina y guía teórica, a la cual acudiremos para interpretar y transformar el país, la que divulgaremos para lograr que penetre en importantes sectores de las clases obreras y del pueblo. Somos marxistas-leninistas antidogmáticos, por tanto creemos en la necesidad de enriquecer, desarrollar y aún corregir y superar formulaciones determinadas de la teoría. Consideramos a la clase obrera como la fuerza revolucionaria por excelencia y como la fuerza social principal en la creación de la nueva sociedad. Lo que nos es peculiar como antidogmáticos es no contentarnos con las formulaciones estereotipadas acerca del papel de la clase obrera, la actitud de rechazo a considerarla como tema tabú. La decisión es observar críticamente lo que en las actuales circunstancias impide que la clase obrera pueda cumplir fielmente con su papel revolucionario y dirigente, desde el punto de vista político y social. En consecuencia, se nos plantea la necesidad de encontrar una nueva forma de trabajo para que el proletariado pase a desempeñar el papel que el marxismo-leninismo le asigna" (18).

I.c) Financiamiento y recursos.

Se trata de un tema difícil debido fundamentalmente a la escasa información que proporcionan los partidos. Todos los estatutos de los partidos venezolanos establecen la obligación del militante en cuanto al pago de una cotización regular, pero puede asegurarse que, aún en los grandes, tales cotizaciones no son la fuente esencial de financiamiento. De mayor importancia son aquellas contribuciones voluntarias de militantes o simpatizantes en situación económica de desahogo, o las campañas financieras extraordinarias con motivo de fechas aniversarias partidistas o de procesos electorarios.

Pero una de las formas más seguras y regulares de financiación viene dada por la participación en el gobierno: "Sin que ello signifique, necesariamente, la realización de prácticas deshonestas o ilegales, el sistema político-administrativo y la cultura política del país permiten la utilización de la situación de gobierno como medio indirecto de financiamiento del partido" (4); y ello como consecuencia del predominio del spoils system en grandes sectores de la administración venezolana, de modo que gran cantidad de cargos públicos, a casi todos los niveles, se reparten entre los miembros del partido o partidos de gobierno. De otro lado, los partidos políticos consideran como obligación de sus militantes el pagar al partido una parte del sueldo que perciben como funcionarios o empleados públicos: empleados de la administración nacional, estatal o municipal, senadores y diputados inclusive. Además, en el ámbito obrero y campesino, el gobierno otorga importantes subvenciones a las principales organizaciones, y como sus dirigentes lo son también de los partidos políticos, no cabe duda que ello redunda en una fuente indirecta de financiación de éstos. No puede ocultarse que tales sistemas van en menoscabo del proceso de institucionalización de la carrera administrativa en Venezuela. Son una de las causas del progresivo fenómeno de burocratización de la dirigencia sindical y campesina del país.

Si los recursos ordinarios de los partidos son insuficientes cuando se aproxima una campaña electoral nacional -que han implicado en los últimos procesos cuantiosos gastos en millones de bolívares-, el principal financiamiento en este tipo de coyunturas va a provenir esencialmente de aportaciones de simpatizantes y, en gran medida, de grupos de presión y de grandes empresarios económicos. Ha habido intentos por paliar los efectos de este tipo de aportaciones en la vida político-partidaria mediante asig-

-naciones del presupuesto del Consejo Supremo Electoral -regulador máximo de las elecciones- para la propaganda electoral de los partidos, pero tales subvenciones han sido en realidad cantidades simbólicas si las comparamos con la magnitud de los gastos reales. Y a pesar de que la legislación sobre partidos políticos ha prohibido la aportación financiera de fuerzas políticas extranjeras, puede señalarse no obstante no existir datos al respecto que ha habido ayudas exteriores de algún tipo hacia las formaciones políticas venezolanas por organizaciones internacionales homologables. Así, Copei da y recibe ayuda de partidos demo-cristianos de otros países, esencialmente bajo la forma de cooperación técnica y colaboración de especialistas extranjeros en la formación de los propios militantes, becas de estudio, etc. De igual manera, Acción Democrática ha establecido lazos estrechos de colaboración con la Internacional socialista y con los partidos adscritos a ella de similares tendencias, tales como los casos más significativos del Partido Revolucionario Dominicano y Liberación Nacional de Costa Rica, por citar los más conocidos. En el mismo sentido, es de suponer que en el caso del Partido Comunista, en la época de la insurrección armada existió financiación del exterior para el esfuerzo guerrillero (20).

II.d) Partidos y comportamiento político.-

Sin duda que Acción Democrática ha demostrado históricamente un considerable grado de identificación con las actitudes políticas básicas de venezolano: los resultados electorales desde 1946 muestran una mayor receptividad del cuerpo electoral para con el estilo político de la dirigencia de AD. Se trata de algo que tiene mucho que ver con el propio origen del partido y el momento en que le toca asumir las tareas del gobierno de la nación: no puede ser cuestionado el hecho de que entre 1945 y 1948, aspiraciones populares de cambio político y social lograron identificar con AD de tal manera, que bien puede hablarse de la vieja organización como factor constituyente de la ruptura democrática y del posterior nacimiento del actual sistema político. En este sentido, importa citar un juicio lo suficientemente alejado de una posición interesada como para concederle credibilidad. Para Rodolfo José Cárdenas, dirigente nacional del partido social-cristiano Copei, "Si Medina Angarita hubiera realizado elecciones populares libres, las hubiera ganado Acción Democrática. Este partido de Betancourt significaba en 1945 el cambio: era la revolución

democrática. Medina significaba para aquel entonces la continuidad modificada del régimen tradicional; eran las estructuras sobrevivientes al gomecismo, renovadas o emparentadas con apellidos de sonoridad oligárquica, con un sabor novedoso, pero con un sello de corruptela administrativa sofocante. Medina era la continuidad conservadora y liberal; Acción Democrática era la revolución democrática y socialista. En aquella lucha, necesariamente, el triunfo estaba escrito para el partido del señor Betancourt. La presencia de AD en el gobierno al lado de la juventud militar apenas si fue un episodio polémico hacia un destino que era cierto para este partido. Su ascenso al poder marcó el comienzo de una nueva época política. Un pueblo maravillado por Rómulo Gallegos; por Andrés Bello Blanco, cuyos versos cantaba el niño en la escuela, el negro en el cacaotal, el campesino en el conuco y el militar en el cuartel; por Betancourt, la encarnación política del pueblo que se desruraliza, que asciende como provincia, sin espada y sin charretera, un pueblo que deposita su confianza en el régimen adeco recién inaugurado. Empieza la época de los partidos y de los líderes partidistas" (24).

Ahora bien, la misma evolución política del país y los cambios sociales ocurridos una vez superada la etapa propiamente constituyente del sistema, van a plantear nuevas situaciones y perspectivas diferentes, sobre todo a partir de 1958. En líneas generales, puede decirse que mientras en AD hace acto de presencia la "tentación social-demócrata" (moderación del empuje original y planteamiento de una línea de centro que aleje para siempre el golpe militar y la insurrección guerrillera), Copei, el partido de la derecha venezolana de siempre, intenta desgajarse progresivamente de los elementos más reaccionarios para introducirse, de manera imperceptible, en el espacio político que de alguna manera ha ocupado la formación adeca. Se trata de una labor lenta y persistente, y mientras la democracia cristiana comienza a pensar en el reformismo como alternativa idónea en un país como Venezuela, en Acción Democrática, entre transacciones y compromisos, se confía cómodamente en que la penetración de su espacio es imposible. Algunos han hablado acerca de este fenómeno como la "adequización" de Copei o, por el contrario -lo que es lo mismo-, la "copeyanización" de AD. Sea cual fuere el caso, las elecciones de diciembre de 1978 representan sin duda la victoria de la estrategia copeyana en el voto presidencial, aunque el voto por partidos registre un antológico empate (39 por ciento de los votos para cada quien) que induce a pensar en decisivos enfrentamientos futuros entre los dos grandes bloques políticos.

En el resto de las formaciones políticas, el MAS hereda lo que en cierta manera era el predominio del Partido Comunista en los medios de la intelectualidad (escritores, artistas, universitarios), a la vez que se lleva el grupo de dirigentes e ideólogos que constituyen lo más grande del PCV. El espacio electoral fundamental del MAS reside en todos aquellos que piensan en la inutilidad del reformismo y en la necesidad de un cambio cualitativo real de las estructuras económicas y sociales. De otra parte, el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), consecuencia de la tercera y última y más grave escisión de AD en 1967, contaba con apoyo en ciertos medios sindicales y educativos, pero sin duda que su posición se ha ido debilitando progresivamente y hoy puede decirse, después de la labor de reconquista del mepismo por AD, que es un partido ciertamente con escasos recursos políticos, por no decir que condenado a la extinción. En el caso de Unión Republicana Democrática, no es posible olvidar que este partido dirigido por el Dr. Jóvito Villalba -líder junto con tancourt y otros del movimiento estudiantil de 1928- ha jugado un importante papel de mediación en momentos críticos de la vida política venezolana, a la vez que se ha convertido en factor aglutinador de coaliciones electorales que con variada suerte se han formado desde 1958. En las elecciones de 1978 formó alianza con Copei y apoyó a su candidato presidencial, lo cual le permitió obtener una representación parlamentaria que, aunque minoritaria, le salvó casi milagrosamente de lo que hubiera sido su segura muerte como organización en caso de presentarse en solitario. Es el mismo caso de Fuerza Democrática Popular (FDP): "Si hay alguna organización política que representa de manera inequívoca los torcidos mecanismos de la política venezolana ésta es el FDP"- afirma expresivamente el profesor Orlando Albornoz (25). En efecto, una sorprendente "política de alianzas ha permitido a este minipartido una subsistencia al menos nominal, ratificada en las últimas elecciones con su apoyo al candidato social-cristiano triunfador, lo cual anuncia desde ahora mismo amplias posibilidades en la obtención de cargos públicos para el quinquenio 1979-1984. Citemos por último al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), consecuencia de la primera escisión de AD, partido que mantiene buenas posiciones en el electorado estudiantil de enseñanza media y universidades, pero cuyos resultados en el ámbito nacional son ciertamente hasta ahora muy reducidos, conformándolo como una fracción más de la izquierda radical.

3.- Los grupos de presión.-

(I)

- Las Fuerzas Armadas -

Es claro que mientras los partidos políticos intentan conquistar el poder y ejercerlo, los grupos de presión se limitan a actuar sobre éste, permaneciendo en su alrededor para presionar de alguna manera e influir sobre los hombres que lo detentan. El objetivo primario de los grupos de presión consiste en lograr orientar la acción del poder hacia la órbita de sus intereses, cuidándose en la mayoría de los casos de asumir responsabilidades directas de decisión política. Es el caso de Venezuela, donde los grupos de presión han alcanzado además un alto grado de complejidad e institucionalización (1).

En este sentido, la situación y el papel de las Fuerzas Armadas en Venezuela contrasta notablemente con la existente en muchos países latinoamericanos, en los cuales la institución armada no se ha limitado sólo a presionar sobre la orientación del poder, sino que ha intentado sistemáticamente su ejercicio directo sin mayores escrúpulos (2). Desde el punto de vista del derecho político, se ha puesto reiteradamente de relieve la contradicción existente entre las disposiciones constitucionales de los Estados latinoamericanos sobre el papel de las fuerzas armadas y la realidad operante de las mismas en la vida política. Así, mientras en las constituciones se afirma, prácticamente sin excepción, que la fuerza armada tiene un carácter obediente y no deliberante, y sus funciones principales son la defensa del territorio nacional, el respaldo a la Constitución y a las leyes, y el mantenimiento del orden interno, lo cierto es que la historia latinoamericana ha sido y viene siendo pródiga en pronunciamientos, golpes de Estado e intervenciones militares en la vida política de muchas naciones. Por citar simplemente un ejemplo a modo ilustrativo, para finales de 1970 se contabilizaban nueve naciones con militares al frente de sus destinos (independientemente de su adscripción ideológica): Argentina (general Levingstone), Bolivia (general Torres), Brasil (general Garrastazu Médici), Guatemala (coronel Arana), Honduras (general López Arellano), Nicaragua (general Somoza), Paraguay (general

Stroessner), Perú (general Velasco Alvarado), El Salvador (general Sánchez Hernández) (3). A ello agréguese los casos más recientes de Chile, Uruguay, Ecuador, Panamá y la intentona en Santo Domingo, y se tendrá un panorama fiel de hasta qué punto América Latina ha vivido una de las etapas más aciagas de su evolución contemporánea.

Por contraste, si en Venezuela el grado de intervención de los militares en la política fue enorme, en el proceso político reciente -con la excepción de la larga dictadura perezjimenista (1948-1958)- tal intervención ha consistido (1945 y 1958) en el desplazamiento del gobierno existente para sustituirlo por un gobierno civil que, en ambos casos, supuso una mayor intervención de los partidos en la vida política y una devolución a la sociedad civil de su soberanía esencial en los asuntos públicos. La intervención a partir de 1958 se caracterizará por su mantenimiento dentro de los límites de la 'influencia' y la 'presión', sin excluir menoscabar el papel de los partidos políticos y la subsistencia del Estado democrático (4). Es un hecho que, desde 1959, se va a llegar a un acuerdo para el funcionamiento neutral de las fuerzas armadas en el contexto político, sin dejar de constituir una institución virtualmente autónoma en cuanto atañe a asuntos militares institucionales: el propio ministro de Defensa es un militar que actúa como representante del Ejército en el Gabinete, garantizando el ámbito de dicha autonomía. En un comienzo (1959-1963), pudieron distinguirse varias direcciones en el seno de las fuerzas armadas venezolanas: a) un grupo de oficiales partícipes del tradicional papel dominante de los militares en la política y de resistencia a toda evolución democratizadora; b) un grupo que quiere el ejercicio de la política en manos de civiles: grupo apolítico y profesional que entiende como lo mejor el no inmiscuirse; y c) un tercer grupo que vino a identificarse con el programa reformista de la administración de Rómulo Betancourt, sintiéndose guardián de la misma e integrado por muchos oficiales 'amigos' del período 1945-48.(5) En líneas generales, estos dos últimos grupos van a predominar en la evolución más reciente, unificados bajo perfil profesional en el mantenimiento del orden institucional. Por lo demás, ninguna de las últimas administraciones ha descuidado la creación de canales de comunicación con las nuevas promociones bajo similares orientaciones de respeto a la legalidad.

A pesar de la escasísima información existente al respecto, result evidente que en el establecimiento de tales canales de comunicación jue y cristaliza una política de tipo prebendario, en el sentido de concesi

de privilegios lo suficientemente amplios como para mantener las atribuciones constitucionales. También es cierto, y ello no contradice radicalmente lo anterior so pena de caer en el utopismo, que el Ejército venezolano orienta su acción actual hacia la preservación del sistema político existente, al mismo tiempo que intenta tecnificar y modernizar sus equipos. Su composición social viene a ser típicamente popular a nivel de tropa, aunque la oficialidad asciende en muchos casos a los estratos altos de la estructura social, sin que el origen social de algunos de ellos corresponda con los estratos bajos o medios de la población. Son escasos, por no decir mínimos, los sujetos provenientes de la alta burguesía -en contraste con Ejércitos como el argentino, cuya alta oficialidad es típicamente oligárquica-, quienes más bien se dirigen a actividades empresariales y de negocios antes que a la carrera militar (6).

Por lo demás, el sistema político venezolano parece haber logrado con éxito hasta el momento la contención del rol político de las fuerzas armadas mediante el establecimiento de barreras institucionales a la posibilidad de un golpe de Estado: así, por ejemplo, conversión del Estado mayor en cuerpo consultivo y asesor con gran autonomía de dirección por parte de las distintas armas; desconcentración de bases militares; vigilancia sobre personalidades de la jerarquía militar que hubieran manifestado actitudes inquietantes (el Senado aprueba los ascensos a generales eleccionados ya por el presidente de la República en base a una lista resentada por los distintos cuerpos); rotación periódica de los jefes e grandes unidades; y, en fin, gran receptividad del sistema respecto a las demandas del personal armado. De otro lado, no parece existir, como en el pasado, el predominio de una determinada región dentro de las fuerzas armadas. En este sentido, el Ejército venezolano aparece como un ejército nacional y constituye factor primordial de integración del país. Más importantes en la actualidad parecen otras formaciones grupales, como la división entre altas jerarquías y oficialidad inferior a nivel de coronel. De igual manera, ha ido dibujándose una diferenciación originada en el factor de estudios profesionales no militares, siendo extraordinariamente difícil el constatar cuál grupo es el predominante debido a la carencia de estudios científicos sobre el tema. Interesa destacar, finalmente, la labor del Instituto de Altos Estudios para la Defensa Nacional (IAEDEN) como valiosa oportunidad de encuentro entre militares y civiles en el análisis y estudio de problemas económicos y sociales (7).

(II)

- La Iglesia -

Durante la época colonial de América Latina, la Iglesia católica desarrolló una serie de unidades eclesíásticas fuertemente entrelazadas con la superestructura de la empresa colonial, estableciéndose una conexión decisiva y duradera entre el poder político secular y la institución religiosa central. Como es notorio sin embargo, y dadas las condiciones del medio americano, en el transcurso de los siglos XVII y XVIII va a producirse una escisión entre la Iglesia oficial y la religión tal como la practicaba el pueblo, en el sentido de que el catolicismo, en mixtura con las formas religiosas precolombinas, va a apoyarse en contextos extrasacramentales como la familia, las cofradías, los cultos comunales, las fiestas populares religiosas y demás directrices informales de la vida cotidiana de los pueblos americanos. Ello implicará que los intereses religiosos de las clases populares se centren y satisfagan a través de prácticas ad hoc, devociones privadas y participación en festejos de ambiente católico, mientras que la autoridad sacramental propia de dicha se convierte progresivamente en un elemento periférico de la vida religiosa de gran número de personas. Y es en este sentido que ha podido afirmarse que la influencia y el control social de la Iglesia católica en Latinoamérica ha sido fruto, no tanto de su función estrictamente pastoral, sino más bien del apoyo que sus altas jerarquías han concedido a los poderes seculares, a cambio de múltiples actividades en materia de educación, caridad y administración de bienes. En este contexto, la Iglesia del siglo XIX latinoamericano se identificó sustancial y firmemente con las facciones conservadoras, y su principal estrategia fue la alianza con dichos grupos en cuanto a status legal y ayuda financiera.(8)

Pero el cambio social y la evolución política posterior, junto a las transformaciones de mentalidad de todos conocidas, fueron llevando progresivamente a las élites religiosas a la reconsideración de sus posturas. Si por un lado se comienza a apoyar las reformas sociales en un intento por reacomodarse ante la nueva situación de unas sociedades en emergencia, no hay que olvidar la presencia y el rápido crecimiento de posibles competidores como el Pentecostalismo protestante y otros movimientos cregacionales que vienen a romper en cierto sentido la monolítica tradi

-ción católica en materia de orientación de los valores, participación política y formas de afiliación (4).

No obstante, desde el punto de vista de la política actual, pensamos que hay que distinguir cuidadosamente entre la jerarquía de la Iglesia y los llamados "grupos de base" o "comunidades cristianas de base" en el enjuiciamiento de su papel como poderoso grupo de presión. En igual sentido, el rol de la Iglesia va a ser distinto de acuerdo a la comunidad nacional de que se trate. En líneas generales, si la Iglesia ha abandonado, salvo excepciones, su tradicional actitud conservadora, tampoco se ha definido por una actitud resueltamente revolucionaria, aquí también salvo excepciones (los "curas guerrilleros", la "teología de la liberación", etc). La jerarquía al menos parece adoptar una actitud intermedia: la jerarquía como tal no autoriza el progresismo revolucionario, como tampoco la solución autoritaria, y buena prueba de esto último son las tensiones existentes entre la Iglesia y las dictaduras militares en países como Chile, Argentina, Nicaragua y Brasil. Pero en otras circunstancias y en otros países se está lejos de ofrecer una actitud unitaria, y en este aspecto la escisión más importante se produce por el lado izquierdo, esto es, todos aquellos grupos de católicos progresistas que apoyan un cambio social radical, identificando o compaginando los principios cristianos y la revolución social. Estudiosos de los pensadores más avanzados de la filosofía católica -Jacques Maritain o Emmanuel Mounier- y de los fundadores del socialismo científico, piensan en la compatibilidad entre cristianismo y marxismo, aunque discrepan en muchos casos acerca de prioridades, procedimientos y relaciones con la izquierda laica.

En Venezuela, el rol y la influencia de la jerarquía de la Iglesia católica en la evolución contemporánea sería ilustrativo de la habilidad e las instituciones y valores tradicionales para adaptarse a las demandas de modernización en una sociedad cada vez más compleja. Para D.E. Lank, dicha influencia de la Iglesia en el país es parcialmente el resultado de su tradicional papel como guardián de los valores espirituales morales, y parcialmente también el resultado de su toma de conciencia acerca de las nuevas responsabilidades de tipo secular en las áreas sociales y de bienestar (10), aunque la expresión de esta influencia no deje de tener cierta ambigüedad: iría desde la secreta organización del Onus ei hasta las formaciones cristianas revolucionarias de izquierda.

Históricamente, el papel de la Iglesia ha variado en Venezuela. Desde el comienzo, el derecho de patronato a correspondido al Estado y aunque

la religión católica pocas veces fue hecha religión de Estado, hasta mediados del siglo XIX el alto clero estuvo íntimamente asociado con la oligarquía conservadora, desempeñando un papel dominante y exclusivo en el sistema educacional. El liberalismo anticlerical de la segunda mitad del XIX, en especial durante el Guzmanato, vino a significar una modificación en los poderes tradicionales de la Iglesia a través de una legislación laica que incluía libertad de cultos, registro civil, matrimonio civil, prohibición de conventos y monasterios, etc., que ha persistido a su establecimiento. Bajo el trienio 1945-48 la Iglesia jugó un combativo papel en la vida política, en el marco de una rígida defensa de sus prerrogativas institucionales contra los renovados intentos de secularización y modernización emprendidos en aquella etapa principalmente en el terreno educativo, y ejerciendo su influencia a tal efecto mediante prominentes miembros laicos del partido social-cristiano Copei.

En lo sucesivo, su distanciamiento de la corrompida dictadura de Pérez Jiménez y su importante actuación en el fin de la misma por parte de la máxima jerarquía eclesiástica, llevarán a la Iglesia venezolana a asumir un papel más moderno y neutral desde el punto de vista de su posición política. Como contrapartida, a partir de 1958 los gobiernos de AD procurarán evitar antagonismos mediante una política de reconocimiento de la influencia social de la organización eclesial en la población, todo ello dentro del marco de una amplia libertad religiosa, de una separación de Iglesia y Estado que define las distintas esferas de actuación y de una legislación civil de carácter laico y secular en lo referente a los actos de la vida privada de los ciudadanos. Así, las modalidades de presión van a cristalizar, sin menospreciar la ayuda económica que el Estado le concede a la Iglesia a los fines de mantenimiento del culto, en el terreno educativo y social mediante asociaciones como "Fé y Alegría", "Cárita" asociaciones propagandistas del catolicismo, etc. Se trata de un peso institucional que utiliza esencialmente los mecanismos de poder socio-económico, que puede muy bien no necesariamente corresponder con una adherencia efectiva desde un punto de vista subjetivo: basta señalar que mientras más del 90 por ciento de la población se adhiere nominalmente al catolicismo, sólo una pequeña minoría del 25 por ciento aproximadamente, puede ser considerada como practicantes activos (11). Lo cierto es que el peso histórico e institucional de la Iglesia en Venezuela se ha visto equilibrado con la aceptación por la misma de un progresivo proceso de secularización de la vida legal, social y política de la nación.

(III)

- Los grupos asociacionales -

En la medida en que la dinámica política del país ha ido avanzando en los últimos tres o cuatro lustros, una constelación de influyentes y bien organizados grupos y asociaciones ha comenzado a participar activamente en los asuntos políticos de Venezuela. Es imposible negar que poderosos grupos familiares y financieros ejercen una amplia influencia en la vida pública venezolana y juegan, asimismo, un importante papel en los asuntos organizativos del sector privado de la economía. Tenemos que muy pocas entidades financieras dominan casi todo el mercado en muchos sectores claves; es perceptible un fuerte rasgo anticompetitivo en la actividad económica privada; prácticamente no han existido leyes efectivas anti-monopolio y los precios son a menudo fijados por acuerdos privados; se han constatado tensiones entre los distintos sectores (agricultores frente a industriales, exportadores frente a importadores, etc.,) y un cierto regionalismo económico que deriva en posibles rivalidades inter-zonales.

A la cabeza de este denso sistema de grupos e intereses está la Federación venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDECAMARAS), auténtico portavoz de la economía privada. Creada en 1944, Fedecámaras tiene unas 200 asociaciones-miembros repartidas en casi todas las áreas de la economía y representantes de las más influyentes familias han mantenido importantes posiciones en sus órganos directivos. Desde 1958, y particularmente a partir de 1965, la organización empresarial ha tomado un creciente papel en los debates sobre política económica gubernamental, en especial en lo que concierne al sector privado como un todo, incluyendo el decisivo capítulo de la política petrolera. En este sentido, una auténtica expresión de los grupos privados de presión han sido las Asambleas anuales de Fedecámaras, aunque también hay que señalar una gran relevancia para toda la serie de comités insertos en el aparato estatal en sus distintas ramas económicas. La imbricación viene dada igualmente a través de los consejos consultivos (Consejo de Economía Nacional), la representación de sectores privados en institutos autónomos, las comisiones asesoras en la elaboración de proyectos de leyes, las comisiones consultivas para aspectos coyunturales (crédito y gasto público, ingreso de Venezuela en el pacto andino, etc.) y otros canales similares.

Los medios de comunicación de masas, sobre todo los canales privados de la televisión venezolana, han constituido ciertamente un instrumento comúnmente utilizado por los sectores privados de la economía frente a medidas gubernamentales presuntamente atentatorias de la libertad de empresa. No cabe olvidar que los puntos básicos de la ideología de poderosos sectores de la burguesía venezolana -principalmente los ligados al comercio de importación y su entorno- se refieren a la no intervención del Estado en la economía y a la defensa de la libertad de iniciativa empresarial, lo que explica "la oposición cerrada frente al control público de las industrias básicas, las presiones ejercidas sobre los poderes públicos para evitar reformas impositivas, regulaciones de alquileres, de precios, de inversiones extranjeras, de importaciones, ..., las presiones ejercidas para que el gobierno consulte con los organismos de la burguesía cualquier proyecto de ley o reforma económica antes de ponerla en vigencia" (13).

No es posible tampoco menospreciar las fricciones que han existido y existen en el seno de los diversos grupos empresariales. Precisamente, Fedecámaras, como ente institucional, ha sido la mejor expresión de la convivencia muchas veces conflictiva de las diversas capas de la burguesía venezolana. En efecto, el órgano por excelencia del capital no ha estado exento de contradicciones manifiestas o latentes en el marco de un equilibrio inestable sólo mantenido por lapsos de apaciguamiento. Así, puede afirmarse que hasta 1958, Fedecámaras estuvo dirigida por hombres del gran comercio y de la banca, en un intento de armonía entre los intereses del mundo de los negocios y los de la dictadura perczjimenista. Con el cambio político sin embargo, la organización empresarial se vio obligada a modificaciones tácticas que llevaron a representantes de la burguesía productora o industrial a la dirección de la institución, imprimiéndole una orientación nacionalista. Las viejas fuerzas de la banca, la construcción y el comercio iniciaron después diversas ofensivas para recuperar posiciones, aunque el nacionalismo industrial mantendría su influencia en la conducción de la política empresarial, y así parece ser en los últimos años, en los que ha sido perceptible en Fedecámaras un predominio de los sectores afectos al proceso de industrialización.

El otro lado de la cuestión radica, como contrapeso a la poderosa influencia de los grupos empresariales, en el hecho de que gran parte del sector privado depende del Estado venezolano en un grado mayor que en cualquier otro país de Latinoamérica. El sector público viene teniendo y ad-

adquiriendo tal significación en la economía general, que muchas de sus decisiones conllevan imprevistas consecuencias para el mundo de los negocios. Se ha dicho, incluso, que el Estado venezolano, debido a sus ingresos petroleros, ha podido lograr una independencia relativa de la economía privada, pudiendo mostrar capacidad para mantenerse, en algunos casos, por encima de las presiones que afectan a las instituciones públicas de muchos países con sistema de economía de mercado. Así, por ejemplo, la independencia fiscal del Estado habría facilitado, no sólo la rápida expansión de una burocracia relativamente autónoma, sino también el sostenimiento de costosos programas gubernamentales de desarrollo en áreas básicas para la economía del país. La realidad no obstante es dialéctica y lo cierto es que la política económica ha estado caracterizada por una serie de tensiones y sucesivos acuerdos entre las élites económicas y el gobierno. El esquema resultante ha dado lugar a un flujo y reflujo entre Fedecámaras y el gobierno de turno, convenientemente institucionalizado a través de las comisiones y comités señalados anteriormente. En este contexto jugaron un papel importante las compañías petroleras existentes antes de la nacionalización de la industria extractiva del pro negro. Con anterioridad a 1975, las compañías petroleras hicieron cuanto pudieron a fin de obtener ventajas de las relaciones y posibles tensiones entre el gobierno y el sector privado y, de hecho, en diversas coyunturas, la convergencia de consorcios petroleros con grupos empresariales nacionales supuso una estrategia defensiva clave de los rimeros.⁽⁴³⁾

(IV)

- El movimiento sindical -

Frente a los intereses empresariales, el movimiento sindical venezolano se organiza principalmente en torno a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). La CTV y organizaciones conexas constituyen también un grupo de presión importante y a tomar en cuenta, aunque hay que decir que su influencia ha sido y es objeto de una competencia desigual por parte de los organismos empresariales y del capital privado. En líneas generales, el movimiento sindical venezolano se encuentra íntimamente conectado con los partidos políticos y, en consecuencia, se da una

mediatización por éstos últimos. Los partidos incorporan a dirigentes de los sindicatos a sus organismos nacionales de dirección, o viceversa. Los partidos, sobre todo si están en el gobierno, se erigen en canales de elaboración y decisión de medidas concernientes a los intereses de los trabajadores.

No cabe duda que, históricamente y hasta el momento presente, el verdadero poder dentro de la CTV lo constituye el partido Acción Democrática. Es igualmente destacable la importancia del Buró sindical de AD en la vida interna de la organización acción-democratista: como botón de muestra hay que recordar el peso que tuvo la sección sindical del partido en el momento de la postulación del Dr. Raúl Leoní como candidato de AD a los comicios de 1963. En concreto, entre AD y la CTV ha podido percibirse una conexión que cristaliza, por ejemplo, en el intercambio de los cuadros sindicales de ambas organizaciones en los niveles locales, estatales y nacionales. Así, no es raro encontrar que el líder o presidente de la central sindical venezolana ocupe una de las vicepresidencias de la formación política adeca.

Todos los intentos por crear centrales sindicales paralelas a la CTV han tenido escasísimo éxito y las existentes en la actualidad tienen un ámbito de acción muy reducido, por no decir mínimo. De otro lado, el movimiento sindical venezolano ha experimentado una evolución no exenta de conflictos y contradicciones derivadas de la propia praxis política del país. Cuando en 1958, a raíz del derrocamiento de la dictadura, el movimiento sindical sale de la clandestinidad, lo hace con la creación de un Comité Sindical Unificado Nacional que actúa como dirección de una central obrera e integrado por representantes de grupos y partidos políticos con presencia efectiva en el sindicalismo venezolano. Se trata en principio de un organismo de carácter provisional y con función aglutinadora de opiniones. Su gestión principal va a ser la convocatoria de asamblea sindical nacional -bajo el nombre de **III** Congreso de Trabajadores de Venezuela. Mientras tanto, el CSUN participa activamente en el proceso político mediante huelgas generales políticas declaradas con el fin de hacer frente a las diversas intenciones militares y civiles que amenazaban las nascentes libertades públicas y obstaculizaban el camino hacia la construcción de una sociedad democrática. Al lado de estas grandes demostraciones, y bajo el patrocinio del CSUN, se celebra, en agosto de 1958, una Convención Nacional de Trabajadores Petroleros en la que se crea la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, cuya primera junta

rectiva es presidida por un dirigente sindical acciondemocratista e integrada con representantes de AD, PCV, URD y Copei.

En noviembre de 1959 se reúne finalmente el III Congreso de Trabajadores de Venezuela con más de mil delegados del movimiento obrero nacional. La presidencia del Congreso corresponde a AD y la junta directiva integrará además por representantes de todos los partidos del espectro político e independientes. Se acuerda una Declaración sobre los Principios del Movimiento Sindical en Venezuela, en la que se establecía:

"1o) Reafirmar los principios generales que constituyen las normas de acción del proletariado dentro de la sociedad capitalista, haciendo énfasis en el hecho de que las organizaciones sindicales no pueden olvidar que deben estar a tono con el tiempo histórico en que actúan, no solamente en lo que respecta a una política de salarios y de costo de vida, sino también en todo lo que atañe al desarrollo político, económico, social y cultural del país y, además, en función de servicio a la colectividad; 2o) Reafirmar que el sindicato es un organismo amplio de clase, en el cual militan todos los trabajadores sin distinciones de raza, nacionalidades, credos religiosos e ideas políticas; 3o) Reafirmar que el movimiento sindical tiene su propia política, que es la de la clase obrera; por lo cual rechazamos la tesis del apoliticismo sindical a ultranza, como algo pernicioso y contrario a los intereses de los trabajadores; 4o) Reafirmar nuestro concepto de que el sindicato tiene que ser organismo independiente del Estado, de los patronos, de los partidos políticos, credos filosóficos y de toda fuerza extraña al movimiento sindical; 5o) El respeto a las normas de la democracia sindical y de la libertad sindical, es el medio más eficaz para garantizar la unidad del movimiento obrero y para que éste sea el instrumento efectivo de defensa de los intereses mediatos e inmediatos de los trabajadores (...); 8o) El movimiento sindical venezolano luchará, en unión de todos los sectores patrióticos de la nación, para lograr la plena independencia nacional de la tutela de los grandes consorcios internacionales que mediatizan nuestra economía, o que atentan contra nuestra soberanía y nuestra libertad; (...); 14o) Los trabajadores, que constituimos la mayoría de la sociedad, y que, en caso de una guerra, iríamos a poblar los campos de batalla con nuestros cadáveres, ratificamos nuestros viejos principios de que la paz y el entendimiento entre los hombres deben privar por encima de las acciones bélicas y de los odios entre los seres humanos (...)"

cuanto a la lucha por la liberación nacional de los pueblos, se acordaba:

"1) Reafirmar los sentimientos de solidaridad de la clase obrera y campesina para con todos los pueblos oprimidos del mundo que luchan por su soberanía, prestándoles todo el apoyo para el éxito de sus nobles aspiraciones; 2) Luchar contra la penetración imperialista

y por la independencia económica de los países coloniales; y) luchar contra toda forma de colonialismo en América Latina" (4)

En la última reunión plenaria del Congreso se constituyó ya definitivamente la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), cuyos lineamientos programáticos se trazaron sustancialmente en los acuerdos adoptados a lo largo de las distintas sesiones de trabajo. El primer Comité Ejecutivo Nacional de la CTV quedó presidido por un dirigente sindical de Acción Democrática, partido que obtenía siete de los catorce cargos principales; tres puestos para el Partido Comunista, dos para el partido social-cristiano Copei y dos para Unión Republicana Democrática. Pero con posterioridad, las divisiones en el seno de AD, por un lado, y el creciente radicalismo del proceso político en los primeros años de los 60, iban a dar lugar al surgimiento de dos direcciones del movimiento sindical en Venezuela: las llamadas "CTV oficialista" y la "CTV no oficialista". Esta última va a provocar una escisión en la organización sindical de los trabajadores, pasando a constituir la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), bajo el patrocinio y la influencia del Partido Comunista y organizaciones políticas de la extrema izquierda. Sin embargo, y a pesar de aquellos años de conflictividad, la CTV va a emerger como la central abrumadoramente mayoritaria del contexto sindical venezolano. Su índice de afiliación y su extendida organización en todo el territorio nacional la convertirá en un importante grupo de presión del sistema político actual frente a las organizaciones patronales. La presión ejercida por la central sindical mayoritaria del país se orientará progresivamente por los caminos típicos del reformismo sin excluir, al igual que los partidos políticos, la presencia de llamativos síntomas de burocratización de los cuadros dirigentes medios y superiores de los sindicatos bajo su control. No podemos dejar de señalar sin embargo que la evolución futura del movimiento sindical venezolano va a estar en directa relación con la también futura conformación de la clase obrera del país: la clase obrera venezolana no es algo dado ya, ni mucho menos; al contrario, en ella viene siendo perceptible en los últimos años un constante proceso de crecimiento que presumiblemente va a continuar tal vez por varias décadas, si atendemos sobre todo a las perspectivas del capitalismo nacional para los próximos decenios. Ello sin duda planteará nuevos problemas a la organización sindical existente en la actualidad.

4) Autonomía relativa del sistema político.-

(I)

En Venezuela, el sistema económico y social se ha visto progresivamente sometido al influjo del sistema político debido fundamentalmente a los enormes recursos que el Estado ha derivado de la explotación petrolera. Tan es así que las tensiones sociales típicas del subdesarrollo o llegan a hacer crisis ante la actuación del Estado como factor de distribución -muchas veces distorsionada e insuficiente- de estos cuantiosos recursos. Los intentos de sacudimiento radical del sistema socioeconómico existente encuentran en esta realidad un muro insuperable; de ahí que muchos de ellos hayan terminado hasta ahora en el fracaso.

Si el sector foráneo (ejecutivos del capital extranjero, directores de la industria petrolera antes de la nacionalización, miembros de la misión diplomática y militar norteamericana, por citar sólo algunos ejemplos) ha intentado ejercer influencia sobre la política nacional, ella ha tenido y tiene lugar, pero limitada en cierto sentido por la orientación política de un Estado todopoderoso. La propia clase empresarial venezolana ve limitada su presión por su progresiva dependencia de los mecanismos crediticios del Estado, ligamen que ha venido a aumentar con los recursos extraordinarios derivados de los recientes aumentos de los precios del petróleo y la subsiguiente creación de fondos crediticios especiales en años del gobierno. Se ha sugerido, incluso, que esta evolución de las relaciones entre el Estado y la economía podría estimular la formación de un capitalismo fuertemente articulado con la estructura estatal, de modo que, ante el atractivo de los enormes recursos puestos a su disposición, esté dispuesto a correr el riesgo de un enfrentamiento con los intereses económicos norteamericanos (1).

En el ámbito de la estructura social, la acción política gubernamental viene actuando significativamente a favor de la atenuación de las tensiones y de los conflictos. Así, se actúa para detener el desempleo en las capas profesionales; se ayuda con menor o mayor generosidad al pequeño empresario con financiamiento especial; los sectores intelectuales radicalizados encuentran para mal o para bien posibilidades de acomodarse mediante la realización estatal de planes de fomento cultural; se

"hace política" con los sectores marginales, capitalizando de alguna manera el descontento allí existente; se invierten cantidades astronómicas en el medio rural a fin de paliar al menos la problemática de un sector desatendido desde que apareció el petróleo. Ahora bien, si la expansión del poder del Estado cristaliza muchas veces en vicios administrativos y paternalismos sofocantes, ello no excluye que en Venezuela, a diferencia de otros países latinoamericanos, haya podido irse conformando una élite política especializada en el control de los recursos políticos como sector relativamente autónomo frente a las élites empresariales, tendencia que crece a medida que se fortalece el poder financiero del Estado.

La intervención estatal en la economía y la sociedad venezolanas responde, no sólo a las demandas y exigencias obvias de nuestros días, sino también, y radicalmente, al modelo de relaciones entre Estado, Sociedad y Petróleo implantado por la explotación del fundamental recurso. Según este modelo, el Estado venezolano actuaría como una especie de correa de transmisión, o de puente, entre la economía petrolera y la sociedad. A ello respondió esencialmente la frase de "sembrar el petróleo" como el objeto de fomentar el desarrollo y, al mismo tiempo, reducir la dependencia del país de tal fuente de riqueza e ingresos, de un recurso no renovable que algún día podría acabarse. Tal consideración ha implicado de luego el surgimiento de fuertes expectativas en amplios sectores de la población acerca de las funciones del Estado y su directa responsabilidad en la solución de los problemas de Venezuela. La propia normativa establecida por la Constitución de 1961 respondió a dicho modelo y, de hecho a partir de 1958 los gobiernos han sido considerados como los responsables de la industrialización y la diversificación de la economía del país, y sea mediante la intervención directa del Estado o por medio de medidas indirectas: buena parte del debate público se ha desarrollado en torno a esta elemental pero decisiva cuestión.

Los recursos provenientes del petróleo han hecho del Estado venezolano no sólo un Estado tutor o protector de la actividad económica, sino también un Estado empresario que actúa por sí mismo o mediante empresas mixtas con el capital privado nacional e internacional. En este contexto el Estado no sólo ejerce su dominio en las dos fuentes principales de riqueza, el petróleo y el hierro; es importante igualmente como empleador de fuerza de trabajo; regulador de precios y salarios; árbitro definitivo de conflictos obrero-patronales; financiero de actividades agropecuarias e industriales; promotor de investigaciones científicas y tecnológicas.

as; propulsor del sistema educativo elemental, medio y superior (escuelas, liceos y universidades); encargado de la expansión de la sanidad pública y la asistencia hospitalaria; difusor principal de los planes de desarrollo cultural, y un sinnúmero de funciones conexas que lo llevan a estar presente en casi todas las actividades de la nación. La coordinación de todas estas funciones cristaliza en un sistema de planificación surgido a través de la creación de la Oficina de Coordinación y Planificación de la Nación (CORDIPLAN), oficina adscrita a la presidencia de la República y que ha revestido en tiempos recientes la consideración de una especie de superministerio con facultades de coordinación y planificación de las crecientes actividades del aparato estatal. En el marco del Estado democrático, la planificación ha sido concebida con directrices vinculantes para el sector público y con orientaciones indicativas para el sector privado de la economía, y si bien es cierto que el fenómeno de la planificación en Venezuela se encuentra todavía caracterizado por la inmadurez y la falta de mecanismos idóneos de realización práctica, la jerarquía alcanzada por los entes planificadores es un indicio cierto de su potencial significación para el futuro del país.

Resulta evidente, por tanto, que gracias a los recursos petroleros y a capacidad del sistema político venezolano es una de las más altas que podemos encontrar entre los países del Tercer Mundo. Ello explicaría en cierto sentido el llamado "milagro político venezolano": conviene que nos detengamos un poco en el análisis de tal "milagro".

(II)

La legislación petrolera de los años 1943, 1947 y 1958, la reforma de la ley del impuesto sobre la renta de 1966, la fijación unilateral de los precios del petróleo, la acción conjunta con los demás miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la nacionalización de la industria petrolera, son todas medidas tomadas por distintos gobiernos que han contribuido, directa e indirectamente, al aumento del grado de capacidad o capacidades del sistema político venezolano. Como es obvio, dada las características del recurso fundamental, tal grado de capacidad podrá tener garantías de subsistencia a medio plazo; a largo plazo y con perspectivas de amplitud, la capacidad del sistema po-

lítico va a depender mucho más, por no decir casi exclusivamente, de la diversificación de la economía y del éxito gubernamental en materia de recaudación de impuestos en los sectores no petroleros. Se trata de una inquietud de la que buena parte de la clase política tiene conciencia, aunque las medidas a tomar para llegar a tal objetivo sea distintos según la coyuntura existente y la correlación de fuerzas políticas en un momento dado. La idea esencial puede expresarse con sencillez: Venezuela y su sistema democrático sólo podrán subsistir si se crean otras riquezas aparte de la del petróleo; el futuro del sistema político está en directa relación con el surgimiento de nuevas posibilidades económicas, una mejor distribución de la riqueza y un mayor bienestar social; en definitiva, eso que llamamos salir del subdesarrollo.

A pesar de que una serie de elementos evocan la imagen de una acción gubernamental muchas veces deficiente en la regulación de sus propias instituciones, no es posible olvidar tampoco la conformación de un estilo político excepcional en la Venezuela de los últimos veinte años. Según P. Tugwell, ha existido una interdependencia creciente entre el proceso político nacional, la política petrolera y los cambios sociales influidos por el petróleo (3). Las élites políticas en general han podido responder a las demandas y expectativas creadas por la situación petrolera hasta hoy, aunque con desigual éxito en lo que se refiere a la gestión interna de los recursos. Recordemos que "Una de las dolorosas ironías de Latinoamérica es que, a pesar de un fuerte compromiso con los ideales democráticos, los gobiernos civiles rara vez han sido capaces de consolidar suficiente poder y recursos con que legitimar firmemente las instituciones democráticas. En cambio, los países de la región han mostrado una creciente afinidad por gobiernos totalitarios de alguna clase para aliviar las tensiones, conflictos y aparente incompetencia de la controversia política" (3).

En el caso de Venezuela, la considerable expansión del ingreso fiscal petrolero ha sido un factor clave, directa e indirectamente, para facilitar la institucionalización de fórmulas conciliadoras (democráticas) en la resolución de los conflictos reales o aparentes (4). Y como toda fórmula de conciliación, de pacto, de compromiso, el desarrollo político venezolano ha cristalizado sobre la base del estímulo al acrecentamiento de la influencia política de las clases medias y populares, sin amenazar directamente los intereses de los grupos económicos poderosos. Es en la aceptación y asunción de tal compromiso donde reside uno de los

cretos" del "milagro" de la estabilidad democrática desde 1958.

La otra cara de la moneda resalta con evidencia: el ingreso fiscal petrolero es susceptible también de hacer muy vulnerable a la sociedad venezolana en caso de períodos de escasez; en tal situación, la estrategia de desarrollo a largo plazo de "sembrar el petróleo" podría verse seriamente afectada y, con ella, la viabilidad misma de la democracia reformista. Se trata, sin caer en el pesimismo, de una hipótesis a tener seriamente en cuenta sobre todo si pensamos que el petróleo sigue siendo la columna vertebral de la economía venezolana; en otras palabras, la dependencia de ésta respecto a aquél sigue siendo demasiado grande: la actividad económica no petrolera es todavía insuficiente y no termina de avanzar en una dirección autónoma y de crecimiento autosostenido. Se carece de bases sólidas en lo agrícola e industrial capaces de un desarrollo económico y social diversificado e independiente del petróleo. Persisten, pues, viejos problemas, muchos de ellos agravados.

5) Estructura político-constitucional del Estado.-

(1)

Desde un punto de vista formal, el principio de la separación de poderes ha sido plenamente incorporado al constitucionalismo latinoamericano: la gran mayoría de los textos constitucionales reflejan de alguna manera este principio clásico del derecho público. No obstante, pese a estos reconocimientos jurídicos, la realidad histórica y el resentido de los pueblos latinoamericanos muestra con claridad que el suceso de equilibrio y separación armónica entre los poderes del Estado o se ha conseguido y que, en cambio, el poder ejecutivo ha ejercido y ejerce un claro predominio sobre los restantes; de ahí que J. Lambert denomine a los regímenes latinoamericanos como de preponderancia presidencial (1). Aún así, dicha preponderancia presidencial no se da con el mismo grado en todos los países: en algunos aparece reforzada, como en el caso de México, por la existencia de un partido hegemónico y predominante en las Cámaras; en otras naciones, se han dado textos constitucionales que, aunque fieles a la fórmula presidencialista de régimen,

hán contemplado preceptos que reconocen la facultad parlamentaria de formular votos de censura o desconfianza respecto de los ministros.

Una de las principales razones explicativas de esta realidad presidencialista habría que buscarla indudablemente en la influencia de los Estados Unidos sobre la organización constitucional latinoamericana, prácticamente efectiva desde el umbral mismo de los Estados republicanos. De otro lado tenemos que tomar en cuenta factores de tipo histórico, como es el peso de la tradición del ya analizado fenómeno del caudillismo, en el que subyace la necesidad de personalizar el poder, necesidad propia de pueblos que han estado sujetos al paternalismo del señor o del jefe, con la subsiguiente escasa educación política. Otras razones apuntarían a una mayor actualidad, como la ya tópica deficiencia cualitativa de la representación parlamentaria, o la necesidad de disponer de un ejecutivo fuerte suficientemente capaz de llevar adelante los programas previamente establecidos de desarrollo económico y social. En fin, no hay que despreciar, como factor coadyuvante del fuerte presidencialismo, la debilidad propia mostrada por el parlamento latinoamericano a lo largo de la historia y en la actualidad. Si nos remontamos al período colonial podremos constatar la ausencia de órganos deliberantes de la época (si exceptuamos a los cabildos, que poco a poco se hicieron cerrados y exclusivos de la oligarquía criolla), que hubiesen contribuido a la creación de hábitos de representatividad y de discusión; más aún, la falta de una auténtica tradición parlamentaria fue una de las señaladas características del período independiente, enormemente agitado en conflictos y pronunciamientos como para permitir un poder legislativo estable. Lógicamente, el caudillismo personalista conspiraba por sí mismo contra la existencia de partidos con contenido ideológico; lo mismo que el militarismo de nuestros días conspira contra el régimen parlamentario de discusión libre. Más original y curioso resultaría el caso ya aludido de México, donde, a pesar de la existencia de un poder legislativo en funcionamiento continuado desde hace varias décadas, la preponderancia casi total de un partido en el gobierno también desde hace decenios, ha quitado interés no sólo a la existencia o viabilidad de una oposición parlamentaria con facultades de dinamización de la situación, sino también a la posible colaboración perfecta o correctora del legislador (2).

(II)

En Venezuela, desde un punto de vista constitucional, el orden liberal ha constituido un objetivo central propuesto por diversos grupos a la sociedad venezolana desde la propia crisis de la sociedad colonial que iba a desembocar en la guerra de emancipación. A partir de entonces asistimos a un fenómeno sociopolítico que G. Carrera Damas sugiere denominar como el espejismo liberal, consistente en un incesante forcejeo entre la formulación doctrinaria liberal y la práctica sociopolítica. El marco constitucional liberal sería desde entonces una especie de hecho teórico adquirido, un marco formal que se realizaba en forma muy parcial y aleatoria según lo permitieran las circunstancias. Pero

"La segunda guerra mundial determinó un momento crítico y de toma de conciencia en la carrera tras 'el espejismo liberal'. Fue ocasión propicia para que la sociedad venezolana advirtiese tanto su arcaísmo sociopolítico como su debilidad estructural: una sociedad carente de estructuración como no fuese la elemental propia del despotismo y la subordinación: ejército, clero y clase dominante, bajo la égida del imperialismo, señoreados de una masa amorfa carente de participación real en los mecanismos de formación del poder. En la base, una economía precaria, vulnerable hasta lo indecible. Y frente a todo esto un reto: la ineludible obligación de responder a un contexto internacional de modernidad, que imponía requerimientos mínimos tales como la democratización de la vida política y sindical, y que comprometía la acción reformadora en niveles superiores a los que podían respaldar las fuerzas modernizadoras generadas en el seno de la sociedad venezolana" (3).

La evolución de la problemática de las estructuras sociales y económicas planteó los términos del debate futuro: realización del orden liberal (objetivo sociopolítico) y satisfacción de las nuevas e ingentes necesidades (objetivo socioeconómico). Cristalizaba de esta manera de pronto en una coyuntura la necesidad de un orden político auténticamente liberal y la necesidad de reformas económicas y sociales. Por un lado, la estructura constitucional se consolida y el orden político se amplía, pero la presencia de una problemática expresada en el subdesarrollo (marginalidad, desempleo, deficiencias educativas y sanitarias, dependencia, etc.,) implica también el arbitrio de fórmulas que armonicen de alguna manera dos realidades cuyos choques suponían puntos de gran conflictividad. En resumen, había conciencia del imperativo de un sistema demo-liberal apoyado en reformas sociales, ya que éstas a su vez contribuirían

a consolidarlo, a darle un contenido sin el cual aquél sería un simple formalismo.

En la esfera constitucional, el contraste así establecido entre el orden sociopolítico liberal y la reforma socioeconómica va a manifestarse en tres áreas fundamentales: A) la correlación entre la esfera liberal individual y los derechos sociales y económicos, tal como se pone de relieve en las constituciones de 1936, 1947 y 1961, sin que tal tendencia tenga necesariamente que ser tomada como expresión exacta de la práctica social real; B) la planificación, considerada como el instrumento idóneo para orientar y normar la acción del Estado en materia económica y social, de modo que puedan ser satisfechas las necesidades crecientes (un antecedente estaría en el denominado 'Plan Preliminar de Viabilidad de 1947; la creación, en 1958, de CORDIPLAN iniciará la formación de un sistema nacional de planificación y la elaboración de los llamados planes de la nación); C) la polémica subsiguiente en torno a la planificación como expresión sintética de la confrontación entre el Estado liberal -tardíamente institucionalizado- y la proyección socioeconómica de la acción de ese mismo Estado, dado el contexto y las circunstancias en que surge. Por un lado, los críticos, y por otro, los defensores: partidarios de una suerte de neoliberalismo y partidarios de una intervención estatal a través de una planificación convenientemente depurada, constituyen una polémica que por lo demás no ha sido ajena y exclusiva al caso de Venezuela, sino que parece ser una constante en casi todos los países de economía mixta o de mercado (4).

(III)

La Constitución venezolana de 1961, actualmente en vigor, vino a plasmar en gran medida las preocupaciones suscitadas en la época más reciente y a proponer soluciones para un posible futuro. Desde un punto de vista estrictamente formal, el texto vigente de 1961 toma como modelo al anterior de 1947, promulgado en el Trienio accióndemocrata, aunque con modificaciones e innovaciones en materia expositiva y de contenido. Se observan también diversas influencias del derecho constitucional de otros países: así, el art.5, cuando define los símbolos patrios, está inspirado en el correlativo de la constitución francesa de 1946; también lo está en la italiana de 1947, la designación como senadores

vitalicios de los ex-presidentes de la República (art.148 y 8a disp. trans.), y en la norteamericana el establecer que las enmiendas constitucionales "se publicarán de seguida de la Constitución, sin alterar el texto de ésta" (art.245-6o) (5).

La forma federal se mantiene por razones de orden histórico (6). Y es que a pesar de que el texto hable de un Estado federal, la realidad es que de la práctica político-constitucional se desprende más bien la configuración de un Estado unitario con un cierto grado de descentralización, a lo que puede agregarse la promoción posterior de diversas formas de regionalización concebidas en función de la creación de polos de desarrollo e inspiradas esencialmente en dicho principio de descentralización administrativa.(7) De otro lado, el texto de 1961 refleja la pretensión de estructurar un Estado democrático y social de derecho: junto al sufragio universal, la elección de los cargos públicos, la distinción de poderes, la legalidad de los actos de gobierno y administración, el control constitucional de las leyes por la Corte Suprema de Justicia, la Constitución asienta también el principio de justicia social y fija al Estado misiones destinadas a llevarlo a la práctica, tales como la educación general y gratuita, la protección de la familia y de la maternidad, el fomento de la salud pública, el derecho al trabajo, la seguridad social y otros propósitos conexos.(8)

La parte dogmática sistematiza mucho más el modelo de 1947. Los derechos se dividen en individuales, sociales, económicos y políticos. En conjunto, se va desde la prohibición de la discriminación por motivos de raza, sexo, credo o condición social; los derechos sanitarios; la conservación de los recursos naturales; la reforma agraria; las bases sobre una legislación de industrias promovidas y dirigidas por el Estado; el favorecer la integración económica latinoamericana; el reconocimiento del derecho de propiedad con limitaciones derivadas de la utilidad pública o el interés social; hasta el voto obligatorio para todos los venezolanos mayores de 18 años (con posibilidad de extenderlo a los extranjeros para las elecciones municipales); el derecho de los venezolanos a agruparse en partidos políticos y la representación de éstos en los organismos electorales con carácter igualitario. En lo relativo al Poder público se destaca el principio de la soberanía popular y, de acuerdo con modernas tendencias del constitucionalismo, se prescinde de una separación absoluta de poderes: "Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias; pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán

entre sí en la realización de los fines del Estado" (art.118) (4).

El presidente de la República, "jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional" (art.181), se elige por sufragio universal y directo y por mayoría relativa de votos; permanece durante cinco (5) años en sus funciones y no puede ser reelegido hasta diez (10) años después de haber concluido su mandato. Los poderes del presidente son amplios, en el marco de la aludida preponderancia presidencial, con los matices que tendremos oportunidad de señalar. Por de pronto, el presidente de la República, como cabeza del poder ejecutivo, viene a ser el principal centro de decisiones políticas en el país. La hegemonía en su Consejo de Ministros ha venido perteneciendo al partido político victorioso en las elecciones, pero ello no ha excluido el que, junto a los miembros de éste, puedan encontrarse otros de partidos minoritarios (el caso de las diversas coaliciones practicadas entre 1958 y 1968) o bien personalidades relevantes de la vida pública y económica, sin filiación política (independientes) que han merecido o merecen la confianza del presidente y del partido mayoritario.

De otra parte, el Parlamento se organiza mediante un sistema bicameral (Senado y Cámara de Diputados) y una división específica de las funciones de ambas cámaras con marcada influencia del constitucionalismo norteamericano. El Senado consta de dos (2) senadores por cada Estado y dos por el Distrito Federal, así como de senadores adicionales que resulten de la aplicación del principio de la representación de las minorías. En el mismo sentido, son senadores vitalicios los que hayan desempeñado la presidencia de la República por elección popular o la hayan ejercido por más de la mitad de un período constitucional. Los senadores son electos por votación universal y directa. La Cámara de Diputados se elige también por sufragio universal, directo y secreto, en relación a la población y con representación proporcional de las minorías. Una Comisión Delegada desempeña las funciones del Legislativo durante el período en que las Cámaras no sesionan. En la práctica, el Congreso Nacional se ha organizado tradicionalmente en función de las fracciones políticas representadas en su seno, cuyos organismos de dirección establecen la línea a seguir y cuyos miembros votan en bloque, so pena de sanciones; y en función de las distintas Comisiones permanentes o especiales cuyo número y materia se corresponde con los diferentes sectores de la actividad del Estado y de la acción gubernamental y cuya composición es, en líneas generales, isomórfica con la importancia de las respectivas fracciones parlamentarias.

Teóricamente, el Congreso venezolano dispone constitucionalmente de una serie de mecanismos de control sobre el Gobierno. Ello lleva al profesor A.R. Brewer-Carías a calificar al régimen constitucional venezolano como un sistema presidencial con sujeción parlamentaria (40). Es claro que ni el presidente de la República ni sus Ministros proceden, en su titularidad, del Congreso; son independientes, tanto en su designación como en sus funciones, de la cámara legislativa; en otras palabras, no requieren de la confianza del Parlamento para el desempeño de sus cargos. Pero en cambio, la Cámara de Diputados tiene atribuida la posibilidad de dar voto de censura a los Ministros, que en su caso implica su remoción por el presidente. Por otra parte, los Ministros están obligados a concurrir a las sesiones de la Cámara y sus Comisiones en casos de interpelación o peticiones de información; están obligados igualmente, junto con el presidente, a presentar anualmente al Congreso una Memoria sobre su gestión anterior y planes posteriores. El Congreso puede rechazar proyectos de leyes presentados por el Ejecutivo. Algunos nombramientos de altos funcionarios del Estado realizados por el Presidente (Procurador, jefes de misiones diplomáticas) tienen que ser autorizados previamente por el Senado o, en su caso, la Comisión Delegada. Otros actos del Ejecutivo requieren también la intervención del Congreso para su validez: celebración de contratos de interés nacional, decretos sobre créditos adicionales al Presupuesto, enajenación de bienes inmuebles del dominio privado de la Nación, otorgamiento de concesiones de hidrocarburos, etc., (41).

Sin embargo, en el plano práctico se registran toda una serie de circunstancias que trabajan en contra de un eficaz control parlamentario de la acción de gobierno en Venezuela. Así, el trabajo en Comisiones ha presentado carencias derivadas de la falta de un sistema de asesoramiento técnico; incluso, en la carencia de un staff de técnicos y especialistas al servicio de la actividad parlamentaria puede encontrarse una de las principales razones de la débil capacidad de control de la gestión gubernamental. A ello hay que agregar que la Constitución admite además la posibilidad de habilitar facultades legislativas al Ejecutivo en materias económicas y financieras, de la cual se ha hecho uso frecuente en tiempo reciente. Considerérese también en Venezuela el acuse del fenómeno prácticamente universal de la ampliación del poder reglamentario del Ejecutivo: se tendrá una idea general de la situación: en la práctica, el ensayo democrático inaugurado en 1958 no ha significado necesariamente un control político real y efectivo del Congreso sobre el Ejecutivo. No hay que

olvidar tampoco el cuadro o las correlaciones dadas de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento y los distintos acuerdos o pactos que se hayan podido celebrar para el sostenimiento del gobierno de turno o las llamadas áreas de coincidencia (pactos legislativos) entre los dos partidos mayoritarios, coincidencias que muchas veces van en detrimento de la dinámica propiamente parlamentaria, de la función de las minorías en la misma y de la legítima competitividad en el seno del Congreso.

Ello no quiere decir que el Parlamento de la Venezuela democrática sea integralmente un organismo gris u opaco, simple acólito de la actividad gubernamental. Puede anotarse a su favor la retención de la condición de foro político más importantes del país, donde la oposición ha podido y puede libremente denunciar eventuales violaciones de los derechos y garantías constitucionales de los venezolanos, lo mismo que la discusión y debate polémico de urgentes temas de la política nacional. (12)

6) El sistema electoral.-

(I)

Como es sabido, la base teórica de la democracia representativa consiste en la agregación y demostración del soporte de las masas a través de las elecciones. En la realidad, los intereses abstractos de la ciudadanía son articulados esencialmente mediante el sistema de partidos políticos y elecciones libres y competitivas, de acuerdo a la fórmula de "un hombre, un voto". Tal es la casuística normal en las democracias occidentales. Otra cosa es el caso de América Latina, donde las elecciones no han sido ni son precisamente el único mecanismo utilizado para obtener el poder: ha habido y hay otros factores o vías extra-eleccionarias, fundamentalmente no-democráticas, para la consecución de tal fin. Sin olvidar tampoco que las elecciones celebradas en muchos países han estado rodeadas de tales vicios y defectos, que ha sido prácticamente imposible cederles la más mínima credibilidad. Y en otros, si bien las elecciones han servido para legitimar de alguna manera el uso y ejercicio del poder

a participación ciudadana ha sido tan baja -y por consiguiente la abstención ha subido a cifras tan altas-, que su significación se reduce enormemente, abriendo un peligroso abismo entre el país real y el país político.

En Venezuela, el fenómeno de las elecciones y de su práctica es relativamente reciente, y muy tardío si lo comparamos con la experiencia acumulada por diversas naciones democráticas de la Europa occidental del mundo anglosajón, pero también evidentemente excepcional en el contexto de Latinoamérica. En Venezuela, si los partidos políticos han constituido el principal agente de socialización política democrática, a partir de 1936, no menos importante fue el establecimiento del sufragio universal en 1945. Aún más, habría que destacar como cuestión clave la aceptación, por el sistema político, de una "leal oposición", esto es, la posibilidad cierta y manifiesta que van a tener los elementos y grupos opositores al gobierno, de organizarse y participar libremente en elecciones aún a pesar de que ello signifique el fracaso, como efectivamente iba a suceder, de la posición gubernamental. Y no se tratará de procesos electorales distantes de los ciudadanos; al contrario, la participación electoral consistentemente alta en los comicios alimentará sin duda lo que se ha llamado "pasión del voto" de los venezolanos, pasión que tiene mucho de apoyo al sistema democrático y manifiesta un deseo de mantenerlo frente a amenazas de uno u otro signo. Las cifras disponibles en este sentido son ya de por sí suficientemente elocuentes: en las elecciones de 1958, 1963, 1968 y 1973, la abstención se estimó en 7,35, 9,15, 5,49 y 12,26 por ciento, respectivamente. Las estimaciones para los comicios pasados de diciembre de 1978 se sitúan en torno a un 12 por ciento de abstenciones (4).

No obstante, estos datos y análisis excesivamente generalizadores o pueden hacernos olvidar que estamos ante un tema complejo que requiere un análisis más detenido. Por lo demás, la participación política tiene también otras vertientes que han adquirido gran significación por encima y debajo de los actos comiciales en sentido estricto. En este sentido hay que distinguir dos categorías: los meros y simples votantes (electores) y los militantes de partidos (que son electores a partir de los 18 años). Los votantes independientes (no militantes de partidos políticos), sin filiación política formal, constituyen una amplia mayoría del electorado y la participación política se reduce al acto de votación. Apáticos, votantes por obligación, votantes de interés relativo por la política, votan-

-tes interesados por la política sin militancia partidista, forman un grupo decisivo en la determinación del triunfo de una u otra opción pero que queda excluido de los procesos decisivos efectivos por virtud del sistema electoral, limitándose a registrar su aprobación o rechazo de un partido u otro, de unas listas parlamentarias integradas por personas cuya inclusión en las mismas muchas veces se debe a factores distintos de la afinidad doctrinaria. Para los militantes de los partidos puede haber en cambio cierta canalización de una participación más activa y sostenida en el proceso político. Dicha participación puede darse desde las tareas manuales y financieras hasta la cristalización de equipos potenciales de relevo gubernamental o la selección del candidato presidencial en las convenciones o congresos. No cabe duda que el impacto de la actividad de los militantes sobre la formulación e instrumentalización de las decisiones políticas va a estar en función de la estratificación interna de los diferentes partidos.

No es posible excluir en este contexto la pervivencia de una participación de tipo tradicional, basada en vínculos de amistad y relaciones clientelares, que convive con la política electoral, pero creemos que en una relación de dependencia con ésta última a casi todos los efectos: el desarrollo del aparato partidista va absorbiendo progresivamente los restos de compadrazgo y vinculación personal. Más importante en el sistema político venezolano es la modalidad más reciente de participación a través de la consulta institucionalizada, modalidad vinculada a la extensiva intervención del Estado en la economía y a los intentos de implementar un sistema de planificación. La consulta institucionalizada viene a ser esencialmente la búsqueda, por los sectores privados y movimiento sindical, de canales alternativos o paralelos al sistema electoral, a fin de establecer relaciones especiales con las autoridades político-administrativas. De tal evolución se desprende también el comienzo de los primeros rangos de participación tecnocrática, como en el caso de los técnicos de tro de los partidos políticos y la cooptación directa de los mismos por gobierno para el desempeño de las funciones y organismos especializados del Estado. Se trata todavía de un fenómeno reciente que seguramente va a tener en el futuro más próximo una creciente importancia para el examen y la explicación de la toma de decisiones políticas.

Ahora bien, ¿cuál es el papel de la mujer en la política venezolana? El papel de la mujer en el desarrollo político del país está en relación con el rol y el status de la misma en el conjunto de la sociedad, por lo

que es apreciable una función meramente instrumental, en tanto en cuanto se considera su participación sólo en la medida en que las mujeres son parte del cuerpo electoral y votan en las elecciones. Por lo demás, los diferentes candidatos a la presidencia, salvo excepciones, han sido proclives a copiar la modalidad norteamericana de asumir la imagen pública de la pareja en completa armonía, y en la que el papel de la mujer se visualiza como elemento de ternura, comprensión y apoyo, cualidades que se supone hacen de la mujer el ser perfecto. Si bien es cierto que tanto en las elecciones de 1973 como en las de 1978 la mujer venezolana tuvo una participación mayor que en campañas y comicios anteriores, ella no dejó sin embargo de ser objeto de un rol instrumental en los llamamientos electorales que se hicieron a la población femenina por los candidatos y comités de mujeres de cada partido. Si los partidos políticos y sus líderes celebraron reuniones por separado con las mujeres para tratar temas como la educación, la familia y el costo de la vida, fueron pocos los casos en que dichas reuniones surgían por iniciativa propia de las mujeres: en realidad, los mecanismos político-electoral-partidistas tienden a reproducir patrones de conducta social mediante los cuales una connotación machista es perceptible. En líneas generales, en la familia venezolana el proceso de toma de decisiones ha pertenecido esencialmente al hombre, con la excepción -tal vez creciente- de ciertos sectores de la clase media donde por una serie de razones la familia comienza a seguir patrones de convivencia de una sociedad moderna. En este contexto, no deja de ser contradictoria la dualidad existente entre una legislación típicamente civil para el ámbito matrimonial y la administración de bienes en la sociedad conyugal, por un lado, y los patrones de conducta social, valores orales y realidad cotidiana de las relaciones entre hombre y mujer en Venezuela.

(II)

Desde un punto de vista formal, el sistema electoral venezolano ha funcionado de acuerdo a la Ley Orgánica del Sufragio, sancionada en 1972, con posteriores reformas, en el marco del mecanismo político que rige al país desde 1959 y dentro de lo pautado por la Constitución vigente de 1961. El sistema electoral se estructura por medio del sufragio univer-

-cal, directo y secreto, con escrutinio minoritario y exigencia de mayoría relativa para elegir presidente de la República, y la aplicación del principio de representación proporcional de las minorías para la elección de los miembros de las Cámaras legislativas, Asambleas legislativas de los Estados y Concejos Municipales, mediante listas cerradas y bloqueadas, en 23 circunscripciones electorales, equivalentes a 20 Estados, 2 territorios federales y el Distrito Federal. El organismo central que regula los procesos electorales es el Consejo Supremo Electoral (CSE), el cual, según la Ley Orgánica del Sufragio, ejerce la suprema dirección, organización y vigilancia de dichos procesos, campañas, y del Registro Electoral Permanente. El Consejo Supremo Electoral tiene su sede en Caracas y está compuesto por nueve (9) miembros elegidos cada cinco (5) años por el Congreso de la República. Cinco (5) miembros, con sus respectivos suplentes, son nombrados por los partidos que hayan obtenido mayor número de votos en las últimas elecciones nacionales para Cámaras legislativas. Los otros cuatro (4) miembros deberán ser personas sin filiación política (independientes), aunque la realidad es estas personas son de ordinario nombradas entre simpatizantes de los partidos que en el Congreso posean la mayoría para hacerlo. El Consejo nombra de su seno un presidente y dos vicepresidentes, y un Secretario de fuera del organismo. Las Juntas electorales son nombradas por el supremo organismo electoral para cada Estado y para el Distrito Federal, así como para los distintos municipios. Las elecciones generales tienen lugar el primer o segundo domingo del mes de diciembre del último año de gobierno, según un período constitucional de cinco (5) años. El acto de votación, así como el del escrutinio, siguen el patrón conocido de cualquier proceso electoral (voto secreto y escrutinio público). El voto es obligatorio y existen sanciones en caso de incumplimiento del deber de votar. En general, los procesos electorales han excluido el fraude electoral directo y, a pesar de diversos problemas surgidos por deficiencias en la elaboración del censo y falta de conocimiento de la técnica de votación por algunos miembros de las mesas, puede decirse sin lugar a dudas que existe un apreciable control sobre el acto de votación y el subsiguiente escrutinio que bloquea la posibilidad de manipulaciones fraudulentas. Finalmente, para ser elector se requiere ser venezolano(a) mayor de 18 años de edad; estar inscrito en el registro electoral permanente y poseer la correspondiente cédula o carnet electoral (4).

En Venezuela se creyó que el sistema de representación proporcional

las minorías agravaría la fragmentación del electorado y el multipartidismo, lo cual crearía inestabilidad e impediría una eficaz acción gubernamental (3). No obstante, la realidad ha sido que, a pesar del sistema, los sucesivos procesos electorales van a mostrar una creciente polarización entre AD y Copei como fuerzas mayoritarias, en el sentido de configuración de un bipartidismo y del turno en el poder de los dos grandes partidos. La tendencia cristalizó con nitidez en las elecciones de 1973, las cuales dieron una mayoría sustancial a Carlos Andrés Pérez (AD), seguido de Lorenzo Fernández (Copei), recogiendo los dos candidatos más del 80 por ciento de los votos presidenciales, y ambos partidos casi el mismo porcentaje en votos pequeños o legislativos, con mayoría parlamentaria absoluta del primero en ambas Cámaras. El electorado venezolano viene inclinándose, pues, por el turno en el poder de dos grandes alternativas, y la existencia de gobiernos de minorías en la década de los años 60 parece haber tenido relación, más que con el sistema electoral, con la dinámica interna de los partidos políticos, las escisiones de AD, la conflictividad generada por la guerrilla urbana y su impacto en la escena política y las simples aspiraciones presidenciales y personalistas de dirigentes de fracciones escindidas y rivales. Lógicamente, el sistema electoral proporcional seguirá favoreciendo de alguna manera el surgimiento del fenómeno multipartidista, pero ello será en contra de la manifiesta tendencia del electorado a simplificar el panorama y las alternativas propuestas.

La instauración del bipartidismo en Venezuela ha hecho, por otra parte, abandonar la perspectiva de los gobiernos de coalición que tuvieron lugar entre 1958 y 1968, gobiernos de "amplia base" motivados principalmente por la carencia de mayoría suficiente de AD y la necesidad de consolidar el sistema democrático frente a los extremos. Ya en 1968, cuando se produce el triunfo de Rafael Caldera, quien gobierna con Copei e independientes, la carencia de una mayoría parlamentaria es sustituida por acuerdos en las Cámaras. Durante 1974-1979, el gobierno de Carlos Andrés Pérez gobernará con comodidad y sin problemas parlamentarios al obtener AD la mayoría absoluta. Las últimas elecciones (1978) señalaron otra vez una polarización del electorado aún mayor que la registrada en 1973, y aunque Copei no cuenta con mayoría absoluta (AD va a contar con cuatro o cinco diputados más que el grupo parlamentario social cristiano, mientras que en el Senado hay un empate antológico sólo resuelto por los senadores vitalicios: Caldera, Betancourt y Pérez), es

uy probable que vuelva a reeditarse la dinámica de 1969-1974: las llamadas "áreas de coincidencia parlamentaria" entre los dos grandes partidos.

Es difícil hacer conjeturas sobre cuánto durará el bipartidismo venezolano, sobre todo si consideramos que el espacio que media entre cada elección -cinco años- es lo suficientemente amplio como para seguir una línea de pronóstico válida. Si puede afirmarse, sin embargo, que dada la dinámica política del país lo previsible es la continuidad de este sistema por lo menos a medio plazo. Se trata de dos organizaciones políticas hoy igualadas con sorprendente exactitud en fuerza electoral básica y aparato partidista. El proceso político se encuentra lo suficientemente nacionalizado y ha devenido muy homogéneo como para pensar que la polarización pueda difuminarse o fraccionarse hacia el multipartidismo. En el bipartidismo, los fuertes trabajan precisamente para continuar siendo fuertes y porque, como es obvio, tienen el poder para hacerlo. (4)

7) El sistema de Política Exterior.-

(1)

Podemos considerar al sistema de política exterior como una especie de subsistema del sistema político nacional y como un nivel cuya creciente importancia plantea, - un análisis autónomo, ya desde el punto de vista de una estructura formal institucionalizada y en expansión permanente, como por la conformación histórica, la actualidad y las perspectivas futuras.

Así, en Venezuela, el ministerio de Relaciones Exteriores conserva la primacía formal en la coordinación de los intereses y la formulación ejecutiva de la política exterior. Sin embargo, en virtud de la complejidad temática y estructural de las relaciones internacionales actuales, y de la importancia que el petróleo y el desarrollo económico tienen entre las prioridades del país, otros organismos especializados han adquirido progresivamente una gran autonomía frente a la Cancillería, circuns-

ribiendo en cierta manera a ésta a las tareas de la diplomacia tradicional (representación, negociación, protocolo, servicios consulares), a cuales de paso parecen representar una proporción cada vez menor las relaciones internacionales contemporáneas. De otra parte, según normativa constitucional, el presidente de la República viene a ser responsable de la dirección de las relaciones exteriores de Venezuela, aunque se sobreentiende que, debido a sus múltiples obligaciones, las posibilidades reales de intervención directa pueden ser susceptibles de obvias limitaciones; en realidad, "la participación personal de los residentes venezolanos en la dirección de la política exterior ha variado en alcance, intensidad y estilo de acuerdo con las exigencias de la política interna y la estabilidad institucional y con las inclinaciones individuales de los primeros mandatarios, tanto como con las demandas de acción provenientes del medio ambiente internacional" (1).

El ministro de Relaciones Exteriores es el "órgano directo del Presidente" y su ministerio es el responsable de "la actuación internacional de la República como nación soberana (y) la conducción de las relaciones con los Estados y Organismos Internacionales"; ello involucra la negociación, firma, ratificación, adhesión, reservas, prórrogas, ejecución y denuncia de tratados, convenciones, acuerdos y convenios internacionales", y "la dirección de la política económica exterior de la República" (2). En este último sentido, el Instituto de Comercio Exterior es un organismo adscrito a la Cancillería que goza de considerable autonomía en materia de integración, acuerdos comerciales y fomento de las exportaciones no tradicionales. Igualmente, la Oficina Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN) se ha proyectado directamente hacia el exterior a través de su división de cooperación técnica. Pero ha sido el Ministerio de Minas e Hidrocarburos (hoy de Energía) el que ha intervenido decisivamente en materia de comercio exterior, jugando un importante papel histórico en la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y al tener a su cargo la negociación de los acuerdos de tipo petrolero, las relaciones con los países miembros de la OPEP y los países compradores de petróleo. Por otro lado, la ingerencia del Parlamento de la República en la materia se deriva de su atribución específica de aprobar los convenios o tratados internacionales mediante ley especial, "salvo que mediante ellos se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, de aplicar principios expresamente reconocidos por ella, de ejecutar actos

ordinarios de las relaciones internacionales o de ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional" (art. 128 de la Constitución).

Otros actores juegan también significativo papel en la política exterior venezolana: son los casos de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y el ministro de Estado para Asuntos Económicos Internacionales. Esta última es figura de creación reciente y viene a constituir una manifestación más de la especialización temática en las relaciones internacionales venezolanas. Hay que destacar la participación del ministro de Estado para Asuntos Económicos Internacionales, Dr. Manuel Pérez Guerrero, en las conferencias y reuniones sobre el llamado diálogo Norte-Sur y en las que Venezuela ha intentado llevar e impulsar proposiciones que permitan una mejora en el intercambio económico entre las naciones industrializadas y los países subdesarrollados.

(II)

II.a) 1959-1969.-

A partir de 1958, la principal preocupación de los gobiernos de Acción Democrática no fue tanto la política internacional como el problema de la estabilidad institucional interna. En realidad, la formulación de la llamada Doctrina Betancourt, de no reconocimiento de los gobiernos constituidos mediante el derrocamiento de regímenes democráticos en América Latina, no sólo evocaba en cierta manera la "política de buenas compañías" sostenida por el poeta Andrés Bello Blanco durante el trienio 1945-48, sino también reflejaba a la vez la concepción táctica de Rómulo Betancourt en cuanto a la necesidad de una consideración de las relaciones interamericanas desde el punto de vista de los intereses de la consolidación del naciente sistema democrático en Venezuela.(1)

Un claro antecedente del pensamiento de Betancourt en esta materia lo podemos encontrar en un discurso pronunciado en Panamá, el 28 de julio de 1946:

"Es una nueva mentalidad, un nuevo criterio que está perfilándose entre los hombres que tienen responsabilidades de gobierno en los pueblos de nuestra América. No tenemos arrogancias ni desplantes ni creemos que podemos darnos el lujo de jugar a grandes potencias, pero

sí queremos dar nuestra propia nota en el concierto internacional, pues en la hora en que grandes potencias democráticas vacilan, pequeños pueblos de América Latina han dicho que es incompatible con el triunfo resonante de las armas aliadas contra las Potencias del Eje, la persistencia en Europa de un régimen que como el de España, es la excrecencia del fascismo. Por eso, pueblos pequeños como México, Panamá, Venezuela y Guatemala, no mantienen relaciones con el régimen de España. Varios son también los pequeños pueblos americanos -Venezuela entre ellos y en sitio de vanguardia- que están empeñados en hacer triunfar la tesis de que en torno de los gobiernos anti-democráticos del Continente se establezca un riguroso cordón profiláctico. Mientras haya en América un solo Gobierno que no garantice el libre juego de los partidos políticos, que no garantice la libertad de prensa, la expresión oral y escrita de todas las corrientes ideológicas, mientras haya un gobierno que no garantice las cuatro libertades rooseveltianas, estará amenazada la libertad de todo el continente" (4).

En aquellos años, como también en los posteriores a 1958, la quiebra de la democracia en España fue sin duda un importante elemento de referencia en la gestación de la futura doctrina. Por lo demás, el rompimiento de relaciones diplomáticas con el régimen franquista hay que ponerlo necesariamente en el marco del escenario político internacional surgido al final de la segunda guerra mundial, cuando el régimen autoritario español es excluido del nuevo contexto y aislado de la naciente institucionalidad democrática del mundo occidental. Como botón de muestra, el presidente de la Junta revolucionaria dirigía una carta a los republicanos españoles con motivo de la celebración, en Caracas, de un acto público por España libre, el 13 de abril de 1946:

"... a través de estas líneas desco enviarles la reiterada adhesión sin reservas de la Junta Revolucionaria de Gobierno y la mía en particular, a la única causa legítima de la España democrática: la causa de la República. Actuamos con lealtad al sentir venezolano cuando decimos esta renovada palabra de fe en la próxima reconquista de la libertad española. Por más tiempo no podrá prolongarse el contrasentido de que una guerra ganada contra el fascismo deje en pie, intacta, una de las más típicas excrecencias de ese régimen de oprobio. Franco y la democracia son incompatibles y si las potencias de mayor peso específico en la política mundial no terminan de comprenderlo, lógico es que los pequeños pueblos marginados de las combinaciones e intrigas de los llamados imperios, afirmemos con énfasis aquella verdad. Venezuela y su gobierno de extracción popular y de filiación democrática, aprovecharán toda coyuntura para instar a pueblos y a gobiernos americanos a la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen totalitario y policíaco opresor de nuestra España que también es entrañablemente nuestra" (5).

Así, pues, en el campo interamericano, a partir de 1958 la aplicación incondicional de la Doctrina Betancourt va a suponer la ruptura diplomática con muchos de los tantos gobiernos militares surgidos en ese período: Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Panamá, etc. Asimismo, la ruptura con Cuba y Santo Domingo, con el castrismo y el trujillismo, significará de manera especial y sintomática el rompimiento con regímenes de antagónico signo ideológico, pero convergentes en una agresión real de dichos Estados contra Venezuela. Por un lado, los intentos del dictador Rafael Leonidas Trujillo para acabar con la vida del presidente venezolano; por otro, los intentos de "exportación" de la guerrilla fidelista a Venezuela, cristalizados en ayuda económica, armamento y entrenamiento. Betancourt lo había declarado categóricamente en el primer mensaje que como presidente de Venezuela presentó al Congreso nacional el 13 de febrero de 1959: "Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de los ciudadanos y los tiranicen con respaldo de policías políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón profiláctico y erradicados mediante acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica interamericana" (4).

Preocupación fundamental fue desde el primer momento el tema del petróleo. En esta materia el reformismo centraba sus aspiraciones en una nueva modalidad en las relaciones del Estado con las compañías petroleras extranjeras, bajo una dirección que proveyera a Venezuela de un control mayor sobre su industria petrolera que el posibilitado por el tradicional, desastroso y corrupto sistema de concesiones. La idea básica residía en la consideración del petróleo como motor del desarrollo venezolano y ello implicaba una acción exterior coordinada para defender de alguna manera en el campo internacional la indispensable y fundamental materia prima. Figura clave del período en este sentido va a ser el Dr. Juan Pablo Pérez Alfonso, el "filósofo petrolero de AD", como el más importante ideólogo y promotor de las bases doctrinarias y de las alternativas posibles de la política petrolera venezolana. El tan traído y llevado lema de "sembrar el petróleo", acuñado por el escritor y novelista Arturo Uslar Pietri en 1936, fue tomado por Pérez Alfonso añadiéndole nuevos conceptos conservacionistas de su propia cosecha y transformado en una doctrina práctica para la formulación de alternativas concretas en materia petrolera.

Pérez Alfonso había comenzado su carrera como portavoz del partido Acción Democrática en temas petroleros durante la década que siguió a

muerte de Juan Vicente Gómez en 1935; en 1945 pasó a encargarse de los asuntos petroleros del nuevo gobierno y, posteriormente, después de varios años de exilio en México durante la dictadura de Pérez Jiménez, se convirtió en ministro de Minas e Hidrocarburos del gobierno de Betancourt a partir de 1959. Desde el principio, Pérez Alfonso *opinó* que el petróleo tenía un valor intrínseco, no necesariamente reflejado en los precios del mercado, ya que es críticamente importante para la civilización industrial moderna y debido a que las reservas petroleras del planeta son riquezas no renovables y están siendo rápidamente agotadas. La única forma de asegurar un precio satisfactorio sería mediante la colocación de la industria petrolera bajo control gubernamental, no sólo nacionalmente sino internacionalmente. La teoría del "valor intrínseco" tuvo su formulación vigorosa en 1959 y 1960, cuando Pérez Alfonso afirmó repetidamente que los precios debían subir y predijo que ello eventualmente ocurriría. La medida que se hiciera patente la importancia del petróleo, junto a determinadas acciones oficiales que serían necesarias a fin de solidificar ese reconocimiento intrínseco.

En el plano internacional, Pérez Alfonso pensó sobre el funcionamiento de un tipo de imperialismo "suave", no tanto como resultado de leyes históricas determinadas, sino como consecuencia de las desproporcionadas desigualdades políticas y económicas, postulando para hacerle frente una política de redistribución en las relaciones económicas internacionales. La médula de esta doctrina, cuyo origen está en los trabajos de Raúl Prebisch y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), parte de la existencia de una tendencia general del intercambio internacional contra los países menos desarrollados y subdesarrollados, forzándolos a pagar más por sus importaciones, a la vez que reciben menos por la venta de sus productos a los países más desarrollados ("comprar barato y vender caro"). Junto a ello, Pérez Alfonso avisaba sobre el riesgo de una "indigestión económica" como resultado de la explotación petrolera para Venezuela, sosteniendo que la producción petrolera debía ser controlada de manera que el incremento de los ingresos se redujera a un ritmo compatible con la capacidad del país para manipularlos de manera productiva, insistiendo en que el incremento de dichos ingresos debe producirse a causa de alzas en los precios y no de incrementos en la producción, estrategia conservacionista que va a seguir el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) (7).

La idea de Pérez Alfonso para poner en práctica a nivel internacio-

-nal estas consideraciones, residía en el lanzamiento de una ambiciosa ofensiva diplomática consistente en intentar construir una red internacional de control intergubernamental destinado a subordinar el cartel privado del petróleo a un cartel oficial constituido por los gobiernos de los países productores, buscando dos objetivos concretos y específicos: a) una organización de países exportadores capaz de controlar y prorratear la oferta de petróleo dirigida al mercado internacional, y b) un acuerdo amplio con los Estados Unidos y Canadá para regular y estabilizar el comercio petrolero en el hemisferio, esto es, la consecución de un trato hemisférico para el petróleo venezolano. La violenta caída de los precios en agosto de 1960 proveyó el catalizador necesario. Los gobiernos del Medio oriente habían sufrido pérdidas de muchos millones de dólares. En septiembre de ese mismo año, Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela, que juntos producían más del 80 por ciento del petróleo movilizado por el comercio mundial, se reunieron en Bagdad y establecieron la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el compromiso de cooperar en la restauración de los precios a sus niveles anteriores y preparar la formulación de un sistema para asegurar la estabilidad de los mismos mediante la regulación de la producción, entre otras medidas. Las gestiones de Pérez Alfonso habían dado resultado y el acuerdo logrado (al que eventualmente se unirían Qatar, Libia, Indonesia, Abu Dhabi, Argelia, Nigeria, Ecuador y Gabón) iba sin duda a abrir un nuevo camino, muchas veces conflictivo, en las relaciones económicas internacionales, en las cuales la acción de los países subdesarrollados y en vías de desarrollo se configuraba como un tema afirmativo central de la política internacional.(8)

Por lo demás, la política exterior de este decenio se orientó hacia las aspiraciones de integración latinoamericana y subregional, compartidas por Venezuela con su adhesión a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1967, asociación que sin embargo no iba a dar los frutos esperados por sus creadores. Paralelamente, la idea de un mercado andino se abría paso con el visto bueno de la Cancillería venezolana, aunque con la virtual oposición de poderosos grupos económicos. En materia de fronteras, Venezuela reemprendía una histórica reclamación pidiendo la reapertura de las conversaciones con Gran Bretaña acerca de la Guayana Esequiba (territorio hoy parte del Estado independiente de Guyana), negociaciones que posteriormente quedarían congeladas por un protocolo (9).

II.b) 1969-1974.-

Para 1968 las circunstancias internas y externas de Venezuela habían cambiado: en lo interno, la estabilidad institucional era ya un hecho (como lo demostraba el acceso al poder del partido socialcristiano Copei y la victoria del Dr. Rafael Caldera en las elecciones sobre el partido gubernamental); en lo externo, pese a la intervención norteamericana en Santo Domingo, la política de bloques experimentaba un relajamiento en América Latina. Más aún, el florecimiento del tercermundismo, puesto de manifiesto en las Conferencias de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (United Nations Conferences for Trade and Development: UNCTAD), revelaba la concepción de un mundo dividido no ya entre "países socialistas" y "mundo libre", sino entre países industrializados y ricos y países subdesarrollados y pobres.

El nuevo gobierno social-cristiano surgido de las elecciones de diciembre de 1968 formulaba la doctrina de la Justicia Social Internacional, y sustituía la Doctrina Etcancourt por la de la Solidaridad Pluralista, a manera de alternativa frente a "nacionalismos hipertrofiados" y "hostilidades ideológicas" que entorpecían la consecución del llamado "Bien Común Universal" (16). La justicia social internacional en la concepción demo-cristiana aparecía como la necesidad de un intercambio comercial internacional en condiciones de equidad, a fin de reducir la "brecha" que separaba al mundo desarrollado del área empobrecida de la humanidad. En la región ello implicaba la proyección integral de un nacionalismo latinoamericano, que en palabras del presidente Caldera no debía

"... tomar el sentido de la negación acalorada, pero intrascendente, de la rivalidad pequeña y mezquina, del desco de dañar a determinados objetivos o convertir en blanco de pirotecnias verbales a determinados países. Debemos orientar ese nacionalismo hacia la defensa y afirmación de lo nuestro. Robustecer nuestra independencia sin pro-
vocar antagonismos necesarios y contraproducentes, fortaleciendo nuestra figura como pueblos que ya tienen suficiente experiencia para saber lo que quieren, para defender lo que les pertenece y para asegurarse de lo que necesitan en plano de honrosa dignidad." (17).

De ahí la insistencia en la tesis de la solidaridad pluralista como alternativa:

"Quisiéramos que todos los países de la América Latina tuvieran una unidad fundamental en su manera de gobernarse y que las autoridades constituidas hubieran sido todas escogidas libremente por sus pueblos en el contexto de las instituciones democráticas. Pero, si ésta no es la realidad, no debemos en modo alguno caer en la negación recíproca, en la controversia infecunda, en el cultivo de aquello que pueda separarnos, con mengua de lo que con urgencia nos debe unificar" (12).

Tales lineamientos iban a significar de hecho el principio de reconocimiento automático de los gobiernos y una disminución importante de la beligerancia diplomática de los años anteriores. Se verificaba también un paulatino relajamiento de tensiones en las relaciones entre Venezuela y Cuba, que abría paso a la posibilidad de una futura reanudación de vínculos diplomáticos. De otra parte, el gobierno venezolano denunciaba el tratado comercial con los Estados Unidos y establecía la fijación unilateral de los precios del petróleo. La integración andina pasaba a ser una de las principales metas de la Administración Caldera, hasta culminar en el Acuerdo de Cartagena (1969), que creaba el mercado subregional y al cual Venezuela se adhirió a principios de 1973. Y aunque se logró la delimitación de la frontera venezolano-brasileña, la controversia por el territorio de la Guayana Esequiba se congeló por un plazo de doce años mediante el protocolo de Puerto España. Más problemático iba a resultar el diferendo entre Colombia y Venezuela en torno a la delimitación de las áreas marinas y submarinas, para el cual no se ha llegado aún a una solución satisfactoria (13).

Pero cuestiones internacionales y política interior se mezclaron agudamente al final del período constitucional socialcristiano, ante la proximidad de la campaña electoral. Los asuntos de Cuba y Chile tuvieron indudablemente una influencia en la orientación del electorado venezolano que iba a concurrir a las urnas en diciembre de 1973, a fin de elegir nuevo presidente y nuevos órganos legislativos. La posibilidad de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba parecía una meta coherente con la política exterior del gobierno de Caldera, según la tesis del pluralismo latinoamericano que sustituyó a la doctrina Betancourt. Sin embargo, se trataba a su vez de una cuestión sumamente delicada, ya que había sido precisamente Venezuela el país iniciador de las gestiones que culminaron con la separación de Cuba del sistema interamericano, a principios de la década de los 60. Como contrapropuesta a los deseos de Caldera, portavoces de la oposición, principalmente acciondemocratistas, mantenían que habiendo sido Venezuela

el país agredido por la continentalización de la lucha armada por parte de Castro, correspondía a Cuba la iniciativa del restablecimiento de relaciones, interrumpidas ya por más de una década.

Pero estos propósitos se quedaron en la letra a raíz de los acontecimientos de Chile, en septiembre de 1973: la posibilidad de que el gobierno de la democracia cristiana venezolana estableciese relaciones con Cuba antes de las elecciones de diciembre, quedaron clausuradas frente a la tensa situación en que se vió envuelto para el momento del derrocamiento del presidente Salvador Allende, ya que lo ocurrido en Chile se daba en concomitancia con el ambiguo papel de la democracia cristiana del país sureño. Si los acontecimientos chilenos repercutieron en las elecciones venezolanas, es muy difícil cuantificar electoralmente dicha repercusión, aunque puede decirse que fue en sentido positivo para AD y negativo para el partido social cristiano venezolano y para los sectores de la izquierda radical, principalmente el Movimiento al Socialismo (MAS). Es probable que el electorado venezolano viese el derrocamiento de Allende como el fracaso del socialismo por la vía electoral y la connivencia de la democracia cristiana chilena como factor coadyuvante del sangriento golpe militar. Y es posible suponer que el candidato y el partido más favorecido en Venezuela por la situación en el país austral, iba a ser el que ofrecía una tendencia "media", menos socialista y más reformista: la plataforma de Carlos Andrés Pérez y de Acción Democrática ofrecía, en efecto, las ventajas de la democracia sin las amenazas de un socialismo radical o de las ambigüedades de una democracia cristiana; esto es, la posibilidad de evitar una situación como la acaecida en Chile, de enfrentamiento social y violencia autoritaria (14). La tesis del pluralismo latinoamericano ahora se volvía contra sus autores, y el reconocimiento diplomático que el gobierno de Caldera tuvo que hacer a la Junta militar del general Pinochet no contribuyó en nada a la imagen electoral del candidato socialcristiano, Dr. Lorenzo Fernández. Los intentos de la democracia cristiana venezolana de salvar a su homónima en cuanto a ciertas responsabilidades en el derrocamiento del presidente Allende, no dieron resultados positivos. Era el momento para la socialdemocracia accióndemocratista.

ii.c) 1974-1979.-

El gobierno de Carlos Andrés Pérez, surgido de las elecciones de diciembre de 1973, si bien continuaría algunas directrices de la política de su antecesor, daría un nuevo y dinámico impulso a la presencia venezolana en el medio internacional, favorecido indudablemente por la situación creada con motivo del alza de los precios del petróleo. A la vista de ello, la presidencia de Pérez intentaría orientar su política exterior en el sentido de un renovado nacionalismo de factura tercermundista y latinoamericanista, utilizando el petróleo como instrumento de presión frente a los países desarrollados mediante los canales diplomáticos y ante la opinión mundial.

Un hecho trascendental iba a producirse al comenzar la administración de Pérez, cual fue una vieja aspiración de los venezolanos: la nacionalización del petróleo. La realidad es que la situación internacional sorprendió en cierta medida al anterior gobierno democristiano, preocupado por el aumento de los ingresos y no tanto por la oportunidad de ampliar su control sobre la industria petrolera. Recordemos que, en 1970, Siria había bloqueado el oleoducto transarábico a fin de obtener mayores pagos por derechos de tránsito, y Libia, bajo las directrices del gobierno del coronel Kadafi, había reducido la producción para presionar a las compañías petroleras a pagar impuestos más altos, a lo cual accedieron. Se desencadenaba un proceso en el sentido de una espiral de exigencias por mayores impuestos que cambiarían enteramente el carácter del mercado petrolero mundial en pocos años, y traería como consecuencia la llamada crisis petrolera y energética de 1973. En principio, los sucesos internacionales que se estaban gestando repercutieron sobre la posición venezolana en el sentido de adherirse a la tendencia general por lograr más altos precios e impuestos, y la necesidad estratégica de iniciar una acción legislativa para hacer frente a la nueva situación y que culminó en la aprobación, por el Congreso venezolano, de un proyecto de reforma y control unilateral de los precios de referencia del petróleo.

De igual manera, adquirió creciente importancia la preocupación por saber lo que ocurriría cuando las concesiones petroleras vigentes expirasen en su validez legal-temporal, es decir, lo que sería revertido y en qué condiciones, surgiendo un acuerdo general sobre la idea de que las previsiones legales existentes resultaban muy vagas para resolver el problema de la propiedad final de las instalaciones. Fue así como

se pasó a la propuesta de una ley de reversión de los hidrocarburos, la cual proponía que todas las concesiones y propiedades de las compañías petroleras pasarían a propiedad del Estado cuando expiraran las concesiones a principios de la década de 1980. El proyecto de ley de reversión se convirtió en Ley de la República en julio de 1971. En la misma línea, se aprobó en agosto de ese mismo año un proyecto de ley que establecía la propiedad del Estado sobre todo el gas, tanto el asociado a la producción de petróleo como el no asociado; sólo se podría exportar el gas asociado a la producción petrolera y se reservaba para uso nacional el vasto campo del gas no asociado de la región oriental del país; no habría aportes de capital privado, venezolano o extranjero, en la nueva industria del gas, que se convertía así en un monopolio estatal absoluto.

Pero los acontecimientos adquirirían mayor velocidad que las previsiones legales: incluso la ley de Reversión petrolera quedaría superada ante nuevos planteamientos. La campaña electoral de 1973 ponía de manifiesto, por boca de los principales en competición -Fernández de Copei y Pérez de AD-, si bien en términos moderados y algo vagos, que el proceso de reversión podría ser acelerado bajo el supuesto de que Venezuela no podía esperar hasta 1983, año de vencimiento de las concesiones. Después de la aplastante victoria electoral de Pérez, la actitud venezolana experimentará un abandono de la discreción, en un reflejo del optimismo por las mejorías del mercado petrolero mundial y el consiguiente flujo de ingresos fiscales. Caldera en su último mensaje ante el Congreso, urgía a su sucesor a nacionalizar rápidamente la industria petrolera, y el propio Pérez comentaba, después de las elecciones, que era "imposible esperar hasta 1983, para que el Estado asuma el manejo completo de la industria petrolera. Sería prudente como alternativa, que procedamos en el futuro inmediato a nacionalizarlo, lo que aseguraría nuestra soberanía sobre la industria, y que lleguemos a nuevas fórmulas para la participación de las compañías extranjeras en aquellas áreas en que sean necesarios sus recursos técnicos, su financiamiento o su capacidad de mercado" (45).

Subrayamos lo anterior por su alta significación en cuanto al carácter de la futura nacionalización del petróleo venezolano: estaremos en presencia de una nacionalización pactada, previo indemnización de las compañías petroleras y con la posibilidad de que el Estado pueda celebrar convenios con entes privados (léase compañías) en casos o materias

especiales. En efecto, el presidente Pérez sancionaba, el 29 de agosto de 1975 -después de polémicas deliberaciones en el Parlamento-, la Ley orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, publicada el mismo día en edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. El artículo 1º de dicha Ley es suficientemente explícito e integral al considerar que "Se reserva al Estado, por razones de conveniencia nacional, todo lo relativo a la exploración del territorio nacional en busca de petróleo, asfalto y demás hidrocarburos; a la explotación de yacimientos de los mismos, a la manufactura o refinación, transportes por vías especiales y almacenamiento; al comercio interior y exterior de las sustancias explotadas y refinadas, y a las obras que su manejo requiera, en los términos señalados por esta ley. Como consecuencia de lo dispuesto en este artículo, quedarán extinguidas las concesiones otorgadas por el Ejecutivo Nacional ...". Y el tan discutido artículo 5º señalaba que "El Estado ejercerá las actividades señaladas en el artículo 1º de la presente ley directamente por el Ejecutivo Nacional o por medio de entes de su propiedad, pudiendo celebrar los convenios operativos necesarios para la mejor realización de sus funciones, sin que en ningún caso estas gestiones afecten la esencia misma de las actividades atribuidas" (...) "En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de tales convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes" (16).

Así, pues, el petróleo y todo su entorno quedaba nacionalizado en forma integral, y para casos especiales o excepcionales (cuestiones que requirieran una elevada tecnología o determinados aspectos que el Estado venezolano no hubiera previsto) se daba viabilidad a convenios de asociación con las empresas en condiciones específicas y suficientes al menos en teoría para impedir una recaptura de la riqueza por las transnacionales: a) control estatal, b) duración determinada (temporalidad), c) visto bueno previo del Parlamento (control político-parlamentario) con facultad para fijar condiciones. Lógicamente, en el legislador privó en este punto una concepción realista del problema: el evitar un "salto en el vacío"

de imprevisibles consecuencias. Al mismo tiempo se dictaba el Decreto creador del holding Petróleos de Venezuela (PETROVEN), organismo encargada de la ejecución de la política del Estado en materia de planificación, coordinación, supervisión y control de las actividades de las empresas operadoras de la industria petrolera nacional.

A partir de esta situación, el presidente Pérez ponía de relieve, en su discurso con motivo de firmar el "cúmplase" de la Ley de nacionalización, la importancia creciente del petróleo en la política exterior venezolana de cara al mundo subdesarrollado:

"El petróleo es hoy un problema económico y político mundial que involucra a Venezuela en una política exterior cada vez más exigente. Es el instrumento en manos de los países del Tercer Mundo, los miembros de la OPEP, para llevar a las naciones industrializadas al diálogo y a la comprensión que haga posible la creación de un nuevo orden económico mundial. Venezuela es actora y solidaria plena de esta controversia por la justicia internacional. Además de atender a sus particulares y obligantes compromisos de colaboración con las naciones hermanas de la América Latina" (...)

"El orden económico que hizo posible la explotación de los recursos naturales de los países pobres llega a su término. Los pueblos del Tercer Mundo ya no están dispuestos a permitir que se les paguen precios viles por sus materias primas. Se ha proclamado un nuevo orden económico internacional. Los países industriales, entre tanto, viven una crisis de malos entendidos que no les permite aceptar que los países explotados asuman la defensa activa de sus propios intereses y tomen sus propias decisiones" (...)

"El petróleo venezolano ha de ser instrumento de integración latinoamericana, factor de seguridad mundial, de progreso humano, de justicia internacional y de equilibrada interdependencia económica" (11).

La acción exterior del gobierno de Pérez se orientaría, por consiguiente, a hacer valer en el ámbito internacional al petróleo como instrumento de presión frente al mundo industrializado, a fin de nivelar el intercambio comercial existente y luchar por un nuevo orden económico internacional más justo y solidario. En este sentido, Venezuela no estaría satisfecha con limitar la discusión al precio del combustible, sino a insistir en que el arreglo se extendiera a todo el conjunto de materias primas que los países subdesarrollados suministran a los países industrializados a precios arbitrarios e inestables y desproporcionados en relación con los de los bienes manufacturados que reciben en el intercambio. No se trataba de solicitar la destrucción de los imperios económicos, sino su moderación mediante reformas al sistema económico internacional (reestructuración del mercado mundial de materias primas, acceso a la in-

-dustrialización, transferencia tecnológica, asistencia financiera, reforma monetaria, etc.,) como base para una progresiva equiparación de los explotados (48).

De otra parte, el gobierno venezolano utilizaría los recursos extraordinarios derivados de los nuevos precios del petróleo para estimular el desarrollo del país y el de la región: se concedieron préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proyectos de desarrollo en América Latina, y se ofrecieron otros al Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de subsanar los déficits de las balanzas de pagos de los países pobres afectados por los nuevos precios del oro negro. Simultáneamente se creaba el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) para financiar proyectos tanto en el país como en el exterior.

Un "nuevo clima" surgía en las relaciones entre Venezuela y España, país con el cual, a raíz de la declinación del régimen franquista y el restablecimiento sucesivo de las instituciones democráticas, se iniciaron importantes acuerdos de carácter económico, técnico y cultural, junto a un apoyo político decidido al proceso de democratización. Cabe recordar que, para Venezuela, y sobre todo bajo los gobiernos de AD, la existencia del régimen franquista supuso un serio inconveniente político para una mayor plenitud de relaciones. Venezuela, aunque mantenía relaciones diplomáticas con España (rotas en 1946, fueron restablecidas durante la dictadura de Pérez Jiménez y así continuaron después de la caída de ésta), manifestó durante las administraciones acciondemocratistas una amistad y admiración para con el gobierno de la República en el exilio (México) y con dirigentes de la oposición democrática española, cuestión que supuso en algún momento más de un disgusto entre las respectivas representaciones diplomáticas. Una vez comenzado el cambio político en España, el acercamiento entre los dos países ha sido intenso y ha dado visibles frutos durante la administración de Pérez, siendo prácticamente muy previsible la continuidad de esta colaboración bajo la administración del próximo gobierno socialcristiano del Dr. Luis Herrera Campins (1979-1984).

Por último, en el contexto latinoamericano, Venezuela, en la línea de administraciones anteriores, propugnará insistentemente una política de integración y de solidaridad continentales, en la que la creación - con el apoyo incondicional del gobierno venezolano y su ayuda financiera - del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) será uno de los principales logros. En el campo de los derechos humanos, el gobierno de adherirá a la política de la administración Carter de respeto y salvaguardia de los

miembros, y diversas personalidades del partido gubernamental denunciarán la violación de dichos derechos principalmente en países del cono sur. A la vez, se daba acogida a numerosos contingentes de exiliados y emigrados argentinos, chilenos, uruguayos, etc., en el marco de una amplia interpretación del derecho de asilo establecido en la Constitución. Era destacable también la preocupación del gobierno de Pérez en la consecución de una salida al problema del canal de Panamá, y el inicio, tal vez por primera vez en Venezuela, de una política de estrechamiento de vínculos con los Estados del mar Caribe, Trinidad-Tobago, Barbados y Jamaica principalmente. Pero la acción exterior se manifestó con más contundencia en la problemática suscitada en la República Dominicana, cuando las elecciones de mediados de 1978 dieron el triunfo a la oposición dominicana, en la persona de Antonio Guzmán, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), frente a la continuidad del Dr. Balaguer y del Partido Reformista. En aquella ocasión, sectores reaccionarios del Ejército intentaron el no reconocimiento de la victoria comicial del perredismo mediante diversas artimañas y manipulaciones fraudulentas que cristalizaron en la suspensión del escrutinio cuando los resultados comenzaron a ser desfavorables al gobierno. El gobierno venezolano presionó por distintos canales, en convergencia con el presidente Carter y la Internacional socialista, a fin de que no se interrumpiera el recuento electoral y se respetara el resultado, como así sucedió. De otro lado, ante la crisis de Nicaragua, el gobierno venezolano tomaba la iniciativa de estudiar el caso en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) y proponer una solución democrática al conflicto que enfrentaba y enfrenta al pueblo del país centroamericano con el régimen dictatorial de Anastasio Somoza. Sin embargo, quedaba claro que la solución última estaba en manos de los Estados Unidos y sus intereses estratégicos en tan importante zona. (49)

II.d) 1979.-

El cambio de gobierno en Venezuela, como consecuencia del triunfo electoral de Luis Herrera Campins, candidato presidencial del partido socialcristiano Copei, planteará sin duda modificaciones de perspectiva en los lineamientos de la política exterior del país, aunque creemos que se mantendrán algunas líneas ya esbozadas y consolidadas en período anterior, principalmente en materia de política petrolera exterior,

considerada de interés nacional prioritario y para la cual se ha previsto en muchas ocasiones un previo consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias del país. Es posible afirmar que se continuará con los esfuerzos de integración latinoamericana, con especial énfasis en el Pacto Andino y la revitalización de otros mecanismos de solidaridad latinoamericanista. Otros aspectos están todavía en la incógnita y las declaraciones del presidente electo son aún muy generales como para avizorar posiciones concretas sobre problemas específicos de una realidad internacional que, por lo demás, es altamente dinámica y de conflictividad creciente. Subyace sin embargo la incógnita sobre la actitud concreta de la próxima administración democristiana en Venezuela (1979-1984) con relación a la situación en Chile. Es posible en este sentido, que se trate de buscar una vuelta de la democracia cristiana chilena al poder como salida aceptable para Estados Unidos de la dictadura militar. Es probable también una disminución del énfasis en la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas en Latinoamérica, sobre todo si pensamos en las numerosas críticas de distintos sectores socialcristianos a la ~~gestión~~ de Pérez en esta materia durante su período constitucional. Por el contrario, vale la pena hablar de un estrechamiento de relaciones con los gobiernos democristianos, principalmente de Europa (Italia, Bélgica, sectores de la UCD en España). O verosíblemente entremos en una etapa de predominio de los problemas de política interna sobre las cuestiones de política exterior: parecen haber sido los primeros, y no los segundos, los que influyeron decisivamente en el cambio de comportamiento del electorado venezolano en los comicios de 1978. (20)

8) Tensiones en el sistema político: desigualdad social y marginalidad. Tecnología y sistema político. Perspectivas futuras del sistema político venezolano.-

(I)

Los cambios sociales ocurridos en Venezuela entre 1940 y 1970 contemplaron la aceleración de un proceso generalizado de movilización social, que en realidad dista todavía de haber terminado: dada la dinámica del país, es muy probable que los próximos diez años sean escenario de rápi-

das transformaciones en el medio social, que a su vez es muy posible que originen nuevos problemas y nuevas necesidades. Por de pronto, la civilización social que tuvo lugar en el período señalado, y que en rigor comenzó a operar lentamente en la década de 1920 impulsada por la explotación petrolera, al transformar la fisonomía de la sociedad venezolana, modificó el volumen y el carácter de los incumbos del sistema político. La urbanización, la migración interna, la acumulación de grandes capitales en la economía, las primeras industrias, etc., fueron fenómenos desconocidos que demandaron una respuesta de las estructuras políticas, cristalizadas fundamentalmente en una modificación del aparato estatal en un sentido liberal-democrático y, paralelamente, en su utilización como instrumento planificador o corrector de una nueva realidad social muchas veces caótica y problemática.

Así, el Estado asume progresivamente el planeamiento de una infraestructura para el país, el sistema educativo, la sanidad, el desarrollo agrario, el "despegue" industrial, el desarrollo regional, etc., en un afán por canalizar de alguna manera los recursos petroleros hacia el crecimiento y la expansión a fin de alcanzar la tan ansiada meta: el desarrollo autosostenido y diversificado. En cualquier caso, el planteamiento reformista, consistente no tanto en una modificación cualitativa del sistema como en la eliminación o corrección de sus aspectos más lacerantes, tiene éxito en la medida en que logra ampliar efectivamente el sistema educativo, mejorar las condiciones sanitarias de la población, aumentar su nivel cultural, promover nuevas industrias nacionales, paliar el problema habitacional, dar al Estado el control de la principal riqueza, organizar el movimiento sindical y garantizar sus derechos mediante una legislación laboral cada vez más amplia, y, en fin, hacer frente de algún modo a las nuevas expectativas generadas por una sociedad cada vez más diversa y compleja.

Pero también es evidente que, con el transcurso del tiempo, vamos viendo viejos problemas que perviven, cuestiones que parecen no tener solución a pesar de los cuantiosos recursos invertidos. Así, cada año la demanda educativa de la población es superior a la oferta; las condiciones sanitarias en el medio rural y en las grandes ciudades son en gran medida insuficientes; el nivel cultural medio de la población sigue siendo bajo; las nuevas industrias son incapaces de satisfacer la demanda interna y el país recurre constantemente a importaciones voluminosas; el déficit habitacional y el encarecimiento de la vivienda es agudo y grave; los derechos

de los trabajadores muchas veces caminan a un ritmo más lento que el poder conseguido por las organizaciones patronales; en definitiva, se constata que la distribución de la riqueza sigue siendo profundamente injusta y que las desigualdades sociales, al contrario de disminuir, aumentan con inusitada fuerza.

Una realidad primaria resume las restantes: la marginalidad. La marginalidad se definiría como "un subproducto disfuncional del 'sistema'". El hecho de que el 'sistema' produzca una "masa marginal" que no puede integrar está en relación directa con su carácter "dependiente". Se trataría entonces de poner de relieve la relación intrínseca entre dependencia y marginalidad. En este sentido, el concepto de marginalidad implicará una especificidad del capitalismo latinoamericano: su incapacidad para saltar por encima de sus propias contradicciones y propiciar un desarrollo continuo y autónomo. En la realidad venezolana, el capitalismo petrolero mostraría hasta hoy su inoperancia para eliminar la marginalidad; al contrario, la misma evolución de la economía petrolera, su carácter esencial, explicaría el surgimiento de tan señaladas distorsiones. (1) Con razón se ha dicho que "El problema global más llamativo en el caso de Venezuela, y que no le es propio o exclusivo en el contexto latinoamericano, es el de las masas rurales 'urbanizadas' a una velocidad elevada. 'Conuqueros' en su gran mayoría, pobres, sin educación, sin entrenamiento técnico mínimo para ser absorbidos por la civilización urbana y frente a una estructura económica hasta ahora incapaz de promover una oferta substancial de empleo, estas masas de migrantes, no encontrando los canales adecuados para su integración a la sociedad urbana y portando ellos mismos los elementos culturales propios al medio rural primitivo, constituyen los habitantes de lo que en Venezuela se denomina 'cinturones de miseria' por su especial ubicación geográfica alrededor de los grandes centros urbanos, aunque existen enclaves más o menos densos en diversas partes del casco urbano. Los habitantes de dichas zonas padecen toda la problemática social implicada por su medio: desempleo, falta de asistencia social, no acceso a la educación, etc., ..., en resumen, una 'calidad de vida' pobre" (2).

La problemática social ha llevado a la consideración de Venezuela como un caso de "crecimiento sin desarrollo" (3), en el que, si bien es cierto que las macromagnitudes de la economía experimentan un veloz aumento, la repercusión de estos avances sobre el desarrollo social son enormemente dispares. Así, la persistencia de desigualdades sociales se

evela en el análisis de la composición del Ingreso nacional: la remuneración del capital, del empresario y del trabajador no asalariado alcanza al 53,2%, mientras que la remuneración a empleados y obreros llega solamente a un 43,8%; la remuneración porcentual del trabajo, además, habría disminuido: mientras que entre 1950 y 1966 osciló entre el 55 y el 61 por ciento, en el quinquenio 1968-1972 se mantuvo entre un 46,8% y un 48,5% (4). Más aún, si el auténtico progreso social consiste en la difusión del bienestar colectivo mediante una equitativa distribución de los ingresos y fortunas, hay que decir que en este punto se está muy lejos de una situación relativamente aceptable. Desgraciadamente, los datos disponibles vienen siendo escasos. La "Primera Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares en Venezuela" (1962) arrojó luz sobre el desproporcionado reparto de la renta nacional, y salvo modificaciones de menor entidad, todo permite afirmar que es ya una cuestión estructural que subsiste en la actualidad, acentuada, si cabe con más fuerza. Para aquél año, el 74% de las clases populares no percibía sino el 31% de los ingresos familiares; con un 44% de ellas que, al disponer de ingresos mensuales menores de 500 bolívares por familia, vivían en un nivel de pura subsistencia y no acumulaban sino el 11,5% de la renta nacional. Y si bien es cierto que se constataba una emergente clase media (un 23% de familias que lograban atraer el 33,2% del ingreso), los sectores indigentes, constituyendo tan sólo el 3,7% de las familias, percibían hasta el 32,2% de los ingresos totales (5).

De otra parte, habría que aludir al problema de las inversiones extranjeras. Venezuela ha carecido hasta época muy reciente de una política de control sobre las inversiones foráneas. La permisión de un alto porcentaje de repatriación de capitales y las remesas de utilidades autorizadas, han reflejado una política de la más absoluta libertad. La estrategia de sustitución de importaciones seguida por el Estado venezolano a partir de 1958, abrió por diversos mecanismos nuevos campos de intervención del capital extranjero, fundamentalmente norteamericano, en la industria nacional (manufacturera, esencialmente) y en los más variados sectores de la economía del país (banca, seguros, comercio y servicios en general). Por lo demás, una rentabilidad del capital muy superior a la existente en el resto de América Latina, se ha convertido en un señuelo para el ingreso de nuevas inversiones. (6) La falta de rigidez y el tradicional libre albedrío en esta materia pueden no sólo suponer una hipoteca del futuro industrial del país, sino también dar origen a un elemen-

esto fuertemente condicionador del proceso político.

No hay que olvidar tampoco la "captura" de los medios de comunicación social por el capital privado, con la excepción de unas pocas emisoras de radio y dos canales de televisión en manos del Estado, ambos de inferior audiencia en relación a sus competidores privados. Bajo una distorsionada interpretación de lo que es la libertad de expresión, los medios de comunicación social en manos del capital privado han devenido los principales mecanismos de transmisión de la ideología de consumo en la sociedad venezolana, así como los generadores del cuadro de expectativas de tipo psicológico de los ciudadanos. Ocupando en espacios televisivos y de radiodifusión una proporción exorbitante de publicidad, más allá de la permitida legalmente, se da origen a una ideología que intenta transmitir los valores consumistas propios de la sociedad norteamericana. De ahí que muchos piensen que la cultura nacional venezolana se ha orientado cada vez más a una típica cultura de consumo, buena parte del cual es de carácter conspicuo; esto es, una cultura de consumo de productos que, en su gran mayoría, no son elaborados en el país. En este orden de ideas, el desarrollo cultural venezolano se orienta a consumir lo producido en el exterior en los planos tecnológico y humanístico, gracias precisamente a la publicidad masiva de lo foráneo. Pero como lo autóctono se resiste a perder su esencial espacio y de hecho hay una resistencia a la colonización cultural sin más, el resultado cristaliza en una serie de disfuncionalidades y de desajustes visibles, formando el llamado melting-pot cultural, por lo que se podría decir que el venezolano(a) actual es una especie de "combinación de una serie de elementos culturales que se superponen; es decir, sufre un proceso de heterogeneidad cultural". (7).

(II)

Los extraordinarios avances de la ciencia y de la tecnología en la época contemporánea han permitido hablar del término ya conocido de revolución científico-técnica, hecho que ha venido a transformar las bases de la sociedad industrial de los países avanzados. El elemento esencial de esa revolución científica y tecnológica ha sido el proceso de automation y el surgimiento de un sistema mundial en el cual el concepto tradicional de nacionalidad tiende a disminuir en importancia para dar lugar a conformaciones históricas, sociales, políticas y culturales de

perfil multinacional (9). Pero la circunstancia de que el proceso científico-técnico afecte sólo y preponderantemente a los países más industrializados que mantienen una posición hegemónica en el sistema mundial, plantea ya serios y graves dilemas en el conjunto de los países del Tercer Mundo y, por lo que a nuestro tema se refiere, al destino del área latinoamericana en general, y al caso de Venezuela en particular, que como otros se halla íntimamente vinculado a este proceso que tal vez sea el más importante de los ocurridos en lo que va de siglo XX.

Si la ciencia y la tecnología son la base esencial de la sociedad industrial y postindustrial, y si las sociedades en proceso de industrialización juzgan pertinente estimular un desarrollo científico y tecnológico como base de un probable desarrollo económico y social autónomo que suponga la superación del atraso y la dependencia, vemos que en esta materia hay indudablemente un trasfondo político, desde el momento en que la dependencia no es sólo una categoría socioeconómica, sino también tecnológica. En otras palabras, unos países privilegiados poseen el saber científico y tecnológico, el know how, y otros, atrasados, carecen de ese indispensable recurso para el desarrollo.

La sociedad venezolana se hallaría, en este sentido, en una etapa "precientífica". En materia de organización social y política de la ciencia, a pesar de relativos y aislados avances recientes, no se pasa de unidades de importación ajenas al sistema social nacional de transferencia y las instituciones encargadas de transmitir este tipo de saber operan todavía con un bajo nivel de viabilidad. Se impondría también en consecuencia, como característica venezolana, la de ser una sociedad "pre-tecnológica", con una variante importante: los sistemas de tecnología son más fácilmente transferibles que los modelos científicos, y éstos a su vez más fácilmente transferibles que los procesos organizacionales inherentes para producir dichos modelos y sistemas. En otros términos, Venezuela ha podido adquirir tecnología relativamente avanzada, sin que en dicha adquisición lo cualitativo se sobreponga a lo cuantitativo. La tecnología moderna se mezcla anárquicamente con la tradicional, pudiendo afirmarse que el país se halla en la contradictoria etapa de adaptación de los modos tradicionales de conducta a los modos tecnológicos modernos de uso; es decir, en un proceso de "tecnologización" entendida como superación de la tecnología tradicional (9).

A nivel latinoamericano, casi toda la literatura sobre intercambio internacional en esta materia (10) coincide en señalar el atraso de la re-

gión en ciencia y tecnología y cómo los procesos de transferencia tecnológica aumentan en tal cantidad que la dependencia tiende a hacerse cada vez mayor; de ahí la consideración de que Latinoamérica no ha sido capaz de alimentar un proceso autónomo y autosostenido de crecimiento de una ciencia y una tecnología propias que responda a sus necesidades. Es un hecho que el sistema científico-tecnológico latinoamericano no participa ni de lejos en los niveles de inversión e innovación del sistema mundial. Los elementos científicos y tecnológicos empleados en el área son, en su gran mayoría, inventados y luego transferidos desde otras áreas (desarrolladas: Estados Unidos y Europa Occidental, especialmente el primero); se trata de insumos adquiridos, no generados. Una baja capacidad de investigación y una infraestructura académica insuficiente explicaría, además, el fenómeno de la "fuga de talentos", es decir, la emigración a los centros desarrollados de personal especializado que no encuentra en la región las condiciones adecuadas para su labor.

En un país como Venezuela, la situación no escapa de las tendencias anteriormente señaladas, a pesar de ciertas peculiaridades derivadas de la singularidad de unos recursos fiscales voluminosos. Los pagos de Venezuela por razón de la utilización de tecnología foránea (royalties) en la industria nacional son astronómicos. Según cálculos conservadores, los pagos por concepto de comercialización de tecnología sobrepasaron los 30.000 millones de bolívares (7.000 millones de dólares-USA) en los doce años anteriores a 1975. Téngase en cuenta que ello es casi el equivalente a la cifra total del producto territorial bruto (PTB) de 1964 (11). De otro lado, la tecnología foránea incorporada al medio venezolano, sin tener en cuenta las realidades económico-sociales del país, ha repercutido en la disminución de la capacidad de empleo de la industria y ha fomentado su alto nivel de ociosidad, estimado en un 40 por ciento. Se ha dicho que el ingreso de Venezuela en el Pacto Andino y la subsiguiente adopción de su política de inversiones y transferencia de tecnología, abriría posibilidades de modificación de esta situación, pero lo cierto es que dado lo incipiente de tal proceso y las dificultades por las que ha atravesado la integración andina, se hace difícil adelantar conclusiones en tal sentido (12).

Ello no quiere decir, sin embargo, que haya una despreocupación total por el problema. La dependencia tecnológica del país ha preocupado en forma creciente a la clase política, y el propio sistema ha intentado la implementación de una política científica y tecnológica en los últimos

quince años. Se ha tratado de dar un impulso a las actividades científico-tecnológicas en Venezuela, reflejado no sólo en la diversificación de la educación superior, sino también por la creación de organismos estatales dedicados al fomento de dichas actividades (43). En realidad, la preocupación del Estado y de la sociedad por la investigación científica aparece en forma paralela a la etapa de los primeros intentos de modernización de la vida venezolana a partir de 1945. En 1950 tenía lugar ya la fundación de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (ASOVAC), y desde entonces hasta la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) y el Ministerio de la Juventud, la Ciencia y la Cultura, iban a aparecer una serie de organismos dedicados a estas materias, tales como el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y los Consejos de Desarrollo Científico y Humanístico de las universidades nacionales. De igual manera se incrementaba en los últimos años la inversión en ciencia, aunque resultara mínima en comparación con los considerables capitales que invierten los países desarrollados en dicha actividad (44).

(III)

Desigualdad social, marginalidad, diversificación de la economía y dependencia tecnológica son, a nuestro juicio, los principales "retos" que el sistema político venezolano tiene frente a sí de cara a la década de los 80. Pensamos que tal vez en la superación de este conjunto de problemas esté la clave del futuro desarrollo político venezolano.

Una cuestión se desprende con nitidez del análisis del sistema político actual, que no ha sido ni puede ser negada por los observadores imparciales del proceso político: el sistema político venezolano ha alcanzado una solidez inobjetable. El sistema político funciona, no sólo en la teoría, sino también en la práctica; en otras palabras, estamos en presencia de unas estructuras políticas aceptadas por la inmensa mayoría de la población como elemento de referencia básico de la vida política del país. Dichas estructuras, por otra parte, son lo suficientemente amplias como para integrar las más diversas alternativas, alternativas que es posible presentar en elecciones libres y periódicas y que han quedado progresivamente reducidas a dos: la solución neoconservadora que encarna la

democracia cristiana del partido Copei, y la solución social-demócrata que representa el partido Acción Democrática. Las dos principales alternativas se han turnado en el gobierno desde 1968, en una oscilación que podemos caracterizar como de centro-derecha - centro-izquierda, aunque en diversos momentos de la coyuntura política el esquema se invierte, según sean los intereses en juego.

No existe en Venezuela una extrema derecha como tal, ni siquiera mínimamente organizada, aunque haya individualidades que en algún momento sustentaran dicha posición, con un casi nulo respaldo electoral. Los intentos de organización electoral del perezjimenismo han quedado progresivamente disueltos o diluidos en espectros más amplios, y si bien tuvieron alguna importancia en el pasado, nunca llegaron a representar una amenaza seria para la estabilidad del sistema. De otro lado, la extrema izquierda, después de un doloroso proceso de autocrítica de los años de la guerrilla, se ha integrado casi plenamente a la lucha política a través de las vías pacíficas establecidas por la Constitución.

Los poderosos grupos económicos de la alta burguesía venezolana parecen haber aceptado, igualmente, el sistema democrático como forma de gobierno, y el sistema político los ha incorporado de alguna manera a los procesos decisivos. La aceptación de estos grupos está en relación directa al planteamiento reformista en la vida política, y es posible conjeturar su rechazo en caso de desbordamiento. De otro lado, el movimiento sindical organizado ha encontrado también su lugar en el marco del sistema, y ha contribuido a fijar en buena medida los derechos y las libertades sindicales de los trabajadores. En este caso, el límite viene a ser el mismo, aunque desde distinta perspectiva: queda descartado cualquier planteamiento de tipo revolucionario y sólo son aceptadas las posiciones reformistas (salarios, mejores condiciones en la empresa, libertad en la negociación de convenios, autonomía sindical, derechos sociales, etc.).

La Iglesia, por su parte, a cambio de su no intromisión directa en los asuntos políticos, encuentra un sitio dentro del sistema social, que es reconocido mediante distintos mecanismos y ayudas financieras, sistema educativo privado y posibilidad de culto público junto a otras confesiones religiosas. Suceden fenómenos similares con las Fuerzas Armadas, a las cuales se les encomienda un papel estrictamente institucional, apolítico y profesional, lejos de toda injerencia política, aunque en contrapartida su peso específico sea reconocido en la legislación y en la

práctica gubernamental, mediante la correspondiente dotación de medios técnicos y el capítulo cada vez más importante referido a la asistencia social (sanitaria, recreativa, educacional) del personal militar. La identificación de las Fuerzas Armadas con el sistema político vigente es clara, aunque desconocemos la distribución exacta de los planteamientos ideológicos de los distintos niveles de la oficialidad. Un denominador común se ha abierto paso en los últimos tiempos: la institución militar debe participar en las tareas de la sociedad destinadas a la consecución del desarrollo económico y social, siempre bajo la dirección del estamento civil.

Ahora bien, al menos a medio plazo, el sistema político venezolano, una vez alcanzado un nivel apreciable de estabilidad, presenta factores susceptibles de originar tensiones agudas que podrían suponer su resquebrajamiento. Nos referimos a los problemas señalados al principio de este apartado y que por lo demás han aparecido a lo largo de nuestra exposición. Se trata de realidades que pueden dar lugar a conflictos sociales imprevisibles, que el sistema político deberá abordar de alguna manera. Hasta ahora ha podido con éxito enfrentarse a disyuntivas nada fáciles respecto a la evolución general del país en los últimos veinte años, y ello juega a su favor respecto al porvenir. Lo que pasa es que la evolución social y económica futura será muy probablemente mucho más compleja y difícil que la habida hasta hoy. Creemos que el sistema político venezolano va a someterse a duras pruebas en los próximos años.

- 51 -

[700]

- NOTAS AL CAPITULO QUINTO -

1) Estabilidad del sistema político venezolano.-

- (1) Nos ha sido de mucha utilidad para este capítulo el trabajo de Humberto Hjaím, Ricardo Combellas, Eva Josko de Guerón y Andrés Stambouli, El sistema político venezolano (Caracas: Instituto de Estudios Políticos-Universidad Central de Venezuela, 1975). Lo citaremos con asiduidad como Sist.Pol.Ven.,.
- (2) Cf., Orlando Albornoz, Desarrollo político en Venezuela (Caracas: Universidad Central de Venezuela-Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, 1974), p. 10. En la bibliografía anglosajona, el libro más reciente viene a ser el de John D. Martz y David J. Myers (Eds.), Venezuela. The Democratic Experience (New York-London: Praeger Publishers, 1977, Praeger Special Studies in International Politics and Government).
- (3) Juan Carlos Rey, "El sistema de partidos venezolano", revista Política, No.1, (Caracas: Instituto de Estudios Políticos-Universidad Central de Venezuela, 1972. pp.175-230), pp.202-203.
- (4) El sistema político venezolano, ed.cit., pp.11-12.
- (5) Vid., J.E. Rivera Oviedo, Historia e Ideología de los Demócratas Cristianos Venezolanos, Caracas, 1969. (citado por Rey, p.211).
- (6) "Aquí ha ocurrido un acto más de la tragedia que en nuestra América viene ya padeciendo la democracia. ¿Quién maneja esta máquina de opresión?" -dijo el gran escritor en diciembre de 1948: Jesús Sanoja Hernández, "24 de noviembre de 1948. Otra vez la Dictadura", Caracas, diario El Nacional, 24 de noviembre de 1978, cuerpo D, p.9. Dice con razón Sanoja Hernández que "Puede levantarse el alegato que se quiera contra la democracia existente en 1948. Lo que sí no se justifica, ni siquiera en las debilidades extremas de aquella, es una usurpación que impuso, luego de casi ciento treinta años de fracasos, otra dictadura destinada a otro fracaso y otro penoso recomienzo"; no había razones políticas que justificaran una década de inconstitucionalidad y de terrorismo de Estado.(art.cit.)
- (7) Sist.Pol.Ven., p.13
- (8) Sobre las interioridades del pacto: Jesús Sanoja Hernández, "A 20 años del Pacto de Punto Fijo", diario El Nacional, Caracas, 31 de octubre de 1978, Cuerpo D, p.15.
- (9) El pacto de Punto Fijo constituiría "uno de los más notables ejemplos que cabe encontrar en sistema político alguno, de formalización e

institucionalización de unas comunes 'reglas de juego', al propio tiempo que muestra la lucidez de la élite de los partidos políticos venezolanos"; sería, ante todo, "un intento de formalizar al máximo las 'reglas del juego' político y de crear un sistema de partidos basado en relaciones mixtas (cooperación-conflicto) que asegure la defensa frente a los enemigos existenciales o antagónicos (las fuerzas antidemocráticas) y la socialización de los actores y su plena aceptación de tales reglas, abriendo la posibilidad de que, en el futuro puedan mantenerse entre ellos relaciones de conflicto agonal (no antagónicas) dentro del mutuo respeto y tolerancia" (J.C. Rey, trabajo citado, pp.214-215.)

- (10) Sobre los posibles factores de la radicalización ideológica a principios de la década de 1960, Jorge Ahumada, "Hipótesis para el diagnóstico de una situación de cambio social. El caso de Venezuela", en F. Bonilla y J.A. Silva Michelena (Eds), Cambio político en Venezuela: Exploraciones en análisis y en síntesis (Caracas: Centro de Estudios del Desarrollo-Universidad Central de Venezuela, 1967, pp.33-58), p.48. En el mismo sentido, J.A. Silva Michelena, Cambio político en Venezuela: Crisis de la Democracia (Caracas: Centro de Estudios del Desarrollo-Universidad Central de Venezuela, 1970), pp.115-116 del capítulo III: "El siglo XX". De cierta utilidad, Rodolfo José Cárdenas, La insurrección popular en Venezuela (Caracas: Ediciones Catatumbo, s.f.). Por último, Richard Gott, Rural Guerrillas in Latin America (Penguin Books: The Pelican Latin America Library, 1973), sobre la guerrilla venezolana, segunda parte: "Revolutionary Failure in Venezuela", pp.151 y ss.
- (11) Vid., Germán Carrera Damas, Historia contemporánea de Venezuela. Bases metodológicas (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela, 1977), pp.179 y ss.
- (12) Coincidimos con Orlando Araujo, Venezuela violenta (Caracas: Ediciones Espérides, 1968), pp.49-51. Sobre el gobierno de Betancourt, Robert J. Alexander, The Venezuelan Democratic Revolution: A Profile of the Regime of Rómulo Betancourt (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1964).
- (13) Carrera Damas: op.cit., pp. 180-181.

2) Los partidos políticos.-

- (1) Maurice Duverger, Los partidos políticos (México: Fondo de Cultura Económica, 1974. Quinta reimpresión. Trad. de J. Campou y E. González Pedrero. Título original y primera edición en francés: Les partis politiques, Paris, Librairie Armand Colin, 1951), p. 15.
- (2) Duverger: op.cit., pp. 11-12.
- (3) Según Duverger, en la distinción entre partidos "de cuadros" y partidos de "masas", la diferencia viene dada por una cuestión de estructura y no de dimensión o de tamaño. Si tomamos al Partido Socialista francés, por ejemplo, vemos cómo el reclutamiento de sus miembros es fundamental; se trata de realizar la educación política de

la clase obrera y sacar de ella una élite capaz de gobernar y administrar el país; los miembros del partido son su substancia; las cuotas de los mismos proporcionan los fondos necesarios para su actividad cotidiana y electoral. Los partidos de masas, en lugar de recurrir a donaciones privadas (banqueros, industriales, etc.), reparten la carga financiera sobre la mayor cantidad posible de miembros; apelan al público, procurando que sus campañas electorales escape a las servidumbres capitalistas. Los partidos de cuadros responden a una noción diferente. Se trata de reunir notables influyentes, con prestigio, técnicos, notables financieros, que aportan el nervio de la captación político-electoral: "Lo que los partidos de masas obtienen por el número, los partidos de cuadros lo obtienen por la selección". La adhesión, en éstos, es totalmente personal, determinada por cualidades individuales, estricta y cerrada (op.cit., pp. 93-94). De otra parte, la distinción descansa también en una infraestructura sociopolítica. Coincidió, en un comienzo y en grandes líneas, con la sustitución del sufragio limitado por el sufragio universal. En los regímenes electorales censitarios, los partidos tomaron la forma de partidos de cuadros; ahora bien, de hecho, el advenimiento del sufragio universal no trajo de un golpe a los verdaderos partidos de masas. Los partidos de cuadros trataron simplemente de flexibilizar su estructura, simulando una apertura a las masas: se trataba más bien de utilizar a las masas como trampolín político y financiero. Los partidos socialistas son los que van a franquear la etapa definitiva: ya en vísperas de la guerra de 1914, los partidos socialistas europeos formaban grandes comunidades humanas, muy diferentes a los anteriores partidos de cuadros. Así, por ejemplo, el Partido Social-Demócrata alemán en especial, con más de un millón de miembros, con un presupuesto anual de casi 2 millones de marcos, constituía un verdadero Estado dentro de la nación. Este encuadramiento permitía a su vez liberar a la clase obrera de la tutela de los partidos denominados "burgueses": sólo un partido de masas hacía posible la presentación de candidatos obreros en las elecciones y una prensa política obrera. Se explica así que la distinción de partidos de cuadros y partidos de masas, se corresponda más o menos igualmente a la de derechas e izquierdas, partidos "burgueses" y partidos "proletarios". Originariamente, la derecha burguesa consideraba suficiente la existencia de sus notables y de sus élites y, en realidad, hasta el fascismo, las tentativas de creación de partidos de masas conservadores fracasaron generalmente. "La repugnancia instintiva de la burguesía por el encuadramiento y la acción colectiva jugaba también en este campo, igualmente que la tendencia inversa de la clase obrera favoreció el carácter masivo de los partidos socialistas" (op.cit., pp. 95-97).

- (4) Como ejemplos de la aparición de estos nuevos movimientos políticos, dotados de mayor contenido ideológico que los ya tradicionales partidos históricos, suele señalarse a el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), fundado en México con ambiciones continentalistas, aunque arraigado en la realidad del Perú, por Víctor Raúl Haya de la Torre; el el PRI (Partido Revolucionario Institucional), promovido por el presidente mexicano Plutarco Elías Calles, en la tercera década del siglo XX. De otro lado, tendríamos a los movimientos populistas o de "cezarismo populista", en los que la canalización de las aspiraciones de los nuevos sectores sociales parece ser realizada por un líder carismático; con los casos de G. Vargas en Brasil y J.D. Perón en Argentina. En medio de una ideología algo incoherente y de una demagogia muchas veces pintoresca, estos movimientos asumen la pretensión de

crear "un nuevo Estado" de ribetes autoritarios, que sea a la vez abierto y popular, que tienda a incorporar las capas sociales aparecidas en los inicios del proceso de industrialización y el auge económico que supuso la segunda guerra mundial para los países neutrales. Vid., Antonio Lago Carballo, "Los Regímenes políticos iberoamericanos", en Maurice Duverger: Instituciones Políticas y Derecho Constitucional (Barcelona: Editorial Ariel, 1970. pp. 577-609. 5a. edición española, totalmente refundida, dirigida por J. Solé-Tura, con prólogo de P. Lucas Verdú), pp. 596-599.

- (5) Existen dificultades, conviene aclararlo, en el conocimiento real de la organización de los partidos en general; de acuerdo con M. Duverger, "La organización de los partidos descansa esencialmente en prácticas y costumbres no escritas; es casi enteramente consuetudinaria. Los estatutos y los reglamentos interiores no describen nunca más que una pequeña parte de la realidad: raramente se los aplica de manera estricta. Por otra parte, la vida de los partidos se rodea voluntariamente de misterio: no se obtienen fácilmente de ellos datos precisos, incluso elementales. Se está aquí en un sistema jurídico primitivo, donde las leyes y los ritos son secretos, donde los iniciados los desnudan hurañamente a la vista de los profanos. Sólo los viejos militantes del partido conocen bien los pliegues de su organización y las sutilezas de las intrigas que se anudan en ella. Pero raramente poseen un espíritu científico que les permita conservar la objetividad necesaria; y no hablan gustosamente de ello" (op.cit., p. 12).
- (6) Sist. Pol. Ven., pp. 17-18. Sobre AD en la literatura anglosajona, J.D. Kartz, Acción Democrática. Evolution of a Modern Political party in Venezuela (Princeton University Press, 1966).
- (7) Vid., Humberto Njaim, "Burocratización y Cuerpos Técnicos en las Organizaciones", revista Política, No. 3, Caracas, Instituto de Estudios Políticos-Universidad Central de Venezuela, 1974. pp. 35-46.
- (8) Cf., Ramón Escovar Salom, Evolución política de Venezuela, edic.cit., pp. 144-145.
- (9) Seguimos a Manuel Vicente Magallanes, Cuatro Partidos Nacionales. Acción Democrática, Copei, Partido Comunista de Venezuela, Unión Republicana Democrática (Caracas-Madrid: Diana Artes Gráficas, 1973), pp. 11-12. De las luchas políticas salió la expresión "adeco", cuyo origen tendría una curiosa y doble vertiente; según Magallanes surgió por una parte del empeño de los sectores aliados del extremismo izquierdista que quisieron ubicar a AD dentro del status, aplicándole a sus siglas a manera de sufijo el co de Copei; por otra, la derecha ultraconservadora de otros tiempos habría intentado presentarlo como una colectividad de espíritu radical, añadiéndole a sus siglas el co de comunista (p. 11). Sobre los orígenes y la evolución histórica de AD, a la cual hemos aludido en varias ocasiones a lo largo de este trabajo, es útil el libro de Rubén Cerpio Castillo, Acción Democrática 1941-1971. Posuicio histórico de un partido (Caracas: Ed. República, 1971), principalmente en lo que se refiere a la gestación y fundación del partido, pp. 30-50.
- (10) Vid., Acción Democrática, Doctrina y Programa (Caracas: Secretaría Nacional de Propaganda, 1962), citado por Magallanes, p. 12.

- (11) Magallanes, op.cit., pp. 13-14.
- (12) Leonardo Ruiz Pineda en el prólogo a Venezuela bajo el signo del terror. El Libro Negro de la Dictadura (Santiago de Chile: Publicaciones Valmore Rodríguez, Talleres Gráficos Astudillo, 1953. p. 25). Citado por Magallanes, p. 14.
- (13) Vid., Partido Social Cristiano Copei, Programa, Caracas, 1961 (3a. ed.); y Estatutos (folleto publicado por el partido). Magallanes, opcit., p. 65.
- (14) Ibid., pp. 65-66.
- (15) Sobre los partidos demócrata-cristianos en América Latina, ver Iván A. Vallier y Vivian Allier, "La sociedad en Iberoamérica: América del Sur", en Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, David L. Sills (Ed.), (edición española de Editorial Aguilar, Madrid, 1975. Volumen 5, pp. 565-575), p. 567.
- (16) Vid., José M. Lovera, Sociología Cristiana, Barcelona, Ed. Luis Gili, 1954; y Boletín de la Junta Promotora del Partido Demócrata Cristiano Alemán (1955), citado por Ambrosio Romero Carranza, Qué es la Democracia Cristiana, Buenos Aires, Ed. Democrist, 1958, p. 85. Información que suministra Magallanes, pp. 66-67 y 94-95.
- (17) Op.cit., pp. 67-69. Vid., Declaración de Principios, preámbulo del programa del partido Copei, 3a.ed.cit., pp. 4-8. En el caso de Copei, por otra parte, hay que destacar una gran preocupación por la formación ideológica de sus militantes y dirigentes, mediante organismos tales como el Instituto de Formación y Educación Democrática Cristiana (IFEDEC), dedicado al entrenamiento de líderes democristianos, con sede en Caracas; en el mismo sentido, el Instituto Nacional de Estudios Sindicales (INES), para la capacitación de líderes sindicales, también con sede en Caracas; e, incluso, instituciones de carácter socio-religioso, de una u otra forma dependientes o subsidiados por la Iglesia (Sist.Pol.Ven., p. 21).
- (18) M.V. Magallanes, Los partidos políticos en la evolución histórica venezolana (Caracas-Madrid: Ed. Mediterráneo, 1973), pp. 555-557. Sobre los partidos en general, debemos decir que la Ley de Partidos (1964) reunió la normativa en cuanto a legalización, administración y fiscalización de los mismos en Venezuela, a la vez que buscó salvaguardar su naturaleza democrática. En realidad, dicha ley vino a ser una reglamentación del derecho de asociación previsto en la Constitución. Para el texto de la ley, Leyes Políticas de Venezuela (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1968. Rec. y notas int. de J.J. Rachadell). Es útil, de A.R. Brewer-Carías, el trabajo "Algunas notas sobre el régimen jurídico-administrativo de los partidos políticos en el derecho venezolano" (Madrid: Centro de Estudios Jurídicos Hispánicos, 1965. Separata de la Revista de Derecho Español y Americano, No. 8, abril-junio).
- (19) Sist.Pol.Ven., p. 23.
- (20) Ibid., pp. 25-26.
- (21) R.J. Cárdenas, El Combate Político, Caracas, Ed. Doña Bárbara,

1966, pp. 22-23.

- (22) Refiriéndose el comentarista Fausto Masó a los resultados electorales de 1978, anota que "Los críticos atendieron a las formas más que al contenido. No se fijaron hacia quién se dirigía la campaña y olvidaron que Luis Herrera se estaba posesionando de los grandes temas de esta elección: la vivienda, el costo de la vida, la inseguridad, etc. El partido de Gobierno tampoco advirtió que este mensaje se dirigía a su electorado tradicional, a los sectores sociales que en el pasado le habían dado la victoria." (...) "Acción Democrática era mayoría en el país cuando representaba más que nadie la voluntad de hacer reformas sociales. Por eso ha sido el partido tradicionalmente atractivo para los campesinos, los trabajadores y sectores de la clase media. Pero en estas elecciones AD presentó la imagen de un país satisfecho, se convirtió en un partido conservador, al menos en su oferta política; hizo una campaña atractiva sobre todo para la clase media. Mientras Luis Herrera se identificaba con los marginados, su principal rival se presentaba al país con las virtudes y cualidades -capacidad y firmeza- de un buen administrador. Copei apareció por eso como el partido de las reformas y AD el del status quo": Fausto Masó, "El Triunfo del Reformismo", diario El Universal, Caracas, 10 de diciembre de 1978.

- (23) O. Albornoz, Desarrollo político en Venezuela, ed.cit., p. 37.

3) Los grupos de presión.-

- (1) Vid., Humberto Njain, "Marco conceptual (Avances de una investigación sobre grupos de intereses en Venezuela)", en Politeia, No.2, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1973, pp. 285-289.
- (2) El ejército latinoamericano, "si es evidente que ha modificado su estructura interna en cuanto a los reglamentos accionadores de su conducta, superando el caudillismo localista vigente en el siglo pasado para convertirse en cuerpo regular profesionalizado, no es menos cierto que ha mantenido latente su espíritu de violencia"; la situación actual en muchos países sería la de un nuevo tipo de régimen autoritario bajo dirección militar: el colonial-fascismo, el cual vendría a corresponder con la renovación del papel tutelar del ejército en el sistema, en un período de crisis política iniciado hace ya varios años: Isaac Sandoval Rodríguez, Las crisis políticas latinoamericanas y el militarismo (México: Ed. Siglo XXI, 1976), pp. 10 y 21. Un buen libro sobre el tema es Fuerzas Armadas, poder y cambio (Caracas: Ed. Tiempo Nuevo, 1971), colectivo, con trabajos de L. Mercier Vega, O. Cuéllar y F. Bourricaud.
- (3) A. Lago Carballo, trabajo citado, pp. 607 y ss. También, J. Lambert, América Latina: estructuras sociales e instituciones políticas (Barcelona: Editorial Ariel, 1973. 3a.ed.), pp. 390-423.
- (4) J.C. Rey, trabajo citado, p. 207.
- (5) E. Licuven, Venezuela (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1964), pp. 195-196.

- (6) Orlando Albornoz, La sociedad venezolana (Caracas: Ediciones de la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo, 1976), pp. 46-47.
- (7) Sist.Pol.Ven., p. 29.
- (8) A. Vallier y V. Vallier, Trabajo citado, pp. 568-569.
- (9) Cf., William V. D'Antonio y Frederick B. Pike (Eds.), Religion, Revolution and Reform: New Forces for Change in Latin America (New York: Praeger). Citado por Vallier, p. 568.
- (10) D.E. Blank, Politics in Venezuela (Boston: Little, Brown and Company, 1973), pp. 80-81.
- (11) Cifras de Blank, op.cit., p. 83.
- (12) Citamos a Orlando Araujo, Venezuela violenta, ed.cit., pp. 134-135.
- (13) Vid., Franklin Tugwell, La política del petróleo en Venezuela (Caracas: Monte Avila Editores, 1977. Trad. de R. Rodríguez. Edición original: The Politics of Oil in Venezuela, Stanford University Press, 1975), pp. 50-51 y 53.
- (14) Según las citas de Rodolfo Quintero, Sindicalismo y cambio social en Venezuela (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1966), pp. 72-73. Para el área latinoamericana en general, un buen libro es el de P. Bourricaud y A. Siné, El sindicalismo en Latinoamérica (Barcelona: Ed. Nova Terra, 1965).

4) Autonomía relativa del sistema político.-

- (1) Cf., Sist.Pol.Ven., p. 38.
- (2) Tugwell: op.cit., p. 19.
- (3) Ibid., p. 219. Cf., P. Schmitter, "Paths to Political Development in Latin America", en D.A. Chalmers (ed), Changing Latin America: New Interpretations of Its Politics and Society (New York: Proceedings of the Academy of Political Science 30, No. 4, Columbia University, 1972.)
- (4) Cf., D.E. Levine, Conflict and Political Change in Venezuela (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1973), citado por Tugwell, p. 220.

5) Estructura político-constitucional del Estado.-

- (1) Vid., J. Lambert: op.cit. (edición francesa: Amérique Latine: Structures Sociales et Institutions Politiques, Paris, 1965).
- (2) Sobre estos puntos, Lago Carballo, trabajo citado, pp. 587-588. Desde un punto de vista conceptual, intenta profundizar en esta fenome-

-nología Juan Carlos Rey, en "Modelos teóricos para el estudio del subdesarrollo político latinoamericano" (Caracas: Cuadernos del Instituto de Estudios Políticos-Universidad Central de Venezuela, 1971).

- (3) Carrera Damas, Historia contemporánea de Venezuela ..., ed.cit., pp. 217-218 (en "La tardía institucionalización del Estado liberal en Venezuela", pp. 216-221, del Capítulo V: "Nueva perspectiva para el estudio de la historia contemporánea de Venezuela", pp. 199-250).
- (4) Ibid., pp. 219-221.
- (5) Seguimos a L. Mariñas Otero, Las Constituciones de Venezuela (Madrid: Ed. Cultura Hispánica, 1965. Prol de M. Fraga Iribarne), pp. 104 y ss.
- (6) "La expresión Estado Federal debe entenderse en Venezuela en el sentido de Estado igualitario, sin privilegios, sin castas y no en el sentido que se le asigna universalmente ya que el Estado venezolano es en su funcionamiento más un sistema unitario que un sistema federal"; por lo demás, cabe observar que el término Federación "que sirvió de bandera a los líderes y a las masas populares durante la Revolución Federal, tenía un significado y un contenido muy peculiar y muy distinto al que se le asigna en otros países. Federación en Venezuela era más bien símbolo de igualdad jurídica, de igualdad social y de igualdad económica. Expresaba el deseo de las mayorías nacionales de acabar con los privilegios, con las oligarquías y con las desigualdades económicas" : A. Arellano Moreno, Espejo de Historia Política de Venezuela (Caracas: Imprenta Nacional, 1967), pp. 75 y 117. Una excelente publicación sobre temas constitucionales venezolanos es La Constitución de 1961 y la evolución constitucional de Venezuela (Caracas: Ediciones del Congreso de la República, 1972. Estudio Preliminar de J.M. Casal).
- (7) Sist. Pol. Ven., p. 63. /Sobre el Estado democrático y social de derecho, Eneas Díaz, Estado de Derecho y Sociedad democrática (Madrid: Editorial Cuadernos para el Diálogo, 1975. 6a.ed.). Una brillante exposición, como todas las del autor, la de Manuel García-Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo (Madrid: Alianza Editorial, 1977).
- (8) Ibid., p. 63. (ver nota anterior).
- (9) Sobre los derechos en la Constitución, arts. 61, 76, 95, 97, 105, 106, 108, 109 y 111.
- (10) A.R. Brewer-Carías, Cambio político y reforma del Estado en Venezuela (Madrid: Editorial Tecnos, 1974), pp. 327 y ss.
- (11) Brewer-Carías: op.cit., pp. 327-330.
- (12) Por lo demás, la cúspide del Poder judicial viene a ser la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros son elegidos para un período de nueve (9) años por las Cámaras legislativas en sesión conjunta, renovándose por terceras partes cada tres años. La Hacienda pública intenta organizarse con una orientación del sistema tributario hacia una justa distribución de las cargas impositivas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como hacia la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida del pueblo (art. 223). La fiscalización de los ingresos

y gastos públicos corresponde a la Contraloría General de la República y el Contralor general es elegido por las Cámaras en sesión conjunta (Mariñas Otero: op.cit., p. 115).

6) El sistema electoral.-

- (1) Vid., D.E. Blank, op.cit., pp. 85 y 150. Cifras sobre abstención (porcentajes en relación con la población electoral inscrita), Sist.Pol.Ven., p. 94; también, informaciones del diario El Nacional, Caracas, 5 y 6 de diciembre de 1978.
- (2) O. Albornoz, Desarrollo político en Venezuela, ed.cit., pp. 96-97; Brewer-Carías, op.cit., p. 186.
- (3) Tal era el criterio de A.R. Brewer-Carías, "Obstáculos políticos al desarrollo de Venezuela", Revista de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de Cooperación, 1, enero-junio de 1973, pp. 103-128.
- (4) Entre la no muy abundante bibliografía sobre temas electorales en Venezuela, pueden citarse: Boris Buninov Parra, Introducción a la sociología electoral venezolana (Caracas: Ed. Arte, 1968); del mismo autor, "El comportamiento electoral del venezolano" (Caracas: Publicación del Centro Venezolano de acción intelectual, mayo de 1968). Desde una perspectiva crítica de la política electoral en Venezuela: Domingo Alberto Mangel, Elecciones 1973: El gran negocio (Valencia (Ven.): Vadell huos, 1974); del mismo autor, Los mercaderes del voto (Valencia: Edipian C. A., 1973). Un estudio sectorial, el de Jesús Rosas Marciano, La prensa nacional y las elecciones generales de 1958 (Caracas: Publicación del Instituto Venezolano de Investigaciones de Prensa-Universidad Central de Venezuela, 1961). Sobre el papel de las encuestas y la participación de técnicos extranjeros en las elecciones de 1973, Albornoz, op.cit., pp. 68 y ss. La opinión de la izquierda radical sobre el proceso electoral de 1973: Federico Alvarez (Ed), La izquierda venezolana y las elecciones de 1973 (Caracas: Síntesis Dos Mil, 1974).

7) El sistema de política exterior.-

- (1) Sist.Pol.Ven., pp. 70-71.
- (2) Según el Estatuto Orgánico de Ministerios, de 30 de diciembre de 1950 arts. 1, 2 y 5, citado en Sist.Pol.Ven., p. 72.
- (3) Vid., C. Guerón, "La Doctrina Betancourt, y el papel de la Teoría en Política Exterior", Politeia 1, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1972, pp. 231-243.
- (4) De la versión taquigráfica del Discurso pronunciado en Panamá, en el banquete ofrecido por el Presidente de aquella nación la noche de la fecha indicada: Rómulo Betancourt, Trayectoria democrática de una revolución. Discursos y conferencias pronunciados en Venezuela y en el exterior durante el ejercicio de la presidencia de la Junta Revolucionaria de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela (Caracas: Impren

-ta Nacional, 1948), pp. 417-418 (los subrayados son nuestros).

- (5) De la Carta dirigida a los republicanos españoles ...: R. Detancourt, op.cit., p. 459.
- (6) R. Detancourt, Hacia América Latina democrática e integrada (Madrid: Taurus Ediciones, 1969. 3a.ed. Prólogo de E. Picón-Salas), pp. 73-74, nota 1. Sobre la protección internacional de los derechos humanos como objetivo de la política internacional de Venezuela a partir de 1959, y sus fundamentos en el sistema jurídico interamericano, pp. 102 y ss.
- (7) Sobre las ideas de Pérez Alfonso, Tugwell, op.cit., pp. 53-93, que resumimos.
- (8) ibid., pp. 91-93.
- (9) Sist.Pol.Ven., pp. 76-77.
- (10) Vid., Aristides Calvani, Las Bases de la Nueva Política Exterior de Venezuela (Caracas, Cidal, 1972. mimeo, citado en Sist.Pol.Ven.).
- (11) R. Caldera, en Justicia Social Internacional y Nacionalismo Latinoamericano, Barcelona, 1973; que cita a su vez en su ponencia sobre Posibilidad de un Nacionalismo Latinoamericano, en América Latina: conciencia y nación. Un nuevo enfoque sobre su tiempo y perspectiva, Seminario Internacional celebrado en mayo de 1976, en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, de la Universidad Simón Bolívar de Caracas (Caracas: Equinoccio, Editorial de la Universidad Simón Bolívar, 1977. pp. 228-255). La cita es de p. 231.
- (12) Ibid., (ponencia), p. 249. Otros libros de Rafael Caldera: Especificidad de la democracia cristiana (Barcelona: Ed. Nova Terra, 1973. 2a.ed.), y Ideario. La Democracia cristiana en América Latina (Barcelona: Ed. Ariel, 1970).
- (13) Sist.Pol.Ven., pp. 78-79.
- (14) Vid., Alborno, Desarrollo político ..., ed.cit., pp. 81-84.
- (15) Citado por Tugwell, La política del petróleo en Venezuela, p. 190. (los subrayados son nuestros)
- (16) El texto de la Ley que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, en Nacionalización del petróleo en Venezuela. Tesis y documentos fundamentales (Caracas: Ediciones Centauro, 1977. 2a.ed.), pp. 285-302; art.1, p. 287; art.5, p. 288.
- (17) Discurso del presidente de la República, Sr. Carlos Andrés Pérez, el 29 de agosto de 1975, en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, en Nacionalización del petróleo en Venezuela. Tesis y documentos fundamentales, ed.cit., pp. 265-284. La cita es de pp. 274 y 283.
- (18) Sobre estos planteamientos, la brillante ponencia del Dr. Gonzalo Barrios sobre el tema 'América Latina en el mundo', recogida en el

volumen América Latina: conciencia y nación ..., ed.cit., pp. 45-52.

- (19) Salvo oscilaciones coyunturales, se ha observado que un recuento de los eventos más álgidos de los últimos cincuenta años permite sacar una conclusión, casi una ley se podría decir, que a pesar de no ser muy explicativa, tiene un triste valor predictivo: siempre que un país latinoamericano ha confrontado una situación crítica interna, en la que los intereses económicos o políticos de los Estados Unidos pudieron ser o han sido afectados, la política de los Estados Unidos ha sido la de intervenir directa o indirectamente a favor de la fracción más conservadora (Cf., Bryce Wood, The Making of the Good Neighbor Policy, New York, Columbia University Press, 1962. Citado por J.A. Silva Michelena, Cambio político en Venezuela. Crisis de la Democracia, ed.cit., p. 39).
- (20) "Al votante no selectivo (es decir, al 99% del total) no le importa mucho el Tercer Mundo, ni el Sha de Irán, ni la ida de los muniúes petroleros, ni la participación en la ALALC o en la CEPAL o en la UNCTAD. Nada de eso le interesa al votante, y el régimen lo olvidó. Por eso le revocaron el contrato y hay que volver a empezar. No ha pasado nada anómalo. Funcionó la democracia que usted creó con su tremenda lucha de muchas décadas, con su talla de gran conductor ... Funcionó a las mil maravillas la máquina que usted instaló para exterminar todo vestigio de dictadura en Venezuela": "Carta de Rafael Viloria a Rómulo Betancourt sobre las causas de la pérdida de las elecciones", remitido público, diario El Nacional, Caracas, 7 de diciembre de 1978.
- 8) Tensiones en el sistema político: desigualdad social y marginalidad. Tecnología y sistema político. Perspectivas futuras del sistema político venezolano.-
 - (1) Sobre el concepto de marginalidad, Ignacio Sotelo, Sociología de América Latina (Madrid: Ed. Tecnos, 1972), pp. 136-137 y 139.
 - (2) Sist.Pol.Ven., p. 59. En general, el porcentaje de población que vive en zonas de ranchos y cinturones de miseria ha sido estimado en un 40 por ciento para Caracas, 49 por ciento para Maracay, 63 por ciento en Maracaibo, 62 por ciento en Puerto La Cruz y Barcelona, 53 por ciento en Ciudad Bolívar, según datos de la Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano, citados en Sist.Pol.Ven., p. 60.
 - (3) La bibliografía sobre la persistencia del subdesarrollo en Venezuela es ya importante. Podemos señalar a Venezuela, crecimiento sin desarrollo (colectivo) (México: Ed. Nuestro Tiempo, 1974); J.R. Núñez Teodoro, Venezuela, modelo neocolonial (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1969); Ramón Tovar, Venezuela, país subdesarrollado (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1968. 2a.ed.); Federico Brito Figueroa, "Venezuela contemporánea ¿País colonial?", volumen III de su Historia Económica y Social de Venezuela. Una estructura para su estudio (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela, 1975). Acerca de similar temática en sus manifestaciones sectoriales, podemos citar a Orlando Araujo, Situación industrial de Venezuela (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1969), útil para datos período 1950-1968; E.A. Falcón Urbano, Desarrollo e indus-

-trialización de Venezuela (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1969), en especial, el prólogo de D.F. Maza Zavala; Guillermo Márquez, La economía venezolana en la década de los 70 (Caracas: Monte Avila Editores, 1976); D.F. Maza Zavala, Aspectos del desarrollo económico de Venezuela (Caracas: Escuela de Periodismo-Universidad Central de Venezuela, 1962); H.F. Passan, Crecimiento económico y problemas de empleo en Venezuela (Caracas: Banco Central de Venezuela, 1973). Por lo demás, remitimos, para estos temas, a la bibliografía citada a lo largo de este trabajo.

- (4) Sist.Pol.Ven., p. 55. Fuente: Banco Central de Venezuela, La economía venezolana en los últimos 25 años (Caracas, 1966), y el Informe Económico de 1972. Para macromagnitudes económicas, Banco Interamericano de Desarrollo, Progreso económico y social de América Latina. Informe anual 1973 (Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C., s. f.), sobre Venezuela, pp. 359 y ss (por citar sólo uno de los conocidos informes); y el más reciente publicado en España: Venezuela. Informe económico (Barcelona: Publicaciones del Banco de Expansión Industrial -EALANK-, Servicio de Estudios, 1976).
- (5) Vid., Manuel Pernaut (S.J.), Diez años de desarrollo económico y social de Venezuela (Caracas: Ediciones del Cuatricentenario, 1966), cifras sobre distribución de ingresos en Venezuela (1962), pp. 98-103, del Capítulo IV: "Desarrollo social", pp. 93 y ss.
- (6) Cf., J.A. Mayobre, Las inversiones extranjeras en Venezuela (Caracas: Ed. Monte Avila, 1970. Hay ediciones posteriores).
- (7) O. Albornoz, La sociedad venezolana, ed.cit., p. 21. Ha sido un aspecto estudiado por Antonio Pascuali, Comunicación y cultura de masas (Caracas: Ed. Monte Avila, 1976. 3a.ed.), y El aparato singular (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1967). Las implicaciones teóricas y prácticas del problema: Hugo Calello, Ideología y neocolonialismo (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1969).
- (8) Sobre la revolución científico-técnica y sus implicaciones: Radovan Richta, La civilización en la era nuclear (México: Ed. Siglo XXI, 1971); Meier Neufeld, Dependencia tecnológica, monopolio y crecimiento (Santiago de Chile: Ed. Periferia, 1972); H. Rose y S. Rose, Ciencia y sociedad (Caracas: Ed. Tiempo Nuevo, 1972).
- (9) Albornoz, op.cit., pp. 59-64.
- (10) Vid., Manuel Mora y Araujo, "Ciencia y tecnología: indicadores sociales", trabajo presentado en el Seminario sobre indicadores sociales convocado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CIACSO) y el 'International Social Sciences Council', en Río de Janeiro, mayo de 1972; Amílcar C. Herrera, Ciencia y política en América Latina (México: Ed. Siglo XXI, 1971); Helio Jaguaribe, Ciencia y tecnología en el contexto socio-político de América Latina (Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional de Tucumán, 1971).
- (11) Sist.Pol.Ven., p. 82.
- (12) Vid., R. Combellas, "Venezuela, la transferencia de tecnología y el Pacto Andino", revista Política 3, Caracas, Inst.Est.Pol.-Universidad Central de Venezuela, 1974.

- (13) Vid., Luis Manuel Peñalver, La ciencia y la tecnología en Venezuela (Caracas: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas -CONICIT-, 1973)
- (14) Así, por ejemplo, mientras que para finales de los años 60 Norteamérica invertía más de cien dólares per capita en investigación científica, Venezuela dedicaba apenas cerca de dos dólares: Albóroz, La sociedad venezolana, ed.cit., p. 81.
-

[413]

- A P E N D I C E -

" LA TESIS DEL 'GENDARME NECESARIO', O

LA JUSTIFICACION IDEOLOGICA DEL REGIMEN CAUDILLISTA "

A P E N D I C E

- La tesis del "gendarme necesario", o la justificación ideológica del régimen caudillesco -

I.- La filosofía positiva en América Latina.-

En Latinoamérica, la preocupación por los problemas históricos y sociales ha tenido sin duda una preeminencia especial, hasta el punto de haber germinado en suelo latinoamericano un interés específico por la filosofía social. Durante el siglo XIX, en concreto, fenómenos como la inestabilidad política y el atraso socioeconómico empujaron a muchos intelectuales y pensadores a los estudios sociales y sociológicos como medios de explicar tales fenómenos de la sociedad latinoamericana de la postindependencia y años posteriores.

Para muchos de aquellos hombres preocupados por la realidad problemática de sus países, Augusto Comte, con su fe en el orden y en el progreso, hubo de convertirse en mentor espiritual de un mundo que, saturado de continuas guerras civiles y hastiado de profundos conflictos políticos, aspiraba a un reposo estable. El positivismo comtiano, sus distintas escuelas y derivaciones, mezcla de cientificismo, espíritu religioso y progreso social, iba a echar raíces en América Latina, tal vez como en ninguna otra parte del mundo. Tan es así, que se ha hablado, incluso, de una especie de "positivismo ambiental" existente en la realidad latinoamericana antes de que llegara importado de Europa. En efecto, no hay que olvidar en aquel momento al intelectual latinoamericano, propenso y necesitado de un sistema totalizador en la explicación de los hechos de la vida social, y no es difícil imaginar una corriente ideológica más consustancial con tales aspiraciones que el positivismo. Su influencia es diversa según el país de que se trate: hay una impregnación "nacional" del positivismo en países como México y Brasil, en los que fructificó con especial

intensidad en el marco, como sucedió en otros ámbitos nacionales, de un ponderado eclecticismo que pasa insensiblemente del mecanicismo comtiano al organicismo spenceriano. Y en Argentina, y ello es de suma importancia para la teoría sociológica latinoamericana, el positivismo llega a compatibilizar con el marxismo -son los casos de Juan R. Justo y José Ingenieros- para dar nacimiento a un partido socialista calcado en cierta manera de sus homólogos europeos (1).

Es sabido que, a pesar de la inestabilidad y de los conflictos, la rigidez de la estructura social y la carencia de modificaciones sustanciales en la misma, ha sido una de las características principales de la historia social latinoamericana del siglo XIX. En una sociedad donde pocas familias dominan, mediante una red patriarcal de posesión de la riqueza, el poder y el prestigio, la educación es obviamente un privilegio restringido, una medida de limitación y una barrera altamente selectiva en lo social. En ese contexto, la civilización europea y la norteamericana van a ejercer una fascinación casi hipnótica en los grupos altos y medios relativamente cultivados de Latinoamérica. Surge allí un culto al progreso, cuyo énfasis es colocado principalmente en sus aspectos materiales. Se trata de progresar, pero en orden; existe una jerarquía social imposible de modificar; más aún, existe una jerarquía de razas, en la que los blancos constituyen el estrato dominante, y los amerindios y africanos, en sus distintas mezclas, el estrato subordinado. En muchos ideólogos latinoamericanos surge un pesimismo racial, entroncado con la influencia de pensadores como Gobineau, Le Bon, Spencer; se trataba de un positivismo mezclado con el darwinismo social, que lleva a buena parte de la élite latinoamericana de fines del XIX a pensar en una "democracia aristocrática" de dirección autoritaria; la democracia es concebida como gobierno de los mejores; la participación política de las masas populares implica la anarquía y, por consiguiente, debe ser eliminada o fuertemente restringida. La combinación del prejuicio clasista y el prejuicio racial supondrá la proclamación de la superioridad de la sangre hispana o sajona de piel blanca, sobre los grupos de mestizos, indígenas y negros. Y en este marco ideológico, la primera deducción práctica será la consideración de la inmigración de elementos europeos como operación regenerativa de la población nacional autóctona (2).

José Luis Romero, historiador de las ideas y del pensamiento en América Latina, hablaría de esta filosofía social como un conjunto de reg-puestas negativas ante la acentuación de la demanda de los sectores mar-

-ginales por un acceso a la vida política: tomando como base el sociologismo de Spencer y Comte, el papel primordial es otorgado a las aristocracias y a los gobiernos fuertes, más aún, la necesidad de éstos como los únicos capaces de asegurar el orden y el progreso; en otros términos, la configuración de la dictadura progresista, de la autocracia civilizadora (3). En este sentido, señala Eduardo Nicol que el positivismo, si bien ejerció una gran influencia práctica en América y supuso un paso firme hacia la universalidad y el dominio de las formas sistemáticas del pensamiento, fue de hecho también adoptado como una ideología de carácter marcadamente conservador (4). No podemos olvidar, como recuerda Leopoldo Zea, que, si bien el positivismo ofreció variados instrumentos mentales para crear el nuevo orden con el que se aspiraba sustituir al colonial, del mismo modo sirvió para justificar, en varios lugares, determinadas formas de orden al servicio de oligarquías o dictaduras (5).

Sin duda que la búsqueda de una identidad propia por los países de Hispanoamérica, es algo que se produce casi desde los primeros momentos de su existencia; cuestión que por lo demás ha sido estudiada por diversos autores (6). En este orden de ideas, el positivismo en los países hispanoamericanos vino a ser -Como ha puesto de relieve José Luis Abellán- la ideología de ruptura con el pasado; incluso, algo más que una doctrina filosófica: "... constituyó un modo de instalación de las nuevas sociedades, que se rebelaban contra la escolástica y la metafísica, es decir, todo aquello que representaba el mundo antiguo, desde el punto de vista intelectual y filosófico. Con ello, pretendían los hispanoamericanos advenir a la modernidad, situarse en la vanguardia de la civilización, o por lo menos, al mismo nivel que las naciones que marcaban la pauta en el mundo, es decir, Francia, Inglaterra, Estados Unidos" (7). Si tomamos a la concepción positivista desde el plano de una actitud y postura ante la vida, podemos resumir sus tesis en cuatro puntos fundamentales (8): A) El rechazo de una cosmovisión en la cual el concepto de Dios era el centro, esto es, el rechazo de la escolástica católica, en el sentido de que el concepto de Dios va a ser sustituido por el de naturaleza, con lo que las leyes del universo, incluso las morales, se consideran como leyes físicas (sustitución de la filosofía escolástica de cuño colonial por la filosofía positiva, moderna y científica); B) Si el sistema comtiano había tomado una actitud crítica contra el régimen liberal, éste aspecto va a tener dos vertientes: a') una primera en la que se rechaza dicha

erfitea, vinculando el positivismo con el liberalismo, como sucede en los casos de Valentín Letelier (Chile), Enrique José Varona (Cuba) y Manuel González Prada (Perú), y b') una segunda vertiente en la que no se rechaza la crítica liberal del positivismo, doctrina que va a servir, en este caso, de ropa de algunas dictaduras establecidas, como ocurrió por ejemplo en el caso más significativo de la autocracia de Porfirio Díaz, el Porfiriato, en México, sostenida ideológicamente por el positivismo de un Gabino Barreda y de un Justo Sierra, en su primera época; C) El intento de fundar una moral de base científica, identificada con el naturalismo y que rehuye a la vez los intentos metafísicos del catolicismo o los anárquicos del liberalismo (para algunos, la inclinación hacia un darwinismo social es evidente: el principio de la relación natural ocupa un lugar preferente, para llegar incluso en algunas ocasiones al racismo); D) La exaltación del industrialismo, por admiración a los países más avanzados en este terreno, e incluso hacia todas las formas de vida del sajonismo, por considerar precisamente a los países anglosajones como el modelo del desarrollo industrial, así como de las pautas, actitudes y organizaciones que tal desarrollo lleva consigo. Estos cuatro puntos serían en definitiva los elementos conceptuales comunes de las grandes figuras del movimiento positivista hispanoamericano. Por citar sólo unos nombres: Gabino Barreda y Justo Sierra (México); Tobías Barreto (Brasil); Carlos Octavio Bunge, Juan Bautista Alberdi y José Ingenieros (Argentina); Alcides Arguedas (Bolivia); Manuel González Prada (Perú); Juan Montalvo (Ecuador); José Victorino Lastarria y Francisco Bilbao (Chile); años más tarde, Enrique José Varona (Cuba) y Eugenio María de Hostos (Puerto Rico). (9)

II.- Ideas sociales del positivismo venezolano.

En un nivel socio-político, Venezuela no escapa de uno de los factores que motivaron la aparición y el auge del positivismo en Latinoamérica: el de la decepción por el régimen liberal. En los difíciles años de la postindependencia, una vez roto el vínculo colonial con España, los nuevos países se enfrentaron con el problema de la nueva organización política que habían de darse. La tarea de edificar la vida política bajo instituciones liberales no sólo fue ardua y penosa, sino también muchas veces éstas instituciones, tan admirables en la teoría, fracasaron en la práctica. Todavía más, la propagación de las guerras civiles a lo largo

de casi todo el siglo XIX generalizó un desaliento y una desconfianza hacia las instituciones y hacia los individuos o partidos que las sustentaban. En muchas ocasiones, el desaliento, por un lado, y los conflictos civiles, por otro, serán para muchos la expresión de una crisis integral de la sociedad iberoamericana. Y es allí precisamente cuando distintos intelectuales cultivados piensan sobre la necesidad de que tal crisis sólo podrá superarse mediante un proceso de renovación ideológica y cultural. En otras palabras, ante la crisis, el primer planteamiento es el de sustituir el romanticismo liberal por el método científico, por la fe y la confianza en la ciencia y en sus métodos de investigación. Y a ello se lanzaron en Venezuela los primeros positivistas en la recién fundada Sociedad de Amigos del Saber (1882). Por primera vez, se trata de hacer prevalecer la certeza de un necesario análisis social e histórico, en el sentido de búsqueda de fundamentos que intenten profundizar de alguna manera más hondamente en los factores que explican el proceso de la evolución histórica (10). Y en este sentido, la obra de Spencer adquiere importancia fundamental, porque como bien dice Alicia Nuño, "El positivismo latinoamericano responde al designio inicial comtiano, es decir, a la construcción de un instrumento científico para la interpretación social, lo cual se logrará trasladando los criterios de las ciencias naturales a los fenómenos histórico-social y jurídico. A partir de este planteamiento científico, ya no es el pensamiento de Comte el principal vehículo de penetración del positivismo en el continente, sino el de Spencer, que desarrolla este mismo esquema en su teoría evolucionista" (11).

Desde un punto de vista doctrinal, el positivismo venezolano surgió como un intento prometedor, y no es casualidad, precisamente, que su aparición coincida con el período de gobierno de Guzmán Blanco, con el Guzmánato. Se ha dicho, y no es ocioso recordarlo, que la Revolución federal dividió la historia venezolana del siglo XIX en una simetría de posiciones. El enfrentamiento liberal-conservador dejaba definitivamente de tener sentido -si alguna vez lo había tenido-; de igual manera, en el campo intelectual, la historia política y militar declinaba, para ser sustituida por un análisis científico-social en la dirección de una historia social e institucional, que echara a un lado la pregunta abstracta de 'qué somos', para ir a contestar la más concreta de 'cómo actuamos' y dónde están las raíces sociológicas de la realidad venezolana. Era, en realidad, el primer esbozo de un pensamiento científico moderno en Venezuela (12).

En relación al momento de aparición de las ideas positivistas en

Venezuela, dice G. Picón Febres que "El general Guzmán Blanco, que era libre pensador, utilizó en la Universidad Central la profunda sabiduría del germano doctor Adolfo Ernst, nombrándolo profesor de Ciencias Naturales. El doctor Ernst, así mismo libre pensador, dió a las enseñanzas de las referidas ciencias toda la seriedad y necesaria expresión que reclamaban, proclamando el darwinismo, con el objeto de estimular a sus alumnos al estudio de la filosofía, basada en las ciencias experimentales"; del mismo modo, se expresa Picón Febres, "Al tiempo que el doctor Ernst enseñaba el Curso de Ciencias Naturales en la Universidad, el doctor venezolano Rafael Villavicencio, igualmente libre pensador, hombre de gran talento y de profunda y numerosa ilustración, daba en el mismo instituto el curso de Historia Universal, aplicando a su filosofía las doctrinas positivistas de Augusto Comte. La influencia de Ernst y de Villavicencio fue notable y decisiva en la mayor parte de sus aprovechados discípulos, tales como José Gil Fortoul, Lisandro Alvarado, Luis Razetti, David Lobo y en muchos jóvenes que no seguían los referidos cursos en la Universidad, sino que hacían sus estudios en privado, tales como César Zumeta, Gabriel Muñoz, Víctor Manuel Mago, Romero García, Manuel Revenga, Alejandro Urbaneja y López Méndez. De aquella influencia nació el espíritu amplio y general de la curiosidad científica, y se empezaron a estudiar con entusiasmo la biología, la antropología y la sociología, el Origen de las especies, de Darwin; Los primeros principios, de Spencer; El origen de las naciones, de Bagehot; La filosofía, de Andrés Lefebvre; La política experimental, de León Donat; Los orígenes de la civilización, de León Dubbock; y muchas obras más, relativas a la filosofía, al derecho constitucional, a la economía política, al concepto del universo, a la evolución humana y a la criminología moderna, enlazadas todas ellas por la afinidad científica y también por el criterio que se basa en la observación y estudio de los fenómenos sociales, psicológicos y naturales, para la dirección de la política, para la formación de las leyes, para el entendimiento de los delitos y de su penalidad, para la aplicación cabal de la justicia, para la definición de la moral, para la explicación del mundo y su evolución y para el conocimiento de la historia" (43).

El Dr. Adolfo Ernst (1832-1899), viajero alemán que llegó a Venezuela en 1861, fundaría la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales (1867) y divulgará las ideas de Darwin, tanto en sus lecciones universitarias como en las páginas de El Federalista y, posteriormente, en la revista Vargasia, órgano de dicha Sociedad (1868). Ernst, junto a Rafael Villavicen-

-cio (1837-1920), contribuirían a sentar las bases en Venezuela de una nueva doctrina basada en los textos de Comte, Littré y Spéncer. El mismo Villavicencio, en 1866, pronunciaba un discurso en el que afirmaba: "Hay entre los modernos una numerosa falange que en diversos escritos sostiene el mismo pensamiento, Rousseau, Benjamin Constant, Montlosier, Balart, Marchangi, el barón de Chateaubriand y varios otros. Una falsa noción de la propiedad territorial ha sido causa de que muchos economistas creyesen necesaria la injusticia. La ley de Ricardo sobre la renta conduciría a la desigualdad progresiva de los hombres; la de Malthus, sobre la población, los llevaría inevitablemente a la miseria; la de Tocqueville sobre la herencia produciría la esterilización de las tierras, y las cuatro empujarían de consuno a la humanidad al triste camino del mal, mal irremediable a que se vería condenada la especie humana" (...) "Protesto, señores, con todas mis fuerzas, contra tan ruidosa teoría, y lo hago en nombre de la imponente autoridad de la razón y de los hechos; y no dejarán de concurrir a sostenerme en mi protesta los hombres de verdadera ciencia, Dunoyer, Cobden, Bastiat, Augusto Comte, Littré, etc." (14).

La figura del doctor Rafael Villavicencio está en relación con la fundación, en Caracas, del primer Instituto Venezolano de Ciencias Sociales (1877), sin duda un acontecimiento de relevante importancia para la historia de la sociología venezolana y el conocimiento del positivismo en la segunda mitad del siglo XIX. Villavicencio, presidente de la Junta directiva del Instituto, decía en la sesión inaugural del mismo, en julio de 1877, que "la creación de un Instituto de Ciencias Sociales es un hecho de importancia en el estado actual de la civilización, cuando la constitución definitiva de la Biología como ciencia independiente permite a las especulaciones sobre la manera de ser de las sociedades y sobre su desenvolvimiento de conjunto el tomar un carácter verdaderamente racional"; el objeto de estudio de la sociología sería "el estudio de la sociedad, de sus actividades inherentes y de las leyes que determinan el orden espontáneo y el progreso natural de las asociaciones humanas" (15). En otro trabajo leído aquél año, titulado La Ciencia Social, Villavicencio asentaba el criterio de la sociedad como un hecho natural incontrovertible, considerándola como un todo, como un organismo provisto de órganos variados que ejercen funciones múltiples; órganos y funciones sometidos al unus sociológico, de manera análoga al organismo individual, compuesto de aparatos y que está bajo la influencia del consensus unus fisiológico. Si unas leyes fijas regulan la vida social, se desprende por tanto el hecho

de que la ciencia social es una ciencia natural. Para Villavicencio, la tarea del sociólogo sería la investigación de estas leyes naturales invariables que regulan la constitución y el desenvolvimiento de la sociedad; el sociólogo vendría a ser una suerte de científico natural, al igual que el astrónomo, el físico, el químico y el biólogo. En síntesis, para el positivista venezolano, la sociología sería "la ciencia que tiene por objeto el estudio de las leyes naturales que determinan la estructura y la evolución de las sociedades humanas" (46).

Otro miembro destacado del Instituto de Ciencias Sociales fue el puertorriqueño Eugenio María de Hostos, ya citado en líneas anteriores, quien vivió en Venezuela durante la década de 1870, dedicado a la enseñanza de materias humanísticas en diversas instituciones. En su trabajo Las Leyes de la Sociedad, leído en el Instituto en junio de 1877, Hostos se hacía eco del organicismo social: "La sociedad no es otra cosa que la agregación de individuos de una misma especie de seres racionales, conscientes, responsables y libres. Y como no hay organismo sin funciones, ni funciones sin necesidades, ni necesidades sin órganos para satisfacerlas, y en todo individuo de la especie corresponden los órganos a las necesidades y las necesidades a las funciones, la sociedad es un organismo con órganos adecuados a las funciones de la vida colectiva de los hombres": la ley fundamental de todos los fenómenos vitales es la ley de la evolución; la sociedad está sometida a leyes inmutables, al igual que el orden cósmico y el orden biológico (47).

Ernst y Villavicencio formarían, en definitiva, un gran número de discípulos, no sólo alrededor del aula universitaria, sino también con la creación de instituciones científicas a partir de 1862. La Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales (1867), el Instituto Venezolano de Ciencias Sociales (1877) y la Sociedad de Amigos del Saber (1882), fueron vías para la difusión del pensamiento evolucionista y positivista. Con el tiempo surge una escuela de pensamiento en la que destacan personalidades tales como Luis Razetti (1862-1932); José Gil Fortoul (1861-1943); Lisandro Alvarado (1858-1931); César Zumeta (1860-1955); con posterior promoción en Laureano Vallenilla Lanz (1870-1936); Pedro Manuel Arcaya (1874-1959); Angel César Rivas (1870-1930); Julio César Salas (1870-1933) y Samuel Darío Maldonado (1870-1925), entre otros.

El positivismo en Venezuela, en su vertiente intelectual, iba a suponer una época de renovación, no es posible negarlo, de las ciencias, de investigaciones etnológicas y sociológicas, y un mayor interés por las

grandes corrientes del pensamiento universal. Lógicamente, así como se existió en Francia o en Inglaterra un pensamiento positivista "puro", la misma diversidad se reflejó en los positivistas venezolanos, mediante variadas mezclas de positivismo comtiano, evolucionismo, monismo, determinismo, etc. El escritor Arturo Uslar Pietri ha resumido así su aporte a la evolución de las ideas en Venezuela: "Considerado en conjunto, el positivismo se presenta como una de las más importantes y fecundas épocas de la historia del pensamiento venezolano. No consistió solamente en una serie de conceptos aprendidos en libros europeos, sino que despertó la curiosidad por el estudio directo de nuestros fenómenos sociales e históricos y provocó así un mejor conocimiento del país y de sus realidades". "De la historia concebida como narración de los grandes hechos o como predica de altos ejemplos, se pasó definitivamente a la concepción de la historia como ciencia. El conocimiento de Venezuela en su historia, en su geografía, en su etnografía, en su lenguaje, en su psicología colectiva, en su estructura social, vino a convertirse en la preocupación fundamental de sus intelectuales. Al orador y al poeta de épocas anteriores vino a sustituirle el sociólogo. Ya no se escribían disertaciones; sino que se pretendía realizar estudios". "Con todos sus excesos, con todas sus ingenuidades, el positivismo fue un despertar de la conciencia venezolana hacia lo nacional y lo científico, y en él tienen su origen nuestra sociología y nuestra novela ..." (48).

III.- Laureano Vallenilla Lanz y el "gerdarme necesario".-

Pero donde el positivismo va a adquirir fuertes connotaciones ideológicas es precisamente en su interpretación de la evolución política venezolana y latinoamericana. Hay un aspecto esencial en el que el positivismo venezolano centra su análisis: nos referimos al fenómeno del caudillaje. En el análisis del caudillismo, las consideraciones van consecuentemente por el terreno de lo psicosocial y lo ético para llegar a lo racial. Es en ése fenómeno sobre el que, en definitiva, confluyen todas las investigaciones causales y la clave de casi todas las explicaciones. Ya se trate del caudillo tradicional o del otro tipo de caudillo, autócrata pero culto, capaz de llevar a cabo una transformación "civilista", en oposición al antiguo caudillismo de "montonera". En uno y otro caso, el caudillo va a servir para intentar una solución a los males nacionales

en forma de paternalismo, o para explicar el origen y la evolución de la historia de la República en la supervivencia de otras estructuras sociales más arcaicas; de manera que, como dice Alicia de Nuño, "de este modo se aplicaban a la historia los conceptos evolucionistas y se encontraba una justificación histórica al fenómeno del caudillismo" (14).

Intelectuales e historiadores como Gil Fortoul, P.M. Arcaya y Vallenilla Lanz van a defender la explicación que justifica al caudillo como fenómeno histórico, más aún, como fenómeno histórico necesario, si bien es cierto que será Vallenilla Lanz quien mejor perfile dicha explicación y sus implicaciones prácticas. En cualquier caso, donde surgen las diferencias no es en la aceptación de esta realidad histórica, sino primordialmente en la determinación e investigación de las causas que lo produjeron: "Para unos, el malestar arranca de la naturaleza física misma de estas naciones [las latinoamericanas]. En tales casos, el caudillo es el producto del determinismo geográfico. Para otros, la clave reside en nuestra condición racial mestiza. Es la tesis del determinismo étnico. Y sociólogos hay que ven el origen de tales calamidades en la mísera condición cultural de estos países. Mientras que otros asocian varios de estos factores (medio físico y raza, raza y cultura, etc.) para explicar el germen de nuestra vida azarosa y caudillesca, y no pocos hacen énfasis en las costumbres que heredamos de nuestros mayores, o en razones de índole económica ..." (20). Resulta obvio que, en el marco de unas bases comunes de explicación, habría diferencias de matiz entre Arcaya, Gil Fortoul y Vallenilla Lanz. Si para los dos primeros el caudillismo habría sido una consecuencia inevitable de un determinismo histórico -que se remontaría incluso al contexto de las tribus precolombinas-, para Vallenilla Lanz se trataría de una necesidad histórica, surgida de complejas causas que van a desembocar en una lucha de pasiones incontroladas, en medio de las cuales el caudillo aparece como una fuerza de conservación social, como una autoridad necesaria que pone fin a la anarquía reinante.

Como hemos dicho, al observar la persistencia del despotismo en Latinoamérica, muchos llegaron a la conclusión de que la autocracia política era la única forma viable de gobierno para los países de la región. El régimen autoritario era la resultante necesaria de la incultura, la despoblación, la composición étnica, el medio, etc. La democracia, en cambio, vendría a ser algo exótico y antagónico, incompatible con las sociedades latinoamericanas, en las cuales por el contrario sólo sería posible la existencia de gobiernos fuertes y personalistas, dirigidos por caudi-

-llos vigorosos capaces de asegurar el orden e impulsar el progreso. En otras palabras, la estabilidad política sólo podría lograrse bajo el imperio del "gendarme necesario". Como bien dice R. Gallegos Ortiz:

"Para Lucas Ayarragaray, el caudillismo fue siempre nuestra constitución positiva. El argentino Carlos Octavio Bunge, sostiene que el personalismo cesarista, es el resultado fatal de la mezcla psicológica de los españoles, los negros y los indios (...) Para los positivistas venezolanos a lo Vallenilla ... la herencia étnica o cultural del país involucra la necesidad de una autoridad 'iluminada'. Vino el apologismo del Gendarme Necesario. La natural subordinación al más fuerte. Para Vallenilla, Pedro Manuel Arcaya, Gil Fortoul, César Zumeta, la autocracia no es sólo una determinación sino un deseo!" (21).

Se ha hecho notar que la tesis del "gendarme necesario" del venezolano Laureano Vallenilla Lanz, tiene un antecedente en la teoría del "Dictador necesario" del peruano Francisco García Calderón (22). García Calderón había propuesto: "Aumentar la duración del poder presidencial, a fin de evitar las luchas demasiado frecuentes de los partidos; simplificar la maquinaria política que transforma los parlamentos siempre más numerosos en simples organizaciones burocráticas; prolongar el mandato de los senadores y diputados para impedir que las frecuentes elecciones no turben la existencia de los pueblos; renunciar en suma, a los dogmas ingenuos de los estatutos políticos en nombre de reformas concretas; tal parece ser el ideal que detendría en la América tropical, en México, en Perú, en Bolivia, la acción disolvente de las revoluciones ... Si un presidente tutelar es necesario, no lo es menos oponer a su autocracia un poder moderador que recordaría, por su constitución, al Senado vitalicio de Bolívar. Se puede concebir asimismo un Senado que representara los verdaderos intereses nacionales: cuerpo estable, reunión de todas las fuerzas de conservación social, asamblea serena, extraña a toda veleidad democrática, dentro de la cual el clero, la universidad, el comercio, las industrias, el ejército, la marina, el poder judicial, podrían defender contra los asaltos de la demagogia, contra los reformadores demasiado audaces, la constitución, la tradición, la ley" (23).

Laureano Vallenilla Lanz formuló y documentó su pensamiento en Cesarismo Democrático (24), texto donde encontramos de manera primordial sus conocidas argumentaciones en torno al tema. Es necesario detenerse con detalle en el proceso argumental, ya que Vallenilla parte de unos supuestos analíticos precisos y de un amplio conocimiento de la realidad que

quiere explicar. Pero es conveniente observar que hay un momento de su discurso en el cual se produce una especie de ruptura, para comenzar toda una argumentación destinada a justificar en buena medida el surgimiento del inevitable "hombre fuerte" y, en el marco del contexto político que le tocó vivir, hacer referencia a la personificación propiamente dicha de esa "autoridad iluminada".

Vallenilla Lanz comienza señalando que la guerra es "uno de los factores más poderosos en la evolución progresiva de la humanidad" (26); y de acuerdo con ello, considera que la guerra de independencia hispanoamericana fue una guerra civil: "Hasta 1815, la inmensa mayoría del pueblo de Venezuela fue realista o goda, es decir, enemiga de los patriotas" (26), por lo que era lógico que la actividad bélica generase un conjunto de odios y de anarquía de gran impacto en la evolución política y social posterior. De otra parte, intenta ir hasta el fondo de la sociedad pre-independientista, poniendo de relieve las diferencias sociales y de castas existentes en ella, y las preocupaciones nobiliarias de la alta clase criolla, que iban a entrar en contradicción con los ideales democráticos e igualitarios sostenidos en los años siguientes. La generación que proclamó la guerra y la independencia estaba educada en prácticas nobiliarias y diferenciadoras, y la apelación a unos principios liberales entraban en conflicto con sus exclusivismos y prejuicios de casta. Se trataba en cualquier caso, de una sociedad cuyas distinciones sociales se fundaron en el color de la piel: diferencia de castas significaba originalmente diferencias de color y la jerarquización de clases no fue otra cosa que la consagración social de la escala etnográfica. El movimiento revolucionario, por su propia dinámica, vendría a romper el inmovilismo que resultaba de la jerarquía social: en realidad, las altas clases criollas que lo dirigían, no pensaron que con ello estaban destruyendo las bases y razones de su preponderancia. Con la revolución, la más espantosa anarquía se desencadena, y de su seno surge la clase de los dominadores: los caudillos, los caciques y los jefes de partido. De entre ellos, José Tomás Boves vino a presentarse como el primero de los caudillos populares en Venezuela, como ídolo de la gente de color que aspiraba ver eliminada la casta dominante. Pero al morir el caudillo realista, será José Antonio Páez, llanero partidario de la emancipación, quien heredero del prestigio del primero, tomará la dirección de los mestizos del Llano (27).

Los caudillos patriotas eran analfabetos, y aunque algunos llegaron a adquirir cierta cultura, otros apenas aprendieron a escribir su nombre.

Bolívar mismo -conocedor del espíritu de venganza y depredación que animaba a los llaneros- "previó la imposibilidad de establecer en Venezuela una paz sólida, a menos de contener por la fuerza a los discípulos de Bo-ves, lo cual, era sin embargo, sumamente peligroso" (28). Para evitar el pillaje de los llaneros, Bolívar recurrió al reparto de propiedades como compensación de sus servicios a la causa independentista. Pero Fdez y otros próceres se hicieron con dichas propiedades, de modo que el latifundio colonial pasó sin modificaciones a las manos de aquellos líderes. Con la violación de la ley bolivariana de repartos, sucedió lo que había previsto su autor: "... los llaneros se dieron de nuevo al robo y al pillaje como lo venían practicando desde los tiempos coloniales; con la diferencia de que ahora podían disfrazar sus bárbaros impulsos proclamando principios políticos y 'reformas' constitucionales. Ya nuestros nómadas habían entrado en la Historia" (29).

Al continuar la explicación del proceso sociopolítico venezolano, Vallenilla Lanz deriva hacia la teoría del gendarme necesario: ante la anarquía provocada por las clases populares, se imponía la necesidad de la "mano dura", inspiradora del temor y sustento de la paz y de la conservación social. Pero previamente, hay que dejar claro que, para Vallenilla las Constituciones, más que obras artificiales o abstractas, son producto del instinto político de cada pueblo; es decir, sobre el texto escrito hay un derecho consuetudinario superior que se impone: los ideólogos fabricantes de constituciones están condenados por la ciencia positiva. Los "sofistas" de la teoría clásica del hombre abstracto han carecido de sentido práctico e histórico: "Con un decreto de Hamilton no se le paró la pechada al petro del llanero. Con una frase de Siéyès no se desestanca la sangre cuajada de la raza india" -afirma Vallenilla parafraseando una expresión de José Martí. (30)

La consecuencia inevitable del proceso es la aparición necesaria del caudillo, cuya virtud, carácter y don de mando fundan la paz y el orden, impulsan el progreso y desarrollan la riqueza. Las nacionalidades en formación pasan a reclamar imperativamente un poder central, único y respetado, encarnado en un hombre superior, de prestigio indiscutible e indiscutido. La desintegración nacional que significaba la anarquía, "hacía cada vez más necesaria la preponderancia del poder personal, la existencia del Gendarme necesario" (31). El constitucionalismo liberal es factor disgregador del cuerpo social: "Sólo la acción del Caudillo, del Gendarme Necesario, podía ser eficaz, para mantener el orden"; en otras palabras,

"un poder personal que no era sino la expresión concreta de los instintos políticos de nuestro pueblo" (32).

De otra parte, Vallenilla Lanz nos anuncia una ley de las sociedades: el paso de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica. Así, por ejemplo, la autoridad de Páez, como la de la mayoría de los caudillos, "se fundaba sobre la sugestión inconsciente de la mayoría" (33). El pueblo venezolano, grupo social inestable, se hallaría colocado en el período de transición de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica, entendiendo solidaridad orgánica como aquel estado en que se encontrarían las sociedades "legítimas y estables". Esto es, agrupado instintivamente alrededor del más fuerte, valiente y sagaz. Pero entonces (durante el siglo XIX venezolano), cuando más se necesitaba de una mano de hierro capaz de eliminar la anarquía, hombres ansiosos de popularidad predicaban doctrinas abstractas de la política, invocando la teoría del laissez faire, laissez passer en lo económico y en lo político, sin comprender la consecuencia de sus argumentos: sancionar la anarquía popular. La pretensión de sustituir el prestigio personal del Caudillo, única institución posible en la época y único sostén del orden social, por el prestigio impersonal de la ley o de las leyes y de disposiciones inadaptables al estado social, "fue el colmo de la imprevisión y del empirismo"; tanto que "México, después de la caída de Porfirio Díaz, es el ejemplo más reciente y más elocuente de esta verdad" (34) -agrega Vallenilla sin comprender mucho de la revolución mexicana. Y es que, según la concepción vallenilliana de origen organicista y positivista, las naciones, como seres colectivos, siguen un movimiento análogo al de los seres individuales. Los órganos del cuerpo social son, en un comienzo, elementos esbozados rudimentariamente, pero mediante una acción recíproca van poco a poco definiéndose, hasta que surge el principio vital de la sociedad: el principio de la coordinación común. Así, "la biología abraza también la historia de las sociedades" (35).

Pero, ¿Quién encarnaba en su tiempo el hombre providencial? Nada menos que el general Juan Vicente Gómez. Así lo afirmaba, en 1920, a doce años del establecimiento del régimen autoritario:

"Modificando el medio social por el desarrollo económico, por la multiplicación de las carreteras y de las vías férreas, por el saneamiento, por la inmigración de gente europea, es decir, haciendo lo que se está haciendo en Venezuela desde hace doce años al amparo de un gobierno fuerte, dirigido por un hombre de Estado, por un patriota consciente de sus deberes, quien como otros grandes caudillos de América representa la encarnación misma del poder y mantiene la paz, el orden, la regu-

-laridad administrativa, el crédito interior y exterior, estamos preparando al país ..." (36)

Laureano Vallenilla Lanz, orgulloso de servir a Gómez "con la pluma en la mano", se convirtió en el principal expositor de un pensamiento que justificaba la autocracia en Venezuela y una de sus manifestaciones más despóticas, la del régimen gomecista. Como director del órgano periodístico gubernamental, El Nuevo Diario, sus alabanzas a Gómez parecían no tener límites. Gómez era necesario,

"... era el hombre a quien el destino, en las naturales evoluciones de nuestra constitución democrática (practicada, no escrita) tenía preparado para la obra de las grandes ratificaciones. Y con el tacto exquisito de los hombres de Estado verdaderamente eminentes, que casi nunca surgen de las aulas universitarias, ni estudian otros libros que los de la experiencia, ni necesitan otra guía que la de su propia intuición, comienza su obra política; eliminando, con la extinción de los viejos partidos ..., los elementos anárquicos que vivían a la sombra de las intransigencias banderizas; crea un ejército que hace honor a nuestra gran historia militar, para guardián de la paz ..." (37)

Así, pues, bajo la dictadura de Gómez, la oficialización del positivismo era un curioso pero significativo fenómeno: sus máximos exponentes teóricos prestaban apoyo y auxilio ideológico a aquélla, al mismo tiempo que ocupaban altos cargos en la administración. De esta forma, el positivismo pasaba a ser, como afirma expresivamente el profesor Domingo Miliani, una especie de "Filosofía en el Poder"; en la autocracia de Gómez, "Los filósofos del orden y el progreso comtianos, serán los ministros de gabinete, los directores de la prensa oficial" (38).

- N O T A S -

- (1) Vid., I. Sotelo, Sociología de América Latina (Madrid: Ed. Tecnos, 1972), pp. 17-18. Sobre el positivismo y el papel de la ciencia en la sociedad burguesa y en el desarrollo del capitalismo de la segunda mitad del siglo XIX europeo: Eric Hobsbawm, La era del capitalismo (Madrid: Ediciones Guadarrama, 1977. 2 volúmenes. Trad. de A. García Fluixá. Título original: The Age of Capital. 1848-1975, Londres, G. Weidenfeld and Nicolson), volumen II, pp. 122 y ss. Sobre la escuela positivista en la Argentina: Juan Francisco Marsal, La sociología en la Argentina (Buenos Aires: Compañía General Fabril Editora, S.A., 1963), pp. 72 y ss. Para un análisis del pensamiento de Augusto Comte, Irving Zeitlin, Ideología y teoría sociológica (Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1970. Trad. de Néstor A. Míguez. Título original: Ideology and the Development of Sociological Theory, New Jersey, Prentice Hall, Inc., 1968), principalmente la parte II, "El pensamiento posrevolucionario", pp. 85 y ss. Buenas exposiciones de las ideas de Comte y de Spencer, en Luis González Seara, La sociología, aventura dialéctica (Madrid: Editorial Tecnos, 1971), pp. 19-49 y 51 y ss.; Salvador Giner, Historia del pensamiento social (Barcelona: Editorial Ariel, 1975. 2a.ed. amp. y rev.), pp. 525-534 y 535 ss. Por último, entre muchos otros, Franco Ferrarotti, El pensamiento sociológico de Auguste Comte a Max Horkheimer (Barcelona: Ediciones Península, 1975. Prefacio, traducción, notas y bibliografía castellana del Dr. Carlos M. Rama. Edición original italiana: Il pensiero sociologico da Auguste Comte a Max Horkheimer, Milán, Arnoldo Mondadori Editore, 1974), pp. 31-47 y 59 ss.
- (2) Seguimos a M. Kaplan, Formación del Estado nacional en América Latina (Buenos Aires: Ed. Amorrortu, 1976), pp. 194-195; y Stanley J. y Barbara H. Stein, La herencia colonial de América Latina (México: Ed. Siglo XXI, 1975. 8a.ed. Trad. de A. Licona), pp. 172-173 y ss. El libro clásico sobre el progreso parece seguir siendo el de John B. Bury, La idea del progreso (Madrid: Alianza Editorial, 1971. Trad. de Elías Díaz y J. Rodríguez Aramberri. Título original: The idea of progress. An inquiry into its origins and growth, Londres, Mac Milland and Company, Ltd.); entre muchos otros y sin pretender ser exhaustivos, Charles Vereker, El desarrollo de la teoría política (Buenos Aires: EUDEBA Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1972. 3a.ed. Trad. de N. Míguez. Título original: The Development of Political Theory, Londres, Hutchinson University Library, 1957), capítulo V: "El progreso", pp. 224 y ss.
- (3) José Luis Romero, Latinoamérica: situaciones e ideologías (Buenos Aires: Ed. del Candi, 1967), pp. 57 ss. Del mismo autor, El desarrollo de las ideas en la sociedad argentina del siglo XX (México: Fondo de Cultura Económica, 1965).
- (4) Eduardo Nicol, El problema de la filosofía hispánica (Madrid: Editorial Tecnos, 1961), pp. 45-46.

- (5) Leopoldo Zea, El pensamiento latinoamericano (Barcelona-México: Editorial Ariel, 1976), p. 13.
- (6) Así, por ejemplo, Martin S. Stabb, América Latina en busca de una identidad. Modelos del ensayo ideológico hispanoamericano. 1890-1960 (Caracas: Monte Avila Editores, 1969. Versión castellana de Mario Giacchino).
- (7) José Luis Abellán, La idea de América: origen y evolución (Madrid: Ediciones Istmo, 1972), p. 87.
- (8) Según J.L. Abellán, op.cit., pp. 87-88.
- (9) Ahora bien, si el positivismo fue un punto ideológico de aglutinación, en el sentido de una toma de conciencia de ser algo peculiar y específico frente al período colonial, como expresión de ruptura con ese pasado, para montar las bases de una concepción que inspirara el futuro hispanoamericano, al cabo del tiempo otros iban a observar que esa ideología no daba expresión a la verdadera idiosincrasia o auténtica particularidad de lo hispanoamericano. Si el positivismo había servido como elemento de ruptura y de lucha frente a la concepción escolástica, metafísica y católica heredada de la monarquía española, pronto se vió que la ideología positiva no constituía sino una copia y una imitación de la filosofía anglosajona, opuesta al verdadero espíritu de la filosofía y cultura americanas, cuyo fondo esencial se buscaba con impaciencia. Ante la conciencia de este hecho se inició una reacción contra el positivismo, que buscaba una expresión de lo específico hispanoamericano. La reacción antipositivista va a intentar expresarse como nacionalismo, en el sentido de una vuelta sobre la realidad latinoamericana para potenciarla. Se tratará de un nacionalismo continentalista que intenta reivindicar la idea bolivariana: la formación de una comunidad de naciones fuertes que fuese capaz, en el contexto internacional, de impedir la marcha del imperialismo anglosajón. En este sentido, se asumía la herencia hispánica como base de la latinidad y de la cultura que habría de elaborarse; es decir, potenciación de lo propio, nacionalización de los elementos culturales comunes y unidad de los intereses latinoamericanos frente a los poderes hegemónicos del exterior y, principalmente, frente al naciente imperialismo estadounidense (J.L. Abellán, op.cit., capítulo 6, "La reacción antipositivista", pp. 91 y ss.; Leopoldo Zea, Dialéctica de la Conciencia Americana, México: Alianza Editorial Mexicana, 1976, pp. 143-145). Destacados representantes de este nuevo planteamiento, que todavía aún hoy tiene vigencia, fueron el uruguayo José Enrique Rodó, los mexicanos José Vasconcelos, Antonio Caso y Alfonso Reyes; además de Alejandro G. Deustúa (Perú) y el mismo Manuel González Prada; Carlos Vaz Ferreira, Alejandro Korn y Manuel Ugarte en la región rioplatense; el cubano José Martí, y muchos otros.
- (10) Vid., Marisa Kohn de Beker, Tendencias positivistas en Venezuela (Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 1970), para un estudio filosófico amplio acerca de la relación entre las doctrinas positivistas y las ideas científicas en el medio venezolano: en especial, parte III, "Situación científico-cultural de Venezuela a fines del siglo XIX", pp. 51 y ss.

- (11) Alicia de Nuño, Ideas sociales del positivismo en Venezuela (Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 1969), p. 22.
- (12) Vid., Domingo Miliani, Vida intelectual de Venezuela. Dos esquemas (Caracas: Publicaciones del Ministerio de Educación, 1971. Colección Cuadernos de Prosa, 8), p. 75.
- (13) Gonzalo Picón Febres, La literatura venezolana en el siglo XIX, Caracas, 1906, p. 65. Citado por Alicia de Nuño, Ideas sociales ..., pp. 53-55.
- (14) R. Villavicencio, "Discurso pronunciado ante la Ilustre Universidad en el acto de la repartición de premios, el 8 de diciembre de 1866", texto publicado en El Federalista (Caracas, 11 y 12 de diciembre de 1866) y reproducido en Pensamiento Político Venezolano del Siglo XIX. Textos para su estudio, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 1960-1962, vol. 13, pp. 46-47. Citado por D. Miliani, Vida intelectual ..., p. 77.
- (15) Citado por Orlando Albornoz en La Sociología en Venezuela (Caracas: Monte Avila Editores, 1970. 2a.ed. corr. y aum. 1a.ed. por la Universidad Central de Venezuela, 1962), p. 31. Ver, Luis Villalba Villalba, El Primer Instituto Venezolano de Ciencias Sociales (Caracas: Publicaciones de la Asociación Venezolana de Sociología, 1961).
- (16) Consideraciones y cita, en O. Albornoz, op.cit., pp. 31-32.
- (17) Ibid., p. 34.
- (18) Arturo Uslar Pietri, Letras y Hombres de Venezuela, Caracas, 1958, p. 244. Citado por A. de Nuño, Ideas sociales ..., pp. 59-60.
- (19) A. de Nuño, op.cit., p. 45.
- (20) Virgilio Tosta, El caudillismo según once autores venezolanos, Caracas, 1954, p. 12. Cita de A. de Nuño, p. 46.
- (21) Rafael Gallegos Ortiz, El Cachorro Juan Vicente Gómez (Caracas: Editorial Fuentes, 1977. 2a.ed.), p. 15.
- (22) Vid., Carlos Irazábal, Hacia la Democracia (contribución al estudio de la historia económico-político-social de Venezuela) (Caracas: José Agustín Catalá, Ed., -Ediciones Centauro, 1974. 3a.ed. 1a.ed., México, 1939), 159 y ss. Según Irazábal, tanto Vallenilla Lanz como García Calderón, al recurrir al pensamiento bolivariano para respaldar sus postulados, cometieron una "burda mixtificación histórica", como era simple y llanamente invocar el ideal de Bolívar para racionalizar las tiranías latinoamericanas (op.cit., p. 162).
- (23) Francisco García Calderón, Les Démocraties Latines de l'Amérique, París, 1914, p. 377. Citado por Irazábal, p. 160.
- (24) Cesarismo Democrático (estudio sobre las bases sociológicas de la constitución efectiva de Venezuela) (Caracas: Tipografía Universal, 1929. 2a.ed.). La primera edición es de 1919 (hay edición en francés). Vallenilla Lanz reiteró sus conocidas tesis en Disgregación e inte-

-gración. Ensayos sobre la formación de la nacionalidad venezolana (Caracas: Tipografía Garrido, 1953. 2a.ed.) (publicado originalmente en 1929).

- (25) Cesarismo Democrático, ed.cit., p. 2.
- (26) Vallenilla, Cesarismo ..., p. 9
- (27) Ibid., pp. 77 ss., 116 ss., y 142.
- (28) Ibid., p. 152.
- (29) Cesarismo ..., p. 159.
- (30) Ibid., p. 218.
- (31) Ibid., p. 249.
- (32) pp. 281-282.
- (33) Ibid., p. 282.
- (34) pp. 285-286, nota 1.
- (35) p. 308.
- (36) en "Cesarismo democrático y cesarismo teocrático" (4 de noviembre de 1920), artículo recogido en Cesarismo Democrático, ed.cit., pp. 317-324.
- (37) L. Vallenilla Lanz, La Rehabilitación de Venezuela. Campañas políticas de El Nuevo Diario (1915 a 1926), Caracas, Tipografía Vargas, 1926, II, p. 105. Citado por H.S. Howard, Rómulo Gallegos y la revolución burguesa en Venezuela (Caracas: Monte Avila Editores, 1976. Trad. de M. Sagrera), p. 78 del capítulo IV: "Vallenilla Lanz, el intelectual de la tiranía", pp. 75-91.
- (38) D. Miliani, Vida intelectual de Venezuela ..., ed.cit., pp. 80 y 83. Sólo resta decir que la generación de 1928 iniciará la reacción contra el positivismo oficializado: "No surgirá un Mariátegui, capaz de interpretar la realidad venezolana con nuevos métodos y concepciones, para oponerla como mentís a la tesis oficializada del gendarme necesario. Pero mal que bien, nació de aquella gesta de estudiantes y agitadores encarcelados, el nuevo ensayo y los nuevos líderes políticos que irán a disputarse las candidaturas presidenciales, o la lucha por el poder hasta hoy" (Miliani, pp. 83-84). A partir de 1936, la revisión del esquema positivista será un hecho que va indudablemente paralelo al proceso político, proceso que adquiere una dinámica mucho más veloz, si se quiere, que la propia reflexión conceptual crítica de la ideología dominante; el activismo político privará sobre la elaboración de textos analíticos sobre la cuestión.

[433]

- BIBLIOGRAFIA -

- B I B L I O G R A F I A -

Hemos agrupado la Bibliografía en dos apartados fundamentales:

1) Libros; 2) Artículos. Ensayos. Publicaciones periódicas. Documentos.
Se señala la de utilización directa para el trabajo; asimismo, las fuentes indirectas y de temática general. En cualquier caso, nos limitamos casi totalmente a la bibliografía citada al final de cada capítulo.

1) LIBROS.-

- ABELLAN, José Luis - La idea de América: origen y evolución (Madrid: Ediciones Istmo, 1972. Colección Fundamentos, 23).
- ACEDO de Sucre, María de - La generación venezolana de 1928 (Estudio de una Elite Política) (Caracas-Barcelona, 1967. Int. de F. Rubio Llorente).
Lourdes, y NONES M., Carmen Margarita, (Editorial Ariel).
- ACOSTA SAIGNES, Miguel - Vida de los esclavos negros en Venezuela (Caracas: Ediciones Hespérides, 1967. Prol. de Roger Bastide).
- ALBORNOZ, Orlando - Desarrollo político en Venezuela (Caracas: Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico-Universidad Central de Venezuela, 1974).
- " " - La sociedad venezolana (Caracas: Ediciones de la Dirección de Cultura de la Universidad de Carabobo-Editorial Arte, 1976).
- " " - La Sociología en Venezuela (Caracas: Monte Avila Editores, 1970. 2a.ed. corregida y aumentada. Colección "Temas Venezolanos").

- AMIN, Samir - El desarrollo desigual. Ensayo sobre las formaciones sociales del capitalismo periférico (Barcelona: Ed. Fontanella, 1975. Trad. de N. Vidal).
- ARANDA, Sergio - La Economía Venezolana. Una interpretación de su modo de funcionamiento (Bogotá: Siglo XXI Editores de Colombia, 1977).
- ARAUJO, Orlando - Venezuela Violenta (Caracas: Tipografía Adriático, 1968).
- " " - Situación industrial de Venezuela (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1969).
- ARCAYA, Pedro M., - Estudios de sociología venezolana (Madrid: Editorial América, Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociales, volumen X, s.f.).
- ARCAYA U., Pedro M., - El Cabildo de Caracas (Caracas: Ediciones del Cuatricentenario-Editorial Arte, 1965).
- ARCILA FARIAS, Eduardo - El régimen de la encomienda en Venezuela (Caracas: Instituto de Investigaciones, Facultad de Economía, Universidad Central de Venezuela, 1966. 2a.ed.).
- ARELLANO MORENO, Antonio - Mirador de Historia Política de Venezuela (Caracas: Oficina Central de Información-Imprenta Nacional, 1967).
- " " - Orígenes de la Economía Venezolana (México: Imprenta Nuevo Mundo, 1947).
- ARMAS CHITTY, J.A. de - Vida política de Caracas en el siglo XIX (Caracas: Editorial América Libre, 1976. Colección América Republicana).
- BALESTRINI C., César - La industria petrolera en América Latina (Caracas: Ediciones de la Biblioteca- Universidad Central de Venezuela, 1971. Prol.de D.F. Maza Zavala).

- AMBIRRA, Vania - El capitalismo dependiente latinoamericano (México: Siglo XXI Editores, 1974).
- ARAN, Paul - La economía política del crecimiento (México: Fondo de Cultura Económica, 1961. Trad. de N. Warman).
- ASTERRA, Ramón de - Los Navíos de la Ilustración (una empresa del siglo XVIII) (Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1970. Prol. de Guillermo Díaz Plaja).
- ERREBY, Jean-Jacques - El petróleo en la estrategia mundial (Madrid: Ed. Guadarrama, 1974. Trad. de P. Valera Lacasa).
- ETANCOURT, Rómulo - Hacia América Latina democrática e integrada (Madrid: Taurus Ediciones, 1969. 3a.ed. Prol. de Mariano Picón Salas).
- ELANK, David Eugene - Politics in Venezuela (Boston: Little, Brown and Company, 1973. Colección "The Little, Brown Series in Comparative Politics").
- BREWER-CARIAS, Allan-Randolph - Cambio político y reforma del Estado en Venezuela (Contribución al estudio del Estado Democrático y Social de Derecho) (Madrid: Editorial Tecnos, 1974).
- BRITO FIGUEROA, Federico - Tiempo de Ezequiel Zamora (Caracas: José Agustín Catalá Ed., -Ediciones Centauro, 1975, 2a.ed.).
- " " - Historia económica y social de Venezuela (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela, 1975. Volúmenes I y III).
- " " - Venezuela Siglo XX (La Habana: Editorial Casa de las Américas, 1967).
- CALDERA, Rafael - Especificidad de la democracia cristiana (Barcelona: Ed. Nova Terra, 1973. 2a.ed.).
- " " - Ideario. La Democracia cristiana en América Latina (Barcelona: Ed. Ariel, 1970).

- CALELLO, Hugo, - Ideología y neocolonialismo (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1969).
- CARDENAS, Rodolfo José - La insurrección popular en Venezuela (Caracas: Ediciones Catatumbo, s.f.).
- CARDOSO, Fernando Enrique, y
FALETO, Enzo - Dependencia y desarrollo en América Latina (México: Editorial Siglo XXI, 1969).
- CARRERA DAMAS, Germán - Tres temas de historia (Caracas: Facultad de Humanidades y Educación-Universidad Central de Venezuela, 1961).
- " " - Temas de historia social y de las ideas (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela, 1969).
- " " - El culto a Bolívar. Esbozo para un estudio de la historia de las ideas en Venezuela (Caracas: Instituto de Antropología e Historia-Universidad Central de Venezuela, 1969).
- " " - Boves. Aspectos socioeconómicos de la guerra de independencia (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela, 1972, 3a.ed.).
- " " - Historiografía marxista venezolana y otros temas (Caracas: Dirección de Cultura-Universidad Central de Venezuela, 1967).
- " " - Historia contemporánea de Venezuela. Bases Metodológicas (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela, 1977).
- CARPIO CASTILLO, Rubén - Acción Democrática 1941-1971. Bosquejo histórico de un partido (Caracas: Ed. República, 1971).
- " " - México, Cuba y Venezuela. Triángulo geopolítico del Caribe (Caracas, 1961. s.p.ed.).

- CHIOSSONE, Tulio - Los problemas sociales en la formación del Estado venezolano (Caracas: Gráfica Americana, 1964).
- CILIBERTO, José Angel - Fernán Toro y las doctrinas económicas del siglo XIX (Caracas: Editora San José, 1974).
- D'ASCOLI, Carlos A. - Esquema histórico-económico de Venezuela (Del Mito del Dorado a la Economía del Café) (Caracas: Banco Central de Venezuela-Imprenta Italgráfica, 1970. Prol. de J.A. Mayobre).
- DIAZ, Elías - Estado de Derecho y Sociedad democrática (Madrid: Editorial Cuadernos para el Diálogo, 1975. 6a.ed. Colección divulgación universitaria, temas políticos, No. 5).
- DUVERGER, Maurice - Los partidos políticos (México: Fondo de Cultura Económica, 1974. Quinta reimpresión. Trad. de J. Campos y E. González Pedrero).
- ELORZA, Antonio - La ideología liberal en la Ilustración Española (Madrid: Editorial Tecnos, 1970).
- ESTORNES LASA, José - La Real Compañía Guipuzcoana de Navegación de Caracas (Buenos Aires: Editorial Vasca 'Ekin', 1948. Biblioteca de Cultura Vasca, No. 32).
- ESCOVAR SALOM, Ramón - Evolución política de Venezuela (Caracas: Editorial Monte Avila, 1975. 3a.ed.).
- FALCON URBANO, M.A. - Desarrollo e industrialización de Venezuela (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1969. Prol. de D.F. Maza Zavala).
- FERRAROTTI, Franco - El pensamiento sociológico de Auguste Comte a Max Horkheimer (Barcelona: Ediciones Península, 1975. Pref., trad., not., y bibl. cast. de Carlos M. Rama. Colección "Homo Sociologicus", 6).
- GALLEGOS ORTIZ, Rafael - El Cachorro Juan Vicente Gómez (Caracas: Ed. Fuentes, 1977. 2a.ed.).

- GARCIA-PELAYO, Manuel - Las transformaciones del Estado contemporáneo (Madrid: Alianza Editorial, 1977).
- GIL, Federico G. - Latinoamérica y Estados Unidos. Dominio, cooperación y conflicto (Madrid: Editorial Tecnos, 1975. Trad. de D. Alvarez Monteagudo. Presentación de R. López Pintor. Colección de Ciencias Sociales, serie de relaciones internacionales).
- GILMORE, Robert L. - Caudillism and Militarism in Venezuela, 1810-1910 (Athens, Ohio: Ohio University Press, 1964).
- GINER, Salvador - Historia del pensamiento social (Barcelona: Editorial Ariel, 1975. 2a.ed. ampl. y rev. Colección "Demos", Biblioteca de Sociología).
- GONZALEZ ABREU, Manuel - Dependencia colonial venezolana (Caracas: Publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-Universidad Central de Venezuela, 1974).
- GONZALEZ SEARA, Luis - La Sociología, aventura dialéctica (Madrid: Editorial Tecnos, 1971. Colección de Ciencias Sociales, Serie de Sociología).
- GOTT, Richard - Rural Guerrillas in Latin America (Penguin Books: The Pelican Latin America Library, 1973).
- GRACIARENA, Jorge - Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina (Buenos Aires: Editorial Paidós, 1972).
- GRIFFIN, Charles C. - Los temas sociales y económicos en la época de la independencia (Caracas: Publicación de las Fundaciones John Boulton y Eugenio Mendoza, 1962).
- GUERRA INIGUEZ, Daniel - El pensamiento internacional de Bolívar (Caracas: Editorial "Ragón", 1955).
- HALPERIN DONGHI, Tulio - Historia contemporánea de América Latina (Madrid: Alianza Editorial, 1970. 2a.ed.).

- HASSAN, M.F. - Crecimiento económico y problemas de empleo en Venezuela (Caracas: Banco Central de Venezuela, 1973).
- HERR, Richard - España y la Revolución del siglo XVIII (Madrid: Editorial Aguilar, 1973. Trad. de E. Fernández M.).
- HOBBSAWN, Eric - La era del capitalismo (Madrid: Ediciones Guadarrama, 1977. Dos volúmenes. Trad. de A. García Fluixá).
- HOOD, Miriam - Gunboat Diplomacy, 1895-1905. Great power pressure in Venezuela (London: George Allen & Unwin Ltd., 1975).
- HOWARD, Harrison Sabin - Rómulo Gallegos y la revolución burguesa en Venezuela (Caracas: Monte Avila Editores, 1976. Trad. de M. Sagrera).
- HUSSEY, Ronald D. - La Compañía de Caracas. 1728-1784 (Caracas: Banco Central de Venezuela, 1962. Colección histórico-económica venezolana, volumen VIII. Trad. de L. Landae-ta. Prol. de A. Espinosa. Est. Bibl. de P. Grases).
- IRAZABAL, Carlos - Hacia la Democracia (contribución al estudio de la historia económico-político-social de Venezuela) (Caracas: José Agustín Catalá Editor, -Ediciones Centauro, 1974. 3a.ed.).
- " " - Venezuela esclava y feudal. Episodios de la historia de Venezuela (Ensayos de interpretación dialéctica) (Caracas: José Agustín Catalá Editor, 1974. 2a.ed.).
- KAPLAN, Marcos - Formación del Estado nacional en América Latina (Buenos Aires: Ed. Amorrortu, 1976).
- KOHN de Beker, Marisa - Tendencias positivistas en Venezuela (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela, 1970. Colección Avance, 25).
- KONETZKE, Richard - América Latina, II: La época colonial (Madrid: Editorial Siglo XXI, 1971. Historia Universal, volumen 22).

- LAMBERT, Jacques - América Latina: estructuras sociales e instituciones políticas (Barcelona: Editorial Ariel, 1970. 2a.ed. Colección Demos, Biblioteca de Ciencia Política, 14).
- LARRALDE, Alicia - Lo que quiero recordar desde Teresa de la Parra, Marcos Pérez Jiménez hasta el cambio (Caracas: Ediciones Garrido, 1969).
- LEON TAPIA, José - Por aquí pasó Zamora (Caracas: Ediciones Centauro, 1976).
- LIEUWEN, Edwin - Venezuela (Buenos Aires: Ed. Suramericana, 1964. Trad. de R. Jiménez).
- " " - Petroleum in Venezuela. A History (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1954. University of California Publications in History, Volume 47).
- LOMBARDI, John V. - The Decline and Abolition of Negro Slavery in Venezuela, 1820-1854 (Westport, Connecticut: Greenwood Publishing Corporation, 1971. A Negro Universities Press Publication; Contribution in Afro-American and African Studies, No. 7).
- LOPEZ, Casto Fulgencio - Juan Bautista Picornell y la conspiración de Gual y España. Narración documentada de la pre-revolución de Independencia venezolana (Caracas: Editorial Nueva Cádiz, 1955).
- LOSADA ALDANA, Ramón - Dialéctica del Subdesarrollo (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela, 1976. 3a.ed. Prol. de D.F. Maza Zavala).
- LUCIANI, Jorge - La dictadura perpetua de Gómez y sus adversarios (New York: De Laisne & Rossboro, Inc., 1930).
- MAESTRE ALFONSO, Juan - Sociedad y desarrollo en América Latina (Madrid: Miguel Castellote, editor, 1974. Colección Básica 15, sección Economía).

- MAGALLANES, Manuel Vicente - Luchas e insurrecciones en la Venezuela colonial (Caracas: Editorial Tiempo Nuevo, 1972).
- " " - Los partidos políticos en la evolución histórica venezolana (Caracas-Madrid: Ed. Mediterráneo, 1973).
- " " - Cuatro Partidos Nacionales. Acción Democrática, Copei, Partido Comunista de Venezuela, Unión Republicana Democrática (Madrid: Diana Artes Gráficas, 1973).
- MALAVE MATA, Héctor - Formación histórica del antidesarrollo de Venezuela (La Habana: Ediciones Casa de las Américas-Instituto Cubano del Libro, 1974).
- MARAVALL, José Antonio - Las comunidades de Castilla. Una primera revolución moderna (Madrid: Revista de Occidente, 1963).
- MARCHAND, Bernard - Vénézuéla, Travailleurs et villes du pétrole (Paris: Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, 1971. Université de Paris: Travaux & Memoires de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, No. 26).
- MARIATEGUI, José Carlos - Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (Barcelona: Editorial Crítica-Grijalbo, 1976. 1a.ed. Lima, 1928).
- MARQUEZ, Guillermo - La economía venezolana en la década del 70 (Caracas: Monte Avila Editores, 1976).
- MARSAL, Juan Francisco - La sociología en la Argentina (Buenos Aires: Compañía General Fabril Editora, S.A., 1963).
- MARTINEZ-CUADRADO, Miguel - Cambio social y modernización política. Anuario Político Español 1969 (Madrid: Editorial Cuadernos para el Diálogo, 1970).

- MARTINEZ WATERA, Piar - Geografía Económica de Venezuela (Caracas: Ediciones CO-BO, 1972. 5a.ed., corr. y ampl.)
- MARTZ, J.D. - Acción Democrática. Evolution of a Modern Political party in Venezuela (Princeton University Press, 1966).
- MARTZ, John D., y
MYERS, David J., (Eds.) - Venezuela. The Democratic Experience (New York-London: Praeger Publishers, 1977. Praeger Special Studies in International Politics and Government).
- MAZA ZAVALA, D.F. - Aspectos del desarrollo económico de Venezuela (Caracas: Escuela de Periodismo-Universidad Central de Venezuela, 1962).
- " " - Venezuela: una economía dependiente (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1964).
- " " - Los mecanismos de la dependencia (Caracas: Fondo Editorial Salvador de la Plaza, 1973).
- MEJIA ALARCON, Pedro Esteban - La industria del petróleo en Venezuela (Caracas: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, 1972).
- MENDOZA, Daniel - El llanero (estudio de sociología venezolana) (Madrid: Editorial América, s.f. Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociales. Publicado originalmente en 1846).
- MERCIER VEGA, L., CUELLAR, O.,
y BOURRICAUD, F., - Fuerzas Armadas, poder y cambio (Caracas: Editorial Tiempo Nuevo, 1971).
- MIERES, Francisco - El petróleo y la problemática estructural venezolana (Caracas: Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-Universidad Central de Venezuela, 1969. Colección Esquema).

- MILIANI, Domingo - Vida intelectual de Venezuela. Dos esquemas (Caracas: Publicaciones del Ministerio de Educación, 1971. Colección Cuadernos de Prosa, 8).
- MORALES PADRON, Francisco - Rebelión contra la Compañía de Caracas (Sevilla: Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1955).
- MUÑOZ ORAA, Carlos E. - Los comuneros de Venezuela. Una rebelión popular de pre-independencia (Mérida, Ven.,: Universidad de Los Andes-Facultad de Humanidades y Educación, 1971).
- NAVARRO, Emilio - La Revolución Federal, 1859 a 1863 (Caracas: Imprenta Nacional-Ediciones Conmemorativas del Primer Centenario de la Revolución Federal, 1963. Pról. de J. Nucete-Sardi).
- NICOL, Eduardo - El problema de la filosofía hispánica (Madrid: Editorial Tecnos, 1961).
- NJAIM, Humberto, COMBELLAS, Ricardo,
JOSKO de Guernón, Eva, y STAMBOULI,
Andrés - El sistema político venezolano (Caracas: Instituto de Estudios Políticos, Universidad Central de Venezuela, 1975).
- NUNES DIAS, Manuel - El Real Consulado de Caracas (1793-1810) (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1971. Serie "Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela", volumen 106. Trad. de J. Tello).
- NUÑEZ, Enrique Bernardo - El hombre de la levita gris (los años de la restauración liberal) (Caracas-Madrid: Ediciones Edime, 1953).
- NUÑEZ TENORIO, J.R. - Venezuela, modelo neocolonial (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1969).
- NUÑO, Alicia de - Ideas sociales del positivismo en Venezuela (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Univ. Central de Venezuela, 1969. Colección Avance, No. 22).

- ODDLE, Peter R. - Petróleo y poder mundial. Una interpretación geográfica (Caracas: Editorial Tiempo Nuevo, 1971. Trad. de Simón I. Santamaría. Colección Fuegos Cruzados).
- OROPESA, Juan - 4 siglos de historia venezolana (Desde el Descubrimiento hasta la Revolución de Octubre) (Caracas: Ediciones Centauro, 1973. 2a.ed.).
- OSORIO, Luis Enrique - Democracia en Venezuela (Bogotá: Editorial Litografía Colombia-Ediciones de "La Idea", 1943).
- OTS CAPDEQUI, J.M. - El Estado Español en las Indias (México: Fondo de Cultura Económica, 1946).
- OVALLES, Víctor Manuel - El llanero: Estudio sobre su vida, sus costumbres, su carácter y su poesía (Caracas: Tipografía Herrera Irigoyen, 1905).
- PARRA-PEREZ, Caracciolo - El régimen español en Venezuela. Estudio histórico (Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1964. 2a.ed.).
- " " - Marifño y las guerras civiles (Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1958-1960. 3 volúmenes).
- " " - Historia de la Primera República de Venezuela (Caracas: Tipografía Americana, 1939. 2 vols.).
- PASCUALI, Antonio - Comunicación y cultura de masas (Caracas: Editorial Monte Avila, 1976. 3a.ed.).
- PEAN, Pierre - Petróleo: la tercera guerra mundial (Caracas: Monte Avila Editores, 1975. Trad. de U. Olive; prol. de J.-P. Vigier. Colección Perspectiva Actual).
- PERALTA PIZARRO, Ariel - El Cesarismo en América Latina (Santiago de Chile: Editorial Orbe, 1966).
- PEREZ ALFONSO, Juan Pablo - Política Petrolera (Caracas: Imprenta Nacional, 1962. Publicaciones de la Secretaría General de la Presidencia de la República).

- PEREZ ALFONSO, Juan Pablo (ponente) - La dinámica del petróleo en el progreso de Venezuela (Caracas: Dirección de cultura de la Universidad Central de Venezuela, 1965. Colección Foros y Seminarios, serie Foros, 1).
- PERNAUT, Manuel (S.J.) - Diez años de desarrollo económico y social de Venezuela (Caracas: Ediciones del Cuatricentenario, 1966).
- PICON SALAS, Mariano - Los días de Cipriano Castro (Lima: "Editora Latinoamericana", 1958. Primer Festival del Libro Popular Venezolano-Biblioteca básica de Cultura Venezolana, Primera serie, No. 5).
- PIMENTEL, Cecilia - Bajo la tiranía. 1919-1935 (Caracas: Litografía y Tipografía "La Bodoniana", 1970. Prol. de L. Villalba Villalba).
- PLA, Alberto J. - La burguesía nacional en América Latina (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1975).
- PLAZA, Salvador de la - La economía minera y petrolera de Venezuela (Caracas: División de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-Universidad Central de Venezuela, 1973. Prol. de H. Malavé Mata. Colección "Salvador de la Plaza").
- POCATERRA, José Rafael - Memorias de un venezolano de la decadencia (Caracas: Editorial Elite, 1937. Tercera edición venezolana. Dos volúmenes).
- POLO, Juan Manuel - Venezuela insólita (Caracas: Ediciones Centauro, 1976).
- POSADA, Francisco - El movimiento revolucionario de los comuneros (México: Editorial Siglo XXI, 1971. Colección "Mínima", 40).
- QUINTERO, Rodolfo - Antropología del petróleo (México: Siglo XXI Editores, 1972. 1a.ed.)

- QUINTERO, Rodolfo - El petróleo y nuestra sociedad (Caracas: Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela- Imprenta Universitaria, 1970. Colección Nuevos Plan- teamientos, 8).
- " " - Sindicalismo y cambio social en Venezuela (Caracas: Universidad Central de Venezuela, Edición especial del Boletín Bibliográfico de la Facultad de Economía, 1966. Boletín No. 8).
- " " - La cultura del petróleo (Ensayo sobre estilos de vi- da de grupos sociales de Venezuela) (Caracas: Edi- ciones de la Facultad de Ciencias Económicas y So- ciales-Universidad Central de Venezuela, 1968).
- RAMA, Carlos M. - Historia del movimiento obrero y social latinoameri- cano contemporáneo (Barcelona: Editorial Laia, 1976. 3a.ed. Prol. de Antonio Melis).
- RANGEL, Domingo Alberto - Los andinos en el poder. Balance de una hege- monía, 1899-1945 (Caracas: Talleres Gráficos Universitarios, 1964).
- " " - La Venezuela agraria (Caracas: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, 1969. Volumen I de la serie "Capital y Desarrollo").
- " " - El Rey Petróleo (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1970. Volumen II de la serie "Capital y Desarrollo").
- " " - La oligarquía del dinero (Caracas: Editorial Fuentes, 1971. Volumen III de la serie "Capi- tal y Desarrollo").
- " " - El proceso del capitalismo contemporáneo en Venezuela (Caracas: Publicaciones de la Di- rección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, 1968. Colección Humanismo y Ciencia, 6).

- RANGEL, Domingo Alberto - Elecciones 1973: El gran negocio (Valencia, Ven., Vadell Hermanos Publ., 1974).
- RODRIGUEZ, José Santiago - Contribución al estudio de la guerra federal en Venezuela (Caracas: Editorial "Elite"-Lit. y Tip. Vargas, 1933. Dos volúmenes).
- RODRIGUEZ, Manuel Alfredo - El Capitolio de Caracas. Un siglo de historia de Venezuela (Caracas: Ediciones del Congreso de la República, 1974).
- ROMERO, José Luis - Latinoamérica: situaciones e ideologías (Buenos Aires: Ediciones del Candil, 1967).
- ROSAS MARCANO, Jesús - La prensa nacional y las elecciones generales de 1958 (Caracas: Publicaciones del Instituto Venezolano de Investigaciones de Prensa-Universidad Central de Venezuela, 1961).
- ROURKE, Thomas - Gómez. Tyrant of the Andes (New York: Greenwood Press Publishers, 1969. First Greenwood Reprinting. Edición original en 1936).
- RUDOLPH, Donna Keyse, y
RUDOLPH, G.A., - Historical Dictionary of Venezuela (Metuchen (N.J.): The Scarecrow Press, Inc., 1971. Latin American Historical Dictionaries, No. 3).
- RUIZ PINEDA, Leonardo - Ventanas al mundo. Autobiografía Acción parlamentaria. Artículos de prensa (Caracas: Editorial Arte, 1961. Con una semblanza del autor por Ramón J. Velásquez. Biblioteca de autores y temas tachirenses, Edición Cuatricentenario).
- SALCEDO-BASTARDO, José Luis - Bolívar: un continente y un destino (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1972).
- " " - Historia fundamental de Venezuela (Caracas: Instituto de Previsión Social de las Armadas, 1972. 3a.ed.).

- SANDOVAL RODRIGUEZ, Isaac - Las crisis políticas latinoamericanas y el militarismo (México: Editorial Siglo XXI, 1976).
- SARRAILH, Jean - La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII (México: Fondo de Cultura Económica, 1957. Trad. de A. Alatorre).
- SILVA MICHELENA, José A. - Cambio político en Venezuela: Crisis de la Democracia (Caracas: Centro de Estudios del Desarrollo, CENDES, Universidad Central de Venezuela, 1970).
- SISO, Carlos - La formación del pueblo venezolano. Estudios sociológicos (Madrid: Editorial García Enciso, 1951. Dos volúmenes).
- SOLARI, Aldo E. - Sociología rural latinoamericana (Buenos Aires: Editorial Paidós, 1968. 2a.ed.).
- SOTELO, Ignacio - Sociología de América Latina. Estructuras y problemas (Madrid: Editorial Tecnos, 1972. Colección de Ciencias Sociales, serie de Sociología).
- STABB, Martin S. - América Latina en busca de una identidad. Modelos del ensayo ideológico hispanoamericano. 1890-1960 (Caracas: Monte Avila Editores, 1969. Trad. de Mario Giaccino. Colección Prisma).
- STEIN, Stanley J. y Barbara H., - La herencia colonial de América Latina (México: Editorial Siglo XXI, 1975. 8a.ed. Trad. de A. Licona).
- SUCRE REYES, José - La Capitanía General de Venezuela (Barcelona: Editorial R.M., 1969).
- TOVAR, Ramón - Venezuela, país subdesarrollado (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1968. 2a.ed.).
- TUGWELL, Franklin - La política del petróleo en Venezuela (Caracas: Monte Avila Editores, 1977. Trad. de R. Rodríguez).

- VALCARCEL, Daniel - La rebelión de Tupac Amará (Lima: Editorial Universo, 1970. 3a.ed.).
- VALLENILLA LANZ, Laureano - Cesarismo Democrático (estudio sobre las bases sociológicas de la constitución efectiva de Venezuela) (Caracas: Tipografía Universal, 1929. 2a.ed.).
- VELASQUEZ, Ramón J. - La caída del liberalismo amarillo. Tiempo y drama de Antonio Paredes (Caracas: Talleres Cromotip, 1973. 2a.ed. Con una carta de J.R. Pocatererra y Explicación del autor).
- VELIZ, Claudio (compilación e introducción) - Obstáculos para la transformación de América Latina (México: Fondo de Cultura Económica, 1969).
- Venezuela, crecimiento sin desarrollo (colectivo) (México: Editorial Nuestro Tiempo, 1974).
- VILAR, Pierre - Historia de España (Paris: Librairie Espagnole, 1975. Trad. de M. Tuñón de Lara).
- VILAR, Sergio - Fascismo y Militarismo (Barcelona: Ediciones Grijalbo, 1978. Colección Nuevo Norte, 22).
- WEBER, Max - Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva (México: Fondo de Cultura Económica, 1964. 2a.ed. en español, de la cuarta en alemán (1956). Ed. prep. por J. Winckelmann, con nota prel. de J. Medina Echevarría. T de J. Medina Echevarría, J. Roura Parella, E. García Ménez, E. Imaz y J. Ferrater Mora).
- WISE, George S. - Caudillo. A portrait of Antonio Guzmán Blanco (Westport, Connecticut: Greenwood Press, Publishers, 1970. First Greenwood Repinting. Prefacio de A? Uslar Pietri).
- ZEÁ, Leopoldo - Dialéctica de la Conciencia Americana (México: Alianza Editorial Mexicana, 1976. 1a.ed. Biblioteca Iberoamericana, 1).

- ZEJA, Leopoldo - El pensamiento latinoamericano (Barcelona-México: Editorial Ariel, 1976).
- ZEITLIN, Irving - Ideología y teoría sociológica (Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1970. Trad. de Néstor A. Míguez).

.

2) ARTICULOS. ENSAYOS. PUBLICACIONES PERIODICAS. DOCUMENTOS.-

- AHUMADA, Jorge - "Hipótesis para el diagnóstico de una situación de cambio social. El caso de Venezuela", en F. Bonilla y J.A. Silva Michelena (Eds), Cambio político en Venezuela: Exploraciones en análisis y en síntesis, Caracas, Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), Universidad Central de Venezuela, 1967. pp. 33-58.
- América Latina: conciencia y nación. Un nuevo enfoque sobre su tiempo y perspectiva (Caracas: Equinoccio, Editorial de la Universidad Simón Bolívar, 1977. Seminario internacional celebrado en mayo de 1976, en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, de la Universidad Simón Bolívar de Caracas).
- AMEZAGA ARESTI, Vicente de - El elemento vasco en el siglo XVIII venezolano (Caracas: Ediciones del Cuatricentenario, 1966. Impreso en Tipografía Vargas).
- ARCAYA, Pedro Manuel - Insurrección de los negros de la serranía de Coro (Caracas: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1949. Publicación No. 7. Impreso en Buenos Aires, Imprenta López, julio de 1949. Se trata del discurso de recepción del Dr. P.M. Arcaya en la Academia venezolana de la Historia, el 11 de diciembre de 1910).

- ARCILA FARIAS, Eduardo (Int. y Comp.) - El Real Consulado de Caracas (Caracas: Instituto de Estudios Hispanoamericanos, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 1957).
- Banco Interamericano de Desarrollo - Progreso económico y social en América Latina. Informe Anual 1973 (Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C., s.f.).
- BETANCOURT, Rómulo - Trayectoria democrática de una revolución (Discursos y conferencias pronunciados en Venezuela y en el exterior durante el ejercicio de la presidencia de la Junta Revolucionaria de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela) (Caracas: Imprenta Nacional, 1948).
- BUNINOV PARRA, Boris - "El comportamiento electoral del venezolano", Caracas, Publicación del Centro Venezolano de acción intelectual, mayo de 1968.
- COLEMAN, James S. - "Modernización, aspectos políticos", en Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, David L. Sills, Ed.; edición española de Ed. Aguilar, Madrid, 1975. Volumen 7, pp. 176-182.
- CONSEJO SUPREMO ELECTORAL - Escrutinios de las Elecciones. Desde 194 hasta 1968 (Caracas: Publicación del Departamento de Relaciones Públicas del Consejo Supremo Electoral, s.f.).
- " - Escrutinio Elecciones 1973 (Referencias: Consejo Supremo Electoral, Resultados Electorales 1973. Caracas, Ed. Color, noviembre de 1974. Tres volúmenes).
- CHAUNU, Pierre - "Interpretación de la independencia de América Latina", en La independencia de América Latina, Buenos Aires, Editorial Nueva Visión, 1973. pp. 11-41.

- DORE, Ronald P. - "Modernización: la burguesía en las sociedades en proceso de modernización", en Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, David L. Sills, Ed.; ed. española de Editorial Aguilar, Madrid, 1975. Volumen 7, pp. 182-188.
- Elecciones 1978 - "Composición del Congreso", Caracas, diario El Nacional, 8 de diciembre de 1978.
- " - "Resultados provisionales", Caracas, diario El Nacional, 15 de diciembre de 1978.
- ELORZA, Antonio (Rec. y pres.) - Pan y Toros y otros papeles sediciosos de fines del siglo XVIII (Madrid: Editorial Ayuso, 1971).
- GRASES, Pedro - "Traducciones de interés político-cultural en la época de la independencia de Venezuela", Caracas-Madrid, Ediciones Guadarrama, 1961. Estudio publicado en el tomo II de la serie sobre "El movimiento emancipador de Hispanoamérica", preparada y editada por la "Mesa redonda de la comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia", Caracas, 1961.
- " - La conspiración de Gual y España y el ideario de la Independencia (Caracas: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1949. Publicación No. 6. Impreso en Buenos Aires, Imprenta López, julio de 1949).
- IZARD, Miguel - "El café en la economía venezolana del XIX. Estado de la cuestión", Valencia, Esp.: Estudis, 1, octubre de 1973. pp. 205-273.
- " - "La Venezuela del café vista por los viajeros del siglo XIX", Caracas, separata del Boletín Histórico de la Fundación John Boulton, No. 20, mayo de 1969.

- La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y Documentos Afines (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1959. Publicado en Madrid Ediciones Guadarrama. Estudio preliminar de Caracciolo Parra-Pérez).
- La Constitución de 1961 y la Evolución Constitucional de Venezuela (Caracas: Ediciones del Congreso de la República, 1972. Estudio preliminar de Jesús María Casal).
- LAGO CARBALLO, Antonio - "Los Regímenes políticos iberoamericanos" en Maurice Duverger: Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, Barcelona, Editó Ariel, 1970. pp. 577-609. 5a.ed. española, rigida por J. Solé-Tura, prol. de P. Lucas Verdú. Colección Demos, Biblioteca de Ciencias Políticas, 6).
- LERNER, Daniel - "Modernización, aspectos sociales", en Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, David L. Sills Ed.,; edición española de Ed. Aguilar, Madrid, 1975. Volumen 7, pp. 169-176.
- Leyes políticas de Venezuela (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1968. Recop. y notas introductorias de J.J. Rachadell).
- LOPEZ MENDEZ, Luis - Los partidos políticos (1887-1891) (Caracas: Publicaciones de la Presidencia de la República, 1963. Colección "Nuestro Siglo XIX").
- LOZADA, Antonio José - Proceso a la dictadura (Caracas: Oficina Central de Información, OCI, 1968. Colección "Papeles Públicos", No. 29).
- MARIÑAS OTERO, Luis - Las Constituciones de Venezuela (Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1965. Recop. y estudio preliminar de L. Mariñas Otero. Prólogo Manuel Praga Iribarne).
- MASO, Fausto - "El triunfo del reformismo", Caracas, diario El Universal, 10 de diciembre de 1978.

- MATERIALES para el estudio de la cuestión agraria en Venezuela (Caracas: Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico-Universidad Central de Venezuela, 1964. Volumen I, correspondiente al período 1800-1830. Con un estudio preliminar de Germán Carrera Damas: "Sobre el significado socio-económico de la acción histórica de Boves", pp. VII-CLXIV).
- MATERIALES para el estudio de la cuestión agraria en Venezuela (Caracas: Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico-Universidad Central de Venezuela, 1971. Volumen I correspondiente al período 1829-1860. Con un estudio preliminar de Carmen Gómez R.: "Política de enajenación y arrendamiento de tierras baldías (1830-1858)", pp. VII-LXXII).
- MIJARES, Augusto - Ideología de la revolución emancipadora (Caracas: Instituto de Filosofía, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, s.f.).
- Nacionalización del petróleo en Venezuela. Tesis y documentos fundamentales (Caracas: Ediciones Centauro, 1977. 2a.ed.).
- NUÑEZ PONTE, José Manuel - Ensayo histórico acerca de la esclavitud y de su abolición en Venezuela (Caracas: Empresa "El Cojo", 1954. 3a.ed.).
- PERAZZO, Nicolás - La inmigración en Venezuela. 1830-1850 (Caracas: Archivo General de la Nación, 1973. Biblioteca Venezolana de Historia, 17. Estudio del autor y compilación de documentos).
- RAMA, Carlos M. - "Caudillo (caudillismo, caudillaje)", en el Diccionario de Ciencias Sociales, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1975. Volumen I, pp. 353-355.
- RANGEL, Domingo Alberto - "Evolución económica de Maracaibo", Caracas, revista Semana, No. 342, noviembre 28/4 de diciembre de 1974. pp. 24-26.
- REY, Juan Carlos - "El sistema de partidos venezolano", Caracas, revista Politeia, No. 1, pp. 175-230, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Central de Venezuela, 1972.

- REY, Juan Carlos - "Modelos teóricos para el estudio del subdesarrollo político latinoamericano", Caracas, Cuadernos del Instituto de Estudios Políticos-Universidad Central de Venezuela, 1971.
- RODRIGUEZ, Mario - La revolución americana de 1776 y el mundo hispánico (Ensayos y Documentos) (Madrid: Editorial Tecnos, 1976).
- SANOJA HERNANDEZ, Jesús - "24 de noviembre de 1948. Otra vez la Dictadura", Caracas, diario El Nacional, 24 de noviembre de 1978, Cuerpo D, p. 9.
- " " - "A 20 años del Pacto de Punto Fijo", Caracas, diario El Nacional, 31 de octubre de 1978, Cuerpo D, p. 15.
- SILVA MICHELENA, José Antonio - "Nacionalismo en Venezuela", en F. Bonilla y J.A. Silva Michelena (Eds.), Cambio político en Venezuela: Exploraciones en análisis y en síntesis, Caracas, Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central de Venezuela, 1967. pp. 95-137.
- SILVA OTERO, Arístides - El Congreso de Panamá (Caracas: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales-Universidad Central de Venezuela, 1969. Cuadernos del Instituto, Serie Docencia, No. 3).
- SILVERT, K.H. - "Caudillism", en International Encyclopedia of Social Sciences, The Mac Millan Cny. and The Free Press, vol. 2, pp. 347-350. Davis L. Sills Ed., 1968.
- SUNKEL, Oswaldo - "El trasfondo estructural de los problemas del desarrollo latinoamericano", en Trimestre Económico, México, No. 3, enero-marzo, 1967, pp. 11-58.
- SUREDA DELGADO, Rafael - Ideario de Bolívar en materia constitucional (Caracas: Ed. Arte, 1966).

- SURIA, Jaime - Iglesia y Estado (1810-1821) (Recopilación de documentos. Caracas: Ediciones del Cuatricentenario, 1967. Prólogo de Pedro Grases).

 - VALLIER, Iván A., y
VALLIER, Vivían - "La Sociedad en Iberoamérica: América del Sur", en Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, David I. Sills Ed.,; edición española de Ed. Aguilar, Madrid, 1975. Volumen 5, pp. 565-575.

 - Venezuela. Informe económico (Barcelona: Publicaciones del Banco de Expansión Industrial, EXBANK, Servicio de Estudios, 1976).

 - VILLAR, Pierre - "La participación de las clases populares en los movimientos de independencia de América Latina", en La independencia de América Latina (Buenos Aires: Editorial Nueva Visión, 1973. pp. 45-63).

 - VILLORIA, Rafael - "Carta de Rafael Villoria a Rómulo Betancourt, sobre las causas de la pérdida de las elecciones" Caracas, diario El Nacional. 7 de diciembre de 1978.
-

458

Madrid, abril de 1978/enero de 1979.-

G.B.F.

Jorge de Juan. Fuent



BIBLIOTECA